CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1996

DR. ARTURO HOYOS
PRESIDENTE

SALA PRIMERA (CIVIL)

LICDO. RAFAEL A. GONZÁLEZ
PRESIDENTE

LICDO. ELIGIO A. SALAS — LICDO. ROGELIO A. FÁBREGA ZARAK

LICDA. SONIA F. DE CASTROVERDE
SECRETARIA

SALA SEGUNDA (PENAL)

LICDO. JOSÉ MANUEL FAÚNDES
PRESIDENTE

DRA. AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ — DR. FABIÁN ECHEVERS

LICDO. MARIANO HERRERA
SECRETARIO

SALA TERCERA (CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Y LABORAL)

DR. ARTURO HOYOS
PRESIDENTE

LICDA. MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA — DR. EDGARDO MOLINO MOLA

LICDA. JANINA SMALL
SECRETARIA

SALA CUARTA (NEGOCIOS GENERALES)

DR. ARTURO HOYOS
PRESIDENTE

LICDO. JOSÉ MANUEL FAÚNDES — LICDO. RAFAEL A. GONZÁLEZ

DR. CARLOS H. CUESTAS G.
SECRETARIO GENERAL

PONENCIA
CONDICIONES PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL ENTRE PARIENTES

Por. Magdo. Luis Mario Carrasco

1° La relación de parentesco en el derecho penal

Hemos optado por introducirnos al análisis del tema que nos ha sido asignado por la vía de unas breves reflexiones en torno al derecho penal y la familia, en virtud de la vigencia que el tema de la familia mantiene en la actualidad. Y en esta tarea comenzaremos por afirmar que el derecho penal no define concepto alguno de familia. Aun cuando el código Penal vigente consagra un título en le Libro Segundo (Título V) a la tutela del llamado Orden Jurídico Familiar y el Estado Civil, un detenido examen de las disposiciones legales específicas que componen este Capitulo permite concluir que el objeto jurídico tutelado en estos casos más que un concepto único y delimitado de familia, se constituye en la tutela de la integridad de una serie de vínculos personales y de los derechos y las obligaciones que emanan de éstos. En otras palabras cuando el derecho penal se ha planteado la posibilidad de convertir en objeto de tutela a la familia, ha optado por hacer referencia a concretas relaciones de parentesco y ha evitado además responder a una orientación por demás pragmática y práctica, permite a la vez reconocer el hecho de que le concepto de familia como tal, no deja de ser un tanto relativo en la medida en que siempre hará referencia a un conjunto de relaciones variables en su contenido, en su extensión y hasta en su naturaleza. Por ello el derecho penal en su objetivo de establecer las condiciones propias de un estado de seguridad jurídica, ha optado en la práctica, por individualizar las concretas relaciones familiares que considera relajantes, y merecedoras de tutela especial en orden a la preservación de la tranquilidad social y de la seguridad jurídica.

Lo anteriormente dicho no debe entenderse en el sentido de que al derecho penal le es indiferente la realidad de la estructura familiar, sino más bien que el derecho penal considera esta temática desde una óptica que no resulta perfectamente asimilable con los conceptos y las nociones clásicas de familia que se han manejado en derecho privado o social. Así tenemos que cuando en materia de derecho se hace referencia a las relaciones de parentesco, esto se ha hecho por la necesidad de regular los intercambios, generalmente de naturaleza económica, que se dan entre los vinculados; cobran importancia desde esta perspectiva temas tales como el derecho herencial, los derechos de los hijos y los alimentos entre otros; los cuales encuentran orden y sistematización en instituciones jurídicas como el matrimonio, la paternidad, la adopción, etc. Esta concepción de parentesco ciertamente le interesa al derecho penal en la medida que el incumplimiento de las obligaciones dimanantes de los mencionados vínculos revista tal gravedad que ameriten la imposición de una sanción penal como sería por ejemplo el caso del incumplimiento de las deberes alimentarios, o del incumplimiento o del abuso del ejercicio de la patria potestad temas que recoge nuestro Código en los artículos 213 y 215, respectivamente. También le interesa al derecho penal el tema de la familia en esta acepción tradicional cuando como consecuencia de la sanción propia del hecho punible comprobado, resulten alterados o extinguidos los derechos y las obligaciones sobre parientes; esto sería en nuestra legislación el caso de la interdicción legal que es una pena accesoria provista en el artículo 54 del Código Penal y que consiste en la pérdida de los derechos propios de la patria potestad, entre otras cosas.

Pero el enfoque al tema de las relaciones de familia no se agota con lo ya ilustrado, toda vez que en nuestra disciplina; además del sistema de relaciones propios de parentesco, se toma en cuanta el contenido vinculante y afectivo característico de esta clase de relación; y estos se hace evidente al observarse cómo las relaciones de parentesco son tomadas en cuanta por el legislador penal para matizar conductas que ya entre extraños resulten constitutivas de delito. El matiz a que hacemos referencia puede consistir en agravar o en atenuar la severidad de la sanción penal, como es el caso del artículo 68 primer párrafo del Código Penal, cuando establece que el parentesco cercano puede figurar o como circunstancia de agravación o como circunstancia de atenuación según la naturaleza, motivo y los efectos del delito. E materia de represión y acción

penal, las relaciones de parentesco pueden servir también de base para la constitución de excusas absolutorias tema al cual procederemos a referirnos con más detalle un poquito más adelante.

La relación familiar o de parentesco desde esta óptica resulta mucho más abarcadora que el simple inventario de los derechos y deberes vigentes entre parientes, ya que se trata más bien de valorar el contenido del vínculo y la intensidad del sentimiento vigente entre personas que comparten un núcleo familiar. Esta vinculación como bien lo señala el autor español Bajo Fernández, "no tiene un carácter jurídico sino ético consistente en una actitud psicológica con el agregado resultante del sentimiento, de intereses comunes, de destino común, de dolor común, de afecto, de sentimientos de ayuda, etc. que influyen en el ánimo del sujeto, en el mundo de motivaciones del autor".

2° El parentesco en el derecho penal. Precisiones conceptuales

El parentesco es, o consecuencia del hecho natural de la procreación, o consecuencia de un vínculo reconocido por la ley y creado por la voluntad de las partes. En el primer supuesto nos referimos a las relaciones de consanguinidad y en el segundo a los vínculos por matrimonio, afinidad y adopción.

Nuestro legislador penal define de manera expresa en el segundo párrafo del artículo 68 del Código Penal los alcances del concepto pariente cercano. Esta norma establece claramente que para los fines de la ley penal, se consideran parientes cercanos al cónyuge y a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, de esta manera y para los efectos de precisión requeridos en esta disciplina, se delimita de manera indubitable y por mandato de la ley este concepto.

3° El artículo 2023 del Código Judicial y las reformas de la Ley N° 1 de 1995

El tema que nos ocupa de manera particular en la noche de hoy, hace referencia al tratamiento que en nuestro medio ha dispuesto el sistema penal frente a determinadas conductas realizadas entre parientes, y a los recientes cambios que sobre esta materia se han incorporado a nuestro derecho positivo por vía del artículo 11 de la Ley N° 1 del 3 de enero de 1995.

El artículo 2023 del Código Judicial antes de los cambios que próximamente comentaremos establecía que no podían ejercer acción penal entre sí:

1° Los cónyuges, a no ser por delito cometido por uno contra la persona del otro o la de sus hijos, y por el delito de bigamia; y,

2° Los ascendientes, descendientes y hermanos consanguíneos o afines, a no ser por delito cometido por uno contra la persona del otro.

Se exceptúan también el delito de incumplimiento de deberes familiares.

Nótese en primer lugar que la norma bajo estudio hace referencia a la posibilidad de que los cónyuges y los parientes "ejerzan la acción penal entre sí". La regla general en esta materia es que la acción penal es pública y que su titularidad corresponde al Estado (ver artículo 2006 del Código Judicial), por ello resulta claro que la situación prevista en el artículo 2023 es de naturaleza excepcional. Lo anterior se torna más claro al reparar que el ya mencionado artículo 2023 se encuentra ubicado en la Sección III del Capítulo III del Título I en el Libro III del Código Judicial, sección esta correspondiente a la figura del acusador. Por ello debe concluirse que el tema a tratar en el artículo que hoy nos ocupa, versa únicamente en torno a la posibilidad reconocida a los cónyuges y a los parientes para eregirse en acusadores particulares entre sí, lo que implica a su vez que la ley no ha excluido por esta vía la posibilidad de que un pariente pueda denunciar a otro o que un pariente presente querella en contra de otro; obviamente sin perjuicio de las garantías previstas en la Constitución Nacional particularmente el artículo 25 de la Carta Fundamental.

En otras legislaciones como la de Costa Rica por ejemplo, las limitaciones

en esta materia al tratarse de parientes cercanos son mucho más amplias al disponerlo así el artículo 155 del Código de Procedimiento Penal de aquel país, ya que lo que existe es una prohibición de denunciar al cónyuge, al ascendiente, descendiente o al hermano; con la salvedad de que el delito aparezca ejecutado en perjuicio del denunciante o de un pariente suyo de grado igual o más próximo al grado de parentesco que lo liga con el denunciado.

Así tenemos que a manera de contraste, mientras que en aquel país se plantea la prohibición de denunciar a parientes cercanos, en el nuestro el tema se circunscribe apenas al ejercicio de la acción penal particular por la vía de una acusación formal.

Continuando con el análisis del artículo 2023, debe dejarse establecido que, de conformidad con el tenor literal de esta disposición, el ejercicio de la acción penal entre parientes se encuentra condicionado a la naturaleza de la infracción penal de que se trate. Así tenemos que tratándose del cónyuge sólo podrá uno ejercer acción penal en contra del otro cuando se trate de "delitos cometidos por uno contra la persona del otro", o contra "la persona de sus hijos", y por el delito de bigamia.

Estimamos que por delitos "contra la persona" han de entenderse las figuras contempladas en el Título I del Libro II del Código Penal referentes a los delitos contra la vida y la integridad personal y que incluyen las figuras del homicidio, las lesiones personales, el aborto provocado y las figuras de abandono de niños u otras personas incapaces de velar por su seguridad o su salud.

En lo que se refiere al delito de bigamia, habría que puntualizar únicamente que esta conducta como tal, es decir, el acto de contraer nuevas nupcias estando unido ya el sujeto activo por un vínculo matrimonial vigente, encuentra actualmente adecuación típica en los artículos 205 y 206 del Código Penal, normas que sancionan los actos de contraer matrimonio a sabiendas de que existe un impedimento que cause su nulidad absoluta. No existe en el Código Penal vigente entonces, un precepto que tipifique de manera individual la conducta específica de bigamia como sí ocurría en el Código Penal de 1922 vigente hasta 1982.

El trato penal que recibe la bigamia en el artículo 2023 comentado, resulta coherente con lo establecido en el artículo 1980 también del Código Judicial que incluye a esta figura penal entre aquellas que requieren acusación formal del ofendido para el seguimiento del procedimiento criminal.

El numeral 2° del artículo 2023 hace referencia a las limitaciones del ejercicio de la acción penal entre parientes; enunciando de una manera por demás genérica e imprecisa al grupo de personas vinculadas entre las cuales no procede la acción. Incluso se hace referencia a categoría de parentesco que no encuentran hoy cabida, vistos los avances que en materia de igualdad dentro de la familia se han experimentado en los últimos años; así tenemos por ejemplo que el artículo habla de "hermanos consanguíneos y afines", provocando la inevitable interrogante en el sentido de ¿qué sería un afín a un hermano consanguíneo? Este problema obedece por lo menos en parte a que la redacción del artículo 2023 es prácticamente la misma que presentaba el Código Judicial de la anterior vigencia de 1917, solo que este último en vez de referirse a hermanos consanguíneos o afines hacía referencia en cambio a "hermanos consanguíneos o uterinos y afines". El problema se resuelve hoy en día sin mayores dificultades toda vez que en materia penal existe una interpretación legal del concepto de pariente cercano que claramente fija los alcances del término dentro de la disciplina que nos ocupa como ya hemos visto.

En cuanto a la naturaleza de la infracción o infracciones penales que permiten el ejercicio de la acción penal entre parientes, únicamente figuran en el numeral 2° los llamados delitos cometidos en contra de la persona, por lo que resultan aquí también aplicables las observaciones que sobre este punto dejamos plasmadas anteriormente.

El último párrafo del artículo 2023 contiene una sección final aplicable tanto a los cónyuges como a los parientes cercanos, al excluir también de la

prohibición del ejercicio de la acción penal, el delito de incumplimiento de los deberes familiares, por lo que todo el Capítulo IV, del Título V del Libro II del Código Penal es decir, los artículos 213, 214 y 215 quedan relevados del impedimento procesal comentado.

La Ley N° 1 del 3 de enero de 1995 en su artículo 11 presenta una modificación al texto del artículo 2023 del Código Judicial que ahora se leerá así:

"ARTÍCULO 2023. No podrán ejercer acción penal entre sí:

1° Los cónyuges a no ser por delito cometido por uno contra la persona o el patrimonio del otro o de sus hijos y por delito de bigamia; y,

2° Los ascendientes, descendientes y hermanos consanguíneos o afines, a no ser por delito cometido por uno contra la persona o patrimonio del otro.

Exceptúase también el delito de incumplimiento de los deberes familiares."

Como se nota de la lectura, el nuevo texto introduce como única novedad la inclusión de los delitos contra el patrimonio en el inventario de hechos punibles que admiten el ejercicio de la acción penal entre cónyuges y parientes.

Los delitos contra el patrimonio configuran el Título IV, del Libro II del Código Penal compuesto a su vez por ocho capítulos desglosados de la siguiente manera:

CAPITULO I - HURTO
CAPITULO II - ROBO
CAPITULO III - EXTORSIÓN Y SECUESTRO
CAPITULO IV - DE LA ESTAFA Y OTROS FRAUDES
CAPITULO V - APROPIACIÓN INDEBIDA
CAPITULO VI - USURPACIÓN
CAPITULO VII - DAÑOS
CAPITULO VIII - DISPOSICIONES COMUNES A LOS CAPÍTULOS PRECEDENTES.

Como se lee el título del Código Penal dedicado a la protección del patrimonio, desarrolla a lo largo de siete capítulos las distintas modalidades de conductas que en función de este bien jurídico, desarrolla a lo largo de siete capítulos las distintas modalidades de conductas que en función de este bien jurídico han sido elevadas a la categoría de delito.

Debemos preguntarnos entonces si la modificación introducida al artículo 2023 del Código Judicial debe entenderse que incluye a todas las figuras previstas en el título correspondiente a delitos contra el patrimonio incorporándolas así al inventario de figuras que admiten la acción penal entre parientes y cónyuges.

Para contestar esta pregunta hay que encarar lo dispuesto en el artículo 204 del Código Penal. Esta norma dispone lo siguiente:

"Sin perjuicio de la acción civil, no se instruirá sumario cuando los delitos previstos en los Capítulos I, IV, V, y VI de este Título, se cometan en detrimento del cónyuge o de un pariente cercano."

El artículo 204 arriba citado es la última disposición normativa del Título V del Libro II del Código Penal correspondiente como se ha visto ya a los delitos contra el patrimonio; y como se desprende de su contenido literal, impide la instrucción del sumario cuando entre él o los perpetradores y el sujeto pasivo de la infracción, existe el vínculo de matrimonio o de parentesco cercano tratándose de las figuras de hurto, estafa y otros fraudes, apropiación indebida y usurpación.

Este artículo 204 consagra a lo que en doctrina se ha dado en llamar una excusa absolutoria o una causa personal de exclusión de la pena como la denominan autores alemanes. Las excusas absolutorias son definidas como "ciertas circunstancias que se dan en la persona del autor de una acción típica, antijurídica y culpable que determina la exclusión de la pena." Para el caso que nos ocupa las circunstancias personales que producen el efecto descrito no son más que los vínculos de parentesco.

La excusa absolutoria se sustenta dentro de la sistemática penal por razones de política criminal; es decir, el Estado considera aconsejable declinar su pretensión punitiva y liberar de sanción a un determinado autor, no obstante la punibilidad de hecho realizado, para no interferir en el ámbito de relaciones propias de la vida conyugal o de parentesco, todo lo anterior en aras de la unidad familiar y su preservación. Como bien lo esgrime el autor español Antón Oneca por "Respeto a la unidad de la familia, deteniendo a sus puertas la investigación criminal, que, por sus graves consecuencias, produciría rencores inextinguibles".

La excusa absolutoria fundamentada en los vínculos de parentesco no deja de tener sus detractores en un sector de la doctrina quienes consideran que, sino eliminada, ésta debe ser cuando menos atemperada, toda vez que exonera de responsabilidad penal, conductas que no debieran quedar impunes por razón de la alarma social que desencadenan. Quintana en su Tratado de la Parte Especial de Derecho Penal se refiere a esta excusa como "Una patente de corso para delinquir que garantiza la absoluta impunidad de las más graves conductas contra los bienes de parientes".

Lo cierto es que en nuestro derecho positivo esta excusa absolutoria ha figurado en el ordenamiento penal por lo menos desde la vigencia del Código Penal de 1922 que contiene una

disposición no similar pero si asimilable a la del Código actual en su artículo 379, que se lee así:

> "No se seguirá acción criminal alguna cuando los hechos de que tratan los Capítulos I, III, IV, VI y VIII de este Título se cometan en detrimento del cónyuge no separado legalmente del culpable, o del padre o madre de éste, o de un afín suyo en línea directa de ascendientes o descendientes, o del padre, madre, o hijos adoptivos del mismo culpable, o de un hermano o hermana que vivan en familia con el autor del hecho.
>
> Si este se comete en perjuicio del cónyuge separado de cuerpo, pero no divorciado, de un hermano o hermana que no viven en familia con el autor del hecho, de un tío, sobrino o afín dentro del segundo grado, no se seguirá procedimiento criminal sino por acusación formal del ofendido."

Las figuras penales amparadas con la excusa absolutoria en el Capítulo anterior eran las de hurto, de la estafa y otros fraudes, de las quiebras y otros fraudes en asuntos de comercio, del encubrimiento, de los perjuicios.

Ahora bien, de vuelta al asunto que nos ocupa debemos reiterar la pregunta en el sentido de si el artículo 2023 con las modificaciones que le han sido introducidas por la Ley N° 1 de 1995 deroga lo dispuesto en el artículo 204 del Código Penal.

Para contestar vamos a orientarnos con lo dispuesto en el artículo 36 del Código Civil que en materia de derogación de leyes dispone que se estima insubsistente una disposición legal por declaración expresa del legislador o por incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores, o por existir una ley nueva que regule íntegramente la materia a que la anterior disposición se refería. En el primer supuesto, se hace referencia a la llamada derogación expresa y los dos siguientes a la derogación denominada tácita. Veamos si alguno de los tres supuestos arriba enumerados resultan aplicables al caso bajo estudio:

a) Derogación expresa del legislador: El artículo 204 del Código Penal no ha sido expresamente derogado por ley alguna. El artículo 30 de la Ley N° 1 de 1995 contiene una enumeración de las disposiciones legales modificadas y adicionadas por ella, y en este listado no se menciona la disposición penal comentada.

b) Incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores: Son incompatibles dos cosas que no pueden unirse ni combinarse. Es claro que en el caso que nos ocupa esta situación no se presenta, toda vez que la posibilidad de ejercer acción penal entre cónyuges y parientes cercanos en delitos contra el patrimonio se podrá hacer vigente en los supuestos no excluidos por la excusa absolutoria del artículo 204 del Código Penal. Es decir, resultará factible accionar entre sí en los supuestos de robo, extorsión, secuestro y daños, por lo que al resultar aplicable entonces lo dispuesto en el artículo 2023 del Código Judicial a delitos contra el patrimonio, queda descartada la posible incompatibilidad entre las dos disposiciones legales.

c) Vigencia de una nueva ley que regule íntegramente la materia a que la anterior disposición se refería: El artículo 204 del Código Penal y el artículo 2023 del Código Judicial no se refieren a la misma materia. El artículo 204 del Código Penal hace referencia a una limitación de la pretensión punitiva del Estado, mientras que el artículo 2023 del Código Judicial hace referencia a la posibilidad particular de ejercer la acción, es decir de formalizar acusación en algunas causas penales.

Así las cosas, por no tenerse por cumplido ninguno de los tres supuestos arriba desarrollados, no puede afirmarse que el artículo 2023 del Código Judicial ni expresa ni tácitamente deroga lo dispuesto en el artículo 204 del Código Penal, manteniendo en consecuencia esta última norma su total vigencia.

Por lo anterior ha de concluirse que en la práctica, las innovaciones de la Ley N° 1 de 1995 en lo que al artículo 2023 del Código Judicial se refiere, se limitan a permitir el ejercicio de la acción penal entre cónyuges y parientes por la comisión de delitos contra el patrimonio que no se encuentran amparados por la excusa absolutoria prevista en el artículo 204 del Código Penal.

De ser otra la intención del legislador, ha de enfrentar de manera expresa y en consecuencia disponer la derogatoria del artículo 204 del Código Penal, pero esta decisión por representar un cambio importante en la orientación de la política criminal del Estado Panameño debe verse precedida de una extensa y generalizada consulta con todos los sectores del país.

ÍNDICE

PONENCIA i

ÍNDICE I

PLENO 1

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES 2

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR EL LCDO. ABDIEL ALGIS ÁBREGO G., EN SU CONDICIÓN DE PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD DENOMINADA SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, S. A., CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN DE 16 DE FEBRERO DE 1996, DICTADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE TRABAJO. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, ONCE (11) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 2

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS RAÚL TRUJILLO SAGEL, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE REGINALDO DOYEN CASTILLO, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN DEL 5 DE MARZO DE 1996, DICTADA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DOCE (12) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 2

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ARCELIO A. MOJICA, EN REPRESENTACIÓN DE BERTA DE GONZÁLEZ, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA SENTENCIA DE 19 DE JULIO DE 1995, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL (COCLÉ Y VERAGUAS), BAJO LA PONENCIA DEL MAGISTRADO PABLO RAMIRO PÉREZ RODRÍGUEZ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DOCE (12) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 5

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO MARTÍN WILSON CHEN, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE JOSÉ EPIMÉNIDES ALFONSO GOVEA, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 100-96 DE 8 DE FEBRERO DE 1996, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 6

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR CASABLANCA ORIÓN TRADING CORP. VS EL JUEZ TERCERO DEL CIRCUITO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 8

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE DUDLEY Y ASOCIADOS, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE JUAN CARLOS DUDLEY PORRAS, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN EL AUTO N° 70, DEL 8 DE ENERO DE 1996, DICTADO POR EL JUEZ TERCERO DE CIRCUITO, DE LO CIVIL, DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 12

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICDO. HUMBERTO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LUIS ANTONIO MENESES, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN EL AUTO DE 29 DE FEBRERO DE 1996, DICTADO POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 14

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LICENCIADO ANTONIO VARGAS DE LEÓN, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL SINDICATO ÚNICO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN Y SIMILARES (SUNTRACS), CONTRA LAS ÓRDENES DE HACER CONTENIDAS EN LAS NOTAS N° 41-DGT-96, N° 40-DGT-96 Y N° 39-DGT-96, EXPEDIDAS TODAS EL DÍA 24 DE ENERO DE 1996, POR EL DIRECTOR GENERAL DE

TRABAJO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 15

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RAÚL EDUARDO MOLINA, EN REPRESENTACIÓN DE JOSÉ AGUSTÍN ÁVILA CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN S/N DE 15 DE FEBRERO DE 1996, DICTADA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. CONTRAPROYECTO DEL MAGISTRADO ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 18

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LCDO. HÉCTOR MORÁN RODRÍGUEZ, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE JUAN SÁNCHEZ, CONTRA LA ORDEN DE HACER PROFERIDA POR LA JEFE DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS, CONSISTENTE EN LA RETENCIÓN DE SALARIOS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 19

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR LA LICENCIADA OMAYRA GARCÍA DE BERBEY EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN CONTRA LA ORDEN DE NO HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN JUDICIAL DE 23 DE ENERO DE 1996 DICTADA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL BAJO LA PONENCIA DEL MAGDO. WILFREDO SÁENZ F. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, TREINTA (30) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 20

RECURSO DE HABEAS CORPUS 22

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ANTONY LEGISTER, HUMBERTO ZERDA, JOSÉ GARCÍA, RAÚL PLICET Y REGINALDO ECHEVERRÍA CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, OCHO (8) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 22

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MIGUEL ÁNGEL MURGAS CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE CORRECCIÓN. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, ONCE (11) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 22

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA A FAVOR DE CANDELARIO CARPINTERO PINILLA, CONTRA LA FISCAL SÉPTIMA DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DOCE (12) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 24

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JUAN AMADOR CEBALLOS CONTRA EL FISCAL NOVENO DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DOCE (12) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 25

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE KAM CHIN LAM Y ZHOU ZI QUING CONTRA LA JUEZ DÉCIMO TERCERA DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL, RAMO PENAL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DOCE (12) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 28

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LUIS ANTONIO ARROCHA JOHNSON Y CONTRA EL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DOCE (12) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 29

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JULIO RUSTRIÁN CONTRA EL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DOCE (12) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 31

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE PABLO HERNANDO GÓMEZ Y OSCAR GUZMÁN CONTRA EL JUEZ SEGUNDO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 34

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ABDIEL HERNÁNDEZ SALAZAR CONTRA EL FISCAL PRIMERO SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 37

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ABDIEL ALEXIS ALVARADO DÍAZ CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 39

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE IVÁN ALBERTO CAMARENA CONTRA EL SECRETARIO DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL, AGENCIA DE COCLÉ Y VERAGUAS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 39

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE SILVESTRE ALLEYNE KNIGHT CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE CORRECCIÓN. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . 41

APELACIÓN DE HABEAS CORPUS PREVENTIVO A FAVOR DE MANUEL BURILLO CONTRA LA JUEZ SEGUNDA SECCIONAL DE MENORES DE PANAMÁ. PROCESO DE PENSIÓN ALIMENTICIA A FAVOR DE LA MENOR ARA ITZEL BURILLO DEAN. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 42

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CARLOS ANEL RUIZ LLERENA CONTRA EL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 47

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA POR EL SEÑOR PRUDENCIO LUCERO RAMOS, A FAVOR DE DORIAN MURILLO Y CONTRA EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 49

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ENCARNACIÓN ZAPATEIRO CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 49

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA POR EL SEÑOR RAMÓN ARBOLEDA SÁENZ CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE CORRECCIÓN DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . 52

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE EVAN EUDES ÁLVAREZ MONTANO, HERNÁN GARCÍA, CARLOS GILL CONTRA EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 54

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE RUBÉN DARIO MORENO POYATOS CONTRA EL FISCAL SEGUNDO DE CIRCUITO DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 54

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE VICTORIANO MINOTA ÁNGULO, LUIS AMARILDO BARBOSA LAMOS Y JUAN CARLOS PAREDES IBARRA CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 56

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA POR EL SEÑOR LUIS ETIEN PALACIO CARDONA CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE CORRECCIÓN. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE ABRIL DE MIL

NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 57

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE PEDRO MORENO ROMERO CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE CORRECCIÓN. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . . 58

HABEAS CORPUS A FAVOR DE NATIVIDAD GARCÍA MOTA CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE MIGRACIÓN Y NATURALIZACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 60

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE BIENVENIDO CAMARENA CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 61

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JOAQUÍN M. MARTÍNEZ PINZÓN CONTRA EL FISCAL CUARTO SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 61

HABEAS CORPUS A FAVOR DE CEN MEI QUEN, WU YIN GLAN, ZHENG YU YUN, CEN TUO ZHOU Y CEN CUI QI CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE MIGRACIÓN Y NATURALIZACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996) 62

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CLEOTILDE DE GRACIA CONTRA EL FISCAL DUODÉCIMO DE CIRCUITO DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 64

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE GILBERTO ENRIQUE FLORES ORTIZ CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 66

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTO A FAVOR DE JEREMÍAS ATENCIO CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 68

HABEAS CORPUS A FAVOR DE RUBÉN ANTONIO MARTÍNEZ VALLE CONTRA EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 69

APELACIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE EDITRUDIS CAMPOS SAMANIEGO CONTRA EL FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON LA FAMILIA Y EL MENOR. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 71

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ERVING ALBERTO HUNT TORRES CONTRA EL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 74

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE EMILIO SEGUNDO MONTENEGRO ABREGO CONTRA EL FISCAL PRIMERO SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 78

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ARCADIO MOLINAR KING CONTRA EL FISCAL PRIMERO SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 78

APELACIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JAIME SIERRA PERALTA CONTRA LA JUEZ DÉCIMA

TERCERA DEL CIRCUITO PENAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 80

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JOSÉ A. QUIÑONES CONTRA EL FISCAL SEGUNDO DEL CIRCUITO DE COLÓN. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . 83

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JUAN CARLOS SOLÍS CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 84

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE RUBÉN ORTEGA MONTENEGRO, CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE CORRECCIÓN. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 86

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA POR EL LICENCIADO DARÍO CARRILLO EN FAVOR DEL SEÑOR WU JINTUAN (LEGAL) O NG JIN JUANG (USUAL) Y CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE MIGRACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 87

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE GABRIEL ALEXIS APARICIO CARRERA CONTRA EL JUEZ SEXTO DE CIRCUITO DE CHIRIQUÍ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 89

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA A FAVOR DE CAMILO BURROWS CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 93

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE FERNANDO SANTAMARÍA CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 94

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 95

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADO POR EL LICENCIADO GIOVANI A. FLETCHER H., EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, CONTRA EL ARTÍCULO 637 DEL CÓDIGO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DOCE (12) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 95

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR LA FIRMA FORENSE ALEMÁN, CORDERO, GALINDO & LEE EN REPRESENTACIÓN DE EMANUEL GONZÁLEZ REVILLA EN SU CONDICIÓN DE PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN PANAMEÑA DE BANCOS CONTRA LA FRASE "ASOCIACIÓN BANCARIA NACIONAL", CONTENIDA EN EL LITERAL D) DEL ARTÍCULO 5 DEL DECRETO DE GABINETE N° 238 DE 2 DE JULIO DE 1970. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, DOCE (12) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 96

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR MARIO VAN KWARTEL CONTRA EL ARTÍCULO 2126 DEL CÓDIGO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 101

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JUAN GABRIEL GONZÁLEZ S., CONTRA EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY N° 44 DE 12 DE AGOSTO DE 1995, "POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS PARA REGULARIZAR Y MODERNIZAR LAS RELACIONES LABORALES". MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 103

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR LOS LICENCIADOS MIGUEL GONZÁLEZ MARCOS Y ROSAURA GONZÁLEZ MARCOS CONTRA LOS ARTÍCULOS 2, 5, 14, NUMERALES 4 Y 6 PARÁGRAFO; Y ARTÍCULO 16 DE LA LEY N° 16 DE 29 DE AGOSTO DE 1979; ASÍ COMO LA DE LOS ARTÍCULOS 67, 71 PARTE FINAL, 73 Y 79 DE LA LEY N° 30 DE 8 DE NOVIEMBRE DE 1984 Y DEL 19 LITERAL "C" DEL DECRETO EJECUTIVO N° 42 DE 24 DE NOVIEMBRE DE 1983. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 106

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR LA FIRMA DE ABOGADOS TRONCOSO, LACAYO & PORRAS EN REPRESENTACIÓN DE ÍTALO ROJAS DE LEÓN EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD CÁMARA NACIONAL DE RADIO EN CONTRA DE LOS ARTÍCULOS 19, 21, 77, 90, 109, 122, 124 Y 134 DE LA LEY 15 DE 8 DE AGOSTO DE 1994. (DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS). MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 107

TRIBUNAL DE INSTANCIA 119

CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO DEL MAGISTRADO ROGELIO A. FÁBREGA ZARAK EN LA ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JORGE FRANCISCO ORCASITA NG, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE INÉS MARÍA FÁBREGA, DELSA LORENA FÁBREGA DE DOWELL Y LUMY FÁBREGA DE ARIAS, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN S/N DE 5 DE MARZO DE 1996, PROFERIDA POR EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, OCHO (8) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 119

QUERELLA PRESENTADA POR EL LEGISLADOR MIGUEL BUSH RÍOS, CONTRA EL LICENCIADO JOSÉ ANTONIO SOSSA RODRÍGUEZ, PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, DOCE (12) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS. (1996). 120

CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO DEL MAGISTRADO CARLOS H. CUESTAS G. EN DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD, FORMULADA POR EL LICENCIADO MARCO TULIO HERNÁNDEZ, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE KEL HARMODIO AROSEMENA Y MARIO VAN KWARTEL, CONTRA EL ACUERDO N° 48 DE 28 DE FEBRERO DE 1994, PROFERIDO POR EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 121

SUMARIAS SEGUIDAS AL LEGISLADOR ARIS DE ICAZA POR EL SUPUESTO DELITO CONTRA EL HONOR EN PERJUICIO DE OMAYRA CORREA DELGADO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 121

QUEJA FORMULADA POR LA LICENCIADA ROSA MARÍA SÁNCHEZ DE ISAZA EN REPRESENTACIÓN DE MICAELA GABRIELA STEGARU MIRESCU EN CONTRA DE LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MENORES DOCTOR ROGERIO DE MARÍA CARRILLO Y LA LICENCIADA ESMERALDA DE TROITIÑO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 123

CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO EN LA DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ALEJANDRO PÉREZ, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LOS HONORABLES LEGISLADORES DANIEL ARIAS, RUBÉN AROSEMENA, ALBERTO CIGARRUISTA, LENÍN SUCRE, ARTURO VALLARINO Y MIGUEL SÁNCHEZ, CONTRA LA LEY N° 7 DEL 7 DE MARZO DE 1995, ORGÁNICA DE LA AUTORIDAD DE LA REGIÓN INTEROCEÁNICA. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 126

SALA PRIMERA DE LO CIVIL 127

RECURSO DE CASACIÓN CIVIL 128

JOSÉ DEL CARMEN VEGA MORCILLO, JOSÉ VEGA QUINTERO, ITZEL VEGA QUINTERO Y LUCINDA MORCILLO RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO (ACCIÓN DE SECUESTRO) QUE LE SIGUE RAQUEL VELÁSQUEZ GONZÁLEZ, EN REPRESENTACIÓN DE SU MENOR HIJO EDUARDO ARISTIDES VEGA VELÁSQUEZ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIEZ (10) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 128

FINANCIERA LAS TABLAS, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO QUE LE SIGUE A EUFEMIA GONZÁLEZ DE RODRÍGUEZ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIEZ (10) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 128

RAMIRO DOMÍNGUEZ RECURRE EN CASACIÓN DENTRO DEL INCIDENTE DE DOLO EN EL ACTUAR Y PETICIÓN ANTES DE TIEMPO PRESENTADO POR EDUARDO MIRANDA MARTÍNEZ CONTRA RAMIRO DOMÍNGUEZ, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO INTERPUESTO POR RAMIRO DOMÍNGUEZ CONTRA EDUARDO MIRANDA MARTÍNEZ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIEZ (10) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 130

INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y ELECTRIFICACIÓN (IRHE) RECURRE EN CASACIÓN EN EL INCIDENTE DE NULIDAD PROPUESTO POR AMÉRICA TORRALBO GARCÍA, NUMILLA TORRALBO GARCÍA Y OTROS DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO QUE LES SIGUE EL INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y ELECTRIFICACIÓN (IRHE). MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 133

SANTIAGO SALDAÑA DEL CID Y EDGAR ELÍAS SALDAÑA PALMA RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUEN A JULIO CÉSAR OLIVERA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 135

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES EBEN-EZER, S.A RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO DECLARATIVO QUE LE SIGUE NORMA L. SÁENZ. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 137

PROPIETARIOS DE BUSES, S. A. RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A LOS DE LA RUTA COLÓN, PILÓN, MARÍA CHIQUITA, S. A., VÍCTOR MENDOZA Y TRANSCOLPILMA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 144

SUCESIÓN TESTAMENTARIA DE RODRIGO ALVARADO SANGUINETTI (Q. E. P. D.) RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO SUMARIO QUE LE SIGUE RODRIGO OCTAVIO ALVARADO RÍOS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 147

TROPIGAS DE PANAMÁ, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE JESÚS HERRERA APARICIO Y DIANA ESTHER BAIRNAL DE HERRERA. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 148

ARGENTA DE PANAMÁ, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN LA EXCEPCIÓN DE INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN PRESENTADA DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO INCOADO POR SUPER CUENTAS, S. A. CONTRA ARGENTA DE PANAMÁ, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 149

RAMÓN JUÁREZ ACHURRA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A ELEUTERIO RAMOS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 150

BETEL, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO SUMARIO SOLICITUD DE CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS RODELAG, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 151

JORGE ENRIQUE RUIDÍAZ PLATAÑIOTIS RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO SUMARIO QUE LE SIGUE A ANDES TRADING COMPANY. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 152

VALENTE CORP. RECURRE EN CASACIÓN EN LA MEDIDA CAUTELAR DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN QUE LE SIGUE A FEDERACIÓN VENEZOLANA DE FÚTBOL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 153

CORTAGRAMAS Y REPUESTOS, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO PROPUESTO POR ADONIS GIOVANNI MUSMANO GARCÍA CONTRA LENÍN M. RODRÍGUEZ T. Y CORTAGRAMAS Y REPUESTOS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 153

AERO SERVICIOS TEMPONE, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE ASSICURAZIONI GENERALI, S. P. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 154

REINVERSIONES INTERNACIONALES, S. A. Y BEATRIZ DIEZ RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO QUE BEATRIZ DIEZ LE SIGUE A PALACIO DEL MAR, S. A. (PADEMA). MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, TREINTA (30) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 155

JUAN MARIÑAS BUITRAGO RECURRE EN CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A CÉSPEDES UNIDOS, S. A. Y HERMANOS CÉSPEDES UNIDOS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, TREINTA (30) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 156

SALA SEGUNDA DE LO PENAL 158

AUTO APELADO 159

SOLICITUD DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO A ROBERTO PINZÓN DÍAZ Y JACINTO JORGE MAC DONALD, POR EL SUPUESTO DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE BETZY MARLENE MENDIZÁBAL Y LA DESAPARICIÓN DE JORGE ENRIQUE FALCONETT. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 159

PROCESO SEGUIDO A ABDIEL MEZA TRINIDAD, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO COMETIDO EN PERJUICIO DE JUAN QUINTERO SÁNCHEZ. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 161

ACUSACIÓN PARTICULAR PRESENTADA POR LA LCDA. THEANY L. LOAIZA C., CONTRA EL SEÑOR RAFAEL ARIEL RÍOS ZAMBRANO, SINDICADO POR LOS DELITOS DE VIOLACIÓN DE DOMICILIO, HURTO CALIFICADO Y OTRAS DISPOSICIONES LEGALES INFRINGIDAS, EN PERJUICIO DEL SEÑOR MISAEL AUGUSTO ALBA FERNÁNDEZ. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, TREINTA (30) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 163

AUTO CONSULTADO 164

PROCESO SEGUIDO A DANIEL ALBERTO MACÍAS ÁBREGO POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE IZIELK AUGUSTO GALE GONZÁLEZ. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 164

PROCESO SEGUIDO CONTRA ISMAEL GONZÁLEZ FLORES, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN DETRIMENTO DE HILARIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 168

INCIDENTE DE DESERCIÓN DE ACUSACIÓN PARTICULAR DENTRO SUMARIO SEGUIDO A RAÚL FLORENCIO GUEVARA QUINTERO, POR EL DELITO DE HOMICIDIO DOLOSO EN PERJUICIO DE ELIADE ARROYO GÓMEZ. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 172

RECURSO DE CASACIÓN PENAL 174

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A RICARDO ANTONIO AGUILAR, SINDICADO POR EL DELITO DE FALSEDAD Y ESTAFA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, OCHO (8) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 174

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A MAYTÉ DOLORES GONZÁLEZ DE LEÓN DE RODRÍGUEZ, POR EL DELITO DE POSESIÓN ILÍCITA DE DROGAS AGRAVADAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, OCHO (8) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 175

RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A LUIS A. GONZÁLEZ MEJÍA, POR DELITO CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 176

RECURSO DE CASACIÓN PENAL EN EL FONDO INTERPUESTO POR EL LICENCIADO HUMBERTO A. COLLADO, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR HERNANDO MIRANDA ORTIZ, CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA DEL 13 DE ENERO DE 1994, DICTADA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 177

RECURSO DE CASACIÓN EN EL PROCESO SEGUIDO CONTRA MARCO ANTONIO AYALA POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 185

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO A JOSÉ ARCELIO BERNAL BATISTA Y ALCIBIADES APARICIO BONILLA, SINDICADOS POR EL DELITO DE HURTO EN PERJUICIO DE TRANSPORTES CENTRALES S. A. O COMPAÑÍA NESTLÉ PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 185

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL INCIDENTE DE EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA INTERPUESTO POR LA FIRMA FORENSE BERRÍOS & BERRÍOS, APODERADOS DE BANQUE ANVAL, S. A., EN EL SUMARIO SEGUIDO A ESTE ENTE FINANCIERO POR DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA EN PERJUICIO DE YAKIMA INTERNACIONAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 186

RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A CALAZANCIO GONZÁLEZ CHÁVEZ, POR DELITO CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL, EN PERJUICIO DE REYES GONZÁLEZ BENÍTEZ. MAGISTRADA SUSTANCIADORA: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, TREINTA (30) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 195

RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A ERNESTO MARCEL REVELLO, POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, TREINTA (30) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 196

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A MANUEL ANTONIO NORIEGA M., NIVALDO MADRIÑÁN A. Y FELIPE CAMARGO AMAYA, POR EL DELITO CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL EN PERJUICIO DE HUMBERTO MACEAS WILSON. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, TREINTA (30) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 197

IMPEDIMENTO 199

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DE LA MAGISTRADA AURA E. GUERRA DE VILLALAZ DENTRO DE LA QUEJA PRESENTADA POR JAVIER ALEXIS QUIROZ CONTRA LA MAGISTRADA ELVIA BATISTA POR LA SUPUESTA VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO DENTRO DEL JUICIO QUE SE VENTILA POR LA MUERTE DEL LICENCIADO LUIS HUERTAS DÁVALOS. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 199

INCIDENTE 200

INCIDENTE DE RECUSACIÓN, DENUNCIA DE FALTA A LA ÉTICA JUDICIAL Y VIOLACIÓN DE LOS DEBERES, RESPONSABILIDADES Y FACULTADES DE LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL DENTRO DEL PROCESO MENDIZÁBAL-FALCONETT. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 200

INCIDENTE DE NULIDAD 201

INCIDENTE DE NULIDAD INTERPUESTO POR LA FIRMA FORENSE QUIROZ MURILLO & ASOCIADOS DENTRO DE LA SOLICITUD DE FIANZA DE EXCARCELACIÓN DE FERNANDO HERNÁNDEZ ARIAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 201

RECURSO DE REVISIÓN 202

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A LA SEÑORA KONNY JOAN FRANCIS BROCE, SINDICADA POR DELITO DE POSESIÓN ILÍCITA DE DROGAS CON ÁNIMO DE VENTA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 202

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR FERNANDO SMITH, SINDICADO POR EL DELITO DE VIOLACIÓN CARNAL. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . 204

RECURSO DE REVISIÓN DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO A PERSEVERANDO GRACIA GÓMEZ, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE ERIC MURILLO. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 205

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN, INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO QUE SE LE SIGUE A BALBINO JAVIER ZAPATA ATENCIO, SINDICADO POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 205

RECURSO DE REVISIÓN DE SENTENCIA CONDENATORIA DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A RAYMUNDO SIERRA PÉREZ POR DELITO CONTRA EL PATRIMONIO EN PERJUICIO DE SHANG JI HUA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, TREINTA (30) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . . 207

SENTENCIA APELADA 208

PROCESO SEGUIDO A JUAN JESÚS GARCÍA RODRÍGUEZ Y EVARISTO PÉREZ RODRÍGUEZ, SINDICADOS POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE RICARDO JAVIER CRUZ. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, QUINCE (15) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 208

SENTENCIA CONDENATORIA APELADA DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A EDGARDO MONTERREY SUÁREZ, SINDICADO POR DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE MIGUEL ARIEL CONCEPCIÓN GONZÁLEZ. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 210

RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA QUE CONDENA A JOSÉ ÁNGEL CRUZ CHÁVEZ A LA PENA DE 16 AÑOS DE PRISIÓN, COMO RESPONSABLE DEL HOMICIDIO COMETIDO EN PERJUICIO DE ROGELIO CASTRILLO ORTEGA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A.

ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 214

JUICIO SEGUIDO A JOAQUÍN MARTÍNEZ SMITH POR DELITO CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL, EN PERJUICIO DE ARACELYS RAQUEL ALVEY ACOSTA (APELACIÓN DE SENTENCIA). MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 216

SOLICITUD DE FIANZA DE EXCARCELACIÓN 218

SOLICITUD DE FIANZA DE EXCARCELACIÓN A FAVOR DE JUSTO LUIS AGUILAR Y ERIC OMAR AGUILAR, SINDICADOS POR DELITO CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL EN DETRIMENTO DE MANUEL SMITH. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 218

SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE APREHENSIÓN PROVISIONAL 219

SOLICITUD DE DESAPREHENSIÓN DE LA CUENTA N°469-0196 DEL BANCO NACIONAL A NOMBRE DEL FONDO ESPECIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, POR INDEMNIZACIÓN HECHA POR LA CÍA. DE SEGUROS CHAGRES, S. A. POR LOS DAÑOS SUFRIDOS POR LA AERONAVE CESSNA N°421-HT, PROPIEDAD DE LUIS E. CARTER. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, OCHO (8) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 220

TRIBUNAL DE INSTANCIA 223

SOLICITUD DE ACUMULACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL TRÁMITE QUE DECIDE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A FELIPE CAMARGO AMAYA, SINDICADO POR EL DELITO CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL EN PERJUICIO DE ERNESTO GIL VEGA KENNEDY. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 223

DENUNCIA PRESENTADA POR PATRICIO JANSON, CONTRA EUSTACIO FÁBREGA, DIRECTOR DE AERONÁUTICA CIVIL, IRASEMA DE AHUMADA, SUBDIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA, MIGUEL VON SEIDLITZ, SUBDIRECTOR GENERAL TÉCNICO Y EDUARDO BERNARD, ASESOR LEGAL DE LA DIRECCIÓN DE AERONÁUTICA CIVIL, POR LOS SUPUESTOS DELITOS DE AMENAZA DE MUERTE CONTRA EL DENUNCIANTE, ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR Y OTROS DELITOS. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 224

SALA TERCERA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 228

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN 229

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ELIGIO SALAS, EN REPRESENTACIÓN DE MARHOWIL UNIVERSAL, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 9229-94-JD, DEL 12 DE MAYO DE 1994, EXPEDIDA POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, NUEVE (9) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 229

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO OSVALDO JIMÉNEZ CORREA, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES FAN, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° DG-076-95, DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 1995, EXPEDIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, NUEVE (9) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 230

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL

LCDO. EUFROSINIO TROYA TORRES, EN REPRESENTACIÓN DE JUAN MANUEL MARÍN DÍAZ, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 053 DE 12 DE MAYO DE 1994, EMITIDA POR EL ALCALDE MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, DIEZ (10) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 232

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS AYALA, EN REPRESENTACIÓN DE TAMARA RODRÍGUEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL DECRETO DE PERSONAL N° 187 DE 25 DE JULIO DE 1995, PROFERIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOCE (12) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 239

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. ROBERTO RUIZ EN REPRESENTACIÓN DE ELBA R. DÍAZ VDA. DE RUIZ Y OTROS, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN N° 97 DE 2 DE SEPTIEMBRE DE 1983 DICTADA POR EL MINISTRO DE HACIENDA, LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 240

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO OMAR RODRÍGUEZ, EN REPRESENTACIÓN DE AUGUSTO HUGHES, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 82-95, DEL 14 DE JULIO DE 1995, EXPEDIDA POR EL SEÑOR MINISTRO DE VIVIENDA Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 241

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RICARDO VALDÉZ, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE TOTAL COMUNICATION, INC., PARA QUE SE DECLAREN NULOS, POR ILEGALES, EL RESUELTO N° 16 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1995 Y EL ACTO CONFIRMATORIO, DICTADOS POR EL SEÑOR MINISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 242

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE TRONCOSO, LACAYO Y PORRAS, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE MARVIL, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL RESUELTO N° 59 DEL DE SEPTIEMBRE DE 1995, EXPEDIDO POR EL DIRECTOR GENERAL DE PROVEDURÍA Y GASTOS, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGA OTRA DECLARACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 243

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO MIGUEL CÁRDENAS, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE EUMELIA ESTHER VERGARA DE BALLESTEROS, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL DECRETO DE PERSONAL N° 204, DEL 14 DE AGOSTO DE 1995, EMITIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 244

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ANÍBAL HERRERA PEÑA, EN REPRESENTACIÓN DE DENIS O. FUENTES M., PARA QUE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA NOTA DE 30 DE ENERO DE 1995, SUSCRITA POR EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, Y PARA QUE SE LE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 247

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL

LICDO. FELIPE RANGEL, EN REPRESENTACIÓN PROPIA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 13.004-86 DE 1° DE OCTUBRE DE 1986, DICTADA POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 248

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LCDA. UDSLERYD DE LUQUE, EN REPRESENTACIÓN DE XENIS CANDANEDO WOOD, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN N° DRH.007/96 DE 19 DE ENERO DE 1996 DICTADA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 251

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LCDO. EMILIO DE LEÓN, EN REPRESENTACIÓN DE RAFAEL LÓPEZ VARGAS, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL RESUELTO N° 017-94 DE 19 DE OCTUBRE DE 1994 Y EL RESUELTO DE PERSONAL N° 048-94 DE 14 DE NOVIEMBRE DE 1994, EXPEDIDOS POR EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SEGURO AGROPECUARIO, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 252

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICDO. JAVIER BRAVO D. EN REPRESENTACIÓN DE JORGE AGUILERA, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL SILENCIO INCURRIDO POR EL TESORERO MUNICIPAL DE PANAMÁ, AL NO DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN N° 097 C.Ci DE 12 DE MARZO DE 1993 DICTADA POR LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 256

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO AURELIO ALÍ BONILLA, EN REPRESENTACIÓN DE ALEJANDRO E. ARAÚZ G., PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO, INCURRIDO POR EL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 259

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JOSÉ MARÍA LEZCANO EN REPRESENTACIÓN DE JOSÉ JAIME LEZCANO, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL RESUELTO DE PERSONAL N° 212-95 DE 1° DE JULIO DE 1995, DICTADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 260

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. EUFROSINIO TROYA TORRES, EN REPRESENTACIÓN DE AGUSTÍN CHAVARRÍA, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO DE PERSONAL N° 79 DE 2 DE MAYO DE 1995, EMITIDO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 261

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA ENDARA & MARRÉ EN REPRESENTACIÓN DE MARÍA LUISA DE PÉREZ, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 0849-95 DE 31 DE ENERO DE 1995 DICTADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, Y LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO AL NO CONTESTARSE EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA DICHA RESOLUCIÓN Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

. 263

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA ARIAS, FÁBREGA Y FÁBREGA, EN REPRESENTACIÓN DE AZUCARERA NACIONAL, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 213-4113 DE 10 DE ABRIL DE 1992, EMITIDA POR LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE INGRESOS DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 266

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JESÚS L. ROSAS, EN REPRESENTACIÓN DE CONSTRUCTORA DEL ISTMO, S. A., PARA QUE SE DECLAREN NULAS, POR ILEGALES, EL ACTA DE RECIBO DE PROPUESTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° 7-95 DE 7 DE NOVIEMBRE DE 1995, LA RESOLUCIÓN N° 151 DE 21 DE DICIEMBRE DE 1995, Y LA RESOLUCIÓN N° 34 DE 27 DE FEBRERO DE 1996, TODAS EXPEDIDAS POR EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 273

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA ROSAS Y ROSAS, EN REPRESENTACIÓN DE ZENEIDA DE RONER Y JUAN ERNESTO THORNE, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ACTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL DE 7 DE SEPTIEMBRE DE 1994, EMITIDO POR EL DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 274

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD 276

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR EL DR. ROLANDO VILLALAZ GUERRA, EN REPRESENTACIÓN PROPIA PARA QUE SE DECLAREN NULOS, POR ILEGALES, TODOS LOS ACTOS PÚBLICOS CELEBRADOS POR LA AUTORIDAD DE LA REGIÓN INTEROCEÁNICA SOBRE SOLICITUD DE PRECIOS PARA ADQUIRIR VIVIENDAS EN RESIDENCIAL ESPINAR, PROVINCIA DE COLÓN Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 276

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LCDO. MARIO VAN KWARTEL, EN REPRESENTACIÓN PROPIA, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ACÁPITE C DEL ARTÍCULO 1 DEL DECRETO EJECUTIVO N° 7 DE 10 DE ENERO DE 1995, EXPEDIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . 277

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICDO. FELIPE RANGEL, EN REPRESENTACIÓN PROPIA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 13.004-86 DE 1° DE OCTUBRE DE 1986, DICTADA POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 280

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JOSÉ D. FAJARDO EN REPRESENTACIÓN DE BERASVAS, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL RESUELTO N° 135 DE 22 DE FEBRERO DE 1995, DICTADO POR EL MINISTRO DE HACIENDA Y TESORO. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 280

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA FIRMA TRUJILLO, VIDAL Y MIRANDA EN REPRESENTACIÓN DE TRANSPORTE HATO REY, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL EL ACUERDO N° 18 DE 24 DE MARZO DE 1995, DICTADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CHANGUINOLA. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE ABRIL

DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 281

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LCDO. CARLOS E. GONZÁLEZ, EN REPRESENTACIÓN DE NESTLÉ PANAMÁ, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA NOTA N° 201-712 DE 14 DE NOVIEMBRE DE 1994, EMITIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 284

IMPEDIMENTO 286

IMPEDIMENTO DENTRO DEL INCIDENTE DE RESCISIÓN DE SECUESTRO, INTERPUESTO POR LA FIRMA FÁBREGA, BARSALLO, MOLINO Y MULINO, EN REPRESENTACIÓN DE PRIMER BANCO DE AHORROS, S. A. (PRIBANCO), DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO CONTRA IVÁN ANTONIO VIDEGAÍN TEJADA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 286

JURISDICCIÓN COACTIVA 287

INCIDENTE DE LEVANTAMIENTO DE SECUESTRO Y DE CONSTITUCIÓN DE UNA CAUCIÓN, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO JULIO CÉSAR MORALES, EN REPRESENTACIÓN DE IBERIA, LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S. A., DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL MUNICIPIO DE PANAMÁ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 287

EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ABEL ESPINO PORRAS, EN REPRESENTACIÓN DE RASOLMY, S. A., DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL MUNICIPIO DE PANAMÁ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 291

INCIDENTE DE RESCISIÓN DE SECUESTRO, INTERPUESTO POR LA LCDA. EDA RODRÍGUEZ, EN REPRESENTACIÓN DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, CASA MATRIZ, CONTRA CARLOS RUGLIANCHI T. Y OTRO. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 292

INCIDENTE DE NULIDAD, INTERPUESTO POR EL LCDO. MARTÍN CAICEDO MARTÍNEZ, EN REPRESENTACIÓN DE LUZ GRACIELA NÚÑEZ DE CASTILLO, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL, CONTRA RAMÓN CASTILLO. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 294

TERCERÍA EXCLUYENTE, INTERPUESTA POR EL DR. MANUEL BELOI GARCÍA ALMENGOR, EN REPRESENTACIÓN DE ABN-AMRO BANK, N.V., DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL A QUEEN CHEMICAL INDUSTRY INC., S. A. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 296

TERCERÍA COADYUVANTE, INTERPUESTA POR EL LCDO. JOSÉ HERRERO VICTORIA, EN REPRESENTACIÓN DE CÍA. INTERNACIONAL DE SEGUROS, S. A., DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE LA CAJA DE AHORROS A PEDRO FLORES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 297

INCIDENTE DE RESCISIÓN DE SECUESTRO, INTERPUESTO POR LA FIRMA FÁBREGA, BARSALLO MOLINO Y MULINO, EN REPRESENTACIÓN DE PRIMER BANCO DE AHORROS, S. A. (PRIBANCO), DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO CONTRA IVÁN ANTONIO VIDEGAÍN TEJADA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

. 299

EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO HONORIO QUESADA MARTÍNEZ, EN REPRESENTACIÓN DE KEE FON CHONG CHAN, DENTRO DEL JUICIO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL MUNICIPIO DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 301

EXCEPCIÓN DE INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, PRESCRIPCIÓN Y FALSEDAD DE LA OBLIGACIÓN QUE SE DEMANDA, INTERPUESTA POR EL LCDO. EDGAR OMAR VARGAS TRISTÁN, EN REPRESENTACIÓN DE ERIC ELMER PÉREZ RODRÍGUEZ, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 302

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL 303

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR LA LICENCIADA ROSAURA REYES DE GONZÁLEZ, EN REPRESENTACIÓN DE JOSÉ MARÍA PÉREZ AÑINO, CONTRA LA SENTENCIA DE 28 DE FEBRERO DE 1996, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DENTRO DEL PROCESO LABORAL: JOSÉ MARÍA PÉREZ AÑINO -VS- SERVICIO DE COBRO Y FINANZAS, S. A. (SECOFISA) MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, DOCE (12) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 303

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO LUIS CEDEÑO MEREL, EN REPRESENTACIÓN DE GRACIELA ÁBREGO DE ESTRIBÍ, CONTRA LA SENTENCIA DE MARZO DE 1996, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: GRACIELA ÁBREGO DE ESTRIBÍ -VS- INSTITUTO PANAMERICANO. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 304

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO MARCO ANTONIO HERRERA, EN REPRESENTACIÓN DE CÍA. DE PRODUCTOS DE ARCILLA, S. A., CONTRA LA SENTENCIA DE 7 DE MARZO DE 1996, EXPEDIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: CÍA. DE PRODUCTOS DE ARCILLA, S. A. -VS- OMAR DE GRACIA. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ,DIECIOCHO (18) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 305

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR LA FIRMA ENDARA Y MARRÉ, EN REPRESENTACIÓN DE CARLOS EDUARDO FONSECA CONTRA LA SENTENCIA DE 8 DE MARZO DE 1996, EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: CARLOS EDUARDO FONSECA -VS- DISTRIBUIDORA DIFA S. A. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 306

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LCDO. ALEJANDRO QUINTERO DIXON, EN REPRESENTACIÓN DE NELLISBETH ALVARADO DELGADO, CONTRA LA SENTENCIA DE 26 DE ENERO DE 1996 EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DENTRO DEL PROCESO LABORAL: NELLISBETH ALVARADO DELGADO VS AUDIO FOTO INTERNACIONAL, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 307

SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES 311

CARTA ROGATORIA 312

COMISIÓN ROGATORIA LIBRADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DIVISIÓN DE EQUITY ENTRE ABDULLAH ABBAS AL-WAZIR CONTRA ISLAMIC PRESS AGENCY INC. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL GONZÁLEZ. PANAMÁ, DIEZ (10) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 312

EJECUCION DE SENTENCIA EXTRANJERA 313

MARGARITA MORÁN ALONSO WARD, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA

SENTENCIA EXTRANJERA PROFERIDA POR EL TRIBUNAL DE LA CORTE DISTRITORIAL 224-DISTRITO JUDICIAL DE SAN ANTONIO CONDADO DE BEXAR, TEJAS, DE FECHA 21 DE MARZO DE 1992, MEDIANTE LA CUAL SE DECRETA LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL ENTRE LA PODERDANTE Y CHARLES WARDS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DOCE (12) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 313

EDUARDO TOMÁS ARTURO STERRALT WATSON, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE DIVORCIO PROFERIDA POR EL JUEZ DE MUNICH, EL 31 DE ENERO DE 1994, MEDIANTE LA CUAL SE DECRETÓ LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL QUE LO UNÍA A LA SEÑORA SABINE HAAKE. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 314

EXHORTO 315

EXHORTO PROCEDENTE DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N° 24 DE MADRID, ESPAÑA, DENTRO DEL PROCESO DE DIVORCIO PROMOVIDO POR RAFAEL ÁNGEL CORTÉS ARGENTA CONTRA AIDA MARÍA JESÚS GONZÁLEZ. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL GONZÁLEZ. PANAMÁ, OCHO (8) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 315

TRIBUNAL DE INSTANCIA 316

RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR JAIME ARISTIDES CARZOLA GARCÉS CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 183-95 DE FECHA 3 DE AGOSTO DE 1995, EMITIDA POR LA COMISIÓN DE PERSONAL DEL PRIMERO DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ, RAMO DE LO CIVIL. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL GONZÁLEZ. PANAMÁ, DIEZ (10) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 316

RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR JAIME ARISTIDES CARZOLA GARCÉS CONTRA LA RESOLUCIÓN N°182-95 DE FECHA 3 DE AGOSTO DE 1995, EMITIDA POR LA COMISIÓN DE PERSONAL DEL PRIMERO DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ, RAMO DE LO CIVIL. Magistrado Ponente: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 318

RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA LICENCIADA KARLA BELL MIRANDA CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 201-95 DE FECHA DE 5 DE OCTUBRE DE 1995, DICTADA POR LA COMISIÓN DE PERSONAL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, RAMO DE LO CIVIL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, TREINTA (30) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 319

RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR EL LCDO. ALBERTO HASSIM GONZÁLEZ HERRERA CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 201-95 DE FECHA 5 DE OCTUBRE DE 1995, DICTADA POR LA COMISIÓN DE PERSONAL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL RAMO CIVIL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, TREINTA (30) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 322

RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR SONIA LINETH FERNÁNDEZ DE CASTROVERDE CONTRA LA NOTA N° 1252/95 DCF, CALENDADA 27 DE DICIEMBRE DE 1995, EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL ÓRGANO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL GONZÁLEZ. PANAMÁ, TREINTA (30) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 324

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PLENO

ABRIL 1996

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR EL LCDO. ABDIEL ALGIS ÁBREGO G., EN SU CONDICIÓN DE PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD DENOMINADA SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, S. A., CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN DE 16 DE FEBRERO DE 1996, DICTADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE TRABAJO. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, ONCE (11) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

A este despacho ha sido adjudicada la demanda de amparo de garantías constitucionales presentada el 9 de abril de 1996 por el licenciado Abdiel Algis Ábrego, actuando en representación de la sociedad Servicios de Administración, S. A., contra orden de hacer contenida en resolución, sin número, dictada el 16 de febrero de 1996 por el Director General de Trabajo, del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social.

A folio 33 del cuaderno aparece certificación expedida por el Secretario General de la Corte Suprema de Justicia, para informar que, en la misma fecha, ya había ingresado otra acción de amparo de garantías constitucionales, presentada por el licenciado Genarino Rosas Rosas, quien actúa en representación de Top Real Estate, con la particularidad de que "ambas contra órdenes de hacer similares contenidas en la Resolución s/n de 16 de febrero de 1996, dictadas por el Director General de Trabajo", demanda que le fuera repartida al magistrado Eligio Salas.

Como quiera que la información que antecede constituye causa de acumulación de procesos, en la modalidad prevista por numeral 2 del artículo 710 del Código Judicial, el suscrito magistrado sustanciador resuelve acumular este proceso al que fuera repartido al magistrado Eligio Salas, por ser el primero que se presentó ante la Corte Suprema.

Cúmplase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS RAÚL TRUJILLO SAGEL, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE REGINALDO DOYEN CASTILLO, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN DEL 5 DE MARZO DE 1996, DICTADA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DOCE (12) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Lcdo. Carlos Raúl Trujillo, actuando en representación del señor REGINALDO DOYEN CASTILLO, ha presentado demanda de amparo de garantías constitucionales contra la orden de hacer contenida en la Resolución del 5 de marzo de 1996, expedida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial. En dicha resolución se resuelve confirmar el auto N° 500 de 11 de octubre de 1995, emitido por el Juzgado Tercero de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, el cual niega la petición de la aplicación de una medida cautelar solicitada por el Licenciado Trujillo en favor de su defendido el señor Reginaldo Doyen Castillo, sindicado por delito contra la salud pública.

I. La pretensión y su fundamento

La parte demandante señala como infringido el artículo 32 de la Constitución Nacional. El artículo 32 de la Constitución Nacional establece la garantía constitucional del debido proceso que es una institución instrumental, en virtud de la cual debe asegurarse a las partes en todo proceso -legalmente establecido y que desarrolle sin dilaciones injustificadas- oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal competente predeterminado por la ley, independiente e imparcial de pronunciar respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso y de contradecir las aportadas por la contraparte, de hacer uso de los medios de impugnación consagrados por la ley contra resoluciones judiciales materiales y conforme a derecho, de tal manera que las personas puedan defender efectivamente sus derechos.

Alega la parte demandante que la resolución impugnada viola directamente, por comisión, la garantía fundamental contenida en el artículo 32 de la Constitución Nacional ya que el Segundo Tribunal, ante la solicitud de aclaración de sentencia, estaba facultado para aclarar o corregir en la parte resolutiva, el error de escritura cometido y no reformar en lo principal la decisión ya pronunciada. En este sentido, la parte actora señala que el contenido del artículo 986 del Código Judicial es claro al prohibir al Juez reformar o revocar su decisión en lo principal, y solo le permite aclarar las frases obscuras o de doble sentido, o corregir los errores pura y manifiestamente aritméticos o de escritura de la parte resolutiva de la respectiva resolución por lo que al reformar su decisión del 27 de febrero de 1996 se infringió el mandato del artículo 986 citado en violación del artículo 32 de la Constitución Política de la República.

Agrega la parte actora que el Tribunal de apelación ya había dejado de ser competente para conocer sobre lo principal de la decisión adoptada el 27 de febrero de 1996 y que al revocar de oficio la resolución cuya corrección se solicitó también se infringe el artículo 2427 del Código Judicial el cual no contempla que el juzgador de segunda instancia, en materia procesal penal, pueda revocar o reformar de oficio o a petición de parte su propia decisión, por lo que con ello también se violenta el artículo 32 de la Constitución Política que consagra el debido proceso legal.

Finalmente, señala el demandante, el derecho panameño sólo admite el recurso de reconsideración en los casos contemplados en el artículo 2498 del Código Judicial, por tratarse de procesos de única instancia.

II. El informe de Conducta del Segundo Tribunal Superior

La Magistrada Presidenta del Segundo Tribunal Superior contestó el informe de conducta solicitado mediante Nota S/N fechada el 18 de marzo de 1996 señalando que el Segundo Tribunal Superior confirmó el auto venido en consulta y señala que la aclaración procedía por cuanto la parte resolutiva del auto no era acorde con la parte motiva. Por esa razón, señala, sólo se aclaró la resolución y se explicó la aparente contradicción entre la parte motiva y la resolutiva. En este sentido, señala la funcionaria, tanto en la resolución contenida de auto de 27 de febrero de 1996, como en la aclaración contenida en la resolución de 5 de marzo de 1996, se preserva la decisión de la Juez Tercera de Circuito que negó la medida cautelar.

III. Decisión de la Corte

Se trata, pues, de una solicitud de medida cautelar a favor del señor Reginaldo Doyen Castillo, a quien se le mantiene detenido preventivamente por el delito contra la salud pública. Consta en el expediente que se practicó una diligencia de allanamiento en la residencia del señor Doyen Castillo encontrándose en una cesta en un baño la droga conocida como Cocaína en una cantidad de 7.28 gramos.

El Juez Tercero de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá niega la petición de la aplicación de una medida cautelar solicitada por el Licenciado Trujillo en favor de su defendido, el señor Reginaldo Doyen Castillo, mediante el Auto N° 500 de 11 de octubre de 1995. El mismo es apelado

ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia quien, mediante resolución fechada el 27 de febrero de 1996 confirma el auto antes mencionado. En dicha resolución se señala, en el último párrafo de la parte motiva, que se considera prudente revocar el auto que niega la sustitución de la medida cautelar y en su lugar imponer las contenidas en los literales a y b del artículo 2147-B del Código Judicial, es decir, las que consisten en comparecer los días quince (15) y treinta (30) de cada mes a los estrados del tribunal de la causa y el de no abandonar el país sin autorización judicial previa. De lo anterior se percibe, de manera palmaria, una contradicción entre la parte motiva y la parte resolutiva de la resolución por lo que el apoderado judicial del señor Castillo solicita aclaración de sentencia.

El Tribunal acepta que se ha cometido un error en la transcripción del proyecto de resolución por lo que accede a la aclaración antes aludida y, expide la resolución fechada el 5 de marzo de 1996. En dicha resolución señala que la cantidad de droga encontrada al procesado rebasa la medida posológica destinada para uso personal y que la evaluación psiquiátrica del procesado no estableció ningún estado de dependencia a las drogas, circunstancias estas que impiden otorgarle la libertad al imputado, por lo que debía mantenerse su detención. En este sentido, la resolución antes aludida confirma, nuevamente, el auto N° 500 del 11 de octubre de 1995.

Esta Corporación considera que, efectivamente, el Segundo Tribunal Superior de Justicia procedió de manera irregular al expedir la resolución de 5 de marzo de 1996, con motivo de la aclaración de sentencia solicitada por la parte actora. El artículo 986 del Código Judicial es claro al señalar que la aclaración de sentencia gira única y exclusivamente alrededor de la parte resolutiva de la sentencia. Dicha norma es del siguiente tenor literal:

> "ARTÍCULO 986. La sentencia no puede revocarse ni reformarse por el Juez que la pronuncie, en cuanto a lo principal; pero en cuanto a frutos intereses, daños y perjuicios y costas, puede completarse, modificarse o aclararse, de oficio, dentro de los tres días siguientes a su notificación o a solicitud de parte hecha dentro del mismo término.
>
> También puede el Juez que dictó una sentencia aclarar las frases obscuras o de doble sentido, en la parte resolutiva, lo cual puede hacerse dentro de los términos fijados en la primera parte de este artículo.
>
> Toda decisión judicial, sea de la clase que fuere, en que se haya incurrido, en su parte resolutiva, en un error pura y manifiestamente aritmético o de escritura o de cita, es corregible y reformable en cualquier tiempo pero sólo en cuanto al error cometido."

Igualmente, la norma es clara al establecer que la aclaración de sentencia y la corrección de una resolución no puede recaer sobre lo principal, es decir, sobre el fondo de la controversia, sino tan sólo en lo referente a errores aritméticos o de escritura o de cita, frases obscuras en la parte resolutiva, o modificaciones en cuanto a frutos, intereses, costas o daños y perjuicios. En este sentido se observa que lo que motivó la expedición de la resolución s/n de 5 de marzo de 1996 es una solicitud de aclaración de sentencia de la parte resolutiva de la sentencia de 27 de febrero de 1996 por lo que mal podía el Segundo Tribunal Superior decidir otro asunto que no era contemplado, ni objeto de la aclaración.

Por otro lado, es necesario destacar que el Código Judicial le otorga al Juez de la causa la facultad de revocar de oficio cualquier providencia o auto, dentro del término de dos días, tal como se colige del párrafo tercero del artículo 1114. De modo que, si un tribunal percibe que se ha incurrido en algún error dentro de la parte motiva de una resolución, lo procedente es revocarla de oficio dentro del término correspondiente y subsanar el error de que se trate. Una cosa es, pues, la aclaración de una sentencia, y otra muy diferente, la corrección de oficio de una providencia por parte del juez de la causa. Considera

el Pleno que si el Segundo Tribunal Superior advirtió que se había producido un error en la transcripción de la resolución en estudio debió realizar la corrección de dicho error de oficio conforme a la facultad antes aludida y no mediante una resolución que resuelve una solicitud de aclaración de sentencia.

Si bien el proceder del Segundo Tribunal no fue el más adecuado, no considera el Pleno de esta Corporación que el mismo sea violatorio de la garantía del debido proceso legal entendida esta última como el derecho que tiene toda parte en un proceso a ser oído por un Tribunal competente, independiente e imparcial, de pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte contraria, de aportar pruebas lícitas y contradecir las aportadas por la contraparte y de hacer uso de los medios de impugnación que la ley consagra para defender sus derechos. La medida de la detención preventiva aplicada al señor Doyen Castillo es perfectamente procedente por cuanto la cantidad de droga incautada es superior a la medida posológica determinada para consumo personal. Ello es así por cuanto la pena que se le impone a este tipo de conducta es superior a los dos años lo cual justifica la medida de la detención preventiva. Si bien el Tribunal Superior cometió un error de transcripción, en ningún momento consideró el Tribunal que al imputado debía otorgarsele las medidas cautelares solicitadas por el apoderado judicial de la parte actora. Todo lo contrario, en ambas resoluciones se resuelve confirmar la decisión del Auto apelado en el cual se niega la substitución de la detención preventiva por otros tipos de medidas cautelares. Por todas las consideraciones anteriores no considera esta Corporación que se ha infringido el debido proceso legal. No procede, pues, el presente cargo.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo de garantías constitucionales propuesto por el Lcdo. Carlos Raúl Trujillo Sagel en representación del señor Reginaldo Doyen Castillo y en contra de la orden de hacer contenida en la resolución del 5 de marzo de 1996 dictada por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ARCELIO A. MOJICA, EN REPRESENTACIÓN DE BERTA DE GONZÁLEZ, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA SENTENCIA DE 19 DE JULIO DE 1995, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL (COCLÉ Y VERAGUAS), BAJO LA PONENCIA DEL MAGISTRADO PABLO RAMIRO PÉREZ RODRÍGUEZ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DOCE (12) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La señora BERTA DE GONZÁLEZ ha presentado, mediante su apoderado judicial especial, demanda de amparo de garantías constitucionales contra el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial.

En la demanda se pide a la Corte que se revoque una orden de hacer proferida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial mediante resolución fechada el 19 de julio de 1995 que declara la nulidad del proceso ordinario de mayor cuantía propuesto por la señora Berta de González contra la Cooperativa de Ahorro y Crédito El Educador Veraguense, R. L. (COOPEVE) porque, a juicio del Tribunal Superior, le corresponde a los tribunales de la

jurisdicción laboral la competencia de dicho proceso.

El apoderado judicial de la parte actora señala que la resolución impugnada infringe los artículos 17 y 18 de la Constitución Política.

Considera el Pleno que el presente recurso de amparo no debe ser admitido por cuanto las normas que se alegan infringidas no pueden ser invocadas en un proceso de amparo de garantías constitucionales. En este sentido, la Corte ha señalado que el artículo 17 de la Constitución es una norma de carácter programático por lo que se descarta la atinencia de la infracción de esta disposición en apoyo de una acción de amparo. Por otro lado, el artículo 18, el cual determina el ámbito de responsabilidad de los particulares y de los servidores públicos en un Estado de Derecho, establece un principio de carácter general y no una garantía individual que le atribuya derechos específicos al ciudadano.

En consideración a lo antes expuesto, no es procedente el amparo de garantías constitucionales interpuesto por la parte actora, por haberse invocado como infringidas normas de carácter programático que no son susceptibles de ser alegadas como violadas en este tipo de procesos, criterio que ha sentado la Corte en numerosas ocasiones.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE, por ser manifiestamente improcedente, la demanda de amparo de garantías constitucionales presentada por la señora BERTA DE GONZÁLEZ contra el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO MARTÍN WILSON CHEN, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE JOSÉ EPIMÉNIDES ALFONSO GOVEA, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 100-96 DE 8 DE FEBRERO DE 1996, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado MARTÍN WILSON CHEN, actuando en nombre y representación de JOSÉ EPIMÉNIDES ALFONSO GOVEA, ha presentado ante el Pleno de la Corte, acción de Amparo de Garantías Constitucionales contra la Orden de Hacer contenida en la Resolución N° 100-96 de 8 de febrero de 1996, dictada por la Dirección de Responsabilidad Patrimonial de la Contraloría General de la República.

Corresponde en esta etapa de admisibilidad determinar si la acción de amparo cumple adecuadamente con el artículo 2610 del Código Judicial, y con la doctrina de la Corte en esta materia, en virtud de la doctrina del bloque de constitucionalidad. De la lectura de la acción de amparo se desprende que el amparista no ha cumplido con el requisito señalado en el artículo 2610, numeral 4. En efecto, el amparista señala las normas constitucionales que a su juicio vulnera el acto acusado, mas sin embargo, el señalar la explicación o concepto en que se han infringido tales normas constitucionales, no lo hace en la manera que este Pleno ha entendido sobre la forma en que se cumple con este

requerimiento. Se trata de analizar bajo qué aspecto se ha incumplido la norma constitucional.

Como quiera que las normas acusadas son el artículo 44 y el artículo 32, ambos de la Constitución Política, conviene analizar cada uno de ellos por separado.

El artículo 44, se refiere al derecho de propiedad, por cuanto fincas de propiedad de la sociedad anónima RANCHO SAN NICOLÁS, S. A., han sido objeto de medidas cautelares, sin que dicha sociedad sea parte del proceso de responsabilidad patrimonial, y se trata de un proceso de responsabilidad patrimonial contra persona distinta a la sociedad. No obstante, pasa por alto el amparista, que tal medida se fundamenta en el artículo 4 del Decreto de Gabinete N° 36 de 1990, el cual, para los efectos que interesan, ha sido declarado constitucional por la Corte Suprema de Justicia. Pues bien, el Pleno, en dos ocasiones, ha señalado que no se viola el artículo 44 frente a cautelaciones de la Contraloría General de la República, con respecto a terceros, en la medida en que se ofrezcan indicios sobre origen de tales bienes y si son el producto de recursos públicos, por cuanto el ordenamiento jurídico le ofrece al propietario los medios de defensa pertinentes en el mencionado artículo 4 del Decreto de Gabinete N° 36 de 1990. Sobre ello puede consultarse la sentencia de 4 de junio de 1991, principio reiterado en la sentencia de 8 de mayo de 1992. En el concepto de la infracción, se parte del supuesto de que se vulnera el derecho de propiedad por la utilización de medidas cautelares contra quien no es parte en el proceso, hipótesis que, sin embargo, no tiene sustento en el ordenamiento jurídico aplicable (artículo 4° del Decreto de Gabinete) y en los fallos que se han indicado.

El artículo 32 de la Constitución Política instituye el principio del debido proceso, el cual ha sido objeto de copiosa jurisprudencia, la que, en términos generales, acoge la definición que el Magistrado ARTURO HOYOS ha señalado. Sobre el mismo, ha señalado:

> "Nosotros hemos definido la garantía del debido proceso como una institución instrumental en virtud de la cual debe asegurarse a las partes en todo proceso -legalmente establecido y que se desarrolle sin dilaciones injustificadas- oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal competente, predeterminada por la ley, independiente e imparcial, de pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso y de contradecir las aportadas por la contraparte, de hacer uso de los de impugnación consagrados por la ley contra resoluciones judiciales motivadas y conformes a derecho, de tal manera que las personas puedan defender efectivamente sus derechos. Esta noción excluye los aspectos específicamente penales del debido proceso, tales como la presunción de inocencia y la prohibición del doble juzgamiento por un mismo hecho delictivo (non bis in idem).
>
> La Corte Suprema ha adoptado esta definición en un número plural de sentencias expedidas desde 1990. Las más recientes de ellas son las sentencias del Pleno dictadas el 29 de julio de 1992 (amparo propuesto por Germán Suárez contra el juez sexto civil en el proceso de liquidación del Banco Interoceánico de Panamá, S. A.) y el 18 de junio de 1992 (amparo propuesto por Maribel Correa de Arze contra el Segundo Tribunal Superior de Justicia)".
>
> (La Interpretación Constitucional, Arturo Hoyos, Editorial Temis, S. A., Santa Fe de Bogotá-Colombia; 1993; pág. 60-61).

El concepto de la infracción al artículo 32, por lo tanto, debía determinar cual del número plural de derechos que integran la garantía del debido proceso se había vulnerado, para que el objeto del amparo se deslinde sobre materia constitucional, que es la que es objeto de esta acción extraordinaria. Sin embargo, se aprecia que el concepto de la infracción es una repetición del concepto de la violación al artículo 44. Cabe señalar, que, con respecto a esta

materia, el ordenamiento jurídico aplicable, el Decreto de Gabinete N° 36 de 1990 le permite al tercero en estos procesos especiales, hacerse parte del proceso, que es uno de los derechos que integran la garantía del debido proceso.

Desde otra perspectiva, sobre las cautelaciones que realiza la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, existe reiterada jurisprudencia en el sentido de que el procedimiento o la tramitación de tales medidas cautelares, en ausencia de disposición alguna en la Ley Orgánica de la Contraloría Ley 32 de 1984 o del Decreto de Gabinete N° 36 de 1990, es el contenido en el Libro II del Código Judicial, que permite en el artículo 544 la revocatoria de la medida cautelar decretada. Es decir, existe mecanismos para obtener la reparación en vía legal de algún derecho subjetivo del amparista. A este aspecto, se refirió la sentencia de amparo de 17 de marzo de 1993, la cual expone:

> "Todo esto implica que se pretende mediante un amparo de garantías la revocatoria de una orden, no porque la misma viole garantías constitucionales, sino porque no se ha continuado con el procedimiento que para estos casos se exige. El problema se enmarca dentro de un aspecto netamente legal y debe ser resuelto dentro de la correspondiente vía administrativa".

Por las consideraciones que anteceden, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la acción de amparo de garantías constitucionales interpuesta por el apoderado judicial del señor JOSÉ EPIMÉNIDES ALFONSO GOVEA.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR CASABLANCA ORIÓN TRADING CORP. VS EL JUEZ TERCERO DEL CIRCUITO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de Apelación ha ingresado a la Corte Suprema de Justicia la acción de Amparo de Garantías Constitucionales propuesta por la firma forense CAJIGAS & CONSOCIOS, como apoderados especiales de CASABLANCA ORIÓN TRADING CORP., contra la orden contenida en el Auto N° 166 de 15 de enero de 1996 dictado por el Juez Tercero del Primer Circuito Judicial de Panamá (Ramo Civil).

La orden acusada se encuentra en el Auto N° 166 de 15 de enero de 1996 proferido por el Juzgado Tercero del Circuito de lo Civil, que declara:

> "...
> ADMITE las pruebas aducidas por las partes dentro de las presentes excepciones, y ORDENA la práctica de las que seguidamente se describen:
>
> 1) De la excepcionante: ...
>
> 2) De la ejecutante: Que Indalecio Herrera para que reconozca la carta de 29 de agosto de 1994 y presente, de tenerlo en su poder, su original; MANUEL CIERVIDES, para que reconozca su firma en la carta de 29 de agosto de 1994. SE ORDENA acción exhibitoria de los

> registros y archivos de CASA BLANCA ORIÓN TRADING CORP. a fin de determinar, a través del Libro Diario y Mayor, lo siguiente: a) Si dicha sociedad ha hecho pagos directos a proveedores por el suministro de materiales y servicios en el proyecto CASA BLANCA ORIÓN TRADING CORP. en la Zona Libre de Colón; b) Si le ha hecho pagos a INDALECIO Herrera en su calidad de Representante de Estructuras y Proyectos, S. A.; c) Si en los registros de cheques girados por dicha sociedad existen pagos a FICONCO, S. A. por el suministro de concreto y losas instaladas en el proyecto de Zona Libre de Colón. Se tienen como peritos de la ejecutante para la práctica de esta diligencia a ..." (Fs. 9) (Énfasis de la Corte).

La acción de amparo fue **DENEGADA** por el Primer Tribunal Superior mediante resolución de 23 de febrero de 1996 (visible de fojas 26 a 31) contra la cual el amparista presenta el recurso de apelación que a continuación el Pleno de la Corte pasa a examinar.

El demandante señala que el amparo fue interpuesto contra la resolución del juez de circuito que ordenó la práctica de Diligencia Exhibitoria a `"los Registros y archivos de la sociedad" ..., "a través del Libro de Diario y Mayor" ..., "Y en los registros de cheques girados por la empresa" ...' ". Afirma, entonces, que esa inspección viola los artículos 32 y 29 de la Constitución Política "por no referirse a asientos y documentos específicos".

En la resolución apelada que decidió el amparo se dice que con la orden acusada no se violó la garantía del debido proceso legal y la de inviolabilidad de documentos privados porque en la resolución judicial que la contiene "se especifican o determinan claramente los puntos sobre los cuales va a girar el examen de los mismos ...". Sostiene el apelante que de dicho señalamiento se debe entender que el a-quo se está refiriendo "a la frase del Art. 29 de la Constitución Política según la cual la correspondencia y documentos privados no se pueden revisar sino para fines específicos". Sin embargo, alega que dicha disposición establece diversos requisitos para el examen de documentos privados, y enumera los siguientes:

> "1. Que la exhibición sea por disposición de autoridad competente;
> 2. Para fines específicos;
> 3. Mediante las formalidades legales;
> 4. Con reserva sobre los asuntos ajenos al objeto de la exhibición."

Sobre estos requerimientos sostiene que es evidente que el a-quo sólo confrontó la orden impugnada con lo que establecen los numerales uno y dos antes transcritos.

El amparista considera que para resguardar en la práctica los aspectos relativos a "las formalidades legales" y "la reserva de los asuntos ajenos al examen", que consagra la aludida garantía fundamental, no se debe ordenar una Diligencia Exhibitoria en la que se permita a los peritos designados llegar a un establecimiento comercial pidiendo que le entreguen y le permitan revisar "todos `los registros y archivos de la sociedad', y mirar `a través del Libro de Diario y Mayor' y en `los registros de cheques girados por la empresa'". Es, dice, para impedir esta situación que a los abogados se les exige que "especifiquen al máximo los asientos que deben ser examinados, ya sea mediante el señalamiento de períodos contables, o a la mención de documentos específicos". Esa es la manera de evitar la entrega de todos lo archivos y documentos contables del comerciante (y de que se puedan mirar asuntos ajenos al examen).

En este caso concreto, finaliza expresando el apelante, se debieron especificar los períodos contables y las fechas aproximadas de los asientos sujetos a inspección, pues se trata de comprobar puntos relativos a un negocio mercantil sucedido en un período de tiempo que el actor conoce. Por ello no se puede aceptar que para determinar si se han hecho pagos a una persona "se ordene una inspección en todos los registros y archivos de una empresa, a través del Libro Diario y Mayor, y se tenga acceso a todo el registro de cheques que un comerciante ha pagado durante su existencia."

Esta Corporación ha podido observar, luego de examinar el fallo apelado, que se negó el amparo en base al siguiente razonamiento:

> "...
> la exhibición del Libro del Diario y Mayor dispuesta por el Juez demandado no conlleva la revisión general de la Contabilidad de la amparista (que aparece prohibido por el artículo 89 del Código de Comercio), pues en la resolución judicial atacada se especifican o determinan claramente los puntos sobre los cuales va a girar el examen de los mismos. Siendo ello así, se considera que no se ha vulnerado a la accionante las garantías ..." (Fs. 30).

CRITERIO DE LA CORTE:

El Pleno de la Corte procede ha evaluar el caso concreto para determinar si se ha producido la conculcación de los artículos 32 y 29 de la Carta Fundamental en concordancia con el cumplimiento de los artículos 89 del Código de Comercio y el 805 del Código Judicial.

La solicitud para la práctica de la prueba (diligencia exhibitoria) que genera este proceso de amparo se produce en el Proceso Ejecutivo instaurado por FINANZAS, CONTADURÍA y COBRANZAS, S. A. contra CASABLANCA ORIÓN TRANDING CORP., JUAN LUIS y CARLOS MANUEL VENTURA LARA, específicamente dentro de la Excepciones de carencia de título y de cobro excesivo opuestas por CASABLANCA ORIÓN TRADING CORP.

Como se indicó anteriormente, por solicitud de la parte ejecutante, el juez (demandado en amparo) ORDENO "acción exhibitoria de los registro y archivos" de la sociedad excepcionante para determinar mediante su Libro Diario y Mayor tres puntos, que son:

1. Si dicha sociedad ha hecho pagos directos a proveedores por el suministro de materiales y servicios en el proyecto CASA BLANCA ORIÓN TRADING CORP. en la Zona Libre de Colón;

2. Si le ha hecho pagos a Indalecio Herrera en su calidad de Representante de Estructuras y Proyectos, S. A.;

3. Si en los registros de cheques girados por dicha sociedad existen pagos a FICONCO, S. A. por el suministro de concreto y losas instaladas en el proyecto de Zona Libre de Colón.

En casos como el que nos ocupa, el examen del tribunal de amparo además de determinar si se han especificado claramente puntos sobre los que "va a girar el examen de los mismos", como lo ha expresado el fallo apelado, debe verificar, con sumo cuidado, el contenido de cada uno de esos puntos en atención a las formalidades legales para garantizar la reserva en cuanto el objeto de la exhibición, por exigirlo así la Constitución.

En este sentido, el artículo 89 del Código de Comercio prohibe el reconocimiento general de libros y otros documentos de los comerciantes, salvo en los casos de quiebra, sucesión o liquidación. Si se trata de otro caso "sólo podrá ordenarse la exhibición de determinados asientos de los libros y documentos respectivos".

La confrontación del caso subjudice con las exigencias legales previamente descritas llevan a concluir que la medida ordenada en el recurso no ha sobrepasado el límite legal impuesto; ello es así pues, aún cuando la diligencia no se pretende dentro de alguno de los casos descritos (Quiebra, Sucesión o Liquidación) sino en un proceso ejecutivo, los aspectos que se mencionan para ser determinados en el Libro Diario y Mayor de la sociedad (excepcionante-ejecutada) son lo suficiente específicos, por lo que no dan pie o posibilitan una inspección generalizada de sus registros y archivos.

La exhibición que ordenó el juzgador se circunscribió a determinados documentos de los libros del amparista sobre los cuales los peritos deben limitar su examen. Por eso, la práctica de esta prueba no conculca la obligante reserva

que debe mantenerse sobre la información y, en consecuencia, la misma evidencia los controles necesarios de forma que los términos en que se autoriza se ajustan a lo preceptuado por la ley.

En ese orden de ideas, el Pleno no comparte el criterio de la censura al sostener que con esta acción exhibitoria se está ordenando una inspección de todos los registros y archivos de la sociedad excepcionante, a través del Libro Diario y Mayor, pues lo que expresa es si la sociedad ha hecho pagos directos a proveedores por el suministro de materiales y servicios de un proyecto concreto (de construcción); tampoco es acertada su aseveración de que con la práctica de la acción exhibitoria, se permite acceso a su registro de cheques, lo que implica el conocimiento de todos los pagos que ha realizado, debido a que los otros puntos que se tratan de determinar son: si se pagó a una persona natural determinada como representante de una persona jurídica también determinada y si se pagó a una persona jurídica especifica el suministro de concreto y losa para el mismo proyecto de construcción.

Siguiendo el criterio sentado por la jurisprudencia constitucional sobre esta materia hay que concluir que la acción exhibitoria, legalmente instituida como medio de prueba, no puede sobrepasar el marco de lo conceptuado como aspectos específicos de la contabilidad de una empresa, lo cual implica que debe recaer sobre determinados asientos o parte determinada de los mismos, siendo que en su práctica debe imponerse la limitación de **"tomar copia de los asientos o papeles que tengan relación con el asunto ventilado"**. Si el juzgador decreta dicha diligencia en virtud de una solicitud, aunque provenga de parte legitimada, con proyecciones imprecisas e ilimitadas estaría atentando contra el ámbito de la intimidad o reserva de una persona natural o jurídica. (Véase Reg. Jud. de abril-1993, pp. 46).

La Corte concluye con fundamento en todo lo expresado que la presente acción exhibitoria fue aducida por la parte ejecutante dentro de las Excepciones de comercio de título y cobro excesivo propuestos por los ejecutados entre los que figura la sociedad proponente de este amparo, (CASA BLANCA ORIÓN TRADING CORP.), prueba que entre otras fue admitida por el juzgador por estimarla conducente y pertinente; la misma involucra a quien es parte en el proceso y recae sobre aspectos muy precisos. A esto cabe agregar como circunstancia práctica que el Juez debe asistir e intervenir en su ejecución para evitar cualquier exceso, controlando así que el propietario de los documentos que se han de exhibir sólo tenga que mostrar los que son pertinentes.

El Pleno coincide con lo resuelto en primera instancia por el tribunal de amparo.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la resolución de 22 de febrero de 1996, que DENIEGA la acción de Amparo interpuesta por CASABLANCA ORIÓN TRADING CORP.

Notifíquese, Devuélvase y Cúmplase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE DUDLEY Y ASOCIADOS, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE JUAN CARLOS DUDLEY PORRAS, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN EL AUTO N° 70, DEL 8 DE ENERO DE 1996, DICTADO POR EL JUEZ TERCERO DE CIRCUITO, DE LO CIVIL, DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA.

PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La firma forense Dudley y Asociados, actuando en nombre y representación del señor JUAN CARLOS DUDLEY PORRAS, interpuso ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia recurso de apelación contra la Resolución del 11 de marzo de 1996, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, mediante la cual no se admitió la acción de amparo de garantías constitucionales interpuesta contra la orden de hacer contenida en el Auto N° 70, del 8 de enero de 1996, expedido por el Juzgado Tercero de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá.

I. FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA

El tribunal a-quo no admitió la acción de amparo impetrada por considerar que el señor Juan Carlos Dudley Porras no acreditó tener un interés legítimo que pudiera afectarse con la orden objeto del amparo, ni tampoco que el mismo esté vinculado en alguna forma al interés de las personas que se mencionan expresamente en la resolución contentiva de la referida orden. Agregó el tribunal primario, que el artículo 2606 del Código Judicial ha sido interpretado por el Pleno de la Corte en el sentido de que una persona extraña a la orden impartida sólo puede promover el amparo siempre y cuando esté vinculada al interés de la persona contra la cual se expida la orden y como el amparista no probó tener legitimación activa para interponer el amparo contra una orden dictada dentro del proceso ordinario seguido por José Ángel Raffo Rivera contra el Banco del Comercio, S. A., su demanda no puede admitirse (fs. 39-42).

II. LOS ARGUMENTOS DEL RECURRENTE

De acuerdo con el recurrente, la acción de amparo de garantías constitucionales debió admitirse porque del texto de la última frase del artículo 50 de la Constitución Política y del artículo 2606 del Código Judicial, se desprende claramente que dicha acción puede interponerla cualquier persona. Agregó, que ninguno de estos preceptos limita, restringe, califica o condiciona esta facultad, ni la relaciona con alguna característica adicional que sirva de sustento a la tesis del Primer Tribunal Superior de Justicia. Por esas razones, la resolución impugnada debe revocarse (fs. 45-48).

III. CONSIDERACIONES DEL PLENO DE LA CORTE

Mediante la resolución recurrida no se admitió la acción de amparo de garantías constitucionales a la que se refiere este proceso, porque el actor no probó tener un interés legítimo en la orden impugnada ni tampoco que está vinculado al interés de la persona afectada por dicha orden. El recurrente considera errónea esta apreciación del a-quo, ya que la parte final del artículo 50 de la Constitución Política y del artículo 2606 del Código Judicial facultan a cualquier persona para interponer la acción de amparo por otra.

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia considera que no le asiste la razón al recurrente. Esta Corporación de Justicia se ha pronunciado en otras oportunidades sobre el punto que en el presente caso se discute, indicando que cuando la acción de amparo la interpone una persona distinta de la directamente afectada por la orden impugnada, ésta debe acreditar un interés legítimo en la revocatoria de la orden. Así se expresó en el fallo del 17 de julio de 1991, cuya parte pertinente expresa:

> "Aquí aparecen obviamente traslapados los intereses de la demandante con los de su esposo, siendo que este último carece de legitimación en esta causa porque no es parte en la misma. Es fácil advertir que la "orden de no hacer" que se impugna no le concierne jurídicamente; la parte resolutiva del acto jurisdiccional que la contiene no viola ningún derecho o garantía consagrado en su favor por la Constitución Nacional, como es la exigencia tanto del artículo 50 de la Carta

> Magna y 2606 del Código Judicial. No está entonces investido de la legitimación activa, y por no ser parte en el negocio -lo que le niega la titularidad de alguno de los derechos procesales básicos- no pueden ser anunciadas pretensiones en su nombre. De allí que esta presunta violación se refiera a un elemento extraño al proceso, por lo que no puede ser considerada favorablemente." (Registro Judicial de julio de 1991, Pleno, pág. 80).

En el mismo sentido se pronunció el Pleno en su fallo del 14 de julio de 1992, cuya parte pertinente se transcribe a continuación:

> "El Pleno de la Corte estima que el auto expedido por el Primer Tribunal Superior de Justicia no hace más que aplicar el criterio expresado por la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 5 de noviembre de 1990 que resolvió el proceso de amparo de garantías constitucionales promovido por Juan Carlos Dudley Porras contra el Procurador General de la Nación.
>
> Es evidente que la sociedad demandante no ha demostrado tener intereses coincidentes con los del señor Jerry Lee Harvey Mitchell y por ello no tiene la legitimación procesal activa necesaria para actuar en este proceso." (Registro Judicial de julio de 1992, pág. 77).

En el presente caso, el actor no ha demostrado tener un interés legítimo en la revocatoria de la orden impugnada, por lo que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, siguiendo el criterio jurisprudencial citado, debe confirmar la resolución impugnada.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Resolución del 11 de marzo de 1996, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, mediante la cual no se admitió la acción de amparo de garantías constitucionales interpuesta por el señor JUAN CARLOS DUDLEY PORRAS contra la orden de hacer contenida en el Auto N° 70, del 8 de enero de 1996, dictado por el Juez Tercero de Circuito, de lo civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICDO. HUMBERTO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LUIS ANTONIO MENESES, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN EL AUTO DE 29 DE FEBRERO DE 1996, DICTADO POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **Humberto Hernández Jiménez**, en nombre y representación de **LUIS ANTONIO MENESES** ha interpuesto acción de amparo de garantías constitucionales contra la orden de hacer contenida en el Auto de 29 de febrero de 1996, dictado por el Tribunal Superior de Trabajo.

El contenido de la orden que se acusa de violatoria de las garantías constitucionales, es del tenor siguiente:

> "Por las anteriores consideraciones, el Tribunal Superior de Trabajo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA que por Secretaría se solicite a los Peritos Calígrafos de la policía Técnica Judicial o del Ministerio Público su colaboración a objeto de verificar en el expediente si las firmas contenidas en las fojas 44, 48, 52, 67 y 76 corresponde a la firma que estampa de su puño y letra el licenciado CARLOS A. JONES, con cédula de identidad personal N° 8-406-236.
>
> FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 973 del Código de Trabajo".

De acuerdo con lo anterior, el acto emanado del Tribunal de Trabajo de Segunda instancia, no constituye una orden de hacer susceptible de ser impugnada, sino un acto de mero trámite dentro del proceso, que no contiene mandato imperativo, prohibición o abstención.

A estos efectos, este Tribunal Colegiado desea señalar que la orden que se impugna en el amparo está contenida en la resolución de 29 de febrero de 1996 proferida por el Tribunal Superior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 973 del Código de Trabajo, mediante el cual dicta un AUTO DE MEJOR PROVEER para recabar pruebas tendientes a aclarar puntos que los juzgadores encuentra oscuros o dudosos en el proceso.

Como se puede apreciar, la actuación del Tribunal Superior demandado es un acto de mero trámite, que de manera alguna contiene mandato imperativo o prohibición o abstención dirigidas al afectado.

Nuestra jurisprudencia ha sido reiterada en señalar, en primer lugar que los actos de mero trámite o de impulso procesal no pueden ser atacados mediante la acción de amparo **(ver Sentencia de 3 de mayo de 1994)**; al igual que aquellas decisiones que no contengan orden de hacer o no hacer contra el afectado.

Reiteramos que la acción de amparo sea viable es indispensable que ésta pretenda la revocatoria de una orden de hacer o no hacer, y que no es pertinente encausar la acción contra actos de mero obedecimiento, trámite o impulso procesal.

Este Tribunal conceptúa que no es objetable la facultad que le confiere el Derecho Procesal Moderno al juzgador (representante de la función jurisdiccional), permitiéndole su actuación oficiosa por motivaciones de orden público, para adelantar las diligencias que estime procedentes en vías de esclarecer sus dudas; suplir las deficiencias en materia de pruebas; encontrar la llamada **verdad material** y ofrecer una mejor administración de justicia, en un campo donde el interés social es tan sensible como el de la justicia penal, y donde entra en juego la actividad sancionadora del Estado. Su finalidad es distinta a la del proceso civil, en que impera el principio dispositivo y de justicia rogada, pero aun en ese proceso, el juzgador tiene la facultad de hacer llegar al expediente las piezas procesales que le permitan constatar las afirmaciones de las partes o esclarecer los puntos oscuros o dudosos, sin que ello implique que se pretende suplir la actividad de las partes de aportar las pruebas.

El artículo 973 es claro al señalar que antes de dictar sentencia el Juez puede ordenar la práctica de todas aquellas diligencias que juzgue convenientes para aclarar puntos oscuros o dudosos en el proceso.

Recordemos que el auto para mejor proveer en este caso, ordena la verificación de la firma del licenciado Carlos Jones, dado que éste ha señalado que en el expediente del proceso laboral aparece una notificación incorrecta que habilita una audiencia oral y que esa firma no le pertenece, y dicho auto tiene el propósito genérico de obtener dictámenes sobre aspectos científicos y técnicos que esclarezcan los hechos controvertidos que escapan del conocimiento jurídico

del Juez, sin suplantar el papel y la función interpretativa del juzgador sobre la aplicación del ordenamiento jurídico.

Por las razones expuestas esta Superioridad debe negarle curso legal a la acción presentada.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el Amparo de Garantías Constitucionales propuestos por el Licenciado Humberto Hernández Jiménez, en nombre y representación de LUIS ANTONIO MENESES.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LICENCIADO ANTONIO VARGAS DE LEÓN, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL SINDICATO ÚNICO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN Y SIMILARES (SUNTRACS), CONTRA LAS ÓRDENES DE HACER CONTENIDAS EN LAS NOTAS N° 41-DGT-96, N° 40-DGT-96 Y N° 39-DGT-96, EXPEDIDAS TODAS EL DÍA 24 DE ENERO DE 1996, POR EL DIRECTOR GENERAL DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Mediante Auto del 18 de marzo de 1996, la suscrita Magistrada Sustanciadora resolvió acumular los amparos de garantías constitucionales interpuestos por el licenciado Antonio Vargas De León, en nombre y representación del SINDICATO ÚNICO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN Y SIMILARES (SUNTRACS), contra las órdenes de hacer contenidas en las Notas N° 41-DGT-96 y N° 40-DGT-96, al propuesto por el mismo letrado contra la orden de hacer contenida en la Nota N° 39-DGT-96, expedidas todas ellas el día 24 de enero de 1996 por el Director General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social.

Al momento de resolver sobre la admisibilidad de dichas acciones, el Pleno de la Corte estima necesario examinar las demandas para determinar si cumplen con los requisitos legales para ser admitidas.

Mediante las notas contentivas de las órdenes de hacer impugnadas, el Director General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social pidió al Secretario General del SINDICATO ÚNICO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN Y SIMILARES, que proporcionara los elementos necesarios para determinar que el Pliego de Peticiones presentado contra las empresas: TALLER SANDOVAL, S. A. (Nota N° 39-DGT-96), POTENSADO, S. A. (Nota N° 41-DGT-96) y SISTEMAS ESTRUCTURALES MODERNOS, S. A. (Nota N° 40-DGT-96), se hizo contra empresas de las contempladas en el artículo 279 del Código de Trabajo.

Mediante la Ley N° 53 del 28 de agosto de 1975 se atribuyó competencia al Ministerio de Trabajo y Bienestar Social para conocer y decidir privativamente de ciertas reclamaciones laborales, enumeradas en el artículo 1° de la misma excerta legal. El Capítulo II de la citada Ley consagra las normas de procedimiento en estos procesos y el artículo 16, dispone que contra las resoluciones que se dicten en estos casos procederá el recurso de reconsideración ante funcionario que la dictó o el recurso de apelación superior jerárquico, cuando éstas decidan el asunto o por otra causa pongan fin al proceso o imposibiliten su continuación.

En el artículo 29 del Capítulo III de la misma Ley se establece que las resoluciones que dicte el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social en los asuntos de su competencia, **"sólo admiten los recursos de reconsideración y apelación, salvo que expresamente se aluda únicamente a uno u otro de estos recursos"**.

En el presente caso, el Director General de Trabajo, tramitando un asunto de su competencia, recibió los Pliegos de Peticiones presentados por SUNTRACS y, como los consideró defectuosos, ordenó a la organización sindical probar que las empresas contra las cuales se presentó dichos pliegos eran de las contempladas en el artículo 279 del Código de Trabajo. De acuerdo con el artículo 426 de este Código, en relación con el artículo 433 ídem, el procedimiento de conciliación se inicia con la presentación en debida forma del Pliego de Peticiones por parte del sindicato ante las Direcciones Regionales o General de Trabajo. Si el amparista no estaba de acuerdo con las órdenes de corrección de los pliegos, impartidas por este funcionario debió impugnar su decisión mediante los recursos de reconsideración o de apelación, tal como establece el artículo 29 de la Ley N° 53 de 1975, antes citado. En otras palabras, debió utilizar los recursos ordinarios que la Ley pone a su alcance para reestablecer el derecho supuestamente vulnerado.

El propio artículo 433 del Código de Trabajo, si bien prohíbe al Director General o Regional de Trabajo rechazar un pliego de peticiones, también permite, en los casos en que éste se presente con defectos, que los trabajadores los subsanen en el mismo acto de presentación, o que retiren el pliego para presentarlo con posterioridad ante alguno de los aludidos funcionarios.

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia debe reiterar, que el amparo de garantías constitucionales es una acción de carácter extraordinario, a la que sólo debe ocurrirse cuando el ordenamiento jurídico no consagre otros medios para reparar el derecho supuestamente conculcado, razonamiento que encuentra fundamento en el **"principio de definitividad"** de la acción de amparo, consagrado en nuestro ordenamiento jurídico y definido por el autor Juventino Castro como aquél "según el cual el juicio de amparo no puede promoverse si previamente no se han agotado los juicios, recursos o medios de defensa que la ley que rige el acto establecen, y que tengan por objeto modificar o nulificar dicho acto" (CASTRO, Juventino. **Garantías y Amparo**. Editorial Porrúa, S. A. 7ª ed. México. 1991. pág. 330). El mismo autor agrega, sobre el citado principio, lo siguiente:

> "La esencia de este principio resalta por sí mismo, ya que se pretende que el amparo sea la instancia final que permita la anulación de actos de autoridad violatorios de garantías individuales, razón por la cual si el resultado que pretende el agraviado puede obtenerlo mediante el uso de instrumentos ordinarios, se impide la utilización innecesaria del proceso constitucional, o la confusión en el uso de los medios de impugnación que interrumpan los procedimientos ordinarios, o bien se traduzcan en resoluciones contradictorias dentro de dicho procedimientos.
>
> Por todo ello, se pretende que el acto reclamado sea definitivo, en el sentido de que mediante el sistema ordinario ya no se pueda anularlo, para efectos de que los jueces de amparo examinen las inconstitucionalidades alegadas como último recurso." (CASTRO, Juventino. Ibídem. pág. 330).

Si bien el aludido principio admite excepciones, en el presente caso es indudable que el amparista no sólo no agotó los recursos legales pertinentes, sino que, en atención al artículo 433 del Código de Trabajo, puede retirar los Pliegos de Peticiones defectuosos y presentarlos nuevamente.

Por estas razones, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia estima que las citadas acciones de amparo de garantías constitucionales propuestas por SUNTRACS son manifiestamente improcedentes y no deben admitirse, de conformidad con el artículo 2611 del Código Judicial.

De consiguiente, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE las acciones de amparo de garantías constitucionales interpuestas por el licenciado Antonio Vargas De León, en nombre y representación del SINDICATO ÚNICO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN Y SIMILARES (SUNTRACS), contra las órdenes de hacer contenidas en las Notas N° 39-DGT-96, N° 40-DGT-96 y N° 41-DGT-96, expedidas el día 24 de enero de 1996 por el Director General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA DE VILLALAZ
(Con Salvamento de Voto) (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO RAFAEL A. GONZÁLEZ

Respetuosamente salvo el voto. La resolución, en esencia, no admite el o los amparos (hay acumulación) porque considera que contra el acto acusado de constitucionalidad procedían los recursos ordinarios de reconsideración y apelación.

Al respecto invoca la Ley 53 de 1975, por medio de la cual se atribuye competencia al Ministerio de Trabajo y Bienestar Social para conocer de reclamaciones laborales y se toman otras medidas.

En mi opinión esta Ley no es pertinente. Se refiere a situaciones distintas del procedimiento de conciliación en los conflictos colectivos de trabajo.

Da competencia al Ministerio en cinco casos: (1) los despidos individuales por causas económicas (art. 215 literal C); (2) para determinar el salario mínimo aplicable; (3) interpretación en derecho o la validez de cláusulas de convenciones colectivas u otro acuerdo; (4) remoción de un trabajador de la zona o ruta de su contrato; y, (5) impugnación de actos de la vida interna de un sindicato (estatutos, admisión de afiliados, etc.).

El acto o actos impugnados en amparo de garantías constitucionales se refieren a conflictos colectivos de trabajo, de que tratan los artículos 417 a 519 del Código de Trabajo (Libro III, Títulos III y IV), materia completamente ajena a la anterior.

El artículo 65 de la Constitución establece el derecho a huelga, que reglamenta la ley. La presentación del pliego de peticiones es parte de esa reglamentación. Para que la huelga sea legal se requiere agotar los procedimientos de conciliación, que se inician con la presentación del pliego de peticiones. Así, tersamente, lo expresa el artículo 432 del Código de Trabajo.

Esto explica el carácter del artículo siguiente cuando expresa "no podrá rechazarse un pliego de peticiones". Presentar el pliego de peticiones es tanto un derecho del trabajador como una obligación, porque si no lo presenta no accede a la huelga.

Al ser una exigencia, no se puede negar el que lo haga y terminantemente el artículo 434 dispone que el funcionario que rechace el pliego será multado con cien a trescientos balboas.

La presentación del pliego de peticiones no es más que la puerta que necesariamente se debe trasponer para llegar eventualmente a la huelga. Si esa puerta se cierra se niega el derecho a huelga. Ello explica el por qué del artículo 433 del Código de Trabajo y su carácter tajante.

Resulta evidente que los actos impugnados son ajenos a este orden de cosas,

en violación del artículo 65 de la Constitución.

Fecha ut supra.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RAÚL EDUARDO MOLINA, EN REPRESENTACIÓN DE JOSÉ AGUSTÍN ÁVILA CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN S/N DE 15 DE FEBRERO DE 1996, DICTADA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. CONTRAPROYECTO DEL MAGISTRADO ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado Raúl Eduardo Molina, actuando en representación de JOSÉ AGUSTÍN ÁVILA, ha interpuesto recurso de Amparo de Garantías Constitucionales contra la orden de hacer contenida en la Resolución S/N de 15 de febrero de 1996, dictada por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial.

Se trata de una resolución mediante la cual el Segundo Tribunal Superior ordena la ampliación del sumario dentro del proceso seguido al señor José Agustín Ávila por el delito contra los derechos ajenos en perjuicio de American Manufacturing Company Inc.

Ha sido jurisprudencia constante del Pleno de esta Corporación que el auto que decreta la ampliación sumarial es irrecurrible conforme lo establece el artículo 2205 del Código Judicial por cuanto constituye una orden girada al funcionario de instrucción para que complete la investigación por lo que el amparista no posee legitimación activa para impugnarla. En este sentido, la Corte ha reiterado una y otra vez que la acción de amparo no procede contra el auto que decreta la ampliación de las sumarias ni contra la indagatoria ordenada en dicho auto, ya que la orden de hacer, en todo caso, está dirigida al funcionario de instrucción puesto que es éste a quien corresponde cumplir los puntos claros y concretos sobre los cuales versa la ampliación. Es más, la Corte ha señalado que el auto que decreta la ampliación de las sumarias no admite el recurso de amparo de garantías constitucionales por cuanto el mismo constituye un acto de impulso procesal y, por lo tanto, de mero trámite, que no viola ningún derecho constitucional, por lo que la acción de amparo deviene manifiestamente improcedente. De lo anterior se colige que, en base al criterio reiterado de esta Corporación de Justicia, el amparo de garantías constitucionales que nos ocupa no debió siquiera ser admitido.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO VIABLE el recurso de amparo de garantías constitucionales interpuesto por el señor JOSÉ AGUSTÍN ÁVILA contra el SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(Con Salvamento de Voto) (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO JOSÉ MANUEL FAÚNDES

Mi Salvamento de Voto lo fundamento en las mismas razones que expusiera en el Proyecto del ocho (8) de marzo de este mismo año mil novecientos noventa y seis (1996). Reproducir el proyecto, es innecesario por cuanto que los integrantes del PLENO lo conocieron y lo evaluaron, contrario al que contra-proyectado lo han firmado los que están de acuerdo con este último.

Fecha Ut Supra.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LCDO. HÉCTOR MORÁN RODRÍGUEZ, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE JUAN SÁNCHEZ, CONTRA LA ORDEN DE HACER PROFERIDA POR LA JEFE DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS, CONSISTENTE EN LA RETENCIÓN DE SALARIOS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación ha ingresado a la Corte Suprema de Justicia acción de amparo de garantías constitucionales propuesta por el licenciado Héctor Morán Rodríguez, actuando en representación de Juan Sánchez, contra Elvis Aparicio, Jefe de Personal, en la provincia de Veraguas, del Ministerio de Salud, a quien responsabiliza de haber ordenado la retención de los cheques correspondientes a dos quincenas de trabajo de su mandante.

A la demanda no fue agregada la prueba de la existencia de la orden atacada, y en el segundo de sus hechos se indica "Que a mi mandante en ningún momento se le puso en conocimiento de la situación, percatándose de ello cuando se apersonó a cobrar su salario, y sin brindarle ninguna explicación al respecto, menos haberse adoptado decisión".

La funcionaria demandada niega haber impartido la orden que se acusa, y con su informe de conducta aportó prueba documental en el sentido de que fue un superior inmediato de Juan Sánchez quien la impartió, debido a falta disciplinaria y a abandono del cargo en que incurriera el demandante.

Por la concurrencia de los dos vicios formales primeramente indicados, es decir, la falta de acreditación sobre la existencia de la orden y la errada identidad del funcionario demandado, el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial estimó "que el demandante no ha demostrado por escrito que la funcionaria acusada fue la que dictó la orden de hacer atacada, o en su defecto, promulgada verbalmente, es decir, que esta funcionaria se ha negado u opuesto a entregar los cheques, amén de que si dicha orden fue emitida verbalmente, se debió adjuntar las dos declaraciones extrajudiciales que verifiquen que el público demandado promulgó esa orden que se pretende revocar a través de esta acción de amparo de garantías constitucionales" (fs. 27-28). En la parte resolutiva del fallo, el tribunal a-quo "NO ACOGE" la demanda, decisión que fue apelada por el apoderado judicial del demandante.

A juicio de la Corte Suprema, la actuación da cuenta de un asunto de naturaleza administrativa, mal traido a conocimiento de la jurisdicción constitucional. Por otra parte, en esta instancia se aprecia que el recurrente no ha comparecido para sustentar la disconformidad que anuncia con el fallo, el que en sus motivaciones parece bien fundado. Esta circunstancia le impide al tribunal de apelaciones acceder a una adecuada revisión de la causa, ponderando las razones del recurrente.

Por las consideraciones anteriores, el PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

REVOCA LA SENTENCIA APELADA, dictada el 13 de marzo de 1996 por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, y en su lugar DECLARA NO VIABLE la acción de amparo de garantías constitucionales propuesta por Juan Sánchez contra Elvis Aparicio, Jefe de Personal, en la Provincia de Veraguas, del Ministerio de Salud.

Notifíquese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ. M. FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR LA LICENCIADA OMAYRA GARCÍA DE BERBEY EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN CONTRA LA ORDEN DE NO HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN JUDICIAL DE 23 DE ENERO DE 1996 DICTADA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL BAJO LA PONENCIA DEL MAGDO. WILFREDO SÁENZ F. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, TREINTA (30) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La Licenciada **OMAYRA GARCÍA DE BERBEY**, actuando en su propio nombre y representación, ha presentado acción de amparo de garantías constitucionales "contra la **ORDEN DE NO HACER**, contenida en la Resolución Judicial de 23 de enero de 1996, dictada por el SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA". Dicha resolución denegó el incidente de recusación interpuesto por la recurrente en amparo contra la Magistrada Sandra Huertas de Icaza, con el objeto de que se le separara del conocimiento de la acusación particular propuesta por la Licenciada GARCÍA DE BERBEY contra la Licenciada AIDELENA PEREIRA.

La recurrente sostiene que la resolución atacada es violatoria del artículo 32 de la Constitución Nacional, razón por la cual solicita al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, lo siguiente:

> "1. **ACOGER** la Demanda de Amparo de Garantías Constitucionales y Ordenar que se le imprima el trámite previsto en el título III del libro IV del Código Judicial.
>
> 2. **SUSPENDER** los efectos y ejecución del acto reclamado, para evitar que La Amparista sufra perjuicios graves, evidentes y de difícil reparación y, en consecuencia, se tomen las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, procediendo de manera directa y previniendo a la Mag. SANDRA HUERTAS DE ICAZA de abstenerse de seguir conociendo el proceso que provocó la Recusación en su contra.
>
> 3. **CONCEDER** la presente acción de Amparo de Garantías Constitucionales para que, en consecuencia, se **REVOQUE EL ACTO IMPUGNADO**, conformado por la Resolución Judicial de 23 de enero de 1996, dictada por el SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, por constituir un acto arbitrario, violatorio de los derechos y garantías fundamentales consagrados en la Constitución Nacional, dictado en perjuicio de OMAYRA GARCÍA DE BERBEY, que la afecta en su esfera jurídica de modo directo y, en definitiva, se ordene lo siguiente:
>
> 1. Se pida a la Magistrada SANDRA HUERTAS DE ICAZA se inhiba de seguir conociendo el proceso penal contra AIDELENA PEREIRA, hasta

que se decida el Amparo interpuesto contra la Resolución Judicial de 23 de enero de 1996 y, por lo tanto, se le ORDENE suspender la calificación del mérito legal de las sumarias y cualesquiera otras peticiones cursadas en dicho proceso.

2. Se decrete la separación de la Magistrada SANDRA HUERTAS DE ICAZA, Magistrada del SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA del conocimiento de la causa penal seguida a AIDELENA PEREIRA, por la comisión de DELITOS CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL en perjuicio de OMAYRA GARCÍA DE BERBEY y, asimismo, del conocimiento de todos los procesos en que intervenga OMAYRA GARCÍA DE BERBEY, ya sea como parte o en cualquier carácter, condición y circunstancias." (Fojas 30 y 31).

El texto transcrito y el resto del recurso pone de manifiesto que la recurrente pretende que la resolución impugnada sea revocada y, en su lugar, se dicte una nueva, como si se tratara de una instancia ordinaria. El amparo es un recurso extraordinario que tiene por objeto reparar violaciones directas a las garantías y derechos fundamentales, consagrados en nuestra Constitución. Cuando se dirige contra decisiones jurisdiccionales como la que nos ocupa, no corresponde a la Corte examinar y valorar los elementos probatorios aportados al proceso, como pretende la recurrente en amparo. Consecuentemente, la presente demanda resulta manifiestamente improcedente y no debe ser admitida, al tenor de lo dispuesto por el artículo 2611 del Código Judicial.

En mérito de lo expuesto, EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el amparo de garantías constitucionales presentado por la Licenciada OMAYRA GARCÍA DE BERBEY, contra la resolución proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia el 23 de enero de 1996.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ANTONY LEGISTER, HUMBERTO ZERDA, JOSÉ GARCÍA, RAÚL PLICET Y REGINALDO ECHEVERRÍA CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, OCHO (8) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El día 27 de marzo de 1996, fue presentada acción de habeas corpus por el licenciado Luis A. Carrasco Moreno, en representación de los señores **ANTONY LEGISTER, HUMBERTO ZERDA, JOSÉ GARCÍA, RAÚL PLICET y REYNALDO ECHEVERRÍA** y contra la Dirección de Investigación e Información Policial (DIIP).

Dos días después, el 29 de marzo de 1996, el accionante presentó ante la Secretaría General de la Corte, un escrito mediante el cual desiste de la acción de Habeas Corpus presentada, porque sus patrocinados se encuentran en libertad. Como nada se opone a la aceptación del desistimiento, cabe ordenar el cese de este proceso.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ACEPTA el desistimiento presentado por el licenciado Luis A. Carrasco Moreno y decreta el CESE del presente proceso.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MIGUEL ÁNGEL MURGAS CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE CORRECCIÓN. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, ONCE (11) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Miguel Ángel Murgas interpuso ante la Corte Suprema de Justicia acción de habeas corpus a su favor y contra el Director Nacional de Corrección del Ministerio de Gobierno y Justicia.

El demandante sostiene que tiene derecho a la libertad condicional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 85 del Código Penal, por haber cumplido cuarenta y tres meses de la condena de sesenta y seis meses de prisión que le fuera inpuesta.

La autoridad acusada rindió el informe de conducta que ordena la ley, mediante nota de 19 de marzo de 1996, en el que reconoce que el detenido se encuentra recluido a órdenes de su despacho en la Cárcel Pública de David, Chiriquí, cumpliendo condena de 66 meses de prisión impuesta por el Juzgado Cuarto de Circuito de Chiriquí, mediante sentencia N° 4 de 26 de enero de 1993. Añade que Murgas inició el cumplimiento de la pena el 16 de julio de 1992 y cumpliría el total de la condena el 16 de enero de 1998.

Lo que se pretende obtener, mediante esta demanda, la libertad de un condenado a pena de prisión, alegando el derecho a que se le reconozca, ipso jure, el beneficio de la libertad condicional, por haber cumplido las dos terceras partes de la pena.

A los efectos de resolver esta demanda, es necesario hacer una interpretación sistemática de los artículos 85 del Código Penal y 179, numeral 12, de la Carta Fundamental, que regulan la materia, cuya transcripción se hace a continuación.

El artículo 85 del Código Penal, invocado, es del siguiente tenor:

> "ARTÍCULO 85. El sancionado con pena de prisión que haya cumplido dos tercios de su condena con índices de readaptación, buena conducta y cumplimiento de los reglamentos carcelarios, podrá obtener la libertad condicional" (Subraya la Corte).

El artículo 179 de la Constitución Nacional señala:

> "ARTÍCULO 179. Son atribuciones que ejerce el Presidente de la República con la participación del Ministro respectivo:
> ...
> 12. Decretar indultos por delitos políticos, rebajar penas y **conceder libertad condicional a los reos de los delitos comunes**" (Resalta la Corte).

La norma legal en cita consagra el derecho del condenado a obtener la libertad condicional, sujeto a la satisfacción de dos requisitos, a saber: a) el cumplimiento de dos tercios de la pena, y b) la comprobación hecha, por el Departamento de Corrección, en el sentido de que la reclusión se cumplió con un índice de readaptación adecuado, buena conducta y apego a los reglamentos carcelarios.

La disposición constitucional transcrita consagra las atribuciones que ejerce el Presidente de la República con la participación del Ministro respectivo, entre las cuales figura la de "conceder libertad condicional a los reos de los delitos comunes" (numeral 12). Esta norma no contempla condicionamiento alguno al ejercicio de la atribución presidencial, por lo que el reconocimiento del beneficio depende en forma exclusiva del cumplimiento de los requisitos previstos en la norma legal.

Con anterioridad se pronunció la Corte ante situación similar, declarando no viable la iniciativa procesal constitucional del habeas corpus, mediante sentencia de 12 de diciembre de 1995, con razonamiento también válido en esta oportunidad. En aquella ocasión sostuvo el Pleno que:

> "Es imperativo entonces acreditar que se encuentran satisfechos los **dos** requisitos exigidos por ley, lo que indica que no basta el mero transcurso del plazo de las dos terceras partes de la pena impuesta para que opere **ipso jure**, como es la pretensión del demandante, la consecuencia de la libertad condicional, sin la verificación que corresponde a los otros factores condicionantes del beneficio penal. Con el objeto de hacer eficaz esta modalidad concreta de la tutela legal, instituida en respeto del bien jurídico de la libertad individual, se plantea la necesidad de que por la vía administrativa se implementen con suficiente antelación los medios para que, al vencimiento del plazo que señala la ley, se pueda resolver de inmediato sobre el reconocimiento de la medida liberatoria."

Por lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE la acción de habeas corpus interpuesta por Miguel Ángel Murgas, en su propio nombre.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA A FAVOR DE CANDELARIO CARPINTERO PINILLA, CONTRA LA FISCAL SÉPTIMA DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DOCE (12) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Vía apelación, procedente del Segundo Tribunal Superior de Justicia, se recibe el cuadernillo de acción de habeas corpus a favor de **CANDELARIO CARPINTERO PINILLA** contra la **FISCAL SÉPTIMA DE CIRCUITO DE PANAMÁ**, licenciada Yolanda Austin de Saavedra, que contiene la resolución de 14 de febrero de 1996, en la cual se declara legal la detención que sufre Carpintero Pinilla dentro del sumario que se le sigue por un delito contra el Pudor y la Libertad Sexual.

RELACIÓN DE LOS HECHOS

El día 20 de noviembre de 1995 la señora Inés Machado de Jiménez interpuso querella contra Candelario Carpintero Pinilla, sobrino de su esposo, quien vivió en casa de ellos por un período de 4 años.

Explica que su hija menor de 13 años de edad, Yamileth Jiménez Machado le dijo que la noche anterior, Carpintero Pinilla la agarró a la fuerza por un camino que está cerca de la casa y le tocó sus partes íntimas, situación que había repetido en otras ocasiones en la casa, incluso cuando estaba en la cama. Además, que su hija no le había comentado sobre el particular por temor.

Añade que su otra hija Marylin Jiménez Machado, de 9 años de edad, le dijo que también fue objeto de esas actuaciones por parte de Carpintero Pinilla (fs. 1-4).

Al rendir declaración, Yamileth Jiménez Machado reitera lo manifestado en la querella presentada por su madre (fs. 5-7). Por su parte, la menor Marilin Jiménez Machado, explica que una ocasión cuando se iba a bañar, Carpintero Pinilla la abrazó por la espalda y le tocó sus parte íntimas y al decirle ella que se lo iba a decir a su mamá, le manifestaba que no le iba a traer más golosinas y hamburguesas. Que en varias ocasiones intentó abrirle la puerta del baño y ella ponía un hierro para impedirlo (fs. 8-9).

Las hermanitas Jiménez Machado fueron sometidas a examen médico legal, practicado por el Dr. Jaime E. Arias Moreno, Médico Forense del Instituto de Medicina Legal, quien determinó que ninguna de las dos está desflorada ni existen señales de violencia con fines sexuales (fs. 19 y 20).

En declaración indagatoria, Candelario Carpintero admite que agarró a la niña Yamileth, pero lamenta haberlo hecho y presenta como excusa que estaba un poco ebrio. Niega las manifestaciones en su contra hechas por la niña Marilin. Agrega, **"yo vivía allí, pero nunca hice eso, pero yo estaba pensando que ellos creían eso, por lo que decidí salir de allí y me busqué un cuarto"**.

CONSIDERACIONES DEL PLENO

Observa el Pleno, que el tribunal a-quo señaló que la pena mínima del delito de actos libidinosos, no excede los dos años, pero que la sanción se aumenta si el hecho lo comete un pariente y que por ello la detención de Carpintero Pinilla tiene fundamento legal.

Se difiere de ese criterio, dado que el artículo 220 del Código Penal, referente al delito de actos libidinosos, fue modificado por el artículo 10 de la Ley N° 27 de 1995 que estableció la pena de prisión de 3 a 6 años. Y bajo ese fundamento fue que se ordenó la detención (fs. 30-31).

Luego de examinar las declaraciones allegadas a la investigación, los exámenes médico legales, así como la declaración indagatoria de Candelario Carpintero Pinilla, quien admite que tocó a la niña Yamileth, se advierte que su conducta se ubica -de manera provisoria- en el delito de actos libidinosos, por lo que la detención provisional que sufre Carpintero Pinilla no transgrede los presupuestos legales referentes a la detención preventiva, contemplados en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia apelada que declara legal la detención preventiva de CANDELARIO CARPINTERO PINILLA.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JUAN AMADOR CEBALLOS CONTRA EL FISCAL NOVENO DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DOCE (12) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación conoce el Pleno de la Corte Suprema de la Acción de Habeas Corpus promovida por el licenciado Joaquín Roger Pérez a favor de **JUAN AMADOR CEBALLOS** y en contra el licenciado Javier Chérigo Hurtado, Fiscal Noveno de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá. La finalidad del presente recurso es que se declare la ilegalidad de la detención decretada, la cual se origina en la supuesta comisión de un delito contra el patrimonio (hurto de auto).

Argumentos del recurrente

Sobre el particular se observa que el actor anunció la alzada al notificarse de la resolución emitida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia que declaró legal la detención en cuestión, sin proceder a sustentar el recurso in examine. Sin embargo, dado el carácter de Sentencia de la resolución endilgada, conforme lo estatuye el artículo 1122 del Código Judicial, es factible entrar a conocer y resolver el fondo de la controversia instaurada.

En este sentido se aprecia que el apelante manifestó en su escrito de Habeas Corpus, básicamente que la medida cautelar adoptada se efectuó sin que mediara mandamiento escrito emanado por autoridad competente, conforme a las formalidades que establece la ley, y sin que exista denuncia o querella que indique la existencia de un delito o lesión patrimonial en contra de un particular.

Igualmente afirma el actor que no se ha podido establecer la vinculación del afectado con las piezas de carro encontrados en el sector de Chilibre cuya procedencia se desconoce; aunado a que señala no mantener relaciones cordiales con las personas que atestiguan que el sindicado es una de la personas que solicitó que se le guardaran algunas piezas de auto.

La Sentencia recurrida

EL Tribunal primario consideró en la Sentencia de 7 de marzo de 1996, que el imputado se encuentra vinculado con los hechos que provocaron la presente investigación oficiosa, esencialmente por los señalamientos que realizan en su contra el señor Everardo Solís y los hermanos Casís Watson. En esta línea de pensamientos se destaca que el delito que se endilga es penalizado con una sanción mínima de 2 años, motivo por el cual se justifica la medida adoptada de acuerdo a lo estatuido en el artículo 2148 del Código Judicial.

Informe de Habeas Corpus rendido por el Fiscal Noveno de Circuito, del Primer Circuito Judicial.

El prenombrado funcionario del Ministerio Público puntualizó en el referido escrito los planteamientos que a renglón seguido se reproducen en su parte medular, para mayor ilustración:

"2. Las razones de hecho en que se basa la detención del señor **JUAN**

AMADOR CEBALLOS consisten en que tanto la Policía Nacional como la Policía Técnica Judicial iniciaron de oficio la investigación sobre la posible comisión del hurto de vehículo resultando de los informes tal como consta en las declaraciones rendidas por los Agentes captores (foja 1-13), que **JUAN AMADOR CEBALLOS**; según lo anterior, se le vincula con el hecho punible investigado además consta en la declaración indagatoria rendida por **CEBALLOS** que este vendió un vehículo que según la Policía fue encontrado con el número del motor limado en la residencia de **CEBALLOS** (fs. 76-77), más adelante la declaración indagatoria rendida por el señor **EVERARDO RICARDO CASÍS WATSON** consultable a fojas 78-81 señala a **JUAN AMADOR CEBALLOS** como una de las personas que llevó los vehículos desmantelados o desarmados al terreno de su residencia tal como lo ratifica en declaración jurada visible a fojas 82 del expediente.

Hay fotografías, consultables a fojas 33-39, diligencias de allanamiento e inspecciones oculares en las cuales son visibles la existencia de las cosas u objetos motivos de esta investigación, además del señalamiento de **CASÍS WATSON** contra **CEBALLOS**, aunado al informe de los agentes captores por lo cual las razones de derecho que han motivado el mantener la detención de **JUAN AMADOR CEBALLOS** se sustenta en que el hecho imputado es el señalado en el Código Penal de la República, Libro II, Título IV, Capítulo I, adicionado por la Ley 53 del 12 de diciembre de 1995, en concordancia con lo establecido en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial".

Decisión de esta Superioridad

La Corte observa dos elementos básicos que vinculan al sindicado con el delito de hurto de automóviles que se investiga de oficio, cuales son la referencia directa que efectúa Everardo Casís contra el Sindicato, en el sentido de que el señor Ceballos era uno de las personas que dejaban los autos, chatarras y diversas partes de automóviles en los predios de su casa (cfr. imputado se encontró un automóvil Nissan Sunny color gris, el cual tenía cambiado el motor y limado el número del mismo. A lo anterior se agrega el hecho de que, sin dedicarse los dueños de la finca en donde se encontró la evidencia, al negocio de la venta, mecánica, chapistería o similares de autos, se encontró una gran variedad de materiales y accesorios provenientes de autos desmantelados de diferentes marcas, con números de chasis o motor alterados, así como de autos cuyos titulares se desconocen, herramientas (foja 53-54 y 61-63) y una placa de auto N° 325837 que mantiene denuncia N° 1A-405-95 en Bethania, (foja 16) supuestamente suministrados por el imputado.

Ahora bien, debe indicarse que deberá ser la autoridad competente la que decidirá la responsabilidad que en el evento de exitir ésta se le atribuya a cada uno de los involucrados en esta investigación. Cabe destacar que al Tribunal de Habeas Corpus solamente le corresponde determinar si la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva se efectuó en estricta observación de los preceptos legales y constitucionales que la legitiman formalmente.

En este sentido se pone de relieve que el delito que se imputa tiene una pena mínima de 3 años de prisión, tal como lo establece la reforma del Código Penal efectuada mediante Ley 53 de 12 de diciembre de 1995, que a su vez adiciona el artículo 184-A, que establece que el que se apodere de un automóvil será sancionado con pena de 3 a 6 años de prisión; aunado a que si se comprueba que el hurto se efectuó con la intervención de dos o más personas, la sanción antes señalada oscilará entre 5 a 10 años de prisión.

En este orden de ideas es de lugar indicar que la acción penal es pública y la ejerce el estado por medio del Ministerio Público, salvo los casos expresamente señalados por el Código Judicial, dentro de los cuales como excepción no se encuentra el hurto. Por consiguiente, el hurto es uno de los delitos que pueden investigarse de oficio por parte de autoridad competente, en este caso, por el Fiscal Auxiliar, quien adelantará, de oficio o por denuncia, las investigaciones de los delitos que lleguen a su conocimiento.

Así las cosas se desprende que existen indicios que vinculan al detenido con el hurto y desmantelamiento, cambio de motor y número de motor de automóviles cuya procedencia se desconoce e investiga. Siendo ello así, esta Superioridad concluye que la medida cautelar acusada se apega a lo dispuesto en los artículo 2148 y 2159 del Código Judicial, y a lo preceptuado en el artículo 21 de la Constitución Nacional, dado que la detención fue ordenada por escrito por parte de autoridad competente.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la Sentencia de 7 de marzo de 1996 emitida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

Notifíquese.

(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.)FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.)JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.)RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE KAM CHIN LAM Y ZHOU ZI QUING CONTRA LA JUEZ DÉCIMO TERCERA DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL, RAMO PENAL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DOCE (12) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de **apelación** ha ingresado al Pleno de la Corte Suprema de Justicia la acción de habeas corpus interpuesta a favor de **KAM CHIN LAM** y **ZHOU ZI QUING** contra la Juez Décimo Tercera de Circuito del Primer Circuito Judicial, Ramo Penal.

La resolución apelada fue dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia el día 5 de marzo de 1996, según consta de fojas 13 a 15, resolviendo declarar legal la detención preventiva de los proponentes de esta acción.

En el análisis previo, el fallo impugnado expresó que el demandante fundamentó el habeas corpus en el señalamiento de que el hecho punible no se llegó a consumar, por lo que sería un delito imperfecto en grado de tentativa, cuya penalidad mínima probable sería un tercio de la que establece el artículo 187 del Código Penal para el delito de extorsión, que equivaldría a doce (12) meses de prisión, según lo preceptuado por los artículos 44 y 60 del citado Código.

Sin embargo, informó la autoridad demandada que la detención preventiva fue ordenada por la Fiscalía Auxiliar de la República en resolución de 22 de agosto de 1995, la cual consta de fojas 17 a 19 del respectivo expediente, y, que además se realizó la audiencia preliminar en la cual los imputados fueron llamados a comparecer en juicio penal por el delito de extorsión, que conlleva pena superior a los dos años de prisión.

En virtud de lo expuesto el fallo apelado expresó:

"...
Luego del atento análisis de las respectivas constancias sumariales, a pesar de los interesantes argumentos esbozados por el demandante, considera la Sala que no asiste razón en esta ocasión, toda vez que claramente está acreditado en el expediente que la detención preventiva de ambos asiáticos fue dispuesta por autoridad competente para ello, mediante resolución escrita y motivada, fundamentada en

> razones de hecho (ambos fueron detenidos en plena acción punitiva) y de Derecho, toda vez que el delito imputado conlleva aparejada una pena superior a los dos (2) años de prisión.
>
> No obstante lo razonado de la tesis de la tentativa, ello no conlleva que la detención preventiva de los beneficiarios de esta acción devenga en ilegal, ya que, como se expuso, ambos sujetos fueron detenidos o sorprendidos en el momento mismo de estar cometiendo el hecho punible, esto es, en flagrancia.
>
> Por lo demás, obsérvese que los inculpados objeto de esta acción constitucional, han sido llamados a responder en juicio penal por esta causa, manteniéndose su detención preventiva, medida cautelar que encuadra dentro de los límites impuestos por los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial, por lo que procede proclamar la legalidad de tal medida ...".

A juicio de la Corte el pronunciamiento emitido por el Tribunal de habeas corpus es acertado y conforme a la ley, debido a que es evidente que en este caso se cumple con los presupuestos establecidos por los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial relativos a la procedencia de la detención preventiva. Es decir, la detención fue decretada por autoridad competente, mediante diligencia motivada (fs. 17 antecedentes) en la cual se concluye que se trata del delito de extorsión, en atención a "las pruebas procesales que conforman el cuaderno penal", contemplado en el Título IV, Capítulo III, Libro II del Código Penal que es sancionado con prisión de tres a cinco años.

Como se ha indicado, los detenidos fueron sorprendidos al momento de estar cometiendo el delito, situación que el propio accionante reconoce al señalar que no se llegó a consumar y que por ello debe ser calificado como tentativa, a fin que se considere que le corresponde una pena menor a dos años de prisión que permita la aplicación de otra medida cautelar.

Resulta claro que lo pretendido por el demandante mediante este habeas corpus es que se califique el delito, lo que implica entrar en la actividad de valoración probatoria, lo que obviamente es un problema que no se puede dilucidar mediante esta vía extraordinaria de carácter constitucional, sino por la vía ordinaria.

Aunado a lo anterior en el presente caso, como se tiene dicho, se celebró la Audiencia Preliminar como se observa de fojas 209 a 230 de los antecedentes adjuntos, en la cual el juzgador decidió abrir causa criminal contra los sindicados y mantener su detención.

La acción de habeas corpus está reservada para el examen de la legalidad de la privación de libertad, por lo que no es viable acudir a este remedio con la finalidad de que se juzgue y determine la pena aplicable al delito cometido en atención a diferentes circunstancias que rodearon la conducta que se enjuicia incidiendo en el desarrollo de los hechos. Ello no compete al sentenciador al actuar en esta materia constitucional, sino al juzgador de la esfera penal correspondiente.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la resolución de 5 de marzo de 1996 dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia dentro de la esta acción de Habeas Corpus.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LUIS ANTONIO ARROCHA JOHNSON Y CONTRA EL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DOCE (12) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Reyes Martínez Navarro interpuso ante la Corte Suprema de Justicia acción de habeas corpus a favor de LUIS ANTONIO ARROCHA JOHNSON, quien se encuentra detenido en las instalaciones de la Cárcel Modelo, a órdenes del Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas.

Por acogida la iniciativa procesal constitucional, se libró el mandamiento de habeas corpus contra la autoridad demandada, quien contestó mediante oficio N° 2615 de 18 de marzo del año que decurre. En su informe el funcionario de instrucción acepta haber ordenado la detención de Arrocha Johnson, mediante resolución de 22 de enero de 1996, y detalla las circunstancias de hecho y de derecho que motivaron esa decisión.

Procede la Corte a determinar si la medida cautelar de carácter personal atacada cumple con los requisitos que al efecto establecen tanto la Constitución como el Código Judicial.

De conformidad con la resolución que ordena la detención preventiva de Arrocha, la medida se fundamenta en la presunta comisión de delito contra la salud pública, concretamente tráfico de drogas, que lleva aparejada pena mínima superior a los dos años de prisión.

Como elemento probatorio allegado al expediente para la comprobación del hecho punible se tiene que al imputado le fue incautada una caja de zapatillas contentiva de dinero fraccionado, de la siguiente manera: trescientos balboas (B/.300.00) en billetes de un balboa; un rollo de doce balboas, con monedas de cincuenta centavos; seis rollos de diez balboas, cada uno con monedas de veinticinco centavos; tres rollos de cinco balboas, cada uno con monedas de diez centavos; dos rollos de dos balboas, cada uno con monedas de cinco centavos. Además, se le encontró en el bolsillo trasero izquierdo del pantalón la suma de setenta y siete balboas (setenta y cinco en billetes de un balboa y un billete de dos balboas), y en su mano derecha una bolsita plástica de color blanco que contenía seis balboas con diez centavos.

Según el informe de conducta, la detención de Arrocha tuvo lugar el 18 de enero, "cuando unidades de la Policía Nacional, de recorrido por el sector de BARRAZA, visualizaron a dos (2) damas y un (1) caballero en actitud sospechosa, por lo que proceden a darle la voz de alto, para someterlos a un registro. Los mismos respondían a los nombre de LUIS ARROCHA, ENEIDA ARCHIBOLD Y TANESHA SÁNCHEZ".

A Eneida Archibold le fue incauta "una bolsa plástica dentro de la cual se encontraron siete (7) bolsas plásticas de regular tamaño, contentivas de polvo blanco, el cual fue presumido como droga COCAÍNA y veintinueve balboas (B/.29.00) fraccionados de manera análoga a la anteriormente expuesta". Sometida la referida sustancia a la prueba técnica de rigor, resultó positiva para la determinación de **COCAÍNA** en la cantidad de **308.38 gramos**, según el informe del Laboratorio Técnico Especializado en Drogas de la Policía Técnica Judicial (f. 75, sumarias).

Respecto a los elementos de prueba que figuran en el expediente contra el imputado, aparece el informe de novedad suscrito y ratificado por los agentes captores (fs. 3 y 4 del expediente), en el que se da cuenta de la incautación del dinero encontrado en poder de Arrocha. En relación con la tenencia del dinero, el detenido manifiesta: "yo me dirijia (sic) a varias casas de Empeño a pagar intereses y sacar algunas prendas y el resto del dinero que se me decomiso, eran para comprar zapatos en la Zona Libre para revenderlos", e incluso mostró documentación con el objeto de acreditar el posible destino del dinero. Sin

embargo, el imputado no ha probado la procedencia lícita del dinero, carga procesal que le corresponde, según lo dispuesto en el artículo 32 de la ley N° 13 de 1994, lo que aun podría hacer durante el curso de la investigación.

También milita contra el imputado el hecho de que la droga fue encontrada en posesión de Eneida Archibold, quien se encontraba a escasos diez metros de Arrocha, por lo que pesan en su contra los indicios de presencia y oportunidad, de naturaleza a justificar la medida cautelar que se impugna.

Finalmente, se observa que la resolución de 22 de enero de 1996, mediante la cual se decreta la detención preventiva de Arrocha, cumple con lo preceptuado por los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

Por las consideraciones anteriores, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención de Luis Antonio Arrocha Johnson y, en consecuencia, ORDENA que el detenido sea puesto nuevamente a órdenes de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JULIO RUSTRIÁN CONTRA EL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DOCE (12) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado VÍCTOR RAÚL QUINTERO MORENO, ha promovido ante esta Corporación de Justicia, acción de habeas corpus a favor de JULIO RUSTRIÁN quien se encuentra recluido en la Cárcel Modelo a órdenes de la FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS.

Librado el mandamiento de habeas corpus, el día 15 de marzo de 1996 el funcionario demandado rindió el informe que se transcribe a continuación, mediante nota fechada 20 de marzo del año en curso:

"Señor Magistrado:

En virtud de que la Ley N° 13 de 27 de julio de 1994, por la cual se reforma el artículo 40 de la ley N° 23 de 30 de diciembre de 1986 y se adiciona el artículo 40-A, señalando que los sumarios relacionados con delitos de drogas son de conocimiento de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas y que la misma quedó constituida a partir del 2 de septiembre de 1994, pasamos a resolver el presente Recurso de Habeas Corpus.

La Corte Suprema de Justicia, nos ha corrido en esta oportunidad de la demanda de Habeas Corpus presentada por el Licenciado VÍCTOR RAÚL QUINTERO MORENO, en favor de JULIO RUSTRIÁN y en contra del suscrito, por lo que de inmediato, procedemos a presentar nuestro informe escrito, tal como lo establece el artículo 2582 del Código Judicial.

PRIMERO: El señor RUSTRIÁN fue detenido por orden escrita de esta

Fiscalía fechada viente (20) de febrero de mil novecientos noventa y seis (1996).

SEGUNDO: Los fundamentos de hecho que motiva la detención del sindicado, tienen inicio el dúa diecinueve (19) de febrero del presente año, cuando unidades del Departamento de Fiscalización Aduanera, de servicio en el recinto de Paso Canoas, Chiriquí, retienen a los señores OVIDIO ANSELMO ARIAS RENCINOS y JULIO ANÍBAL RUSTRIÁN MÉNDEZ, ambos de nacionalidad guatemalteca, por haber encontrado en el tanque de gasolina del vehículo en que viajaban, sesenta y un (61) paquetes dobles forrados en cinta adhesiva, contentivos de polvo blanco, el cual fue presumido como droga COCAÍNA.

TERCERO: Por tal motivo es conducido a este Despacho, para que rinda su respectiva declaración indagatoria, donde niega haber tenido conocimiento de que el tanque de gasolina del vehículo en que viajaban, estaba cargado con la sustancia antes referida. Comenta que tenía cerca de ocho (8) meses de estar trabajando para el señor ARIAS, quien lo requirió para que lo acompañara a Panamá, como en efecto lo hizo.

CUARTO: A pesar de haber solicitado, mediante oficio N° SDCH-134/96, el Laboratorio Técnico Especializado en Drogas, de la Policía Técnica Judicial, aún no nos ha remitido el respectivo análisis a practicar sobre la sustancia en comento.

El fundamento de Derecho que nos obliga a ordenar y mantener la detención preventiva del señor JULIO ANÍBAL RUSTRIÁN MÉNDEZ, se encuentra contemplado en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial. Actualmente el prenombrado se encuentra detenido y filiado a vuestras órdenes, por este Despacho haberlo ordenado así mediante oficio N° 2793 de esta misma fecha, dirigido al director de la Cárcel Modelo, tal como lo exige el artículo 2580 del Código Judicial.

Adjunto al presente informe le remitimos copias autenticadas del expediente que contiene las sumarias respectivas, constantes de cuatrocientas cincuenta (450) fojas útiles.

De los Honorables Magistrados,

(Fdo.)
LICDO. ROSENDO MIRANDA
Fiscal Especial en Delitos
Relacionados con Drogas".

El apoderado judicial del beneficiado con esta acción, mantiene el criterio en que no existe vinculación entre su representado y los hechos que se investigan, ya que su presencia fue "circunstancial".

Aclara el peticionario que su representado acompañó a su jefe, señor OVIDIO ARIAS a Panamá, por invitación que este le hiciera, y posteriormente retornar a Guatemala, país de origen de ambos. Señala también que se trata de una persona humilde, que desconocía cuál era el propósito del viaje y que dependía económicamente de su jefe.

Por otra parte, manifiesta que el señor OVIDIO ARIAS, en su declaración indagatoria, excluye al señor JULIO RUSTRIÁN de cualquier responsabilidad con el ilícito investigado.

El Pleno observa en el informe rendido por el señor FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS que los fundamentos de hecho que motivaron la detención del prenombrado RUSTRIÁN tienen inicio el 19 de febrero de 1996, cuando unidades del Departamento de Fiscalización Aduanera de Servicio en el recinto de Paso Canoas, al realizar el registro de rigor "notan cierto nerviosismo por parte

del conductor y ocupante del vehículo" y al revisarlo notaron que el tanque de gasolina había sido removido, por lo que se procedió, en presencia de los sindicados a revisarlo, encontrando dentro del mismo tanque de gasolina del vehículo en que viajaban los ciudadanos guatemaltecos, OVIDIO ANSELMO ARIAS RECINOS y JULIO ANÍBAL RUSTRIÁN MÉNDEZ, sesenta y un (61) paquetes dobles forrados con cinta adhesiva, los cuales contenían en su interior un polvo blanco, que se presume como droga COCAÍNA.

En las sumarias seguidas a los señores ARIAS y RUSTRIÁN consta que mediante diligencia de 20 de febrero de 1996 se ordenó la detención preventiva de los prenombrados señores (fs. 26-28), ordenada por el FISCAL SEGUNDO SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL DE CHIRIQUÍ. Consta a foja 77, la remisión del expediente al FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. Aprehendido el conocimiento de toda la documentación, el FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS mediante providencia de 22 de febrero de 1996, dispone mantener la detención de los señores OVIDIO ARIAS RENCINO y JULIO ANÍBAL RUSTRIÁN MÉNDEZ, en base a lo que establecen los artículos 2178 y 2159 del Código Judicial.

Consta en el informe de entrevista que se le hiciera al señor OVIDIO ANSELMO ARIAS RECINOS, con la finalidad que suministrara información referente a los sesenta y un (61) paquetes encontrados en su vehículo cuando pasaba el recinto aduanero, en Paso Canoas, y que en su interior contenía una sustancia en polvo color blanco y que al practicarle la prueba preliminar resultó positivo para la determinación de la droga conocido como COCAÍNA.

En el referido informe se expresa:
"...
Que él había salido de Guatemala hacia Panamá hace Quince (15) días atrás, y que él ya traía las instrucciones de lo que debía hacer, y que cuando él llegó a la Ciudad de Panamá, se hospedó con su compañero de viaje en el Hotel Costa del Sol en la habitación N° 303, y que desde allí él llamó al teléfono N° 264 5155 clave N° 8197, y preguntó por el señor de nombre JULIO. Manifiesta el señor OVIDIO que después que llamó al señor JULIO, este se presentó al hotel donde él estaba hospedado, y que le pidió las llaves del carro conversó con él, y que luego se llevó el carro, trayéndoselo el día Domingo Dieciocho (18) del presente Mes y Año, y manifestándole que ya todo estaba listo, que podía marcharse.

Cabe señalar que el señor OVIDIO ANSELMO ARIAS RECINOS nos manifestó que el señor JULIO es de tez blanca, contextura atlética, cabello castaño, y que utiliza un carro de color rojo, tipo Americano, que pareciera un Chevroleth Osmovil, también nos manifestó que su acompañante de nombre JULIO ANÍBAL RUSTRIÁM MÉNDEZ, no tenía conocimiento de lo que ellos venían a hacer a Panamá".

Observa el Pleno que en las posteriores investigaciones recogidas por la FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS (fs. 184 y siguientes), para determinar la autoría del hecho y sus cómplices, se hace constar que, efectivamente el señor OVIDIO ANSELMO ARIAS y JULIO RUSTRIÁN se hospedaron en el HOTEL COSTA DEL SOL, habitación 303 y que el Código 8197 donde tenía instrucción de comunicarse, una vez que llegara a Panamá, corresponde al teléfono de un beeper mobil phone N° 264-5155 que pertenece al señor WILLIAM BOARILLAS, de nacionalidad colombiana.

De la relación efectuada entre los mensajes recibidos y emitidos desde la habitación 303, sale a relucir la conexión con la habitación 202 del Hotel Costa Azul, en el cual aparece registrado el ciudadano colombiano VICTORIANO MINUTA ANGULO. Al realizarse el allanamiento respectivo a dicha habitación, se encuentra dentro de los documentos personales del prenombrado señor, el código mobil phone 8197 con la anotación de "WILLI" y el código del celular One 223-1422 con el código 7364 y el nombre de "CHUCHO". Consta en el citado informe que en esa diligencia de allanamiento (habitación 202) se retuvieron a los señores LUIS AMARILLO BARBOSA LAMOS y JUAN CARLOS PAREDES IBARRA y que el primero de ellos fue detenido en febrero de 1995 junto a los señores JOSÉ GUILLERMO LÓPEZ GÓMEZ y

EDUARDO ALBERTO TORRES JARAMILLO, por el delito de tráfico ilícito de drogas y que se había evadido de la Cárcel Modelo.

Es importante destacar que dentro de las investigaciones que se le siguen a los señores OVIDIO ANSELMO ARIAS y JULIO ANÍBAL RUSTRIANO, y en las cuales se ha podido determinar la existencia de una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes, tal como consta en la providencia visible a fojas 282 y 283, y en la cual se menciona el nombre de la señora GLADYS REYES DE RESTREPO a quien se le vincula con los sujetos sospechosos que han sido indagados y detenidos, inclusive por la relación mediante números telefónicos.

Al realizar la Fiscalía el allanamiento a la residencia G-22 ubicada en la Urbanización Linda Vista, y en la cual aparece como propietaria la referida señora manifestó que alquiló dos (2) cuartos de la residencia a los colombianos JOSÉ MALDONADO, WILLIAM BOARILLA y JUAN CARLOS SOLÍS.

Las evidencias encontradas en este allanamiento, consisten en: "actividad con la preparación de diapositivos, aditamentos o piezas de autos o equipo como lo son tanques de gasolina para ocultar droga. Dentro de las evidencias recogidas se pueden observar cierta cantidad de boyas que fueron sacadas de unos tanques de combustible de autos" (f. 283).

Cabe agregar que al verificar los mensajes registrados en el Beeper 8197 con la habitación 303 en el Hotel Costa Azul que ocupaban los señores OVIDIO ANSELMO ARIAS y JULIO ANÍBAL RUSTRIÁN, se observa a foja 367 del expediente que el 18 de febrero aparecen llamadas a las 2:22 a. m., 2:39 a. m., 20:09 p. m. y 20:30 p. m.

Son coincidentes dichos mensajes con el reporte que aparece de las llamadas que se hicieron desde la habitación 303 sobre las cuales al señor OVIDIO ANSELMO ARIAS expresa en la ampliación de su indagatoria (fs. 254-257) que ingnora quién lo hizo. Adiciona que el día 18 de febrero "yo salí con mi amigo al carnaval y llegamos bien tarde al hotel ...". El amigo a que se refiere lo es el señor JULIO RUSTRIÁN con quien compartió la habitación 303 durante su estadía en Panamá. Pese a que el prenombrado ARIAS señala que el señor RUSTRIÁN no conocía del negocio para el cual fue él contactado desde Guatemala, considera el Pleno que hasta el momento de la investigación la vinculación directa que ha tenido el señor RUSTRIÁN no lo exime de responsabilidad con el ilícito que se le sigue.

Tomando en cuenta todo lo anterior, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, estima que la detención preventiva de JULIO ANÍBAL RUSTRIÁN MÉNDEZ, ha sido decretada cumpliendo los requisitos legales establecidos en el artículo 2148 y 2159 del Código Judicial. Esto es así, porque ha sido ordenada mediante diligencia escrita, en la cual se expresa cuál es el hecho investigado y los elementos probatorios allegados al proceso para establecer que ese hecho configura un delito de tráfico ilícito de drogas y la vinculación del detenido con el delito investigado, tipificándolo en los artículos 2 y 3 de la Ley 13 de 1994 sancionados con pena mínima que excede los dos (2) años de prisión.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva del señor JULIO ANÍBAL RUSTRIÁN MÉNDEZ, decretada por el FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS, por delito contra la salud pública y ORDENA que sea puesto a órdenes del FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE PABLO HERNANDO GÓMEZ Y OSCAR GUZMÁN CONTRA EL JUEZ SEGUNDO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor OSCAR ALBERTO GUZMÁN VELASCO ha interpuesto recurso de apelación contra la sentencia expedida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial el 15 de febrero de 1996, mediante la cual se declaran legales las detenciones preventivas de los señores PABLO HERNANDO GÓMEZ BARRIOS y OSCAR ALBERTO GUZMÁN VELASCO.

Se trata de un proceso iniciado a raíz de la detención de la joven NEFERTITI CANO en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, al detectársele drogas en el interior de un tanque de buceo que portaba la joven antes mencionada. Una vez comprobado que se trataba de la droga denominada cocaína, en la cantidad de 6,120.0 gramos, la joven Cano fue indagada sobre los hechos, señalando a los señores PABLO HERNANDO GÓMEZ BERRÍOS y OSCAR ALBERTO GUZMÁN como las personas que le entregaron el tanque de oxígeno. Dichos cargos fueron ratificados por la joven Cano, posteriormente, bajo la gravedad de juramento. De allí, pues, la detención de los señores PABLO HERNANDO GÓMEZ BARRIOS y OSCAR ALBERTO GUZMÁN VELASCO. Posteriormente, mediante Resolución SC-13 de 7 de febrero de 1996, expedida por el Juzgado Segundo de Circuito de lo Penal del Primer Distrito Judicial de Panamá, se condena a ocho años de prisión a la joven NEFERTITI CANO y se absuelve a PABLO HERNANDO GÓMEZ BARRIOS y a OSCAR ALBERTO GUZMÁN VELASCO. Igualmente, se ordena la inmediata libertad de estos dos últimos. La sentencia antes mencionada es apelada por la Fiscalía.

El Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial decretó legal la detención preventiva de los señores PABLO HERNANDO GÓMEZ BARRIOS y OSCAR ALBERTO GUZMÁN VELASCO por considerar, en relación al texto del artículo 2417 del Código Judicial, que "la oración final de la excerta legal citada se refiere a la sentencia absolutoria impugnada, pero no dispone la inmediata libertad como ocurre con el sobreseimiento, por el contrario remite al cumplimiento de las reglas contempladas para la sentencia condenatoria, eso indica que al imputado se le debe dar la libertad si el tiempo que lleva guardando detención preventiva es equivalente al período de la sanción que le correspondería por el delito, en este caso el legislador deja la situación a la expectativa de una eventual revocatoria de la decisión y por ello condiciona la libertad al posible cumplimiento de la pena aplicable." Agrega el Segundo Tribunal que "tal interpretación no es violatoria del principio de favorabilidad o restrictivo de interpretación de la norma procesal, porque la sintaxis de la oración final es taxativa en cuanto remite a la aplicación de lo observado en la oración anterior, la cual condiciona la libertad al cumplimiento del tiempo que correspondía como sanción, porque no tendría objeto que el legislador remitiese a esos requisitos si su intención hubiese sido la de considerar procedente la inmediata libertad, bastaría con que se hubiese dispuesto en el texto del artículo, su libertad inmediata." En este sentido, estima el Segundo Tribunal, "debe declararse legal la detención preventiva de los señores PABLO HERNANDO GÓMEZ BARRIOS y OSCAR ALBERTO GUZMÁN VELASCO, porque de acuerdo con el proceso seguido en su contra, iniciado el 5 de abril de 1995, todavía no han guardado un período de detención preventiva similar a la sanción que les correspondería en el evento de ser declarados culpables".

Los apelantes consideran que la detención es ilegal basados fundamentalmente en que, a su juicio, la interpretación del artículo 2417 por parte del Segundo Tribunal Superior es errada por cuanto dicha interpretación no reconoce el principio favor libertatis, pues bajo dicha premisa, se contemplan dos hipótesis respecto de las cuales, en congruencia con el principio citado, se genera una misma disposición o efecto que se traduce, en su opinión, en la inmediata libertad del procesado. En este sentido señala que para ambas hipótesis, ya sea que se trate de sentencia absolutoria y de sentencia condenatoria se produce el mismo efecto, es decir, la libertad del imputado sin necesidad de fianza mientras se surta la consulta o la apelación, con la única

diferencia que si se trata de sentencia condenatoria, el imputado debe haber guardado detención preventiva por un tiempo equivalente al de la pena de prisión que se le haya impuesto en el fallo.

La Corte observa, de fojas 28 a 38 del expediente contentivo de la demanda de habeas corpus, la Resolución SC-13 de 7 de febrero de 1996 expedida por el Juzgado Segundo de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial en la cual, efectivamente, se absuelve al señor PABLO HERNANDO GÓMEZ BARRIOS y al señor OSCAR ALBERTO GUZMÁN VELASCO y se ordena su inmediata libertad. Igualmente consta, de fojas 40 a 46 del mismo expediente la resolución fechada el 15 de febrero de 1996, objeto de este recurso de apelación, mediante la cual el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial declara legal la detención de los señores arriba mencionados.

Resulta claro, pues, que la situación que se discute consiste en si tiene derecho a la libertad inmediata sin necesidad de fianza, mientras se surte la consulta o apelación, el imputado que ha sido beneficiado con una sentencia absolutoria. En este sentido, el artículo cuya correcta interpretación se pone en duda, es del siguiente tenor literal:

> ARTÍCULO 2417. Si al dictar sentencia condenatoria resulta que ya el imputado ha cumplido en prisión el tiempo que le hubiese correspondido, el Tribunal ordenará su libertad, sin necesidad de fianza, mientras se surte la consulta o apelación. Si la sentencia es absolutoria, se aplicará lo dispuesto en este artículo.

En el presente caso, la Corte considera que hay elementos objetivos y subjetivos suficientes para mantener la detención preventiva de los imputados, máxime cuando la sentencia absolutoria a la cual hace alusión la representante judicial de los imputados no está en firme por encontrarse pendiente de apelación interpuesta por la fiscalía de drogas.

Aunado a lo anterior, dado que el delito de tráfico ilícito de drogas tiene fijada pena de prisión superior a dos años según la Ley 23 de 1986, y en el caso específico del tráfico internacional de drogas la sanción consiste en pena de prisión de 8 a 15 años, el Pleno considera que en la detención de los señores PABLO HERNANDO GÓMEZ BARRIOS y OSCAR ALBERTO GUZMÁN VELASCO no se ha infringido el debido proceso establecido en la Constitución Nacional y en las leyes de la República ni tampoco las normas jurídicas que regulan la detención preventiva, y, por lo tanto, el criterio vertido por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial es correcto y lo procedente es confirmar la resolución de 15 de febrero del año en curso en la cual se declara legal la detención de los señores GÓMEZ BARRIOS Y GUZMÁN VELASCO.

En consecuencia, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia expedida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial fechada el 15 de febrero de 1994 que declara LEGAL la detención de los señores PABLO HERNANDO GÓMEZ BARRIOS y OSCAR ALBERTO GUZMÁN VELASCO, y por lo tanto, dispone que los detenidos sean puestos nuevamente a órdenes del Juez Segundo de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA

CON SALVAMENTO DE VOTO

(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.

Secretario General

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO JOSÉ MANUEL FAÚNDES

Como aduje en la observación en la etapa de lectura, no creo que una orden

de libertad emanada del tribunal en donde el suplente o el adscrito a dicho tribunal la impartió, la misma sea revocada por el titular, lo que es contrario a la real administración de justicia y que puede provocar manifestaciones de las partes interesadas, fundadas en criterios incuestionables.

No veo normas en el Código Judicial que faculten a los que están en disposición de impartir justicia, sus pronunciamientos sean desvirtuados por el que sabe que quien lo reemplaza está en el deber de cumplir con las funciones asignadas en el Despacho en donde se desenvuelve.

Si no estoy equivocado el presente es el segundo caso que ocurre y bueno es que enmendemos estas actuaciones que provocan críticas y comentarios.

Fecha Up Supra.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ABDIEL HERNÁNDEZ SALAZAR CONTRA EL FISCAL PRIMERO SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Procedente del Segundo Tribunal Superior de Justicia ha ingresado al Pleno de la Corte Suprema de Justicia la acción de **Habeas Corpus** propuesta a favor de **ABDIEL HERNÁNDEZ SALAZAR** contra el Fiscal Tercero del Circuito de Colón, sindicado por los delitos contra el Patrimonio y contra la Vida e Integridad Personal, toda vez que dicho Tribunal se **inhibe** del conocimiento de esta acción debido a que el detenido se encuentra a órdenes de la Fiscalía Primera Superior del Primer Distrito Judicial.

Librado el mandamiento de habeas corpus contra el Fiscal Primero Superior, dicha autoridad remitió a esta Corporación el respectivo informe en que expresa lo siguiente:

1. La detención de **ABDIEL HERNÁNDEZ SALAZAR (A) ADI** fue ordenada por la Fiscalía Tercera del Circuito de Colón, mediante resolución de 30 de agosto de 1995. (fs. 49).

2. Según la resolución aludida la detención se fundamentó en la denuncia que hizo EDWIN HENRY CABAL MARÍN en la P. T. J. de Cristóbal por el asalto cometido el 20 de julio de 1995 en la residencia de **FERNANDO MARÍN** por dos sujetos que lo hirieron con arma de fuego; la declaración jurada de RUBIELA MARÍN GUTIÉRREZ, hermana de la víctima, quien expresó que al ir a visitarlo a cuidados intensivos del hospital, éste le indicó que los asaltantes eran "el hijo de Gisela que le dicen ADI y otro de apodo Rey", quienes residen en Coco Solo, que tenían capucha puestas pero logró quitársela a uno de ellos.

3. En la actualidad ABDIEL HERNÁNDEZ SALAZAR (A) ADI se encuentra detenido en la Cárcel Pública de Colón a órdenes de este despacho instructor por solicitud que hiciera la Fiscalía de Circuito al Director de Corrección en ese sentido.

Con el informe antes expresado el funcionario demandado envió el expediente contentivo de las sumarias seguidas al imputado HERNÁNDEZ SALAZAR (217 fojas).

Por su parte, la licenciada Indira V. Ruiz, como proponente de la acción, arguye que no existe señalamiento directo de alguna persona contra su defendido.

En este sentido, se refiere a lo expresado por diferentes testigos en sus

declaraciones considerándolas insuficientes e inoperantes para efectos de ordenar la detención, en atención a lo dispuesto por los artículos 907 y 909 del Código Judicial.

Entre dichas declaraciones cita el Informe Secretarial (fs. 10) suscrito por el Detective Lorenzo Samuels en que expresa que se entrevistó con el hoy occiso cuando estuvo en el hospital y que le manifestó que no podía reconocer a sus atacante; tanto el denunciante EDWIN HENRY CABAL como ALEXANDER CABAL MARÍN sólo han podido señalar la vestimenta y generales de los asaltantes pero nada que comprometa a su defendido; en su declaración SILVIA ALMENDRA, oficial de turno del hospital Amador Guerrero, manifiesta que cuando llegó el señor Marín herido le preguntó si sabía quién le había disparado él manifestó que no sabía; y, finalmente la declaración de la hermana del occiso RUBIELA MARÍN GUTIÉRREZ (fs. 72), que afirma que su hermano le dijo quiénes fueron los asaltantes, sobre lo cual dice la proponente de esta acción que "resulta sin Valor Probatorio" debido a que "no existe un sólo testigo de esa Confesión por parte del Occiso" sin que sea posible que él la pueda ratificar. Por dichas razones, afirma la apoderada del sindicado, se han violado los artículos 22 y 23 de la Constitución y los artículos 907, 909, 2573 del Código Judicial.

Para decidir lo de lugar la Corte procede a confrontar los planteamientos previamente anotados con lo preceptuado por los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial, que establecen los presupuestos legales que deben concurrir para considerar fundamentada la detención preventiva del individuo.

En primer término, resulta evidente que los delitos de los cuales se acusa al favorecido con esta acción conllevan pena superior a dos años de prisión; es así, ya que según se desprende de autos, con posterioridad a la aprehensión de los sospechosos por el asalto y lesiones causadas a la víctima, esta murió en el hospital a consecuencia de dichos sucesos.

De conformidad con lo normado por el artículo 2159 del Código Judicial, la detención preventiva fue dictada por funcionario competente mediante resolución motivada, en que se expresa los hechos punibles, los elementos que demuestran su existencia y las pruebas que existen contra **ABDIEL HERNÁNDEZ SALAZAR (a) ADI.**

El demandante cuestiona el valor de las declaraciones de los testigos y especialmente la veracidad de lo declarado por la hermana de LUIS FERNANDO MARÍN, sobre la identificación que éste hiciera antes de morir de los autores del asalto. Sin embargo, la Corte al actuar como tribunal de habeas corpus no puede entrar a examinar la labor de apreciación de la prueba que ha hecho el funcionario de instrucción o el funcionario jurisdiccional, y simplemente ha de limitarse ha comprobar el cumplimiento de los requisitos legales mínimos para que se tenga como fundamentada la detención de las personas.

En este caso concurren las exigencias preliminares que hacen procedente la detención del favorecido con esta acción de habeas corpus, entre las cuales también figura su historial policivo, visible a foja 99, que demuestra que ha estado involucrado en la comisión de delitos. Por ello, hasta el momento se justifica la detención del prenombrado ABDIEL HERNÁNDEZ SALAZAR, sin perjuicio que posteriormente pueda cambiar su situación.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva de ABDIEL HERNÁNDEZ SALAZAR y ORDENA que se puesto nuevamente a órdenes de la autoridad competente.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ABDIEL ALEXIS ALVARADO DÍAZ CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor EDWIN NELSON BECERRA FERNÁNDEZ, interpuso acción de habeas corpus en favor del ABDIEL ALEXIS ALVARADO DÍAZ, en contra del Director de la Policía Técnica Judicial.

Recibida la acción, se libró mandamiento de habeas corpus contra la autoridad acusada el día 21 de marzo de 1996, en la nota de contestación de dicha autoridad se señala, que el señor ALVARADO DÍAZ, está bajo las órdenes de la Fiscalía Auxiliar. Inmediatamente se libra mandamiento contra la autoridad aludida, el día 25 de marzo de 1996 y, encontrándose el presente negocio en la etapa de que se ponga a órdenes de esta Corporación al Señor ABDIEL ALEXIS ALVARADO DÍAZ y se rindiere el informe respectivo, se recibió escrito de DESISTIMIENTO del recurso de habeas corpus en la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia el día 27 de marzo de 1996, y cuyo tenor es el siguiente:

"HONORABLE SEÑORES MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA:

Yo EDWIN N. BECERRA, de generales conocidas, concurro ante ustedes muy respetuosamente, a fin de manifestarle que desisto del Habeas Corpus presentado por mi persona a favor del señor ABDIEL A. ALVARADO DÍAZ, ya que existen otros elementos de juicio que me han llevado a otra convicción.

Fundamento de Derecho: Artículo 1073 del Código Judicial.

Panamá, 27 de marzo de 1996. ..."

De conformidad con el artículo 1073 del Código Judicial, si el desistimiento cumple con las formalidades de la ley, el juez debe admitirlo y dar por terminado el proceso. En este caso, cumplen con los requisitos de la ley, por lo que se admite y se ordena el archivo del expediente.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE EL DESISTIMIENTO de la acción de Habeas Corpus presentado en representación del Señor ABDIEL ALEXIS ALVARADO DÍAZ y ordena que el mismo sea puesto a órdenes de la autoridad competente.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE IVÁN ALBERTO CAMARENA CONTRA EL SECRETARIO DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL, AGENCIA DE COCLÉ Y VERAGUAS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Mediante fallo de esta Corporación el 8 de marzo de 1996, se declinó competencia al Tribunal Superior de Justicia del Segundo Distrito Judicial, la acción de habeas corpus presentada a favor del señor IVÁN ALBERTO CAMARENA.

El Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, en fallo del 25 de marzo de 1996, se INHIBE de conocer dicha acción de habeas corpus, señalando en parte de su resolución lo siguiente:

> "Esta circunstancia, atendiendo a lo estipulado en el numeral 1° del artículo 2602 del Código Judicial, es fundamento legal para que este Tribunal Superior se inhiba del conocimiento de dicho recurso, toda vez que en atención a lo preceptuado por el numeral 2 del artículo citado, los Tribunales Superiores son competentes para conocer de la demanda de habeas corpus por actos que procedan de auridades y funcionarios con mando y jurisdicción en dos o más provincias, situación muy similar al caso subjúdice".

A esta alta Corporación le ha sido remitido el expediente, nuevamente, el 29 de marzo de 1996, inmediatamente se libró mandamiento de habeas corpus contra el Secretario de Drogas del Segundo Distrito Judicial, Agencia de Coclé y Veraguas. El 8 de abril dicha autoridad envía una nota visible a fojas 35, en la cual se expresa lo siguiente:

> "HONORABLES MAGISTRADOS CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. E. S. D.
>
> Con nuestro acostumbrado respeto, acudimos a esa superioridad, a fin de comunicar que se ha recibido mandamiento de Habeas Corpus, en contra de esta Agencia de Instrucción y a favor del sindicado IVÁN ALBERTO CAMARENA, sindicado por el delito contra la Salud Pública.
>
> En virtud de lo anterior, hago de su conocimiento que las sumarias fueron remitidas el día 21 de marzo de el presente año, mediante oficio 284, hacia la Fiscalía Del Circuito Judicial de Coclé; por encontrarse concluidas las investigaciones.
>
> Atentamente,
>
> VITELIO BARRERA FLORES
> SECRETARIO DE DROGAS DEL
> SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL"

El artículo 2602 del Código Judicial establece que los Tribunales Superiores del Distrito Judicial, conocerán de la acción de habeas corpus por actos que procedan de autoridades o funcionarios con mando y jurisdicción en una provincia. Así también, el artículo 2588 ibídem establece que cuando la persona contra quien se dirige el mandamiento de habeas corpus no tiene bajo sus órdenes al detenido y manifiesta que el mismo se encuentra a órdenes de otro funcionario, si el tribunal no es el competente para seguir conociendo de la acción, deberá enviar, sin dilación alguna, los autos al funcionario judicial competente. En consecuencia, siendo esta la situación que se plantea en el caso en estudio, es procedente remitir la presente acción de habeas corpus al Tribunal Superior de Justicia del Segundo Distrito Judicial.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLINA EL CONOCIMIENTO de la presente acción de habeas corpus ante el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial.

Cúmplase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAUDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.

Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE SILVESTRE ALLEYNE KNIGHT CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE CORRECCIÓN. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ha ingresado al conocimiento del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, acción de habeas corpus interpuesta por el señor **SILVESTRE ALLEYNE KNIGTH** contra el Director Nacional de Corrección del Ministerio de Gobierno y Justicia.

Ingresado el negocio a la Corte, previo reparto de rigor, el Magistrado Sustanciador libró mandamiento de habeas corpus contra la autoridad acusada, quien respondió mediante Oficio N° 1136-DNC. 96. S. de 26 de marzo de 1996, lo siguiente:

> "A. En ningún momento el suscrito ha ordenado la detención del señor **SILVESTRE ALLEYNE KNIGHT**, ni verbalmente, ni por escrito.
>
> B. No podemos hacer referencia a motivos o fundamentos de la detención en referencia porque no la hemos ordenado.
>
> C. El recurrente fue puesto a órdenes de la Dirección Nacional de Corrección por la comisión de delitos de Posesión Ilícita de Drogas Heróicas y Posesión Ilícita de Drogas con ánimo de venta; condenado por el primer caso a la pena de cinco (5) años de prisión y por el segundo a la pena de treinta (30) meses de prisión; y dado que a la fecha el precitado **ALLEYNE KNIGHT** ha cumplido la totalidad de las penas impuestas se ha ordenado que el mismo sea puesto en libertad." (Foja 7).

Igualmente, la Dirección Nacional de Corrección remitió copia del Telegrama Oficial que enviara al Director de la Cárcel Pública de Colón ordenando la libertad del señor ALLEYNE KNIGHT, "por haber cumplido la pena total según mandamiento N° 397-DNC del 26 de marzo de 1996".

De lo anteriormente señalado se concluye que la presente acción de habeas corpus ha perdido su objeto, ya que el detenido ha recuperado su libertad. Consecuentemente, debe ordenarse el archivo del expediente, al tenor de lo dispuesto por el artículo 2572 del Código Judicial.

Por tanto, EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA el cese del procedimiento de la acción de habeas corpus presentada a favor del señor SILVESTRE ALLEYNE KNIGHT.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

APELACIÓN DE HABEAS CORPUS PREVENTIVO A FAVOR DE MANUEL BURILLO CONTRA LA JUEZ SEGUNDA SECCIONAL DE MENORES DE PANAMÁ. PROCESO DE PENSIÓN ALIMENTICIA A FAVOR DE LA MENOR ARA ITZEL BURILLO DEAN. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES.

PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Doctor ULISES PITTÍ ha presentado ante el Pleno de la Corte Suprema, apelación de la resolución N° 2-H. C.-T proferida por el Tribunal Superior de Menores el día 9 de febrero de 1996, mediante la cual se declaró legal la orden de detención preventiva contra su cliente el señor **MANUEL BURILLO CONSTANTINO** emitida por la Juez Segunda Seccional de Menores de Panamá.

La resolución en comento, es la N° 412 S. de F. de 4 de diciembre de 1995, misma que fue dictada debido a la renuencia del señor **BURILLO** en cancelar la deuda de mil trescientos cincuenta balboas (B/.1,350.00) en concepto de pensiones alimenticias atrasadas.

Constan en el expediente todas las resoluciones dictadas a lo largo de este proceso, de las cuales se colige que el origen de la obligación alimentaria del señor **BURILLO** se encuentra en la resolución N° 701 S. C. de 28 de mayo de 1993 y que fijó la obligación en trescientos balboas (B/.300.00), decisión ésta que fue apelada y resuelto este recurso mediante el Auto N° 28 de 7 de septiembre de 1993 se elevó la pensión a un monto de cuatrocientos balboas mensuales (B/.400.00), resolución que quedó en firme el día 15 de septiembre de 1993.

Tenemos, pues, que la deuda en cuestión, (mil trescientos cincuenta balboas) es producto de la morosidad del señor BURILLO al no cumplir con lo ordenado en el auto N° 28 de 7 de septiembre de 1993, que le aumentó cien balboas a la pensión alimenticia ya fijada. La morosidad de los mil trescientos cincuenta balboas (B/.1,350.00) no se elevó más debido a que el Tribunal Tutelar de Menores ordenó el descuento directo del salario de **BURILLO** de la suma fijada para la pensión de su menor hija.

Estamos, pues, ante una orden de detención por desacato a lo ordenado por la Juez Segunda Seccional de Menores, en vista de que habiéndosele concedido al señor **BURILLO** sesenta (60) días para que cancelara la mencionada morosidad, al cabo de éstos, no cumplió con la obligación. Mediante la resolución N° 412 S. de F. de 4 de diciembre de 1995, la Juez de conocimiento **DECLARA EN DESACATO** al recurrente por desatender el pago de la morosidad pendiente y además **ORDENA EL ARRESTO** hasta por treinta (30) días mientras dure la renuencia al pago de lo atrasado. Ante esta circunstancia, el apoderado judicial del señor **BURILLO** presentó recurso de **HABEAS CORPUS PREVENTIVO** ante el Tribunal Superior de Menores, el cual declaró **LEGAL** la orden de detención recurrida en base a ciertos criterios que más adelante señalaremos.

Considera el recurrente en su escrito de apelación del habeas corpus preventivo que por tratarse de pensiones alimenticias atrasadas se requiere un estudio más detenido del proceso en comento; también señala que su cliente no se encuentra en renuencia puesto que el artículo 1318 del Código Judicial literal a, en el que basa el Tribunal su posición, se refiere exclusivamente a la no consignación de la cuota que revisten el concepto de pensiones alimenticias futuras y no las atrasadas. Indica el Doctor PITTÍ que su poderdante además está consignando la cuota que le fijó la Juez, y que la mora se refiere a pensiones alimenticias atrasadas que merecen un tratamiento especial.

También argumenta el recurrente que la deuda por el pago de las pensiones alimenticias atrasadas debe ser considerada una deuda civil al tenor de lo preceptuado en el artículo 1504 del Código Civil, haciendo una interpretación a contrario sensu.

También argumenta el Doctor PITTÍ, que al ordenar el arresto de su cliente, se está poniendo en peligro la fuente, es decir, el empleo de su poderdante, de donde provienen directamente los alimentos, lo cual conllevaría a un maltrato de la propia menor conforme al artículo 500 del Código de la Familia.

Por su parte, el Tribunal Superior de Menores, al resolver la acción de habeas corpus preventivo consideró que

> "... el desacato en materia de alimentos se proyecta más allá de la deuda alimentaria, pues supone la actitud de desobediencia de falta de sometimiento e irrespeto a la autoridad jurisdiccional."
>
> "... En materia de alimentos para la figura del desacato, la cuantía o monto de lo adeudado pasa a un segundo plano, pues lo que se califica es, la renuencia frente a la orden del Juez." (Fs. 40 y 41).
>
> "... Vencido el plazo para que el señor **BURILLO** pagase la morosidad, se observa que nunca hubo la intención de cancelar los MIL TRESCIENTOS CINCUENTA BALBOAS (B/.1,350.00), con lo que se reitera que aún concediéndosele otra oportunidad más por el Despacho, **BURILLO** ha incumplido, manteniéndose renuente a pagar lo dispuesto por los Tribunales. ...". (Fs. 44 y 45).

El Tribunal Superior de Menores hace a continuación un estudio de la naturaleza de la obligación de los alimentos en la doctrina, en la jurisprudencia y en el derecho comparado. Con este fin transcribe una cita de **ISABEL GRISANTI AVELEDO DE LUIGI**, quien hace mención de una serie de características que reviste la obligación alimentaria, de lo cual concluye el Tribunal que puede existir un tratamiento diferente para pensiones alimenticias atrasadas, no similar para las pensiones alimenticias futuras (ver fojas 46 y 47).

Más adelante sigue diciendo el Tribunal Superior que:

> "...
> Lo cierto es que, teniendo presente que las pensiones alimenticias mantienen los caracteres de la obligación alimentaria, las pensiones se clasifican; éstas se presentan como cumplidas o futuras. Las primeras serán consumidas o atrasadas. Todas en la doctrina y el Derecho Comparado, con el tratamiento de instituciones de carácter social que traen desde la matriz. Esto no dice, que las cuotas atrasadas se incorporan al patrimonio del alimentista, y como de alguna manera, durante el período en que opera el atraso en el pago de la pensión o de parte de ésta, el alimentista tiene que subsistir, aún a falta de tales cuotas atrasadas, es obvio pensar que se ha convenido con algún tercero, endeudándose e integrado esta deuda parte de su patrimonio. Ante esta situación, no se le impide la cesión, la renuncia la compensación y hasta la transacción; pero sí la parte que los demanda no procede a estas actuaciones, y no manifiesta interés en enajenar o transferir sus derechos, no puede desnaturalizarse su condición de fuente de sustento y seguridad, para quien los requiere.
>
> **Es decir, que junto a la doctrina estamos reconociendo la posibilidad de que se presente una nueva dimensión en forma de regular las relaciones entre las partes afectadas por una pensión alimenticia atrasada** (la negrita es nuestra). Pero esto es sólo el reconocimiento de la posibilidad legislativa. **Mientras, tenemos que atenernos a la situación de que la parte que se ve afectada por el incumplimiento de la orden de paga en las condiciones y términos que señala la resolución, invocará el desacato ante el Juez que atendió la causa, y éste tendrá que aplicar el apremio corporal frente al Desacato a la orden dada.** (lo resaltado es nuestro). Situación que mantiene incólume la morosidad y el deber alimentario hacia el futuro. En la aplicación de la sanción por el desacato, no se satisface el derecho del alimentista, sólo se reduce al renuente y se a confirma que cumpla la decisión del Juzgador. Manifiesta su sumisión a la voluntad judicial, viene la suspensión del apremio corporal. Quizás el error consiste en que se identifican los supuestos: cumplir la orden del Juzgador y pagar las pensiones en los términos y condiciones establecidas.

> **Nuestra opinión es que se agoten las medidas previstas, frente al atraso o al cumplimiento parcial, porque el Juzgador panameño tiene en la Ley 3 de 17 de mayo de 1994 y ante el Código Judicial, la posibilidad de ordenar el descuento directo del salario, ordenar el secuestro de bienes, o bien el impedimento de salida, y la expresa condición de no obtener su Paz y Salvo Nacional.** (La negrita es nuestra). Sin embargo, advertimos que, en la práctica de estas medidas no se evidencia el sometimiento de la parte a la orden dada por el Juzgador, sólo se advierte la coercitividad de las medidas, lo que significa que la figura del desacato se mantiene.
>
> La ley ante el desacato permite que se perdone al incurso, si el Juzgador aprecia que ha desatendido la renuencia en el cumplimiento de la orden dada." (Fs. 48, 49 y 50).

A continuación, el Tribunal, basándose en la opinión de **JULIO A. LÓPEZ DEL CARRIL**, sostiene que la concesión que hacen algunos juzgadores al establecer arreglos de pagos para pensiones alimenticias atrasadas a través de cuotas, no hace sino premiar a quien debió suministrar los alimentos y perjudicar al alimentista, en cuyo beneficio se fija la pensión.

Tampoco comparte el a-quo la posición del recurrente en cuanto manifiesta que los saldos pendientes por morosidad en los pagos incompletos de la cuota de alimentos constituyen una deuda civil cuya naturaleza deviene de la condición de que se pueden transigir las pensiones atrasadas, pues considera el Tribunal que una es la posibilidad de que las partes actúen frente a su derecho y otra es la posición del Juzgador frente a lo que las partes piden. Veamos:

> "...
> Así la parte alimentista espera la satisfacción de la morosidad, el cumplimiento de su derecho alimentario, en su defecto compele al Juez, para que obligue mediante el apremio corporal al cumplimiento de la decisión jurisprudencial en los términos y condiciones establecidos. **El alimentante tiene dos opciones: conseguir con el alimentista el acuerdo de voluntad y con ello la transacción o convenio de manera que se someta a una relación de parte, lo que hasta ahora dependía de la ejecución de la Resolución Judicial.**" (Lo resaltado es nuestro) (f. 51).

En este punto, el Tribunal estimó necesario desentrañar el sentido y alcance de lo establecido en el artículo 1333 del Código Judicial que a la letra dice:

> "Artículo 1333: En ningún proceso de alimentos se considerará como deuda la obligación de suministrarlos para los efectos del apremio corporal."

Las consideraciones exteriorizadas por el a-quo, básicamente se refieren a que lo contenido en el artículo en cuestión se aplica en el sentido de que **el Juzgador no sancionará o conminará al moroso en función de la deuda monetaria, sino en función de la renuencia a cumplir.**

Desvirtúa así el Tribunal lo alegado por el recurrente en el sentido de que decretando el arresto de su cliente, se está violando el artículo 21 de la Constitución Nacional que establece la prohibición de la pena de cárcel por deudas. Indica también el Tribunal que la intención del legislador plasmada en el artículo 1333 del Código de Procedimiento, es precisamente dejar claro que no existe incongruencia entre la ley y el precepto constitucional mencionado, y que la razón de decretar el arresto es el desacato en que incurre la parte al no incumplir deliberadamente una decisión judicial, y no en razón de la deuda monetaria como ha entendido el recurrente.

> "...
> De manera que un planteamiento diferente al que nos presenta el accionante, advierte que no hay infracción a la norma constitucional, toda vez que la Jueza Segunda Seccional de Menores, no está imponiendo apremio corporal a **MANUEL BURILLO**, por la suma

> que no ha depositado en cuanto representa una deuda, sino que la sanción conminatoria a apremio corporal se da en virtud de la renuencia a cumplir con la orden ejecutoriada y en firme que le señaló un plazo para cubrir una prestación, y el haber desatendido la satisfacción de la obligación así como el plazo establecido para ello.
> ...
> En cuanto al argumento de que el Juzgador se ha negado a atender las solicitudes de arreglo de pago, no es menester confrontar las resoluciones y las extensiones de plazo, dadas como oportunidad de pago, desde 1993, al señor **BURILLO** para que cumpliera con los NOVECIENTOS BALBOAS (B/.900.00) iniciales, y posteriormente MIL TRESCIENTOS CINCUENTA BALBOAS (B/.1,350.00) de atraso a este punto nos hemos referido en exceso." (Fs. 52 y 53).

Habiendo estudiado la posición del recurrente, tanto como la del Tribunal Superior de Menores, esta Corporación llega a las siguientes conclusiones.

Tenemos, que el Tribunal basa su decisión básicamente en dos puntos: que no se trata de una deuda civil y por tanto admite arresto; y que el arresto no es por la morosidad en la deuda de **BURILLO**, sino por desacato a lo ordenado por el Juez.

A lo primero, debemos advertir que la doctrina, como se ha visto tanto en la Resolución del Tribunal Superior de Menores como en el escrito del recurrente, admite que los alimentos vencidos merecen un tratamiento especial y que sobre ellos se puede transigir, ceder, renunciar, compensar y prescriben a diferencia de la obligación alimentaria.

Existen en nuestro ordenamiento jurídico disposiciones legales que indican claramente la condición especial que revisten las pensiones alimenticias atrasadas. Así tenemos, el artículo 242 del Código Civil, reproducido casi totalmente en el artículo 385 del Código de la Familia:

> "Artículo 242: No es renunciable ni transmisible a un tercero el derecho a los alimentos. Tampoco pueden compensarse con lo que el alimentista deba al que ha de prestarlos.
>
> Pero **podrán compensarse y renunciarse las pensiones alimenticias atrasadas** y transmitirse a título oneroso o gratuito el derecho a demandarlas.".
>
> "Artículo 385: No es renunciable ni transferible a un tercero el derecho de alimentos. Tampoco puede compensarse con lo que el alimentista adeuda al que ha de prestarlos.
>
> Sin embargo, **podrán compensarse las pensiones alimenticias atrasadas** y transferirse a título oneroso el derecho a demandarlas, si el alimentario haya tenido que adquirir deudas para vivir." (La negrita es nuestra).

Por su parte, el artículo 21 de la Constitución Nacional establece claramente la prohibición de ordenar la pena de cárcel por deudas cuando señala:

> "Artículo 21: ...
> No hay prisión, detención o arresto por deudas u obligaciones puramente civiles."

No es menester reiterar el carácter primordial que tiene la Constitución sobre el resto de las leyes que conforman el ordenamiento jurídico. Siendo así, resulta inadecuado aplicar a los alimentos vencidos, una orden de arresto por desacato, cuando el alimentante se encuentra actualmente cumpliendo cada mes con la obligación de dar los alimentos.

La materia de alimentos está regulada en el Código de Familia vigente a

partir del tres (3) de enero de 1995. Sin embargo, el artículo 835 de ese Código dispone que:

> "Artículo 835: El régimen económico de los matrimonios, celebrados o de hecho, los negocios y los procesos que se hallen en trámite al entrar en vigencia este Código, se regirán por las leyes y disposiciones anteriores."

Es decir, que son aplicables a dichos procesos, las normas del Código Civil y del Código Judicial.

Para lograr el cobro de la morosidad ordenó el Juez por la vía idónea, el pago de las pensiones atrasadas, tal como lo señala el artículo 1334 del Código Judicial:

> "Artículo 1334: El alimentante podrá proponer la demanda de alimentos, caso en el cual se seguirán los trámites del presente capítulo.
>
> **En caso de que hubiere pensiones atrasadas, el Juez del conocimiento resolverá en el mismo proceso la forma de pagarlas.**" (La negrilla es nuestra).

Incumplida esta resolución, distinguida con el N° 202 S. de F. y fechada el 27 de junio de 1995, procede la ejecución del mandamiento de pago librado en la misma.

Por su parte el artículo 1318 del Código Judicial se refiere a los casos en que el Juez puede sancionar por desacato en los procesos de alimentos hasta por treinta (30) días de arresto mientras dure la renuencia, y señala en su literal a: "cuando no consigne la cuota alimenticia en la fecha y condiciones decretadas". De modo pues, que no es posible aplicar al señor BURILLO dicha disposición, pues él no se encuentra en renuencia sino que está cumpliendo cada mes a través de un descuento directo la pensión alimenticia fijada a favor de su menor hija.

Resulta más bien lesivo al interés superior de la menor, que contra el alimentante se gire una orden de arresto, pues esto pone en peligro la fuente de donde provienen los alimentos, como lo indica acertadamente el recurrente.

Es por ello que, una vez ejecutoriada la resolución que ordena pagar las pensiones alimenticias atrasadas dictada con base en el artículo 1334 del Código Judicial, procede ejecutarla.

No obstante, debemos reconocer que resulta reprobable la actitud de **BURILLO** al incumplir reiteradamente la orden de pagar la morosidad de los alimentos vencidos, máxime cuando ésta se encontraba en firme y ejecutoriada sin que hubiese apelado de ella.

No procede el desacato cuando la condena consiste en pagar una suma de dinero en concepto de pensiones alimenticias atrasadas. Lo que procede es la ejecución de la resolución que ordena el pago de dichas pensiones atrasadas.

Por todo lo anterior, consideramos que resulta ilegal la orden de arresto por una deuda sobre alimentos vencidos, pues éstos merecen un tratamiento especial, como ya hemos visto.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA la Resolución N° 2-H. C.-T. de nueve (9) de febrero de 1996 del Tribunal Superior de Menores, y en consecuencia, DECLARA ILEGAL la orden de arresto decretada contra MANUEL BURILLO CONSTANTINO.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ SALVAMENTO DE VOTO
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO RAFAEL GONZÁLEZ

Salvo respetuosamente el voto pues considero que se debe confirmar la sentencia del Tribunal Superior de Menores, de cuya apelación conoce el Pleno.

Es evidente el desacato de la orden de pagar pensiones alimenticias en que incurre Manuel Burrillo Constantino.

Los argumentos del proyecto son:

(1) Que "resulta inadecuado aplicar a los alimentos vencidos una orden de arresto por desacato, cuando el alimentante se encuentra actualmente cumpliendo puntualmente con la obligación de dar alimentos ..."

Esta afirmación carece de consistencia y resulta además, contradictoria. ¿Cómo puede estar cumpliendo puntualmente si debe un número de cuotas?

(2) Que, en relación con el artículo 1318 del Código Judicial, no está en renuencia el alimentante, "sino que se encuentra cumpliendo puntualmente a través de un descuento directo la pensión alimenticia fijada a favor de su menor hija".

La renuencia de que se trata es la de pagar las cuotas pendientes, las cuales el tribunal ordenó pagar y no lo ha hecho. Eso es renuencia.

El argumento de que no se le exija el pago, mediante arresto, por renuencia en cumplir el pago ordenado por el tribunal, porque se pone en peligro la fuente, es invocar un extraño derecho.

Fecha ut supra.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CARLOS ANEL RUIZ LLERENA CONTRA EL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Carlos Anel Ruiz Llerena interpuso ante la Corte Suprema de Justicia acción de habeas corpus a su favor y contra el Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas.

Por acogida la iniciativa procesal constitucional, se libró mandamiento de habeas corpus, el cual fue contestado por la autoridad demandada mediante oficio N° 2894 de 25 de marzo de 1996. En su informe, el Fiscal señala que ordenó la detención preventiva de Ruiz Llerena mediante resolución calendada 5 de mayo de 1995 y, a renglón seguido, detalla las circunstancias de hecho y de derecho que motivaron la medida restrictiva de la libertad corporal.

Procede la Corte a determinar si la orden de detención cumple con los

requisitos que al efecto establecen tanto la Constitución Nacional como el Código Judicial.

Según la resolución que ordena la detención preventiva de Ruiz Llerena, la medida se fundamenta en la presunta comisión de delito contra la salud pública, relacionado con drogas.

Como elemento probatorio allegado al expediente para la comprobación del hecho punible, se tiene la incautación de treinta envoltorios de papel periódico contentivos de hierba seca, encontrados en poder de Pedro Sánchez Martínez. Sometida la sustancia ocupada a los exámenes técnicos de rigor, resultó positiva para la determinación de **MARIHUANA**, en la cantidad de **4.47 gramos** (Dictamen del Laboratorio Técnico especializado en Drogas de la Policía Técnica Judicial, f. 34 cuaderno de antecedentes).

Observa la Corte que la cantidad de **marihuana** incautada sobrepasa la dosis que tiene establecida el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público como correspondiente a la mínima destinada a consumo personal. La cantidad de droga incautada representa poco más de cuarenta veces una dosis posológica de marihuana para consumo, lo que indica que ese no es el caso de Ruiz Llerena, por lo que la presunción que opera en este caso es la de posesión destinada al tráfico, que lleva aparejada pena mínima superior a los dos años de prisión.

Como elemento de prueba que vincula al beneficiario de la acción con el hecho delictivo, figura en las sumarias la declaración indagatoria de Sánchez Martínez, debidamente ratificada, en la que hace señalamientos directos contra Ruiz Llerena, en el sentido de que fue la persona que le suministró la droga (fs. 13-16, cuaderno de antecedentes).

La orden de detención preventiva, dictada mediante resolución de 5 de mayo de 1995, cumple con lo preceptuado por los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial, lo que legitima la medida impugnada.

Por las razones que anteceden, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención de Carlos Anel Ruiz Llerena y, en consecuencia, ORDENA que el detenido sea puesto nuevamente a órdenes del Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA POR EL SEÑOR PRUDENCIO LUCERO RAMOS, A FAVOR DE DORIAN MURILLO Y CONTRA EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor Prudencio Lucero Ramos interpuso ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia acción de habeas corpus a favor del señor DORIAN MURILLO y contra el Director General de la Policía Técnica Judicial.

Admitida la presente acción, se libró mandamiento de habeas corpus contra

el Director General de la Policía Técnica Judicial quien, al rendir su informe de conducta mediante Oficio N° A. L. 0521-96, del 16 de abril de 1996, indicó que no había ordenado la detención del señor DORIAN MURILLO, pero que el mismo estaba bajo su custodia, a órdenes del Alcalde Municipal del Distrito de Chepigana (f. 5).

Como el detenido está a órdenes del señor Alcalde del Distrito de Chepigana, procede la declinatoria de competencia en el Juez de Circuito de la provincia de Darién, de conformidad con el artículo 2588 del Código Judicial, en concordancia con el numeral 3° del artículo 2602 del mismo cuerpo legal.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLINA el conocimiento de la presente acción de habeas corpus en el señor Juez de Circuito de la provincia de Darién.

Notifíquese y Remítase.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ENCARNACIÓN ZAPATEIRO CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado JOSÉ RAMIRO FONSECA PALACIOS, ha interpuesto demanda de habeas corpus a favor de ENCARNACIÓN ZAPATEIRO contra el FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS.

El apoderado judicial de ENCARNACIÓN ZAPATEIRO indica que la misma fue detenida como consecuencia de la diligencia de allanamiento realizada el 4 de enero de 1996, en la casa 1538 de la calle 15, apartamento N° 18. Adiciona que en el cuarto propiedad de su representada no se encontró nada ilícito, pero que el material pernicioso fue encontrado en la parte de afuera en el cielo raso, por el policía ALCIBIADES BLANQUICET apodado "RAMBO".

Dictado el mandamiento de habeas corpus correspondiente, se solicitó al funcionario acusado en informe mediante providencia de 25 de marzo de 1996.

Consta a fojas 6-8 del expediente, el Oficio N° 3219 de 26 de marzo de 1996, por medio del cual el FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS, informa lo siguiente:

"...

PRIMERO: La señora zapateiro (sic) fue detenida por orden escrita de esta Fiscalía fechada cuatro (4) de marzo de mil novecientos noventa y seis (1996).

SEGUNDO: Los fundamentos de hecho que motivan la detención de la sindicada, tienen inicio el día tres (3) de enero del presente año, cuando autoridades de la Corregiduría del Chorrillo, en asocio con efectivos de la Policía Nacional, practican diligencia de allanamiento en el cuarto N° 18, de la casa 1538 de calle 15, Barraza. Mediante dicha diligencia, se encuentra escondido en el cielo raso del cuarto, un cartucho blanco, con letras verdes y rojas

del MACHETAZO, contentivo de una pesa calibrada en gramos, un colador de color amarillo y trece (13) sobrecitos plásticos transparentes, contentivos de polvo blanco, mismo que fue presumido como droga COCAÍNA.

TERCERO: Por tal motivo es conducida a este Despacho, para que rinda su respectiva declaración indagatoria, donde la señora ZAPATEIRO, niega ser vendedora de sustancias prohibidas, como cualquier vinculación con la sustancia en comento. Manifiesta que un policía apodado "RAMBO" de apellido BLANQUICET, fue visto por sus vecinos, cuando minutos antes del allanamiento se escondía un cartucho, antes de llegar a su casa. Finalmente manifiesta que esta es posiblemente la cuarta (4ta.) vez que se realiza un allanamiento en su casa.

CUARTO: A solicitud de la defensa, rinden declaración jurada dos (2) de los vecinos que afirman haber visto los hechos que rodearon la detención de la prenombrada. Los mismos afirman haber visto al agente BLANQUICET, alias "RAMBO", cuando minutos antes del allanamiento se escondía una bolsa plástica de rayas blancas con celestes, del tamaño de una pelota de softball o de una libra de arroz, entre sus ropas, para después subirse al cielo raso de la sindicada, haciendo ver que encontraba ese cartucho escondido en el techo.

QUINTO: Lo cierto es que los informes de la Policía, la diligencia de allanamiento y las ratificaciones de los agentes que participaron en la detención, se describe un cartucho blanco con letras rojas y blancas del MACHETAZO y no un cartucho de rayas blancas celestes. Estas mismas constancias procesales indican que este paquete contenía una pesa gramera, un colador y trece (13) sobrecitos plásticos transparentes contentivos de droga, lo que descarta la posibilidad que dicho envoltorio tenga las dimensiones expresadas por los testigos y que el mismo pueda ser susceptible de esconderse dentro del pantalón de un policía. (Ver foja 34).

SEXTO: Por último, la sindicada y sus testigos manifiestan en sus atestaciones que el agenta (sic) de la Policía Nacional, al cual apodan "RAMBO", de apellido BLANQUICET, se escondió un cartucho dentro de sus ropas, para luego subirse al cielo raso de la casa y hacer ver que había encontrado el mismo en ese lugar. Sin embargo, los informes de policía y las propias declaraciones de las unidades BATISTA Y BLANQUICET, son consistentes al señalar que fue el agente BATISTA y no BLANQUICET, quien se subiera al cielo raso, encontrando el cartucho que da inicio a este expediente.

El fundamento de Derecho que nos obliga a ordenar y mantener la detención preventiva de la señora ENCARNACIÓN ZAPATEIRO, se encuentra contemplado en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial. Actualmente la prenombrada se encuentra detenida y filiada a vuestras órdenes, por este Despacho haberlo ordenado así mediante oficio N° 3018 de esta misma fecha, dirigido al director del Centro Femenino de Rehabilitación, tal como lo exige el artículo 2580 del Código Judicial.

Adjunto al presente informe le remitimos copias autenticadas del expediente que contiene las sumarias respectivas, constantes de cincuenta y siete (57) fojas útiles".

En el sumario seguido a ENCARNACIÓN ZAPATEIRO por delito contra la salud pública que fuera remitido a esta Superioridad, se lee a foja 87 la orden de allanamiento autorizado por el Corregidor del Chorrillo en la Calle 15, Chorrillo, Casa 1538 con Calle Próspero Pinel, Cuarto N° 18, en virtud de información recibida en ese despacho sobre ciertas actuaciones ilícitas que se realizaban en la citada residencia. Seguidamente, a foja 9 consta la diligencia de allanamiento efectuada el 3 de enero de 1996 al inmueble antes indicado, en el cual participó el señor CÉSAR CONTRERAS, Corregidor del Chorrillo,

conjuntamente con miembros de la Fuerza Pública.

En la citada diligencia: "Se encontró por un Agente de la Policía, en el altillo del cielo raso del cuarto una bolsa blanca con letras rojas y verdes del machetazo, conteniendo (1) una pesa gramera blanca, un colador amarillo y 13 bolsita (sic) (pases) conteniendo un polvo blanco que se presume sea droga (cocaína) ...".

Observa el Pleno a foja 9 del expediente una nota dirigida al señor FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS, en donde el subteniente 8336 OMAR CAMERO y el subteniente 8138 H. HERNÁNDEZ hacen constar que la ciudadana ENCARNACIÓN ZAPATEIRO, luego de ser detenida en el allanamiento realizado "nos ofreció una compensación de mil dólares a cambio de desaparecer la evidencia obtenida en su caso".

A foja 11 del sumario se lee la diligencia de prueba de campo realizado por el Departamento de División de Estupefacientes del Ministerio Público, a las muestras incautadas, resultando positiva en la determinación de la droga COCAÍNA. Posteriormente, en el Informe de Criminalística del Laboratorio Técnico Especializado en Drogas (f. 54), se dictaminó que el peso de la misma es de seis punto cuarenta y siete (6.47) gramos.

Pese a que en la declaración indagatoria rendida por ENCARNACIÓN ZAPATEIRO niega toda vinculación con el ilícita y, además, en las declaraciones de los testigos aducidos por el apoderado judicial de la sindicada, se señalan al agente de la policía ALCIBIADES BLANQUICET (RAMBO), como la persona que tenía en su poder un cartucho de rayas blancas con celeste de un tamaño de un libro de arroz o una pelota de soft boll y que fuere el que se trepó al cielo raso donde se encontraron las evidencias anteriormente descritas. Se desprende de lo anterior, que no existe relación del supuesto cartucho con el que fue encontrado en el allanamiento, el cual se identifica de color blanco con verde y rojo del machetazo. Por otra parte, indican los testigos que la persona que subió al cielo raso fue el agente BLANQUICET, a quien dicen conocer, pero en las declaraciones de RATIFICACIÓN de los agentes captores ALCIBIADES BLANQUICET GÓMEZ y RUBÉN DARÍO SANTOS (fs. 30), se reitera el hecho de que fue el agente BATISTA, quien subió al cielo raso del inmueble y encontró las evidencias que vinculan a la señora ENCARNACIÓN ZAPATEIRO con el ilícito que se investiga.

Más aún, en la declaración indagatoria rendida por ZAPATEIRO, acepta que su vivienda ha sido allanada en cuatro (4) ocasiones anteriores.

De lo expuesto, se infiere la vinculación de la prenombrada ENCARNACIÓN ZAPATEIRO en el delito contra la salud pública tipificado en el segundo párrafo del artículo 260 del Código Penal sancionado con pena de cinco (5) a diez (10) años de prisión, porque se encontró en el cielo raso del pasillo que corresponde al cuarto 18 donde habita, además de la sustancia ilícita en la cantidad de 6.47 gramos, un colador y una pesa calibrada en gramos, lo que señala claramente que las mismas estaban destinados para venta.

Tomando en cuenta todo lo anterior, y que la detención ha sido ordenada mediante diligencia escrita, en la cual se expresa cual es el hecho investigado y los elementos probatorios allegados al proceso, para establecer que ese hecho configura un delito contra la salud pública y la vinculación de la detenida con el delito investigado, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia considera que la detención preventiva decretada contra ENCARNACIÓN ZAPATEIRO no viola normas constitucionales sobre la materia y se ajusta a los preceptuados en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva decretada por el señor FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS contra ENCARNACIÓN ZAPATEIRO mediante diligencia de 4 de enero de 1996, y ORDENA que la misma sea, puesta nuevamente a órdenes de ese despacho.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA POR EL SEÑOR RAMÓN ARBOLEDA SÁENZ CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE CORRECCIÓN DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor EDGAR RAMÓN ALBOLEDA SÁENZ presentó ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia acción de Habeas Corpus contra el Director Nacional de Corrección del Ministerio de Gobierno y Justicia.

El actor sustentó su pretensión en los siguientes razonamientos:

"1. El artículo 85 del Código Penal dice: "El sancionado con pena de prisión que haya cumplido dos tercios de su condena con índices de readaptación, buena conducta y cumplimiento de los reglamentos carcelarios, podrá obtener la libertad condicional".

2. El artículo 85 va dirigido al detenido y esa fue la intención del legislador, pues la esencia y el espíritu de dicho artículo es el de asegurarle ipso facto la libertad condicional al detenido, como premio al esfuerzo continuo realizado en cumplir con los requerimientos exigidos. Por lo tanto el espíritu del legislador fue en convertir en un "**derecho adquirido**" del detenido (que haya llenado los requisitos) la interpretación de la frase "podrá obtener la libertad condicional".

3. El artículo 85 no va dirigido al Dpto. de Corrección y no le da a dicho Departamento la opción de conceder o no la libertad condicional a un detenido que se haya esforzado durante los dos tercios de su condena ya que así se ganó un "derecho adquirido" a reinsertarse en el seno de su familia y la sociedad.

4. Sin embargo, en la práctica y de manera ilegal la Dirección de Corrección en el mejor de los casos comienza las evaluaciones de los detenidos mucho después de haber éstos cumplidos los dos tercios de su condena con el resultado de que éstos en la práctica hayan cumplido la totalidad o casi totalidad de la condena para cuando la Dirección de Corrección ha completado su evaluación.

5. Con el fin de eliminar la mínima duda posible sobre lo anteriormente expresado adjunto a sus Señorías, copia de carta N° 2745-DNC 95. S. de agosto 28 de 1995 dirigida a mi persona por la Lcda. Rosa E. Cárdenas, Subdirectora Nacional de Corrección ...

PETITORIO: Es por las razones anteriormente expuestas que me considero ilegalmente detenido desde el 26 de octubre de 1995 y solicito respetuosamente a sus Señorías que se ordene a la Dirección Nacional de Corrección mi inmediata puesta en libertad." (Fs. 3-5).

Mediante Nota N° 1038-DNC. 96. S., del 18 de marzo de 1996, la Directora Nacional de Corrección remitió su informe de conducta indicando que no ordenó la detención del señor ARBOLEDA SÁENZ, quien se encuentra a órdenes de la Dirección Nacional de Corrección cumpliendo la condena de cuarenta y ocho meses de prisión

por el delito de robo en perjuicio de Rosa Cedillo. Agregó, que el detenido está cumpliendo dicha pena desde el día 6 de agosto de 1993; que el 26 de octubre de 1995 cumplió las dos terceras partes de la misma y que para el 6 de diciembre de 1996 la cumplirá totalmente (fs. 8-9).

CONSIDERACIONES DEL PLENO DE LA CORTE

De acuerdo con las pruebas de autos y los hechos afirmados por el actor, el mismo está detenido a órdenes de la Dirección Nacional de Corrección cumpliendo la condena de cuarenta meses de prisión que le impuso el Juzgado Décimo Tercero de Circuito, ramo penal, por el delito de robo en perjuicio de Rosa Cedillo. El actor pidió al Pleno de la Corte que ordene su inmediata libertad en virtud de que cumplió con más de los dos tercios de dicha pena.

El artículo 85 del Código Penal ciertamente establece que la persona sancionada con pena de prisión que haya cumplido dos tercios de su condena, con índices de readaptación, buena conducta y cumplimiento de los reglamentos carcelarios, puede obtener la libertad condicional. Sin embargo, la vía procesal escogida por el actor no es la correcta, pues, de acuerdo con el artículo 86 del mismo Código, la libertad condicional debe otorgarla el Órgano Ejecutivo mediante sentencia motivada.

El Pleno de la Corte no puede ordenar la libertad del detenido mediante la acción impetrada, pues, como se expresó en el fallo del 27 de febrero de 1996, "la institución del Habeas Corpus está encaminada a proteger al ciudadano de la adopción de medidas cautelares personales que desconozcan los parámetro y formalidades constitucionales y legales establecidos para garantizar la libertad individual". En el presente caso, la detención del actor es legal porque obedece al cumplimiento de una condena impuesta por un tribunal competente y el otorgamiento del beneficio cautelar que se pide es competencia exclusiva del Órgano Ejecutivo, quien deberá concederlo después de comprobar que se ha cumplido con los presupuestos establecidos en el citado artículo 85 del Código Penal.

Por las razones anotadas, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE ES LEGAL la detención del señor EDGAR RAMÓN ARBOLEDA SÁENZ, quien está detenido a órdenes de la Dirección Nacional de Corrección del Ministerio de Gobierno y Justicia.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS A. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE EVAN EUDES ÁLVAREZ MONTANO, HERNÁN GARCÍA, CARLOS GILL CONTRA EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado Teófanes López Ávila ha presentado acción de habeas corpus a favor de los señores **EVAN EUDES ÁLVAREZ MONTANO**, **HERNÁN GARCÍA y CARLOS GILL**, contra el Director de la Policía Técnica Judicial.

Ingresado el negocio a la Corte, previo reparto de rigor, se libró mandamiento de habeas corpus contra la autoridad acusada. Mediante Oficio N° A.

L. 0490-96 de 10 de abril de 1996, el Director General de la Policía Técnica Judicial informó lo siguiente:

> "1. No es cierto que hemos ordenado la detención de los señores **EVAN EUDES ALVAREZ MONTANO**, **HERNÁN GARCÍA y CARLOS GILL.**
> 2. No tiene razón de ser en base al punto anterior.
> 3. Tenemos conocimiento que la Fiscal Especial del Primer Circuito Judicial de Panamá, con sede en Ancón, Licenciada **DINA TORRES**, mediante Oficio N° 690 de 9 de abril de 1996, ordenó la libertad de los prenombrados." (Foja 10).

Del informe transcrito se colige que los demandantes fueron puestos en libertad, razón por la cual debe ordenarse el cese del procedimiento, al tenor de lo dispuesto por el artículo 2572 del Código Judicial.

En consecuencia, EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA el cese del procedimiento de la presente acción de habeas corpus.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE RUBÉN DARIO MORENO POYATOS CONTRA EL FISCAL SEGUNDO DE CIRCUITO DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación, proveniente del Segundo Tribunal de Justicia, ha ingresado a este Despacho recurso de habeas corpus propuesto por el licenciado **Gilberto Bernal** a favor de **RUBÉN DARIO MORENO POYATOS**, y contra el Fiscal Segundo de Circuito de Panamá, por considerar que la detención es ilegal.

DECISIÓN DEL SEGUNDO TRIBUNAL DE JUSTICIA

El Segundo Tribunal de Justicia declaró legal la detención del señor **RUBÉN DARIO MORENO POYATOS**, dado que quedó debidamente comprobada la existencia del hecho punible. Esto es la existencia y propiedad de la cosa objeto del delito, que consiste en el equino cuyo nombre es Centenaria. Además de que los aspectos de retroventa que aduce el recurrente, deben ser debatidos en proceso penal. Que los indicios de la responsabilidad penal surgen con la prueba testimonial analizada, aparte de que el implicado aceptó que vendió la yegua.

Sigue manifestando el Tribunal, que el proceso está siendo conducido por autoridad competente y que la detención preventiva ha sido decretada conforme a las formalidades legales exigidas para esa finalidad.

ARGUMENTOS DEL RECURRENTE

El afectado manifiesta que la interpretación que hace el Segundo Tribunal de Justicia, de la venta de la yegua llamada Centenaria que hizo el señor **RUBÉN DARIO MORENO**, no es acorde con la realidad, ya que el equino es de propiedad precisamente de éste, por lo que el documento visible a foja 3 y 4 del cuadernillo de instrucción no puede servir de fundamento para establecer la

propiedad del señor **ANTONIO MANUEL BOLÍVAR.** También que de las declaraciones rendidas por Dionisio González, Faustino Camaño, y Javier Sánchez se desprende que el equino era de propiedad de **MORENO**, pero que en virtud de un arreglo que desconocen, pasó a la propiedad de **BOLÍVAR.** Por último señala el recurrente, que los elementos probatorios alegados para la comprobación de los hechos punibles, no han sido valorados correctamente, ni están en concordancia con lo que establece el numeral 2, del artículo 2159 del Código Judicial.

DECISIÓN DEL PLENO DE LA CORTE

De acuerdo a las constancias procesales que obran en el expediente, esta Superioridad coincide con el planteamiento expuesto por el Segundo Tribunal de Justicia, ya que no sólo consta que las declaraciones de los testigos, confirman el hecho de la existencia de un acuerdo entre el señor **BOLÍVAR** y MORENO en relación a la yegua centenaria, sino también el documento del convenio que establece que la yegua es de propiedad del señor **BOLÍVAR.** Este acuerdo claramente preceptúa lo comentado en lo siguientes términos:

> "PRIMERO: Manifiesta El Indemnizante, que es propietario de una yegua de 5 años color chocolate con un lunar en la cara, con características de Alta Escuela, llamada CENTENARIA.
>
> SEGUNDO: Manifiesta El Indemnizante, que traspasa la propiedad del equino descrito en la cláusula anterior a El Indemnizado a fin de cubrir la lesión económica que le causó al mismo, como consecuencia de enfermedad sobrevenida al caballo llamado SOL propiedad del indemnizado.
>
> TERCERO: Manifiesta El Indemnizado, que acepta el traspaso de la propiedad del equino denominado CENTENARIA, en concepto de indemnización por los perjuicios causados, y que desiste de cualquier reclamo posterior en este sentido una vez le sean entregados los exámenes de sangre correspondientes a Centenaria en los que debe constar que no adolece de ninguna enfermedad.
>
> CUARTO: El Indemnizado manifiesta que se compromete a conceder al Indemnizante el término de un (1) año a partir de la fecha, a fin de que pueda obtener a satisfacción del indemnizado, un potro con las características del equino llamado SOL: ocurrido lo cual, se compromete a traspasar la yegua CENTENARIA al Indemnizante a cambio del nuevo potro".
>
> **(El Indemnizante es Rubén Darío Moreno y el Indemnizado es Antonio Bolívar).**

Se evidencia, que existen suficientes elementos de juicio que vinculan a **RUBÉN DARIO MORENO POYATOS** con el delito de hurto pecuario y que la existencia o no de una retroventa debe ser, tal como atinadamente lo señaló el Segundo Tribunal, debatida dentro del proceso.

De igual manera no debemos soslayar que la detención ha sido decretada de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 2568 del Código Judicial, es decir, que la misma emanó de autoridad competente por escrito y se estableció la causa de la aprehensión (ver foja 19 del cuadernillo proveniente de la Fiscalía).

En conclusión, la detención de que es objeto el acusado se encuentra enmarcada dentro de los parámetros de la ley, lo que hace que no prospere la pretensión del demandante.

Por las anteriores consideraciones, los Magistrados en PLENO de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMAN la Resolución de 12 de marzo de 1996, en el sentido de que DECLARAN LEGAL LA DETENCIÓN de RUBÉN DARIO MORENO POYATOS decretada por el Fiscal Segundo de Circuito de Panamá.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE VICTORIANO MINOTA ÁNGULO, LUIS AMARILDO BARBOSA LAMOS Y JUAN CARLOS PAREDES IBARRA CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **BORIS E. BARRIOS G.**, interpuso acción de habeas corpus a favor de los ciudadanos colombianos **VICTORIANO MINOTA ÁNGULO, LUIS AMARILDO BARBOSA LAMOS y JUAN CARLOS PAREDES IBARRA**, contra el Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas.

Librado el mandamiento de habeas corpus, el funcionario demandado contestó mediante oficio visible de fojas 11 a 13 de este expediente.

Encontrándose el expediente listo para la lectura de los demás Magistrados del Pleno, el proponente del habeas corpus, presentó escrito donde manifiesta su DESISTIMIENTO de la presente acción constitucional.

En consecuencia, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ACEPTA EL DESISTIMIENTO presentado por el licenciado BORIS E. BARRIOS G. de la acción de Habeas Corpus interpuesta a favor de los señores VICTORIANO MINOTA ÁNGULO, AMARILDO BARBOSA LAMOS y JUAN CARLOS PAREDES IBARRA.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA POR EL SEÑOR LUIS ETIEN PALACIO CARDONA CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE CORRECCIÓN. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor LUIS ETIEN PALACIOS CARDONA interpuso ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia acción de habeas corpus contra el Director Nacional de Corrección del Ministerio de Gobierno y Justicia.

El actor sustenta su pretensión en los siguientes razonamientos:

"1. Que me encuentro detenido desde el veintidós (22) de julio de 1992 habiendo sido condenado por el Tribunal Superior a 64 meses después de que mi defensa legal apeló de una sentencia de ocho (8) años impuesta por el Juzgado Décimo Cuarto del Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá. En base a lo anterior los dos tercios de mi condena se cumplieron alrededor del doce (12) de febrero de 1996.

2. Que el artículo 85 del Código Penal establece que "El sancionado con pena de prisión que haya cumplido dos tercios de su condena con índices de readaptación, buena conducta y cumplimiento de los reglamentos carcelarios, podrá obtener la libertad condicional".

3. Que dicho artículo 85 va dirigido al detenido y esa fue la intención del legislador, pues la esencia y el espíritu de dicho artículo es el de asegurarle ipso facto la libertad condicional al detenido como premio al esfuerzo continuo realizado en cumplir con los requisitos exigidos. Por lo tanto, el espíritu del legislador fue el de convertir en un "derecho adquirido" cumplidor de los requerimientos que haya cumplido los dos tercios, la interpretación de la frase "podrá obtener la libertad condicional.

4. Que el artículo 85 no va dirigido al Departamento de Corrección y no le da a dicho departamento la opción de conceder o no la libertad condicional a un detenido que se haya esforzado durante dos tercios de su condena para ganarse un "derecho adquirido" a reinsertarse en el seno de su familia y de la sociedad.

Sin embargo, en la práctica y de manera ilegal, la Dirección de Corrección, en el mejor de los casos, comienza las evaluaciones de los detenidos mucho después de haber éstos cumplido los dos tercios de su condena, con el triste resultado de que éstos en la práctica sólo hayan cumplido la totalidad o casi totalidad de la condena para cuando se haya completado la susodicha evaluación." (Fs. 2-4).

El actor agregó, que el Director Nacional de Corrección violó los artículos 19 y 20 de la Constitución Política ya que al considerar la posible libertad condicional de un detenido, discrimina en cuanto al tipo de delitos cometidos, al igual que cuando se trata de ciudadanos extranjeros.

Mediante Nota N° 1146-DNC, del 27 de marzo de 1996, la Directora Nacional de Corrección remitió su informe de conducta al Pleno, indicando que no ordenó la detención del señor PALACIOS CARDONA, quien se encuentra a órdenes de la Dirección Nacional de Corrección cumpliendo una condena de ocho años de prisión por el delito de tráfico internacional de drogas. Agregó, que por el hecho de ser el condenado un interno de nacionalidad extranjera, no puede cumplir con los requisitos establecidos en los numerales 1 y 3 del artículo 86 del Código Penal, por lo cual tampoco es posible concederle la libertad condicional (fs. 7-8).

CONSIDERACIONES DEL PLENO DE LA CORTE

De acuerdo con las pruebas de autos y los hechos afirmados por el actor, el mismo está detenido a órdenes de la Dirección Nacional de Corrección cumpliendo la condena de 64 meses de prisión que le impuso el Juzgado Décimo Cuarto del Circuito, ramo penal, por el delito de tráfico internacional de drogas. El actor pidió al Pleno de la Corte que ordene su inmediata libertad en virtud de que cumplió con más de dos tercios de dicha pena.

El artículo 85 del Código Penal ciertamente establece que la persona sancionada con pena de prisión que haya cumplido dos tercios de su condena, con índices de readaptación, buena conducta y cumplimiento de los reglamentos carcelarios, puede obtener la libertad condicional. Sin embargo, la vía procesal escogida por el actor para lograr su pretensión no es la correcta, pues, de acuerdo con el artículo 86 del mismo Código, la libertad condicional debe otorgarla el Órgano Ejecutivo mediante resolución motivada.

Como expresó el Pleno de la Corte en su fallo del 27 de febrero de 1996, "la institución del Habeas Corpus está encaminada a proteger al ciudadano de la adopción de medidas cautelares personales que desconozcan los parámetros y formalidades constitucionales y legales establecidos para garantizar la libertad individual". En el presente caso, la detención del actor es legal porque obedece al cumplimiento de una condena impuesta por un tribunal competente y el otorgamiento del beneficio cautelar que se pide es competencia exclusiva del Órgano Ejecutivo, quien deberá concederlo después de comprobar que se ha cumplido con los presupuestos establecidos en el citado artículo 85 del Código Penal.

Por las razones anotadas, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE ES LEGAL la detención del señor LUIS ETIEN PALACIOS CARDONA, quien está a órdenes de la Dirección Nacional de Corrección del Ministerio de Gobierno y Justicia.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE PEDRO MORENO ROMERO CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE CORRECCIÓN. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ha ingresado al conocimiento del Pleno de la Corte Suprema de Justicia la acción de habeas corpus interpuesta por el señor **PEDRO MORENO ROMERO**, contra la Dirección Nacional de Corrección del Ministerio de Gobierno y Justicia.

El recurrente alega, fundamentalmente, que se encuentra ilegalmente detenido desde el 1° de septiembre de 1995, ya que fue condenado a treinta y dos meses de prisión y en la fecha mencionada completó dos tercios de esa condena, "habiendo observado buena conducta y cumplido con todos los requerimientos exigidos por el artículo 85 del Código Penal".

Cumplidos los trámites procesales correspondientes, se libró mandamiento de habeas corpus contra el Director Nacional de Corrección quien, mediante Oficio N° 1147-DNC. 96. S de 27 de marzo de 1996, consultable a foja 9, informó lo siguiente:

> "A. En ningún momento el suscrito ha ordenado la detención del señor **PEDRO MORENO ROMERO**, ni verbalmente ni por escrito.
>
> B. No podemos hacer referencia a motivos o fundamentos de hecho o de derecho de la detención, porque no la hemos ordenado.
>
> C. El recurrente, señor **PEDRO MORENO ROMERO**, de nacionalidad española, con Pasaporte N° 38501595 se encuentra a órdenes de la Dirección Nacional de Corrección, guardando detención en el Centro de Rehabilitación El Renacer, toda vez que se encuentra condenado por el Juzgado Séptimo de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá mediante Sentencia de fecha 10 de octubre de 1994 a la pena de TREINTA Y DOS (32) meses de prisión por la comisión del delito de Tráfico Internacional de Drogas.

> De conformidad al Mandamiento N° 1506-DNC comenzó a cumplir dicha pena el día 23 de noviembre de 1993 por lo que cumplirá el total de la misma el día 22 de julio de 1996."

Del informe transcrito se colige que el recurrente se encuentra cumpliendo pena de prisión impuesta mediante sentencia proferida por el Juzgado Séptimo de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá; sanción que cumplirá en su totalidad el día 22 de julio de 1996.

No obstante, el señor PEDRO MORENO ROMERO señala que tiene derecho a la libertad condicional desde el 1° de septiembre de 1995, fecha en que completó las dos terceras partes de su condena.

Los artículos 85 y 86 del Código Penal contemplan la figura de la libertad condicional, en los siguientes términos:

> **"ARTÍCULO 85:** El sancionado con pena de prisión que haya cumplido dos tercios de su condena con índices de readaptación, buena conducta y cumplimiento de los reglamentos carcelarios, podrá obtener la libertad condicional.
>
> **ARTÍCULO 86:** La libertad condicional, otorgada por el Órgano Ejecutivo, mediante Resolución, conllevará para el beneficiado el cumplimiento de las siguientes obligaciones: ..."

Por otro lado, el artículo 2401 del Código Judicial señala lo siguiente:

> **"ARTÍCULO 2401.** En los eventos contemplados en el artículo 85 del Código Penal, relativos a la libertad condicional, el Órgano Ejecutivo por conducto del Departamento de Corrección, formará cuaderno especial para la tramitación de la respectiva solicitud y hará que se cumplan todas las exigencias procedimentales a que se refiere dicha disposición legal."

De las normas anteriormente transcritas se concluye que la libertad condicional debe ser solicitada por el sancionado con pena de prisión que haya cumplido las dos terceras partes de la pena impuesta. Esta solicitud será tramitada por el Órgano Ejecutivo, a través del Departamento de Corrección del Ministerio de Gobierno y Justicia, quien decidirá el mérito de la misma. Por tanto, esta Corporación Judicial no tiene competencia para otorgar este beneficio y en vista de que el señor MORENO ROMERO aún no ha cumplido la totalidad de la pena de privación de libertad que le fuera impuesta, la detención que sufre es legal.

En mérito de lo expuesto, EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva del señor PEDRO MORENO ROMERO y ORDENA que sea puesto, nuevamente, a órdenes de la Dirección Nacional de Corrección.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DE NATIVIDAD GARCÍA MOTA CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE MIGRACIÓN Y NATURALIZACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **MANUEL E. CAJAR M.** ha presentado ante esta Superioridad, acción de Habeas Corpus a favor de la señora **NATIVIDAD GARCÍA MOTA** de nacionalidad dominicana, contra el Director Nacional de Migración, por considerar que la privación de libertad que sufre la prenombrada señora, es ilegal.

Una vez acogida la acción, fue librado el mandamiento de Habeas Corpus en fecha de 29 de marzo de 1996, mismo que fuere contestado por el funcionario acusado mediante Nota N° DNMYN-111-96 fechada 8 de abril de 1996, mediante la cual informó a esta Superioridad que la favorecida por la acción que nos ocupa fue deportada del territorio nacional mediante Resolución N° 1271 del 28 de marzo de 1996, misma que se adjunta a folio 14 del expediente.

Recibida esta documentación, y en vías de establecer con toda precisión la situación actual de la señora **GARCÍA**, el Magistrado Sustanciador se comunicó de inmediato con el Despacho del Director Nacional de Migración mismo que confirmó, que desde el día 28 de marzo del año en curso la señora NATIVIDAD GARCÍA fue deportada del territorio nacional.

Como se colige de lo antes expuesto, en la actualidad, la persona en cuyo favor se ha promovido el presente habeas corpus ya no se encuentra privada de su libertad corporal, por lo que no tiene objeto continuar con este procedimiento.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA EL CESE DE PROCEDIMIENTO en el presente negocio y ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE BIENVENIDO CAMARENA CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado EUFROSINIO TROYA TORRES ha interpuesto ante esta Corporación acción de **Habeas Corpus** a favor de **BIENVENIDO CAMARENA** contra el Fiscal Auxiliar de la República.

Librado el mandamiento contra la autoridad acusada, esta contestó mediante oficio N° 6030-FAR de 12 de abril de 1996, informando que ordenó la detención preventiva de CAMARENA mediante resolución de 9 de abril de 1996 y detallando todo lo pertinente, como se lee de fojas 8 a 9 de este expediente. Sin embargo, al finalizar el escrito expresa que:

> "...
> 3. El sumario en cuestión fue remitido a la Fiscalía Sexta del Circuito de Panamá, mediante oficio N° 5072 del 9 de abril de 1996, a órdenes de quien se encuentra el detenido ..."

Como se infiere de lo transcrito el prenombrado detenido se encuentra a

órdenes de la Fiscalía Sexta del Circuito de Panamá, quien no tiene mando y jurisdicción en toda la República, por lo cual el conocimiento de esta acción no compete al Pleno de la Corte, siendo procedente declinar el conocimiento, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 2588 del Código Judicial.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2588 del Código Judicial la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLINA en el Segundo Tribunal Superior de Justicia el conocimiento de recurso de habeas corpus, a fin de que continúe la tramitación del caso y lo resuelva.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JOAQUÍN M. MARTÍNEZ PINZÓN CONTRA EL FISCAL CUARTO SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Eliécer Narciso Chacón Arias interpuso ante la Corte Suprema de Justicia acción de habeas corpus a favor de JOAQUÍN MAHARA MARTÍNEZ PINZÓN, quien se encuentra sindicado por delito de homicidio cometido en perjuicio de Eneida Cortez Cortez y Miguel Ángel Cubillos Quintanar, y contra el Fiscal Cuarto Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá.

Por acogido el negocio constitucional, se libró el mandamiento correspondiente, el que fue contestado por la autoridad acusada mediante oficio N° 1143 de 27 de marzo del año en curso. El Fiscal demandado acepta en su informe haber ordenado la detención de Martínez Pinzón, mediante resolución de 28 de febrero de 1996 y señala las circunstancias de hecho y de derecho que la motivaron.

Procede la Corte a determinar si la medida cautelar de carácter personal atacada cumple con los requisitos señalados en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 21 del texto fundamental.

El examen de los antecedentes pone en evidencia el claro cumplimiento de todos los requisitos contemplados en la ley para fundamentar la orden de detención acusada. Esto, porque la diligencia que la motiva indica: a) el hecho imputado: delito de homicidio cometido en perjuicio de Eneida Cortez Cortez y Miguel Ángel Cubillos Quintanar; b) los elementos probatorios allegados para la comprobación del hecho punible: diligencia de reconocimiento y levantamiento de los cadáveres efectuada por la Fiscalía Auxiliar de la República el 24 de abril de 1995; c) los elementos probatorios que figuran en el proceso contra la persona cuya detención se ordena: la declaración indagatoria rendida por Gustavo Adolfo Arosemena Cedeño, en la que indica que Martínez Pinzón fue el autor del ilícito (fs. 403-412, sumarias).

En cuanto a la exigencia contemplada en el artículo 2148 del Código Judicial, que condiciona la imposición de la medida privativa de libertad, se tiene por cumplido este requisito toda vez que el hecho punible que se le atribuye a Martínez Pinzón es el delito de homicidio, que tiene señalada pena

mínima de cinco años de prisión.

Por las consideraciones anteriores, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención de Joaquín M. Martínez Pinzón y, en consecuencia, ORDENA que el detenido sea puesto nuevamente a órdenes de la Fiscalía Cuarta Superior del Primer Distrito Judicial.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DE CEN MEI QUEN, WU YIN GLAN, ZHENG YU YUN, CEN TUO ZHOU Y CEN CUI QI CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE MIGRACIÓN Y NATURALIZACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La licenciada Sarai Blaisdell Núñez interpuso demanda de habeas corpus a favor de CEN MEI QUEN, WU YIN GLAN, ZHENG YU YUN, CEN TUO ZHOU y CEN CUI QI y en contra del Director Nacional de Migración y Naturalización.

Librado el mandamiento de habeas corpus contra el Director Nacional de Migración y Naturalización, dicho funcionario contestó, mediante Nota DNMYN-098-96 de 28 de marzo de 1996, lo siguiente:

"a) Es cierto que ordenamos la detención de los señores Cen Mei Quen, Wu Yin Glan, Zheng Yu Yun, Cen Tuo Zhou y Cen Cui Qi, de nacionalidad china, por no portar documentos válidos que acreditasen su estadía en el país.

b) Los motivos de hecho en que se fundamenta la detención de los señores Cen Mei Quen, Wu Yin Glan, Zheng Yu Yun, Cen Tuo Zhou y Cen Cui Qi, de nacionalidad china, son:

PRIMERO: El día 8 de marzo de 1996, los mencionados señores fueron detenidos por la Policía Nacional en un Operativo de Profilaxis Social, realizado en la Ciudad de Colón, por no tener los documentos reglamentarios que acreditasen su estadía legal en el país.

SEGUNDO: El día 12 de marzo la oficina regional de Migración en Colón, remitió a los señores Cen Mei Quen, Wu Yin Glan, Zhen Yu Yun, Cen Tuo Zhou y Cen Cui Qi, de nacionalidad china, a las oficinas centrales de esta Dirección, a fin de que se tomaran las medidas pertinentes al respecto.

TERCERO: Ante esta Dirección se apersonaron representantes de la Asociación China en Panamá, quienes regularmente atienden los asuntos de los ciudadanos provenientes de la China Continental, en vista de que los mismos carecen de Representación Diplomática en nuestro país. Dicha asociación a través del Presidente de la misma, manifestaron al Director de Migración y Naturalización que se harían responsables de los mismos, por lo que me solicitaron su cooperación a fin de que los señores antes mencionados no permanecieron recluidos en nuestras instalaciones el fin de semana, con el

compromiso de pagar la multa respectiva y presentarlos a nuestras oficinas el día lunes 18 de marzo del presente año.

CUARTO: El día lunes 18 de marzo, los mencionados ciudadanos se apersonaron a nuestra Dirección y fueron nuevamente detenidos a fin de cumplir con lo establecido en nuestro Decreto Ley N° 16 del 30 de junio de 1960, en relación a la permanencia ilegal de extranjeros en nuestro país.

Es importante recalcar que todos ellos han permanecido por más de dos (2) años en el territorio nacional, sin haber realizado ninguna gestión, a fin de obtener algún status migratorio en nuestro país.

Los motivos de derecho están fundamentados en los preceptos legales contenidos en el Decreto Ley N° 16 del 30 de junio de 1960, modificado por el Decreto Ley N° 13 del 20 de septiembre de 1965 y la Ley 6ta del 5 de marzo de 1980, específicamente los artículos 53, 58, 60, 65, 66 y 85, normas estas que son concordantes con el Precepto constitucional expresado en el Artículo 14 de nuestra Carta Magna que dispone que "La inmigración será regulada por la Ley en atención a los intereses sociales, económicos y demográficos del país."
...
c) Los señores CEN MEI QUEN, WU YIN GLAN, ZHENG YU YUN, CEN TUO ZHOU y CEN CUI QI, se encuentran bajo nuestra custodia, en espera de la resolución para ser efectiva su deportación del territorio nacional."

Al entrar a considerar el mérito del presente recurso de Habeas Corpus la Corte observa lo siguiente: la joven Zheng Yu Yun llegó al país el día 10 de febrero de 1994; los señores Cen Cui Qi y Cen Tuo Zhou ingresaron al país el 21 de febrero de 1993; y Los señores Cen Mei Quen y Wu Yin Glan ingresaron al país el 30 de junio de 1994; todos en calidad de turistas, y se les otorgó su visa en tal carácter. Al producirse la detención de los señores arriba mencionados el 8 de marzo de 1996 en un operativo de profilaxis social realizado en la Ciudad de Colón por la Policía Técnica Judicial, había vencido con exceso el plazo de vigencia de la visa de turista. Además, los señores arriba mencionados, al momento de su detención, no presentaron documento alguno que acreditara su permanencia legal dentro del territorio nacional.

Al examinar estos hechos, tenemos que el Decreto Ley 16 de 1960 modificado por la Ley 6 de 1980, faculta al Director de Migración y Naturalización para tomar medidas directas sobre quienes permanezcan en nuestro país. Así vemos que el artículo 65 de dicho Decreto Ley 16 señala que los extranjeros que permanezcan en el país después de la fecha de vencimiento de su visa o tarjeta de tránsito, serán puestos a órdenes del Ministerio de Gobierno y Justicia. Asimismo, el artículo 16 del referido Decreto Ley faculta a los funcionarios del Departamento de Migración y Naturalización para que aprehendan a cualquier extranjero que fuera sorprendido en el territorio nacional sin documentos que acrediten su permanencia legal.

De todo lo anterior se desprende que los señores Cen Mei Quen, Wu Yin Glan, Zheng Yu Yun, Cen Tuo Zhou y Cen Cui Qi han sido privados de su libertad por orden de autoridad competente y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley 16 de 1960, razón por la cual procede declarar legal la medida cautelar de privación de la libertad impuesta a los señores antes mencionados por el Departamento de Migración y Naturalización del Ministerio de Gobierno y Justicia.

La Corte desea llamar la atención sobre el tiempo en que las autoridades de migración pueden mantener recluido a un extranjero, mientras se toman las medidas que legalmente están autorizadas a tomar. Ello es que las autoridades de Migración pudieran mantener el tiempo de la detención, sin que se tomen las medidas que la Ley faculta tomar, entre ellas, deportar al extranjero. De manera que no es permisible, desde el punto de vista legal , mantener la detención por tiempo indefinido, sin que tampoco se defina jurídicamente la situación del detenido.

Por tanto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley DECLARA que es LEGAL la medida cautelar de privación de la libertad expedida y practicada por el Departamento de Migración y Naturalización contra CEN MEI QUEN, WU YIN GLAN, ZHENG YU YUN, CEN TUO ZHOU y CEN CUI QI.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARGO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CLEOTILDE DE GRACIA CONTRA EL FISCAL DUODÉCIMO DE CIRCUITO DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado Dagoberto Franco ha interpuesto recurso de apelación contra la sentencia expedida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia el 14 de marzo de 1996, mediante la cual se declara legal la detención preventiva de la cual es objeto la ciudadana CLOTILDE DE GRACIA.

La ciudadana antes mencionada sufre detención preventiva con fundamento en el informe de comisión suscrito el 19 de enero de 1996 por el Teniente Raúl E. Castañeda en el cual señala que el Sargento 1° 5092 Irene González, el Sargento 1° 5298 Miguel Aguilar, el Cabo 1° 7899 Alberto Chacón y el Cabo 1° 10554 Alcides De León le brindaron apoyo al Cabo 1° 11917 Marcelino Suira y al Cabo 2° 10766 Agustín Murgas, los cuales tenían aprehendidos a dos sujetos que ofrecían resistencia y trataban de evadirse. Añade el informe que se trataba de la ciudadana Cleotilde De Gracia y de Juan Ernesto Alveo Pacero, a quienes se les encontró una envoltura de plástico color amarillo con franjas marrón claro contentivas de una sustancia pastosa color chocolate que se presumía era "basuko". Agrega el informe que durante el allanamiento a la residencia de los señores antes mencionados también se encontró B/.80.00 en denominaciones de B/.20.00, además de B/.4.60 en monedas fraccionarias, y una cajeta de advance con papel plateado.

El Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial decretó legal la detención preventiva de la señora Clotilde De Gracia con fundamento en el informe de comisión suscrito por los agentes captores, así como por el señalamiento que le hacen dos de los agentes captores pues a juicio del Tribunal, de autos parece emerger graves indicios de presencia, oportunidad y actitud sospechosa. Lo antes expuesto, aunado al hecho de que se incautó 95.73 gramos de cocaína conlleva a calificar el delito como posesión ilícita de drogas agravado, el cual conlleva una pena mínima superior a los dos años de prisión lo cual amerita la detención preventiva.

También consta en el expediente tanto el informe del Cabo 1° 11917 Marcelino Suira (fojas 4-5) como la declaración rendida por éste ante la fiscalía (fojas 49-50) en las cuales el funcionario señala a la señora Clotilde De Gracia como la persona que tenía en su poder el paquete contentivo de la droga, quien al momento de la captura trató de darse a la fuga lo cual causó un forcejeo entre la mencionada señora De Gracia y el Cabo Suira. Aunado a lo anterior, consta igualmente, el informe del Teniente Raúl E. Castañedas (fojas 2-3) y su posterior declaración (fojas 47-48) en donde ratifica que la señora De Gracia tenía en su poder el paquete contentivo de la droga y que trató de darse a la fuga.

El Pleno estima acertado el criterio del Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial al declarar legal la detención de la señora Clotilde De Gracia por considerar que se ha acreditado la existencia del hecho punible, así como la vinculación de la investigada al ilícito de marras. En ese entonces, el ente juzgador estimó que los indicios surgidos en contra de la señora De Gracia eran suficientes para mantener la medida de la detención preventiva, aún a pesar de la declaración liberatoria del concubino de la acusada ya que existía en contra de la señora De Gracia el señalamiento de los agentes captores Raúl Enrique Castañeda y Marcelino Suira.

También existe constancia en el expediente de la orden de detención expedida el 23 de enero de 1996 por autoridad competente como lo es el Fiscal Duodécimo del Circuito de Panamá, visible a foja 14 del expediente contentivo de las sumarias, y el informe de laboratorio visible a foja 44 del mismo expediente el cual certifica que las muestras analizadas en el presente caso resultaron positivas para la determinación de COCAÍNA (basuko) en la cantidad de 95.73 gramos.

Todo lo anteriormente expuesto, aunado al hecho de que la infracción que se le atribuye a la señora De Gracia, contenida en el párrafo 2° del artículo 260 del Código Penal, conlleva pena privativa de la libertad superior a los dos años justifica, a nuestro juicio, la medida cautelar personal de la detención preventiva.

El Pleno considera que en la detención preventiva de la señora De Gracia no se ha infringido el debido proceso establecido en la Constitución Nacional y en las leyes de la República ni tampoco las normas jurídicas que regulan la detención preventiva, y, por lo tanto, el criterio vertido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial es correcto por lo que corresponde declarar legal la detención preventiva de la imputada en este proceso.

En consecuencia, la Corte Suprema, Pleno, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia expedida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial el 14 de marzo de 1996 mediante la cual se DECLARA que es LEGAL la detención de la señora CLOTILDE DE GRACIA, y por lo tanto, dispone que la detenida sea puesta nuevamente a órdenes del Fiscal Duodécimo de Circuito del Tercer Circuito Judicial de Panamá.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE GILBERTO ENRIQUE FLORES ORTIZ CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado José Ramiro Fonseca ha interpuesto acción de Habeas Corpus a favor de GILBERTO ENRIQUE FLORES ORTIZ contra el Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas.

Librado el mandamiento de habeas corpus, la autoridad demandada contestó

señalando que ordenó la detención preventiva de Flores Ortiz, que lo hizo en forma escrita mediante resolución de 29 de junio de 1995 aclarada por la resolución de 5 de octubre de 1995 y, que fue hasta el 15 de marzo de 1996 dicha orden se hizo efectiva. Como fundamentos de hecho y de derecho para decretar dicha detención expresa:

> "Los hechos que motivaron la detención preventiva del sindicado GILBERTO ENRIQUE FLORES ORTIZ, obedecen a que el día 25 de junio de 1995, fue retenido en Paso Canoas, provincia de Chiriquí, el ciudadano de origen guatemalteco NÉSTOR RODERICO MORENO ÁLVAREZ, a quien funcionarios de la Dirección de Aduanas le incautan Cinco (5) Kilos de Cocaína que llevaba oculto dentro de un vehículo a motor tipo pick-up.
>
> En el desarrollo de la instrucción sumarial se logra determinar que la sustancia ilícita incautada al premencionado MORENO ÁLVAREZ, había sido encaletada dentro del vehículo de marras en una residencia ubicada en las inmediaciones de Coronado, distrito de San Carlos, provincia de Panamá, de propiedad de ASTREA TRINIDAD ARANGO DE DÍAZ, el mismo 25 de junio y se acreditó en autos que para esa fecha se encontraban en el lugar, ésta, al igual que OMAR CASÍS MELO, y GILBERTO FLORES ORTIZ, quien conforme obra en autos, es el propietario de un vehículo marca Jeep, Tipo Cherokee, color azul, con matrícula 317543, que también estaba en Coronado el día de los hechos y que ha sido señalado por el sindicado MORENO ÁLVAREZ, como el vehículo del que se sacó una droga que fue enviada anteriormente hacia Guatemala, operación que se dio por los lados de la vía Porras.
>
> GILBERTO ENRIQUE FLORES ORTIZ, ha sido señalado en esta causa como la persona que en compañía de OMAR CASÍS MELO, se encargaron de embalar en compañía de NÉSTOR RODERICO MORENO ÁLVAREZ, la sustancia ilícita en el vehículo, ello emerge no solo de lo manifestado por NÉSTOR RODERICO MORENO ÁLVAREZ, sino también por lo depuesto por la sindicada ASTREA ARANGO DE DÍAZ y por JACINTO RODRÍGUEZ RIVERA.
>
> De estas declaraciones emergen graves indicios en contra del recurrente, dada su presencia física en el lugar de los hechos, presencia que no logra justificar a través de su indagatoria, en la que señala que su profesión es de Contador Público Autorizado, sin embargo dice haber acompañado a la sindicada ARANGO DE DÍAZ y a su familia, por el hecho de que iba a someter a un tratamiento médico a la abuela de ésta, tratamiento que no se llevó a efecto, alegando que ese día se dedicó a acompañar a JACINTO RODRÍGUEZ a comprar unas medicinas para fumigar la finca y hacer unas reparaciones. Esto pierde sustento cuando observamos lo depuesto por el señor JACINTO RODRÍGUEZ a fojas 52-56, cuando señala que no sabe a que vino a Coronado el prenombrado GILBERTO.
>
> Curiosamente en el hecho segundo del escrito de Habeas Corpus, el apoderado del sindicado le endosa a este testigo, afirmaciones en su declaración jurada, totalmente alejadas de la verdad que obra en autos, lo que evidencia, o un total desconocimiento de las constancias procesales o como elemento tendiente a justificar de manera desesperada la presencia de su patrocinado en el lugar de los hechos.
>
> Por otro lado debemos observar que ya el Pleno de esta corporación de justicia, bajo la ponencia del Honorable Magistrado ARTURO HOYOS, decretó legal la detención del recurrente, mediante resolución de fecha 24 de noviembre de 1995, que aparece legible a fojas 403-408 del sumario y no existe constancia procesal que haya variado desde aquella fecha, la situación jurídica del sindicado."

Lo expresado en el informe antes transcrito se ha podido verificar en los dos cuadernos antecedentes adjuntos a este expediente de habeas corpus,

comprobándose así que la detención preventiva dictada contra GILBERTO ENRIQUE FLORES ORTIZ, en efecto, se fundamentó en los citados artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

Aunado a lo expuesto, como indica el funcionario de instrucción, la Corte ya se pronunció sobre el mérito de la privación de libertad del prenombrado GILBERTO ENRIQUE FLORES ORTIZ por razón del mismo delito que nos ocupa, relacionado con Drogas, declarando LEGAL su detención; dicha resolución fue dictada el 24 de noviembre de 1995, consta de fs. 403 a 407 de los antecedentes y entre otras consideraciones expresa:

> "El sumario en el cual se ordenó la detención preventiva del señor Gilberto E. Flores fue iniciado de oficio por tratarse de un delito contra la salud pública relacionado con drogas, en el que se incautaron 4,760 gramos de cocaína. Luego, mediante resolución de 5 de octubre de 1995, la Fiscalía Especializada en Delitos relacionados con Drogas corrige el proveído de fecha 29 de junio de 1995, en lo que respecta al nombre correcto del sindicado GILBERTO E. FLORES y dispone que se realicen las gestiones pertinentes para que se ejecute la detención preventiva del mencionado señor.
>
> Del estudio del expediente, el Pleno de esta Corporación estima que las declaraciones indagatorias de los señores NÉSTOR RODERICO MORENO ÁLVAREZ, ATREA ARANGO DE DÍAZ y JACINTO RODRÍGUEZ RIVERA donde señalan que, efectivamente, Flores se encontraba presente el día de los hechos, aunado al comprobante de salarios y derechos de la Caja de Seguro Social de Gilberto E. Flores, encontrado mediante la diligencia de inspección ocular y registro, de la residencia N° 42, ubicada en la población de Coronado, Distrito de Chame, constituyen indicios suficientes que vinculan al señor Flores con los hechos a él imputados.
>
> Por último, dada la cantidad de sustancia ilícita encontrada, y dado que el delito de tráfico ilícito de drogas tiene fijada pena de prisión superior a dos años según la Ley 23 de 1986, el Pleno considera que en la orden de detención preventiva del señor Gilberto E. Flores no se ha infringido el debido proceso establecido en la Constitución Nacional y en las leyes de la República, ni tampoco las normas jurídicas que regulan la detención preventiva, razón por la cual lo procedente es, declarar legal dicha orden de detención."

Del escrito de habeas corpus se colige que se está cuestionando nuevamente la resolución de 29 de junio de 1995 que ordenó la detención de Gilberto Flores Ortíz y, además, se pretende desvirtuar el pronunciamiento que sobre el particular ha sido hecho con anterioridad por el Pleno de la Corte.

El mismo recurrente reconoce en su demanda de habeas corpus que en este caso "el hecho instruido tiene relación con el incautamiento de más de cuatro mil gramos de cocaína y que la detención fue decretada por escrito y por autoridad competente"; sin embargo, a pesar de ello, le indica a esta Corporación que es su "deber insoslayable" velar por la garantía fundamental de la libertad consagrada en la Constitución y nuestras leyes, cuando, como se ha visto, la situación que se plantea sobre la orden de detención del favorecido con esta acción constitucional ya fue juzgada y fallada por el Pleno de la Corte.

Debido a lo expresado y al hecho aludido por el Ministerio Público de que "no existe constancia procesal que haya variado desde aquella fecha, la situación jurídica del sindicado", no es procedente emitir un nuevo pronunciamiento sobre el mismo caso.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE esta acción de habeas corpus.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTO A FAVOR DE JEREMÍAS ATENCIO CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Eduardo Badillo Paz formalizó acción de habeas corpus contra el Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas y a favor de Jeremías Atencio.

Atencio admite haber sido detenido, el 17 de febrero último, por agentes de la Policía Nacional, porque "los policías simplemente me sorprendieron con la droga" (f. 14). Según el informe de novedad que da cuenta de su aprehensión, al momento de la captura le fueron ocupados 58 carrizos de plástico transparente contentivos de un polvo blanco que en la prueba de campo resultó ser cocaína (f. 11), así como también 71 balboas en 2 billetes de B/.20.00, 4 billetes de B/.5.00 y 11 billetes de B/.1.00 (f. 3).

Según afirma el detenido, poseía la droga para su consumo personal, lo que hace desde hace 10 años (fs. 13-15). El examen médico psiquiátrico que le fuera practicado indica que no hay evidencia de que Atencio dependa de droga alguna, aun cuando se comprobó historia de abuso de droga.

En cuanto a la procedencia del dinero, el detenido explica que lo recibió en liquidación de que fuera objeto como empleado de Estructuras Nacionales, hecho que tuviera lugar el día 13 de febrero, según documentación presentada por su abogado (fs. 41-42).

El examen de los antecedentes permite establecer que la detención tuvo lugar encontrándose Atencio en estado de flagrancia y mantenida mediante diligencia debidamente motivada de la Fiscalía de Drogas (fs. 22-23). En cuanto a la naturaleza del ilícito cometido, a pesar de que el detenido alega posesión de la droga para su consumo personal, la cantidad que le fuera ocupada (58 "carricitos") pareciera desvirtuar esa afirmación, y permite presumir fundadamente que se trata más bien de posesión agravada, con pena aplicable que excede en su mínimo los dos años de prisión.

Todo esta información indica, entonces, que en la aplicación de la medida cautelar acusada de ilegal se encuentran satisfechas las exigencias de los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

Por todo lo anterior, EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE ES LEGAL la detención de JEREMÍAS ATENCIO, y ordena que el detenido sea puesto nuevamente a órdenes del Fiscal Especial en delitos Relacionados con Drogas.

Notifíquese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DE RUBÉN ANTONIO MARTÍNEZ VALLE CONTRA EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ha ingresado al Pleno de la Corte Suprema, la acción de habeas corpus interpuesta por la Licenciada **IRIA BARRANCOS** a favor de **RUBÉN ANTONIO MARTÍNEZ VALLE**, y contra el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial.

Librado el mandamiento de habeas corpus, el Magistrado WILFREDO SÁENZ rindió su informe de conducta, mediante Oficio N° 90-SF de 28 de marzo de 1996, en los siguientes términos:

"...

A. No he ordenado la detención del señor **RUBÉN ANTONIO MARTÍNEZ VALLE**, la misma fue decretada por el Juzgado Primero del Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, en la resolución que califica la fase intermedia con fecha de 14 de septiembre de 1993, registrada de fojas 59 a 62, por medio de la cual le formulan cargos como presunto infractor de las disposiciones legales contenidas en el Capítulo IV, Título VIII, Libro II del Código Penal, es decir, por la expedición de cheques sin la suficiente provisión de fondos. Esa resolución quedó ejecutoriada porque no hubo impugnación.

Agotados los trámites del plenario, fue llevada a cabo la vista oral en horas de la tarde del día 7 de noviembre de 1994, el acta consta de fojas 76 a 84 y, el Tribunal de la Instancia concluyó la fase plenaria con la sentencia de 27 de diciembre de 1994, visible de fojas 85 a 91, declarando culpable al señor **RUBÉN ANTONIO MARTÍNEZ VALLE**, por el delito de expedición de cheques sin suficiente provisión de fondos, en detrimento de la empresa El Triángulo, S. A., lo condena a la pena de un (1) año de prisión y cincuenta (50) días multa.

Esa resolución fue impugnada y confirmada por este Tribunal, por medio de resolución con fecha de 18 de julio de 1995, visible de fojas 117 a 125. El negocio regresó al Tribunal de la Instancia y, por medio de Oficio N° 1505 de 6 de septiembre de 1995, visible a fojas 129, dirigido al Director de la Policía Técnica Judicial, se ordena la captura del procesado y que lo pongan a disposición de Corrección, pero el Oficio SG-498 de 13 de febrero de 1996, visible a fojas 130, dirigido por el Secretario General de la Policía Técnica Judicial al señor Juez Primero del Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial, comunica que el señor **RUBÉN MARTÍNEZ VALLE** fue capturado y quedó a órdenes del Tribunal de la Instancia.

B. Reiteramos las explicaciones en el epígrafe anterior, en cuanto a los motivos o fundamentos de hecho y de derecho para la detención preventiva; y

C. Actualmente el señor **RUBÉN ANTONIO MARTÍNEZ VALLE** está filiado bajo la responsabilidad del Juzgado Primero del Circuito, Ramo Penal, del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, según constancia de fojas 130. ...". (Fs. 13 y 14).

Del anterior informe se desprende, que el señor **RUBÉN ANTONIO MARTÍNEZ VALLE**, se encuentra cumpliendo una condena impuesta a través de una sentencia

debidamente ejecutoriada, dictada en un proceso penal ante el Juzgado Primero del Circuito, Ramo Penal, y confirmada posteriormente por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá.

Se hace necesario indicar que la acción de habeas corpus persigue la restitución de la libertad cuando ésta ha sido restringida a través de una detención ilegal o arbitraria. Pero la medida que justifica la privación de la libertad debe ser la detención preventiva del individuo. No es ilegal, pues, una detención cuando ésta se produce en virtud del cumplimiento de una condena jurisdiccional debidamente ejecutoriada. Por lo tanto, no es viable la acción de habeas corpus en dichos casos; a este respecto, ya se ha pronunciado la Corte, veamos este fallo de 28 de junio de 1994:

> "La acción de habeas corpus no puede prosperar en esta ocasión toda vez que no existe detención preventiva en esta ocasión, pues como quedó expuesto anteriormente se trata de una condena que está siendo cumplida por el sancionado y éste se halla a órdenes de la autoridad administrativa encargada de la ejecución de la pena privativa de la libertad.
>
> Toda persona que se halle cumpliendo la pena impuesta por una autoridad jurisdiccional no puede ser considerada detenida ilegalmente, ya que la detención preventiva no es la figura que justifica su privación de libertad sino, en todo caso, decisión judicial del tribunal competente que dictó sentencia y que no puede ser cuestionada por la vía del habeas corpus.
>
> Si el afectado o sus allegados consideran que la condena ha sido injusta o la misma no se ajusta a lo establecido en el ordenamiento jurídico existen otros medios en nuestra legislación para cuestionar la privación de libertad que sufre el sujeto por la condena impuesta en su contra."

En autos consta que MARTÍNEZ VALLE se encuentra a órdenes del Juzgado Primero de Circuito del Ramo Penal, que conoció de este proceso. Esto resulta incorrecto ya que el caso del accionante está en la etapa de ejecución penal y debe estar a órdenes de la Dirección Nacional de Corrección, por tanto, debe subsanarse dicho error.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención de RUBÉN ANTONIO MARTÍNEZ VALLE, y en consecuencia ORDENA sea filiado nuevamente en el respectivo Centro Penitenciario, a órdenes de la Dirección Nacional de Corrección del Ministerio de Gobierno y Justicia de Panamá.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

APELACIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE EDITRUDIS CAMPOS SAMANIEGO CONTRA EL FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON LA FAMILIA Y EL MENOR. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado **ERIC PRADO IZQUIERDO** ha formalizado apelación contra la sentencia emitida por el Segundo Tribunal Superior fechada dieciocho (18) de marzo de 1996, mediante la cual se declaró **LEGAL** la detención preventiva de su representado el señor **EDITRUDES CAMPOS SAMANIEGO.**

El Segundo Tribunal Superior sustentó su decisión en las siguientes consideraciones:

"...
Por esa situación de violencia y previendo males mayores, ocasiona la resolución de 4 de marzo de 1996 (fs. 35-39). Es cierto que el artículo 2148 del Código Judicial, establece que la detención corresponde en aquellos ilícitos que tienen previsto sanción mínima de dos años de prisión, pero esa disposición no debe verse en forma aislada sino que el artículo 2147 C. acápite c) del mismo texto legal faculta al funcionario de instrucción a decretar cualesquiera de las medidas cautelares, en circunstancias especiales como el caso sub júdice, en donde el señor Campos Samaniego no ha reflexionado cuando desde el 30 de junio de 1994 (fs. 13) el señor Corregidor de Pacora les impuso fianza de Paz y Buena Conducta y la quebrantó.

Es innegable de acuerdo a lo recopilado que la menor de 13 años YADIRA ISEL CAMPOS CAMPINES, hija de los involucrados está presenciando el maltrato físico y psicológico que su padre le infiere a su madre, incidentes desagradables que presencia al igual que su hermano (fs. 25-27), esto implica que la detención tiene fundamento legal, puesto que no se está conculcando ninguna garantía constitucional, procesal o sustantiva penal, que la orden dada y cumplida emana de funcionario de instrucción competente, en el ejercicio de sus facultades y con todas las formalidades legales, mereciendo desatarse esta acción en contra de las aspiraciones del petente." (Fs. 11 y 12).

Por su parte el recurrente expresa su inconformidad con el fallo impugnado básicamente, en lo siguiente:

"...
TERCERO: En la misma página, tercera, la resolución recurrida presenta como fundamento de la detención preventiva, en el último párrafo, el hecho que los hijos de los esposos Campos han presenciado los supuestos malos tratos infringidos por su padre a su madre. Suponiendo incluso que tal circunstancia sea correcta no observamos el fundamento planteado toda vez que el único supuesto de detención preventiva en el delito de violencia intrafamiliar se encuentra contemplado en el artículo 215-B del Código Judicial que expresamente señala que debe concurrir el debilitamiento permanente de un sentido o de un órgano, o una señal visible a simple vista y permanente en el rostro; o si inferida a mujer encinta apresura el alumbramiento. La presencia u observación del acto en cuestión **no constituye causal de detención preventiva**, salvo criterio más ilustrado.

CUARTO: La detención preventiva como institución es en sí misma una medida cautelar de carácter personal de restricción a la libertad ambulatoria constituyéndose, por tanto en la más estricta de dichas limitaciones. Nuestro ordenamiento de procedimiento penal **expresamente contempla** que sólo se aplicara la detención preventiva cuando no exista alternativa o pueda aplicarse alguna de las otras medidas de carácter cautelar previstas.
...
SEXTO: El delito que se le imputa a nuestro defendido se encuentra precisado en el expediente por Medicatura Forense del Ministerio Público como lesiones personales que tienen un efecto limitado a 8 DÍAS DE INCAPACIDAD DEFINITIVA Y NO PUSIERON EL PELIGRO LA VIDA de la lesionada y por ende la conducta censurable que pudiera endilgarse en su contra, en el peor de los casos, es la contemplada en el artículo 215-A del Código Penal que en lo pertinente

expresamente establece:

> 'ARTÍCULO 215-A: El miembro de una familia que agreda física o sicológicamente a otro miembro, será sancionado con 6 meses a un año de prisión, o con medida de seguridad curativa, o con ambas'. (Lo resaltado es mío)." (Fs. 14 y 15).

Para resolver el presente recurso, hacemos las siguientes consideraciones.

EDITRUDES CAMPOS SAMANIEGO ha venido protagonizando desde el día 22 de febrero pasado, una serie de ataques y agresiones contra su esposa **ROMELIA CAMPINES DE CAMPOS**, de la cual está separado de hecho desde el día 1° de julio de 1994, fecha en que así lo estableció el Corregidor de Pacora en resolución N° 70 CP, visible a foja 15 del expediente principal.

El cuatro de marzo pasado en horas de la madrugada la situación llegó al extremo en que **EDITRUDES CAMPOS SAMANIEGO** golpeó, arrastro e hirió con arma blanca a su esposa y además la amenazó de muerte (f. 30). A foja 31 del cuaderno principal constan los resultados del examen médico legal practicado en la persona de **ROMELIA CAMPINES DE CAMPOS:**

> "...
> Excoriación que mide 1.0 cms. de longitud en el puente de la naríz.
> Excoriación en un área que mide 8 x 7 cms. en región escapular superior izquierda.
> Excoriación que mide 2.0 cms. de longitud en región glútea derecha.
> Herida cortante no suturada que mide 0.8 x 0.3 cms. en cara anterior medial del 1/3 superior del muslo izquierdo.
> Excoriaciones múltiples en cadera y cara externa superior del muslo izquierdo.
> Excoriación en la rodilla derecha y cara externa del tobillo izquierdo.
> Las lesiones no pusieron en peligro la vida de la examinada.
> INCAPACIDAD DEFINITIVA: 8 DÍAS A PARTIR DEL DÍA DEL INCIDENTE. SALVO COMPLICACIONES.
> La lesión fue producida con objeto: CONTUNDENTE BORDES AGUDOS. CONTUNDENTE SUPERIOR IRREGULAR."

A lo largo del expediente, se pueden leer las diferentes declaraciones rendidas tanto por la propia víctima, así como por los vecinos quienes han sido testigos de las agresiones a que la ha sometido el señor **CAMPOS SAMANIEGO**. Así tenemos a, **ROBERTO MALONE DE MERCADO** (fs. 23-24), **MIRNA REYES IBARRA** (fs. 28-29), **BENILDA GARCÍA DE GONZÁLEZ** (fs 44-45), y la hija de los involucrados, la menor **YADIRA ISEL CAMPOS CAMPINES** (fs. 25-27), quienes concuerdan en que el detenido ha golpeado, insultado y agredido a la víctima en múltiples ocasiones y que en todas ellas se han visto obligados (los vecinos) a intervenir para evitar un resultado lamentable.

Con relación a lo alegado por el Licenciado PRADO, en el sentido de que el delito de violencia intrafamiliar contemplado en el artículo 215-A del Código Penal no contempla pena mínima de dos años y por tanto no es procedente la medida cautelar de detención preventiva en el caso de su defendido, debemos recordar que, el artículo 2148 del Código Judicial indica los dos presupuestos para que proceda la detención preventiva, estos son: cuando se proceda por delito que tenga señalada pena mínima de dos años; o **cuando el autor es sorprendido en flagrancia**. En este sentido, el artículo 2149 del mismo Código señala:

> "... También existe flagrancia **cuando el infractor es aprehendido por autoridad pública inmediatamente después de cometer un hecho punible y porque alguno lo señala como autor o partícipe**, ...". (La negrilla es nuestra).

Consta en el expediente, a foja 51 una nota dirigida al Director de la Cárcel Modelo fechada 5 de marzo de 1996 (el día siguiente de la agresión a **ROMELIA CAMPINES DE CAMPOS**), para que recibiera a **EDITRUDES CAMPOS SAMANIEGO** en calidad de detenido en dicho centro penitenciario, en virtud de orden de

detención girada el día 4 de marzo de 1996. Así pues, en vista de que **CAMPOS SAMANIEGO** fue aprehendido inmediatamente después de cometer el delito que se le imputa (el día siguiente), y además lo señalan los vecinos y la víctima como la persona que la agredió; se encuentra dentro de lo que señala el artículo 2148 en relación a la flagrancia como presupuesto de la detención preventiva.

Por otro lado, el artículo 2147-A del Código Judicial establece en su segundo párrafo que " nadie será sometido a medidas cautelares sin no existen graves indicios de responsabilidad en su contra". En el caso sub judice se presentan graves indicios de responsabilidad que vinculan al recurrente con el delito imputado. Esto es, el hecho de no negar en su declaración indagatoria la comisión del delito (f. 48); que varios testigos lo acusan; que lo señala la propia víctima; los antecedentes de violencia que constan en el expediente suministrados por la Corregiduría de Pacora (fs. 9-19).

Es menester citar incluso, el artículo 2147-C, literal c, del Código Judicial, que al referirse a las medidas cautelares personales indica:

> "Artículo 2147-C: Serán aplicables las medidas cautelares:
> ...
> c) Cuando, por circunstancias especiales o por la personalidad del imputado, **exista peligro concreto de que éste cometa delitos graves mediante el uso de armas u otros medios de violencia personal.**" (La negrilla es nuestra).

Tomando en cuenta que el detenido ha amenazado de muerte en múltiples ocasiones a la señora **ROMELIA CAMPINES DE CAMPOS** y que en la última ocasión le causó lesiones con arma blanca, es evidente que existe el peligro de que se cometa un delito más grave, como sería el de homicidio.

Se advierte, no obstante, en el sumario la posible comisión de otro delito, pero por el momento es prematuro, debido a la fase incipiente de las sumarias, calificar el hecho punible bajo el supuesto del delito de tentativa de homicidio.

Igualmente, estimamos que al momento de decretar la detención preventiva se encontraban cumplidos también los presupuestos del artículo 2159 del Código Judicial.

Luego de examinar el cuaderno penal se puede inferir que **EDITRUDES CAMPOS SAMANIEGO** se encuentra detenido preventivamente, con el objeto de continuar las investigaciones. En virtud de que en el recurso de habeas corpus se trata de establecer la vinculación del imputado con el hecho investigado, se concluye en este caso, que existe contra el precitado indicios graves, y por tanto se ha acreditado su vinculación con el delito de violencia intrafamiliar.

El delito por el que se investiga a **CAMPOS SAMANIEGO**, es de los que atentan contra el Orden Jurídico Familiar, contemplados en el Libro II, Título V, Capítulo V del Código Penal vigente, en los cuales el bien jurídico protegido lo es la integridad personal de los miembros de una familia. Por ello, estas conductas agresivas resultan mucho más reprobables por la sociedad en general, pues el daño que producen no sólo es físico o material, sino también psicológico y destruyen el pilar fundamental de la sociedad, como lo es la familia.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA en todas sus partes la resolución emitida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia fechada dieciocho (18) de marzo de 1996, mediante la cual se DECLARA LEGAL la detención preventiva del señor EDITRUDES CAMPOS SAMANIEGO.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ERVING ALBERTO HUNT TORRES CONTRA EL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor CÉSAR BENÍTEZ ha interpuesto acción de habeas corpus a favor de ERVING ALBERTO HUNT TORRES contra la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas.

Se libró el mandamiento de habeas corpus contra el funcionario demandado, quien rinde el informe que se transcribe a continuación, mediante Oficio N° 2965 de 27 de marzo de 1996.

"A. FUNDAMENTOS DE HECHO:

PRIMERO: Los hechos se dieron inicio el día 19 de enero del presente año, según lo señala el informe de novedad, cuando la joven JASNINIA XIOMARA MELO, de 20 años de edad, con cédula de identidad personal N° 8-800-1140, con residencia en la casa 2525 de la calle 7ª, Río Abajo, se presenta a la Corregiduría de Parque Lefevre y pide entrevistarse con una autoridad competente en asuntos de droga, ya que quería presentar una denuncia y mostrar una evidencia en contra de su concubino ERVIN ALBERTO HUNT TORRES, de 24 años de edad, con residencia en la casa 2525 de la calle 7ª Río Abajo, ya que el mismo cometía abusos y maltratos contra su persona y se dedicaba a la venta de sustancias ilícitas en el sector de la calle 7ª de Río Abajo, agregando además que en ese momento no tenía en la casa donde reside porque ella había sustraído de uno de los cajones de la cómoda de la mamá los sobrecitos que le quedaban en ese momento, donde le muestra al Teniente un (1) sobre plástico transparente el cual contenía seis (6) pequeños sobrecitos de plásticos transparentes, contentivos cada uno de ellos de una sustancia en forma de polvo de color blanco que se presume sea COCAÍNA. Igualmente manifiesta la señora Jasmina Xiomara que su concubino guarda la droga en la casa N° 2475-5 de la calle 5ª, lugar donde vive el padrastro. Se organiza un reconocimiento vehicular al área en compañía de la joven Jasmina y estando en la calle 5ª de Río Abajo, se visualiza cuando el denunciado ERVIN ALBERTO HUNT TORRES MELO entraba a la casa N° 2475-5. Una vez dejada la señora en la Sub-Estación de Policía de Parque Lefevre, y en base a la denuncia es detenido y conducido a la estación de Policía para su investigación correspondiente. En base a la información obtenida se procede a solicitar a éste Despacho la intervención de un Secretario, para que el mismo avalace un allanamiento en la residencia N° 2475-5 de la calle 5ª de Río Abajo. En el registro que se efectúa a la misma se encuentra en la parte posterior de la residencia, detrás de donde está el baño, enterrado en el suelo, un cartucho de plástico de color blanco conteniendo en su interior cierta cantidad de una sustancia en forma de polvo de color blanco que se presume sea COCAÍNA; y otra bolsita de papel de color blanco conteniendo en su interior cierta cantidad de sustancia en forma de polvo blanco que se presume sea azúcar de leche. Se detectó treinta (30) sobrecitos de plástico transparente contentivos cada uno de ellos con una sustancia que se presume sea COCAÍNA; otro sobre de plástico transparente conteniendo en interior la suma de diez (10) sobrecitos de plásticos transparentes con una sustancia en forma de

polvo de color blanco que se presume sea COCAÍNA. En dicha residencia se encontraba la señora LORENA MAGALI HERNÁNDEZ, la señora ROSARIO CHEN DE JAÉN, dueña de la casa, y el señor ARISTIDES HERNÁNDEZ CHEN, hijo de la dueña de la casa.

SEGUNDO: Al rendir declaración indagatoria el imputado ERVIN ALBERTO HUNT TORRES, niega toda vinculación con las sustancias ilícitas argumentando que la denuncia y acusaciones de su concubina son falsas, que todo se debe a que ese día había discutido con ella, y cuando se iba lo amenazó y le dijeron que iba a sacar una boleta para ponerlo preso.

TERCERO: Al rendir declaración indagatoria la prenombrada JASMINA XIOMARA TORRES, y que se enteró que la ley lo andaba buscando por estar vinculado en un caso de homicidio. Por otro lado manifiesta que trabaja en Pan Pix y que con el dinero que recibía de su sueldo y con el empeño de las prendas que le pertenecían a ella, compraba y revendía droga y cuando se endrogaba la golpeaba y la humillaba al igual que su mamá, donde se ratifica bajo la gravedad del juramento de los señalamientos vertidos en contra de su concubino ERVIN HUNT TORRES. (Fs. 36-40).

CUARTO: Se cuenta con la declaración jurada rendida por el señor ARISTIDES HERNÁNDEZ CHEN, a foja 42-44 de las presentes sumarias, donde nos manifestó que el prenombrado ERVIN ALBERTO HUNT TORRES, en algunas ocasiones le propuso que le guardara o vendiera droga, a lo que él se negó.

B. FUNDAMENTO DE DERECHO:

En las presentes sumarias el hecho punible que se investiga, el cual constituye un Delito Contra la Salud Pública Relacionado con Drogas, se encuentra plenamente acreditado en los siguientes puntos;

PRIMERO: La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, procedió a enviar al Laboratorio Técnico Especializado en Drogas de la Policía Técnica Judicial (P. T. J.) las sustancias ilícitas encontrada en la residencia 2475-5, para su análisis y peso, dando resultado positivo para la determinación de COCAÍNA, en la cantidad de 21.56 gramos, (fs. 66-67).

Cabe mencionar que al imputado ERVIN ALBERTO HUNT TORRES, primero se le efectúa una denuncia en la que se le señala de vender sustancias ilícitas, y que la misma la esconde en la casa 2475-5 donde vive su padrastro, por lo que se procede a la verificación de lugar y se observa al imputado entrar a dicha residencia, por lo que se detiene, y se procede a realizar diligencia de allanamiento, en donde se logra detectar gran cantidad de sustancias ilícita. Por otro lado se tienen las declaraciones de JASMINA XIOMARA MELO y la del señor ARISTIDES HERNÁNDEZ CHEN, quienes le hacen señalamientos directos al imputado ERVIN ALBERTO HUNT TORRES, y por último se cuenta con el indicio de presencia y oportunidad, con las sustancias ilícitas, por lo que nos hacen presumir la vinculación del señor ERVIN HUNT TORRES, con las sustancias incautadas.

Con todos estos elementos expuestos se dan los presupuestos legales que establece el Artículo 2148 y 2159 de nuestro Código Judicial a efecto de que éste Despacho haya adoptado la decisión jurisdiccional de ordenar la detención del prenombrado.

Le informo a usted, que mediante Oficio N° 2966 de fecha 29 de marzo del presente año, ponemos a su disposición al ciudadano ERVIN HUNT TORRES.

Adjunto al presente informe, y remito a usted copias debidamente autenticadas de las Sumarias".

El accionante mantiene el criterio de que el señor ERVING ALBERTO HUNT TORRES fue detenido por falsa denuncia realizada por su concubina, pero que nunca se le encontró en su poder ni en su propiedad droga alguna, por lo que considera ilegal la privación de su libertad.

En las sumarias que se le siguen al beneficiado con esta acción, se comprueba que efectivamente, la concubina de HUNT TORRES compareció el 19 de enero de 1996 a la Corregiduría de Parque Lefevre y solicitó entrevistarse con una autoridad competente en asuntos de drogas. Fue atendida por el Teniente 8137, CARLOS MONTES, Encargado de la Subdirección del DIIP, Área "D", Parque Lefevre y presentó denuncia contra ERVING ALBERTO HUNT TORRES, quien se dedica a vender droga en el Sector de la Calle Séptima de Río Abajo, pero que en ese momento no había droga en la referida residencia, ya que ella había sustraido de la cómoda del cuarto de la madre de HUNT TORRES, seis (6) sobres pequeños, los cuales presenta ante el funcionario, y los mismos contienen en su interior un polvo blanco que se presume sea droga. Señala también la denunciante que su concubino guarda la droga en la casa de su padrastro, señor ARISTIDES HERNÁNDEZ CHEN, ubicada Calle 5ª N° 2475, Río Abajo. En compañía de la denunciante, se organizó un reconocimiento vehicular en la Calle 5ª, Río Abajo, pudiendo comprobar que el joven ERVING ALBERTO HUNT TORRES entraba a la casa N° 24-75, señalada anteriormente por la denunciante como la vivienda del padrastro de HUNT TORRES.

La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, con base al artículo 2185 del Código Judicial decretó el allanamiento de la casa ubicada en Río Abajo, Calle 5ª N° 2475. Realizada la diligencia de allanamiento, por el Secretario de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, en funciones de Agente Especial, en asocio con unidades operativas de la Dirección de Información e Investigación Policial (DIIP), al revisar la residencia allanada, incautaron lo siguiente:

En la parte posterior de la residencia, detrás del baño, se pudo encontrar enterrado en el suelo un cartucho de plástico de color blanco conteniendo en su interior una bolsita de plástico transparente de regular tamaño, contentiva de cierta cantidad de una sustancia en forma de polvo de color blanco que se presume sea COCAÍNA y otra bolsita de papel de color blanco conteniendo en su interior cierta cantidad de una sustancia en forma de polvo blanco que se presume sea azúcar de leche. Se detectó también un sobre de plástico transparente con la cantidad de treinta (30) sobrecitos de plástico transparentes contentivos cada uno de ellos de una sustancia que se presume sea COCAÍNA, otro sobre o plástico transparente con la misma sustancia que se presume sea COCAÍNA.

A las sustancias incautadas se les practicó la respectiva prueba de campo, resultando Positiva para la determinación de la sustancia conocida como COCAÍNA, en la cantidad de 21.56 gramos (f. 67).

Pese a que el sindicado niega toda vinculación con el ilícito, existe la denuncia formulada en su contra por su concubina, ratificándose posteriormente de la misma (f. 41). Consta también en el expediente la ampliación de la declaración jurada rendida por ARISTIDES HERNÁNDEZ CHEN (fs. 42-44), quien se encontraba presente en la diligencia de allanamiento e indica que la droga encontrada en su residencia es del señor HUNT TORRES. Más adelante señala que el señor HUNT le había propuesto que le guardara y vendiera la droga. A pregunta que se le formulara en cuanto la razón que tenía el sindicado para que le guardara la droga, contestó: "... porque mi casa está en Calle 5ª Río Abajo y es un lugar más tranquilo y más seguro".

El 23 de enero de 1996, la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, ordenó la detención preventiva de ERVING ALBERTO HUNT TORRES.

De lo expuesto se desprende que, estamos en presencia de un delito Contra la Salud Pública, cuya pena mínima de prisión lo es de dos (2) años. Pese a que el imputado no fue sorprendido en flagrante delito, existen elementos probatorios que lo vinculan con el ilícito perseguido. Tales como la denuncia de su concubina, el señalamiento directo que le hace ARISTIDES HERNÁNDEZ CHEN, la diligencia de allanamiento en donde se incautó la droga denominada COCAÍNA en la cantidad de 21.56 gramos, lo que supone el propósito de comercializar con la

droga que fue incautada, lo que hace que el delito por el cual se encuentra detenido el referido HUNT TORRES, es de aquellos que atentan contra la Salud Pública, relacionadas con drogas y específicamente el de posesión ilícita de drogas para el tráfico, que se encuentra tipificado en el párrafo 2° del artículo 260 del Código Penal, en el que se establece una pena mínima de prisión de dos años; así como también la ratificación del informe de novedad rendida por el Teniente CARLOS ENRIQUE MONTES LASSO. Por tanto, se ha cumplido con los requisitos exigidos en los artículos 2148 y 21509 de la citada excerta legal.

En virtud de lo anterior, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva decretada contra ERVING ALBERTO HUNT TORRES, y, en consecuencia, ORDENA que vuelva a filiarse en el correspondiente centro penitenciario a órdenes de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE EMILIO SEGUNDO MONTENEGRO ABREGO CONTRA EL FISCAL PRIMERO SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Samuel A. Quintero V., actuando en representación de **EMILIO SEGUNDO MONTENEGRO ABREGO (A) NENE**, ha interpuesto acción de habeas corpus contra el Fiscal Primero Superior del Tercer Distrito Judicial.

Encontrándose en estado de resolver la acción de habeas corpus que nos ocupa, observa el Pleno que el Lcdo. Samuel A. Quintero presentó el día 23 de abril de 1996, escrito mediante el cual desiste de la acción interpuesta. Dado que el artículo 1073 del Código Judicial le otorga el derecho para desistir expresa o tácitamente del incidente, recurso o la demanda que haya interpuesto una persona, es perfectamente viable el desistimiento de la presente acción.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE el desistimiento de la acción de habeas corpus interpuesta por el Lcdo. Samuel A. Quintero en representación de EMILIO SEGUNDO MONTENEGRO ABREGO.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS HUMBERTO CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ARCADIO MOLINAR KING CONTRA EL FISCAL PRIMERO

SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor Arcadio Molinar King, actuando en su propio nombre y representación, ha interpuesto acción de habeas a su favor y contra el Fiscal Primero Superior del Primer Distrito Judicial.

Acogido el recurso se libró mandamiento de habeas corpus contra el Fiscal Primero Superior del Primer Distrito Judicial, quien mediante Oficio N° 590 de 21 de marzo de 1996, rindió el siguiente informe:

> "A) Este despacho no ordenó la detención del señor Arcadio Molinar King. Dicha detención fue ordenada por la Personería Segunda Municipal del Distrito de Colón, mediante resolución fechada, 25 de septiembre de 1995.
>
> B) En la providencia antes descrita, la Personería Segunda Municipal de Colón expuso los motivos y elementos probatorios de hecho y derecho que fundamentaron dicha decisión.
>
> C) En estos momentos el señor Arcadio Cristóbal Molinar King, se encuentra a órdenes de este despacho, toda vez que el expediente dentro del cual se decretó su detención ingresó a esta Fiscalía el día 5 de marzo de 1996."

En efecto, observa el Pleno que de fojas 15 a 17 del expediente principal, reposa la resolución fechada el 25 de septiembre de 1995 mediante la cual la Personería Segunda Municipal del Distrito de Colón, una vez efectuado un análisis inicial de los hechos relacionados con el homicidio del señor FIDEL CAMPOS, estimó que los mismos vinculan al señor ARCADIO MOLINAR KING razón por la cual se decretó su detención provisional.

Por su parte, el señor ARCADIO MOLINAR KING afirma en su escrito que la detención preventiva de la cual es objeto, infringe el artículo 22 de la Constitución Nacional, desarrollado por el artículo 1966 del Código Judicial, los cuales consagran la Garantía Constitucional del Principio de Presunción Inocencia, al ordenar su detención sin que existiera ningún indicio grave en su contra como autor del homicidio de FIDEL CAMPOS VÁSQUEZ.

Una vez analizadas las constancias procesales que figuran en las sumarias, que aún se encuentra en su estado inicial, observa el Pleno que existen graves indicios que vinculan al señor ARCADIO MOLINAR con los hechos a él imputados. Lo anterior es así, dado que presumiblemente el homicidio del señor Campos está directamente relacionado con el asalto a la Gasolinera ESSO de Calle 16, Pueblo Nuevo, el mismo día y muy cerca del lugar de los hechos. Con respecto a lo anterior, observa el Pleno que en su contra existe el señalamiento directo de LUIS CARLOS CRUZ PALACIOS (Agente de Seguridad de la estación), MÓNICA DEL CARMEN KEER SANGUILLÉN, conjuntamente con el señalamiento directo de los agentes de seguridad de la Cervecería Nacional, JAVIER ALBERTO RODRÍGUEZ y LUCAS CASTREJÓN MARTÍNEZ, quienes coinciden en la descripción física de ARCADIO MOLINAR que portaba "un pasamontaña o capucha", que se presentó a la estación y efectuó unos disparos.

Por su parte, el señor ARCADIO MOLINAR al rendir su declaración indagatoria, niega todo lo que se le imputa e inclusive señala que se había dado cuenta por los periódicos que habían matado a FIDEL CAMPOS al intentar robar la gasolinera de Calle 16 y, que igualmente, se había enterado que el vigilante había matado a FIDEL.

Finalmente, observa el Pleno que existen otras declaraciones, entre ellas las declaraciones de CELIA DOFFIS DE FLORES (A) CELIA y ALFONSO NATHANIEL GITTENS que afirman haber escuchado que quien le disparó a Fidel Campos, antes de hacerlo

le dijo "ESTO ES PARA QUE NO ROBES MAS". No obstante, lo anterior, existen otras declaraciones que desvirtúan lo anterior, pues, afirman que el Agente de Seguridad estaba herido y fue llevado al hospital, hecho este que efectivamente fue probado dentro del expediente.

Estima la Corte, que dado lo incipiente que aún se encuentra la fase sumarial y dado que existen versiones contrarias en cuanto a la autoría del homicidio del señor CAMPOS, aunado a que contra el señor ARCADIO MOLINAR figuran fuertes indicios, lo procedentes es, pues declarar legal su detención según lo dispuesto en el artículo 2148 del Código Judicial.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención de ARCADIO MOLINAR y por lo tanto, DISPONE que el detenido sea puesto de inmediato a órdenes del Fiscal Primero Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

APELACIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JAIME SIERRA PERALTA CONTRA LA JUEZ DÉCIMA TERCERA DEL CIRCUITO PENAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación ha ingresado al Pleno de la Corte Suprema, la acción de habeas corpus interpuesta por la señora **TERESA RANGEL DE SIERRA** a favor de **JAIME SIERRA PERALTA** y contra la Juez Décimo Tercera del Circuito Penal de Panamá.

El cuadernillo proviene del Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, luego de que éste declarara **LEGAL** la detención de **SIERRA PERALTA** mediante sentencia de doce (12) de marzo de 1996, la cual en su parte pertinente indica lo siguiente:

> "...
> El proceso bajo examen ha sido calificado en la fase intermedia con un enjuiciamiento criminal contra el señor SIERRA y otros imputados, quienes están vinculados con el delito de Tráfico Ilícito de Drogas, tipificado en el Capítulo V, Título VII, Libro Segundo del Código Penal. La resolución de enjuiciamiento está debidamente ejecutoriada y constan suficientes pruebas para vincular al señor SIERRA con el hecho punible, no sólo la declaración del señor CAICEDO, también la diligencia de allanamiento practicada a la residencia del señor SIERRA, además no debe revisarse una resolución de enjuiciamiento a través de una demanda de habeas corpus. ...
>
> Tampoco debe ventilarse en un proceso de habeas corpus el reemplazo de la medida cautelar personal de detención preventiva por otra u otras, porque ese asunto debe ser debatido a través de los incidentes o acciones legales correspondientes.
>
> No consta en el proceso que el señor imputado SIERRA esté afectado por una enfermedad de gravedad y, de ser así, deben utilizarse las acciones legales correspondientes, además la diabetes no es una

enfermedad que constituye fundamento para declarar ilegal una detención preventiva.

Ahora bien, en el proceso bajo examen, el negocio es del conocimiento de autoridad competente, está debidamente acreditada la existencia del hecho punible a través de los medios probatorios idóneos permitidos por el artículo 2073 del Código Judicial, el procesado ha sido enjuiciado y se le garantiza el debido proceso, por tanto, constan graves indicios en su contra, el delito imputado permite la detención preventiva porque la pena mínima no es menor de dos años de prisión, en consecuencia, están satisfechos los requisitos legales contemplados por el artículo 2159 del Código Judicial para sustentar la medida cautelar personal cuestionada." (Fs. 36 y 37).

Por su parte, la recurrente se limita, en su escrito de apelación, visible a foja 43 del cuadernillo, a señalar lo delicado del estado de salud del señor **SIERRA**:

"...

A. El Director de la Cárcel Modelo envió nota en vía fax, donde le solicita a la Magistrada Sandra Huertas, se le autorice al detenido Jaime I. Sierra P., sea atendido urgente por médico especialista (Internista Endocrino) en Centro Médico Hospitalario ya que el recluso está descompensado.

El fax fue enviado el día 12 de marzo de 1996 y el día 13 de marzo a la 1:30 p. m. fue recibido en el despacho de la Magistrada Sandra Huertas.

B. Se les envió además referencia de la Clínica de la Cárcel Modelo donde se solicita de manera urgente traslado al Centro Hospitalario al recluso Jaime Sierra P. quien está descompensado y tiene una glucosa arriba de 439 m. m.

Señor Magistrado el detenido hasta la fecha no ha sido ni trasladado ni atendido por médico especialista para que certifique las condiciones del señor Sierra."

De lo actuado en el sumario, se colige que en horas de la tarde del día 5 de mayo de 1994 fueron encontrados en el Terminal Aéreo de Carga de Tocumen, cuarenta (40) paquetes de forma rectangular, treinta y ocho (38) de ellos forrados con cinta adhesiva de diferentes colores y los restantes de color chocolate, veintiséis (26) paquetes de cinta adhesiva color chocolate y dos (2) bultos de sesenta y seis (66) paquetes contentivos todos de la droga **COCAÍNA**. La mencionada droga, cuya cantidad total fue de 68,770.00 gramos (f. 87), fue localizada dentro del camión Kia-Ceres, color celeste, matrícula N° 013405.

FAUSTO CAICEDO ALONSO señala a **JAIME SIERRA** como la persona que le propuso transportar la droga hasta el terminal aéreo. (Fs. 61-65). Igualmente, **MANUEL ANTONIO ARROYO** relata que **CAICEDO ALONSO** le dijo que el responsable de la carga era **JAIME SIERRA**.

Por otro lado, tenemos que, contra **JAIME ISIDRO SIERRA**, **FAUSTO CAICEDO ALONSO** y **MANUEL ANTONIO ARROYO** se ha dictado auto de enjuiciamiento, el cual se encuentra ejecutoriado y además con fecha de audiencia fijada para el día 22 de abril de 1996 a las dos de la tarde (2:00 p. m.). Lo anterior nos indica, que el Juez de conocimiento, ha considerado que existen méritos suficientes para llamar a juicio, es decir, que se encuentran cumplidos los requisitos del artículo 2222 del Código Judicial, respecto a los imputados en este proceso.

Así pues, resulta claro que se encuentran también cumplidos los requisitos del artículo 2148 del Código Judicial que establece cuándo se podrá decretar la detención preventiva; esto es, cuando se proceda por delito que tenga señalada pena mínima de dos (2) años, o cuando el autor o partícipe haya sido sorprendido en flagrancia. El delito por el cual se encuentra detenido **SIERRA PERALTA** es de

aquellos que atentan contra la Salud Pública relacionados con drogas, específicamente el de tráfico, que tiene señalado en el Código Penal pena mínima mayor de dos (2) años de prisión.

En relación al estado de salud de **SIERRA PERALTA**, consta en el cuadernillo de habeas corpus (fs. 39 y 41), la solicitud que hiciera el Director de la Cárcel Modelo, el día 12 de marzo del presente año, a fin de que se autorizara el traslado de **SIERRA PERALTA** al Cuarto de Urgencia del Hospital Santo Tomás debido a que siendo paciente diabético descompensado, su glicemia estaba en 439 mg.; por su parte, el Doctor **PEDRO SANTAMARÍA** aparece firmando una hoja de referencia, en la cual indica, igualmente, que los niveles de glicemia de **SIERRA PERALTA** se encuentran en 439 mg. Fue por lo anterior, que el Magistrado Sustanciador solicitó al Director de la Cárcel Modelo, mediante nota N° 439 fechada 26 de marzo de 1996, llevar a cabo las diligencias necesarias a fin de que **JAIME SIERRA PERALTA** fuera examinado por el Médico Forense del Instituto de Medicina Legal. Similar nota se envió al Director de dicho Instituto; por lo cual el día 29 de marzo de 1996, el médico forense, Doctor **FEDERICO HERRERA ORTIZ** procedió a examinar al detenido y rindió su informe mediante Oficio N° (/) 63-12101 de la misma fecha, en el cual solicitó el traslado del detenido "a la clínica para manejo y control médico de medicamentos, alimentación desde el día de hoy". Fue en atención a dicho informe, que el Despacho del Magistrado sustanciador solicitó al Director de la Cárcel Modelo mediante nota N° 471-96 de 29 de marzo de 1996, que se trasladara al señor **JAIME SIERRA PERALTA** a la Sala 31 del Hospital Santo Tomás, a fin de que recibiera la atención médica requerida.

El día 8 de abril de 1996 se recibió en el Despacho del Magistrado sustanciador una nota aclaratoria de parte del Doctor **HERRERA ORTIZ** fechada 2 de abril de 1996, Oficio N° 64-12024, en la cual indica que, en su informe de 29 de marzo de 1996, al solicitar el traslado del detenido a la clínica, se estaba refiriendo a la clínica de la Cárcel Modelo, y no a otro centro hospitalario.

En vista de que aparentemente el estado de salud del señor **SIERRA PERALTA** era delicado, se hacía necesario que el médico forense certificara si el mismo era grave, para efectos de la aplicación, al resolver el habeas corpus, del artículo 2147-D del Código Judicial vigente. Es así, que el 9 de abril de 1996 mediante Oficio N° (/) 64-12776, el Doctor **HERRERA ORTIZ** certifica que, al momento del examen que se le practicara el día 29 de marzo, el señor **SIERRA PERALTA** "NO ESTABA GRAVE".

De lo anterior se desprende que el señor **JAIME SIERRA PERALTA** no se encuentra ubicado dentro de los presupuestos del párrafo cuarto del artículo 2147-D del Código Judicial, es decir que, en vista de que su estado de salud no es grave, no se justifica el reemplazo de la medida cautelar de detención preventiva, puesto que la misma es legal ya que cumple con los artículos 2222 y 2148 del Código Judicial, como ya hemos visto.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA en todas sus partes la Resolución emitida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, fechada 12 de marzo de 1996, mediante la cual se DECLARA LEGAL la detención preventiva del señor JAIME ISIDRO SIERRA PERALTA, y en consecuencia ORDENA que sea filiado nuevamente en la Cárcel Modelo y se le traslade a la clínica de dicho centro penitenciario a efecto de que se cumpla lo recomendado por el Director Administrativo del Instituto de Medicina Legal en el Oficio N° 63-12-123 de 3 de abril de 1996 y por el médico forense en Oficio N° (/) 64-12776 de 9 de abril de 1996.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS

Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JOSÉ A. QUIÑONES CONTRA EL FISCAL SEGUNDO DEL CIRCUITO DE COLÓN. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación, conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la sentencia de 20 de marzo de 1996, dictada por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante la cual "DECLARA LEGAL la detención de JOSÉ ANTONIO QUIÑONES ...", en la acción de Habeas Corpus propuesta a su favor por el Licenciado ALEXIS JAVIER SINCLAIR PADILLA.

Pese a que el apoderado judicial de QUIÑONES no sustentó la apelación anunciada el 26 de marzo de 1996, procede el Pleno, sin más trámites, a resolver la alzada.

De los antecedentes enviados conjuntamente con el cuadernillo contentivo de la acción de habeas corpus, se colige que se trata de un caso relacionado con el delito genérico "Contra La Salud Pública", en el cual se encuentra involucrado el señor JOSÉ ANTONIO QUIÑONES.

La investigación sumarial la inicia la Fiscal Segunda del Circuito de Colón el 28 de julio de 1995, en base al informe que a través de la diligencia de allanamiento y registro remitió a ese Despacho la Secretaría de Drogas de Colón, de fecha 28 de julio de 1995. En tal sentido, consta a fojas 4-6 la diligencia de allanamiento y registro de la casa N° E-4-22 en la Barriada Nuevo Colón de propiedad de la señora JESSICA SMITH JONES, encontrando en la casa allanada "dos (2) forros de paquete con cinta adhesiva chocolate y verde en el porche de la casa, los cuales se encontraban impregnados de un polvo blanco que se presume sea cocaína ..." En la declaración jurada rendida por JESSICA IDILMA SMITH JONAM señala que conoce a JOSÉ QUIÑONES y que el mismo llegó a su casa como a las doce y medio día, pasando por la sala hacia la parte trasera de la vivienda donde queda un depósito y, como a los diez minutos llegó ROBERTO GAMARRA (A) CHITRA, con un paquete forrado de papel periódico que contenía una bolsa negra, quien pasó donde estaba QUIÑONES. Más adelante reconoce las dos bolsitas que le ponen de presente con dieciocho papeletas con polvo blanco, señalando que "... fue lo que le dio JOSÉ QUIÑONES a DAVIS ROSS, pero se lo dio envuelto en su mano ...".

El examen de la actuación sumarial revela que, a pesar de que el señor JOSÉ QUIÑONES en la declaración indagatoria, visible a fojas 99-100, niega haber estado en la residencia de JESSICA SMITH, lugar donde se realizó el allanamiento y se encontraran los paquetes que contenían droga, en su contra militan suficientes elementos probatorios que lo vinculan al ilícito investigado. Así, por ejemplo. el señalamiento que hace la señora JESSICA en el sentido de que QUIÑONES le entregara el paquete que contenía la droga al señor DAVID JAVIER ROSS BLANQUICET, quien se encontraba fuera de la casa E-37. Esta situación se relaciona, con la droga encontrada en el allanamiento que también se realizó a la vivienda (donde estaba ROSS), distinguida con el N° E-37 ubicada en la Barriada Nuevo Colón, de propiedad del primo de ROSS BLANQUICET, señor ONACIS REYES WONG FLORES, (fs. 11-13). En esta residencia se encontró droga distribuida en sobrecitos supuestamente destinadas para la venta. A pesar de que DAVID ROSS BLANQUICET manifiesta que la droga era de su propiedad, el señor WONG FLORES, en su declaración indagatoria manifestó que su primo (ROSS) vendía la droga que le proporcionaban los señores JOSÉ QUIÑONES y ROBERTO GAMARRA (fs. 37-40).

Aunado a los elementos probatorio a que se hace referencia anteriormente, consta a foja 111 el resultado del Laboratorio Técnico Especializado en Drogas, del Departamento de Criminalística de la Policía Técnica Judicial, que establece que las muestras analizadas resultaron positivas para la determinación de MARIHUANA en la cantidad de 54.47 gramos y COCAÍNA en la cantidad de 9.60 gramos,

lo que determina, a juicio del Pleno, que estaba dedicada a la venta para el consumo ilegal.

Esta Superioridad comparte el criterio del Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial en la sentencia apelada, dado que es evidente la existencia de suficientes elementos de convicción que vinculan la conducta del sumariado con el hecho ilícito que se investiga. En consecuencia, se ha dado cumplimiento a lo preceptuado en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial, en armonía con el artículo 260 del Código Penal, por tanto, procede la detención preventiva decretada en el negocio en estudio.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia apelada dictada por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JUAN CARLOS SOLÍS CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado Alfonso Saldaña Castillo presentó acción de habeas corpus a favor del señor **JUAN CARLOS SOLÍS**, quien se encuentra detenido por la supuesta comisión de delito contra la salud pública.

Ingresado el negocio a esta Corporación Judicial, se libró mandamiento de habeas corpus contra el Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas, quien respondió mediante Oficio N° 2796 de 21 de marzo de 1996, en el que informa que la detención preventiva del recurrente fue ordenada por medio de providencia motivada y explica los fundamentos de hecho y de derecho de dicha detención.

De acuerdo con dicho informe, la detención del señor JUAN CARLOS SOLÍS guarda relación con la de los señores OVIDIO ANCELMO ARIAS RENCINOS y JULIO ANÍBAL RUSTRIAN MÉNDEZ, ambos de nacionalidad guatemalteca, por parte de unidades del Departamento de Fiscalización Aduanera, en Paso Canoas, Provincia de Chiriquí, el 19 de febrero de 1996, quienes portaban sesenta y un (61) paquetes que contentivos de una sustancia que se presume era cocaína.

Como consecuencia de lo anterior, la Policía Técnica Judicial inició investigaciones que revelaron la posible existencia de una organización destinada al tráfico de sustancias ilícitas, motivo por el cual se practicaron varias diligencias dirigidas al esclarecimiento del hecho punible investigado.

Así, entre otras, se practicaron diligencias de allanamiento en dos residencias de propiedad de la señora GLADYS REYES DE RESTREPO, una ubicada en Linda Vista y la otra en Nuevo Emperador. En la primera encontraron cierta cantidad de herramientas, prensas de metal, moldes de hierro, piezas pertenecientes a tanques de combustibles de vehículos "y se logra la captura, después de una corta persecución, del ciudadano guatemalteco JUAN CARLOS SOLÍS RAMÍREZ, quien viajaba en el vehículo CHEVROLET CELEBRITY de la señora REYES". En la segunda residencia, se encontró gran cantidad de herramientas y aparejos

propios de un taller de soldadura y chapistería automotriz.

Como consecuencia de lo anterior, el demandante rindió declaración indagatoria ante la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, en la que niega toda vinculación con el ilícito investigado. Sin embargo, dentro de su billetera se le encontró un pedazo de papel con la combinación de una caja fuerte, cuya secuencia numérica corresponde a la de una que fue encontrada en la casa taller ubicada en Nuevo Emperador, propiedad de la señora GLADYS REYES DE RESTREPO.

De la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, se envió también el expediente contentivo de las sumarias seguidas a los señores OVIDIO ANCELMO RECINOS y OTROS, por delito contra la salud pública, dentro de las cuales se han incorporado las del señor JUAN CARLOS SOLÍS RAMÍREZ.

A fojas 282 y 283 de ese cuaderno, consta providencia fechada 28 de febrero de 1996, proferida por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, mediante la cual se ordena la detención preventiva de los señores JUAN CARLOS SOLÍS, GLADYS REYES DE RESTREPO, WILLIAM BOARILLA y JOSÉ MALDONADO y se dispone, igualmente, se les reciba declaración indagatoria.

El estudio de dichas sumarias pone en evidencia que las investigaciones adelantadas hasta este momento, vinculan al recurrente como parte de una organización destinada al tráfico internacional de estupefacientes y, consecuentemente, con el delito que se le imputa. La valoración de los elementos probatorios de fondo, es función del funcionario de instrucción y del juez de la causa, razón por la cual el tribunal de habeas corpus no debe evaluarlos en este momento.

Como corolario de lo anteriormente expuesto, se concluye que la detención preventiva del señor JUAN CARLOS SOLÍS no tiene vicios de ilegalidad, ya que cumple con los requisitos exigidos por los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

Por tanto, LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva del señor JUAN CARLOS SOLÍS y ORDENA que sea puesto a órdenes del Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
CON SALVAMENTO DE VOTO
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO JOSÉ MANUEL FAÚNDES

Como expresé en la lectura del Proyecto, sustento mi Salvamento de Voto en el hecho de que el supuesto imputado JUAN CARLOS SOLÍS tenga relación alguna con el cargamento de drogas encontrado a los que las portaban. Como igualmente expliqué, el hecho de haber andado con un vehículo desprovisto de drogas y perteneciente a uno de los implicados en el ilícito, no da mérito para que se le tenga como coautor, partícipe u otro aditamento penal en el Recurso de Habeas Corpus propuesto en su favor.

En el expediente no hay demostración alguna como para tenerlo relacionado con el caso en cuestión.

Fecha Ut Supra.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) CARLOS CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE RUBÉN ORTEGA MONTENEGRO, CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE CORRECCIÓN. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado José María Lezcano, en representación de **RUBÉN ORTEGA MONTENEGRO**, presentó acción de habeas corpus a su favor y contra la Dirección del Departamento de Corrección del Ministerio de Gobierno y Justicia, en virtud de que su representado ha cumplido los dos tercios de la pena privativa de libertad impuesta, manteniendo el comportamiento que exige la ley para optar por la libertad condicional y hasta la fecha no se le ha concedido ese derecho.

Librado el mandamiento correspondiente, el Director Nacional de Corrección remitió el oficio N° 1350-DNC. 96. S de 12 de abril de 1996 en el que informa que Rubén Ortega Montenegro se encuentra interno en el Centro de Rehabilitación El Renacer, en cumplimiento de la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, calendada el 2 de abril de 1991, que le impuso diez años de prisión por el homicidio de Manuel González Carrera. El 12 de octubre de 1995 cumplió dos tercios de la pena y el 12 de mayo de 1999, cumplirá la totalidad de la misma.

Si bien es cierto que el capítulo IX del Título III del Libro I del Código Penal regula la libertad condicional, no hay que perder de vista que se trata de una figura que aparece en el período de la ejecución penal, etapa ésta que es responsabilidad del Órgano Ejecutivo a través del Departamento de Corrección del Ministerio de Gobierno y Justicia y por tanto, es a esa instancia a la que compete la decisión sobre la ubicación y tratamiento penitenciario aplicable a cada persona que recibe una sentencia condenatoria limitativa o privativa de su libertad. La individualización administrativa de la pena, que es distinta a la individualización legal y a la de carácter judicial, es una facultad conferida al Ejecutivo, que le permite la rebaja de penas y la aplicación de sustitutivos al internamiento, de conformidad al sistema de tratamiento penitenciario que se adopte. Así, en vías de ejemplo, en otras latitudes rige el sistema progresivo técnico, que abarca varias etapas, con seguimiento interdisciplinario y permite la remisión de la pena a través de un proceso de rehabilitación integral, científicamente acreditado.

En Panamá, carecemos de una regulación de la ejecución penal y al tenor de los artículos 85, 86 y 87 del Código Penal, la libertad condicional no opera ipso facto se registra su cumplimiento cronológico, pues se requiere que el Órgano Ejecutivo, mediante resolución, la otorgue en cada caso en particular, señalando las condiciones y el tiempo. El Pleno considera que dadas las condiciones actuales del régimen penitenciario, el mantenimiento de estas instituciones que operan como alicientes o estímulos para alcanzar la libertad en períodos más cortos a los fijados por los Tribunales de Justicia, es recomendable y requiere de una reglamentación que la haga accesible y expedita y la despoje de su atributo de gracia y la convierta en uno de los derechos de los internos, especialmente de quienes acatan las normas disciplinarias y demuestran interés en reformar su conducta delictiva anterior.

En el presente caso, el Señor Ortega Montenegro se encuentra privado de libertad en cumplimiento de una sentencia condenatoria por el delito de homicidio y si bien ha cumplido las dos terceras partes de la misma, su libertad condicional debe ser resuelta por la autoridad que la ley establece, previa la evaluación de otros requisitos que deben concurrir por exigencia normativa y después de fijadas las condiciones que sean menester en el caso concreto.

Por tanto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la privación de libertad que cumple RUBÉN ORTEGA MONTENEGRO en este caso.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA POR EL LICENCIADO DARÍO CARRILLO EN FAVOR DEL SEÑOR WU JINTUAN (LEGAL) O NG JIN JUANG (USUAL) Y CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE MIGRACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Darío Carrillo interpuso ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia acción de habeas corpus a favor del señor WU JIN TUAN (nombre legal) o NG JIN JUANG (nombre usual) y contra el Director Nacional de Migración y Naturalización.

El licenciado Carrillo sustentó su acción con los siguientes argumentos:

> "El señor (legal) WU JINTUAN, fue detenido en el negocio de su hermano ubicado en ciudad Radial, corregimiento de Juan Díaz, por una supuesta suplantación de persona, circunstancia que fue plenamente aclarada.
>
> Pero es el caso que el señor WU JINTUAN, a pesar de las peticiones que conforme a derecho de acogerse a la Ley 16 de 30 de junio, modificada por decreto Ley 13 de 20 de septiembre de 1965, concretamente al párrafo segundo del artículo 58, que señala la obligación del funcionario de notificar al extranjero que tiene 30 días para legalizar su estancia en el país, lo que se hace es mantenerlo privado de su libertad por un hecho de (sic) en nuestro país no constituye delito o falta administrativa que amerita arresto." (Fs. 1-2).

Mediante Nota N° DNMYN-099-96, del 28 de marzo de 1996, el funcionario demandado remitió a esta Corporación de Justicia su informe de conducta, justificando la detención del señor WU JIN TUAN en las siguientes razones:

> "PRIMERO: Al momento de la detención del señor WU JIN TUAN ó NG JIN JUANG, retenía en su poder documentos de identidad personal pertenecientes al señor CHEN WAI KEN, de nacionalidad china, mediante los cuales intentó realizar una usurpación de identidad al momento de su detención por los agentes de la Policía Nacional de Don Bosco.
>
> SEGUNDO: Una vez puesto a nuestras órdenes, se pudo comprobar la verdadera identidad del ciudadano retenido, comprobando que el mismo es el señor WU JIN TUAN ó NG JIN TUANG, de nacionalidad china.
>
> TERCERO: Que, según nuestros archivos el señor WU JIN TUAN, de nacionalidad china, se encuentra en nuestro país desde el 24 de febrero de 1994, y hasta la fecha ha permanecido indocumentado en el país." (Fs. 5-6).

En el mismo informe, el Director Nacional de Migración y Naturalización agregó, que el actor está a órdenes de esa Dirección para ser deportado, según se ordenó mediante Resolución N° DNMYN-1229, del 26 de marzo de 1996, consultable a foja 11.

CONSIDERACIONES DEL PLENO DE LA CORTE

De acuerdo con las constancias de autos, el señor WU JIN TUAN ingresó al territorio nacional el 24 de febrero de 1994, en calidad de turista y con el propósito de visitar a sus familiares. Posteriormente, permaneció en el país sin contar con los documentos que lo autorizaran para residir legalmente en el mismo. Al ser detenido por la Policía Nacional, fue puesto a órdenes del Director Nacional del Migración y Naturalización quien ordenó su deportación mediante la resolución supra citada.

El licenciado Carrillo considera que la detención del señor WU JIN TUAN es ilegal porque, de acuerdo con el artículo 58 del Decreto-ley N° 16 de 1965, el funcionario demandado debió concederle un plazo de treinta días para legalizar su estancia en el país. A juicio del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, no le asiste la razón al licenciado Carrillo, porque el señor WU JIN TUAN permaneció ilegalmente en el país después de ingresar al mismo en calidad de turista y con el fin de visitar a sus familiares. El artículo 60 del citado Decreto-ley, faculta a los "funcionarios de Migración para aprehender a cualquier extranjero que ... fuere sorprendido en el territorio nacional sin documentos que acrediten su entrada legal, **su residencia o permanencia en el país, de conformidad con los requisitos legales**".

El Pleno de la Corte considera errónea la afirmación hecha por el licenciado Carrillo, en el sentido de que la Dirección Nacional de Migración y Naturalización estaba obligada a conceder al ciudadano WU JIN TUAN un plazo de treinta días para legalizar su permanencia en el país, ya que la parte final de la norma que dicho letrado cita como fundamento de la pretensión, también faculta a la referida entidad para notificar al infractor de la obligación que tiene de abandonar el país dentro del mismo plazo, "**sin perjuicio de las otras sanciones que establece este Decreto Ley**", entre las cuales está la deportación, tal como fue ordenada mediante Resolución N° DNMYN-1229, del 26 de marzo de 1996 (f. 11).

Además, el artículo 65 ibídem establece sobre este particular, que los extranjeros "que hubieren llegado al país sin haber llenado los requisitos legales de ingreso o **que permanecieren en el mismo después de vencer sus visas de** transeúntes, **turismo**, tránsito o visitante temporal, o sus tarjetas de turismo o de tránsito sin residencia autorizada, serán puestos a órdenes del Ministerio de Gobierno y Justicia **para ser deportados** o para tomar, respecto de ellos, cualquier otra medida que sea de lugar". La ejecución de estas deportaciones corresponde a la Dirección Nacional de Migración y Naturalización, según lo dispone el artículo 66 del Decreto-ley en cita. De acuerdo con este precepto y con el artículo 86 del mismo cuerpo legal, la resolución mediante la cual se ordena la deportación de un extranjero debe notificarse personalmente, pudiendo el afectado interponer el recurso de reconsideración o el de apelación, respectivamente, dentro de los tres días hábiles siguientes. Dicha resolución sólo podrá cumplirse, una vez que esté ejecutoriada.

Por las razones señaladas, el Pleno de la Corte estima que la detención del ciudadano chino WU JIN TUAN es legal y así debe declararse.

De consiguiente, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE ES LEGAL la detención del señor WU JIN TUAN (nombre legal) o NG JIN JUANG (nombre usual), quien está a órdenes de la Dirección Nacional de Migración y Naturalización del Ministerio de Gobierno y Justicia.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA DE VILLALAZ

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE GABRIEL ALEXIS APARICIO CARRERA CONTRA EL JUEZ SEXTO DE CIRCUITO DE CHIRIQUÍ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación, ha ingresado a la Corte Suprema de Justicia, la acción de habeas corpus interpuesta por el licenciado MARIO E. CONCEPCIÓN a favor de GABRIEL ALEXIS APARICIO CARRERA, contra el Juez Sexto de Circuito de Chiriquí.

Con anterioridad esta Corporación de Justicia resolvió, mediante sentencia de 6 de enero de 1993, el habeas corpus a favor de GABRIEL ALEXIS APARICIO CARRERA, en grado de apelación, contra los autos de llamamiento a juicio por el supuesto delito de hurto en perjuicio de BAPAMA, S. A. y contra el mismo funcionario, declarándose en ese entonces legal la detención.

El fundamento de la acción de habeas corpus, el accionante se basa en el hecho de que no existen elementos convincentes para mantener la detención de su defendido. Adiciona que el funcionario de instrucción, así como también el Juez de la causa, no actuaron "con la debida diligencia ya que en ninguno de estos procesos se ordenó la indagatoria de nuestro defendido y tampoco se hicieron las ampliaciones correspondientes a los negocios que existen en contra del procesado Aparicio Carrera". (F. 26).

Por su parte, el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, quien conoció de esta acción en primera instancia, en sentencia de 26 de marzo de 1996, "DECLARA LEGAL la detención preventiva de GABRIEL ALEXIS APARICIO CARRERA, quien se encuentra procesado por los delitos de hurto en perjuicio de BAPAMA, S. A., hurto en perjuicio de COBAPA, contra la libertad de empleados de Julio Alfonso Araúz Jované y contra la personalidad interna del Estado". Contra esta resolución, apeló el apoderado judicial del imputado, por la cual esta Superioridad procede a decidir el mérito de la misma.

El Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial consideró que en el presente caso se han cumplido las formalidades legales previstas en el artículo 2159 para ordenar la detención preventiva, haciendo un breve análisis de las cuatro (4) sumarias, por las cuales en tres de ellas ha sido llamado a juicio el señor GABRIEL ALEXIS APARICIO CARRERA.

1. Supuesto delito de hurto cometido contra BAPAMA, S. A. El Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, señala que en este caso la investigación fue calificada y valorada por el Juzgado Sexto del Circuito de Chiriquí, mediante Auto 348 de 30 de octubre de 1990 (fs. 233-237), cuya resolución en la parte pertinente señala:

> "El Tribunal luego del estudio de las piezas suministradas por el Ministerio Público estima que se han reunido los requisitos mínimos exigidos en el artículo 2222 del Código de Procedimiento para declarar que hay lugar al seguimiento de causa criminal contra GABRIEL ALEXIS APARICIO Y ABDIEL BLANCO dado que se ha acreditado el cuerpo del delito con el informe de rendición de cuentas presentado por Seúl Carrera y la libreta de facturas sobre el transporte de la mercancía los días 27 y 28 de octubre y 1° a 4 y 9 de noviembre y 13 de diciembre de 1987; y la vinculación de los sindicados al ilícito investigado surge del señalamiento que esboza el depositario Saúl Carrera y las declaraciones del transportista René Blanco".

2. Supuesto delito contra la libertad individual de unos empleados del señor JULIO ARAÚZ JOVANÉ. Las sumarias fueron calificadas por el Juzgado Sexto del Circuito de Chiriquí, en el Auto 230 de 23 de agosto de 1990, concluyendo con la apertura de causa criminal contra GABRIEL ALEXIS APARICIO CARRERA. El tribunal consideró lo siguiente:

> "El Tribunal después de analizar las diligencias practicadas durante la encuesta estima que se han reunido los requisitos indispensables señalados en el artículo 2222 del Código de Procedimiento para declarar que hay lugar al seguimiento de causa criminal contra el inculpado toda vez que se ha comprobado el cuerpo del delito con las deposiciones de CLAUDINO DE GRACIA CÁCERES JOSÉ INFORMAN GUERRA PINEDA Y SOZANTE CEBALLOS LEZCANO y las certificaciones practicadas a Guerra Pineda y De Gracia Cáceres (fs. 23-29), y la vinculación del sindicado al ilícito investigado surge de los graves indicios de oportunidad que emergen al aceptar su presencia en el lugar y tiempo de los hechos aunada a los señalamientos de De Gracia Cáceres, Guerra Pineda y Ceballos Lezcano".

3. El imputado APARICIO CARRERA fue llamado a juicio por el delito genérico contra el patrimonio de COPABA, según consta en el Auto 291 de 4 de julio de 1991, expedido por el Juzgado Sexto de Circuito de Chiriquí (fs. 525-528). El enjuiciamiento penal se hizo en base a:

> "El Tribunal después de analizar las diligencias practicadas durante la encuesta estima que se han reunido los requisitos indispensables para declarar que hay lugar para el enjuiciamiento criminal de ALEXIS APARICIO, dado que se ha acreditado el cuerpo del delito al acreditarse la propiedad y preexistencia de los materiales dolosamente sustraidos con los testimonios de LESLIE MARIELA CANDANEDO DE REAL (fs. 97-99) y KENIA ACOSTA DE GUERRA (fs. 102-103), con la Diligencia de Allanamiento realizada a la residencia del sindicado visible a fojas 4-6, con la nota expedida por el Contralor de la República LICDO. RUBÉN CARLES (fs. 22-29); y la vinculación del sindicado al ilícito investigado surge de la Diligencia de Allanamiento realizada a la Finca del sindicado (fs. 4-6)".

4. El último caso que se le sigue es contra la Personalidad Jurídica (interna) del Estado, de conformidad con el Auto 23 de 4 de octubre de 1995, dictada por el Juez demandado (fs. 2203-2246), en base a las siguientes consideraciones:

> "El Tribunal después de analizar exhaustivamente el caudal probatorio incorporado en este proceso, acoge el criterio vertido por el Tribunal Superior de Justicia del Tercer Distrito Judicial, cuando al conocer las presentes sumarias por razón de recurso de apelación interpuesto por las partes; declaró mediante resolución calendada 10 de julio del presente año, la nulidad de lo actuado en el proceso a partir de la foja 1821 y ordenó la reposición del mismo en el sentido de que los encartados se les debía encausar por los delitos contemplados en el Título IX del Código Penal, que se refiere genéricamente al delito CONTRA LA PERSONALIDAD JURÍDICA DEL ESTADO.
>
> Este criterio había sido plasmado desde un inicio en primera y segunda instancia cuando se resolvieron peticiones de Finanzas (sic) Excarcelarias a favor de los procesados, tal como puede constatarse en las diligencias consagradas en fojas 1010 a 1032 y 1033 a 150 (sic) del expediente.
>
> Las constancias procesales permiten establecer que el hecho perpetrado guarda relación con la existencia de un grupo de personas que se reúnen en varias ocasiones en diferentes lugares con la finalidad de planificar y estructurar un movimiento subversivo y en consecuencia desestabilizar el gobierno de ese entonces y el país en

> general; este extremo procesal se encuentra acreditado en la encuesta con las numerosas y varias diligencias y experticias que procesalmente no han sido desvirtuadas en la encuesta. De lo cual tenemos como elementos más sobresalientes la explosión ocurrida en los predios de La Feria de Boquete el dá (sic) 23 de abril de 1993, el cual a nuestro juicio constituye uno de los hechos que habían sido programados con anterioridad con el propósito de desestabilizar el gobierno de nuestro país. En ese sentido podemos señalar que la conducta desplegada por los procesados encuentra adecuación dentro del Título IX, Capítulo II, del Libro Segundo del Código Penal, así como también las disposiciones contenidas en el Título VII, Capítulo III, Ibídem, que se refiere a la Asociación Ilícita para Delinquir, el cual como hemos dicho han quedado debidamente acreditados en el expediente y con ellos también se acredita el aspecto objetivo del proceso o sea el cuerpo del delito.
> ...
> GABRIEL APARICIO (...), lo vinculan los testimonios de los señores JOSÉ o ISABEL ESTRIBÍ VILLARREAL (fs. 673-678), ERICK STAFF (fs. 919-938), PEDRO PITTÍ (fs. 1094-1096)".

El accionante mantiene el criterio que en el negocio que se le sigue por hurto en perjuicio de la empresa BAPAMA, S. A., su defendido no es responsable, ya que existía una acción de secuestro y el depositario es el que debe responder por los cargos.

Por otra parte señala que en el delito que se le sigue contra la personalidad interna del Estado, no se le proporcionó a su defendido la oportunidad de aportar pruebas para acreditar su inocencia. Aunque considera que en las ampliaciones que se han dado en el proceso, se exime de responsabilidad a APARICIO CARRERA, pero que aportará pruebas futuras, para demostrar que su representado no se encontraba en el país el día que ocurrieron los hechos investigados contra la personalidad interna del Estado.

El Pleno, luego del análisis de la acción de habeas corpus y de los expedientes principales que lo acompañan, advierte lo siguiente:

1. Que los cuatro delitos tipificados por la ley penal, a los que nos hemos referido anteriormente, y en los cuales se llama a juicio a GABRIEL ALEXIS APARICIO CARRERA, tienen pena privativa de libertad cuyo mínimo es superior a los dos años de prisión, por tanto se cumple con lo preceptuado en el artículo 2148 del Código Judicial.

2. Que existen elementos que vinculan al imputado con los hechos punibles que se investigan. Así tenemos que en delito de hurto contra BAPAMA, S. A. existe el señalamiento que hace el señor SAÚL CARRERA en su carácter de depositario, en el informe de rendición de cuentas y la libreta de facturas sobre el transporte de la mercancía. De igual forma, consta de fojas 211-213 del expediente distinguido con la Entrada N° 177, la declaración del señor RENÉ BLANCO, quien manifiesta que fue contratado por GABRIEL ALEXIS APARICIO CARRERA y a ABDIEL BLANCO para transportar la mercancía.

En cuanto al segundo delito contra la libertad individual de los empleados del señor JULIO ARAÚZ JOVANÉ, que se le sigue a GABRIEL ALEXIS APARICIO CARRERA, considera el Pleno que se ha cumplido con lo ordenado en el artículo 2222 del Código de Procedimiento Penal, en los señalamientos que se leen en las declaraciones rendidas por SOZANTE CEBALLOS LEZCANO (fs. 24-28); VICENTE RODRÍGUEZ SÁNCHEZ (fs. 68-69); JOSÉ DE LA CRUZ BATISTA QUINTERO (fs. 70-71); ANDRÉS ESPINOSA CEDEÑO (fs. 76-78); AQUILINO APOLINAR APARICIO (fs. 79-80), declaraciones que constan en el expediente N° 177.

El tercer delito que se le imputa es el de hurto contra la empresa CABAPA. Para tal efecto, se aprecia a fojas 426-427, del expediente ya citado, el allanamiento realizado a la Finca de propiedad del señor GABRIEL ALEXIS APARICIO CARRERA, y en el cual se acreditó la propiedad y preexistencia de los materiales dolosamente sustraídos por el referido APARICIO CARRERA. En dicha diligencia actuaron el Fiscal Primero del Circuito de Chiriquí, conjuntamente con el señor

DIOMEDES QUIEL PITTÍ, en carácter de Auditor de la Contraloría General de la República y las señoras LEYLIS MARIELA CANDANEDO DE REAL, cuya declaración se lee a fojas 516-518, así como también KENIA EDITH ACOSTA DE GUERRA (fs. 521-522), ambas empleadas del Consejo Nacional del Banano, quienes reconocieron el material hurtado.

Por último, el hecho delictivo contra la personalidad jurídica (interna) del Estado, en los hechos ocurridos en los predios de la Feria de Boquete, el 23 de abril de 1993, en el que se vincula la participación del prenombrado APARICIO CARRERA. Ello se comprueba en la ampliación indagatoria del señor ERICK ANTONIO STAFF (fs. 919-938), quien manifiesta que en las oficinas y en la finca de GABRIEL ALEXIS APARICIO CARRERA se realizaban las reuniones para planear los actos de desestabilización contra el gobierno. A foja 934 indica que Santo Morales le dijo a ALEXIS APARICIO que se fuera a Panamá, "para ver como estaba el asunto ..." Más adelante señala que "Alexis se fue y fue cuando lo agarraron allá".

Llama la atención del Pleno que en el informe rendido por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, visible a foja 19, se dice que el testimonio de PEDRO PITTÍ (fs. 1094-1096) vincula a APARICIO CARRERA con el ilícito investigado, pero, contrario a ello, más bien aclara que las declaraciones que hizo fue por presiones de que fue objeto, y que la reunión que tuvo con GABRIEL ALEXIS APARICIO CARRERA, en la finca de este último, fue para ver un ganado que le había propuesto venderle.

Es importante reiterar el fundamento de petición del apoderado judicial del beneficiado con esta acción, en el sentido de que su representado no ha rendido indagatoria. Con respecto a ello, en el expediente distinguido con el N° 177, a fojas 40-47, se lee la copia de la declaración indagatoria rendida por GABRIEL ALEXIS APARICIO CARRERA, en presencia de su abogado, licenciado GENEROSO HUMBERTO OLMOS M., en el delito que se le sigue contra la libertad Individual de los empleados de JULIO ALONSO ARAÚZ JOVANÉ.

Por su parte, el propio tribunal acepta que no se cumplió con la formalidad de la diligencia de indagatoria del prenombrado APARICIO CARRERA en los otros procesos que se le siguen, por las supuestas infructuosas diligencias realizadas al respecto.

La finalidad del habeas corpus consiste en una acción encaminada a determinar si una detención preventiva ha sido dictada con arreglo al ordenamiento procesal, y sino ha sido así, ordenar la ilegalidad de la detención y, en consecuencia, el cese de la privación de la libertad. No es misión del habeas corpus corregir procedimientos ocurridos en un proceso, por cuanto los medios a utilizarse son otros. No obstante, este tribunal de habeas corpus aún reconociendo que no puede corregir la anomalía, sí considera oportuno llamar la atención al tribunal de dicha omisión procesal.

El Pleno concluye que, efectivamente, la detención preventiva de el señor GABRIEL ALEXIS APARICIO CARRERA, fue decretada por autoridad competente para ello y que los requisitos previstos en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial, han sido cumplidos a cabalidad, ya que se procede contra delitos que tienen aparejados pena mínima de dos años de prisión y se ha acreditado la comisión de los hechos punibles y existen graves indicios de responsabilidad contra el señor APARICIO CARRERA.

En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia penal dictada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito, el 26 de marzo de 1996, dentro de la presente acción de habeas corpus.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA A FAVOR DE CAMILO BURROWS CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Edilberto Vásquez Atencio, interpuso recurso de habeas corpus a favor de **CAMILO BURROWS** contra el Director de la Policía Técnica Judicial.

Librado el mandamiento de habeas corpus en el término ordenado en el artículo 2567 del Código Judicial vigente, el despacho del funcionario requerido mediante oficio AL-0520-96 de 16 de abril de 1996, expresa lo que se transcribe a continuación:

"...
1. No es cierto que hemos ordenado la detención del señor Camilo Burrows.
2. No tiene razón de ser en base al punto anterior.
3. Tenemos conocimiento que el prenombrado Camilo Burrows se encuentra gozando de libertad. ...".

Esta Corporación de Justicia, en vías de determinar con exactitud la situación legal del señor Camilo Burrows través del Magistrado Ponente sostuvo conversación telefónica con la licenciada Chavarría de Asesoría Legal de la Policía Técnica Judicial, quien confirmó que desde el 12 de abril del año en curso, el señor Burrows fue puesto en libertad, en atención al oficio N° 1483 girado por el licenciado Roberto Murgas, Fiscal Quinto del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Como se colige de lo expuesto, en la actualidad, la persona en cuyo favor se ha promovido el presente habeas corpus no se encuentra privado de su libertad corporal, por lo que debe procederse de conformidad con lo anterior como lo establece el artículo 2572 del Código Judicial.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA CESE del procedimiento y DISPONE el archivo del expediente.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE FERNANDO SANTAMARÍA CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Eduardo Badillo Paz ha interpuesto ante esta Corporación de Justicia acción de habeas corpus a favor de FERNANDO SANTAMARÍA y contra el señor Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas.

Los argumentos expuestos por la parte actora para sustentar su acción son los siguientes:

> "PRIMERO: DE LOS HECHOS QUE DAN INICIO A LA PRESENTE INVESTIGACIÓN CRIMINAL.
> Que FERNANDO SANTAMARÍA fue capturado en la comunidad de Alcalde Díaz junto a dos personas.
>
> SEGUNDO: DE LA DECLARACIÓN INDAGATORIA Y DEL PESO DE LA DROGA.
> Que al ser detenido el señor FERNANDO SANTAMARÍA manifestó que la droga que se le encontró, el la compró para su consumo.
>
> Luego del análisis por parte de los funcionarios se determinó que el peso de la sustancia que se le encontró (cocaína) era de 1.65 gramos.
>
> TERCERO: DE LA VALORACIÓN LEGAL DE LOS HECHOS Y DE LO IMPROCEDENTE DE LA DETENCIÓN.
> Conviene señalar que el delito por el cual se investiga a FERNANDO SANTAMARÍA es el de POSESIÓN ILÍCITA DE DROGAS. (Este hecho deviene de la cantidad exigua encontrada 1.65 gramos) y que el delito de posesión de drogas tiene pena inferior a los dos (2) años conforme al artículo 260 del Código Penal y que de conformidad con el artículo 2148 del Código Judicial NO PROCEDE LA DETENCIÓN PREVENTIVA EN ESTOS CASOS."

Una vez ingresado el negocio a este despacho se libró mandamiento de habeas corpus correspondiente, y se ordenó al funcionario demandado que rindiera informe acerca de la orden de detención preventiva decretada. Oportunamente este funcionario contestó el mandamiento mediante su Oficio N° 3335 en el cual informó que ordenó la detención preventiva del señor Fernando Santamaría mediante Resolución de 26 de febrero de 1996, la cual fue proferida en virtud de los señalamientos formulados en su contra, a través del informe de novedad de foja 3 del expediente, donde se le acusa de haber tirado un (1) envase de cartón que contenía (14) carrizos de plástico transparente contentivos de un polvo de color blanco que se presumía era droga. Este señalamiento fue confirmado con la declaración indagatoria del señor Fernando Santamaría Rodríguez quien aceptó que la droga a él incautada era de su propiedad y aclaró que la poseía con el fin de consumirla. En cuanto a la naturaleza ilícita de la sustancia incautada consta en el expediente, a fojas 44 y 45, el dictamen emitido por el Laboratorio Especializado de la Policía Técnica Judicial en el cual se afirma que es cocaína con un peso de 1.65 gramos, distribuidos en quince (15) carrizos.

El peso de la cocaína incautada a Fernando Santamaría (14 carrizos) más la incautada a Melquiades Cedeño Moreno (1 carrizo) es de 1.65 gramos, cantidad que apenas excede de la dosis por ingestión, de un adicto, y el médico psiquiatra forense dictaminó que no había evidencia de que Fernando Santamaría Rodríguez dependiera de alguna droga, sin embargo también dictaminó que el imputado tiene historia de uso de cocaína desde la edad de 15 años, y que al examinarlo constató ausencia de vibrisas nasales. (Cfr. ps. 37, 39 y 45).

Aún cuando la cocaína está dividida en catorce (14) dosis y el sindicado fue aprehendido en horas de la madrugada en compañía de otra dos personas, a uno de los cuales se le incautó un carrizo con cocaína, la historia de abuso de drogas del imputado, la ausencia de vibrisas nasales que presentó al ser examinado y la no existencia de otras pruebas que indiquen que la cocaína sería traficada, parecen indicar que en esta incipiente investigación estamos frente a un caso de simple posesión de drogas ilícitas tipificado en el primer párrafo del artículo 260 del Código Penal. Este delito está sancionado con prisión cuyo mínimo es de un (1) año, y el artículo 2148 del Código Judicial establece que se podrá decretar la detención preventiva, cuando el delito que se configura tiene señalado pena mínima de dos años de prisión, por tal motivo la detención

preventiva debe declararse ilegal ya que infringe el artículo 2148 anteriormente mencionado, sin perjuicio de que posteriormente se alleguen al sumario evidencias que desvirtúen la valoración de las pruebas que se hace en la presente decisión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA ILEGAL la detención del señor FERNANDO SANTAMARÍA RODRÍGUEZ, ordenada por el señor Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, mediante diligencia fechada el 26 de febrero de 1996, por Delito contra la Salud Pública, y ORDENA su libertad si no existe orden de detención en su contra por otra causa.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADO POR EL LICENCIADO GIOVANI A. FLETCHER H., EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, CONTRA EL ARTÍCULO 637 DEL CÓDIGO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DOCE (12) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Giovani A. Fletcher H., actuando en su propio nombre, ha presentado acción autónoma de inconstitucionalidad contra el artículo 637 del Código Judicial.

Corresponde en esta etapa del trámite determinar si esta iniciativa constitucional ha sido presentada con apego a los presupuestos formales que establecen los artículos 2551 y 654 del Código Judicial.

La lectura del libelo permite advertir, de inmediato, la pretermisión de algunas formalidades. Así, el demandante satisface las exigencias a que se refieren los numerales 1 y 2 del artículo 2551 del Código Judicial, de naturaleza especial y referidos a este proceso en particular, no así una de carácter general, de las regladas por el inciso primero de dicha norma bajo el título de "requisitos comunes a toda demanda", como lo es el deber de señalar "Los hechos que sirven de fundamento a las pretensiones, determinados y numerados en cifras o por medio del adjetivo ordinal correspondiente" (artículo 654, numeral 6, C. J.).

En lo atinente al concepto de la infracción de las normas fundamentales supuestamente vulneradas (artículo 2551, numeral 2, C. J.), observa la Corte que la exposición que trae el libelo de la demanda es confusa, que utiliza un estilo que no es directo, lo que aunado a la omisión en presentar los hechos, dificultaría en forma considerable la tarea hermenéutica del operador-intérprete de la Ley Suprema.

El examen permite establecer, entonces, que la demanda se encuentra en la situación de no viabilidad a que se refiere la doctrina sentada por esta Corporación, según la cual la admisibilidad sólo puede ser resuelta de modo favorable cuando se cumple con todos y cada uno de los requisitos formales señalados por las normas antes mencionadas.

Por lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre

de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el licenciado Giovani A. Fletcher H., en su propio nombre, contra el artículo 637 del Código Judicial.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR LA FIRMA FORENSE ALEMÁN, CORDERO, GALINDO & LEE EN REPRESENTACIÓN DE EMANUEL GONZÁLEZ REVILLA EN SU CONDICIÓN DE PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN PANAMEÑA DE BANCOS CONTRA LA FRASE "ASOCIACIÓN BANCARIA NACIONAL", CONTENIDA EN EL LITERAL D) DEL ARTÍCULO 5 DEL DECRETO DE GABINETE N° 238 DE 2 DE JULIO DE 1970. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, DOCE (12) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La firma forense Alemán, Cordero, Galindo y Lee, actuando en nombre y representación de **EMANUEL GONZÁLEZ REVILLA** en su condición de Presidente de la **ASOCIACIÓN PANAMEÑA DE BANCOS**, presentó demanda de inconstitucionalidad contra la frase "Asociación Bancaria Nacional", contenida en el literal d) del artículo 5 del Decreto de Gabinete N° 238 de 2 de julio de 1970, cuyo texto transcribimos a continuación:

> "**Artículo 5**. La Comisión estará integrada por siete (7) miembros con derecho a voz y voto, a saber:
> a. El Ministro de Planificación y Política Económica quien la presidirá;
> b. El Ministro de Hacienda y Tesoro;
> c. El Gerente General del Banco Nacional de Panamá;
> d. Tres (3) representantes de los Bancos, quienes deberán ser ciudadanos panameños, domiciliados en la República, y funcionarios de banco. Estos serán nombrados por el Órgano Ejecutivo de tres (3) ternas que le presentará la **Asociación Bancaria de Panamá**; y,
> e. Un miembro nombrado por el Órgano Ejecutivo quien no podrá ser director, dignatario o empleado de Banco." (Resalta la Corte).

El actor opina que la frase acusada es inconstitucional porque crea un fuero o privilegio a favor de la Asociación Bancaria de Panamá, al excluir a otras asociaciones de bancos legalmente establecidas, tal como lo es la Asociación Panameña de Bancos, de la oportunidad de presentar sus ternas para la designación de los tres miembros que nombra el Órgano Ejecutivo como representantes del sector bancario ante la Comisión Bancaria Nacional. Considera el demandante que se viola el principio de igualdad ante la ley, artículo 20 de la C. N., y la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 que prohíbe crear fueros o privilegios personales.

LA OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

Correspondió a la Procuraduría de la Administración el turno para emitir concepto dentro de este negocio constitucional, lo cual hizo por medio de la Vista N° 393 de 21 de septiembre de 1995, según se aprecia de fojas 13 a 19. Al emitir el referido concepto, la Procuraduría solicitó la declaración de inconstitucionalidad de la frase acusada por violar el artículo 19 de la Carta Magna en los siguientes términos:

"La disposición transcrita, contiene una prohibición de fueros o privilegios de carácter personal, es decir, su aplicación se extiende tanto a las personas naturales, como a las personas jurídicas, al respecto pueden ser consultados los fallos de la Corte Suprema fechados: 28 de mayo de 1979 y 24 de junio de 1995 ...
...
Como puede observarse, la Comisión Bancaria Nacional, es un organismo colegiado; cuyo objetivo fundamental es el de velar porque se mantenga la solidez y eficiencia del sistema bancario, a fin de promover las condiciones monetarias y crediticias adecuadas para la estabilidad y crecimiento de la economía nacional. Este fin en sí mismo, al igual que los restantes, que la ley le ordena, exigen que en la Comisión Bancaria Nacional estén representados los sectores más autorizados y vinculados con la actividad económica y financiera del país, y por ende con el desarrollo de nuestro centro bancario.

La amplia representación del Estado, a través de los Ministros de Planificación y Política Económica, y de Hacienda y Tesoro, del Gerente General del Banco Nacional de Panamá y de un miembro designado por el Órgano Ejecutivo, se complementa con la presencia del sector financiero, por medio de tres (3) representantes de los Bancos, quienes además de ser funcionarios de los mismos, deben también ser panameños domiciliados en la República. Sin embargo, esta representación está condicionada al hecho de que sólo la Asociación Bancaria de Panamá, puede presentar las tres ternas, de las cuales se nombrarán a los miembros de este sector.

Coincidimos, pues, con el demandante, en que al expresar la disposición acusada de inconstitucional, que los representantes de los bancos serán nombrados de las ternas que presenta la Asociación Bancaria de Panamá, se limita la participación de otras agrupaciones o asociaciones de bancos del país, ante la Comisión Bancaria de Panamá (sic)."

ALEGATO DE PARTE INTERESADA

La firma forense MORENO Y FÁBREGA presentó de fojas 26 a 35 su alegato como parte interesada en la demanda que nos ocupa, oponiéndose a la declaración de inconstitucionalidad, básicamente aludiendo a la representatividad que tiene Asociación Bancaria Nacional, argumentos que expresó en los siguientes términos:

1. La norma no consagra ningún privilegio o fuero por razones personales. La potestad allí consagrada permite a la Asociación Bancaria Nacional designar tres ternas de las cuales se escogerán tres banqueros que desempeñarán funciones públicas, en razón de los factores o elementos de representatividad que tiene dicha Asociación. (Fs. 29).

2. La Asociación Bancaria Nacional es la más representativa porque admite en su seno cualquier clase de bancos, mientras que la Asociación Panameña de Bancos está limitada en este sentido.

3. La norma impugnada no es violatoria del artículo 19 de la Carta Magna, en primer lugar, porque este artículo no es aplicable tratándose de personas jurídicas (Sentencias de 25 de marzo de 1985 y 2 de enero de 1985); y en segundo lugar, porque se le concede esta facultad a la organización más representativa.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

Observa el Pleno que se han invocado como violadas las normas contenidas en los artículos 19 y 20 de la Constitución Nacional, las cuales preceptúan respectivamente que, "No habrá fueros ni privilegios personales ni discriminación por razón de raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas políticas"; y que "Los panameños y los extranjeros son iguales ante la Ley, pero ésta podrá, por razones de trabajo, de salubridad, moralidad, seguridad pública y economía nacional, subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de determinadas actividades a los extranjeros en general ...".

En cuanto a la interpretación de las normas constitucionales citadas, no comparte la Corte el criterio vertido en el escrito de oposición presentado por la firma Moreno y Fábrega, en el sentido de que el artículo 19 de la Constitución vigente debe interpretarse de manera restrictiva y no aplicarse al caso de las personas jurídicas. El Pleno en sentencia de 3 de enero de 1994, en relación con la interpretación del artículo 19 constitucional, expresó lo siguiente:

> "En materia de la tutela de los derechos fundamentales del individuo, una comprensión lógica y sistemática del ordenamiento constitucional autoriza pensar que el artículo 19 no contiene una lista o catálogo cerrado -numerus clausus- de los tratos desiguales a los que los destinatarios del ordenamiento jurídico pudieran verse sometidos.
> ...
> Para entender cabalmente el problema constitucional planteado es necesario considerar que la prohibición de fueros y privilegios personales que consagra el artículo 19 de la Constitución es consecuencia o derivación lógica del principio de igualdad ante la ley que recoge el siguiente artículo -20- de la Carta Magna.
>
> El principio de igualdad ante la ley, en su acepción objetiva, condiciona nuestro ordenamiento e implica una aplicación uniforme de la ley ante supuestos fácticos iguales o semejantes. Desde la óptica subjetiva se traduce en la prohibición de los tratos desfavorables, fueros y privilegios odiosos que fueran entronizados en el pasado. Por ello, no se puede tomar como correcto el análisis interpretativo del catálogo cerrado que prohíbe, tan sólo, los privilegios personales o las discriminaciones por razones de raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas políticas. Se impone una visión dialéctica, integradora, dirigida a reforzar, sin distinción, la igualdad jurídica de todos los que se encuentren bajo la jurisdicción e imperio de la ley nacional, respetando obviamente las excepciones que imponen la ley y el hecho cierto de que para igualar a los desiguales procede tratar de manera razonablemente distinta a los más débiles. (Sentencia de 3 de enero de 1994, en demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el licenciado Rodrigo Anguizola contra el artículo 2433 del Código Judicial).

En este orden de ideas, cabe agregar otro criterio reiterado por nuestra jurisprudencia, y que en relación con el artículo 19 constitucional ha señalado que, **la existencia de un privilegio infractor de la norma constitucional requiere ineludiblemente que tal privilegio le sea concedido a unos con exclusión de otros que se encuentren en igualdad de condiciones**. (Sentencia de 16 de julio de 1987 en demanda de inconstitucionalidad presentada por el doctor Carlos Iván Zúñiga contra el numeral 2 del artículo 206 de la Ley 49 de 4 de diciembre de 1984).

Corresponde al Pleno de esta Corporación de Justicia entonces, determinar si la Asociación Bancaria Nacional se encuentra en igualdad de condiciones con la Asociación Panameña de Bancos, quien en este caso acusa de inconstitucional la frase impugnada, por otorgar, a su juicio, privilegio a favor de dicha asociación bancaria.

La posición y condición de ambas Asociaciones de bancos, tanto la Asociación Bancaria Nacional como la Asociación Panameña de Bancos depende en gran medida de la naturaleza de ambas asociaciones, de quiénes forman parte de una y otra y de sus fines y objetivos, premisas que se definen en los Estatutos correspondientes, los cuales constan en el expediente. Así, los artículos cuarto y quinto de los Estatutos de la Asociación Bancaria Nacional, regulan la capacidad de asociarse y disponen respectivamente lo siguiente: "Toda entidad bancaria legalmente establecida en el país tendrá derecho a solicitar su admisión como miembro. No necesariamente se requerirá para solicitar el ingreso que la entidad aspirante a ello sea exclusivamente de banca comercial. Pero en todo caso, las solicitudes a ingreso deberán ser consideradas y aprobadas o negadas por la Asociación"; y que "Las entidades bancarias, de ahorro, industriales o de otro tipo de actividad financiera que sean organismos gubernamentales o en las

que el Gobierno tenga mayoría de acciones tendrán facultades automáticamente a solicitar que se les tenga como adectos o cuasi-asociados a la Asociación Bancaria de Panamá, desde el momento en que así lo comuniquen para participar en sus reuniones con derecho a voz y sin pagar las cuotas de admisión ni mensuales." (Fs. 80).

Por su parte, el artículo 6 de los Estatutos de la Asociación Panameña de Bancos establece que, "Serán miembros de la asociación, aquellas instituciones bancarias de capital panameño legalmente establecidas en Panamá cuya admisión haya sido acordada por la Asamblea General y los bancos de capital extranjero establecidos en Panamá que tengan una participación importante en el mercado local, que sean invitados por la Junta Directiva y aceptados como miembros de la Asamblea General." (Fs. 59).

Tal como se observa en los textos de los Estatutos citados, en ambos casos se supedita el ingreso de los bancos solicitantes a la aprobación de la Asociación o Asamblea General, e incluso en los Estatutos de la Asociación Bancaria Nacional se define otra categoría de socios que es la de los cuasi-asociados, calificación que corresponde a las entidades bancarias gubernamentales; por lo que no se puede afirmar como se expresa en el escrito de oposición, que la Asociación Bancaria Nacional es la Asociación representativa del sector bancario, ya que ni siquiera existe disposición que así lo indique, y además el artículo 39 de la Constitución Nacional consagra la libertad de Asociación siempre que sus fines no sean contrarios a la moral o al orden legal.

En cuanto al argumento de la representatividad, la Corte observa que el Decreto de Gabinete N° 238 de 1970 no se refirió a que las ternas tuvieran que ser propuestas por la Asociación más representativa, sino que simplemente le atribuyó este derecho a la Asociación Bancaria Nacional, por ser la única existente a la fecha de la promulgación de dicho decreto.

En cuanto a las funciones de ambas asociaciones la Corte observa que los Estatutos de la Asociación Bancaria Nacional **(ABN)** conceden a ésta, funciones que no tiene la Asociación Panameña de Bancos **(APB)**. Así mientras la ABN tiene entre sus fines representar los legítimos intereses de la industria bancaria en Panamá, la APB fomenta y promueve valores éticos en la industria bancaria y sirve de foro para el estudio y análisis de los problemas que pueda afectar la banca en nuestro país, especialmente la banca privada de capital panameño, recomendando posibles soluciones; la ABN tiene que propender en forma colectiva al desarrollo del país, estudiar, mejorar y perfeccionar el sistema bancario, y establecer una política uniforme hasta donde ello sea posible, mientras que la APB promueve, gestiona y apoya mecanismos y técnicas para el desarrollo y modernización de las operaciones bancarias e **intercambia** con organismos similares y con sus miembros información de interés; la ABN fija las reglas, usos y costumbres bancarias que se aplicarán cuando la ley no disponga otra cosa y no exista convención en contrario, mientras que la APB emite opinión respecto de las reglas, usos y costumbres bancarias o respecto a otros temas del mismo orden cuando lo cree conveniente. Entre otras funciones de amplio alcance que tiene la ABN, tenemos: adoptar una política tendiente a establecer el mutuo apoyo y la colaboración necesaria para la defensa de los intereses bancarios en cuanto puedan ser afectados por cualesquiera delitos; presentar y defender ante los poderes públicos y ante el país, las conveniencias y aspiraciones del gremio e industria bancaria; y este artículo tercero en su parágrafo establece que, "La Asociación será una entidad de esfuerzos combinados pero entendiéndose que deja por fuera de su órbita los intereses particulares de cada banco y no se inmiscuirá en los negocios, organización y régimen interno de sus afiliados.

Estas diferentes e importantes funciones fueron acordadas por los miembros fundadores de una y otra asociación y responden a las exigencias del sector bancario que representan, y las mismas evidencian una voluntad de dicho sector de mantener en la Asociación Bancaria Nacional los roles principales como ente gremial, y en la Asociación Panameña de Bancos otros roles particulares que atienden primordialmente a los bancos de capital panameño legalmente constituidos y aquellos bancos de capital extranjero invitados por la Junta Directiva.

No obstante, por tratarse igualmente de personas jurídicas sin fines de lucro (que sin embargo reúne personas mercantiles), asociaciones de naturaleza privada cuyos objetivos tienden igualmente a promover y defender los legítimos intereses del sector bancario, éstas pueden modificar sus Estatutos cuando lo tenga a bien, y por tanto no constituyen estas diferencias circunstancias que puedan atribuirle un carácter especial a la Asociación Bancaria Nacional, como para otorgarle un privilegio que excluye, en este caso, a otras asociaciones que se encuentran en iguales condiciones. (Fs. 57 y 78).

A nuestro juicio, el Estado, a través del texto jurídico cuya inconstitucionalidad se pide, ha tenido como finalidad permitir que el sector bancario esté representado en la Comisión Bancaria Nacional.

La Comisión Bancaria Nacional es el ente fiscalizador de la banca en Panamá, es decir, que ocupa dentro de la actividad financiera el lugar de ente **controlador, supervisor y vigilante** de las entidades financieras y de sus actividades, en este caso, específicamente los bancos. Estas funciones las ejerce con fundamento en el artículo 279 constitucional, el cual dispone que el Estado intervendrá en toda clase de empresas, dentro de la reglamentación que establezca la Ley, con la finalidad de exigir la debida eficacia de los servicios que presta y con fundamento en el Decreto de Gabinete N° 238 de 1970. Entre las importantes funciones de este ente público, consagradas en dicho Decreto tenemos las siguientes: resolver sobre los asuntos que le sometan sus miembros; dictar las resoluciones de que trata el Decreto de Gabinete 238 de 1970, reglamentar el mismo y fijar en el ámbito administrativo la interpretación y alcance de las disposiciones legales en materia bancaria; otorgar las licencias para efectuar el negocio de banco; recibir los estados de situación de ganancias y pérdidas de los bancos; sancionar las violaciones al Decreto 238 de 1970 y realizar la inspección, intervención y liquidación de los bancos conforme lo establece la ley.

Al examinar el concepto de la infracción del artículo 19 de la Constitución, el Pleno advierte que la facultad concedida a la Asociación Bancaria Nacional de presentar las tres (3) ternas de las cuales son nombrados, por el Órgano Ejecutivo, los representantes del sector bancario ante la Comisión Bancaria Nacional, persona jurídica pública que ejerce el control exclusivo sobre los bancos en Panamá, discrimina a otras asociaciones de bancos legalmente establecidas lo que entraña un trato desfavorable para determinadas personas que, en principio, se hallan en la misma situación.

Observa el Pleno de esta Corporación de Justicia que, entes de naturaleza similar como el Consejo Técnico de Seguros, la Comisión Nacional de Reaseguros y la Junta Directiva del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP), quienes son entes fiscalizadores de las Compañías de Seguros, Empresas de Reaseguros y de las Cooperativas respectivamente, están conformados igualmente por representantes de dichos intermediarios financieros, más sin embargo las ternas correspondientes son presentadas por "la Asociación o Asociaciones nacionales de Aseguradores legalmente constituidas"; "la Asociación o Asociaciones Nacionales de Reaseguradores legalmente constituidas"; y por las Federaciones de Cooperativas legalmente constituidas (Ley N° 55 de 1984, art. 11 ordinal e), Ley N° 56 de 1984, art. 10 ordinal ch) y la Ley N° 24 de 1980, art. 4 ordinal d). Todas son leyes posteriores al Decreto de Gabinete N° 238 de 1970 y en ninguno de los casos se consagra un privilegio a favor de una u otra asociación.

En cuanto a la violación del artículo 20 de la Constitución Nacional confrontada con la frase impugnada del artículo 5 del Decreto de Gabinete N° 238 de 1970, a criterio del Pleno no se da la infracción constitucional alegada contra esta última, porque el objeto de la demanda no gira en torno al trato desigual entre nacionales y extranjeros, sino al trato privilegiado establecido en favor de la Asociación Bancaria Nacional y en detrimento de otras asociaciones bancarias de igual naturaleza.

Por todo lo expuesto, debe concluirse que, no se puede otorgar el privilegio de presentar las ternas a una asociación de bancos en especial, sino que todas las Asociaciones de bancos legalmente constituidas deben tener la

oportunidad de presentar sus ternas al Órgano Ejecutivo, de lo contrario se constituye en un privilegio consagrado a favor de una de ellas, violándose el artículo 19 constitucional.

En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE ES INCONSTITUCIONAL, la frase "Asociación Bancaria Nacional", contenida en el literal d) del artículo 5 del Decreto de Gabinete N° 238 de 2 de julio de 1970.

Notifíquese y Publíquese en la Gaceta Oficial.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR MARIO VAN KWARTEL CONTRA EL ARTÍCULO 2126 DEL CÓDIGO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **MARIO VAN KWARTEL** presentó demanda ante el Pleno de la Corte Suprema para que, con audiencia del Procurador, se declare inconstitucional el artículo 2126 del Código Judicial.

Cumplidas las reglas de reparto la Corte admitió la acción interpuesta toda vez que cumplía con las formalidades establecidas por el artículos 2551 del Código Judicial. En consecuencia dispuso correr traslado de la demanda al Procurador General de la Nación para que emitiese concepto.

En tal sentido, el Jefe del Ministerio Público mediante Vista, visible de fojas 7 a 10, entre otras consideraciones expresó lo siguiente:

"II. Opinión de esta Procuraduría.

Luego de anotado y al proceder esta Procuraduría a emitir su concepto, observa que la norma sobre la cual recae la acción de inconstitucionalidad, fue objeto de una consulta de inconstitucionalidad lo que provocó que la Corte Suprema se pronunciara en torno a la constitucionalidad del artículo nuevamente cuestionado.

En efecto, mediante fallo de 22 de marzo de 1991, publicado en el Registro Judicial de marzo de 1991, páginas 189-194, nuestro más alto tribunal de justicia, luego del análisis respectivo, llegaba a la conclusión que el artículo 2126 del Código Judicial, no violaba la Constitución. Así, en la parte resolutiva pertinente, la Corte expresaba lo siguiente:

"En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, se Inhibe de Pronunciarse sobre la aducida inconstitucionalidad del artículo 2148 del Código Judicial y Declara que el artículo 2126 del referido Código No Viola los artículos 22, 40 ni otros de la Constitución Política Nacional".

Se sigue de allí, que existiendo con anterioridad un pronunciamiento de la Corte Suprema, en relación a la misma disposición legal

> cuestionada vía la presente acción de inconstitucionalidad y, teniendo en cuenta que "las decisiones de la Corte en ejercicio de las atribuciones señaladas en este artículo" -se alude al artículo 203 de la Constitución en el que se consagra la facultad de la guarda de la integridad constitucional-, "son finales, definitivas, obligatorias y deben publicarse en la Gaceta Oficial", trae como consecuencia que la pretensión constitucional así formulada devenga en no viable, al existir cosa juzgada constitucional."

En virtud de lo antes transcrito el Pleno de la Corte debe concluir señalando que es acertada la recomendación del Ministerio Público, de declarar NO VIABLE la presente demanda de inconstitucionalidad, pues en efecto se ha podido comprobar que esta Superioridad ya se pronunció sobre la inconstitucionalidad del artículo 2126 del Código Judicial, objeto de esta acción, en fallo de 22 de marzo de 1991 en el sentido que dicha norma no vulnera la Carta Fundamental.

Conforme lo disponen los artículos 203 de la Constitución y el 2564 del Código Judicial, las decisiones sobre control constitucional que pronuncie la Corte Suprema de Justicia tienen carácter de finales, definitivas y obligatorias; y, en base a dicho principio, si existe pronunciamiento previo de la Corte sobre lo demandado, no cabe dictar un nuevo pronunciamiento de fondo sobre la misma materia, por lo que el Pleno debe abstenerse de hacer la declaratoria solicitada.

En este caso la Corte admitió la demanda a pesar de haber concurrido el supuesto antes mencionado (cosa juzgada), sin embargo al haberse percatado el Procurador de la improcedencia de la pretensión en esta etapa del examen de fondo, corresponde declarar la no viabilidad de la presente acción de inconstitucionalidad.

Por lo expresado, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO VIABLE la demanda de inconstitucionalidad formulada por el licenciado MARIO VAN KWARTEL contra el artículo 2126 del Código Judicial.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JUAN GABRIEL GONZÁLEZ S., CONTRA EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY N° 44 DE 12 DE AGOSTO DE 1995, "POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS PARA REGULARIZAR Y MODERNIZAR LAS RELACIONES LABORALES". MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **JUAN GABRIEL GONZÁLEZ S.**, en su propio nombre, presentó demanda de inconstitucionalidad del artículo 63 de la Ley 44 de 12 de agosto de 1995, mediante el cual se subroga el artículo 967 del Decreto de Gabinete N° 252 de 1971.

Admitida la demanda se le imprimió el trámite previsto por la ley y a la fecha, después de concluido el término otorgado para la presentación de los alegatos de las partes interesadas, se pasa a resolver.

LA PRETENSIÓN

El demandante pide la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 63 de la Ley 44 de 1995, por la cual se dictan normas para regular y modernizar las relaciones laborales, artículo que es del siguiente tenor:

> "Artículo 63: Subrógase el artículo 967 del Decreto de Gabinete 252 de 1971, así:
>
> Artículo 967: Sólo se permitirá el aplazamiento de la audiencia una sola vez por cada parte, y se realizará sin necesidad de nueva resolución, al día siguiente de la fecha aplazada, con cualquiera de las partes que asista.
>
> En caso de incapacidad por varios días, que no podrán ser más de tres, se celebrará la audiencia al día siguiente del vencimiento, sin necesidad de nueva resolución.
>
> Si superase los tres días, se nombrará defensor de oficio, si se tratara del apoderado del trabajador; o defensor de ausente, si se tratare del abogado del empleador.
>
> De no celebrarse la audiencia por ausencia injustificada de las partes, el juez procederá a resolver con la constancia de autos, sin perjuicio de las sanciones correspondientes".

Los hechos que se plantean como fundamento de la demanda, más que sustentar la pretensión, se limitan a hacer una relación cronológica del proceso de elaboración de la Ley 44, desde la etapa de iniciativa legislativa ejercida por el Ministro de Trabajo y Bienestar Social al presentar el proyecto a la Asamblea Legislativa, hasta su sanción y promulgación, fecha en que entró en vigencia.

DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES INFRINGIDAS

Se indican como infringidos los artículos 32, 17 y 40 de la Constitución Política.

Respecto a la primera norma el accionante no expresa el concepto de la infracción, pues se limita a señalar que el artículo 600 del Código de Trabajo establece con certeza las horas en que debe practicarse una diligencia, acto o audiencia y que el artículo 64 (sic) de la ley 44 de 1995 viola esa institución. Al hacer esta afirmación el recurrente incurre en una confusión conceptual, pues a través de una acción de inconstitucionalidad no cabe la violación de disposiciones legales, por tratarse de normas de la misma jerarquía; en todo caso lo único que cabría sería un conflicto de leyes, colisión de normas o concurso de leyes en el tiempo. En cuanto a la infracción del debido proceso, referido al derecho a ser oído y de escoger al defensor sin interferencia extraña, el texto del artículo señalado como inconstitucional, regula trámites de la primera instancia en los procesos laborales comunes para evitar la prolongación ilimitada de casos litigiosos.

En lo que respecta a la violación del artículo 17 constitucional, se explica la misma indicando que la norma acusada limita la incapacidad de las partes y sus apoderados por un período no mayor de tres días, a pesar de que los quebrantos de salud son situaciones inciertas e imprevistas que no tienen un término prefijado. Sin embargo, observa el Pleno, que el texto citado tiene un contenido distinto, por tratarse de una norma programática que explica la finalidad de las autoridades de la República y no guarda relación con el tópico abordado.

Con relación a la infracción del artículo 40 que trata sobre la libertad del ejercicio de las profesiones u oficios sin otras limitaciones que las que tienen que ver con la idoneidad, moralidad, previsión y seguridad sociales, salud pública, sindicación y cotizaciones obligatorias, el demandante considera que al regular la suspensión del acto de audiencia, limitando los plazos de prórroga, se violentan los derechos de los trabajadores y de los empleadores al libre

ejercicio de la profesión.

OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA

Al contestar el traslado, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 2554 del Código Judicial, mediante la Vista N° 4 de 23 de enero de 1996, el Procurador General de la Nación arriba a la conclusión que no debe accederse a la pretensión que dio origen a este proceso constitucional, porque no se han violado las normas constitucionales indicadas por el demandante. En lo pertinente, hace las siguientes apreciaciones jurídicas:

> "La norma acusada incorpora en su dicción literal que: de superarse el referido término de 3 días, y, justamente, para evitar situaciones de indefensión en perjuicio de los sujetos del proceso, se nombrará defensor de oficio, tratándose del apoderado del trabajador; o defensor de ausente si se trata del apoderado del empleador.
>
> Responde, pues, la disposición legal atacada, al principio de economía, que establece la necesidad de realizar el proceso con el menor desgaste posible de actividad. Consecuencia de este concepto, en otros términos, es el deber de tratar de obtener el mayor resultado con el mínimo de empleo de actividad procesal.
>
> La supresión de resoluciones interlocutorias, contrario a lo que opina el demandante, opera como mecanismo de **celeridad** del proceso laboral, expresión que se manifiesta en otros tipos de procesos, como el civil, penal y administrativo.
>
> Por ello, conceptuamos que, antes al contrario, con la reforma introducida por vía del artículo 63, al subrogarse el artículo 967 del Decreto de Gabinete 252 de 1971, no se menoscaba la tutela jurisdiccional, sino que se fortalece mediante la supresión de trámites que mas bien provocan dilaciones que sí lesionan los intereses de las partes contendientes, malestar contra el cual ha combatido y combate la codificación de los tiempos actuales" (f. 39).

CONSIDERACIONES DEL PLENO

Un examen del escrito contentivo de la demanda presentada nos permite apreciar que las objeciones que se le hacen a la reforma introducida al artículo 967 del Código Trabajo, que en su texto original señalaba el aplazamiento de la audiencia, limitado a una sola vez por justo motivo y a su celebración posterior con cualquiera de las partes que asistiera, consisten en los términos de incapacidad y la designación de los defensores de las partes.

En el texto reformado esta regulación se amplía, pero mantiene el mismo espíritu de la norma, destinado a lograr un mayor aceleramiento de los procesos laborales e impedir la posposición de las audiencias sin causas justificadas o por un término dilatado. Se observa, además, que la norma prevé aquellos casos en que alguna de las partes pueda quedar en indefensión y por ello, recurre a la defensa de oficio y a la defensa de ausentes, dos instituciones que están al alcance del Tribunal. Esto no significa que si los apoderados designados por las partes se encuentran presentes, no se proceda con su participación. Por otra parte, las personas que designan abogados particulares pueden designar sustitutos y evitar la posposición de las audiencias, que constituyen el acto procesal de mayor trascendencia, porque, además de la inmediación, el juzgador palpa por sí mismo y percibe la práctica de las pruebas que acreditan los hechos en conflicto.

Lejos de violar el debido proceso y el derecho al libre ejercicio de las profesiones y oficios, la norma reformada adecúa el proceso a las corrientes contemporáneas, que tienden a simplificar los trámites y ofrecer a los ciudadanos un servicio de administración de justicia eficaz, pronta y cumplida.

Por tanto, el PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre

de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES INCONSTITUCIONAL el artículo 63 de la Ley 44 de 12 de agosto de 1995, porque no viola los artículos 17, 32, 44, ni ninguna otra disposición de la Constitución Política de la República de Panamá vigente.

Notifíquese y Publíquese en la Gaceta Oficial.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR LOS LICENCIADOS MIGUEL GONZÁLEZ MARCOS Y ROSAURA GONZÁLEZ MARCOS CONTRA LOS ARTÍCULOS 2, 5, 14, NUMERALES 4 Y 6 PARÁGRAFO; Y ARTÍCULO 16 DE LA LEY N° 16 DE 29 DE AGOSTO DE 1979; ASÍ COMO LA DE LOS ARTÍCULOS 67, 71 PARTE FINAL, 73 Y 79 DE LA LEY N° 30 DE 8 DE NOVIEMBRE DE 1984 Y DEL 19 LITERAL "C" DEL DECRETO EJECUTIVO N° 42 DE 24 DE NOVIEMBRE DE 1983. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Los licenciados MIGUEL GONZÁLEZ MARCOS y ROSAURA GONZÁLEZ MARCOS han promovido proceso de inconstitucionalidad, a fin que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia "declare la inconstitucionalidad de los artículos 2, oración segunda; 5ª parte final; 14, numerales 4 y 6; y 16 de la Ley N° 16 de 29 de agosto de 1979, Gaceta Oficial N° 18.919 de 28 de septiembre de 1979; así como los artículos 67, 71, parte final, 73 y 79 de la Ley N° 30 de 8 de noviembre de 1984, Gaceta Oficial N° 1249 de 21 de noviembre de 1984, modificatorios de los artículos 1249 y 1250 del Código Fiscal, así como del artículo 19 literal C) del Decreto Ejecutivo N° 42 de 24 de noviembre de 1983, Gaceta Oficial N° 19.967".

En la demanda se expresa que las normas antes descritas infringen los artículos 2, 32, 199, 206 y 217, numeral 4, de la Constitución Política de la República de Panamá.

Repartido el expediente fue admitida por el Magistrado Sustanciador, dándose traslado al señor Procurador General de la Nación, para que emita concepto, dentro del término que establece el artículo 2554 del Código Judicial.

Mediante Vista N° 25 de 4 de mayo de 1995, el representante del Ministerio Público, emitió su opinión, visible de fojas 18 a 22 del expediente. En la parte medular de la vista, el señor Procurador General de la Nación consideró que NO ES VIABLE la solicitud de inconstitucionalidad, en virtud de que se demanda la inconstitucionalidad de tres actos:

"...
1. Ley N° 16 de 29 de agosto de 1979, que modifica los Artículos 1249 y 1250, entre otros, del Código Fiscal.
2. Ley N° 30 de 8 de noviembre de 1984, por la cual se dictan medidas sobre el Contrabando y la Defraudación Aduanera.
3. Decreto Ejecutivo N° 42 de 24 de noviembre de 1983, por el cual se reorganiza la Dirección General de Aduanas."

Una vez devuelto el expediente, se fijó en lista por el término de diez (10) días para que contados a partir de la última publicación del edicto, las personas interesadas alegaren en el presente negocio.

Consta a fojas 29 a 34 el escrito presentado por el licenciado MIGUEL GONZÁLEZ MARCOS, quien, contraviniendo con el criterio vertido por el señor

Procurador, sostiene que no se han demandado distintas disposiciones contenidas en diversos actos, sino, por el contrario, se han demandado normas contenidas en el Código Fiscal.

No obstante, basta la lectura de la demanda de inconstitucionalidad para que, de su propio texto, se advierta que la pretensión de inconstitucionalidad se refiere a disposiciones o normas específicas insertas dentro de tres instrumentos normativos, dos con carácter de ley y uno, un acto reglamentario del Órgano Ejecutivo.

El primero de ellos constituye la ley de creación de la Dirección General de Aduanas, en la segunda, la Ley 30 de 8 de noviembre de 1984, se regulan varios aspectos relacionados con los delitos y faltas de naturaleza fiscal (materia aduanera); y el tercero de ellos, el Decreto Ejecutivo N° 42 de 24 de noviembre de 1983, constituye el reglamento orgánico de la Dirección General de Aduanas.

Como se aprecia, ninguno de los instrumentos jurídicos demandados, se atacan disposiciones del Código Fiscal sino, por el contrario, se trata de preceptos de contenido tributario que el legislador, en ejercicio de la potestad legislativa que le otorga la Constitución Política, dictó las referidas leyes: N° 16 de 29 de agosto de 1979 y Ley N° 30 de 8 de noviembre de 1984; y del Decreto Ejecutivo N° 42 de 24 de noviembre de 1983, acto de naturaleza reglamentaria expedida por el Órgano Ejecutivo, en ejercicio de la potestad reglamentaria que le confiere a este último Órgano del Estado el artículo 179, mumeral 14 de nuestra Carta Magna.

El Pleno, al entrar a resolver el fondo de la controversia, advierte que la referida acción ha sido interpuesta contra normas específicas contenidas en dos (2) leyes y un Decreto Ejecutivo. Con respecto a esta situación, la Corte Suprema de Justicia ha manifestado que la acción de inconstitucionalidad debe ser interpuesta contra una sola disposición que esté contenida en un solo acto, por lo que comparte el criterio vertido por el representante del Ministerio Público, quien cita el fallo de 12 de julio de 1994 con respecto a esta materia. Asimismo se reitera por parte de esta Corporación de Justicia, un fallo de 30 de mayo de 1995. En tal sentido, procede declarar NO VIABLE, la demanda de inconstitucionalidad formulada.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE la acción de inconstitucionalidad propuesta por los abogados MIGUEL GONZÁLEZ MARCOS y ROSAURA GONZÁLEZ MARCOS, contra los artículos 2, 25, 14, numerales 4 y 6, parágrafo, y 16 de la Ley N° 16 de 29 de agosto de 1979; así como de los artículos 67, 71, parte final, 73 y 79 de la Ley N° 30 de 8 de noviembre de 1984 y del artículo 19, literal C) del Decreto Ejecutivo N° 42 de 24 de noviembre de 1983.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR LA FIRMA DE ABOGADOS TRONCOSO, LACAYO & PORRAS EN REPRESENTACIÓN DE ÍTALO ROJAS DE LEÓN EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD CÁMARA NACIONAL DE RADIO EN CONTRA DE LOS ARTÍCULOS 19, 21, 77, 90, 109, 122, 124 Y 134 DE LA LEY 15 DE 8 DE AGOSTO DE 1994. (DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS). MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

LA CÁMARA NACIONAL DE RADIO, por conducto de apoderado especial, la firma forense TRONCOSO, LACAYO & PORRAS, propuso demanda de inconstitucionalidad de la Ley N° 15 de 18 de agosto, de 1994. Una vez admitida la demanda, se le corrió traslado al PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN, el que contestó la demanda de inconstitucionalidad mediante la Vista N° 20 de 3 de abril de 1995. Abierto el término a alegatos de quien así lo considerase oportuno dentro de este proceso constitucional, hicieron uso del expresado derecho la empresa SONY MUSIC ENTERTAINMENT (Panamá), S. A., por conducto de sus apoderados legales, Licenciados ERIC ALEXANDER LÓPEZ CORNEJO, EDUARDO ANTONIO BENÍTEZ ISTURAÍN, Director General de Derecho de Autor del Ministerio de Educación, en su propio nombre, y el BUFETE GARIBALDI & ASOCIADOS, en su propio nombre, por conducto del licenciado VICENTE GARIBALDI CAMACHO, todos ellos a favor de la constitucionalidad de la Ley N° 15 de 8 de agosto de 1994, sobre **Derecho de Autor y Derechos Conexos** y, por lo tanto, oponiéndose a las pretensiones del demandante; y la demandante, quien naturalmente alegó, retirándolas, los conceptos vertidos en su demanda de inconstitucionalidad.

Agotados los trámites procedimentales de este proceso constitucional, el Pleno se avoca a decidirlo, previas las consideraciones que se exponen a continuación:

La demandante, como se dijo, formuló pretensión de inconstitucionalidad con fundamento en el artículo 203, numeral 1° de la Constitución Política. La demanda de inconstitucionalidad debe formularse en los términos precisos del artículo 2551 del Código Judicial, es decir, los requisitos de toda demanda, la transcripción literal de la disposición, norma o acto acusados de inconstitucionalidad, la indicación de las disposiciones que se estiman infringidas y el concepto de la infracción, normas de cumplimiento forzoso con arreglo a jurisprudencia constante de este Pleno. No obstante, se aprecia confusión por parte del demandante en darle cumplimiento a tales requisitos. Por una parte, el poder que se otorga es "para que interpongan Recurso de Inconstitucionalidad contra los artículos 19, 21, 77, 90, 109, 122, 124 y 135 de la Ley N° 15 de 1994 (en adelante Ley de Derecho de Autor). No obstante, el libelo contentivo de la demanda de inconstitucionalidad pide la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Derecho de Autor en su totalidad, no obstante que, en el cuerpo de la demanda aparecen impugnadas disposiciones parciales de la referida Ley, es decir, sus artículos 19, 21, 77, 109, 122, 124 y 134 de la Ley de Derecho de Autor.

Por otra parte, los hechos de la demanda los plantea de la forma que se transcribe:

> "PRIMERO: La Asamblea Legislativa mediante Ley 15 de 8 de agosto de 1994, aprueba la Ley sobre el Derecho de Autor y Derechos Conexos y se dictan otras disposiciones.
>
> SEGUNDO: Dicha Ley se publicó en la Gaceta Oficial N° 22.598 del día 10 de agosto de 1994.
>
> TERCERO: Dicha Ley fue propuesta, discutida y aprobada en violación directa a normas de la Constitución Nacional sobre leyes orgánicas.
>
> CUARTO: Esta Ley no fue propuesta por las Comisiones de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Legislativa y la Comisión de Comercio e Industrias y Asuntos Económicos; tampoco por iniciativa del Consejo de Gabinete, tal como lo requieren las leyes que afectan la estructura de la Administración Pública Nacional, o sean leyes orgánicas, sino la ley fue presentada por iniciativa de un grupo de legisladores, tal como consta en los Actos de las Comisiones de Educación, Cultura y Deportes de fecha 26 de octubre de 1993 y Comisión de Comercio, Industrias y Asuntos Económicos de fecha 1° de diciembre de 1993.

QUINTO: La Ley contiene normas que restringen la libertad personal, el derecho de propiedad, la libre empresa y el comercio.

SEXTO: La Ley de Derecho de Autor reforma el Código Administrativo, el Código Judicial y el Código Penal.

SÉPTIMO: Ninguna de las materias mencionadas con el hecho anterior, fue propuesta por la Corte Suprema de Justicia, el Procurador General de la Nación o el Procurador de la Administración".

Como bien se aprecia, es de fundamental importancia que los hechos de la demanda de inconstitucionalidad guarden congruencia con las normas constitucionales que se reputan violadas, es decir, debe contener cargos específicos que denoten la producción de la inconstitucionalidad pedida. De la lectura de los hechos, sin embargo, se aprecia, en gran mayoría, que la finalidad de los hechos en la demanda, no se cumplen en el presente proceso, no solamente por la vaguedad en que estos se producen, sino porque, además, el único cargo concreto es el contenido en el hecho cuarto, que describe una de las posibles violaciones constitucionales. La demanda de inconstitucionalidad, por lo tanto, no debió ser admitida, como bien lo reconocen el Procurador General de la Nación, en su enjundiosa Vista, así como quienes participaron en la fase de alegatos en defensa de la constitucionalidad de la Ley de Derecho de Autor.

El Pleno, no obstante, considera oportuno entrar al fondo de la cuestión constitucional debatida, por su enorme importancia con respecto al desarrollo legislativo de un derecho que nuestra Constitución ha elevado a la categoría de derecho fundamental, el Derecho de Autor, regulado en el artículo 49 de la Constitución Política, y que tiene rancio abolengo en nuestra tradición constitucional, al ser reconocido sustancialmente con el mismo contenido, en todas las Constituciones que han regido nuestra vida republicana (Véase artículo 40 de la Constitución de 1904; artículo 49 de la Constitución de 1941; artículo 50 de la Constitución de 1946; artículo 48 de la Constitución de 1972; artículo 49 de la Constitución de 1972, tal como quedó después de 1983). Como quiera, pues, que del contexto de la demanda se desprende que la pretensión constitucional no es de la declaratoria de inconstitucionalidad de toda la Ley de Derecho de Autor, sino de disposiciones específicas e individualizadas de ella, se considerarán éstas como las disposiciones demandadas, en la decisión de este Pleno. Las disposiciones demandadas han sido, en consecuencia, los artículos ya señalados en la demanda, y las disposiciones constitucionales que se estiman infringidas por la demandante, lo constituyen los artículos 2, 40, 44,, 153, 159 y 290 constitucionales, por lo que a ellos nos referiremos.

El artículo 2° de la Constitución, ha sido violado por el artículo 109, 122, 124 y 134 de la Ley, que, para mayor inteligencia de esta sentencia, se transcriben:

"Artículo 109. Denomínese Dirección General de Derecho de Autor al actual Registro de la Propiedad Literaria y Artística del Ministerio de Educación, el cual ejercerá las funciones de registro, depósito, vigilancia e inspección en el ámbito administrativo y demás funciones contempladas en la presente Ley, y tendrá las siguientes atribuciones:

1. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la presente Ley y sus reglamentos.

2. Llevar el Registro del Derecho de Autor, en los términos previstos en el Título X de esta Ley.

3. Decidir los requisitos que deben llenar la inspección y el depósito de las obras, interpretaciones, producciones y publicaciones, salvo en los casos resueltos expresamente por el reglamento.

4. Autorizar el funcionamiento de las entidades de gestión colectiva, previo cumplimiento de los requisitos exigidos por esta

Ley y los que eventualmente pueda indicar el reglamento.

5. Supervisar a las personas naturales o jurídicas que utilicen las obras, interpretaciones y producciones protegidas, en cuanto den lugar al goce y ejercicio de los derechos establecidos en la presente Ley.

6. Servir de árbitro cuando las partes así lo soliciten.

7. Aplicar las sanciones administrativas previstas en el presente título.

8. Administrar el centro de información relativo a las obras, interpretaciones y producciones nacionales y extranjeras, que se utilicen en el territorio de Panamá.

9. Publicar periódicamente el Boletín del Derecho de Autor.

10. Fomentar la difusión y el conocimiento sobre la protección de los derechos intelectuales y servir de órgano de información y cooperación con los organismos internacionales especializados.

11. Ejercer las demás funciones que le señalen la presente Ley y su reglamento.

Artículo 122: La pena será de dos (2) a cuatro (4) años de prisión para quien:

1. Reproduzca, con infracción de los Artículos 36 y 39, en forma original o modificada, íntegra o parcialmente, obras protegidas por la presente Ley.

2. Introduzca en el país, almacene, distribuya, exporte, venda, alquile o ponga en circulación de cualquier otra manera, reproducciones ilícitas de las obras protegidas.

3. Inscriba en el Registro de Derecho de Autor y Derechos Conexos una obra, interpretación o producción ajenas, como si fueran propias, o como de persona distinta del verdadero autor, artista o productor.

Artículo 124: Las penas previstas en los artículos anteriores se aumentarán en una tercera (1/3) parte cuando los delitos señalados sean cometidos respecto de una obra, interpretación o producción no destinada a la divulgación, o con usurpación de paternidad, o con información, mutilación u otra modificación que ponga en peligro su dignidad o la reputación de alguna de las personas protegidas por la ley.

Artículo 134: Esta Ley subroga el Título V del Libro IV del Código Administrativo y deroga las demás disposiciones que le sean contrarias".

En esencia, la inconstitucionalidad no es contra dicha disposición, sino por el hecho de que la ASAMBLEA LEGISLATIVA expidió una Ley, cuya iniciativa no le correspondía a dicho Órgano del Estado, sino al ÓRGANO EJECUTIVO y al ÓRGANO JUDICIAL.

El señor Procurador, se pronuncia sobre tales violaciones haciendo referencia al principio de separación de los poderes, haciendo mención al autor de dicho principio, MONTESQUIEU.

En verdad, el artículo 2° de la Constitución tiene una finalidad mucho mas amplia y fundamental. Por una parte, se refiere al origen del Poder Público, que se establece en el pueblo panameño, y su ejercicio por tres Órganos separados, el Legislativo, Ejecutivo y Judicial, inscribiéndose nuestra Constitución en

aquellas que proclaman un sistema de gobierno presidencialista, y, además, y sin mengua del principio de separación de poderes (sin entrar en la polémica sobre el enjuiciamiento crítico de tal principio, por lo menos en la forma original en que lo concibió su creador), en la obligación de tales Órganos del Poder Público de colaboración en forma armónica entre ellos, en la realización de los fines del Estado. En síntesis, el artículo cumple lo que los autores han denominado, una decisión política fundamental. Así pareció entenderlo este Pleno, con ocasión de dictar sentencia de 18 de agosto de 1995, bajo la ponencia del Magistrado Rafael González, que, analizando el artículo 2° de la Carta Política, destacó:

> "Con respecto al artículo 2 de la Constitución, se trata de una disposición fundamental de la organización del Estado, que reconoce la soberanía en el pueblo y el ejercicio de la misma, como atributo del Estado, por los Órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial; independiente cada uno de los otros."

No obstante, resulta claro que el demandante está relacionando la vulneración del artículo 2°, con el incumplimiento, en su opinión, de una norma jurídica aplicable al ejercicio de la función legislativa por parte del Órgano Legislativo, con respecto a una clase de leyes, las que determinan la estructura de la administración pública (artículo 153, numeral 12). Puesto en otro giro: la expedición de la Ley de Derecho de Autor por parte de la Asamblea Legislativa es un acto que atiende escrupulosamente el principio de la separación de los poderes, uno de los postulados fundamentales del expresado artículo constitucional. Por ello, mas que violar dicha disposición constitucional, se expidió un instrumento normativo por el Órgano del Estado que ostenta la potestad legislativa, respetándose el principio de separación de poderes que postula el mismo.

Como acertadamente señala el Procurador General de la Nación, el artículo 109 cambia la denominación de una Dirección hasta la vigencia de la Ley de Autor, denominada Registro de la Propiedad Literaria y Artística, por dicha Dirección. En puridad, no existe, por lo tanto, la creación de diversas formas de organización de las instituciones públicas, englobadas dentro de un contexto coherente, de naturaleza estructural, estructura de la administración pública que tiene un fundamento teleológico, es decir, que la estructura de la administración es para asegurar la eficacia de la función administrativa.

La estructuración de la administración pública, por lo tanto, la establece el Órgano Legislativo, pero sobre la base de un proyecto de ley cuya iniciativa le corresponde en forma privativa al Órgano Ejecutivo. No obstante, estima el Pleno que tal monopolio de la iniciativa legislativa de este tipo de leyes, alcanza solamente al acto inicial de creación, y, por lo tanto, no impide que una entidad pública, ya creada, pueda ser modificada a iniciativa del Órgano Legislativo, precisamente para que este reordenamiento de las funciones, asegure la eficacia de la administración pública, cuyo establecimiento le corresponde al Órgano Legislativo, por cuanto la restricción en la limitación constitucional a la iniciativa legislativa, se refiere al acto fundacional de una entidad pública, sin que, una vez creada, se considere oportuno realizarle cambios y también, la de distribuir (o redistribuir) entre ellos las funciones y negocios de la administración, por cuanto, se repite, en apreciación de este Pleno, la limitación de la iniciativa legislativa que consagra el numeral 12 del artículo 153 se refiere exclusivamente a la propuesta del acto fundacional de creación de entidades públicas, por parte del Órgano Ejecutivo.

La segunda norma que se considera violada por el recurrente es el artículo 40, que establece como un derecho fundamental la libertad de profesión u oficio, por parte del artículo 21 de la Ley de Derecho de Autor. El concepto de la violación estima la Corte que es confuso, pero, en su esencia, señala que dicho artículo reconoce un porcentaje del dos porciento (2%), aplicable a la reventa por intermediarios profesionales, de una clase específica de obras, las obras plásticas, estimando que dicho porcentaje constituye una contribución o impuesto, un tributo en general, cuyo hecho generador constriña el ejercicio de la profesión. Como es sabido, dicho artículo proviene de la Constitución de 1946, en atención a que, a la sazón, existía un impuesto que gravaba el ejercicio de las profesiones liberales.

Es sabido que los tributos (impuestos, tasas, contribuciones especiales) constituyen prestaciones coactivas, impuestas por el Estado en virtud de su poder de imperio, con la finalidad de atender las necesidades públicas, y, con respecto al obligado tributario, dicha prestación obligatoria, constituye un deber cívico general de contribuir al sostenimiento de las cargas públicas, de acuerdo a su capacidad económica o contributiva. No se compadece con el concepto de tributo antes señalado, que es el que postulan la mayoría de los Códigos Tributarios latinoamericanos y europeos y el Proyecto de Código Tributario, que se tramita en la Asamblea Legislativa, por cuanto los ingresos que se obtienen no son para al Estado y no son, tampoco, para atender las necesidades públicas, sino una modalidad de remuneración que es característica del Derecho de Autor, el denominado "droit de suite", así, en francés, en mérito de que Francia fue el primero que lo estableció, y se encuentra recogido en las Convenciones sobre Derechos de Autor de las cuales es signataria la República de Panamá. Así, es una modalidad de la remuneración a los autores de determinadas obras amparadas por el Derecho de Autor, a saber, las obras artísticas. El Derecho Comparado ofrece múltiples facetas del "droit de suite" (como se le conoce internacionalmente) y, en el caso de la Ley de Derecho de Autor, éste la concibe como una participación en el caso de reventa de obras plásticas, del 2% del valor de la reventa.

En la Vista del señor Procurador General de la Nación, se aborda el tema, visible a fs. 89, 90 y 91, en forma que, por compartirlo en su integridad, se reproduce:

"...

Consideramos que habido, por parte del demandante, una errónea interpretación de la norma toda vez que la misma, no establece impuesto alguno por el ejercicio de las artes plásticas. Lo que la norma reconoce como protección al autor de la obra, es un 2% de las reventas realizadas por un negociante profesional de obras de arte, o subasta pública.

Esta figura constituye una innovación en nuestra legislación, no así en el derecho comparado y recibe el nombre de "droit de suite" o derecho de participación que, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 21, es de carácter inalienable e irrenunciable y se ha fijado en un mínimo del dos por ciento (2%) del precio de reventa de la obra plástica.

Esta figura del derecho de participación o "droit de suite" fue introducido por vez primera en la ley francesa de 20 de marzo de 1920 y, posteriormente, en el Convenio de Berna para la "Protección de las Obras Literarias y Artísticas", en el Artículo 14ter, en la Revisión de Bruselas de 1948.

La misma encuentra su fundamento en la justicia debida al autor, de que participe del éxito económico de su obra recibiendo, como pago suplementario, una cierta porción del precio de las ventas sucesivas.

La Dra. Delia Lipzsyc antes citada, señala que la forma usual de comercializar la obra es a través de la enajenación del ejemplar original de la obra.

Una vez que el artista plástico vende (o malvende su obra), pues generalmente lo hace acuciado por la necesidad de proveer a su subsistencia, especialmente en el período inicial de su carrera, queda al margen de los actos posteriores de explotación los que, generalmente, tienen lugar cuando la creación ha alcanzado valor de reventa y se transforma en una fuente de ganancias, a veces muy importante, a medida que su autor logra renombre, merced a su talento y a la consagración de su arte.

Sigue diciendo la Dra. Lipzsyc que es justo que, al igual que los coleccionistas e intermediarios, los artistas plásticos participen del éxito económico de su obra recibiendo, como pago suplementario, una cierta porción del precio de las ventas sucesivas.

> En la actualidad, el derecho de participación ha sido acogido por un buen número de legislaciones, aunque bajo diversas modalidades.
>
> Como se observa, el Artículo 21 de la Ley de Derecho de Autor no impone un impuesto a profesión u oficio alguno, por lo tanto el cargo de inconstitucionalidad impugnado, debe ser desestimado".

La tercera disposición que se considera infringida es la contenida en el artículo 44 constitucional. Dicho derecho fundamental ha sido, en apreciación de la demandante, violado por los artículos 19, 21 y 77 de la Ley de Derecho de Autor.

Resulta oportuno, antes de examinar la supuesta violación al derecho de propiedad reconocido por el artículo 44, que se aborde el tema de la protección constitucional del derecho de autor, o, lo que es lo mismo, bajo cuales preceptos constitucionales queda reconocido como un derecho fundamental. Con respecto al derecho de autor es conveniente anotar que existen, al menos, dos concepciones sobre su naturaleza jurídica: una, que es una propiedad de naturaleza especial, integrada por un plexo de derechos, de distinta naturaleza y alcance, en virtud del objeto protegido. La tutela del derecho de autor, es la tutela constitucional de una creación original de una persona individual, emanación de su personalidad, y dicha creación una vez se haya incorporado a un formato, es objeto de explotación mediante su venta u otro negocio jurídico idóneo. La doctrina del Derecho de Autor, vislumbra, por lo tanto, dos ordenes de derechos en esta materia: los derechos morales, que son una emanación de la creación del artista o escritor, derecho personalísimo, irrenunciable, y al cual no se le pueden asimilar las características de los derechos reales; y, por otro, el formato o receptáculo que contiene el resultado de la obra de creación, que, para distinguirla de la anterior, se denomina derecho patrimonial del autor, por cuanto es el resultado, no ya de la creación intelectual, sino de la explotación del resultado de la creación, cuyo régimen jurídico es diferente.

Así, inicialmente, el derecho de autor se consideró como una propiedad, pero una propiedad especial, regulada, incluso, en una norma constitucional distinta a la que regulaba el derecho fundamental de la propiedad privada. El profesor doctor CÉSAR A. QUINTERO, en su esencial "Derecho Constitucional", al analizar el derecho fundamental que nos ocupa, censura la inserción del mismo dentro del derecho de la propiedad, y prefiere denominarlo derechos intelectuales "porque presentan ciertas características únicas, que no se dan en ninguna forma de propiedad ni con respecto a los derechos reales comunes" (César A. Quintero, "Derecho Constitucional", 1967), y a continuación señala:

> "...
> Y no aludimos necesariamente a las modalidades, ya anotadas, de que tales derechos son siempre temporales y de que se ejercen sobre algo incorporal. Nos referimos, ante todo, a la circunstancia de que el derecho intelectual presenta dos fases jurídicas fundamentales que, a su vez, engendran dos series de derechos de diferente calidad: el derecho llamado moral del autor y el derecho pecuniario del mismo.
>
> La manifestación jurídica del derecho intelectual llamada comúnmente derechos morales -y por algunos, derechos "personales" del autor- es inherente, por una parte, a la personalidad del autor y, por otra, a una determinada expresión de su pensamiento o de su espíritu. Son cosas éstas que el autor no puede enajenar ni conceder a otro. Ningún editor podría, por ejemplo, aunque el autor de una obra le concediera todos "sus derechos" sobre la misma, modificarla, reformarla, alterarla o cambiarla por su cuenta. Este es un derecho que sólo el autor puede ejercer. De ahí que esta fase de los derechos intelectuales -llamada, como hemos dicho, derecho moral- sea, según la doctrina y las legislaciones, inalienable y perpetua.
>
> Por tanto, el derecho intelectual que puede ser transferible, y que es temporal, es el pecuniario. Es decir, el referente a la impresión, reproducción, publicación, distribución, venta y circulación de la obra.

> El derecho intelectual pecuniario es, pues, "la faz del derecho intelectual que se refiere a la explotación económica de la obra, de la cual se benefician no sólo el autor, sino también sus derechos y derecho-habientes".
>
> Es este último derecho el que universalmente ha sido y es temporal. Generalmente lo posee el autor durante su vida y luego se extiende por cierto número de años después de su muerte. Durante ese lapso lo disfrutan las personas que lo hayan adquirido (herederos, cesionarios, etc.). Transcurrido el señalado período, la obra entra en lo que ha dado en llamarse el "dominio público". En este caso cualquiera puede publicarla. Nadie puede, sin embargo, alterar su texto original, ya que entonces entra en juego el derecho moral que, como vimos, es imprescindible".
>
> (OP. CIT. PÁGINAS 219 Y 220).

Si bien en sus inicios se consideró el derecho de autor como una manifestación del derecho de propiedad, lo que constituía un paso decisivo para estructurarlo como un derecho fundamental, restándole su origen de privilegio que ostentaba antes de la Revolución Francesa, tal asimilación generó una serie de problemas que ha sintetizado la especialista en la materia, DELIA LIPSZYC, en su obra "Derecho de Autor y derechos conexos", señalando:

> "...
> Sin embargo, cuando la materia alcanzó mayor desarrollo a través de la doctrina y la jurisprudencia, y los caracteres particulares del derecho de autor comenzaron a perfilarse con más nitidez, su asimilación al derecho de dominio sobre las cosas materiales (ius in rem) fue objeto de importantes cuestionamientos en razón de las diferencias entre ambos derechos:
>
> -el derecho de autor se ejerce sobre una creación intelectual -la obra- y no sobre una cosa, pues la propiedad del objeto material sobre el cual está fijada la obra no se confunde con el derecho de autor sobre la obra misma;
>
> -el derecho de autor nace del acto de creación de la obra y no por las formas previstas para adquirir el dominio (apropiación, especificación, accesión, tradición, percepción de los frutos, etc.) y, en particular, no se adquiere por prescripción;
>
> -el plazo de protección del derecho patrimonial del autor es limitado (generalmente la vida del autor y un número de años después de su muerte); la duración del derecho de dominio es ilimitada;
>
> -el régimen de la coautoría es distinto al régimen del condominiuo;
>
> -el derecho moral, característico del derecho de autor, es ajeno al ámbito del derecho de dominio;
>
> -no existe transferencia plena del derecho de autor, pues la obra nunca sale por completo de la esfera de la personalidad de su creador, al menos por la obligación de mencionar su nombre cada vez que aquella se utiliza y de respetar la integridad de la misma ...".
>
> (Op. cit., pág. 20 y ss.)

La Vista del señor Procurador General de la Nación, que es compartida por este Pleno, parte también de legitimidad de postular dos tipos distintos de derechos, dentro del derecho de autor, y acompaña la misma con un cuadro contentivo de los dos grupos de derechos que constituyen o integran el Derecho de Autor, a saber, los derechos morales y los derechos patrimoniales, y las características de cada uno de ellos, esfuerzo de sistematización que constituye un excelente resumen de cuanto se lleva dicho hasta ahora.

Se concluye, sin esfuerzo, que tanto nuestra tradición constitucional, como

la doctrina más respetada en este campo del Derecho, es objeto de una regulación constitucional autónoma, con respecto al derecho de propiedad. La lectura de la disposición constitucional contenida en el artículo 49, que, a juicio de este Pleno, es la norma que contiene el derecho fundamental que nos ocupa, luego de reconocerlo como un derecho fundamental autónomo del derecho de propiedad que garantiza el artículo 44, deja librado a la Ley su concreción, desarrollo legislativo que no solamente desarrolla dicho derecho fundamental, sino que, de paso, da cumplimiento a compromisos adquiridos por la República de Panamá en los numerosos Tratados o Convenios sobre derechos de autor y otros que se relacionan con aquél, en acatamiento al artículo 4° de la Constitución Política.

Quizá el recurrente considera el derecho de autor como una manifestación del derecho de propiedad que tutela la Constitución Política en su artículo 44, y en los orígenes de su gestación durante la Revolución Francesa y las leyes que inspiraron las normas sobre Propiedad Intelectual contenidas, hasta la entrada en vigencia de la Ley de Derecho de Autor, que las derogó en forma expresa. Sin embargo, hemos visto que el Derecho de Autor, como es frecuente en los derechos fundamentales, se descompone en una serie de manifestaciones de ese derecho fundamental, en un plexo de derechos. Para comprobar este aserto basta tomar en cuenta el derecho fundamental del debido proceso, integrado por una serie de derechos, que no resulta pertinente reiterarlos en esta ocasión. El Derecho de Autor y los Derechos Conexos contienen un plexo de derechos, de distinta naturaleza, los que protegen la creación intelectual, denominados tradicionalmente derechos morales, y los que se refieren a su explotación, denominados tradicionalmente derechos patrimoniales. Estos dos derechos, a su vez, están integrados por otros derechos, incluidos en la enjundiosa Vista del señor Procurador General de la Nación.

Desde dicha perspectiva, es claro que no hay violación constitucional al derecho fundamental de propiedad privada, ya que los artículos cuestionados recogen manifestaciones, sea del derecho moral, como del derecho patrimonial. No obstante, resulta oportuno referirse a ellas.

El artículo 19, en primer término, no afecta el derecho de propiedad (al cual, por otra parte, no se le aplica) no solamente porque no constituyen limitaciones ni prohibiciones al dominio, sino derechos del autor, de la obra, en este caso arquitectónica, de orden moral, el derecho a la integridad de la obra, que se manifiestan, primero, en que el proyecto realizado con cambios no autorizados por el arquitecto, no pueden imputarse como contenido de la obra realizada. Este derecho al repudio de la obra por su autor, por entender que no responde a la obra intelectual que realizó, se desprende nítidamente del segundo párrafo, que no afecta la ejecución de la obra, sino el relacionarla con su autor, en virtud de que los cambios han afectado la integridad de la obra. Igual protección ocurre en el supuesto contenido en el artículo 44, que es el derecho del autor de la obra a que su explotación patrimonial no menoscabe la integridad de la misma.

El siguiente artículo constitucional que se estima infringido es el artículo 153, numeral 12 de la Constitución, infracción que ya fue objeto de análisis por este Pleno al pronunciarse sobre la supuesta inconstitucionalidad del artículo 2°, a cuyo pronunciamiento se remite.

El recurrente estima violado el artículo 159 de la Constitución Política, por parte de los artículos 116, 120, 122 y 134, por entender el recurrente que dichos artículos inciden en materia reservada a los Códigos Nacionales, cuya iniciativa legislativa queda reservada a la Corte Suprema de Justicia y al Ministerio Público.

La iniciativa legislativa que contiene actualmente la Constitución es virtualmente la misma que se contenía en el artículo 125 de la Constitución de 1946, la Constitución de 1941, aún cuando se encuentra, mas claramente establecido en la de 1941, en el sentido de que, en caso de Códigos Nacionales, la tienen "también" la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público.

La iniciativa legislativa, como es sabido, constituye una institución que señala quienes pueden proponer proyectos de Ley a la Asamblea Legislativa, es

decir, constituye una restricción a la posibilidad de presentar proyectos de Ley. Solamente quienes ostenten dicha iniciativa legislativa pueden presentar proyectos de Ley a la consideración de la Asamblea Legislativa. No obstante la indicada limitación, existe, para la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público, una limitación adicional que restringe su iniciativa legislativa a un tipo de leyes, las que modifiquen los Códigos Nacionales. La manera correcta de entender la norma es la indicada, derivada de la frase "siempre que", es decir, que en las leyes modificatorias de Códigos Nacionales, y en ninguna otra, tienen iniciativa legislativa el Órgano Judicial y el Ministerio Público. Si bien se aprecia, tanto la Constitución de 1941, como la de 1946 y la de 1972, con la reforma de 1983, con respecto a este punto, guardan una secuencia lineal, aún cuando la de 1941 sea mas clara. La iniciativa legislativa, en la Constitución de 1941, le otorgaba iniciativa legislativa en materia de legislación civil, mercantil y procesal, en su artículo 92, "también" al Órgano Judicial, en tanto que las Constituciones posteriores se la conceden al Órgano Judicial y Ministerio Público, cuando ("siempre que") se trate de leyes aprobatorias o modificatorias de Códigos. En este punto, como se ha visto, la iniciativa legislativa de proyectos de ley orgánica modificatorias de Códigos Nacionales, le corresponde en forma limitada al Órgano Judicial, además de los otros Órganos o autoridades que tengan iniciativa legislativa para presentar proyectos de leyes orgánicas en general. Puesto en otro giro: la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público carecen de iniciativa legislativa para presentar proyectos de ley que no constituyan modificaciones a los Códigos Nacionales. Aclarado lo relativo a la iniciativa legislativa, este Pleno se percata, no obstante, que los artículos 116, 120, 122 y 134 no son modificaciones a los Códigos Nacionales, en la especie, el Código Administrativo, sino que ha ejercido el ejercicio de la función legislativa, para lo que tiene iniciativa legislativa las Comisiones Permanentes. En efecto, el artículo 116 mediante que procedimiento judicial se resuelven las pretensiones de orden civil, que genere la aplicación de Derecho de Autor, en este caso, el sumario, para lo que remite al Código Judicial; el artículo 120 a medidas cautelares; el 122 a las penalidades por infracción a los ilícitos penales tipificados en el artículo 121, y el artículo 134 a la derogatoria de las disposiciones que son objeto de regulación por la Ley. Se trata, si se quiere, reformas tácitas a los Códigos, pero no reformas expresas a ellos.

Particularmente en lo que se refiere a los artículos 121 y 122, la Ley ha tipificado determinadas acciones como delitos, respetándose, por lo tanto, el derecho fundamental de nullum poene sine lege contenido en el artículo 31 de la Constitución Política. Puede resultar inconveniente, desde el punto de vista de técnica legislativa, el de tipificar conductas delictivas fuera del Código Penal, y así es, en efecto; pero esto es materia de política legislativa, cuya responsabilidad y competencia es del Órgano Legislativo. La Constitución Política exige que una conducta determinada que se tipifique como una figura delictiva, sea materia que le corresponda al ámbito de la Ley (reserva de ley), materia ésta que, además, no es delegable por la Asamblea Legislativa al Órgano Ejecutivo por medio de concesión de facultades extraordinarias pro témpore, para que éste ultimo, mediante Decretos-Leyes legisle sobre esta materia, por cuanto desarrolla un derecho fundamental (Véase artículo 153, numeral 16, segundo párrafo). La decisión de si el ejercicio de esta función legislativa se realice incoporándolas al Código Penal o en leyes autónomas es materia de política legislativa, cuyo ámbito de definición le corresponde exclusivamente al Órgano Legislativo.

Por último, se señala por el recurrente violado el artículo 290 de la Constitución, por el artículo 90 de la Ley de Derecho de Autor. El artículo 290 de la Constitución Política sienta las bases de la legislación antimonopólica, mediante la cual, se reprimen combinaciones, contratos o actos que repriman o impidan la competencia en perjuicio del público, es decir, de prácticas restrictivas a la competencia, con efectos monopólicos. El monopolio, por su parte, es objeto de prohibición constitucional por el artículo 293.

El Pleno de esta Corte, en reiteradas ocasiones, ha interpretado dicho artículo, y considera que constituye una práctica monopólica la inserción de cualquier cláusula en virtud de la cual se restrinja o imposibilite la libre competencia, entre las que se incluyen el otorgamiento, en régimen de exclusividad, de cualquier derecho.

Así, la sentencia de esta Corte, de 1° de febrero de 1988, expone:

"...
Para el Pleno de la Corte resulta obligante resaltar como cuestión evidente que la concesión otorgada a la empresa MARRIOTT IN-FLITE SERVICES DE PANAMÁ, S. A. choca abiertamente con lo preceptuado en el artículo 293 de la Carta Política Fundamental. El servicio de abastecimiento a las aeronaves que utilizan el Aeropuerto Omar Torrijos Herrera en sus vuelos internacionales prestado en forma exclusiva, restringe la explotación de una actividad comercial que debe ser de libre competencia entre todas las personas, naturales o jurídicas, domiciliadas en el territorio de la República de Panamá que se consideren aptas para competir en la prestación de estos servicios de abastecimiento.

El vocablo "derecho exclusivo", inserto en la cláusula sexta del contrato in comento es violatorio del postulado esencial que se consagra en el artículo 293 de la Constitución. La prohibición que allí se consigna se dirige a evitar, en forma absoluta, la existencia de cualquier tipo de monopolio entre particulares. ...".

Por su parte, la sentencia modélica de 2 de agosto de 1989, cuya ponencia que correspondió al Magistrado RODRIGO MOLINA AMUY (q. e. p. d.), señala, entre otras consideraciones igualmente valiosas, lo siguiente:

"...
De tal suerte que confrontando el Decreto de Gabinete impugnado a la luz de los preceptos constitucionales citados, resulta incuestionable el vicio de que se acusa a el instrumento impugnado, toda vez que, contrariamente a las prohibiciones prescritas por el poder constituyente, permite que una persona o grupo de personas de manera excluyente sean las únicas que puedan dedicarse a la representación, agencia o distribución de productos o servicios nacionales o extranjeros en el territorio nacional.

No importa si esos convenios puedan pactarse entre varias empresas que se dediquen a representar, distribuir o servir de agente de empresas nacionales o extranjeras de bienes y servicios, ya que lo medular en el caso es que se impide que terceros puedan dedicarse en igualdad de condiciones a ejercer esas actividades económicas sin interferencia ni restricciones, máxime cuando tales restricciones las fomente la propia Ley como en el caso del mencionado Decreto de Gabinete.

La Constitución de la República de Panamá conforma un sistema de libre comercio cuya base es la libertad de todas aquellas personas que se desenvuelvan en las actividades comerciales o industriales; pero hay que tener presente que conforme a las directrices del Estatuto fundamental, el ejercicio de tales actividades está sujeta a la orientación, dirección reglamentación por parte del Estado, según las necesidades sociales. ...".

Apréciese que, en el presente caso, la producción fonográfica no es derecho de autor, sino un derecho conexo, de contenido patrimonial, mediante el cual se le otorga protección a cualquier persona, natural o jurídica, que fije los sonidos de una representación, ejecución u otros sonidos, es decir, que incorpore signos sonidos o imágenes sobre una base material que permita su percepción, reproducción o comunicación.

Los derechos conexos han sido señalados por DELIA LIPSZYC, en la obra ya citada anteriormente, en la siguiente forma:

"A pesar de que las expresiones derechos conexos, derechos vecinos y derechos afines evocan analogía con el derecho de autor, su utilización respecto a la tutela de los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión (únicos que se tratarán en el presente capítulo) así como los de otros beneficiarios, parece deberse más a

> las resistencias que siempre origina el reconocimiento de nuevos derechos -y que induce a recurrir asimilaciones a derechos ya consagrados- que a la existencia real de semejanzas, pues el objeto de la protección son actividades que -en las palabras de Desbois- concurren a la difusión, no a la creación de obras literarias y artísticas".
>
> (Derecho de Autor y Derechos Conexos, Delia Lipszyc. Ediciones Unesco 1993, Buenos Aires -Argentina. Pág. 348).

De allí a que la explotación de esta actividad constituye una actividad comercial o industrial, y le resulta aplicable el artículo 290 de la Constitución Política.

El Magistrado Ponente de esta sentencia le dedicó atención al tema de la tutela constitucional de la competencia en una monografía con esa misma denominación, en la cual, refiriéndose a la exclusividad, aplicada en particular al sistema de tutela de la competencia por el Mercado Común Europeo, ahora Unión Europea, expuso:

> "...
> La esencia de la exclusividad radica en que establece limitaciones a la libertad de contratar de una de las partes (o de las dos), dando lugar con ello a una limitación de la competencia, limitación que tiene lugar no solamente entre las partes vinculadas por el pacto o cláusula de exclusiva, sino entre una de las partes y aquellos empresarios que se dediquen al mismo género de actividades. La exclusiva es un pacto que acompaña a muy diversos contratos. Así, aparece dentro del campo de la distribución comercial en contratos de agencia, de compra-venta y suministro e incluso se manifiesta en determinadas figuras contractuales de carácter atípico o mixto, puede ser el denominado por la doctrina contrato de concesión mercantil. En favor de las cláusulas o relaciones de exclusividad, se señala que son instrumentos esenciales de mejoramiento de la producción por vía de su racionalización. Sin embargo, el principio de interdicción en la legislación comunitaria europea de las fórmulas de exclusividad se sustenta en el hecho de que, en los casos en que se ha permitido alguna relación exclusiva, ha sido sobre la base de declararlas conductas excluidas de la prohibición general; o como sostiene Galán Corona, "el hecho de que, apoyándose en el art. 85-3 del Tratado, se excluyan determinados acuerdos de exclusiva, es muestra evidente de que se encuentran comprendidos en la prohibición del párrafo 1 de dicho precepto".
>
> (Rogelio A. Fábrega Z. "La tutela constitucional de la competencia", Anuario de Derecho N° 21, página 134 y ss.).

Resulta, por ello, que este Pleno considera que le asiste razón al recurrente, con respecto al vocablo "exclusivo" en el artículo 90 de la Ley de Derecho de Autor.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE NO SON INCONSTITUCIONALES los artículos 19, 21, 77, 109, 122, 124 y 134 de la Ley 15 de 1984 y, QUE ES INCONSTITUCIONAL el vocablo "EXCLUSIVO" en el artículo 90 de la Ley 15 de 8 de agosto de 1994.

NOTIFÍQUESE Y PUBLÍQUESE EN LA GACETA OFICIAL.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TRIBUNAL DE INSTANCIA

CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO DEL MAGISTRADO ROGELIO A. FÁBREGA ZARAK EN LA ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JORGE FRANCISCO ORCASITA NG, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE INÉS MARÍA FÁBREGA, DELSA LORENA FÁBREGA DE DOWELL Y LUMY FÁBREGA DE ARIAS, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN S/N DE 5 DE MARZO DE 1996, PROFERIDA POR EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, OCHO (8) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Mediante escrito que aparece a folios 31, el Magistrado **ROGELIO A. FÁBREGA ZARAK**, solicita al Pleno de la Corte lo separe del conocimiento del presente caso, por cuanto la acción de amparo de garantías in examine se da como consecuencia de un proceso civil que sostienen miembros de su familia. Aclara el Magistrado Fábrega Zarak, que aunque no se trata de personas ligadas por vínculos de parentesco dentro de los grados establecidos por la ley para fundar una causal de impedimento, son familiares a quienes le une una estrecha relación.

Si bien es cierto que la ley define y delimita lo que debe entenderse por parentesco cercano por vínculos de consanguinidad o de afinidad, no hay duda que las relaciones y circunstancias sociales crean a veces nexos más estrechos entre las personas que los que se deducen de los preceptos legales y por ello, en casos excepcionales en los que pueda surgir un ligero asomo de duda sobre la imparcialidad del juzgador en la expedición de sus pronunciamientos, se ha optado por separar al Magistrado del conocimiento del proceso de que se trate.

En efecto, en este caso, la acción constitucional que se promueve emerge de un proceso civil entre hermanas, con el mismo apellido del Magistrado petente, por lo que es imperativo asegurar la mayor transparencia y objetividad.

Por tanto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL el impedimento exteriorizado por el Magistrado ROGELIO A. FÁBREGA Z., en el presente caso, lo separa del conocimiento del mismo y dispone llamar a su suplente personal para que lo sustituya.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

QUERELLA PRESENTADA POR EL LEGISLADOR MIGUEL BUSH RÍOS, CONTRA EL LICENCIADO JOSÉ ANTONIO SOSSA RODRÍGUEZ, PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, DOCE (12) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS. (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Carlos Eugenio Carrillo Gomila actuando en nombre y

representación de MIGUEL BUSH RÍOS ha interpuesto formal querella por los delitos de calumnia e injuria contra el señor JOSÉ ANTONIO SOSSA RODRÍGUEZ, ante la Procuradora de la Administración.

En escrito con fecha de 1 de marzo de 1996, la parte actora presentó desistimiento, ante la Procuradora de la Administración, en los siguientes términos:

> "El suscrito **CARLOS EUGENIO CARRILLO GOMILA**, varón, abogado en ejercicio y de generales que obran en autos, actuando en mi condición de Abogado Defensor expresamente facultado por el señor **MIGUEL BUSH RÍOS** de generales que obran en el proceso que se enuncia a márgenes superiores, por este medio comparezco ante su Despacho a fin de **DESISTIR**, como en efecto lo hago, de la Querella presentada por nosotros contra el Procurador General de la Nación.
>
> Solicitamos se ordene el archivo del expediente."

La Procuradora de la Administración al tener conocimiento del desistimiento, no se opuso al mismo y lo señaló de la siguiente manera:

> "Encontrándose este Despacho en la práctica de la actividad procesal que previene la Ley, recibimos escrito por parte del Licenciado CARLOS CARRILLO (fs. 18), quien actuando en representación del señor MIGUEL BUSH, solicita el desistimiento de la pretensión punitiva de la Querella en contra de JOSE ANTONIO SOSSA.
>
> Ante tales circunstancias, y en base a que los delitos imputados al señor JOSÉ ANTONIO SOSSA, son de aquellos que admiten el desistimiento, solicitamos respetuosamente al Pleno de la Honorable Corte Suprema de Justicia, admita el desistimiento presentado por el Querellante, y ordene el archivo de este expediente, en base a lo establecido en el artículo 1984 del Código Judicial".

De acuerdo a lo anterior, esta Superioridad no tiene ninguna objeción para acceder a lo solicitado, tanto por el querellante, como por la Procuradora de la Administración.

Por las anteriores consideraciones, el PLENO de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE EL DESISTIMIENTO de la querella presentada por licenciado Carlos Eugenio Carrillo Gomila actuando en nombre y representación de MIGUEL BUSH RÍOS, contra el señor JOSÉ ANTONIO SOSSA RODRÍGUEZ.

Notifíquese.

(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO DEL MAGISTRADO CARLOS H. CUESTAS G. EN DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD, FORMULADA POR EL LICENCIADO MARCO TULIO HERNÁNDEZ, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE KEL HARMODIO AROSEMENA Y MARIO VAN KWARTEL, CONTRA EL ACUERDO N° 48 DE 28 DE FEBRERO DE 1994, PROFERIDO POR EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Por medio de escrito fechado el 29 de febrero de 1996, el Magistrado Carlos H. Cuestas G. solicitó que se le separe del conocimiento de la demanda de inconstitucionalidad, interpuesta por el licenciado Marco Tulio Hernández, en representación de Kel Harmodio Arosemena y Mario Van Kwartel, contra el Acuerdo N° 48 dictado el 28 de febrero de 1994 por el Pleno de La Corte Suprema de Justicia.

El artículo 2562 del Código Judicial contempla las causales de impedimento para los procesos de inconstitucionalidad en los siguientes términos:

"Artículo 2562: Son causales de impedimento:

1. El parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad, con el demandante o con su apoderado;
2. Haber dictado el acto acusado o intervenido en su preparación o expedición; y,
3. Tener el Magistrado, su cónyuge o cualquier pariente cercano dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad interés en la decisión del caso".

Tal como se observa, el Magistrado Cuestas está impedido para actuar en esta causa de conformidad con el numeral 2 del citado artículo 2562 porque intervino en la expedición del acto impugnado, y el Pleno de la Corte Suprema de Justicia considera que el impedimento es legal y así debe declararlo.

De consiguiente la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE ES LEGAL el impedimento manifestado por el Magistrado Carlos H. Cuestas G., y ORDENA que se le separe del conocimiento del proceso y se escoja al suplente que ha de reemplazarlo de acuerdo con el procedimiento señalado en el artículo 38 del Código Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. G. DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SUMARIAS SEGUIDAS AL LEGISLADOR ARIS DE ICAZA POR EL SUPUESTO DELITO CONTRA EL HONOR EN PERJUICIO DE OMAYRA CORREA DELGADO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ha ingresado al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, para calificar el mérito legal del expediente que contiene las sumarias en averiguación instruidas contra el Legislador ARISTIDES DE ICAZA HIDALGO, por el supuesto delito contra el honor en perjuicio de OMAYRA MAYÍN CORREA DELGADO.

En resolución dictada por esta Superioridad el 26 de septiembre de 1995, visible de fojas 85 a 87, se ordenó el envío del expediente al señor Procurador General de la Nación.

En la referida resolución se hace constar que la apoderada judicial de la señora MAYÍN CORREA DELGADO, promovió querella, a fin de que se iniciaran

investigaciones contra el señor ARISTIDES DE ICAZA HIDALGO, conductor del programa "TOME NOTA" que se transmite por la GRAN CADENA EXITOSA, en el cual profiriera supuestas expresiones de deshonra y descrédito en perjuicio de la señora CORREA DELGADO, el día 30 de abril de 1993.

La Fiscalía Tercera del Primer Circuito Judicial emitió la Vista Fiscal N° 565 de 27 de octubre de 1993, por medio de la cual solicitaba llamamiento a juicio en ausencia, contra el señor DE ICAZA HIDALGO.

El Juzgado Décimo Cuarto de Circuito de lo Penal, ordenó la ampliación del sumario mediante Auto AMB. N° 45 DE 14 de abril de 1994. Posteriormente a ello, la Fiscalía Tercera informó, entre otras cosas al Juzgado, el hecho notorio y público de que el señor ARISTIDES DE ICAZA HIDALGO fue elegido Legislador de la Asamblea Legislativa. Como consecuencia de ello, la Juez Décimo Cuarta de Circuito de lo Penal se declaró carente de competencia mediante Auto Inhibitorio N° 18 de 11 de mayo de 1995.

El Procurador General de la Nación, mediante Vista N° 49 de 11 de diciembre de 1995, luego de un pormenorizado estudio de los autos, solicita al Pleno que al momento de calificar la querella lo haga dictando un sobreseimiento definitivo a favor de ARISTIDES DE ICAZA HIDALGO.

El representante del Ministerio Público base su opinión, en lo siguiente:

> "Como se puede apreciar, el hecho que motiva el editorial en el que se supone se vertieron los comentarios injuriosos, lo fue unas declaraciones de la señora Mayín Correa D., como funcionaria pública y, además, en dicho editorial se aluden a dos hechos concretos en los que, en una forma u otra, estaba relacionada la querellante, tratándose, en todo caso, de situaciones conocidas por la comunidad, compartidas por unos y, adversadas por otros.
>
> De lo expuesto se deduce que lo querellado, a nuestro juicio, en manera alguna constituye el delito de injuria, ante todo, porque no se ha acreditado que por parte del querellado, haya existido lo que en la doctrina se denomina el "animus injuriandi", ya que éste se limitó, como editorialista de un medio radial, a expresar un criterio en torno a unas declaraciones hechas por una persona que estaba revestida de la calidad de funcionario público, en este caso, Alcaldesa del Distrito Capital de Panamá.
>
> Por todo lo anterior, consideramos que lo que se debe dictar en esta causal penal, es un sobreseimiento definitivo".

La Corte procede a determinar lo planteado, una vez examinadas las sumarias cuestionadas. Veamos pues, que la apoderada judicial de la querellante, a foja 13 del expediente expresa:

> "No está de más (sic) aclarar, que cuando nuestra representada expresó la oración, que hoy sirve al comentarista para manifestar que incurrió en un incómodo olvido, en el mismo acto la corregió (sic) señalando "que soy una de las pocas funcionarias que no roba en este país".

Compartimos el criterio vertido por el Señor Procurador, en el sentido de que el contenido de la nota editorial es la posición de un medio radial, a través de la figura, en este caso, del señor ARISTIDES DE ICAZA HIDALGO, por declaraciones rendidas por un funcionario público, como lo fue, de la señora OMAYRA MAYÍN CORREA DELGADO, quien ejercía en esos momentos, el cargo de Alcaldesa del Distrito Capital. Por tanto, no se ha acreditado el "animus injuriandi", por parte del querellado, quien, reiteramos, emitió su criterio como editorialista con relación a las declaraciones que profiriera la querellante, en virtud de la investidura pública que ostentaba y ostenta en la actualidad.

Dadas las consideraciones anteriores y, en base a precedentes dictados por esta Corporación de Justicia, como lo son: la sentencia de 19 de octubre de 1992;

la sentencia de 13 de mayo de 1993, procede el Pleno de la Corte Suprema de Justicia a dictar sobreseimiento definitivo a favor de ARISTIDES DE ICAZA HIDALGO.

Por todo lo expuesto, La Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, expide el SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO DE MANERA OBJETIVA E IMPERSONAL en la presente causa, y ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

QUEJA FORMULADA POR LA LICENCIADA ROSA MARÍA SÁNCHEZ DE ISAZA EN REPRESENTACIÓN DE MICAELA GABRIELA STEGARU MIRESCU EN CONTRA DE LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MENORES DOCTOR ROGERIO DE MARÍA CARRILLO Y LA LICENCIADA ESMERALDA DE TROITIÑO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Este despacho como Sustanciador admitió la queja formulada por la licenciada ROSA MARÍA SÁNCHEZ DE ISAZA, en representación de MIHAELA GABRIELA STEGARU MIRESCU, contra los Magistrados del Tribunal Superior de Menores, Doctor ROGERIO DE MARÍA CARRILLO y la Licenciada ESMERALDA DE TROITIÑO, ordenando, además la citación de la quejosa, para que, bajo la gravedad del juramento, se ratificase de los cargos contra los funcionarios judiciales, si a bien lo tiene.

Cumplida la ritualidad anterior, la señora MIHAELA GABRIELA STEGARU MIRESCU, se ratificó de todos los cargos imputados, según consta en la declaración jurada que rindiera el 28 de junio de 1995, en la Secretaría General de esta Corporación de Justicia, por lo que se procedió a darle traslado de los antecedentes de la queja a los funcionarios acusados.

A folio 35-40 reposa la contestación de la queja por parte de la Magistrada ESMERALDA AROSEMENA DE TROITILLO, y de fojas 41-45 la del doctor ROGERIO DE MARÍA CARRILLO.

Encontrándose la queja para ser resuelta, observa el Pleno que no se identifica ni en la demanda original, ni en la declaración jurada en la cual el quejoso ratifica su denuncia, la causal o falta específica señalada en el artículo 285 del Código Judicial, a fin de poder determinar la Corte Suprema de Justicia, las medidas disciplinarias que le caben al funcionario demandado, de conformidad con los hechos que justifiquen la causal alegada.

En tal sentido, esta Superioridad en sentencia de 6 de enero de 1994, bajo la Ponencia de la Magistrada AURA E. GUERRA DE VILLALAZ, mantuvo lo siguiente:

> "Es criterio de esta Corte que la persona que presenta una queja contra algún funcionario del Órgano Judicial o del Ministerio Público debe hacer mención expresa del caso (causa) dentro del cual se enmarca la conducta denunciada. Es por ello que el Código Judicial hace una enumeración taxativa de los casos que ameritan ser sancionados disciplinariamente".
>
> (Registro Judicial, Enero 1994, p. 99).

No obstante la referida omisión que, por sí sola amerita él rechazo de la queja y el archivo del expediente, esta Corporación de Justicia considera oportuno referirse a los dos puntos medulares de la queja. Primeramente, se pretende que mediante el escrito de queja se examine si el recurso de apelación que interpuso su representada, debió haberse concedido en el efecto diferido y no en el efecto devolutivo.

Con independencia de que el efecto de los recursos de apelación en materia de familia y de menores, es distinto al contenido en el régimen común (Libro II del Código Judicial), esto es, se concede en el efecto devolutivo, de conformidad con el artículo 827 del Código de la Familia, utilizar el mecanismo de la censura por parte de una actuación jurisdiccional por vía de una corrección disciplinaria, dejaría sin razón de ser la existencia del sistema de recursos o remedios, sean ordinarios o extraordinarios, que le corresponden a las partes en todo proceso. De allí, a que el legislador, con buen criterio, no incluyó un vicio in procedendo por parte de los tribunales en actos susceptibles de corrección disciplinaria.

Con respecto a esta primer punto, el Magistrado CARRILLO expresó en la contestación a la queja, lo siguiente:

> "Realmente resulta incomprensible como hasta ahora es cuando mediante la acción específica de la queja que se examina es que pretende sostener el Recurso de Apelación que interpuso ha debido ser concedido en el efecto diferido, y no en el efecto devolutivo, que es el efecto normal que se concede en la esfera de la Jurisdicción Especial de Menores para esta clase de acción, y, al mismo tiempo con ella se trata de demeritar la labor de tres (3) funcionarios del Órgano Judicial, que en este caso han actuando correctamente y con buena voluntad.
>
> El Código Judicial en su artículo 1136 precisa que el Tribunal de Segunda Instancia cada vez que le llegue en apelación el expediente examinará los procedimientos y si encontrare que se ha omitido alguna formalidad o trámite decretará la nulidad de las actuaciones y ordenará que se reasuma el curso normal del proceso. En el caso que se estudia el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial en donde se encuentra el conocimiento del caso en grado de apelación no ha decretado ningún saneamiento de este proceso de Guarda, Crianza y Educación, lo que significa un elemento confirmatorio de la actuación regular en la tramitación del expediente respectivo en la primera instancia".

En segundo lugar, la quejosa manifiesta:

> "Con fecha 26 de enero de 1995 el Dr. ROGERIO DE MARÍA CARRILLO se declara impedido para conocer en segunda instancia del Proceso al que hemos estado haciendo alusión, y en lugar de que su impedimento, que consideramos válido sea calificado por un superior, lo remite a su suplente para que declare el impedimento y "procede a la debida tramitación". Si en ese momento ya estaban constituidos los Juzgados Seccionales de Menores no entendemos como el Dr. CARRILLO y la Lic. AROSEMENA seguían fungiendo como Titular y suplente del Tribunal Tutelar de Menores en calidad de Jueces del mismo".

Si bien es cierto que, para la fecha señalada por la apoderada judicial de la quejosa (26 de enero de 1995), ya estaba en vigencia el Código de la Familia, que nace a la vida jurídica a partir del 3 de enero de 1995, es importante señalarle a la representante legal de la quejosa, que en dicho Código se establece, en su artículo 836, primer párrafo, lo siguiente:

> "Artículo 836. Mientras se fijen las partidas correspondientes en el Presupuesto General del Estado, las funciones de los Jueces de Familia y de los Jueces de Menores las seguirán ejerciendo los Jueces Seccionales de Menores, el Tribunal Tutelar de Menores y los Jueces Ordinarios. ...".

Sobre este tópico, se observa a fojas 38 del expediente, la contestación a la queja que hiciera la Magistrada ESMERALDA AROSEMENA DE TROITIÑO. Veamos:

> "La quejosa, lo que muestra en su escrito es la confusión propia de lo que se estaba dando en el período de transición, es decir, si se convertía en Tribunal Tutelar de Menores como Tribunal Superior de Segunda Instancia o seguía siendo el original Tribunal Tutelar de Menores, funcionando sin la estructura anterior porque respondía a otra organización jurisdiccional, ya que efectivamente el 3 de enero de 1995 al crearse los Juzgados Primero y Segundo Seccionales de Menores como ente jurisdiccional, dejó de conocer, como Tribunal de primera instancia, de todos los procesos en asuntos de menores en la ciudad de Panamá hasta esa fecha, aunque seguía con la denominación de Tribunal Tutelar de Menores, y por otro lado, se producía la etapa de transición como Tribunal Superior de Menores, por disposición del artículo 836 "Ut Supra"."

Concluye el Pleno que, en el caso en estudio, al adolecer de haberse omitido la mención de la causal en que se enmarca la referida queja, y al realizar un breve análisis de las actuaciones de los funcionarios demandados, no tiene fundamento jurídico la misma, por lo que procede ordenar su archivo.

Por lo antes expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ORDENA el archivo de la queja presentada por la Licenciada ROSA MARÍA SÁNCHEZ DE ISAZA contra los Magistrados del Tribunal Superior de Menores, Dr. ROGERIO DE MARÍA CARRILLO y Lcda. ESMERALDA AROSEMENA DE TROITIÑO.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO EN LA DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ALEJANDRO PÉREZ, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LOS HONORABLES LEGISLADORES DANIEL ARIAS, RUBÉN AROSEMENA, ALBERTO CIGARRUISTA, LENÍN SUCRE, ARTURO VALLARINO Y MIGUEL SÁNCHEZ, CONTRA LA LEY N° 7 DEL 7 DE MARZO DE 1995, ORGÁNICA DE LA AUTORIDAD DE LA REGIÓN INTEROCEÁNICA. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Magistrado Eligio Salas ha solicitado que se le separe del conocimiento de la acción de constitucionalidad propuesta por el Lic. Alejandro Pérez contra la Ley N° 7 del 7 de marzo de 1995.

El Magistrado Salas fundamenta su solicitud en lo siguiente:

> "Respetuosamente solicito al Pleno de la Corte me separe del conocimiento de esta demanda de Inconstitucionalidad interpuesta contra la Ley N° 7 de 7 de marzo de 1995, la cual modifica y adiciona artículos de la Ley N° 5 de 1995 que crea la Autoridad de la Región Interoceánica y adopta medidas sobre bienes revertidos, lo que incluye la regulación de los contratos de arrendamiento de dichos bienes en sus artículos 17 y 18. En la actualidad soy inquilino de uno de estos bienes, condición que afecta mi interés en

la decisión de este negocio.

El hecho arriba expresado configura la causal de impedimento preceptuada en el ordinal 3 del artículo 2562 y numeral 6 del artículo 749 del Código Judicial y, en consecuencia, considero debe declararse legal el impedimento que por este medio manifiesto.

Panamá, 10 de abril de 1996."

Ya la Corte, con anterioridad, al calificar el impedimento manifestado por la Magistrada Mirtza Franceschi de Aguilera similar al expresado por el Lic. Salas, consideró que debía declararse legal.

Por lo tanto, los suscritos Magistrados del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARAN LEGAL el impedimento manifestado por el Lic. Eligio Salas y, en su lugar, disponen que se llame a su Suplente para que conozca de este negocio.

(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA A.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PRIMERA DE LO CIVIL

ABRIL 1996

RECURSO DE CASACIÓN CIVIL

JOSÉ DEL CARMEN VEGA MORCILLO, JOSÉ VEGA QUINTERO, ITZEL VEGA QUINTERO Y LUCINDA MORCILLO RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO (ACCIÓN DE SECUESTRO) QUE LE SIGUE RAQUEL VELÁSQUEZ GONZÁLEZ, EN REPRESENTACIÓN DE SU MENOR HIJO EDUARDO ARISTIDES VEGA VELÁSQUEZ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIEZ (10) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Mediante resolución dictada el 6 de marzo de 1996, esta Sala ordenó la corrección del recurso extraordinario de casación, en el fondo, propuesto por JOSÉ DEL CARMEN VEGA MORCILLO, JOSÉ VEGA QUINTERO Y LUCINDA MORCILLO, mediante apoderado especial, dentro del proceso ordinario que le sigue RAQUEL VELÁSQUEZ GONZÁLEZ en representación de su menor hijo EDUARDO ARISTIDES VEGA VELÁSQUEZ. Para tal fin, se concedió el término de cinco (5) días hábiles, conforme lo pauta el artículo 1166 del Código Judicial. Dicho término ha vencido sin que la parte recurrente corrigiera el recurso, es decir, ha precluido el término.

El vencimiento del término para la corrección trae consigo la declaración de inadmisibilidad del recurso con la consiguiente imposición de costas a cargo del recurrente, tal como lo señala el artículo 1166:

> "ARTÍCULO 1166: Si el recurso adolece de defectos de forma, la Corte ordenará su corrección, señalando al recurrente las deficiencias o defectos. Si el recurrente no lo corrigiere conforme lo ordenado, dentro del término de cinco (5) días, la Corte declarará inadmisible el recurso, con costas de setenta y cinco balboas (B/.75.00) a quinientos cincuenta balboas (B/.550.00), según la cuantía o la importancia del asunto y devolverá el proceso al Tribunal del conocimiento".

En virtud de lo anterior, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA INADMISIBLE la segunda causal de casación, en el fondo, interpuesta por JOSÉ DEL CARMEN VEGA MORCILLO, JOSÉ VEGA QUINTERO Y LUCINDA MORCILLO, mediante apoderado especial.

Se condena en costas a la parte recurrente por la suma de SETENTA Y CINCO BALBOAS (B/.75.00).

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Interino

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

FINANCIERA LAS TABLAS, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO QUE LE SIGUE A EUFEMIA GONZÁLEZ DE RODRÍGUEZ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIEZ (10) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Dentro del proceso ejecutivo hipotecario propuesto por FINANCIERA LAS TABLAS, S. A. contra EUFEMIA GONZÁLEZ DE RODRÍGUEZ, la parte demandante promovió recurso de casación, en la forma, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, el 25 de octubre de 1995.

Recibido el negocio en la Secretaría de la Sala de lo Civil y realizado el

reparto correspondiente, se procedió a escuchar a las partes sobre la admisibilidad del recurso.

El Tribunal al estudiar el aspecto formal, consideró admisible dicho recurso, se procedió posteriormente a fijar el término para que las partes alegaran en el fondo, período en el cual ninguna de las partes ejerció el derecho que la leu les concede.

Corresponde ahora, al tribunal resolver acerca de los planteamientos señalados por el casacionista.

El recurrente ha invocado una sola causal, en la forma, consistente en haberse omitido algún trámite considerado esencial por la ley, el cual se encuentra establecido por el artículo 1155, numeral 1°, del Código Judicial.

La causal está sustentada en 4 motivos, de los cuales se puede colegir que la infracción al procedimiento por parte del tribunal de segunda instancia, lo mismo que el de primera instancia, consiste en no haber identificado, en los avisos de remate, la existencia de mejoras y que los carteles a que se refiere el artículo 1733 del Código Judicial no se hicieron en el sitio en donde se encontraban los bienes objeto del remate, como ordena dicha disposición.

Como se puede apreciar, el artículo 1733, al referirse al contenido de la descripción de bienes rematados de naturaleza inmobiliaria, no exige que se incluyan las mejoras en los carteles. Dicha disposición, contenida en el segundo párrafo del artículo 1733 dispone:

> "ARTÍCULO 1733. Los anuncios se harán por medio de carteles que se fijarán en lugares públicos del lugar donde deba hacerse el remate, y el distrito donde estén situados los bienes, si fuere distinto. Dichos avisos expresarán el día del remate, los bienes que hayan de venderse, el avalúo y la cantidad que servirá de base para el remate de cada uno.
>
> Los bienes inmuebles se determinarán por su situación, linderos y demás circunstancias que los den a conocer con precisión, y si estuvieren inscritos en el Registro Público, se indicarán los datos pertinentes.
>
> Los bienes muebles, se determinarán en los anuncios, dándolos a conocer con la mayor claridad y precisión posibles".

La razón de ello es obvia: tratándose de bienes inmuebles, los mismos, si se encuentran inscritos en el Registro Público, se identificarán por su inscripción registral, en la cual se anotan todos los elementos relevantes de la finca inscrita. A este particular se refiere el artículo 1769 del Código Civil, inscripción que incluye todos los datos referentes al mismo, incluyendo la obligación de la inscripción de la finca, de tomar nota en el Registro de la Propiedad de otras inscripciones en otras Secciones del Registro Público (artículo 1768 del Código Civil) y bajo cuyos datos de inscripción será identificada la propiedad, es decir, "con ese número será conocido y determinado dicho inmueble en las certificaciones y copias que se expidan"(artículo 1769 del Código civil), incluyendo las mejoras, para las cuales basta una mera manifestación del interesado (artículo 1772 del Código civil). Es decir: el artículo 1733 exige que los carteles y avisos contengan, en el caso de inmuebles, que éstos se determinen por su situación, linderos y medidas y si apareciesen inscritos, en la certificación expedida por el Registro Público, en los cuales aparecerán todos los datos relevantes, como es el caso con el certificado aportado por el ejecutante en este proceso, visible a foja 3, en el que constan los datos de inscripción, los linderos, medidas y superficie, las mejoras edificadas sobre la misma y la existencia de un gravamen hipotecario a favor del ejecutante.

El segundo cargo que el recurrente le endilga a la sentencia es que los carteles del remate no se colocaron en el sitio en donde se encontraba el inmueble, es decir, en la Provincia de Herrera, además de la sede del Tribunal

que conocía del proceso ejecutivo.

Sobre este particular, esta Sala concuerda con lo expresado en la Sentencia recurrida, en el sentido que a foja 109 vuelta del expediente, aparece la siguiente manifestación del Juez Primero del Circuito de Herrera:

> "El suscrito Juez Primero del Circuito de Herrera hace saber que este Aviso de Remate fue fijado en un lugar visible de la Secretaría del Tribunal el día 29 de junio de 1995 y fue desfijado el día 5 de septiembre del presente año.
>
> El Juez,
> Lic. Juan Francisco Castillo Canto
>
> La Secretaria,
> Lic. Thaira Minestroza S."

Se aprecia que el recurrente, a pesar de que, en su opinión, se había pretermitido un trámite considerado esencial, el cual es causal de nulidad (artículo 727, numeral 2, del Código Judicial), en ningún momento invocó la misma, en la oportunidad que ofrece el artículo 747, numeral 2° del Código Judicial. Obsérvese que esta actividad es exigida por economía procesal, de tal manera que si existiese causal de nulidad, se sanee cuanto antes, para que el proceso siga su curso. Tanto es así, que el ordenamiento jurídico procesal veda la casación a aquella parte que, ante una falta procedimental, y obviamente cuando estamos frente a una causal de nulidad, se inste al tribunal a enmendar la anomalía procesal. No obstante, la Sala hace este señalamiento con finalidades didácticas, por cuanto es consciente de que, a estas alturas, el artículo 1179 resulta a todas luces inaplicable, con arreglo al artículo 1169 del Código Judicial.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 25 de octubre de 1995 dictada por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, dentro del proceso ejecutivo hipotecario propuesto por FINANCIERA LAS TABLAS, S. A. contra EUFEMIA GONZÁLEZ DE RODRÍGUEZ.

Las obligantes costas a cargo de la parte recurrente, se fijan en la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA BALBOAS (B/.250.00).

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Interino

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RAMIRO DOMÍNGUEZ RECURRE EN CASACIÓN DENTRO DEL INCIDENTE DE DOLO EN EL ACTUAR Y PETICIÓN ANTES DE TIEMPO PRESENTADO POR EDUARDO MIRANDA MARTÍNEZ CONTRA RAMIRO DOMÍNGUEZ, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO INTERPUESTO POR RAMIRO DOMÍNGUEZ CONTRA EDUARDO MIRANDA MARTÍNEZ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIEZ (10) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado RAÚL A. CÁRDENAS V., actuando en nombre y representación de RAMIRO DOMÍNGUEZ, formalizó recurso de casación contra la sentencia de 16 de enero de 1996, dictada por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, en la Excepción de Dolo en el Actuar y petición antes de tiempo, formulada dentro del proceso ejecutivo incoado por RAMIRO DOMÍNGUEZ contra EDUARDO MIRANDA MARTÍNEZ.

Ingresado el expediente a esta Superioridad, se fijó en lista por el término que concede la ley, a fin de que las partes presentaran sus respectivos escritos, período que no fue aprovechado por ninguno de ellos.

Consta a foja 67 del expediente el escrito de revocatoria de poder presentado por el casacionista y, en su defecto, lo confiere al Licenciado GUSTAVO H. VILLALAZ ISAZA.

Encontrándose el negocio pendiente de resolver la admisibilidad, los apoderados judiciales de ambas partes han presentado personalmente un escrito de transacción, tal como lo certifica la Secretaría de la Sala de lo Civil, a foja 69 del expediente. El referido escrito es del tenor siguiente:

"HONORABLES MAGISTRADOS DE LA SALA PRIMERA CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA:

Nosotros los abajo suscritos, **GUSTAVO H. VILLALAZ-ISAZA**, abogado en ejercicio, actuando en nombre y representación de **RAMIRO DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ**, por la parte demandante, y **ABEL DARÍO MARTÍNEZ**, abogado en ejercicio, actuando en nombre y representación de **EDUARDO MIRANDA MARTÍNEZ**, por la parte demandada, todos de generales conocidas, por este medio concurrimos ante su digno despacho a fin de manifestar que hemos convenido en la presente transacción con base en las cláusulas que consignamos a continuación:

PRIMERO: El licdo. **VILLALAZ-ISAZA**, apoderado judicial del demandante por este medio desiste del Recurso de Casación interpuesto en contra del auto de fecha 16 de enero de 1996, proferido por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial con sede en el Distrito de Las Tablas, provincia de Los Santos.

SEGUNDO: El licdo. **VILLALAZ-ISAZA**, apoderado judicial del demandante, se obliga a la entrega del vehículo marca Ford, modelo CL-9000, motor 110-84369, con placa N° 7c-734 del año 1993, color negro, capacidad 20 toneladas, por virtud del levantamiento de la medida de secuestro ordenada mediante resolución de fecha 1 de noviembre de 1995, proferida por el Juzgado Primero del Circuito de Los Santos.

TERCERO: El licdo. **MARTÍNEZ**, apoderado judicial del demandado, manifiesta que el demandado no ha recibido perjuicio alguno por razón de la demanda y medida cautelar de secuestro instaurada dentro del presente proceso y renuncian a cualquier reclamación en contra del demandante.

CUARTO: El licdo. **VILLALAZ-ISAZA**, apoderado judicial del demandante solicita la devolución de las fianzas de perjuicio consignadas para secuestrar mediante los certificados de garantía N° 09913 y 09930 expedidos por el Banco Nacional de Panamá, Sucursal de Las Tablas, por B/.1,120.00 y B/.2,200.00 respectivamente.

QUINTO: Ambas partes solicitan que se apruebe la presente transacción y manifiestan que se dan por notificados de la resolución que la aprueba y se allanan de la misma.

Siendo éstos los términos de la presente transacción judicial que hemos convenido, las partes las suscribimos en señal de aceptación.

Panamá, 8 de marzo de 1996.

(fdo.)
Gustavo H. Villalaz-Isaza
Céd.: 8-264-182
por el demandante

(Fdo.)
Abel Darío Martínez
Céd.: 4-720-1856
por el demandando".

De conformidad con nuestro ordenamiento jurídico, las partes pueden poner fin al proceso y uno de los medios lo constituye la transacción. En tal sentido, el artículo 1068 del Código Judicial señala:

"ARTÍCULO 1068. En cualquier estado del proceso, inclusive durante el trámite del recurso de casación y dentro de las condiciones establecidas en el Código Civil, podrán las partes transigir la litis.

Para que la transacción produzca sus efectos en el proceso, se acompañará a la respectiva solicitud el documento que la contenga o se hará constar en memorial dirigido al Juez que conoce del asunto.

En ambos casos el escrito será presentado personalmente, salvo que la firma de las partes en el respectivo memorial haya sido autenticada ante Juez o ante Notario. ...".

La Sala observa que el escrito presentado por las partes reúne los requisitos exigidos en la ley, y ha comprobado a foja 83 del expediente que contiene los antecedentes en el negocio que nos ocupa, que el demandado EDUARDO MIRANDA MARTÍNEZ confirió poder al Licenciado ABEL DARÍO MARTÍNEZ, quien efectivamente, en el escrito sometido a estudio, representa los intereses del demandado. A pesar que en el punto segundo de la transacción, se hace referencia a la resolución de 1° de noviembre de 1995, dictada por el Juzgado Primero de Circuito de Los Santos, y por medio del cual se ordena el levantamiento de la medida cautelar (secuestro), esta Sala estima conveniente señalar que la referida resolución se puede comprobar a fojas 24-29, en la cual no se ordena la devolución de las fianzas, por tanto es pertinente acceder también a esta petición.

Por otra parte, ambos apoderados están facultados para transigir, tal como consta en las fojas anteriormente señaladas.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, APRUEBA LA TRANSACCIÓN celebrada dentro del proceso ejecutivo instaurado por RAMIRO DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ contra EDUARDO MIRANDA MARTÍNEZ, DECLARA TERMINADO EL PROCESO y, en consecuencia, ORDENA el archivo del expediente, previa la devolución de las fianzas respectivas.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Interino

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y ELECTRIFICACIÓN (IRHE) RECURRE EN CASACIÓN EN EL INCIDENTE DE NULIDAD PROPUESTO POR AMÉRICA TORRALBO GARCÍA, NUMILLA TORRALBO GARCÍA Y OTROS DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO QUE LES SIGUE EL INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y ELECTRIFICACIÓN (IRHE). MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado JOSÉ DE JESÚS PINILLA, en su calidad de apoderado especial

sustituto del INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y ELECTRIFICACIÓN (IRHE), oportunamente formalizó recurso de casación contra el Auto de 28 de diciembre de 1995, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia en el incidente de nulidad propuesto por AMÉRICA TORRALBO GARCÍA, MUMILA TORRALBO GARCÍA y OTROS dentro del proceso ordinario que le sigue el INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y ELECTRIFICACIÓN (IRHE).

Después de fijado en lista, se concedió el término para que las partes aleguen sobre la admisibilidad del recurso, período que, fue utilizado por ambas partes, por lo que, procede el Tribunal de Casación a determinar, tal como lo disponen los artículos 1165 y 1160 del Código Judicial, si procede la admisibilidad.

El primero de los requisitos que contempla en artículo 1160 del Código Judicial es Determinación de la causal o causales que se invoquen. Respecto a este primer punto la Sala observa lo siguiente:

En el presente recurso se invocan dos causales de fondo, siendo la primera de ellas: "Infracción de normas sustantivas de derecho, por violación directa de la norma de derecho, lo cual ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida", la misma se encuentra consagrada como tal en la ley.

En referencia a los motivos que le sirven de fundamento, la Corte advierte que en ellos concurren varios errores que deben ser corregidos para acceder la Sala a la admisibilidad del recurso.

Primeramente, es necesario recordarle al recurrente que la casación es un recurso estrictamente formal, por lo que no se permite el uso de imprecisiones.

En el primer motivo el casacionista manifiesta que el Tribunal "no acató" las normas sustantivas vigentes del Decreto de Gabinete 235 de 30 de julio de 1969, esta manifestación es muy vaga y no concretiza la violación en que supuestamente incurrió la sentencia impugnada. Y debe resaltar es aspecto fáctico o de hecho. No se trata de un primer plano de una calificación jurídica.

El segundo motivo, pese a que en éste se enuncian los privilegios o derechos que tienen las instituciones del Estado, el recurrente no ataca directamente a la sentencia. Además de que incurre en el error de enunciar en todos los motivos normas legales violadas (Decreto de Gabinete 235 de 30 de julio de 1969). Inclusive en este motivos dice que se ha violado el artículo 4° del Decreto comentado, pero al momento que cita las normas infringidas y explica la violación de la misma, no hace alusión a este artículo.

En el tercer motivo reitera, el recurrente, normas de derecho dentro de los motivos, lo cual no es compatible con la formalidad de este recurso. Resulta confusa la redacción final de este motivo que se refiere a la "interpretación y aplicación". No debe incurrir en supuestos que generan otra causal de fondo.

El cuarto motivo: realmente éste no constituye un motivo, más bien se derivan apreciaciones subjetivas del casacionista que no prosperan en este recurso.

El quinto y último motivo recopila lo expresado anteriormente por él, por lo que resulta repetitivo.

Al entrar la Sala al estudio de las disposiciones infringidas y la explicación de tal violación, advierte errores que no pueden ser aceptados en esta etapa de admisibilidad.

El casacionista debe concretarse a citar y explicar la disposición violada por la sentencia cuya impugnación se impetra. Con el recurso de casación es necesaria que exista congruencia entre la causal invocada, los motivos, y la interpretación de las normas legales.

De ninguna manera se pude aceptar extensos alegatos en la explicación y menos que se citen doctrinas.

Estas anomalías deben ser corregidas.

La segunda causal esta enunciada erróneamente y ha sido señalada así: "Infracción de normas sustantivas de derecho, por aplicación indebida o interpretación errónea de la norma de derecho, lo cual ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida".

El recurrente ha consignado dos conceptos de casación, en el fondo, como si fuese uno, lo que resulta improcedente. Por otra parte, se observa que estos dos conceptos se excluyen entre si:

La aplicación indebida se debe invocar; cuando la norma jurídica se aplica a un hecho probado pero no regulado en ella. En cambio la interpretación errónea consiste en darle un alcance a una norma susceptible de ser interpretada de varias formas; pero el atribuido no es el indicado.

El Procesalista panameño Doctor JORGE FÁBREGA PONCE, en su reciente obra "CASACIÓN", señala con respecto al punto anterior:

> "5. ... Cada causal constituye una estructura autónoma, y la jurisprudencia no permite que se elabore una con otra."
>
> (JORGE FÁBREGA P. CASACIÓN, PÁG. 114)."

De lo anterior se colige que se está fusionando en la misma causal, dos conceptos de infracción, situación que impide a esta Corporación de Justicia analizar en los motivos el fundamento de la causal, pues al enunciarse dos conceptos en una, mal puede desprenderse de estos motivos, ataque alguno contra la resolución impugnada.

En tal sentido, el artículo 1177 del Código Judicial expresamente señala:

> "ARTÍCULO 1177: La Corte, en la decisión que pronuncie, examinará con la debida separación cada una de las causales y sus fundamentos".

Por todo lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ORDENA LA CORRECCIÓN de la primera causal de fondo, para lo cual concede un término de cinco (5) días, y DECLARA INADMISIBLE la segunda causal, en el recurso de casación, en el fondo, propuesto por INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y ELECTRIFICACIÓN (IRHE), en el incidente de nulidad propuesto por AMÉRICA TORRALBO GARCÍA, NUMILA TORRALBO GARCÍA Y OTROS, dentro del proceso ordinario que les sigue el INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y ELECTRIFICACIÓN (IRHE), contra el auto dictado por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial el día 28 de diciembre de 1995.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Interino

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SANTIAGO SALDAÑA DEL CID Y EDGAR ELÍAS SALDAÑA PALMA RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUEN A JULIO CÉSAR OLIVERA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La Sala Civil de esta Corporación de Justicia, luego de haber ordenado la

corrección del recurso de casación propuesto por SANTIAGO SALDAÑA DEL CID y EDGAR ELÍAS SALDAÑA PALMA contra la sentencia de 13 de septiembre de 1995, dictada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, en el proceso ordinario instaurado contra JULIO CÉSAR OLIVERA, lo declaró admisible mediante resolución de 12 de enero de 1996.

Posteriormente, se fijó el negocio en lista para que las partes alegaran en cuanto al fondo, derecho que sólo fue ejercido por la parte opositora (fs. 178-180).

La única causal invocada es la de infracción de las normas sustantivas de derecho, por error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba. Son dos las pruebas que, a juicio del recurrente, constituyen infracciones de la sentencia de segunda instancia a la ley, y ambas son documentales. Veamos cada una de ellas por separado.

La primera consiste en no haberle otorgado el valor probatorio que le corresponde al contrato de arrendamiento, que no toma en cuenta el deber que le corresponde al arrendatario de cuidar el bien con la diligencia de un buen padre de familia. Dicha obligación aparece regulada en el artículo 1307, numeral 2 del Código Civil: "a usar de la cosa arrendada como un diligente padre de familia, destinándola al uso pactado", y la utilización inapropiada del uso del bien arrendado no es cuestionado en este proceso, sino la diligencia demostrada, es decir, la negligencia en dicho uso, que tuvo como consecuencia el accidente. Ha sido criterio de esta Sala que la interpretación contractual no puede atacarse mediante las denominadas causales probatorias a que se refiere el artículo 1154 del Código Judicial (error de derecho en la apreciación de la prueba o de hecho en la existencia de la misma).

Al respecto, puede consultarse la decisión de 27 de febrero de 1990.

Sin perjuicio de que, en el presente proceso se trata de una pretensión de responsabilidad contractual y no extracontractual, el tratamiento que el Derecho de Daños le ofrece, es común en ambas, en cuanto a la relación de causalidad entre el hecho negligente y el daño causado. Así, para las relaciones contractuales, el artículo 992 del Código Civil, y para la responsabilidad extracontractual, el artículo 1644 del Código Civil; es decir, en ambos casos, el principio es el mismo, como ha tenido ocasión de puntualizar JAIME SANTOS BRIZ, en su "Derecho de Daños", quien afirma:

> "El nexo causal entre el acto u omisión dañosos y el resultado se expresa claramente en el artículo 1.902, (del Código Español, equivalente a nuestro artículo 1644 del Código Civil), y con la misma claridad, en al artículo 1.107 (del Código Civil español, equivalente a nuestro artículo 992 del Código civil) al decir, en cuanto a la contravención de buena fe, que los daños y perjuicios "sean consecuencia necesaria" de la falta de cumplimiento, y para el deudor doloso que los daños se deriven "de la falta de cumplimiento"." (Ob. cit., página 223).

El demandante, en este caso, debió comprobar el uso inadecuado del local arrendado y que ese uso negligente del objeto del contrato fue el causante del daño, es decir, en palabras del referido artículo 992, "que sean consecuencia necesaria de su falta de cumplimiento". En este caso, ha quedado acreditado que el arrendatario utilizaba el bien con la diligencia de un buen padre de familia. Otra cosa es que el hecho dañoso, el incendio, haya sido provocado por la negligencia del arrendatario, para lo que sería necesario un nexo necesario entre la actuación del demandado, el incendio, y que dicho daño se produjo por el demandado como consecuencia de la falta de cuidado propio de un buen padre de familia, es decir, como culpa leve, como señala el Profesor DULIO ARROYO. Y tal extremo habría de ser objeto de prueba por parte del demandante, siguiendo la regla de la carga de la prueba que señala el artículo 773 del Código Judicial, que le correspondía por beneficiarle a él dicha prueba, prueba que, en apreciación del tribunal de instancia, no se produjo. Es decir: hubo negligencia por parte del arrendatario, en el cumplimiento del contrato por la existencia de la condición en la que se encontraban las llaves del gas, tanto en la estufa,

como en el recipiente colocado en el exterior del local, en apreciación del recurrente. Pero para que prosperase su pretensión con respecto a este punto, era necesario acreditar que dejar las llaves abiertas fuese imputable al arrendatario y que dicha negligencia fue la causa del incendio. El mero deber de diligencia de cuidar el establecimiento arrendado con la diligencia de un buen padre de familia, o el incumplimiento de tal deber, es algo que debe acreditarse por los medios de prueba lícitamente obtenidos, para que el juzgador los tome en cuenta al momento de fallar, aplicándoles las reglas de la sana crítica (véase artículo 823 del Código Judicial).

La segunda prueba erróneamente apreciada lo constituye el informe del Cuerpo de Bomberos, cuando acredita que la causa probable del incendio ocurrió por haberse encontrado abiertas dichas llaves. Y agrega que esa circunstancia pudo ser la causa probable del incendio. Dicha prueba, contrariamente a lo que afirma el recurrente,no constituye una prueba plena, sino debe analizarse con arreglo a las reglas de la sana crítica, como señala el artículo 823 del Código Judicial.

De otra parte, aparece en el proceso la prueba testimonial de JANET DEL CARMEN SANTAMARÍA RUIZ, que laboraba en el local que se incendió, quien se refirió a la situación de las llaves en la siguiente forma (f. 68): "Yo aseguro que las llaves de la estufa de gas quedaron cerradas, porque me cercioré que quedaran cerradas, ya que era costumbre diaria hacerlo". Por su parte, el testigo CARLOS IVÁN DEL CID RÍOS, con respecto al mismo tema, expuso (f. 71):

> "Correcto, y es mas mande (sic) a una ayudante que era salonera, ella me ayudaba en la parte de atrás del Restaurante para que las verificara antes de yo salir, y después yo volví a verificarlas otra vez, el nombre de la joven salonera es YANET SANTAMARÍA".

En cuanto a la fuerza de los testimonios, los artículos 904 y 905 del Código Judicial señalan la facultad que tiene el Juez de apreciar las circunstancias y motivos que corroboren o disminuyan el testimonio rendido. A su vez, la prueba testimonial no constituye por sí sola, plena prueba pero si gran presunción conforme a la condición del testigo.

El Código Judicial, en su artículo 823, reiteradamente citado, señala en su segundo párrafo que las pruebas a que se refiere esa disposición referente a los documentos auténticos, lo siguiente:

> "Deben ser tomada en cuenta en su integridad, con las modificaciones y aclaraciones, y el Juez las apreciará en concurrencia con las obras pruebas del expediente, y según las reglas de la sana crítica."
>
> (Lo subrayado es nuestro)

Esta Sala considera que el Tribunal a-quem, lo mismo que el a-quo, valoró en debida forma las pruebas a que se refiere el recurso de casación, por lo que se desestima en cargo.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 13 de septiembre de 1995, dictada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial dentro del proceso ordinario incoado por SANTIAGO SALDAÑA DEL CID y EDGAR ELÍAS SALDAÑA PALMA contra JULIO CÉSAR OLIVERA.

Las costas en casación se fijan en la suma de DOSCIENTOS BALBOAS (B/.200.00).

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Interino

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES EBEN-EZER, S.A RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO DECLARATIVO QUE LE SIGUE NORMA L. SÁENZ. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El juicio que la Sala debe conocer en casación se originó cuando la señora NORMA L. SÁENZ, mediante apoderado judicial, interpuso demanda ordinaria contra DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES EBEN-EZER, S. A., solicitando que se declarase resuelto, con resarcimiento de daños y perjuicios y abonos de los intereses legales más las costas y gastos del proceso, el contrato de construcción 8-11-90 (y sus addendas) celebrado entre las partes, debido al incumplimiento en que se dijo incurrió la parte demandada.

La acción interpuesta fue contestada en traslado expresándose la oposición a las pretensiones de la parte actora y demandándose en reconvención a la promotora de este juicio, sobre quien se hace recaer la responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales y se solicita que se declare resuelto el contrato de construcción y sus enmiendas, pero mediante condena contra NORMA L. SÁENZ a fin de que responda por los daños y perjuicios que se estiman ocasionados.

El Juzgado Quinto de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, encargado de la tramitación del proceso, dictó sentencia el 19 de abril de 1993, después que el negocio fuera abierto a pruebas y, las aducidas por las partes, practicadas, antes de la presentación de los correspondientes alegatos. La sentencia proferida por el Juzgado de Primera Instancia negose a efectuar las declaraciones solicitadas en la demanda principal y absolvió a DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES EBEN-EZER, S. A. de pagar la suma de B/.15,460.00 balboas más el 15% adicional solicitado por la actora, y denegó las declaraciones pedidas por el reconvencionista y, en consecuencia, también absolvió a NORMA L. SÁENZ de la obligación de pagar la suma de dinero reclamada en su contra en concepto de daños y perjuicios.

La motivación central en apoyo de lo decidido fue expresada por el a-quo en los términos que a continuación se transcriben:

> "Y lo que si está claro en el expediente, es que ninguno de los interlocutores de esta controversia jurisdiccional, han(sic) logrado convencer a este Tribunal, de sus afirmaciones, y siendo esta la situación que se plantea, se torna imperiosa la negativa de ambas pretensiones, habida cuenta de que no han satisfecho el imperativo de sus propios intereses o dicho en otros términos, la carga probatoria de la cual nos platica el artículo 773 del Código Judicial".

Las partes, inconformes con el veredicto, apelaron ante el Primer Tribunal Superior de Justicia y, en vista de ello el 23 de febrero de 1995, esa Corporación profirió fallo confirmatorio de la sentencia dictada por el Juez primario. El Tribunal Superior opinó lo siguiente:

> "La contradicción en la forma de actuar de la demandante desacredita su afirmación de que los trabajos realizados por la compañía demandada no eran de la calidad acordada, toda vez que son los empleados y subcontratistas los que realizan los trabajos contratados con la empresa Diseños y Construcciones Eben-Ezer, S. A.
>
> Por otro lado, si la obra fue entregada antes de su terminación y esta entrega se debió a un requerimiento de la demandante, mal puede esta alegar que los trabajos no tenían el acabado necesario y que algunos no fueron terminados, pues los mismos no se terminaron por solicitud de la actora.

> Unido a lo anterior, este Tribunal, al igual que el juzgador de primera instancia, considera que dentro del presente negocio no ha logrado comprobarse si la suma de dinero pagada por la actora, corresponde o no a los trabajos realizados por la demandada, toda vez que hay que tomar en cuenta que al contrato original se le agregaron addendas que contenían nuevos trabajos y la actora no ha logrado esclarecer qué porcentaje de lo pagado corresponde a cada trabajo en particular, por lo que no se ha determinado si los pagos realizados no están de acuerdo con los trabajos realizados.
>
> Con relación a la pretensión de la parte demandada este Tribunal coincide con la opinión del Juzgador de primera instancia cuando manifiesta que "la actora en la reconvención no ha podido demostrar, que la suma que recibió, era cónsona o no con las obras que se habían ejecutado".
>
> Este Tribunal considera acertado el criterio del a-quo, toda vez que durante el proceso se llegó a demostrar que la parte actora pagó una suma considerablemente superior a la acordada en el contrato original, por lo que a falta de pruebas definitivas sobre la correspondencia entre lo trabajado y lo cobrado por la empresa Diseños y Construcciones Eben Ezer, S. A., no ha logrado acreditarse la pretensión del reconvencionista y por consiguiente no ha de accederse a lo solicitado."

RECURSO DE CASACIÓN

Ante esta Sala de la Corte ha recurrido en casación el apoderado judicial de la parte demandada en el proceso, demandante en reconvención, quien en esa forma expresa su inconformidad con la sentencia dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia en este caso.

El recurso se presenta invocando dos causales de fondo. La primera causal invocada es por infracción de normas sustantivas de derecho por concepto de error de hecho sobre la existencia de la prueba. La segunda causal es por la infracción de normas sustantivas de derecho en concepto de violación directa. La Sala declaró admisible el recurso y concedió el término a las partes para que presentaran sus alegatos, oportunidad sólo aprovechada por el recurrente.

Correspóndele a esta Superioridad emprender el examen de fondo de las causales utilizadas para cuestionar la resolución dictada en segunda instancia por el Tribunal Superior. El examen de las causales se hará en el orden en que fueron presentadas por el recurrente.

PRIMERA CAUSAL DE FONDO

Expresa el casacionista en los motivos que el error de hecho sobre la existencia de la prueba, esgrimida como primera causal, se produjo, en primer lugar, cuando la sentencia impugnada dio por sentado que el demandante en reconvención no probó que la suma de dinero recibida para ejecutar los trabajos de construcción contratados era cónsona o se correspondía con las obras ejecutadas, debido al hecho de no haber tomado en consideración el informe preparado por el Arquitecto GINO BURGOS, visible a fojas 19, en el cual se hace una relación del avance de la obra hasta el momento en que los trabajos se vieron suspendidos. Agrega que ese informe fue aceptado y reconocido como válido por las dos partes de esta controversia, pero que la resolución impugnada ignoró esa realidad, lo cual incidió sustancialmente en la decisión final adoptada. El otro cargo que se formula contra el fallo, dentro de esta causal, se refiere al comportamiento similar asumido por el Tribunal Superior en relación con el peritaje practicado a los libros de la Compañía DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES EBEN-EZER, S. A., cuyo informe consta a fojas 177 y 178 del expediente, y mediante el cual se determinó, entre otros aspectos, que el costo total de la obra contratada era de B/.33,253.93 balboas y que la señora NORMA L. SÁENZ, sólo pagó el 73% del precio del contrato celebrado o sea B/.24,327.57.

De acuerdo con el casacionista la correspondencia entre ambas pruebas (la

de fojas 19 con la de fojas 177 y 178) permite establecer que, cuando la obra se suspendió por decisión unilateral de la señora NORMA L. SÁENZ, quedaron trabajos pendientes de terminar sólo por valor de B/.5,501.00, o sea por el equivalente a 16.545% del valor del contrato.

Como normas de derecho violadas por la sentencia se cita el artículo 769 del Código Judicial cuya infracción es vinculada al hecho de que en la sentencia se omitió la consideración del documento de fojas 19 y del informe pericial visible a fojas 177 y 178 del expediente. Además, se le endilga a la sentencia la infracción del artículo 1009 del Código Civil que se dejó de aplicar a consecuencia de haberse ignorado y pasado por alto las dos pruebas mencionadas, lo que impidió la declaratoria de la resolución del contrato motivada por el incumplimiento de las obligaciones de la parte actora en los términos expuestos por el demandante en reconvención.

EXAMEN DE LA PRIMERA CAUSAL

La primera tarea a cargo de la Sala consiste en el examen de la causal en estudio para verificar si en este caso los medios probatorios identificados por el recurrente han sido, en verdad, ignorados por la sentencia impugnada y si la norma correspondiente del Código Judicial, que consagra los medios probatorios que la sentencia supuestamente pasó por alto, ha sido citada con propiedad por el casacionista.

Comencemos por el documento de fojas 19, identificado por el recurrente como el informe preparado por el Arquitecto GINO BURGOS, en el que se hace una relación de los trabajos no realizados al 31 de enero de 1991, fecha en que ya las obras habían sido suspendidas. En efecto, el documento es visible a fojas 19 del expediente y sobre el particular no se comenta absolutamente nada en la sentencia de Segunda Instancia. Es más, en la de Primera Instancia también se guardó, por completo, silencio al respecto. Vale la pena tener en cuenta que este documento lo hizo llegar al proceso la parte actora, es decir, la señora NORMA L. SÁENZ, como una de las pruebas que acompañó con el libelo de la demanda, individualizada con el número 9 (fs. 88) y su finalidad consistió en respaldar el hecho Octavo en que fundamentaba su pretensión, el que, para mayor claridad, la Sala transcribe a continuación:

> "OCTAVO: En nota de 31 de enero de 1991 el Arquitecto GINO BURGOS envía un resumen de los trabajos no realizados y realizados en esa fecha". (fs. 85).

El hecho Octavo de la demanda fue aceptado como cierto por la parte demandada (v. fs. 94) y, con posterioridad, el 25 de marzo de 1993, el Arquitecto GINO BURGOS compareció ante el Despacho del Juzgado Quinto de Circuito y reconoció formalmente el contenido y la firma del documento, según consta a fojas 204 del expediente.

En esa circunstancia la Sala le concede razón a la censura en cuanto a su señalamiento, puesto que se ha podido comprobar la presencia del documento (del cual el fallo hizo entera abstracción al tratarlo como si no existiera) en el mundo del proceso.

Acerca del informe pericial denunciado por el recurrente como dejado de considerar por el Tribunal Superior, también es preciso aceptar que la resolución lo ignora por completo. La experticia practicada a los libros de la Compañía DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES EBEN-EZER, S. A. se llevó a cabo dando cumplimiento a todas las formalidades legales dispuestas para la práctica de esta clase de pruebas y sus resultados son visibles de fojas 177 a 178 del expediente.

El artículo 769 del Código Judicial, citado como violado por el casacionista, sin dudas fue dejado de aplicar y es el pertinente:

> "**Artículo 769**: Sirven como prueba los documentos, la confesión, el juramento, la declaración de parte, la declaración de testigos, la inspección judicial, los dictámenes periciales, los informes, los indicios, los medios científicos y cualquier otro medio racional que

sirva a la formación de la convicción del Juez, siempre que no estén expresamente prohibidos por la ley, ni violen derechos humanos, ni sean contrarias a la moral o al orden público.

Puede asímismo emplearse calcos, reproducciones y fotografías de objetos, documentos y lugares.

Es permitido, para establecer si un hecho puede o no realizarse de determinado modo, proceder a la reconstrucción del mismo. Si el Juez lo considera necesario, puede procederse a su registro en forma fotográfica o electromagnética."

POSICIÓN DE LA CORTE

La pregunta que surge y se debe contestar es si, de haber tomado en cuenta el Tribunal Superior las dos pruebas ignoradas en la sentencia, el Tribunal habría estimado como lo hizo que **"a falta de pruebas definitivas sobre la correspondencia entre lo trabajado y lo cobrado por la empresa DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES EBEN-EZER, S.A, no ha logrado acreditarse la pretensión del reconvencionista y por consiguiente no ha de accederse a lo solicitado".**

Veamos:

El documento de fojas 19 al que no se le prestó atención consiste, como queda dicho, en el informe aportado como prueba por la parte demandante, NORMA L. SÁENZ, y fue preparado por el Arquitecto GINO BURGOS. Su autenticidad y validez deviene de haber sido aceptado como cierto y verdadero por las dos partes de esta controversia. En ese documento se dejó establecido a cuánto ascendía en dinero el valor de los trabajos de la construcción contratada que no se llegaron a terminar, fijándose esa cantidad en la suma de B/.5,501.00, lo que quiere decir que, si el total del costo de la obra contratada era de B/.33,253.93, según se consigna en la otra prueba no tomada en cuenta por la resolución (el peritaje), los trabajos terminados por el contratista alcanzaron un costo superior a las sumas de dinero entregadas por la señora SÁENZ a DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES EBEN-EZER, S. A. para la ejecución de la obra. De acuerdo con la parte demandante a la empresa le fueron entregados B/.23,622.57 (hecho Noveno de la demanda), sin embargo, el peritaje indica que la suma entregada fue de B/.24,327.57.

La información completa que arrojó el peritaje practicado fue el siguiente: que el costo total de la obra contratada fue de B/.33,253.93; que el total de dinero entregado por NORMA L. SÁENZ a DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES EBEN-EZER, S. A. fue de B/.24,327.57; que el porcentaje del total de la obra pagado por NORMA L. SÁENZ a DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES EBEN-EZER, S. A. fue el 73% --porcentaje inferior al 85% del valor de la obra que se comprometió NORMA SÁENZ a entregarle a la Empresa antes de la terminación para poder exigir la entrega de la obra terminada--; que, por no haberse terminado la obra, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES EBEN-EZER, S. A. dejó de percibir la suma de B/.8,926.36 (parte del precio del contrato que no fue pagada) y, que los perjuicios (comprendido el dinero dejado de percibir más honorarios y gastos) sufridos por DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES EBEN-EZER, S. A. fue de B/.15,192.16.

En el informe rendido los peritos manifiestan que no se encuentra en su capacidad determinar el grado de avance alcanzado por la obra, ya que su especialidad no es la arquitectura ni la ingeniería y, en consecuencia, ellos no se aventuran a certificar si las sumas pagadas por NORMA L. SÁENZ cubren o no los trabajos que ejecutó DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES EBEN-EZER, S. A. hasta la suspensión de la obra contratada. Sobre este asunto la Sala advierte que el punto se aclara si la información del peritaje se complementa con la información contenida en el documento de fojas 19 que si fue preparado por un profesional de la arquitectura (el arquitecto GINO BURGOS).

Un simple razonamiento le indica a la Sala que, si de acuerdo a ese informe (el del Arquitecto Burgos) el valor de los trabajos que hacían falta para terminar la obra era de B/.5,501.00 y si, de acuerdo con el peritaje, el costo total de la obra era de B/.33,253.93, la empresa constructora había cumplido con

un 83.455% de su obligación, mientras que NORMA L. SÁENZ, pagando la suma de B/.24,327.57, sólo había cancelado el 73% del precio convenido. Lo anterior también significa que a la fecha en que se paralizaron los trabajos la diferencia entre el valor de los que se habían realizado y la cantidad pagada por NORMA SÁENZ al contratista arrojaba un saldo favorable a DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES EBEN-EZER, S. A. de B/.3,424.49, ya que, en todo caso, la suma que se debió haber pagado por los trabajos efectivamente terminados era de B/.27,327.59 mientras que la entregada, como queda dicho, fue sólo de B/.24,327.57.

Producto del análisis anterior saca la Sala en conclusión que, si el Tribunal Superior hubiese tomado en consideración las dos pruebas que ignoró en la sentencia proferida, no hubiera tenido porqué haber encontrado dificultades para determinar si las pretensiones del demandante en reconvención estaban o no justificadas. También para esta Superioridad resulta evidente que la causal invocada reúne los méritos para prosperar en vista de que los cargos que se le imputan a la sentencia se han podido verificar a plenitud pues, al desconocerse la existencia de los dos elementos probatorios que al sustanciarse este recurso han sido analizados, se produjo la imposibilidad jurídica de aplicar las disposiciones del Código de Procedimiento en donde se consagran esos medios de prueba y la disposición del Código Civil que ha sido denunciada como violada, por lo que se incurrió en una omisión que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida.

Por las anteriores consideraciones esta Sala encuentra justificada la causal invocada y por tanto invalida la sentencia de segunda instancia y procede a dictar la que debe reemplazarla conforme a la Ley y al mérito de los hechos. No se entra a considerar la segunda causal de fondo alegada por razones obvias.

SENTENCIA DE REEMPLAZO

Pasa la sala a dictar la sentencia de reemplazo, lo cual se hace en los siguientes términos.

Un detenido estudio de este negocio pone en evidencia que las partes, a saber, NORMA L. SÁENZ y DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES EBEN-EZER, S. A. celebraron un contrato de construcción al cual con posterioridad los contratantes, de mutuo acuerdo, le añadieron algunas enmiendas con la finalidad de complementarlo. Luego de haberse iniciado la ejecución de ese contrato, a determinada altura del avance de las obras de construcción, la señora NORMA L. SÁENZ le ordenó al contratista que no siguiera adelante con las obras y decidió unilateralmente suspender los pagos contractualmente pactados con base al progreso que se fuera advirtiendo en el desarrollo de la obra contratada. A continuación la señora NORMA L. SÁENZ interpuso demanda ordinaria para que se declarase la resolución del contrato y se condenase a la parte demanda al pago de daños y perjuicios. El demandado se opuso a las pretensiones de la actora y a su vez presentó demanda de reconvención con el objeto de que el contrato se declarase resuelto y se condenase a su oponente al pago de los correspondientes daños y perjuicios.

En primera y en segunda instancia se dictaron sendos fallos en los cuales se declararon no probadas las pretensiones de las partes, absolviéndoseles a ambas y estimándose las costas como habían sido causadas, sin que las sentencias respectivas se pronunciaran acerca de las resoluciones del contrato solicitadas por los dos contendientes procesales.

Unicamente la parte demandada, demandante en reconvención, interpuso recurso extraordinario de casación para impugnar el fallo de segunda instancia el cual, como se ha visto, ha sido casado por esta Sala de la Corte.

Las obligaciones de las partes que dieron origen a este juicio ordinario son de aquellas que emanan de los contratos sinalagmáticos, en virtud de los cuales se imponen cargas recíprocas y correlativas a los contratantes. Cada una de las partes tiene frente a la otra un derecho de crédito y un deber de prestación más o menos equivalente. Es dentro de esa estructura jurídica en que puede llegar a producirse el fenómeno de la resolución del contrato, cuyo fundamento habrá de buscarse en el incumplimiento por una de las partes de las obligaciones contraídas. En el carácter sinalagmático de las obligaciones

contractuales se funda la regla de la ejecución simultánea del contrato, así como la idea de que cada parte puede reclamar indistintamente el cumplimiento de la obligación puesta a su cargo, cuando la otra no haya cumplido con la que le corresponda; o solicitar la resolución del contrato, en ambos casos con indemnización de daños y perjuicios. Esos son, en términos generales, los principios recogidos claramente en el artículo 1109 de nuestro Código Civil.

En el caso subjúdice las dos partes optaron por pedir la resolución del contrato, pero la demandante principal, NORMA L. SÁENZ, no logró probar el incumplimiento del cual acusó a DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES EBEN-EZER, S. A. en relación con el contrato celebrado. Así fue decidido en Primera y en Segunda Instancia. En cambio, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES EBEN-EZER, S. A. en su condición de demandante en reconvención, ha podido demostrar, que si aportó las pruebas suficientes para acreditar que quien en realidad dejó de honrar las obligaciones contractuales fue precisamente la señora NORMA L. SÁENZ. Esta verdad procesal fue respaldada con los medios de prueba cuya existencia no fue reconocida en la sentencia de segunda instancia, pero que fue reivindicada mediante el recurso extraordinario de casación en el fondo que la Sala acaba de resolver, quedando convencida la Sala de que DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES EBEN-EZER, S. A. no es responsable del incumplimiento del contrato celebrado entre las partes.

Por otro lado, considera la Corte que en el expediente existen suficientes elementos de convicción que demuestran que es a la señora NORMA L. SÁENZ a quien se le debe imputar el incumplimiento del contrato. Las pruebas de autos indican que fue ella quien ordenó la suspensión de las obras contratadas y se negó a continuar haciendo los abonos del precio del contrato que tenía la obligación de efectuar conforme a lo pactado impidiendo de ese modo la terminación de los trabajos. Esas decisiones fueron adoptadas de manera unilateral. Está, además, probado que la contratante dejó de cumplir con lo establecido en la cláusula Cuarta del contrato que la obligaba a pagar hasta un 85% del precio de la obra antes de su entrega, algo que dejó de hacer sin poder justificar esa conducta.

Cierto es que el artículo 1346 del Código Civil faculta al dueño de la obra para resolver por su sola voluntad el contrato y desistir de la construcción si ello entra en la esfera de su conveniencia; pero así también esa disposición le obliga, cuando con tal unilateralidad haya procedido, a indemnizar al contratista en los gastos, el trabajo y la utilidad que este último tendría derecho a percibir con motivo del contrato.

La discusión, en el terreno de la doctrina y la jurisprudencia, se ha planteado en torno a cómo se debe calcular la indemnización del contratista y, de manera específica, hasta dónde debe llegar la utilidad que habría que reconocérsele cuando éstas situaciones se produzcan. El Tribunal Supremo de España al aplicar el artículo 1594 del Código Civil de ese país, exactamente equivalente al 1346 de nuestro Código Civil, ha partido del concepto de que debe considerarse como utilidad la ganancia neta o beneficio industrial que el contratista habría obtenido con la realización de la obra en su totalidad. En sentencia de 10 de marzo de 1979 el Tribunal Supremo de España se pronunció en los siguientes términos:

> "el dueño que desiste de la construcción de la obra viene obligado a dejar indemne al contratista, es decir a que el patrimonio de éste no sufra menoscabo alguno como consecuencia de aquel desistimiento y, por ello, la utilidad al indemnizar es la que pudiera obtener el contratista de la totalidad de la obra y no tan sólo de la parte ejecutada, ..." (subraya la Sala)

Idéntico criterio utilizó el Tribunal Supremo Español el 15 de diciembre de 1981 al reiterar que:

> "... la indemnización ha de comprender la "utilidad" total, siendo referible este concepto a toda la que el contratista hubiera podido reportar de la construcción de la obra y de ahí que la base la haya de suministrar el valor de la obra ejecutada con la adición del pertinente al de la restante obra desistida, ..."

Ahora bien, en el caso subjúdice, como hemos visto, a través de las pruebas de autos se ha logrado establecer con certeza que la comitente dejó impaga la suma de B/.3,424.49 en concepto de trabajos efectivamente terminados, suma que a juicio de la Sala la demandada en reconvención está obligada a cancelar sin ninguna clase de discusiones. La dificultad estriba en determinar qué porcentaje del valor de la parte de la obra no concluida, al que se le ha señalado un costo de B/.5,501.00, debe considerarse como utilidad en favor del contratista.

Para resolver este punto la Sala recurre al examen del contrato celebrado entre las partes, en especial al contenido de las addendas que le fueron incorporadas de común acuerdo. Esos documentos (fs. 8 a 13) revelan el precio convenido por las partes para cada una de las fases de la construcción, desglosando el valor que se le asigna a los trabajos con el añadido perfectamente identificable de la cantidad de dinero que se le pagaría al contratista en concepto de utilidad. Matemáticamente, atendiendo a lo indicado por las cifras que aparecen en esos documentos, es posible concluir que la utilidad del contratista es cifrable en un 16% del precio total de la obra, lo que también significa que esa utilidad calculada sobre B/.5,501.00 (valor de aquella parte de la obra contratada que no se concluyó) equivale a la suma de B/.880.16.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA la sentencia proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia de fecha 23 de febrero de 1995; REVOCA la sentencia N° 43, de fecha 19 de abril de 1993, dictada por el Juzgado Quinto del Circuito Civil del Primer Circuito Judicial; y, FALLA de la siguiente forma:

1) DECLARA RESUELTO el contrato celebrado entre NORMA L. SÁENZ y DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES EBEN-EZER, S. A.;

2) En la demanda inicial ABSUELVE a DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES EBEN-EZER, S. A. de pagar la suma de B/.17,779.00 más los daños y perjuicios solicitados por la actora.

3) En la demanda de reconvención se CONDENA a NORMA L. SÁENZ, con cédula N° 4-102-605 a pagar a favor de DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES EBEN-EZER, S. A. la suma total de CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS CON 71/100 (B/.4,304.65) compuesta por lo que se dejó de pagar en concepto de la parte ejecutada de la obra (B/.3,424.49), más B/.880.16 en concepto de la utilidad pertinente a la parte de la obra desistida.

Las costas a cargo de la demandante NORMA L. SÁENZ, para ambas instancias, se fijan en la suma de MIL BALBOAS 00/100 (B/.1,000.00).

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Encargado

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

PROPIETARIOS DE BUSES, S. A. RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A LOS DE LA RUTA COLÓN, PILÓN, MARÍA CHIQUITA, S. A., VÍCTOR MENDOZA Y TRANSCOLPILMA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La apoderada judicial de la sociedad **PROPIETARIOS DE BUSES, S. A.**, presentó recurso de casación contra la sentencia proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 26 de septiembre de 1994, dentro del proceso ordinario instaurado

por la sociedad recurrente contra **PROPIETARIOS DE BUSES DE LA RUTA COLÓN, PILÓN, MARÍA CHIQUITA, S. A., VÍCTOR MENDOZA y TRANSCOLPILMA, S. A.**

En vista de que el negocio se encuentra pendiente de decidir en el fondo, a ello procede la Sala, previas las siguientes consideraciones.

ANTECEDENTES

La presente controversia se origina con la presentación de la demanda por parte de la sociedad PROPIETARIOS DE BUSES, S. A., con el objeto de obtener indemnización por daños y perjuicios de PROPIETARIOS DE BUSES DE LA RUTA COLÓN, PILÓN, MARÍA CHIQUITA, S. A., TRANSCOLPILMA, S. A. y el señor VÍCTOR MENDOZA, por la suma de treinta mil balboas (B/.30,000.00), más costas y gastos legales, "por usurpar ilegalmente la oficina de la sociedad Propietarios de Buses, S. A. y sus actividades comerciales." (Foja 2).

Como fundamento de la pretensión, se utilizan ocho hechos que pueden resumirse así:

1) La sociedad PROPIETARIOS DE BUSES, S. A. se dedica al transporte colectivo en la ruta de Colón, Pilón, María Chiquita, desde 1985.

2) Para cumplir con esta actividad comercial utilizaba las oficinas ubicadas, una, en Monte Esperanza, Provincia de Colón, arrendada por la sociedad TRATECO a PROPIETARIOS DE BUSES, S. A. y la otra situada en Río Alejandro, Provincia de Colón, de propiedad de la sociedad demandante.

3) Que desde el 1° de julio de 1988, la sociedad PROPIETARIOS DE BUSES DE LA RUTA COLÓN, PILÓN, MARÍA CHIQUITA, S. A. se tomó ilegalmente y por la fuerza, la oficina ubicada en Río Alejandro, al igual que la administración de la misma.

4) Como consecuencia de lo anteriormente señalado, la demandante promovió el 14 de abril de 1989, una demanda de lanzamiento por intruso, ante la Corregiduría de Río Alejandro, Provincia de Colón.

5) Mediante resolución N° 141 de 29 de abril de 1991, proferida por la Gobernación de la Provincia de Colón, se ordenó el lanzamiento por intruso de "las personas que ocupaban ilegalmente funciones dentro de la junta directiva de la línea Colón, Pilón, María Chiquita", los señores LUIS JIMÉNEZ, ALFREDO SCOTT y MILÁN SÁNCHEZ de las oficinas ubicadas en Río Alejandro, Provincia de Colón.

6) Desde el 16 de abril de 1992, la sociedad TRANSCOLPILMA, S. A., "procede también a usurpar las instalaciones y la administración de las actividades de la sociedad PROPIETARIOS DE BUSES, S. A. situación que se mantiene hasta la fecha de presentación de esta DEMANDA" (Foja 4).

El Juzgado Segundo del Circuito de Colón conoció de este proceso en primera instancia y decidió el mismo mediante sentencia proferida el 15 de diciembre de 1993, cuya parte resolutiva es la siguiente:

> "Con fundamento en lo previamente externado, el Suscrito JUEZ SEGUNDO DEL CIRCUITO DE COLÓN, RAMO CIVIL, ÁREA DE CRISTÓBAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, Declara no Probada la Pretensión, en el proceso Ordinario de Mayor Cuantía con Acción de Secuestro instaurado por Propietarios de Buses, S. A. contra Sociedad de Propietarios de Buses de la Ruta Colón, Pilón, María Chiquita, S. A., Transcolpilma, S. A. y/o VÍCTOR MENDOZA. En consecuencia Ordena el Levantamiento del Secuestro Decretado contra los demandados y Condena a la demandante Propietarios de Buses, S. A. a pagar las costas y gastos del presente proceso según lo normado en el artículo 1057 del Código Judicial, las cuales por trabajo en derecho se señalan en la suma de SIETE MIL QUINIENTOS BALBOAS (B/.7,500.00)" (Foja 409).

Como consecuencia de esa decisión, la apoderada legal de la sociedad

demandante presentó recurso de apelación que fue resuelto por el Primer Tribunal Superior de Justicia, mediante sentencia de 26 de septiembre de 1994, que reformó la resolución proferida por el Juzgado Segundo del Circuito de Colón, solamente en cuanto al monto de las costas a las cuales fue condenada la demandante y la confirmó en todo lo demás.

Contra esta resolución, la sociedad PROPIETARIOS DE BUSES, S. A., formalizó el recurso de casación en estudio.

CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

Se trata de un recurso de casación en el fondo, en el cual se invoca como única causal la infracción de normas sustantivas de derecho, por error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, lo cual ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida.

Como fundamento de ella, se utilizan siete motivos que expresan lo siguiente:

1) El Primer Tribunal Superior de Justicia no apreció conforme a la sana crítica, los testimonios rendidos por los señores BOLÍVAR SÉPTIMO ALTAMIRANO (foja 346), HUGO ROZZETTE PÉREZ (foja 349), ROBERTO OTILIO MEDINA RODRÍGUEZ (foja 353), ANGÉLICA MARÍA HURTADO (foja 367), BASINISA MILLER MUÑOZ (foja 372) y ALFREDO CIRILO BROWN FOSTER (foja 376-377), los cuales concuerdan al declarar que las casetas de buses que actualmente opera la sociedad TRANSCOLPILMA, S. A. fueron construidas y eran de propiedad de la sociedad PROPIETARIOS DE BUSES, S. A.

2) La sentencia recurrida no le reconoció valor ni analizó conforme a la sana crítica, la prueba documental consultable de foja 70 a 139 y de foja 260 a 324, en las que constan formularios de renuncia de miembros de PROPIETARIOS DE BUSES, S. A., los cuales, tal como lo expusieron los testigos, pasaron a formar parte de TRANSCOLPILMA, S. A. Consecuentemente, no se trata de personas distintas a ésta, como erróneamente señaló el Tribunal Superior.

3) Tampoco valoró debidamente que la sociedad demandada TRANSCOLPILMA, S. A., admitió en el hecho segundo de la contestación de la demanda (foja 42), que los miembros de esa sociedad renunciaron de las sociedades PROPIETARIOS DE BUSES DE LA RUTA COLÓN, PILÓN, MARÍA CHIQUITA, S. A. y PROPIETARIOS DE BUSES, S. A.

4) La sentencia de segunda instancia no reconoció en su justo valor, los documentos públicos consultables a foja 5, de foja 7 a 12 y a foja 206, que en conjunto con las pruebas testimoniales aportadas, demuestran que la sociedad PROPIETARIOS DE BUSES, S. A. es la dueña del terminal de buses ubicado en Río Alejandro, Provincia de Colón.

5) No se valoró como un indicio grave la falta de contestación de la demanda por parte de una de las sociedades demandadas, PROPIETARIOS DE BUSES DE LA RUTA COLÓN, PILÓN, MARÍA CHIQUITA, S. A.

Como consecuencia de lo anteriormente señalado, la parte recurrente considera que se han violado los artículos 770, 773, 823, 883, 904, 673 y 972 del Código Judicial y 974, 991, 1027 y 1644 del Código Civil.

POSICIÓN DE LA SALA

El punto medular del presente recurso consiste en determinar si el Tribunal Superior incurrió en error de derecho, al valorar el material probatorio que señala el recurrente.

Así, el recurrente en casación sostiene que la sentencia impugnada no valoró en forma debida los testimonios rendidos por varias personas en el proceso, los cuales demuestran que las casetas ocupadas ilegalmente por la sociedad PROPIETARIOS DE BUSES DE LA RUTA COLÓN, PILÓN, MARÍA CHIQUITA, S. A. en primer lugar y, posteriormente, por TRANSCOLPILMA, S. A., fueron construidas por la sociedad demandante y, en consecuencia, son de su propiedad.

La Sala estima que el juzgador de segunda instancia no ha incurrido en error de derecho en relación con la prueba testimonial, ya que ésta no es el medio idóneo para comprobar la propiedad de un bien inmueble. Al respecto, el artículo 831 del Código Judicial señala que la prueba testimonial no es admisible para comprobar hechos que deben constar en documentos o medios escritos preestablecidos por las leyes substanciales, como es el caso de los bienes inmuebles.

Como bien señaló el Tribunal Superior en la sentencia recurrida, para poder reclamar daños y perjuicios por la alegada ocupación ilegal de las oficinas administrativas de la sociedad demandante, ésta debió acreditar que dichas oficinas le pertenecían o que se encontraban arrendadas por ella, lo cual no hizo.

El artículo 773 del Código Judicial establece que las partes deben probar los hechos o datos que constituyen el supuesto de hecho de las normas que les son favorables. En el caso que nos ocupa la parte recurrente debió probar, en primer lugar y como se señaló anteriormente, que las oficinas que reclama como suyas le pertenecían y, en segundo lugar que, efectivamente, se encontraban ocupadas ilegalmente por las personas demandadas en este proceso.

Sin embargo, el examen de la prueba documental atacada por el recurrente, consistente en los formularios de renuncia de varios miembros de la sociedad PROPIETARIOS DE BUSES, S. A. (foja 70 a 139 y 260 a 324), al igual que la resoluciones administrativas proferidas por la Alcaldía del Distrito de Colón y la Gobernación de la Provincia de Colón (foja 7 a 12), no acreditan ninguna de estas dos situaciones. En cuanto a las mencionadas resoluciones administrativas, es preciso señalar que guardan relación con la ocupación ilegal de las oficinas que reclama el recurrente como suyas; no obstante, las partes de dicho proceso son personas distintas a las del presente negocio, por lo que no logra probarse el nexo de causalidad entre el uso ilegítimo del local por parte de las personas demandadas en este proceso ordinario.

Por último, el recurrente en casación sostiene que una de las sociedades demandadas, TRANSCOLPILMA, S. A. no contestó la demanda, lo que representa un indicio grave en su contra, que no fue valorado correctamente por el Tribunal Superior. Si bien es cierto que el artículo 673 del Código Judicial establece la falta de contestación de la demanda como un indicio grave, este hecho por sí solo no constituye prueba suficiente para condenar a la parte demandada.

Al no haberse comprobado el error probatorio que le imputa el presente recurso a la sentencia de segunda instancia, se descarta el mismo.

Por tanto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, el 26 de septiembre de 1994, dentro del proceso ordinario instaurado por PROPIETARIOS DE BUSES, S. A. contra PROPIETARIOS DE BUSES DE LA RUTA COLÓN, PILÓN, MARÍA CHIQUITA, S. A., TRANSCOLPILMA, S. A. y el señor VÍCTOR MENDOZA.

Las costas de casación, a cargo de la parte recurrente, se fijan en trescientos cincuenta balboas (B/.350.00) solamente.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) ELIGIO MARÍN C.
Secretario Interino

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SUCESIÓN TESTAMENTARIA DE RODRIGO ALVARADO SANGUINETTI (Q. E. P. D.) RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO SUMARIO QUE LE SIGUE RODRIGO OCTAVIO ALVARADO RÍOS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado JOSÉ MANUEL FAÚNDES HIJO, en su condición de apoderado judicial de la señora ANITA LYMA YOUNG DE ALVARADO, albacea de la sucesión testamentaria del difunto RODRIGO OCTAVIO ALVARADO SANGUINETTI, oportunamente formalizó recurso de casación contra la sentencia de 4 de enero de 1996, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia en el proceso sumario que le sigue RODRIGO OCTAVIO ALVARADO RÍOS.

Después de fijado el término para realizar los alegatos, el mismo no fue aprovechado por ninguna de las partes. Procede el Tribunal de Casación a determinar talcomo lo disponen los artículos 1165 y 1160 del Código Judicial si procede la admisibilidad.

En el presente recurso se invocan dos causales una de forma y la otra de fondo.

La primera causal es: "Por haberse omitido trámites considerados esenciales por la ley", la misma se encuentra consagrada como tal en el artículo 1155 del Código Judicial.

Es importante destacar en cuanto a las causales de forma, que la reparación de la falta aludida por el recurrente, debe ser reclamada en la instancia en que se cometió la infracción al igual que en la que sigue, esto lo contempla el artículo 1179 del Código Judicial, el mismo dispone que es inadmisible el recurso de casación en la forma si no se hubiere reclamado la reparación de la falta en la instancia en que se haya cometido y también en la siguiente.

Al realizar una atenta lectura del expediente la Sala advierte que el casacionista no realizó la reclamación en la instancia en que se dio la falta, por lo que no se puede admitir el recurso de casación en la forma, ya que éste es un requisito indispensable para su admisibilidad.

La segunda causal es: "Infracción de normas sustantivas de derecho en concepto de interpretación errónea de la norma, lo cual ha influido sustancialmente en el fallo". La misma está consagrada como tal en la ley.

La Sala observa, que el recurrente en los motivos, no señala de forma clara en que consistió la mala interpretación por parte del Tribunal Superior, en vez de ello, se concentra en realizar, en los motivos, un recuento procesal del caso, incluyendo en los mismos, meros alegatos contra la sentencia de primera instancia, así como normas de derecho, lo cual resulta a todas luces inadmisible.

En cuanto a las disposiciones infringidas, el casacionista cita sólo una, en la explicación de la misma realiza un extenso alegato. También señala normas de derecho que no explica la supuesta infracción, tal como lo exige el ordenamiento jurídico.

En consecuencia, se dan los presupuestos señalados en el artículo 1167 del Código Judicial, para declarar la inadmisibilidad de esta causal por ininteligible.

Por todo lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA INADMISIBLE el recurso de casación propuesto por ANITA LYMA YOUNG DE ALVARADO, albacea de la sucesión testamentaria del difunto RODRIGO OCTAVIO ALVARADO SANGUINETTI, contra la sentencia dictada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial el día 4 de enero de 1996.

Las obligantes costas, a cargo del recurrente, se fijan en la suma de SETENTA Y CINCO BALBOAS (B/.75.00).

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Interino

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TROPIGAS DE PANAMÁ, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE JESÚS HERRERA APARICIO Y DIANA ESTHER BAIRNAL DE HERRERA. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma forense Alfaro, Ferrer, Ramírez y Alemán, apoderada judicial de la sociedad **TROPIGAS DE PANAMÁ, S. A.**, presentó recurso de casación contra la sentencia proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 31 de octubre de 1996, dentro del proceso ordinario promovido por los señores **JESÚS HERRERA APARICIO y ESTHER DE HERRERA** contra la parte recurrente.

Ingresado el negocio a esta Sala, previo reparto de rigor, fue fijado en lista por el término de seis días para que las partes alegaran sobre la admisibilidad del recurso. Dicho término ha vencido, por lo que corresponde a la Corte decidir si lo admite o no.

La resolución impugnada es susceptible de ser impugnada mediante recurso de casación, tanto por su naturaleza como por su cuantía.

Consta en autos que el recurso se anunció y formalizó en tiempo oportuno y por persona hábil.

El escrito que contiene el recurso de casación reúne, de manera general y en su aspecto formal, todos los requisitos establecidos por el artículo 1160 del Código Judicial.

Por último, se aprecia que la única causal de fondo expresada es de las contempladas por el artículo 1154 del citado Código, por lo que se concluye que el presente recurso debe ser admitido.

Por tanto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el recurso de casación presentado por la sociedad TROPIGAS DE PANAMÁ, S. A.

Notifíquese.

RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) ELIGIO MARÍN C.
Secretario Interino

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ARGENTA DE PANAMÁ, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN LA EXCEPCIÓN DE INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN PRESENTADA DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO INCOADO POR SUPER CUENTAS, S. A. CONTRA ARGENTA DE PANAMÁ, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado **RICARDO DE OBALDÍA GARCÍA DE PAREDES**, apoderado especial de **ARGENTA DE PANAMÁ, S. A.**, ha interpuesto recurso de casación contra la Sentencia

de 27 de octubre de 1995 dictada por el Primer Tribunal Superior dentro de la Excepción de no existencia de la obligación presentada dentro del Proceso Ejecutivo incoado por **SUPER CUENTAS, S. A.**

Cumplidas las reglas de reparto conforme lo establece el artículo 1164 del Código Judicial, se fijó el negocio en lista a fin de que las partes alegaran en cuanto a la admisibilidad del recurso, oportunidad que fue aprovechada por la recurrente según consta a fojas 115-119.

Así las cosas, la Corte procede a determinar si el recurso cumple con los requisitos señalados por el artículo 1165, para decidir sobre la admisibilidad del mismo.

Luego del examen de rigor, la Sala concluye que, en términos generales, el presente recurso cumple con los requisitos del citado artículo, es decir:

1. La resolución objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la Ley;

2. El recurso ha sido interpuesto en tiempo;

3. El escrito del mismo reúne los requisitos que ordena el artículo 1160; y,

4. La causal que se expresa es de las señaladas por la Ley.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por ARGENTA DE PANAMÁ, S. A. contra la Sentencia de 27 de octubre de 1995, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia, para decidir la Excepción de Inexistencia de la Obligación dentro del Proceso Ejecutivo incoado por SUPER CUENTAS, S. A.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) ELIGIO MARÍN
Secretario Encargado

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RAMÓN JUÁREZ ACHURRA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A ELEUTERIO RAMOS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado HUMBERTO JOSÉ CHANG, en su condición de apoderado judicial del señor RAMÓN JUÁREZ ACHURRA, interpuso recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia, proferida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial el 7 de diciembre de 1995, dentro del proceso ordinario que RAMÓN JUÁREZ ACHURRA le sigue a ELEUTERIO RAMOS.

Se fijó en lista este negocio por el término de seis días para que en dicho término, las partes alegaran sobre la admisibilidad del mismo, lo cual no fue aprovechado por ninguna de las partes.

Procede la Sala, a resolver sobre la admisibilidad del recurso en base a los artículos 1160 y 1165 del Código Judicial.

La resolución contra la cual se endilga el recurso es de las permitidas por la ley y fue interpuesto en tiempo.

Se presentan dos causales, una de forma y la otra de fondo. En cuanto a la primera, la Sala plasma las siguientes consideraciones:

La causal es: "Por no estar la sentencia en consonancia con las pretensiones de la demanda porque se dejó de resolver alguno de los puntos que lo hayan sido", la misma se encuentra consagrada como tal en nuestro ordenamiento jurídico.

El recurrente presenta un sólo motivo, el cual, pese a su mala redacción, pareciera ser congruente con la causal invocada.

En cuanto a la infracción de normas y la explicación de cómo han sido violadas, la Sala advierte, que el casacionista transcribe parte de la sentencia, lo cual no es permitido, de acuerdo a la formalidad de este recurso. Por otra parte, el recurrente, ha señalado la misma infracción tanto para el artículo 1134, como para el artículo 978, ambos del Código Judicial, lo que no es procedente. Estos defectos deben ser subsanados.

La segunda causal es: "Infracción de normas sustantivas de derecho, en el concepto de error de derecho en la apreciación de la prueba, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia recurrida", la misma está consagrada como tal en la ley.

En cuanto a los motivos que fundamentan la causal invocada, los mismos son congruentes con la misma. Pero, no sucede lo mismo cuando señala las normas infringidas y explica cómo han sido violadas. El casacionista, en la explicación de la infracción del artículo 945 del Código Judicial resulta confuso, por un lado señala que el tribunal "sobrevaloró" una prueba, y posteriormente, nos dice que el tribunal le "restó valor" refiriéndose a la misma prueba, estos dos términos son excluyentes, este punto debe ser esclarecido. De igual manera advierte la Sala que el recurrente al hacer la explicación del artículo 546 del Código Judicial, no es claro, el recurrente señala que la norma fue infringida de manera indirecta, pero en razón de una violación directa, esta afirmación resulta confusa, por lo tanto, en esta segunda causal deben corregirse los errores señalados.

Por todo lo antes expuesto, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley ORDENA LA CORRECCIÓN del recurso de casación, en el fondo, propuesto por RAMÓN JUÁREZ ACHURRA, mediante apoderado judicial, contra la sentencia del 7 de diciembre de 1995, proferida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, para la cual se concede un término de cinco (5) días, tal como dispone el artículo 1166 del Código Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Interino

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

BETEL, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO SUMARIO SOLICITUD DE CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS RODELAG, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Mediante resolución de diecinueve (19) de marzo de mil novecientos noventa y seis (1996), esta Sala ordenó la corrección del recurso extraordinario de casación, en el fondo, interpuesto por BETEL, S. A., dentro del proceso sumario que le sigue a RODELAG, S. A. Para tal fin se concedió el término de cinco (5)

días, conforme lo pauta el artículo 1166 del Código Judicial.

Consta a foja 612 del expediente, el informe de la Secretaria, en el que se indica que el término ha vencido, sin que la parte haya efectuado la corrección ordenada.

La preclusión del término para la corrección, trae consigo la declaración de inadmisibilidad del recurso, con la consiguiente imposición de costas para la parte recurrente, tal como lo establece la ley.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA INADMISIBLE el recurso de casación, en el fondo, propuesto por BETEL, S. A., mediante apoderado judicial.

Se condena en costas al casacionista, por la suma de CINCUENTA BALBOAS (B/.50.00).

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Interino

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JORGE ENRIQUE RUIDÍAZ PLATAÑIOTIS RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO SUMARIO QUE LE SIGUE A ANDES TRADING COMPANY. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Dentro del proceso sumario que **JOSÉ ENRIQUE RUIDÍAZ PLATAÑIOTIS** le sigue a **ANDES TRADING COMPANY**, el Doctor Manuel E. Bermúdez M., en su condición de apoderado especial de la parte actora, interpuso **Recurso de Casación** contra la sentencia de 19 de octubre de 1995 proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia.

Cumplidas las reglas de reparto, el negocio se fijó en lista para que las partes alegaran en cuanto a la admisibilidad del recurso. Dentro de dicho término se presentó escrito de sustitución de poder (fs. 256), por lo que se tiene como nuevo apoderado del demandante al licenciado **CARLOS QUINTERO MORENO**. Además, las representaciones de ambas partes presentaron escritos sobre la admisión del recurso de casación; el de oposición visible de fojas 259 a 274 y el del recurrente que consta de fojas 275 a 276.

Después de elaborado por el Ponente en este negocio el proyecto de resolución sobre la admisibilidad de la casación y encontrándose en lectura de los otros Magistrados que integran la Sala, fue presentado un escrito de **desistimiento de la demanda** por el apoderado de la actora, actuando como tal nuevamente el Dr. Manuel E. Bermúdez Meana, en el cual además solicita "se ordene el levantamiento de los secuestros decretados y se ordene la devolución de las fianzas consignadas, con el consecuente archivo del expediente", citando como fundamento legal el artículo 1073 del Código Judicial. (fs. 279).

Según se pudo apreciar, el desistimiento de la pretensión se presentó dentro de un proceso sumario, resuelto en primera y segunda instancia, encontrándose pendiente de ser resuelto el recurso de casación interpuesto en el mismo. Por ello, en atención a lo normado por el artículo 1082 en concordancia con los artículos 1080, 1081 del Código Judicial, se corrió traslado del escrito de desistimiento a la parte demandada para que manifestara su conformidad u oposición al mismo.

En atención al traslado, la parte demandada **ANDES TRADING COMPANY, INC.**, representada por el licenciado JOSÉ DE LA ROSA BRID LÓPEZ, presentó escrito de oposición (fs .282 a 283) al desistimiento propuesto por el demandante, el cual califica como dilatorio y contrario al procedimiento civil, por lo que solicita a esta Sala que prosiga con el trámite de la admisibilidad del recurso de casación.

Así las cosas, resulta suficiente la manifestación de la parte demandada de no aceptar el desistimiento de la pretensión para que la Corte se vea avocada a emitir un pronunciamiento en el sentido de no acceder a la petición del demandante-recurrente en casación.

En consecuencia, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NIEGA el Desistimiento de la pretensión propuesta por el apoderado judicial de JORGE ENRIQUE RUIDÍAZ PLATAÑIOTIS y DISPONE que se continúe el trámite del recurso de casación dentro del presente proceso sumario.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) ELIGIO MARÍN
Secretario Encargado

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

VALENTE CORP. RECURRE EN CASACIÓN EN LA MEDIDA CAUTELAR DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN QUE LE SIGUE A FEDERACIÓN VENEZOLANA DE FÚTBOL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma forense MORGAN Y MORGAN en su condición de apoderada judicial de **VALENTE CORP.**, parte actora en el proceso seguido contra **FEDERACIÓN VENEZOLANA DE FÚTBOL**, ha interpuesto **Recurso de Casación** contra la resolución de 23 de noviembre de 1995 dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia.

Una vez admitido el recurso se fijó en lista por el término de seis días para que las partes alegaran en cuanto al fondo. Sin embargo, durante este período los apoderados de ambas partes presentaron conjuntamente un memorial de desistimiento tanto del recurso como de la oposición al mismo, "de manera incondicional y expresa", según se lee de fojas 216 a 217. En el mencionado escrito, entre otras consideraciones, Valente Corp. y Federación Venezolana de Fútbol declaran que no han recibido perjuicio por motivo de la acción cautelar practicada y decretada dentro de este negocio civil, dentro del cual ahora se desiste del recurso de casación contra la resolución que la revocó. Ambos expresan que están presentando ante el juzgado de primera instancia memorial conjunto de desistimiento, mutuo y recíproco, tanto del proceso como de la pretensión.

En virtud de lo expuesto y en vista de que en este caso se cumplen los presupuestos contemplados en los artículos 1073, 1075, 1076 y siguientes del Código de Procedimiento Civil que regulan este modo excepcional de terminación del proceso, la Sala considera que el DESISTIMIENTO del recurso de casación, presentado por VALENTE CORP. (recurrente-demandante) y aceptado expresa e incondicionalmente por FEDERACIÓN VENEZOLANA DE FÚTBOL (opositor-demandado), es procedente.

En consecuencia, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ACEPTA EL DESISTIMIENTO presentado por la parte recurrente VALENTE CORP. del presente recurso de casación

interpuesto contra la resolución de 23 de noviembre de 1995 y ORDENA el envío del caso al Primer Tribunal Superior para la subsecuente remisión al Juzgado de la causa.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) ELIGIO MARÍN
Secretario Encargado

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CORTAGRAMAS Y REPUESTOS, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO PROPUESTO POR ADONIS GIOVANNI MUSMANO GARCÍA CONTRA LENÍN M. RODRÍGUEZ T. Y CORTAGRAMAS Y REPUESTOS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Mediante resolución fechada 22 de marzo de 1996, esta Sala de la Corte ordenó la corrección del recurso de casación en la forma y de la primera y tercera causal del recurso de casación en el fondo, interpuestos por el apoderado judicial de la sociedad **CORTAGRAMAS Y REPUESTOS, S. A.** dentro del proceso ordinario instaurado por el señor **ADONIS GIOVANNI MUSMANO GARCÍA** contra la sociedad recurrente y el señor **LENÍN M. RODRÍGUEZ T.**

Vencido el término concedido para efectuar la corrección del recurso y habiéndose efectuado dentro de éste, corresponde a esta corporación de justicia determinar en forma definitiva la admisibilidad del recurso de casación. Para ello, es preciso confrontar la resolución que ordenó la corrección con el nuevo libelo presentado.

En relación con el recurso de casación en la forma, la Corte advierte que el recurrente dio cumplimiento a lo ordenado, razón por la cual debe ser admitido.

Sin embargo, el estudio de la primera causal de fondo pone de manifiesto que los motivos que le sirven de fundamento no fueron debidamente corregidos, ya que no plantean una situación concreta que permita conocer los cargos que se hacen contra la sentencia de segunda instancia, sino que se mantienen en el mismo nivel teórico que le fuera censurado en la resolución anterior. Consecuentemente, esta causal no puede ser admitida, ya que resulta ininteligible.

En cuanto a la tercera causal de fondo, la Sala señaló que por tratarse de una causal probatoria, el recurrente debía incluir la disposición legal sustantiva infringida como consecuencia del error probatorio alegado. El presente negocio consiste en una reclamación por daños y perjuicios producto de un accidente de tránsito, por lo que el recurrente en casación debió añadir la norma correspondiente a la responsabilidad civil extracontractual; exigencia con la cual no cumplió. En vista de ello, esta causal también debe ser rechazada.

En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el recurso de casación en la forma y DECLARA INADMISIBLES la primera y tercera causal del recurso de casación en el fondo, interpuestos por CORTAGRAMAS Y REPUESTOS, S. A.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) ELIGIO MARÍN C.
Secretario Interino

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AERO SERVICIOS TEMPONE, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE ASSICURAZIONI GENERALI, S. P. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Mediante resolución de 20 de marzo de 1996 (f. 401-403), esta Sala de la Corte ordenó la corrección del Recurso de Casación propuesto por AERO SERVICIOS TEMPONE, S. A. contra la resolución de 4 de agosto de 1995, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia, dentro del proceso ordinario propuesto por el recurrente en casación contra ASSICURAZIONI GENERALI, S. P. A.

Vencido el término para la corrección del recurso de casación y habiéndose efectuado en tiempo oportuno, la Sala procede al examen del nuevo escrito, que corre de fojas 405 a 411, para decidir en forma definitiva su admisibilidad.

Según se ha observado, el defecto que fuese señalado al recurrente fue subsanado pues escogió una de las causales de las dos que originalmente había invocado, la cual resulta compatible con la situación planteada sobre la injuricidad que endilga el fallo de segunda instancia.

Por ello, la Sala considera procedente admitir el recurso.

En consecuencia, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el recurso de casación propuesto por AERO SERVICIOS TEMPONE, S. A. contra la sentencia de 4 de agosto de 1995, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) ELIGIO MARÍN
Secretario Interino

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

REINVERSIONES INTERNACIONALES, S. A. Y BEATRIZ DIEZ RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO QUE BEATRIZ DIEZ LE SIGUE A PALACIO DEL MAR, S. A. (PADEMA). MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, TREINTA (30) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado JUAN CRISTÓBAL ZÚÑIGA, actuando como apoderado judicial de la sociedad REINVERSIONES INTERNACIONALES, S. A., presentó ante esta Corporación de Justicia, recurso de casación, en la forma, contra el Auto de 6 de marzo de 1995, dictado por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial. De igual forma, la licenciada DIVA ROMERO DE MORALES, impugna el mencionado Auto, en calidad de apoderada judicial de BEATRIZ DIEZ. La sociedad REINVERSIONES INTERNACIONALES, S. A. fundamentó el recurso de casación en dos causales, de forma. La primera de ellas es: "Por haberse omitido un trámite o diligencia considerado esencial en la Ley", la cual se encuentra consagrada en la ley.

PRIMERA CAUSAL

Como quiera que ambos recurrentes han coincidido en esta causal de haberse omitido algún trámite o diligencia considerado fundamental, se consideran conjuntamente. Ambos se refieren a la negativa del tribunal contenida en el Auto N°1536 de 10 de octubre de 1994 al no aprobar la solicitud que se adjudicara el

bien al rematante REINVERSIONES INTERNACIONALES, S. A., pese a que se habían dado cumplimiento a todos los trámites que regulan los procesos, ante la existencia de cuestión ajena a este proceso, pero que podía tener influencia en el mismo (artículo 466 del Código Judicial), que ya se había superado.

El artículo 1744 del Código Judicial es interpretado por los recurrentes señalando que constituye un mandato que el legislador le impone al juzgador, una vez se haya adjudicado el bien objeto del remate, sin que el juez, al decidir si procede o no aprobar el remate, considera que existan circunstancias internas al proceso, o externas al mismo, tesis ésta que no prohija la Sala, por cuanto considera que el mandato que el artículo 1744 le impone al Juez, no convierte a un mero ejecutor ciego de la ley, como un autómata, recordando a MONTESQUIEU, cuando se refiere a la judicatura como "la boca que pronuncia las palabras de ley", para restarse toda iniciativa al juzgador al juzgar conforme a derecho. El Juez está en la obligación de verificar si existen causas internas o externas al proceso que impidan aprobar el remate, toda vez que el acta que contiene tal aprobación constituye el título de propiedad, como el segundo párrafo del citado artículo señala.

La Sala observa que REINVERSIONES INTERNACIONALES, S. A. propusó una solicitud dentro de este proceso ejecutivo por medio de la cual, se pretendía que se aprobase el remate, el cual ya había sido rechazado. Dicho recurso fue objeto de decisión por esta Sala, mediante sentencia de 24 de noviembre de 1995.

Como quiera que en el presente recurso de casación se persiguen las mismas pretensiones y la misma finalidad, que ya fue objeto de pronunciamiento jurisdiccional, estamos frente al fenómeno procesal denominado sustracción de materia.

SEGUNDA CAUSAL

Esta causal la constituye el haberse omitido cualquier otro requisito cuya omisión causa nulidad, y el recurrente licenciado ZÚÑIGA, al indicar los motivos por medio de los cuales a su juicio se configura la causal, constituye que no se le notificó en debida forma al rematante, REINVERSIONES INTERNACIONALES, S. A., lo cual constituye causal de nulidad del Auto N° 506 de 30 de mayo de 1994. La Sala desea destacar que ya esta misma anomalía fue objeto de recurso de casación, mediante resolución de 24 de noviembre de 1995 en el mismo proceso. En dicha resolución la Sala encontró que la resolución impugnada había violado el artículo 722, numeral 5, y ordenó la notificación de la negativa a aprobar el remate al rematante, por ser interesado en el proceso.

La Sala considera que no procede pronunciarse sobre esta segunda causal.

En consecuencia, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA que se ha producido el fenómeno de sustracción de materia, y que el punto discutido está resuelto conforme a la resolución de la Corte Suprema de Justicia, Sala Primera, dictada en el cuaderno "Solicitud de Terceros" de este mismo proceso, el 24 de noviembre de 1995.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Interino

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JUAN MARIÑAS BUITRAGO RECURRE EN CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A CÉSPEDES UNIDOS, S. A. Y HERMANOS CÉSPEDES UNIDOS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, TREINTA (30) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

EL licenciado RAÚL A. CÁRDENAS actuando en nombre y representación de JUAN MARIÑAS BUITRAGO, ha interpuesto recurso de casación, en el fondo, contra la Resolución de 19 de enero de 1996, proferida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial.

Al ingresar el negocio a la Secretaría de la Sala y por cumplidas las reglas de reparto, se fijó en lista por el término señalado en la ley a fin de que las partes alegaran, por escrito, sobre la admisibilidad del recurso, lo que ambas partes hicieron.

Vencido de esa forma el término de lista a que se refiere el artículo 1164 del Código de Procedimiento Civil, la Corte observa que, el escrito de formalización del recurso de casación interpuesto, ha sido concedido por el Tribunal Superior de la sentencia recurrida, mediante la concurrencia de los requisitos expresamente establecidos en los numerales del artículo 1165 del Código Judicial, que son:

1. La Resolución objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la ley;
2. El recurso ha sido interpuesto en tiempo;
3. El escrito por medio del cual fue interpuesto reúne todos los requisitos ordenados por el artículo 1160 y;
4. La causal expresada es de aquellas señaladas por la ley.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA ADMISIBLE, el recurso de casación, en el fondo, interpuesto por JUAN MARIÑAS BUITRAGO, mediante apoderado judicial.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Interino

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA SEGUNDA DE LO PENAL

ABRIL 1996

AUTO APELADO

SOLICITUD DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO A ROBERTO PINZÓN DÍAZ Y JACINTO JORGE MAC DONALD, POR EL SUPUESTO DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE BETZY MARLENE MENDIZÁBAL Y LA DESAPARICIÓN DE JORGE ENRIQUE FALCONETT. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Mediante oficio N° 374 de 14 de marzo de 1996, el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial remitió a la Secretaría de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, el cuaderno que contiene la solicitud de prescripción de la acción penal presentada dentro del proceso penal seguido a **ROBERTO PINZÓN DÍAZ** y **JACINTO JORGE MAC DONALD**, por el delito de homicidio de **BETSY MARLENE MENDIZÁBAL** y la desaparición de **JORGE ENRIQUE FALCONETT**, a fin de que se resuelva el recurso de apelación presentado por el licenciado Rubén Darío Moncada Luna, apoderado de la defensa.

El auto impugnado, calendado el 2 de febrero del año en curso, negó la solicitud de prescripción de la acción penal hecha por el apoderado sustituto dentro del proceso penal y declaró que la acción penal aún no ha prescrito. Para sustentar tal decisión, el Tribunal citó textualmente un párrafo del auto de llamamiento a juicio, expedido el 12 de diciembre de 1995 por la Sala Segunda de la Corte, en el que se afirma que la acción penal en los delitos de homicidio doloso, al tenor de los artículos 86 del Código Penal de 1922 y el 93 del Código vigente, prescribe en veinte años y además, se basó en jurisprudencia de la Corte que orienta la interpretación del artículo 95 del Código Penal, en el sentido de que la interrupción de la acción penal se registra con la dictación del auto de llamamiento a juicio.

Al sustentar la apelación, el abogado defensor esgrime dos razones: la primera de ellas plantea que la Ley 6ª de 1922, que regía a la fecha en que ocurrió el hecho punible tiene una regulación de los tramos de prescripción que difieren de la ley penal actual, en virtud de que el artículo 86 guardaba estrecha relación con el 313 de la legislación punitiva anterior. La segunda se refiere a la falta de precisión de la existencia de una conducta que se subsuma en alguno de los tipos penales de la figura básica de homicidio del Código Penal de 1922 o del actual y por lo tanto, tampoco hay plena prueba de la existencia de una forma agravada de homicidio. Finalmente, alude a un precedente de 1973, de la Sala Penal, que aclara el sentido y alcance de los conceptos sobre "corpus delicti" y adecuación típica y reitera la cita de un fragmento del fallo de 22 de mayo de 1990, de la misma Sala, en la que se aclara el cómputo de los términos de prescripción cuando se trata de la acción penal o de la pena y concurren o una punibilidad alternativa o una penalidad copulativa.

Según consta en autos, durante el período señalado con ese propósito, la representación técnica de la acusación particular no aportó escrito alguno que objete la sustentación del apelante.

En cuanto al primer argumento presentado por la defensa, valga anotar que el artículo 86 del Código de 1922 en sus literales a) y b), según la reforma introducida por la ley 68 de 1961, preceptúa: "La acción penal prescribe: a) Cumplidos veinte (20) años después de la ejecución del hecho, si el delito que se imputa al inculpado tiene pena de reclusión fija por veinte (20) años; b) Cumplidos quince (15) años, después de la ejecución del hecho criminoso, si el delito tiene pena de reclusión por un mínimun de quince (15) años ...". Esa norma, relacionada con el articulado del capítulo I del Título XII del Libro II del Código Penal, que trata de los delitos contra la persona, nos demuestra que no aparece ningún artículo que fije un intervalo penal para la figura de homicidio que lleve aparejada la pena mínima de quince años de reclusión, mientras que sí hay homicidios circunstanciados agravados con penas de veinte años de reclusión fija.

Ahora bien, en relación con el artículo 313 del Código anterior, si se comparan sus efectos punitivos con el artículo 132 del Código de 1982, este es más favorable, porque fija un intervalo penal que le imprime mayor flexibilidad en la aplicación del "jus puniendi" y a ello obedece que el auto de 12 de diciembre de 1995, proferido por ésta Sala, optara por la apertura a juicio por infracción del capítulo I, Título I, Libro II del Código Penal vigente.

Según la doctrina más difundida sobre esta materia,la prescripción participa de una naturaleza jurídica mixta. En ese sentido, el conocido penalista argentino Eugenio Raúl Zaffaroni sostiene que a pesar de que "la prescripción se funda en el principio de innecesariedad de la pena, en el caso concreto de la prescripción de la acción penal concurren serias consideraciones de índole procesal, de allí que la prescripción de la pena tenga carácter penal porque la disposición se dirige primordialmente al mismo penado, en tanto que la prescripción de la acción tiene carácter procesal, pues la disposición se dirige primordialmente al Juez" (Cfr. Zaffaroni, Manual de derecho Penal, Bs. As. 1979, pág. 27).

En el caso que nos ocupa se plantea la prescripción de la acción penal, que es una causa de extinción de la facultad persecutoria y punitiva del Estado antes de que se concrete una sentencia condenatoria, por tanto, ésta es de naturaleza procesal, de orden público y cabe aplicar las reglas de interpretación propias de su naturaleza jurídica.

Con relación al segundo argumento del apelante,la resolución de 12 de diciembre mencionada, se fundamenta en el artículo 2222 del Código Judicial, que parte de la existencia de plena prueba del hecho punible, que efectivamente es un concepto más amplio que el de cuerpo del delito y diferente al de subsunción conductual. Por ello, en la prescripción de la pena la individualización judicial de la penalidad es de naturaleza sustantiva y acorde a los derechos subjetivos del penado,mientras que en la prescripción de la acción el intervalo penal que asigna el legislador, al establecer la punibilidad de un determinado tipo penal, se refiere a tramos penales específicos y es de carácter adjetivo.

En cuanto a los principios de interpretación de la ley penal sobre la extensión de las normas que le favorezcan y la restricción de aquellas que le perjudiquen, la cita del fallo de la Corte se refiere a casos concretos en los que el juzgador confronta el "precepto sanctio" con sanciones alternativas o con sanciones copulativas. Los tipos de homicidio no se asemejan al asunto planteado en ese precedente jurisprudencial, porque en la individualización legal solo se ha previsto una pena única privativa de libertad, que es la de prisión, razón por la cual no cabe mencionar opciones frente a penas alternativas o penas copulativas.

Tal como sostiene el chileno Gonzalo Yuseff Sotomayor en su reciente monografía intitulada "La Prescripción penal", en el presente caso, por razón de la dictación del auto de vocación a juicio, se ha producido la interrupción del término de prescripción que "consiste en la pérdida de todo plazo que hubiere alcanzado a correr, en razón de producirse un hecho al que la ley concede tales efectos. El tiempo corrido antes de la causa de interrupción, cae por completo en el vacío" (Cfr. 2da. ed. editorial Jurídica de Chile, 1994, pág. 81).

Nuestro país, en materia de interrupción de los plazos prescriptivos en lo penal, sigue el sistema que le confiere eficacia interruptora a los actos provenientes de la autoridad jurisdiccional, específicamente al auto de llamamiento a juicio, cuyo cómputo no queda en la incertidumbre de las fechas de notificación, ni de la interposición de medios impugnativos, ni de los términos de ejecutoria de las resoluciones, sino que parte de la fecha del auto de enjuiciamiento, que de por sí es un punto de referencia cierto e invariable y conocido por las partes interesadas.

En consecuencia, la SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA EL AUTO APELADO.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

PROCESO SEGUIDO A ABDIEL MEZA TRINIDAD, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO COMETIDO EN PERJUICIO DE JUAN QUINTERO SÁNCHEZ. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, mediante auto calendado 18 de enero de 1996, abrió causa criminal contra Abdiel Meza Trinidad, (a) "Campos", como infractor de las disposiciones contenidas en el Capítulo I, Título I, Libro II del Código Penal, es decir, por el delito genérico de homicidio cometido en perjuicio de Juan Quintero Sánchez. En el acto de notificación de esta decisión jurisdiccional, la licenciada Micaela Morales Miranda, defensora de oficio del imputado, anunció recurso de apelación.

Según explica, la recurrente no está de acuerdo con el auto impugnado por considerar que los testimonios que reposan en la encuesta penal contienen "serias discrepancias sobre la forma en que se dio la muerte del infortunado Quintero Sánchez" (f. 411). En ese sentido, sostiene que el deponente Delborth Shaw King brinda cuatro versiones diferentes de los hechos, que no coinciden con las declaraciones "de la joven Esther Lidieth Shaw del señor Argemio Corrales Bejarano y Héctor Ríos" (f. 412).

De otra parte, la licenciada Morales Miranda plantea que, de haberse comprobado que su patrocinado infirió las lesiones que cegaron la vida de la víctima, aun así "no se ha acreditado dolo homicida o la intención de ocasionar la muerte ... tanto es así que ayudó a trasladar al señor Quintero hasta la casa del señor Sequeira y posteriormente al autobús donde quedó con vida a las 9:00 de la noche" (f. 412).

Conocido lo medular de los argumentos de la recurrente, la Sala estima conveniente resaltar que este recurso será examinado sólo sobre los puntos de la resolución que han sido impugnados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2428 del Código Judicial.

El estudio de las sumarias permite conocer que el cuerpo sin vida de Juan Quintero Sánchez fue localizado en el interior de un autobús, que se encontraba estacionado en la comunidad de Nuevo Paraíso, finca N° 6, ciudad de Changuinola, provincia de Bocas del Toro, el día 14 de noviembre de 1994. El examen médico forense consignó como causas de la muerte: "-HEMORRAGIA MASIVA INTRA-ABDOMINAL POR EXPLOSIÓN HEPÁTICA. -POLITRAUMATISMO" (f. 126).

En relación con la objeción que formula la defensa de Meza Trinidad, valga destacar que, efectivamente, conforme lo alega la recurrente, el testigo Delbert Augusto Shaw King ha ofrecido diversas versiones sobre la forma como acontecieron los hechos. En su primera declaración indicó que "yo me retiré del lugar en compañía de mi señora ... hacia el rincón de los michos a bailar" (f. 54). En una segunda deposición manifestó que Quintero Sánchez "venía detrás de CAMPOS ... correteándolo con un machete ... se lo quité y de ahí después miré que `CAMPOS empujó al Señor que el cayó a la carretera" (f. 150). Finalmente, en un tercer relato sostuvo que Meza Trinidad "le pegó un puñete en la quijada al Señor y lo tumbó ... y se agarró de un Dos por cuatro que estaba pegado como marco de la puerta ... se impulsaba para arriba y con los dos pies le caía encima al hombre, por el pecho y por el estómago o barriga" (fs. 164-165).

No obstante, a pesar de la disparidad en las versiones del deponente Shaw King, la Sala considera que en las sumarias existen suficientes elementos de

convicción que comprometen la responsabilidad de Meza Trinidad en el delito. En este sentido, consta la deposición de Esther Lidieth Shaw de Santos, testigo presencial de los hechos, quien manifestó que "pude ver que el señor ABDIEL MEZA (CAMPOS) le pegaba a un Señor, y le pegaba con los puños, que el Señor Cayó al suelo y ahí mismo lo agarró a patadas por todos lados del cuerpo, y le daba con piedras y con todo lo que encontraba" (fs. 184-185). De igual manera, la testigo Lilia Luciana Ábrego Pineda sotuvo durante la diligencia de reconstrucción de los hechos que "vimos por la ventana de Bloques ornamentales, que el Señor `CAMPOS le pegaba al señor, lo golpeaba y lo pateaba y el Señor se levantaba y Campos lo pateaba" (f. 292).

También resulta importante hacer mención de los testimonios de Argemiro Corrales Bejarano: "ví que enfrente de la casa del señor Campos y llegé (sic) a ver que éste señor cogía unas piedras...se le abalanzó con las mismas a pegarle a un indígena ... vi que el indígena cayó y se levantó, al parecer lo llegó a alcanzar con las piedras ... noté que tenía sangre por la cara, la nariz y la cabeza" (f. 42); y de Héctor Ríos Degracia: "`CAMPOS se disgustó y agarró unas piedras de regular tamaños ... con una piedra en casa (sic) mano, golpeaba fuertemente al señor QUINTERO SÁNCHEZ...Cayó al Piso y se podía ver por la ventana, como `CAMPOS lo golpeaba con las dos piedras que tenía en cada mano" (fs. 328-329).

De otra parte, la recurrente niega que en la conducta de su defendido haya existido "dolo homicida o la intención de ocasionar la muerte" (f. 412).

De acuerdo a las pruebas obrantes en autos, el día 14 de noviembre de 1994, en horas de la tarde, ocurrió un altercado entre Meza Trinidad y el ahora finado, dando como resultado que éste último empleara un machete con el ánimo de agredir físicamente a Meza Trinidad, propósito que no consiguió debido a la intervención de Delbert Augusto Shaw King, (a) "Brujo", quien logró despojarlo del arma. Una vez que Quintero Sánchez fue desarmado, el imputado Meza Trinidad aprovechó el estado de indefensión de su víctima para asestarle múltiples golpes. El protocolo de necropsia, visible a fojas 115-126, es revelador de la cantidad de heridas que recibió la víctima, y detalla: "1.- Herida contusa penetrante en labio bucal superior con penetración en mucosa. 2.- Contusión sobre la ceja derecha. 3.- Herida contusa en región temporal derecha. 4.- Herida contusa en región parieto occipital derecha" (f.118); "Hematoma en pared interna de tórax cara lateral derecha por línea anterior entre 7mo. y 8vo. espacio intercostal" (f. 122); y "Explosión hepática en borde inferior de lóbulo derecho" (f. 123).

La magnitud de las lesiones que presentaba el cuerpo de la víctima, por sí solas ponen de manifiesto que la conducta de Meza Trinidad configura, por lo menos, el concepto de dolo eventual, el cual "alude al conocimiento de la posibilidad del resultado y a la aceptación, por el agente, de la responsabilidad eventual dimanante de la realización del hecho ... no se quiere el resultado pero se acepta, ya que el individuo asume conscientemente el riesgo de infringir el tipo penal" (Registro Judicial, enero de 1994, pág. 206). Ello quiere decir, que el imputado Meza Trinidad, al momento de agredir a Quintero Sánchez, debió hacerlo con plena conciencia de que el efecto posible de su proceder era la muerte del sujeto a quien lesionaba, tal como aconteció. Por consiguiente, lo jurídicamente consecuente es confirmar el auto recurrido, para que la responsabilidad del encausado sea establecida durante el plenario.

Por las razones expuestas, LA CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley, CONFIRMA el auto de 18 de enero de 1996, dictado por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, mediante el cual se abre causa criminal contra Abdiel Meza Trinidad, (a) "Campos" por el delito genérico de homicidio cometido en perjuicio de Juan Quintero Sánchez.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS

(fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES (fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ

(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACUSACIÓN PARTICULAR PRESENTADA POR LA LCDA. THEANY L. LOAIZA C., CONTRA EL SEÑOR RAFAEL ARIEL RÍOS ZAMBRANO, SINDICADO POR LOS DELITOS DE VIOLACIÓN DE DOMICILIO, HURTO CALIFICADO Y OTRAS DISPOSICIONES LEGALES INFRINGIDAS, EN PERJUICIO DEL SEÑOR MISAEL AUGUSTO ALBA FERNÁNDEZ. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, TREINTA (30) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

En grado de apelación ingresó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el Auto de 1° de septiembre de 1995, proferido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia (fs. 19-20), mediante el cual se admite la acusación particular propuesta por la licenciada Theany Lilibeth Loaiza C., en representación de MISAEL AUGUSTO ALBA FERNÁNDEZ, contra RAFAEL ARIEL RÍOS ZAMBRANO, a quien se le imputan los delitos de tentativa de homicidio y hurto calificado.

La Fiscalía Primera Superior del Primer Distrito Judicial, mediante contestación de traslado de 16 de enero de 1996 (fs. 37-38), solicita la confirmación de la Resolución impugnada, en base a lo siguiente:

> "A este respecto debemos señalar que el Artículo 2013 del Código Judicial, establece los requisitos que debe contener toda acusación particular para ser admitida:
>
> Artículo 2013: la acusación se propondrá siempre por escrito ante el Tribunal competente, expresándose en ella los nombres del acusador y del acusado, el delito, el lugar y fecha en que se ejecutó con una relación de las circunstancias esenciales del hecho, citando las disposiciones legales infringidas y obligándose el acusador a continuar la acusación y a probar la verdad de su relato. La acusación no requerirá ratificación posterior. Si fuere admitida se remitirá al funcionario de instrucción respectivo.
>
> Como puede advertirse, la norma antes citada establece los elementos que debe contener el escrito de acusación particular, no así la forma de redacción en que deben plasmarse. En este sentido, y luego de la lectura del libelo de acusación particular presentado por la Licda. Theany L. Loaiza, se observa que el mismo contiene todos los elementos exigidos por el Artículo 2013 del Código Judicial y aún cuando la presentación formal no sea la que comúnmente se utiliza, la misma si (sic) permite diferencia (sic) cada uno de los elementos señalados, por lo que no resulta procedente solicitar la no admisión de la misma en base a consideraciones exclusivamente de redacción." (Fs. 37-38).

Primeramente, para resolver la presente alzada, la Sala prestará exclusiva atención a los puntos a que se refiere el recurrente, según lo establecido en el artículo 2428 del Código Judicial.

El recurrente sostiene en su escrito de sustentación de apelación, que no se han llenado los requisitos de forma, para aceptar la admisión de la acusación particular en comento, en virtud de que:

> "... la manera de plasmar o expresar la misma, no se ajusta a las formalidades establecidas para esta acción, esto es así, ya que en la presente acusación particular, no se detalla en primer lugar, quién es el acusador y quién es el acusado, no se detalla la expresión de los delitos imputados, no se señala el lugar de la ejecución de los delitos señalados, de igual manera, no se señalan las disposiciones legales infringidas, y más aún, es cierto que en el poder se comprometió a seguir con la acusación y probar la veracidad de su relato, pero este compromiso, no lo ponen de

manifiesto en la redacción de la acusación particular." (F. 34).

Por su parte, la licenciada Theany L. Loaiza C., en su escrito de objeciones (fs. 42 a 45), responde detalladamente a cada uno de los puntos de la apelación presentada por la defensa.

A juicio de la Sala, el escrito de sustentación de la licenciada Theany L. Loaiza C., apoderada del señor MISAEL AUGUSTO ALBA FERNÁNDEZ -contrario a lo señalado en la apelación interpuesta por el licenciado Manuel J: Bennett M., en representación de RAFAEL ARIEL RÍOS ZAMBRANO-, se ajusta perfectamente a los requisitos de admisibilidad establecidos en el artículo 2013 del Código Judicial, toda vez que en el libelo mencionado se indican con claridad las generales del acusado y de la parte acusadora, quien se compromete a probar la verdad de su relato; se indica el delito, el lugar y fecha de la ejecución del mismo; y la relación de las circunstancias esenciales del hecho, citando las disposiciones legales infringidas.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA en todas sus partes el Auto apelado de 1° de septiembre de 1995 (fs. 19-20), que ADMITE la acusación particular propuesta por la licenciada Theany Lilibeth Loaiza C., en representación de MISAEL AUGUSTO ALBA FERNÁNDEZ, contra RAFAEL ARIEL RÍOS ZAMBRANO, a quien se le imputan los delitos de tentativa de homicidio y hurto calificado; y por consiguiente remite el expediente al Segundo Tribunal Superior de Justicia, para los trámites legales correspondientes.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AUTO CONSULTADO

PROCESO SEGUIDO A DANIEL ALBERTO MACÍAS ÁBREGO POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE IZIELK AUGUSTO GALE GONZÁLEZ. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

En grado de consulta, conoce la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, del Auto de 14 de marzo de 1995, proferido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, mediante el cual se sobresee definitivamente a favor del Sargento 2° **DANIEL ALBERTO MACÍAS ÁBREGO**, en el proceso penal levantado con motivo de la muerte traumática del señor IZIELK AUGUSTO GALE GONZÁLEZ, hecho ocurrido el día 5 de mayo de 1993, en el sector de San Miguel, durante el trayecto hacia el Hospital de la Caja de Seguro Social, Complejo Hospitalario Metropolitano, Dr. Arnulfo Arias M.

Al considerar "Agotadas todas las investigaciones en relación a la muerte de IZIELK A. GALE G., ...", luego de concluir que, "... la causa de su muerte se trata en realidad (sic) de un acto en defensa propia y en el ejercicio de sus funciones, ..." (f. 118), la Fiscalía Primera Superior del Primer Distrito Judicial, mediante Vista N° 15 de 28 de febrero de 1994 (fs. 116 a 118), solicitó la dictatación de un sobreseimiento definitivo a favor de **DANIEL ALBERTO MACÍAS ÁBREGO**, según lo establecido en el artículo 2210, ordinal 3 del Código Judicial. Por su parte, el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, mediante Resolución de 25 de mayo de 1994, visible de fojas 124 a 137, observó, entre otras cosas, que "cuando sucesos como el que aquí se analiza, es

imperativo que facultativos o especialistas en la materia procedan a ilustrar las causas y efectos de los actos que han promediado en los resultados nocivos, que la sociedad reprocha y categoriza como delito." (f. 131) y, por último, externó su opinión de que, "por más esfuerzos que se han registrados (sic) para perfeccionar la presente encuesta, existen ángulos difíciles de asimilar. La única solución que queda al alcance de esta instrumentación positiva, es disponer que se evacuen (sic) otras pruebas, es decir, devolver lo actuado a la Fiscalía Superior instructora en ampliación." (F. 135-136). En razón de lo anterior, precisadas las evidencias requeridas, se decretó la ampliación de las sumarias, en virtud de lo cual, la Fiscalía Primera Superior, practicó una serie de diligencias judiciales, con las cuales se agotó a cabalidad la ampliación. Mediante Vista N° 167 de 31 de octubre de 1994 (f. 192), la Fiscalía Primera Superior del Primer Distrito Judicial, reitera el concepto de que se dicte un sobreseimiento definitivo a favor de **DANIEL ALBERTO MACÍAS ÁBREGO.** Por su parte, el Segundo Tribunal Superior, mediante el Auto consultado de 14 de marzo de 1995, sobreseyó en forma definitiva a favor del sindicado **DANIEL MACÍAS.**

Observamos primeramente que, en base a lo dispuesto en el artículo 2481 del Código Judicial, la Resolución proferida por el Segundo Tribunal Superior en lo concerniente al caso en comento, debe elevarse a esta Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por la calidad de servidor público del favorecido, lo cual se desprende del Acta de toma de posesión y juramento del cargo como Guardia Nacional (-copia autenticada- f. 75), y la certificación de nombramiento por ordenanza -orden superior- (-copia autenticada- f. 76), del Sargento 2° **DANIEL ALBERTO MACÍAS ÁBREGO.**

El Fiscal Auxiliar de la República, mediante Resolución de 10 de mayo de 1993 (fs. 27 a 29), ordenó la libertad de **DANIEL ALBERTO MACÍAS ÁBREGO**, "Por los hechos contenidos en el expediente y de conformidad a las 'Causas de justificación', contenidas en el Código Penal vigente, capitulo (sic) II, del titulo (sic) II, denominado 'El hecho punible', ..." (f. 29).

Del historial penal y policivo de **DANIEL ALBERTO MACÍAS ÁBREGO**, se desprende que éste no registra antecedentes policivos ni penales (f. 81).

Luego de la Evaluación médica social a **DANIEL ALBERTO MACÍAS ÁBREGO** (f. 162), realizada por la Médica Psiquiatra Forense del Instituto de Medicina Legal, Doctora Elaine Bressan de Vega, se concluye que:

> "El examen mental del prenombrado **-DANIEL ALBERTO MACÍAS ÁBREGO-** noevidencia (sic) psicopatología compatible con proceso psicótico en la actualidad." (F. 161).

A foja 91, consta poder especial otorgado por **DANIEL ALBERTO MACÍAS**, a la licenciada **Marisol Bonilla de Arrocha**, para su defensa en el presente proceso penal.

ANTECEDENTES:

En el caso sub-judice, se realizó la Diligencia de reconocimiento de un cadáver (fs. 3-4), según se desprende del informe de comisión de 5 de mayo de 1993 (f. 1) y del informe de 6 de mayo de 1993 (fs. 5-6).

Consta en el expediente, el Protocolo de Necropsia N° 35-07-297 (fs. 33 a 45 y 49), correspondiente a IZIELK AUGUSTO GALE GONZÁLEZ, quien falleciera a consecuencia de muerte traumática, durante el trayecto hacia el Hospital de la Caja de Seguro Social de la Transístmica, Complejo Hospitalario Metropolitano, Dr. Arnulfo Arias M., cuya parte pertinente transcribimos a continuación:

"CONSIDERACIONES MÉDICO LEGALES

> Se trata del cadáver de un varón, negro, joven adulto que aparenta la edad cronológica de 19 años. El cadáver presenta lesiones traumáticas externas e internas compatibles con el impacto y trayectoria en el tórax de un proyectil de arma de fuego. La herida,

necesariamente fatal, fué (sic) ocasionada por un proyectil que provino probablemente de una arma corta disparada a más de 50 cms. del orificio de entrada en la piel; el proyectil atravezó (sic) el tórax de derecha a izquierda de adelante hacia atras (sic) y de arriba hacia abajo, su trayectoria sugiere que el agredido se encontraba de costado derecho y probablemente inclinado hacia adelante con respecto al agresor cuando recibió el impacto del proyectil.

El cadáver no presentó lesiones compatibles con la acción de otro tipo de agente traumático, tampoco se encontraron evidencias de patología orgánica previa.

El óbito ocurrió debido al choque hipovolémico secundario a la perforación de la aorta, factor contribuyente siendo el hemopneumotórax bilateral.

CAUSAS DE LA MUERTE

A). LACERACIÓN TRAUMÁTICA DE LA AORTA.
B). HERIDA PENETRANTE POR PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO EN EL TÓRAX." (F. 45).

Consta en el expediente, Copia del resultado de los exámenes toxicológicos de las muestras de sangre y orina (f. 64), correspondientes al cadáver de IZIELK AUGUSTO GALE GONZÁLEZ.

También, Informe necro-dactilar N° I. C. 104-IPM, de 7 de mayo de 1993 (fs. 85 a 87), del cual se obtuvo un resultado negativo, con respecto a los archivos alfabéticos criminales de la División de Identificación Criminal, de la Policía Técnica Judicial; fotografías (6) del cadáver (fs. 88 a 90).

En autos, está el Análisis pericial de la División de Balística, Departamento de Criminalística, N° 237-238-243-93 (fs. 93 a 95), sobre 2 armas de fuego -revólveres calibre 38, series K-574698 y 2D76222, un (1) proyectil metálico deformado -que fue extraído del cuerpo del exánime de IZIELK A. GALE G., al momento de practicársele la autopsia médico legal-, y seis (6) cartuchos o municiones, "LLEGÁNDOSE A ESTABLECER QUE EL ARMA DE FUEGO QUE DISPARÓ EL PROYECTIL FUE EL REVÓLVER CALIBRE 38 ESPECIAL MARCA SMITH AND WESSON, MODELO 15-2, SERIE K-574698." (F. 94).

En el Informe de experticia balística P. B. 51-94 (f. 115), señala tres situaciones en las que un arma de fuego puede percutar una munición (viva) y no producirse el disparo.

La Diligencia de inspección ocular y reconstrucción de los hechos, visible de fojas 179 a 185 (-a manuscrito- fs. 165 a 178). También, constan en autos, el Plano de la diligencia de inspección ocular y reconstrucción de los hechos (f. 199), y las fotografías correspondientes (fs. 200 a 211).

En Informe pericial, sobre la diligencia de inspección ocular y reconstrucción de los hechos N° 36-94, de 11 de octubre de 1994 (f. 190), suscrito por David O. Villarreal, Perito de la Sección de Balística Forense, Departamento de Criminalística de la P. T. J., se conceptuó lo siguiente:

"Consideramos que al momento del imputado efectuar el disparo, se encontraba de pie (parado), frente al occiso, éste mostrándole su costado derecho, a una distancia aproximada entre 4 a 5 metros y en un nivel un tanto superior (acera) al occiso que se encontraba en la calle, este desnivel se dejo (sic) constar en la Diligencia y las fotografias (sic) tomadas.

Ahora bien, por todo lo ante (sic) expuesto, conceptuamos que lo indicado y explicado por el imputado y el testigo Calderón el diá (sic) de la Reconstrucción de los Hechos, tiene cierto grado de posibilidad en cuanto al momento del (sic) imputado efectuara el

disparo que lo seguera (sic) la vida al joven IZIELK GALE." (F. 190).

Obran como pruebas en el sumario, la declaración jurada rendida por el busero de la línea Panamá-Arraiján, RENÉ ALBERTO MONTERO CÁRDENAS (fs. 13-14; -ampliación- f. 109); el informe de novedad de 6 de mayo de 1993 (fs. 15-16); el informe de novedad de 6 de mayo de 1993, suscrito por el Sargento 2° 4589 **DANIEL MACÍAS**; y el Oficio N° 292 de 6 de mayo de 1993 (f. 18), de donde se desprende que el Sargento 2° **DANIEL MACÍAS** y el Agente VÍCTOR CALDERÓN, acudieron por los alrededores del barrio San Miguel, toda vez que les informaron que al busero de la línea Panamá-Arraiján, RENÉ ALBERTO MONTERO CÁRDENAS, le habían robado el dinero que tenía y el que se encontraba en la máquina sumadora del bus -"niquelera"-. Al efectuar un recorrido por el área se encontraron con un sospechoso que se adecuaba a la descripción de uno de los asaltantes hecha por el busero, tratándose del que portaba el arma, que tenía dientes de oro y era moreno -IZIELK AUGUSTO GALE GONZÁLEZ (Ver f. 90)-. Los agentes hicieron la voz de alto, y éste haciendo caso omiso, sacó de la parte trasera de su cintura un arma de fuego, con la que efectuó dos disparos que no fueron detonados, contra el Sargento 2° **DANIEL MACÍAS**, quien ante tal ataque sacó su arma de reglamento y le disparó al hoy occiso. Luego, el Agente CALDERÓN efectuó un disparo al aire para retirarse del lugar, ya que los familiares del occiso, intentaron atacarlos.

De lo expuesto, se desprende que en el caso en mención se dieron fundamentalmente dos versiones contradictorias entre sí, en cuanto a la forma en que se realizaron los hechos; sin embargo, existen en el expediente testimonios que desmeritan las declaraciones de los familiares del occiso, ALY AUGUSTO COX GUTIÉRREZ (fs. 10 a 12; -ampliación- f. 159) y GIORGINA GONZÁLEZ MORGAN (fs. 66-67), quienes intentaban demostrar la antijuricidad del actuar del Sargento 2° **DANIEL ALBERTO MACÍAS ÁBREGO**. Además de los diversos testimonios, entre los que consta la declaración jurada del agente VÍCTOR MANUEL CALDERÓN ALVEO (fs. 20 A 22) y la declaración indagatoria de **DANIEL ALBERTO MACÍAS ÁBREGO** (fs. 24 a 26), junto con la respectiva ampliación (fs. 148-149) por él rendida, constan en autos las consideraciones médico-legales del respectivo protocolo de necropsia, y el informe del perito de Balística Forense, de los cuales se colige que sí es posible que los hechos se desarrollaran tal y como los describió el sindicado **DANIEL ALBERTO MACÍAS ÁBREGO.**

La actuación del Sargento **MACÍAS ÁBREGO**, quien concretamente fuera la persona que hiciera el disparo en el hombro derecho del occiso con su arma de fuego -Revólver Calibre 38 Especial, modelo 15-2, con serie # K-574698, marca Smith & Wesson-, respondiendo al ataque, luego de que éste le había intentado disparar en dos (2) ocasiones con su arma de fuego, pero no detonaron-, se encuentra amparada dentro de la causa de justificación consignada en el artículo 21, Capítulo II, Título II del Código Penal denominada legítima defensa.

Observa la Sala, que concurren de manera inobjetable los requisitos señalados en el artículo mencionado, que establece:

"ARTÍCULO 21: No comete delito quien obre en defensa de la persona o derechos propios o ajenos, siempre que concurran los siguientes requisitos:

1. Agresión injusta, actual o inminente del que resulte afectado por el hecho;
2. Medio racional para impedir o repeler la agresión;
3. Imposibilidad de evitarla o eludirla de otra manera; y
4. Falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende".

La Sala, por su parte, difiere de la Resolución consultada, en el sentido de que, si bien ha quedado acreditado en el proceso que el actuar del agente carece de antijuricidad, la causa de justificación aplicable en el presente negocio, corresponde a la denominada "legítima defensa", habida consideración de lo señalado en el texto del artículo 21 antes citado, y no a la causa de justificación aplicada en la Resolución consultada, denominada "cumplimiento de un deber", contenida en el artículo 19 del Código Penal. Se desprende de este

caso que el funcionario público implicado, ejercitaba un legítimo derecho, cual es el de salvaguardar su propia vida. Por lo tanto, la actuación del sargento se encuentra amparada dentro de las causas de justificación consignadas en el Título II, Capítulo II del Código Penal, pues no existe duda alguna que durante el cumplimiento de sus deberes como servidor público, en protección de bienes legítimamente tutelados, se vio obligado a actuar en la forma en que lo hizo en un acto de defensa personal, razón por la cual procede la confirmación de la Resolución consultada en este sentido, aclarando nuevamente que el fundamento legal pertinente es el artículo 21 del Código Penal y no el artículo 19 de dicho Código, según lo explicado en líneas anteriores. Y, en virtud de lo establecido en el artículo 2210, ordinal 3 del Código Judicial, debe dictarse un sobreseimiento definitivo a favor de **DANIEL ALBERTO MACÍAS ÁBREGO.**

Por consiguiente, la Sala Penal de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA el Auto de 14 de marzo de 1995 consultado por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, en cuya parte resolutiva SOBRESEE DEFINITIVAMENTE a DANIEL ALBERTO MACÍAS ÁBREGO, por la muerte traumática de IZIELK AUGUSTO GALE GONZÁLEZ, de generales conocidas en el proceso.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

PROCESO SEGUIDO CONTRA ISMAEL GONZÁLEZ FLORES, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN DETRIMENTO DE HILARIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

En grado de consulta, conoce la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, del Auto de 18 de febrero de 1994, proferido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, mediante el cual se sobresee definitivamente a favor de **ISMAEL GONZÁLEZ FLORES**, Agente de la Policía Nacional, en el proceso penal levantado con motivo de la muerte traumática del señor HILARIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, hecho ocurrido el día 29 de noviembre de 1992, en Cerro Batea, Calle Principal, Distrito de San Miguelito.

Al remitir el presente sumario para su calificación legal, la Fiscalía Primera Superior del Primer Distrito Judicial, mediante Vista N° 150 de 30 de julio de 1993 (fs. 72 a 76), solicitó la dictatación de un sobreseimiento definitivo a favor de **ISMAEL GONZÁLEZ FLORES**, según lo establecido en el artículo 2210, ordinal 3 del Código Judicial, "toda vez que su conducta se enmarca dentro de las causas de justificación, reguladas en el Capítulo II, Título II, del Libro Primero del Código Penal". (f. 76). Por su parte, el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, mediante Resolución de 8 de noviembre de 1993, visible de fojas 81-82, luego de precisadas las evidencias requeridas, se decretó la ampliación de las sumarias. La Fiscalía Primera Superior, agotada a cabalidad la ampliación solicitada, mediante Vista N° 216 de 30 de diciembre de 1993 (f. 90), reiteró el concepto de que se dicte un sobreseimiento definitivo a favor de **ISMAEL GONZÁLEZ FLORES**. Por su parte, el Segundo Tribunal Superior, mediante el Auto consultado de 18 de febrero de 1994 (fs. 93 a 98), sobreseyó en forma definitiva a favor del sindicado.

Observamos primeramente que, en base a lo dispuesto en el artículo 2481 del Código Judicial, la Resolución proferida por el Segundo Tribunal Superior en lo concerniente al caso en comento, debe elevarse a esta Sala Penal de la Corte

Suprema de Justicia, por la calidad de servidor público del favorecido, lo cual se desprende del Acta de toma de posesión y juramento del cargo como Agente de la Policía Nacional (-copias autenticadas- fs. 88-89), del Agente 10101 **ISMAEL GONZÁLEZ FLORES.**

Del historial penal y policivo de **ISMAEL GONZÁLEZ FLORES**, se desprende que éste no registra antecedentes policivos ni penales (f. 71).

Licencia (original) para portar armas de fuego de **ISMAEL GONZÁLEZ FLORES** (-copia- f. 15).

ANTECEDENTES:

En la morgue del Hospital Santo Tomás, se realizó la Diligencia de reconocimiento de un cadáver (f. 2), según se desprende del informe de investigación preliminar de 29 de noviembre de 1992 (f. 3) y de las fotografías (7) del occiso, visibles de fojas 5 a 7.

Posteriormente, se realizó el Protocolo de Necropsia N° 212-02-866 (fs. 30 a 41), suscrito por el Médico Forense del Instituto de Medicina Legal, Doctor ERIC S. AGUIRRE S., correspondiente al cadáver de HILARIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, cuya parte pertinente transcribimos a continuación:

"CONSIDERACIONES MÉDICO LEGALES

Se trata de un hombre joven que sufre un traumatismo por proyectil de arma de fuego en abdomen, el cual le produce principalmente lesión de la arteria ilíaca interna derecha y una hemorragia interna masiva. El óbito se produce como consecuencia de éste traumatismo.

Se describe la trayectoria del proyectil= Anterior a posterior, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo (inclinación leve).

CAUSAS DE LA MUERTE

A. SHOCK HEMORRÁGICO
B. HERIDA POR PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO PENETRANTE EN CAVIDAD ABDOMINAL." (F. 41).

Consta en el expediente, que los exámenes de laboratorio post-morten -toxicológicos de las muestras de orina y sangre-, correspondientes al cadáver del occiso en la presente causa, resultaron positivos para cocaína, y 32 mg% de alcoholemia, respectivamente (f. 40).

Según se desprende de autos, se ha acreditado, en primer orden, la muerte de HILARIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, lo cual consta en el Certificado de Defunción (-copia autenticada- f. 66), expedido por la Dirección General del Registro Civil.

Informe de comisión post-mortem de 30 de noviembre de 1992 (fs. 17-19), en el cual se obtuvieron resultados positivos de la clasificación dactilar del occiso, "... puesto que dichas impresiones pertenecian (sic) al ciudadano HILARIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, con ficha de delincuencia N° A-52492., el mismo aparece reseñado por primera vez en nuestros archivos el día 16 de Febrero de 1986, por el delito de Robo posteriormente por el delito deRobo (sic) a Mano Armada el 15 de Noviembre de 1991, ..." (F. 18).

Experticia Balística P. B. N° 477-92. de 18 de marzo de 1993 (f. 20), donde se describe técnicamente el arma de fuego -pistola calibre .380, marca BRYCO, modelo 38, serie 114448-, utilizada por el Agente de Policía, **ISMAEL GONZÁLEZ**, concluyéndose que,

"El arma en cuestión presentan buen estado de conservación y su funcionamiento en su mecansimso (sic) de disparo es bueno." (F. 20).

También, constan en autos, Informe Químico Forense N° D. Q. 051-93 de 19

de marzo de 1993 (f. 21), sobre análisis de residuos de disparo, de la pistola calibre .380, marca BRYCO, serie 114448 -cuya fotografía es visible a foja 22-; Informe de Serología Forense N° D. S.-454-92 (f. 26), de 21 de diciembre de 1992, resultando la evidencia -un (1) cuchillo sin cacha, parte trasera con cinta negra, hoja plateada (-fotografías- fs. 25 y 28)-, negativa para la presencia de sangre oculta; e, Informe de Serología Forense N° D. Q. 236 de 29 de diciembre de 1992 (f. 47), sobre residuos de disparo en el suéter del occiso.

Informe de Experticia Balística N° 491-93, del proyectil de arma de fuego, rescatado del cuerpo del occiso, durante la autopsia, el cual se encontraba incrustado en el hueso sacro del lado derecho, según consta en el protocolo de necropsia (f. 39). Dicho proyectil consta en autos, al igual que una vista fotográfica del mismo.

En la Vista N° 150 de 30 de julio de 1993 mencionada en líneas anteriores, la Fiscalía Primera Superior del Primer Distrito Judicial, realizó la siguiente exposición resumida de los hechos, en base a lo relatado por el sindicado en el presente negocio:

> "alrededor de las 5:30 de la madrugada del 29 de noviembre de 1992 en el trayecto de su residencia al Cuartel de la Policía en Tinajita, San Miguelito, -el Agente **ISMAEL GONZÁLEZ FLORES**- fue abordado por un extraño que, cuchillo en mano, logró despojarlo de su cartera con documentos personales, placa pilicial (sic) y la suma de B/.35.00 balboas, incluyendo su reloj de pulso. Luchan y forcejean, pero el asaltante en el roce de los cuerpos, notó que portaba su arma de fuego, dándose inicio a la disputa del arma, produciéndose dos disparos al aire a efecto de controlar la situación, y como el asaltante le tenía agarrada el arma y con la mano derecha lo cortó y le pegaba con el cuchillo en el cuerpo, le produjo un disparo próximo al ombligo, lado izquierdo. Al recibir el impacto, el desconocido continúa luchando y de pronto corre, se cae por un barranco, se levanta y entonces vuelve a caer, ya de manera definitiva.
>
> Unos instantes después llega la policía de ronda por el área y se encarga de la situación. Manifestó que el asaltante, durante la caída, al parecer dejó caer las pertenencias robadas, pues los policías las encontraron en la maleza del lugar.
>
> Posteriormente dichas pertenencias le fueron entregadas (fs. 52), y como también resultó lesionado en el cuerpo durante la lucha con el ladrón, fue enviado al Médico Forense del Ministerio Público, que le asigna una incapacidad de 10 días, a partir del incidente, toda vez que recibió herida cortante en el antebrazo izquierdo, cara dorsal (fs. 54 del expediente)." (Fs. 73-74).

Obran como pruebas de los hechos descritos por el sindicado en las sumarias, Informe de 29 de noviembre de 1992, suscrito por el Agente **ISMAEL GONZÁLEZ** (f. 11); Informe de novedad de 29 de noviembre de 1992 (f. 12); Nota suscrita por el Jefe de la Sub-Estación de Policía del Hospital Santo Tomás, de 29 de noviembre de 1992 (f. 13), donde consta que el Agente **ISMAEL GONZÁLEZ**, fue conducido a dicho Hospital para recibir atención médica, por múltiples lesiones; Copia del Registro de Urgencia del Hospital Santo Tomás (f. 14).

Además de los informes antes descritos, existen en el sumario otros medios probatorios, entre los que consta declaración indagatoria (fs. 49 a 51) y ampliación (fs. 67-68), rendida por **ISMAEL GONZÁLEZ FLORES**, y la declaración jurada del Médico Forense del Instituto de Medicina Legal (fs. 62-63) -quien efectúo el protocolo de necropsia del caso-, Doctor ERIC AGUIRRE SÁNCHEZ, que con relación a la distancia existente entre el cañón del arma de fuego y el cuerpo del occiso HILARIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, manifestó:

> "Con relación a la distancia, no se observó alrededor de la herida tatuaje verdadero ni ahumamiento; además en el sueter (sic) se

> observa el orificio de entrada de proyectil en donde no hay quemaduras ni ahumamiento. La distancia para que se produzca signos de tatuaje la sitúa el Doctor VARGAS ALVARADO (Forense de Costa Rica), alrededor de los 50 centímetros. Mas recientemente, autores Argentinos la hubican (sic) a 30 centímetros de la piel. De manera que para que se produzca tatuaje o ahumamiento la boca del cañón debe estar a una distancia menor a 30 centímetros. En el caso que nos ocupa las características observadas en la ropa del occiso y en la piel corresponden a un disparo realizado a 30 centímetros o mayor de 30 centímetros." (Fs. 62-63).

La actuación del Agente **ISMAEL GONZÁLEZ FLORES**, quien concretamente fuera la persona que hiciera el disparo en el hemiabdomen izquierdo del occiso HILARIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ con el arma de fuego -pistola calibre 380, marca BRYCO, modelo 38, serie 114448, que es de su propiedad, según se colige de fs. 69 y 70-, respondiendo al ataque con arma blanca -cuchillo sin cacha, parte trasera con cinta negra, hoja plateada- por parte del hoy occiso, luego de que éste le había robado sus pertenencias y lo había cortado en el antebrazo izquierdo, se encuentra amparada dentro de la causa de justificación consignada en el artículo 21, Capítulo II, Título II del Código Penal denominada legítima defensa.

Observa la Sala, que concurren de manera inobjetable los requisitos señalados en el artículo mencionado, que establece:

> "ARTÍCULO 21: No comete delito quien obre en defensa de la persona o derechos propios o ajenos, siempre que concurran los siguientes requisitos:
>
> 1. Agresión injusta, actual o inminente del que resulte afectado por el hecho;
> 2. Medio racional para impedir o repeler la agresión;
> 3. Imposibilidad de evitarla o eludirla de otra manera; y
> 4. Falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende".

La Sala, por su parte, nada tiene que objetar a la Resolución consultada, toda vez que ha quedado acreditado en el proceso que el actuar del Agente **ISMAEL GONZÁLEZ** carece de antijuricidad, y la causa de justificación aplicable en el presente negocio, corresponde a la denominada "legítima defensa", habida consideración de lo señalado en el texto del artículo 21 antes citado.

Se desprende de este caso que el servidor público implicado, ejercitaba un legítimo derecho, cual es el de salvaguardar su propia vida. Por lo tanto, su actuación se encuentra amparada dentro de las causas de justificación consignadas en el Título II, Capítulo II del Código Penal, toda vez que el Agente **ISMAEL GONZÁLEZ** se vio obligado a actuar en la forma en que lo hizo en un acto de defensa personal, razón por la cual procede la confirmación de la Resolución consultada; y, en virtud de lo establecido en el artículo 2210, ordinal 3 del Código Judicial, debe dictarse un sobreseimiento definitivo a favor de **ISMAEL GONZÁLEZ FLORES**.

Por consiguiente, la Sala Penal de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA en todas sus partes, el Auto de 18 de febrero de 1994 consultado por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, en cuya parte resolutiva SOBRESEE DEFINITIVAMENTE a ISMAEL GONZÁLEZ FLORES, por la muerte traumática de HILARIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, de generales conocidas en el proceso.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS

(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INCIDENTE DE DESERCIÓN DE ACUSACIÓN PARTICULAR DENTRO SUMARIO SEGUIDO A RAÚL FLORENCIO GUEVARA QUINTERO, POR EL DELITO DE HOMICIDIO DOLOSO EN PERJUICIO DE ELIADE ARROYO GÓMEZ. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

En grado de apelación ingresó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el Auto de 19 de octubre de 1995, proferido por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial (fs. 13 a 18), mediante el cual se niega la petición de deserción de la acusación particular elevada por el apoderado legal del imputado, Licenciado **José Luis Varela G.**, dentro del sumario seguido a **RAÚL FLORENCIO GUEVARA QUINTERO**, por delito de homicidio doloso en perjuicio de ELIADE ARROYO GÓMEZ.

La Fiscalía Primera Superior del Cuarto Distrito Judicial, mediante contestación de traslado de 29 de marzo de 1996 (fs. 38-39), sugiere la confirmación de la Resolución impugnada, en los términos siguientes:

> "Al estudiar cada uno de los escritos de las partes, este Despacho sostiene lo expuesto en el escrito de contestación de Traslado ostensible a fs. 5-6; en el sentido de que si bien es cierto que después del 22 de junio de 1995, el Lic. SILVIO GUERRA no volvió gestionar ni escrita ni verbalmente ante la instancia correspondiente; el sumario sub júdice (sic), es de aquellos que se persiguen de oficio, al tenor de lo que preceptúa el artículo 2011 del Código Judicial, por lo que la carga del impulso procesal le corresponde al Tribunal o bien al Ministerio público; amén de que consideramos de que a la fecha, se requiere la práctica de varias diligencias que puedan llevar al esclarecimiento de los hechos y determinar penalmente quién es él (sic) o los responsables del supuesto delito investigado." (Fs. 38-39).

Primeramente, para resolver la presente alzada, la Sala prestará exclusiva atención a los puntos a que se refiere el recurso, según lo establecido en el artículo 2428 del Código Judicial.

El recurrente en su escrito de sustentación de la apelación, solicita que se revoque la Resolución proferida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial y que, en su lugar, se declare desierta la acusación particular promovida dentro de las presentes sumarias, en base a lo siguiente:

> "De manera que la acusación particular de la referencia, cuando el expediente se encontraba radicado en el Ministerio Público, dejó de gestionar por escrito, durante tres (3) meses, por cuanto su última gestión fue la notificación donde solicitó sin fundamento alguno la detención de mi defendido, actuación ésta que tiene fecha del veintidós (sic) (22) de Junio del año en curso, hasta el día veintidós (sic) (22) de septiembre cuando fue promovida la incidencia de deserción de la acusación particular.
>
> Por otro lado es oportuno señalar, que la acusación particular al solicitar pruebas como en efecto así lo hizo, y de las cuales fueron practicadas por el Ministerio Público, no actuó dentro de dicha práctica de pruebas, lo cual significa que el impulso procesal recaía al jurista como representante legal de dicha acusación particular y no a la Fiscalía Superior ni a la Personería Municipal del Distrito de Ocú; por lo que realmente no se cumplió con el mandato legal exigido por el artículo 2020 del Código Judicial." (F. 28).

Por otro lado, observa la Sala, que de acuerdo con lo señalado por el licenciado Silvio Guerra Morales en su escrito de objeciones (fs. 31 a 34), "la

defensa entró a analizar situaciones de fondo, las cuales no son viables en el trámite de una incidencia como la que nos ocupa." (F. 31-32).

Además, el representante de la parte acusadora, entre sus objeciones a los puntos expuestos por la defensa en su escrito de sustentación, se refiere a:

> "... jurisprudencia calendada 11 de octubre de 1990, la cual refiere un pronunciamiento de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, misma que, resolviendo un incidente dentro de un recurso de Casación, sostuvo que cuando el acusador actúa dentro de la práctica de pruebas en donde se levanta una diligencia que es suscrita por él, esa gestión constituye de por sí una gestión escrita, que demuestra que no se produce la deserción de la acusación. ..., el impulso o carga del procedimiento era materia propia del funcionario instructor, primero de la Personería de Ocú y, luego, de la Fiscalía Superior de Las Tablas.

Finalmente, el apoderado de la parte acusadora, se refiere a la violación de los artículos 989 y 2308 del Código Judicial, por parte de la Fiscalía Superior, en virtud de "... la ausencia de pronunciamiento por parte del funcionario instructor en relación al secuestro penal solicitado por la defensa, ..."; y, "... la ausencia de notificaciones para la parte acusadora y de los acusados." (F. 33).

El Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial en el Auto apelado de 19 de octubre de 1995 (fs. 13 a 18), concluyó que, en el caso sub judice, no hubo deserción, luego de las consideraciones siguientes:

> "La declaratoria de deserción es una sanción procesal prevista para la parte acusadora, cuando incumple su deber de tutelar el proceso penal con las gestiones pertinentes, por eso se dice con justificada razón que la figura de la deserción en materia penal tiene semejanza con la caducidad en materia civil, porque puede considerarse como una modalidad de éste, toda vez que persiguen la finalidad de exigir el cumplimiento de la misión encomendada a las partes, de tutelar los procesos y reclamar sobre cualesquiera anomalías o paralización en la actuación." (F. 17).

A juicio de la Sala, la acusación particular presentada por el licenciado Silvio Guerra Morales, apoderado legal de la señora JOSEFINA JARAMILLO vda. DE ARROYO -contrario a lo señalado en la apelación interpuesta por el licenciado **José Luis Varela G.**, en representación de **RAÚL FLORENCIO GUEVARA QUINTERO**-, no debe ser declarada desierta, en virtud de que, estamos en presencia de un delito de homicidio, que es perseguible de oficio, razón por la cual, la presente acusación privada no se encuentra subordinada a la presentación de gestión escrita alguna, toda vez que, la carga del impulso procesal corresponde en este caso, al Ministerio Público y no al Acusador, según lo establecido en el artículo 2020 del Código Judicial, modificado por la Ley 3 de 22 de enero de 1991.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA en todas sus partes el Auto apelado de 19 de octubre de 1995 (fs. 13 a 18), que niega la petición de deserción de la acusación particular elevada por el licenciado José Luis Varela G., apoderado legal del imputado RAÚL FLORENCIO GUEVARA QUINTERO; y por consiguiente, remite el expediente al Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, para los trámites legales correspondientes.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN PENAL

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A RICARDO ANTONIO AGUILAR, SINDICADO POR EL DELITO DE FALSEDAD Y ESTAFA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, OCHO (8) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El 29 de febrero del año en curso, ingresó a la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación promovido por el licenciado Rolando Marcos Hermoso Cordich, Defensor de Oficio del señor **RICARDO AGUILAR MORENO**, dentro del proceso penal que se le sigue por delito contra la fe pública. Cumplidos los trámites de reparto, en acatamiento a lo previsto por el artículo 2443 del Código Judicial, se fijó en lista el negocio por el término de ocho días a fin de que las partes tuvieran conocimiento del ingreso del caso al Tribunal de Casación.

Vencido el término de lista, procede el examen del caso, a efecto de establecer si concurren los requisitos externos e internos, propios de este medio de impugnación extraordinario.

Según constancia de autos, se cumplió con el principio de temporalidad en el anuncio y formalización del recurso, por haberse ajustado tales actos a los términos fijados por la ley. En cuanto a la legitimación activa del recurrente, consta en el expediente que el letrado asumió la defensa técnica por disposición judicial y en relación con la legitimación material, se trata de un hecho punible amenazado con pena privativa de libertad superior a dos años.

En cuanto a los requisitos formales que debe reunir el escrito mediante el cual se formaliza el recurso de casación, la Sala advierte lo siguiente: 1. Respecto a la historia concisa el caso hay una relación cronológica del proceso, que cumple con este requerimiento formal. 2. Con relación a la causal de fondo que se invoca, el casacionista comete el error de transcribir el numeral 1° del artículo 2434 del Código Judicial, el cual, al tenor de la jurisprudencia y de la doctrina nacional, contiene cinco causales, dos de ellas de tipo probatorio. Al invocar cinco causales como una sola, se incurre en un defecto sustancial que impide al Tribunal la consideración de las mismas. 3. En cuanto a los motivos, hay que anotar que desde el momento en que no se precisa la causal, los motivos no tienen la virtualidad de fundamentar cinco causales simultáneas. 4. Respecto a las disposiciones violadas y el concepto en que lo han sido, se puede apreciar que el casacionista alude a una violación directa, pero no concreta si es por omisión o por aplicación de la norma, y en la anotación del artículo 904 del Código Judicial sostiene que fue violado por indebida aplicación, pero no señala cuál disposición debió aplicarse correctamente al caso sub júdice.

Como quiera que los errores cometidos comprometen no sólo la estructuración del recurso, sino el fondo del mismo hasta el punto de impedir al Tribunal el examen de la causal que se pretende esgrimir como fundamento de este medio de impugnación de carácter extraordinario, procede su inadmisión, tal cual lo prevé el inciso final del artículo 2443 del Código Judicial.

Por tanto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el presente recurso de casación.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A MAYTÉ DOLORES GONZÁLEZ DE LEÓN DE RODRÍGUEZ, POR EL DELITO DE POSESIÓN ILÍCITA DE DROGAS AGRAVADAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, OCHO (8) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado José Ramiro Fonseca anunció y formalizó recurso de casación en el fondo contra sentencia calendada 4 de octubre de 1995, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, que confirma la sentencia dictada por el Juzgado Tercero de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, mediante la cual se condenó a Mayté Dolores González De León de Rodríguez a la pena de 5 años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el mismo período, como responsable del delito previsto en el artículo 260 del Código Penal.

Corresponde a la Sala Penal de la Corte Suprema, en este momento procesal, pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso propuesto. A tales efectos, se observa que el casacionista transcribe íntegramente el contenido del numeral 1 del artículo 2434 del Código Judicial (f. 147), **sin especificar** cuál de las 5 causales previstas en esta norma legal es la que invoca como fundamento del recurso. La jurisprudencia nacional ha sostenido que la norma en cita "consagra cinco causales de casación en el fondo, a saber: a) violación directa; b) interpretación errada de la ley; c) indebida aplicación de la ley al caso juzgado; d) error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba, y e) error de derecho en la apreciación de la prueba" (Sentencia de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia de 3 de octubre de 1995).

En cuanto a los motivos, se advierte que el casacionista utiliza razonamientos que carecen de soporte jurídico, y que se refieren básicamente a que: 1) su patrocinada fue sentenciada a 5 años por la infracción del artículo 260 del Código Penal; 2) la sustancia ilícita incautada (5.5 gramos) no estaba destinada para la venta; 3) la conducta de su defendida debió encuadrarse en el tipo del primer párrafo de la norma penal, que lleva aparejada una sanción de 1 a 3 años de prisión; 4); y 5) ni el dinero ni las prendas incautadas en la diligencia de allanamiento están relacionadas con el hecho punible que imputado.

Tal como se aprecia, estos motivos carecen de cargos concretos de injuridicidad que pongan de relieve errores in judicando en que pudiera haber incurrido el tribunal de segunda instancia al proferir su decisión, además de que no ilustran a la Sala sobre cuál de las cinco causales conjuntamente aducidas, es la que sirve de fundamento a su pretensión.

En cuanto a las disposiciones legales infringidas, el casacionista aduce la infracción del artículo 260 del Código Penal, en concepto de "violación directa por haberla aplicado indebidamente" (f. 148). Aquí se observa que el recurrente invoca simultáneamente dos conceptos de infracción disímiles (violación directa e indebida aplicación), modalidad que resulta extraña a la técnica que debe ser empleada en la formalización del recurso de casación.

Se trata de defectos insubsanables que dejan esta iniciativa procesal sin sustento lógico-jurídico, por lo que resulta inadmisible el recurso que se pretende formalizar.

En razón de lo antes expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso de casación propuesto por el licenciado José Ramiro Fonseca, defensor técnico de Mayté Dolores González De León de Rodríguez, contra la sentencia de 4 de octubre de 1995, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES (fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A LUIS A. GONZÁLEZ MEJÍA, POR DELITO CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Mediante proveído del 7 de marzo de este año, esta Sala ordenó se mantuviera el presente negocio penal en Secretaría por el término de cinco días a objeto que el recurrente efectuara las correcciones de los defectos de forma aludidos en dicha resolución y que hacen inadmisible el recurso (fs. 109-110).

El nuevo escrito presentado por el casacionista fue presentado dentro del término legal correspondiente, por lo que este tribunal de casación debe resolver en definitiva sobre la admisibilidad del recurso.

Se observa que la revisión concedida por el Tribunal Superior, se ajusta a los requisitos de que trata el artículo 2441 del Código judicial, referente a la impugnabilidad objetiva y subjetiva.

Además, se advierte que el escrito presentado se adecua a los requisitos establecidos en el código procedimental patrio: contiene una historia concisa del caso; son tres causales de fondo que se invocan, las cuales están sustentadas con sus respectivos motivos; en cada causal se señalan las disposiciones infringidas y el concepto de dicha infracción (art. 2443).

En la resolución de 7 de marzo, se ordenó subsanar la redacción de la causal tercera ya que la misma presentaba tres alternativas y sólo es posible optar por una de ellas.

El nuevo escrito subsana el defecto advertido y por tanto procede admitir el recurso presentado.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, representada por la Magistrada Sustanciadora en Sala Unitaria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE el recurso de Casación presentado y DISPONE correrle traslado al señor Procurador por el término de cinco días para que emita concepto.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN PENAL EN EL FONDO INTERPUESTO POR EL LICENCIADO HUMBERTO A. COLLADO, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR HERNANDO MIRANDA ORTIZ, CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA DEL 13 DE ENERO DE 1994, DICTADA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado Humberto A. Collado, actuando en nombre y representación del señor HERNANDO MIRANDA ORTIZ, interpuso recurso de casación en el fondo contra la Sentencia de segunda instancia dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, el 13 de enero de 1995, a través de la cual se revocó la Sentencia S-84 del 8 de julio de 1993, emitida por el Juez Primero de Circuito, Ramo Penal, del Tercer Distrito Judicial de la Provincia de Panamá.

Mediante la Sentencia que se impugna se revocó la absolutoria de primera instancia y se declaró culpable al señor HERNANDO MIRANDA ORTIZ del delito de homicidio y lesiones culposas en perjuicio Domiciano Marín y otros y se le condenó a la pena de cuatro años de prisión y a dos años de inhabilitación para conducir vehículos a motor a partir del cumplimiento de la pena privativa de libertad ambulatoria.

El recurso fue admitido y previos los trámites legales se celebró la audiencia de casación, por lo que el negocio se encuentra en estado de resolver.

I. HISTORIA CONCISA DEL CASO

El día 9 de octubre de 1991, en el poblado conocido como El Nazareno, Corregimiento de Feuillet, Distrito de La Chorrera, Provincia de Panamá, se produjo una colisión entre los vehículos conducidos por los señores Domiciano Marín y HERNANDO MIRANDA ORTIZ. Según el informe del accidente automovilístico, contenido en el Formato N° 807772 de la Dirección de Tránsito y Transporte Terrestre del Ministerio de Gobierno y Justicia, el día de los hechos el Microbús, marca Toyota, con matrícula N° 7B-28, conducido por el señor Domiciano Marín, transitaba por la Vía Panamericana con dirección hacia el Distrito de Capira y al pasar aproximadamente cincuenta pies de la entrada de El Nazareno (segunda entrada) colisionó con la parte delantera y el costado izquierdo de su vehículo en la parte delantera izquierda del vagón del camión, marca Ford, matrícula 4C-4328, conducido por el señor HERNANDO MIRANDA ORTIZ, que transitaba en sentido contrario. Producto de este impacto, este último se fue hacia el hombro derecho de la vía, volcándose finalmente sobre el mismo. Como resultado de esta lamentable colisión se produjeron cinco (5) muertos y quince (15) heridos.

De acuerdo con el citado informe, el accidente se produjo en virtud de que el señor Domiciano Marín transitaba con su vehículo por la vía contraria, la cual presentaba como características el estar seca, asfaltada, curva, en pendiente y entre intersección (fs. 16-17).

Con vista de los anteriores hechos el Fiscal Duodécimo del Circuito dispuso iniciar la instrucción del sumario, el cual concluyó con la petición de apertura de causa criminal contra el sindicado HERNANDO MIRANDA ORTIZ. Concluida la audiencia, el Juez Primero del Circuito de lo Penal del Tercer Distrito Judicial de Panamá dictó la Sentencia del 8 de julio de 1993, mediante la cual absolvió al imputado de los cargos que se le imputa. Contra la citada sentencia, la representante del Ministerio Público y uno de los acusadores particulares promovieron recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial a través de la Sentencia del 13 de enero de 1994. En esta sentencia el Segundo Tribunal Superior revocó la decisión del juez a-quo y, en su lugar, condenó al señor HERNANDO MIRANDA ORTIZ a cumplir la pena de cuatro (4) años de prisión y dos (2) años inhabilitación para conducir vehículos a motor a partir del cumplimiento de la pena de privación de libertad ambulatoria.

II. LA CAUSAL QUE SE INVOCA

La única causal que se invoca en el recurso es la de error de derecho en la apreciación de la prueba, que implica una violación sustancial de la ley penal y que está consagrada en el numeral 1° del artículo 2434 del Código Judicial.

III. LOS MOTIVOS QUE SE ADUCEN

Para sustentar la causal de error de derecho en la apreciación de la prueba el casacionista invoca cuatro motivos.

En el primer motivo se argumenta que el Segundo Tribunal Superior de Justicia basó su sentencia condenatoria en la prueba testimonial rendida por Víctor Virgilio Vásquez Quiroz, Sheila Maxini Urriola de Córdoba, María Eneida Baule, Agustín Antonio Jaén Gómez, Demetrio Díaz Muñoz, Bergis Agustín Moreno Cedeño, Cristina Pérez Maules y Jacinta Anaya Herrera, a pesar de que los mismos consistían en declaraciones contradictorias, imprecisas y parcializadas, ya que dichos testigos tienen interés en faltar a la verdad por haber sido afectados. Al no analizar dichas declaraciones conforme a la sana crítica se incurrió en error de derecho en la apreciación de la prueba, implicando ello violación de la ley penal sustantiva.

En el segundo motivo se alega que en la misma infracción incurrió el tribunal de segunda instancia, al no valorar, conforme a la sana crítica, las declaraciones rendidas por Modesto Atencio González, quien no sabe leer ni escribir y de quien se comprobó que mintió y exageró al declarar, tal como señalaron los peritos, incluso los del Ministerio Público; así como la declaración de Carlos Vega Martínez, quien manifestó que fue testigo posterior del accidente e incurrió en graves contradicciones sobre el modo y el lugar del accidente.

En el tercer motivo el casacionista sostiene que el Segundo Tribunal Superior le reconoció mayor grado de convicción a los peritos Oscar Alfonso Zúñiga, de la parte acusadora, y Guillermo Ferrufino y Rogelio Salinas, del Ministerio Público, que a los peritos de la defensa, Matías González y Eduardo MC Clean, a pesar de que éstos últimos tienen mayor experiencia y vinculación con la materia y su dictamen concuerda con la deposición de la testigo Ana Prisila González de Ku y del mismo sindicado.

Finalmente, en el cuarto motivo el casacionista argumenta que al no analizar ni evaluar las pruebas testimoniales y periciales en su conjunto y conforme a la sana crítica, el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial llegó a una errada conclusión. No obstante las dudas que surgen en el proceso, en el sentido de que el señor HERNANDO MIRANDA ORTIZ condujera su vehículo imprudentemente, lo condenó injustamente como culpable del delito de homicidio y lesiones culposas (fs. 930-934)

IV. DISPOSICIONES LEGALES INFRINGIDAS Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN

Como disposiciones legales infringidas se señalan los artículos 2144, 904, 905, 906 y 967 del Código Judicial; y los artículos 133, 30 y 36 del Código Penal.

El artículo 2144 del Código Judicial establece que el testimonio se apreciará según las reglas de la sana crítica, de conformidad con el Libro Segundo de dicho Código. El casacionista estima que se violó esta norma en forma directa, por omisión, porque el tribunal ad-quem no evaluó la prueba testimonial conforme a las reglas de la sana crítica, lo que le hubiera permitido llegar a una conclusión más científica y veraz sobre la causas o causas del accidente y, en consecuencia, a absolver al señor MIRANDA ORTIZ, sobretodo porque existen dudas y contradicciones en el expediente.

Con relación al artículo 904 del mismo cuerpo normativo, este preceptúa que el juez debe apreciar, según las reglas de la sana crítica, las circunstancias y motivos que corroboren o disminuyan la fuerza de las declaraciones. En concepto del apoderado del imputado, esta norma ha sido violada directamente, por omisión, porque el juzgador ad-quem no apreció las pruebas en base a la sana crítica, ya que de haberlo hecho hubiera concluido que los testigos del bus, en la mayor parte, no se dieron cuenta de lo sucedido y el resto tenía sobrado interés en parcializarse. Igualmente, hubiera evaluado, conforme a la sana crítica, la deposición de los demás testigos, quienes no presenciaron el hecho, sino que llegaron después de lo ocurrido.

El artículo 906 del Código Judicial establece lo siguiente:

"Artículo 906. Cuando las declaraciones de los testigos presentados

> por una misma parte o por ambas sean contradictorias entre sí, de manera que de cada parte haya numero plural de testigos hábiles, debe el Juez tomar en cuenta la vinculación que los testigos tengan o puedan tener con alguna de las partes y si afecta su imparcialidad; lo fundado de la razón de su dicho; el resultado del careo, si hubiere, y asimismo las demás circunstancias que puedan formar su convicción, conforme las reglas de la sana crítica."

A juicio del recurrente, la norma transcrita fue violada en forma directa, por omisión, ya que el tribunal de segunda instancia no tomó en cuenta la vinculación que los testigos tenían con el conductor del microbús, siendo que muchos viajaban constantemente con dicho conductor, como lo reconocieron posteriormente y eran amigos del hoy occiso (conductor del microbús).

También se considera infringido el artículo 967 del Código Judicial, el cual preceptúa que la fuerza del dictamen pericial será estimada por el juez tomando en consideración los principios científicos en que se funde, la relación con el material del hecho, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica, la competencia de los peritos, la uniformidad o disconformidad de sus opiniones y demás pruebas y otros elementos de convicción que ofrezca el proceso. En opinión del recurrente, el Segundo Tribunal Superior de Justicia no tuvo en cuenta todos estos elementos o reglas que señala la norma para la evaluación de la prueba pericial, no la analizó en su conjunto con las demás pruebas del proceso, por lo cual infringió dicha norma de manera directa por omisión.

El segundo párrafo del artículo 133 del Código Penal establece lo siguiente:

> "Artículo 133: El que por culpa cause la muerte de otro, incurrirá en prisión de 6 meses a 2 años e interdicción hasta por 2 años del ejercicio del arte profesión u oficio por medio de los cuales se ocasionó la muerte.
>
> Si del hecho resulta la muerte de varias personas la sanción será de 2 a 4 años de prisión e interdicción del ejercicio, arte, profesión u oficio por el mismo término después de cumplida la pena principal ..."

A juicio del casacionista, la norma transcrita sólo es aplicable cuando hubiere dolo o culpa de parte del agente y no en ausencia de dolo o culpa, como sucedió en el presente caso y como lo demuestran las pruebas que constan en el expediente. Al aplicar la sanción contenida en la norma recién transcrita, sin que el señor MIRANDA ORTIZ hubiere actuado con dolo o culpa, se infringió en forma directa, por indebida aplicación, el segundo inciso del citado artículo 133 del Código Penal.

El inciso inicial del artículo 30 del Código Penal dispone que nadie podrá ser declarado culpable por un hecho legalmente descrito si no lo ha realizado con dolo, salvo los casos de culpa expresamente previstos por la ley. De acuerdo con el apoderado del casacionista, a pesar de que su representado no actuó queriendo la realización del hecho, lo que descarta el dolo en el hecho, ni con culpa, en la sentencia de segunda instancia se le condenó como culpable del delito de homicidio y lesiones culposas,
infringiéndose de esta manera el primer párrafo del artículo 30 del Código Penal.

Finalmente, el casacionista señala como infringido el artículo 36 del Código Penal, el cual establece que no es culpable quien realiza un hecho no justificado para impedir un mal actual e inminente y no evitable de otro modo, a menos que aquel razonablemente se estime excesivo en relación con éste. En opinión del apoderado del casacionista, a pesar de que su representado trató de evitar hasta donde pudo la colisión y esquivó al microbús que venía en su dirección, el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial lo declaró culpable, con lo cual infringió la mencionada norma en forma directa por comisión (fs. 934-940).

V. OPINIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

Mediante Vista Fiscal N° 27 del 20 de marzo de 1995, el Procurador General de la Nación emitió su opinión, alegó la vista oral de la causa y presentó un resumen escrito de su alegato y en todas sus intervenciones solicitó a la Sala Segunda de la Corte no casar la Sentencia del 13 de enero de 1994, expedida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial (fs. 951-968, 993 a 996).

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

En primer lugar, es importante dejar establecido, como lo ha hecho la jurisprudencia de esta Sala, que el recurso de casación no es una tercera instancia, por lo cual no puede la Sala entrar en el análisis de los hechos que fueron examinados en primera y segunda instancia (Sentencias de 2 de marzo y 21 de junio de 1995). Lo que corresponde en el presente caso, es determinar si al momento de valorar las pruebas el tribunal ad-quem cometió error de derecho en la apreciación de la prueba que influyó en lo dispositivo del fallo y como consecuencia, resultó infringida la ley sustantiva.

VI.a) Motivos

Como quiera que los cuatro motivos están íntimamente relacionados, se analizarán en conjunto.

En este sentido la Sala estima que los cargos de injuricidad que se hace a la sentencia impugnada deben agruparse porque, tal como lo afirma el casacionista, las pruebas debieron valorarse conjuntamente para determinar la responsabilidad del imputado.

Los elementos probatorios allegados al expediente son la declaración indagatoria, los testimonios, una reconstrucción de los hechos en la cual participaron peritos que rindieron oportunamente sus dictámenes y el informe rendido por el Inspector del Tránsito que estuvo en el lugar de los hechos inmediatamente después de ocurrido el hecho.

Del examen de ese conjunto de pruebas se infiere que la colisión se produjo porque uno de los vehículos colisionados, o ambos, transitaban por la vía contraria y el o los conductores no pudieron conducirlos oportunamente a la mano que les correspondía, posiblemente porque la colisión se produjo en una curva, lo que pudo causar que los conductores se vieran cuando ya los vehículos estaban muy cerca el uno del otro.

El fallo impugnado plantea las dos versiones de lo ocurrido que se infieren de todas las pruebas que reposan en autos y descarta la versión del procesado, su acompañante y los peritos de la defensa porque:

> "... las personas que han rendido testimonios, hábiles para declarar cuyas versiones no se oponen al sentido común, no se ha demostrado que tengan interés en faltar a la verdad, existen sobradas razones demostrativas del porqué tenían conocimiento de los hechos, en sus respectivas deposiciones son concordantes en la inexistencia de un vehículo transitando delante del microbús conducido por el occiso y ello descarta la supuesta maniobra de rebasar otro vehículo, además, si así fuese, es evidente, elemental, que el accidente hubiese tenido otras proporciones, porque el otro microbús también debía quedar afectado con la colisión, por tanto, se descarta la imprudencia o el manejo desordenado del occiso.
>
> Ahora bien, no existen motivos para explicar la posibilidad de que el occiso estuviese conduciendo penetrando (sic) el paño del procesado, porque no conducía despacio y justifican esta versión porque había dejado pasajeros en una parada, tampoco hubo falla orgánica, de visibilidad, entonces cómo vamos a aceptar el manejo desordenado por la falta del deber de cuidado del sujeto pasivo.

> El formato de tránsito y todas las pruebas periciales concuerdan en describir el lugar del accidente como una curva, es decir, el trayecto presentaba condiciones difíciles para la pericia o la acción de evasiva, de evitar y maniobrar en tal forma que, ante la imprudencia de otro conductor, se pudiese evitar el accidente.
>
> El informe pericial de los peritos de la defensa, intenta cumplir con su misión de demostrar la tesis esbozada por el procesado, ensayando la teoría de considerar imposible la presentación de los golpes de los vehículos sin la penetración del occiso en el paño contrario, pero esa tesis no tiene asidero fáctico y jurídico, porque la colisión se produce en el lado del conductor del microbús, lo cual tiene relación con la penetración al paño contrario del procesado.
>
> La evaluación probatoria permite concluir en que el procesado conducía su vehículo en forma imprudente, esto significa sin precaución, cautela, porque conducir un camión como el conducido por el procesado el día de los hechos, con un vagón, exige extremada cautela y cuidado por el peso de la masa y sobre todo en las curvas, aún sin llevar mercancía, tiende a un desequilibrio y ocupar parte del paño contrario, por eso requiere de pericia y cuidado en la velocidad con extremada observancia de las prescripciones del reglamento de tránsito, debido a ello también actuó con falta de pericia a inobservancia de las reglamentaciones.

En la sentencia no se valora debidamente, al hacer el obligado análisis conjunto de las pruebas para evaluarlas, que la acompañante del conductor, Ana Priscilla Eccles de Ku, quien corrobora su versión, tampoco tenía interés en faltar a la verdad, ya que acababa de conocerlo minutos antes del accidente y sí era amiga del señor Domiciano Marín, conductor del otro vehículo, quien lamentablemente falleció a consecuencia de la colisión. (fojas 236 a 239).

Como los testigos que viajaban en los vehículos colisionados dan versiones contradictorias, ya que afirman que la colisión se produjo en el paño de la carretera en la mano en que cada conductor debía conducir su vehículo, porque el otro transitaba por el paño de la carretera que no le correspondía, deben analizarse todas las pruebas testimoniales en relación con el informe del tránsito y los dictámenes de los peritos que participaron en la diligencia de reconstrucción de los hechos.

El dictamen de los peritos de la defensa corrobora la versión de la testigo que viajaba en el camión en compañía del imputado, y el informe de los peritos del Ministerio Público corrobora la versión de los testigos que viajaban en el autobús. Sin embargo, el informe de los peritos de la defensa y del Ministerio Público tienen algo en común: estimaron que no debían tomar en cuenta la declaración del testigo presencial Modesto Atencio González, quien les dió su versión de los hechos durante la diligencia de reconstrucción de los mismos.

Por último, deben valorarse las declaraciones de los testigos que estuvieron en el lugar de los hechos el día de autos. La declaración de Modesto Atencio González debe descartarse porque, como ya se ha señalado, los peritos que asistieron a la reconstrucción de los hechos constataron in situ que su versión no era fidedigna. El testigo Carlos Vega Martínez, quien llegó al lugar del accidente minutos después de lo ocurrido, afirma que:

> "cuando el miembro de tránsito estaba confeccionando el parte yo vi que él puso una cruz en la vía donde iba el camión indicando el punto de impacto, en eso le dije que yo creía que ese no era el punto de impacto porque se veía las huellas de frenos del camión en el paño contrario al igual que la marca del rin y que a lo mejor el conductor del camión se había quedado dormido y él me respondió que no podía ser porque él venía acompañado y de allí no me prestó mas atención y lo confeccionó con los datos que él tenía; yo pienso que el señor que hizo el parte no se percató bien de lo que le dije ya que la calle estaba pisada por todos lados, de lodo".

Este testigo afirma que la colisión no se produjo en el lugar que indicó el Inspector de Tránsito, sin embargo afirma que él piensa que el Inspector "no se percató bien de lo que le dije ya que la calle estaba pisada por todos lados, de lodo". Esta declaración tampoco esclarece la situación porque el testigo vio las huellas de la colisión en la vía cuando ésta estaba pisada y enlodada.

Por último, tenemos el informe que rindió el Agente de Tránsito, Wilberto A. Peralta Rodríguez, quien se basó en las evidencias, es decir: huellas y despojos que dejaron los vehículos en el momento del impacto y la trayectoria que llevaba cada uno, más las versiones del señor MIRANDA y de la joven que lo acompañaba, señora PRISCILA ECCLES, según su propia versión (foja 23).

A juicio de la Sala con las pruebas en autos no ha podido establecerse con claridad en qué lugar o paño de la vía se produjo la colisión y ese es el hecho determinante para establecer cuál de los dos conductores de los vehículos colisionados fue el responsable de la misma.

Luego del examen conjunto de los elementos probatorios, queda seriamente en duda que el sentenciado sea responsable del delito de homicidio y lesiones por imprudencia, porque no ha podido establecerse con certeza en qué paño de la vía se produjo la colisión.

La Sala es del criterio que esa duda razonable debe favorecer al imputado, en cumplimiento del principio de presunción de inocencia consagrado en nuestro ordenamiento penal.

VI.b) Normas Legales Infringidas

El casacionista alega que la sentencia condenatoria impugnada viola los artículos 2144, 904, 905, 906 y 967 del Código Judicial y los artículos 30, 133 (segundo párrafo) y 36 del Código Penal.

La Sala estima que por la íntima relación que hay entre todas las normas procesales citadas y las dos primeras normas sustantivas que el casacionista invoca como violadas por la sentencia, los cargos de ilegalidad también deben examinarse conjuntamente.

A juicio de la Sala, al examinar las pruebas testimoniales no se hizo una valoración conjunta de todas las declaraciones allegadas al proceso. Esto es así porque los testigos dieron dos versiones de los hechos y ante esta realidad se imponía, de acuerdo con las reglas de la lógica y la experiencia, tratar de corroborar alguna de esas versiones, si eso era posible, con base en los otros elementos probatorios, tal como ordena apreciar el artículo 904 del Código Judicial, según las reglas de la sana crítica, "las circunstancias y motivos que corroboren o disminuyan la fuerza de las declaraciones". Al apreciar la prueba testimonial conforme estas reglas, seguramente habría surgido en el ánimo del Tribunal ad-quem una duda razonable acerca de la responsabilidad penal que se imputa al procesado.

Si bien la mayoría de los ocupantes del microbús afirman que el conductor del camión lo conducía en el paño contrario, y se ha demostrado que son personas hábiles para declarar, que su versión no se opone al sentido común, que no se ha demostrado su interés en faltar la verdad y además que tuvieron conocimiento de los hechos, al apreciar la declaración de la testigo que viajaba en compañía del conductor del camión no se tomó en cuenta que también era testigo hábil, que su versión no se opone al sentido común, que no se ha probado su interés en faltar a la verdad, ya que acababa de conocer al conductor del microbús que falleció en la colisión, y además que tuvo pleno conocimiento de los hechos.

De acuerdo con Couture, "las reglas de la sana crítica, son, ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano. En ellas interfieren las reglas de la lógica con las reglas de la experiencia del Juez. Unas y otras contribuyen, de igual manera, a que el magistrado pueda analizar la prueba (ya sea de testigos, de peritos, de inspección judicial, de confesión en los casos en que no es lisa y llana) con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas" (COUTURE, citado por Fábrega Ponce, Jorge. Teoría General de la Prueba.

Edit. Texto Limitada. San José. 1982, pág. 140).

Tampoco apreció el Tribunal ad-quem las pruebas testimoniales rendidas por los ocupantes de los automóviles accidentados, relacionándolas con las otras declaraciones testimoniales y en especial la del agente de tránsito Wilberto Antonio Peralta Rodríguez cuyo informe es corroborado por los ocupantes del camión.

Asimismo el Tribunal ad-quem, al apreciar la prueba testimonial no la relacionó con todos los informes rendidos por los peritos, uno de los cuales corrobora la versión de los ocupantes de uno de los autos y otro corrobora la otra versión y que en dos de estos informes no se toma en cuenta, se desestima, la declaración del testigo presencial Modesto Atencio González, a quien interrogaron los peritos en la diligencia de reconstrucción de los hechos, y además presentaron fotografías demostrativas de que la declaración del mencionado testigo Atencio González no es fidedigna (Cfr. documento entre las 727 y 728).

El artículo 906 preceptúa que esa valoración conjunta de las pruebas es obligante en casos como el que nos ocupa, en que las versiones de los hechos de dos grupos de testigos son contradictorias entre sí y el artículo 967 ordena estimar la fuerza probatoria de los dictámenes periciales tomando en consideración la uniformidad y disconformidad de sus opiniones, apreciándolos en concordancia con las demás pruebas y otros elementos de convicción que ofrezca el proceso.

Al apreciar las pruebas en conjunto, lo que no hizo el tribunal ad-quem, resalta el hecho de que los testigos que viajaban en los automóviles accidentados dan dos versiones diferentes de los hechos, de que los distintos grupos de peritos dan también dos versiones diferentes de los hechos y que cada uno de estos corrobora una de las versiones de los dos grupos de testigos mencionados. Además, como la declaración del testigo presencial Atencio González es desestimada por los 2 grupos de peritos que interrogaron a este testigo en la diligencia de reconstrucción de los hechos, nos queda el informe del Agente Policial del Tránsito Peralta Rodríguez, quien estuvo en el lugar de los hechos, inmediatamente después de ocurrido el siniestro, permaneció allí por 6 horas y fija como punto de impacto en la carretera el paño por el cual circulaba el conductor del camión por su derecha y asegura que para hacer este señalamiento tomó en cuenta las huellas y despojos dejados por los carros accidentados, además de las versiones del conductor Miranda y la señora Eccles de Ku, quien viajaba con él en el camión accidentado; y por último, la declaración del testigo Carlos Vega Martínez, quien llegó al lugar del accidente unos minutos después de ocurrido y afirma que probablemente el inspector de tránsito "no se percato bien de lo que le dije (refiriéndose al lugar en que se produjo el impacto entre los automóviles) ya que la calle estaba pisada por todos lados, de lodo" (fojas 179 y 180)

Por lo expuesto, a juicio de la Sala, mediante el fallo impugnado se violó directamente, por omisión, las normas adjetivas invocadas (artículos 2144, 904, 905, 906 y 967 del Código), infracciones que implican una violación directa por comisión de los artículos 133, párrafo segundo y 30 de la ley sustantiva, porque en autos no existen elementos probatorios que esclarezcan fehacientemente el carril de la carretera en que se produjo la colisión, elemento objetivo que indicaría cuál de los dos conductores transitaba por la vía contraria a la que le correspondía y en consecuencia es el responsable de la colisión y del delito de homicidio y lesiones por imprudencia que se imputa al procesado.

En cuanto al artículo 36 del Código Penal, que también se estima violado por la sentencia recurrida, a juicio de la Sala no se ha producido la infracción alegada. Esta norma regula el "estado de necesidad inculpable", causa de inculpabilidad cuya existencia no se ha probado en el caso en estudio.

Siendo que la causal invocada y la violación de los preceptos legales citados han sido demostradas, la sentencia del Tribunal Superior incurre en el vicio de error de derecho en la apreciación de la prueba y debe ser casada.

Por las anteriores consideraciones, la Corte Suprema, Sala de lo Penal,

administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA la sentencia condenatoria recurrida, dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, del Primer Distrito Judicial, el 13 de enero de 1995, mediante la cual se revocó la sentencia absolutoria S-84 dictada el 13 de enero de 1994 por el Juzgado Primero de Circuito de lo Penal del Tercer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá y en su defecto mantiene la de primera instancia.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA EMÉRITA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN EN EL PROCESO SEGUIDO CONTRA MARCO ANTONIO AYALA POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Vencido el término de 8 días establecido en el artículo 2443 del Código Judicial, se pasa a decidir sobre la admisibilidad del recurso de casación en el fondo interpuesto por el licenciado ROUMMEL G. SALERNO, en su condición de abogado defensor, contra la sentencia de 7 de febrero de 1995 proferida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial.

El recurso ha sido propuesto por persona hábil, en tiempo oportuno y la sentencia contra la que se promueve es de aquellas susceptibles de impugnación, ya que se trata de delito contra la Salud Pública (Venta Ilícita de Drogas), cuya pena de prisión es superior a dos años.

Al analizar el escrito de casación con el objeto de determinar si el mismo reúne los requisitos legales exigidos para poder ser admitido, observa la Sala que el recurrente ha cometido algunos errores en su formalización.

Así se aprecia que los motivos deben ser corregidos en el sentido de que los mismos contengan verdaderos cargos de injuridicidad atribuíbles a la sentencia impugnada y no limitarse solamente a la enunciación de hechos que obran en el expediente, a señalar la existencia de pruebas que según su parecer no fueron consideradas y los últimos dos motivos los fundamenta con razonamientos personales. Es decir, que el recurrente no relaciona ni enfoca los motivos con la causal invocada, ni formula cargos de injuridicidad con la sentencia impugnada a través del recurso que propone, motivo por el cual el casacionista debe corregir estos errores.

El defecto puntualizado debe ser subsanado por el recurrente, motivo por el cual se le debe conceder el término de cinco (5) días para que el interesado realice las correcciones del caso, conforme a lo establecido en el artículo 2444 del Código Judicial.

En consecuencia, el suscrito Magistrado Sustanciador, en representación de la SALA PENAL de la Corte Suprema de Justicia, ORDENA que permanezca por el término de cinco (5) días en Secretaría, a efectos de que el casacionista realice las correcciones de los defectos puntualizados en el escrito mediante el cual se interpuso el recurso de casación en el fondo contra la sentencia de segunda instancia dictada el 7 de febrero de 1995 por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA

Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO A JOSÉ ARCELIO BERNAL BATISTA Y ALCIBIADES APARICIO BONILLA, SINDICADOS POR EL DELITO DE HURTO EN PERJUICIO DE TRANSPORTES CENTRALES S. A. O COMPAÑÍA NESTLÉ PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado Javier González interpuso recurso de casación en el fondo contra sentencia calendada 26 de octubre de 1995, proferida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, mediante la cual se confirmó sentencia condenatoria emitida por el Juzgado Segundo del Circuito de Los Santos, en la que se condena a José Arcelio Bernal Batista y Alcibiades Aparicio Bonilla (a) "Tica", a las penas de 30 y 24 meses de prisión, respectivamente, como reos del delito de hurto cometido en perjuicio de Transportes Centrales S. A. o Compañía Nestlé Panamá S. A.

El examen del libelo de casación, a los efectos de decidir sobre su admisibilidad, permite advertir que el requisito concerniente a la historia concisa del caso se presenta de manera deficiente. Aquí el recurrente, en lugar de exponer en forma clara la situación jurídica ocasionada por la resolución impugnada, realiza un relato exiguo de los hechos, lo que dificulta a la Sala conocer en qué consiste la infracción de la ley que se alega.

De otra parte, se observa que la causal invocada por el casacionista, es decir "Error de derecho en la apreciación de la prueba" (f. 1,203), viene fundamentada en un solo motivo, en el que se expone que el Tribunal Superior "no apreció debidamente la negatoria (sic) de la comisión del ilícito, de mi defendido, al igual que los testimonios que constan en el expediente, en donde se comprueba que el imputado no se encontraba en el lugar de los hechos y que no cometió ningún delito" (f. 1,203). Nuestra jurisprudencia penal tiene sentado que cuando se invoca la citada causal, el recurrente debe precisar el elemento de convicción que, a su juicio, ha sido mal apreciado y el folio donde aparece, exigencia que desatiende este único motivo; de donde resulta que el vicio o cargo de injuridicidad no aparezca adecuadamente formulado.

Otro defecto del cual adolece el libelo que formaliza el recurso, consiste en que el recurrente sostiene que el artículo 184 del Código Penal se "aplicó indebidamente violando de esta manera la norma citada de manera directa por comisión" (f. 1,204). Tal como se aprecia, se utilizan dos conceptos de infracción (indebida aplicación y violación directa por comisión) que son totalmente distintos y opuestos, circunstancia que impide a la Corte acceder a la pretensión de un examen y valoración de la situación procesal de la causa.

Por lo antes expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso de casación en el fondo propuesto por el licenciado Javier González, abogado defensor de José Arcelio Bernal, contra sentencia del 26 de octubre de 1995, proferida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES (fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL INCIDENTE DE EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA INTERPUESTO

POR LA FIRMA FORENSE BERRÍOS & BERRÍOS, APODERADOS DE BANQUE ANVAL, S. A., EN EL SUMARIO SEGUIDO A ESTE ENTE FINANCIERO POR DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA EN PERJUICIO DE YAKIMA INTERNACIONAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Durante el período de lectura del proyecto de resolución por parte de los Magistrados que conforman la Sala, que resuelve el recurso de casación interpuesto por el Dr. Julio Berríos, representante legal del Banco denominado **BANQUE ANVAL, S. A.** contra el auto del 26 de enero de 1993, proferido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia que, confirmó el auto del 26 de marzo de 1992 dictado por el Juez Cuarto de Circuito de Panamá, Ramo Penal, que negó el incidente de excepción de cosa juzgada interpuesto por dicha entidad, dentro del proceso promovido en su contra por la empresa **YAKIMA INTERNACIONAL, S. A.**, por la comisión de delito de apropiación indebida, el mencionado letrado presentó un escrito recibido en la Secretaría de esta Sala el día 9 de febrero, de advertencia de prescripción de la acción penal, con fundamento en lo normado en el numeral 3° del artículo 93 y el artículo 100, ambos del Código Penal, en el que aduce que desde la fecha de cancelación de los certificados de depósito cuestionados hasta el presente, han transcurrido más de trece años.

Con fundamento en el numeral 3 del artículo 2274 del Código Judicial, la Sala resolverá el incidente mencionado, por ser de previo y especial pronunciamiento; en cuanto a la oposición al concepto que sobre el mismo, pronunció el señor Procurador General de la Nación, considera la Corte que el mismo no es procedente, porque el artículo 2277 del Código Adjetivo señala que

> "ARTÍCULO 2276. Del escrito del incidente se dará traslado a la contraparte, entregándole copia del mismo por un término de tres días. Vencido dicho término el Juez resolverá lo procedente."

Se desprende de la norma transcrita que después que se le da traslado al Ministerio Público para que presente su opinión, vencido el término de tres días, la Sala tiene que resolver el incidente en base al incidente y a la opinión del señor Procurador; por lo tanto, no cabe oposición del incidentista -quien no es otra parte afectada en el proceso-, sino el dictamen de esta Corporación de Justicia

Adentrándonos en materia del incidente, observa la Corte que se opone el representante del Ministerio Público a la petición que nos ocupa, por varias razones:

Que no se puede establecer la prescripción de la acción penal en base a que hayan transcurrido más de trece (13) años desde la fecha de cancelación de los certificados de depósito, basado la aplicación del numeral 3 del artículo 93 del Código Penal, que estima en 6 años el término de prescripción de la acción penal para el presente caso.

Ello es así, por cuanto el incidentista se basa en la resolución de 21 de febrero de 1989 -consta a foja 3 del cuaderno- emitida por el Juzgado Octavo de Circuito, Ramo Penal, que declaró la prescripción de la acción penal, y ordenó el archivo del expediente, seguido a **BANQUE ANVAL, S. A.** por apropiación indebida de los depósitos de la cuenta cifrada N° 271001.

Por otro lado, considera el señor Procurador que "..., los certificados de depósitos a que se refiere en su solicitud no constan como prueba en este cuaderno penal y como veremos, aparentemente, guardan relación con otro proceso penal."

Además, considera el Funcionario Colaborador que de los diversos elementos probatorios inmersos en el expediente, emergen un número plural de resoluciones judiciales, vistas fiscales y escritos de las partes en el proceso, que señalan

que estamos frente a un proceso nuevo de acusación por supuesta apropiación indebida de la cuenta N° 271002, que inició **YAKIMA INTERNACIONAL** contra **BANQUE ANVAL.**

En otro sentido, señala que "Por su parte, el licenciado **Julio Alemán,** representante legal de **YAKIMA INTERNACIONAL S. A.,** a foja 10 que "luego de que el **BANQUE ANVAL, S. A.** dejó de honrar el pago requerido en nota de 12 de diciembre de 1990 y de haberse vencido el término del previo aviso legal, no sobre la base de presuntos malos manejos con relación a la misma cuenta corriente cifrada 271002. 'Más adelante, aparece a foja 75 de este cuaderno de incidente escrito del licenciado **Alemán** en el cual se opone al recurso de casación presentado expresando sobre este particular: '... la apropiación indebida cometida por el **BANQUE ANVAL, S. A.** de la cuenta número 271002, hecho punible que cometió después del 17 de diciembre de 1990, al no hacer el reintegro del capital más los intereses ..."

Finalmente, consideró el Ministerio Público que la verdad procesal que emerge de los elementos probatorios inmersos en el proceso, determinan que se trata de un caso diferente al que declaró prescrito el Juzgado Octavo de Circuito de lo Penal, mediante la resolución del 21 de febrero de 1989.

Este criterio es reforzado por el Funcionario Opinador, al manifestar -en relación a la supuesta apropiación indebida- que el Banco no atendió el reintegro de dicha cuenta, solicitado en diciembre de 1990; ello indica que ha trascurrido un plazo distinto al alegado por el incidentista de la prescripción a la acción penal por el delito de apropiación indebida.

En conclusión, el cuaderno revela que no ha transcurrido el término legal invocado por el actor.

Expuestos los principales elementos del presente incidente, se avoca la Sala a emitir su criterio, no sin antes exponer las siguientes consideraciones.

El recurrente considera como una probanza procesal que demuestra la prescripción de la acción penal, la fecha en que fueron cancelados los certificados de garantía de depósito, pues han transcurrido más de trece años desde que ello ocurrió; pero -tal como señala el señor Procurador- no aparece constancia alguna de ello en el cuaderno. Por ello, mal puede fundamentarse el actor en una prueba que no está en el expediente.

La acusación particular interpuesta por el Licdo. Alemán se basa en la supuesta apropiación indebida efectuada por el **BANQUE ANVAL, S. A.,** al no reintegrar el capital y los intereses de la cuenta N° 271002, lo que sucedió el 17 de diciembre, cuando se le hizo el requerimiento formal, tal como consta en el escrito de oposición del recurso de casación dentro del que se ventila el presente incidente -f. 74 del cuaderno-.

Comparte esta Colegiatura el criterio de los Juzgadores de ambas instancias -que negaron el incidente de prescripción de la acción penal-, toda vez que el hecho que originó la querella por el supuesto delito de apropiación indebida -interpuesta el 8 de febrero de 1991- que nos ocupa, fue la omisión del pago del capital más los intereses que éste le debía hacer a **YAKIMA INTERNACIONAL, S. A.,** que le correspondían por la consabida cuenta N° 271002, al mes de diciembre de 1990; es decir, se trata de un hecho nuevo, originador de un delito, que se refiere al pago del capital e intereses de la cuenta, aunque la misma tenga antecedentes atribuibles a **BANQUE ANVAL.**

Por ello, es irrelevante que la cancelación de los certificados de depósitos haya ocurrido hace más de trece años, pues el hecho expuesto tuvo su génesis de manera independiente a dichas cancelaciones, y de comprobarse su comisión, no le cabría la prescripción de seis años, correspondiente al delito en estudio.

Decidido este aspecto del negocio, se dispone esta Superioridad a resolver el recurso de casación, aspecto principal del caso.

ANTECEDENTES

La historia concisa del caso revela que el Juez Octavo de Circuito de Panamá, Ramo Penal, emitió el auto del 21 de febrero de 1989, que declaró prescrita la acción penal en el sumario seguido por la sociedad **YAKIMA INTERNACIONAL, S. A.** contra **BANQUE ANVAL, S. A.** y sus ejecutivos, con relación al traspaso de la cuenta cifrada N° 271001 a la N° 271002, en el que se da cuenta que los hechos investigados se suscitaron de enero de 1979 a agosto de 1980, siendo que habían transcurrido 8 años, 9 meses y 19 días aproximadamente.

Por su parte, **BANQUE ANVAL** promovió incidente de excepción de cosa juzgada, el cual negó la Juez de conocimiento mediante el auto de 26 de marzo de 1992, por estimar que se trataba de dos cuentas diferentes y por tanto dos hechos diferentes.

Dicha decisión fue apelada, y el Segundo Tribunal Superior de Justicia, mediante auto de 26 de enero de 1993, confirmó la decisión de la Juez Cuarta de Circuito, Ramo Penal, por considerar que se trataba de dos cuentas distintas y, que por conveniencia, sugirió "desdoblar la investigación, por tratarse de otra situación surgida con posterioridad".

CAUSAL Y MOTIVOS DEL RECURSO

El recurso que nos ocupa está fundamentado en una sola causal, la cual es: error de derecho en la apreciación de la prueba, la cual está sustentada en cuatro motivos, que se sintetizan de la siguiente manera:

En cuanto al primer motivo, señala el casacionista que el Tribunal de Alzada valoró erróneamente el auto de 26 de marzo de 1992 -dictado por el Juez Octavo de Circuito de Panamá del Ramo Penal- que negó el incidente de excepción de cosa juzgada, toda vez que no se puede pretender en la valoración de una decisión judicial "desdoblar" los hechos investigados y asumir que se trata de nuevos hechos distintos a los investigados y declarados prescritos en decisión ejecutoriada.

El segundo motivo estriba en que el auto impugnado falla al valorar la decisión del Juez Octavo de Circuito de lo Penal, porque las decisiones ejecutoriadas son indivisibles y no se pueden desdoblar los hechos para ordenar nuevas investigaciones penales, pues viola el principio de "autoridad de cosa juzgada".

El tercer motivo se funda en que el Tribunal de Alzada, al valorar erróneamente la decisión ejecutoriada del Juez Octavo de Circuito Penal, violó el principio de autoridad de cosa juzgada, con lo que "autoriza arbitrariamente una nueva investigación penal sobre hechos objeto de una encuesta judicial archivada por estar prescrita la acción penal."

El cuarto motivo se refiere a que el auto proferido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, al valorar mal la decisión del inferior, incurrió en error de derecho en la valoración valoración de la citada cuenta documental pública (cuenta bancaria), lo que influyó de modo sustancial en la parte resolutiva del fallo.

NORMAS INFRINGIDAS Y SU CONCEPTO

Estima el casacionista que el auto recurrido viola los artículos 821, 823, 677, 679, 683, 1014, 1971 del Código Judicial, y los artículos 2 y 194 del Código Penal.

Según el impugnante, el auto del Segundo Tribunal Superior de Justicia violó las normas citadas en base a la única causal aducida, y al mismo argumento.

OPOSICIÓN DEL DR. JULIO ALEMÁN

En tiempo oportuno el representante de **YAKIMA INTERNACIONAL, S. A.**, Dr.

Julio Alemán, presentó escrito de oposición al recurso que nos ocupa, dirigido al Segundo Tribunal Superior de Justicia, en el que solicita a dicha Colegiatura negar la revisión del recurso, de conformidad con el artículo 2441 del Código Judicial, y sancionar a la firma amparista por infringir el artículo 462 del Código Judicial -que le otorga facultades al juzgador para sancionar a la parte que actúe con falta de lealtad y probidad durante el proceso y faculta al juez para rechazar solicitudes o actos que impliquen dilación manifiesta dentro del proceso-, toda vez que el auto recurrido no es susceptible del recurso de casación; la petición se fundamenta en los siguientes motivos.

Considera el opositor, que el auto del 26 de enero de 1993, emitido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia "no se encuentra en ninguna de las categorías de autos descrito en los seis numerales del artículo 2435 del Código Judicial-referente a los autos susceptibles del recurso-, y cita específicamente el numeral 2, que reza así:

> "2. Cuando admitan las cuestiones de cosa juzgada, ..., y dados los hechos tenidos por probados, se haya cometido error de derecho, al declararlos comprendidos en una sentencia firme anterior ..."

No cabe el recurso en este caso, porque el mismo procede "cuando la resolución admita las cuestiones de cosa juzgada y no cuando las niega," que fue lo que hizo el Segundo Tribunal Superior de Justicia en el fallo objetado; por lo tanto, no hizo extensivo el fallo del 21 de febrero de 1989 al ilícito de apropiación indebida, cometido el 17 de diciembre de 1990, cuando el **BANQUE ANVAL, S. A.** al no reintegrar el capital más los intereses de la cuenta N° 271002, luego de su requerimiento formal.

En ese sentido, considera el Dr. Alemán que la recién citada resolución se refiere al movimiento de la cuenta corriente desde que se abrió en enero de 1979, hasta agosto de 1980, refiriéndose exclusivamente a la cuenta N° 271001, manifestando que los hechos se verificaron en esa época, concluyendo "que a la fecha de la ejecución del supuesto ilícito han transcurrido ocho (8) años nueve (9) meses y diecinueve (19) días aproximadamente".

Explica el letrado que la apropiación indebida de la cuenta N° 271001 se verificó desde la apertura de la misma, incluyendo sus movimientos, desde que se abrió, hasta el 27 de agosto de 1980, fecha en que fue transferida a la cuenta N° 271002.

Cuando se hace un depósito de cuenta corriente a un Banco, dicho fondo -señala el Dr. Alemán- pertenece al Banco, por lo que este no puede apropiarse indebidamente de esa cuenta corriente, excepto si al requerirsele su reintegro legalmente se negare a hacerlo -todo ello en virtud del artículo 979 del Código de Comercio-, lo que es desconocido por el fallo del 21 de febrero de 1989,

Aunado a lo anterior, señala el Dr. Alemán que las cuentas inactivas obligan al Banco depositante a dar cuenta de las mismas a la Comisión Bancaria a los cinco años de inactividad, para que luego de investigar, el Banco envíe el dinero al Tesoro Nacional, si la Comisión Bancaria se lo ordena, según los artículos 102 y 103 del Decreto de Gabinete N° 238 de 1970.

Por lo tanto, se da inicio a la prescripción adquisitiva de la misma, en favor del Tesoro Nacional, y no del Banco depositario.

Por otro lado, prescribe la acción penal a partir de la comisión de un supuesto ilícito -según estableció el Juez Octavo de Circuito Penal mediante la resolución del 21 de febrero de 1989-.

Lo cierto es que hace ocho (8) años, nueve (9) meses y diecinueve (19) días, cuando se cometió el "supuesto ilícito" -a juicio del litigante- lo que se dio fue la apertura de la cuenta, la cual fue transferida a la cuenta N° 271002 -el 27 de agosto de 1980- que pertenecía a **YAKIMA INTERNACIONAL, S. A.**

Finaliza diciendo el opositor, que si su representada después del 17 de

diciembre de 1990 -cuando en realidad se cometió la apropiación indebida del capital e intereses requeridos de la cuenta N° 271002- hubiera dejado transcurrir dos meses -término máximo de interposición de la querella-, entonces si se podría hablar de prescripción de la acción penal, pero como ello no sucedió, es evidente la mala fe del recurrente, por lo que solicita la sanción para el actor.

OPINIÓN DEL PROCURADOR

Mediante la Vista N° 73 del 14 de noviembre de 1994, el señor Procurador General de la Nación emitió su opinión sobre el presente negocio, el cual se fundamenta en los siguientes términos.

Como referencia al esfuerzo analítico a realizar, definió el Funcionario Colaborador el error de derecho en la apreciación de la prueba, para analizar las normas supuestamente violadas.

Refiriéndose al artículo 821, numeral 3 del Código Judicial, coincide el funcionario en cuestión con el recurrente en el sentido de que el auto del 21 de febrero de 1989 es un documento público, pero considera que el Segundo Tribunal Superior valoró adecuadamente la mencionada resolución, toda vez que aunque la misma reúne los requisitos de un documento público, "ello no significa que constituya una prueba para aducir la excepción de cosa juzgada", toda vez que la misma se refiere a la cuenta N° 271001 "que no es objeto de discusión en la presente causa penal y, en consecuencia, no infringe el numeral 3 del artículo 821 de Código Judicial."

En lo atinente al artículo 823 de la misma excerta, afirma el Jefe del Ministerio Público que el recurrente no logra establecer el vicio de injuridicidad en el que incurre el auto impugnado, toda vez que el impugnante utiliza el mismo argumento para tratar de probar la violación del artículo 821, pero en éste, la violación es por omisión, por lo que no entró en mayores consideraciones, por lo que la argumentación se constituyó en meras alegaciones basadas en que el ad-quem valoró erróneamente la decisión del 21 de febrero de 1989.

No entiende el señor Procurador cómo el auto confirmatorio del ad-quem violenta el artículo 823 del Código Adjetivo, porque dicha Colegiatura consideró el documento público, por lo que no se produjo el error probatorio que se le atribuye al auto impugnando y por tanto, no se puede conceder el cargo aducido.

Pasando al artículo 677 del mismo cuerpo normativo-referente al concepto y oportunidad legal que tiene el demandado para aducir y hacer valer sus excepciones-, afirma el responsable de la Vista que nos ocupa que "el recurrente al motivar la explicación del concepto de su infracción, hace referencia al artículo 683 del mismo cuerpo legal, para explicar la violación del artículo 677, por lo que se verifica una especie de incongruencia, y no debe dicha entidad entrar a debatir la violación o no, de dicha norma.

Ocupándose de los artículos 679 y 683 del mismo Código, el censor arguye la misma motivación para ambas normas, consistente en que el auto impugnado las viola porque niega la excepción de cosa juzgada, al no valorar de manera debida la resolución del 21 de febrero de 1989, emitida por el Juez Octavo de Circuito de Panamá, Ramo Penal.

Se infiere que al referirse el actor a la supuesta violación de las normas bajo examen, emite su opinión personal que lo lleva a concluir que el Segundo Tribunal Superior de Justicia no reconoció la excepción de cosa juzgada, pero no hizo el análisis correspondiente para explicar la razón por la que las normas denunciadas apoyan la causal alegada -error de derecho en la apreciación de la prueba-, por lo que no se violentó ninguna de las dos normas.

En cuanto a la violación del artículo 1014, también del Código Judicial -referente al principio de cosa juzgada-, manifiesta el Funcionario Investigador que, para determinar si en realidad se verifica el principio de cosa juzgada, debe examinarse la prueba documental presentada por el demandante, que es la consabida resolución del 21 de febrero de 1989 emitida por el Juzgado Octavo de

Circuito, Ramo Penal, que se refiere a la cuenta corriente cifrada N° 271001, así como que los depósitos en la misma, se efectuaron del 24 de noviembre de 1979 al 5 de noviembre de 1981; entonces, dicha resolución -que es documento público- no se refiere a la cuenta cifrada N° 271002, y que es objeto del nuevo proceso por lo que, al no darse la identidad de objeto, no se incumple con el debido proceso.

Finalmente, en cuanto a los artículos 2 y 194 del Código Penal, considera el Licdo. José Antonio Sossa que ni la historia concisa del caso, ni los motivos que fundamentan la causal, ni las disposiciones legales violadas y el concepto en que lo han sido, demuestran que la causal está probada.

No se comprueba la violación del principio de cosa juzgada, por lo que la resolución impugnada es legal al no decretar la excepción de cosa juzgada, pues el auto del 21 de febrero de 1989 se relaciona a la cuenta N° 271001 y no a la 271002, ya que no se cumple con la triple identidad de las partes, causa y objeto.

CRITERIO DE LA CORTE

Vertidos los elementos más importantes del presente negocio, la Sala se dispone a emitir su decisión, no sin antes exponer las siguientes consideraciones.

El recurso en comento está fundamentado en una sola causal, la cual es el error de derecho en la apreciación de la prueba, la que está sustentada en cuatro motivos, que se sintetizan de la siguiente manera.

El primer motivo, estriba en que el Tribunal de Alzada valoró erróneamente el auto del 26 de marzo de 1992 -dictado por la Juez Cuarta de Circuito de lo Penal- que negó el incidente de excepción de cosa juzgada, todas vez que no se puede pretender en la valoración de una decisión judicial "desdoblar" los hechos investigados y asumir que se trata de nuevos hechos distintos a los investigados y declarados prescritos en decisión ejecutoriada.

El segundo motivo estriba en que el auto impugnado falla al valorar la decisión del a-quo, porque las decisiones ejecutoriadas son indivisibles y no se pueden desdoblar los hechos para ordenar nuevas investigaciones penales, pues viola el principio de "autoridad de cosa juzgada".

El tercer motivo se funda en que el Tribunal de Alzada, al valorar erróneamente la decisión ejecutoriada del Juez Octavo de Circuito Penal, violó el principio de autoridad de cosa juzgada, con lo que "autoriza arbitrariamente una nueva investigación penal sobre hechos objeto de una encuesta judicial archivada por estar prescrita la acción penal.

El cuarto motivo se refiere a que el auto impugnado, al valorar mal la decisión del inferior, incurrió en error de derecho en la valoración de la prueba documental pública (cuenta bancaria), lo que influyó de modo sustancial en la parte resolutiva del fallo.

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 2450 del Código Judicial, la Sala procederá a examinar los motivos que fundamentan la causal.

Observa esta Corporación de Justicia que los dos primeros motivos estriban en la mala valoración del auto emitido el 26 de marzo de 1992 por la Juez Cuarta de Circuito, Ramo Penal -que negó el incidente de excepción de cosa juzgada- porque, por un lado, no se pueden "desdoblar" los hechos investigados en dicha resolución, es decir, no se puede iniciar otra investigación sobre los mismos hechos -en el primer motivo-, y por el otro -segundo motivo- las decisiones que toman los Jueces son indivisibles, fundándose -al igual que en el hecho anterior- no se pueden desdoblar los mismos hechos para iniciar una segunda investigación, por violarse el principio de autoridad de cosa juzgada.

Yerra el recurrente a nuestro parecer, pues está demostrado que los hechos que motivaron la segunda acusación por el delito de apropiación indebida, son

distintos de los que motivaron la primera investigación, pese a que se trata de las mismas partes y no así de la misma cuenta bancaria.

La primera encuesta fue originada por el traslado de la cuenta cifrada N° 271001 a la N° 271002, hecho ocurrido el 27 de agosto de 1980.

En este sentido, en el consabido auto del 21 de febrero de 1989 -f. 3 a 5- no aparece -y no puede aparecer- como hecho sustentador de la prescripción de la acción, el no pago por parte de **BANQUE ANVAL, S. A.** de los intereses y capital de la cuenta N° 271002, que ocurrió el 17 de diciembre de 1990 a requerimiento de **YAKIMA INTERNACIONAL, S. A.**, porque el auto fue expedido 22 meses antes; solo aparece en la transcripción que hace el auto de la Vista Fiscal, una referencia del traspaso de los fondos de una cuenta N° 271001 a la N° 271002, pero esa no es la base de la acción interpuesta en 1991.

Por consiguiente, el hecho originador del supuesto delito de apropiación indebida es completamente independiente de lo ocurrido en 1980; por tanto, no se "desdoblan" los hechos ocurridos con el cambio de fondos de la cuenta N° 271001 a la N° 271002 en 1980, así es que no tiene fundamento el primer motivo.

En cuanto al segundo motivo, por las mismas razones, no se viola la "indivisibilidad" del auto de 21 de febrero de 1989, ya que -como señala el Procurador General de la Nación- no se verifica la triple identidad de partes, causa y objeto.

Se trata de un proceso distinto, y el fallo en comento, que tiene otra causa de pedir, corresponde a otra situación, motivo por el que el auto que nos ocupa se mantiene indivisible y surte todos los efectos jurídicos para los hechos que lo conformaron.

En cuanto al tercer motivo, la resolución recurrida -al parecer del casacionista- viola el principio de "autoridad de cosa juzgada", al valorar equivocadamente el auto recurrido, porque autorizó "arbitrariamente" una nueva investigación basada en hechos de un proceso archivado por estar prescrita la acción penal.

A este motivo le cabe la misma crítica que a los dos anteriores, pues son precisamente los hechos que nos ocupan, distintos a los que fundamentaron el auto de 21 de febrero de 1989; por consiguiente el auto recurrido no ha sido valorado inexactamente.

Considera esta Superioridad que el cuarto motivo alegado para fundar la causal de error de derecho en la apreciación de la prueba, al valorar mal el fallo del Segundo Tribunal Superior de Justicia el auto emitido por el Juez Octavo de Circuito Penal del 21 de febrero de 1989, incurrió en error de derecho en la valoración de la prueba documental pública, es decir, la cuenta bancaria.

No prospera el argumento del impugnante, toda vez que no se verifica la mala valoración que aduce el Dr. Berríos, porque el auto del 21 de febrero de 1989 se refirió a la cuenta cifrada N° 271001, y no la N° 271002; el fallo impugnado reconoce esta situación, y no valora equivocadamente la cuenta bancaria en comento, ya que el auto del Segundo Tribunal Superior valora la segunda cuenta, en la medida de que no se honró el pago del capital más los intereses al 17 de diciembre de 1990.

En el aspecto referente a las normas infringidas y el concepto en que lo han sido, invoca el actor los artículos 821, 823 numeral 3°, 677, 679 numeral 9°, 683, 1014 y 1971, todos del Código Judicial, y los artículos 2 y 194 del Código Penal.

El artículo 821 numeral 3° del Código Judicial, que define como documento público las constancias de las actuaciones judiciales, y el 823 íbidem, que establece la validez de dichos documentos, las declaraciones de sus otorgantes y la manera como deben ser valoradas por el Juzgador, son infringidos por comisión y omisión respectivamente -según el Dr. Berríos- por el auto recurrido,

por el mismo concepto, pues al negar este la excepción de cosa juzgada y dicho principio, valora mal el auto del Juez Octavo de Circuito y desdobla sin base legal la decisión dictada por el Juez antes mencionado y desconoce que la citada resolución tiene valor de cosa Juzgada. Dicho Tribunal parte o divide "a su antojo" los fallos al valorarlos cuando están ejecutoriados.

Se equivoca el actor en el análisis de la violación de ambas normas porque, aunque el auto del Juez Octavo de Circuito Penal es un documento público, no se "desdobla", porque -como ya se ha expuesto- la situación ventilada por esa resolución es distinta a la que originó la nueva querella; por lo tanto, no se valoró erróneamente el auto precitado, y no se violentó el principio de cosa juzgada de ese auto. La negación de la excepción de cosa juzgada es fundada.

El artículo 677 del Código Adjetivo, que define lo que son las excepciones y faculta a las partes para ejercitarlas, -aducido por el Dr. Berríos- no puede ser ventilado en este examen -tal como lo señaló el señor Procurador-, pues la explicación y concepto de infracción del artículo es sustentado en base al artículo 683 íbidem, lo cual no es congruente.

Observa la Sala que el casacionista esgrime el mismo razonamiento para fundamentar la violación de los artículos señalados, es decir, que el auto impugnado valoró erróneamente el auto del 21 de febrero de 1989 dictado por el Juez Octavo de Circuito de lo Penal de Panamá, y que considera documento público, al negar la excepción de cosa juzgada por él promovida, cuando -contrario al principio de cosa juzgada- procedió al desdoblamiento ilegal de esta última decisión, reconociendo una segunda investigación por los mismos hechos que por el tiempo transcurrido desde su comisión produjeron que el Juzgado Octavo declara la prescripción de la acción penal.

Considera esta Corporación de Justicia que no prospera el argumento señalado por el recurrente, pues no han sido violadas las normas aducidas, y para ello es aplicable la misma explicación para todos los artículos denunciados como transgredidos, esto es; que la raíz del asunto estriba en que el auto del Segundo Tribunal Superior no valoró erróneamente -al confirmar el auto del 26 de marzo de 1992 emitido por el Juzgado Cuarto de Circuito Penal de Panamá- el auto del 21 de febrero de 1989 dictado por el Juez Octavo de Circuito Penal de Panamá, porque no se trata de los mismos hechos que llevaron a dicho juzgador a decretar la prescripción de la acción penal, sino de hechos distintos que se suscitaron en la misma cuenta, años después de la primera encuesta, pese a que se trata de las mismas partes involucradas.

El hecho denunciado por el querellante ocurrió el 17 de diciembre de 1990, cuando el **BANQUE ANVAL, S. A.** dejó de pagar el capital y los intereses de la cuenta N° 271002 a la depositaria **YAKIMA INTERNACIONAL, S. A.**, y siendo que desde esa fecha empieza a correr la prescripción de la acción penal -que fue interpuesta a tiempo-está más que claro que no ha transcurrido el tiempo para que prescriba la misma, en base al numeral 3° del artículo 93 del Código Penal, y por lo tanto no se desconoce el valor de dicho auto, ni se desdoblan los hechos que motivaron la acción penal instaurada en 1991 por **YAKIMA INTERNACIONAL, S. A.**

Por ello no se incumple con el artículo 679 del Código Judicial, que establece las excepciones de cosa juzgada y prescripción, porque no la hay; no se viola el artículo 683, íbidem, porque no se desconoce la excepción de prescripción de cosa juzgada, como de previo y especial pronunciamiento, porque se trata de otro proceso.

Por esa misma razón, no se incumple el artículo 1014 del Reglamento Adjetivo, pues no se desconoce el valor de cosa juzgada del auto ejecutoriado, pues aunque hay identidad de las partes y de la cosa, no la hay en cuanto a la causa o razón de pedir, por ser hechos originados en diciembre de 1990; tampoco se incumple el artículo 1971 íbidem, por cuanto que las normas del Libro II, que regulan la figura de cosa juzgada que se aplicaron a la encuesta que finalizó con la declaratoria de prescripción de la acción penal en el auto del 21 de febrero de 1989, no son aplicables a este nuevo caso.

No se incumple el artículo 2 del Código Penal, toda vez que, por tratarse de otro proceso no se está juzgando a **BANQUE ANVAL, S. A.** dos veces por la misma causa penal.

Finalmente, el artículo 194 -también del Código Penal- tampoco fue irrespetado por el fallo recurrido, porque se trata de un nuevo proceso, aunque se investigue el mismo delito de apropiación indebida.

En vista de lo anterior, no la resta otro camino a la Sala que negar el recurso que nos ocupa.

En mérito de lo anterior, la Corte Suprema, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA el auto del 26 de enero de 1993 proferido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

Devuélvase y Notifíquese

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) MIRTZA A.FRANCESCHI DE AGUILERA.
(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A CALAZANCIO GONZÁLEZ CHÁVEZ, POR DELITO CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL, EN PERJUICIO DE REYES GONZÁLEZ BENÍTEZ. MAGISTRADA SUSTANCIADORA: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, TREINTA (30) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado Octavio Ochoa Guillén, abogado defensor del señor **CALAZANCIO GONZÁLEZ CHÁVEZ**, procesado por el delito de lesiones personales en perjuicio de Reyes González Benítez, anunció y formalizó recurso de casación en el fondo contra la sentencia de segunda instancia, expedida por el Tribunal Superior del cuarto Distrito Judicial, calendada el 13 de diciembre de 1995, mediante la cual impuso a su defendido 24 meses de prisión.

Por cumplidas las reglas de reparto, se fijó en lista el negocio por el término de ocho días con el propósito de que las partes interesadas tuvieran conocimiento del ingreso del negocio a la Sala Segunda de la Corte. A esta fecha, se ha cumplido el lapso concedido y por tanto es del caso decidir sobre la admisibilidad del recurso de casación presentado.

Al tenor de las constancias procesales, el recurso fue anunciado y formalizado en tiempo oportuno, dentro de un caso susceptible a este tipo de medio de impugnación, pues se trata de un proceso seguido por delito que tiene asignada pena de prisión superior a dos años. Además, el recurrente está facultado por su poderdante para asumir su representación haciendo uso de las acciones y recursos que sean necesarios para el mejor ejercicio de su defensa, por lo tanto, se da legitimación activa en su presentación.

En cuanto a los requisitos que deben concurrir en la redacción del escrito, se aprecia lo siguiente: 1. La historia breve del caso recoge los puntos relevantes, que a juicio del recurrente evidencian los vicios de injuridicidad de la sentencia impugnada. 2. Respecto a la primera causal que trata sobre la violación directa de la ley sustancial, cabe recordar que esta es una causal en el fondo, que se dirige a cuestionar la aplicación de la ley, no así la valoración probatoria de los hechos. 3. Los motivos de la primera causal no guardan relación con la misma, pues en ellos se hace referencia a específicos medios probatorios que no son objeto de censura, al tenor de la causal invocada. 4. Las normas que se citan como infringidas contienen la descripción de tres causas de justificación, que más bien guardan relación con la causal de fondo que

describe el numeral 5 del artículo 2434 del Código Judicial, no así con la argüida por el casacionista. 5. Respecto a la segunda causal de fondo alegada, se observa que es de tipo probatorio y su enunciación se ajusta a los requerimientos de ley. A su vez los motivos que se indican a continuación guardan cierta relación con la causal que le sirven de apoyo. 6. Con relación a las disposiciones legales violadas y el concepto en que lo han sido, el recurrente debe incorporar las normas adjetivas sobre valoración de la prueba testimonial, al igual que la disposición sustantiva penal que resultó violada indirectamente como consecuencia del error de derecho en la apreciación de la prueba, en que supuestamente incurrió el Tribunal de segunda instancia al expedir la sentencia censurada por medio del recurso de casación presentado.

Los defectos anotados dan lugar a que se corrija la segunda causal, no así la primera, en la que no hay la debida coherencia entre los motivos y las disposiciones que se enuncian como infringidas.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, representada por la Magistrada Sustanciadora en SALA UNITARIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DISPONE mantener el negocio en Secretaría por el termino de cinco días a fin de que el recurrente haga las enmiendas con relación a las disposiciones legales infringidas que sustentan la segunda causal alegada.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A ERNESTO MARCEL REVELLO, POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, TREINTA (30) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Mediante auto calendado el 20 de marzo de 1996, el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, después de verificar si el escrito de formalización del recurso de casación, presentado por el licenciado Omar Samaniego, en su condición de abogado defensor de **ERNESTO MARCEL REVELLO**, procesado por delito contra la salud pública, reunía los requisitos externos de oportunidad y de legitimación activa y material, ordenó la remisión del expediente a la Sala Segunda de lo Penal, para los fines legales correspondientes.

Ingresado el caso a la Corte y una vez cumplidos los trámites de reparto, se dispuso fijar en lista el negocio por el término de ocho días a fin de que las partes interesadas tuvieran conocimiento de tal ingreso. A esta fecha, ha vencido el término establecido por el artículo 2443 del Código Judicial y por tanto, es necesario entrar a decidir la admisibilidad del recurso presentado.

Respecto a la historia sucinta del caso, el recurrente hace un recuento general del mismo, con énfasis en la situación procesal de su representado. En cuanto a la causal alegada, se invoca el numeral 1° del artículo 2434 del Código Judicial, en su primer párrafo, en el cual se enuncian tres causales de fondo, a saber: a) Violación directa de la ley sustancial; b) Infracción de la ley sustancial por efecto de una errada interpretación de la ley y, c) Violación de la ley sustancial penal por indebida aplicación de ésta al caso juzgado.

Lo anotado es un error que no permite descifrar a cuál de las tres causales sirven de fundamento los motivos y las disposiciones legales que se dicen infringidas.

Es más, el casacionista al redactar el concepto de la infracción de los artículos 904, 905, 970 y 973 del Código Judicial que se dicen violados, afirma que éstos fueron infringidos "en forma directa por error de Derecho en la apreciación de las pruebas", terminología que se aparta del manejo técnico-jurídico que se exige en la formalización del recurso extraordinario de casación. También cae en la impropiedad a través de los motivos de censurar la valoración dada por el Tribunal de segunda instancia a los indicios, a pesar de no haber invocado una causal probatoria.

Los defectos anotados son de tal gravedad que no permiten la admisión del recurso presentado pues no se trata de errores subsanables, sino de un manejo inadecuado de los principios, requisitos y conceptos de fondo propios de la casación penal.

Por tanto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de casación presentado por el licenciado Omar Samaniego Sánchez, apoderado judicial de ERNESTO MARCEL REVELLO.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A MANUEL ANTONIO NORIEGA M., NIVALDO MADRIÑÁN A. Y FELIPE CAMARGO AMAYA, POR EL DELITO CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL EN PERJUICIO DE HUMBERTO MACEAS WILSON. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, TREINTA (30) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

De conformidad con el informe Secretarial que aparece a folios 3,584 vuelta, ha vencido el término establecido por el artículo 2443 del Código Judicial, para que las partes tengan conocimiento del ingreso de este proceso al Tribunal de Casación Penal y por tanto procede resolver su admisibilidad in limine.

En el presente caso nos encontramos con la presentación de 2 recursos de casación, uno por la defensora de oficio del señor **MANUEL ANTONIO NORIEGA** y el otro por el abogado defensor de **FELIPE CAMARGO AMAYA**, ambos sentenciados por delito contra la libertad individual en perjuicio de **HUMBERTO MACEAS WILSON.**

De conformidad con las constancias de autos ambos recursos cumplen con los requerimientos externos que son propios de este medio de impugnación extraordinario y que se refieren a los principios de temporalidad, legitimación activa y legitimidad objetiva o material. Esto significa que los recursos de casación fueron anunciados y formalizados en tiempo oportuno, que los mismos fueron presentados por los apoderados legítimamente designados por las partes y por el Tribunal y que el proceso penal seguido a los representados de los recurrentes es por delito al cual la legislación penal le asigna una sanción privativa de libertad superior a 2 años.

A fin de individualizar el análisis correspondiente establecido por el artículo 2443 del Código Judicial, sobre los requisitos que debe reunir todo escrito de esta naturaleza, la Sala entra a resolver por separado cada uno de los recursos de la siguiente manera:

1. Recurso de casación presentado por la doctora Asunción Alonso de

Montalvo a favor de Manuel Antonio Noriega Moreno.

El escrito al cual hacemos referencia, aparece en el tomo IV de este expediente, de folio 3544 a 3559 y en el mismo podemos advertir lo siguiente: a) Historia concisa del caso. Sobre este aspecto se hace una relación del expediente con énfasis en la situación procesal de Manuel Antonio Noriega y al vicio de injuridicidad que se le atribuye a la sentencia impugnada; b) Primera causal: la primera causal que se invoca es la contenida en el numeral 1° del artículo 2434 del Código Judicial, pero la recurrente no tomó en consideración lo que ha sostenido la doctrina y la jurisprudencia de la Corte cuando señala que este numeral tienen cinco causales, dos de ellas de carácter probatorio y tres de violación de la ley sustancial.

Es por ello que los motivos y las disposiciones legales infringidas que se alegan en relación con esta primera causal, carecen de relevancia jurídica, en virtud de que se desconoce a cuál de las cinco causales se refieren.

Con relación a la segunda causal invocada, basada en el numeral 2 del artículo 2437 del Código Judicial, es indispensable recordar que toda causal de casación en la forma, fundada en errores in procedendo debe ser acompañada de constancias o referencias claras de que la recurrente planteó tales defectos procesales en cada una de las instancias que antecedieron al recurso; c) Disposiciones legales infringidas y concepto de la violación. Respecto a este punto y con relación a la segunda causal, se anota el artículo 2309 del Código Judicial y se explica que fue violado de manera directa por haber sido aplicado indebidamente. Al consignar como concepto de la infracción, la violación directa, sin anotar si la misma ocurrió por comisión o por omisión, se incurre en un error de tipo técnico, en virtud de que la violación directa sólo puede darse en las formas anotadas. En el caso subjúdice, la recurrente sostiene que la violación directa se dio por indebida aplicación y en estricto derecho, se trata de dos conceptos antagónicos, pues la indebida aplicación requiere un vicio de injuridicidad cometido por el juzgador de segunda instancia, en la que aplica una norma que no es la que corresponde al caso concreto, y por tanto, es obligatorio señalar la norma correcta que debió ser aplicada.

La suma de los defectos anteriores, al tenor del artículo 2443 del Código Judicial no permiten la admisibilidad del recurso presentado.

2. Recurso presentado por el abogado defensor de Felipe Camargo Amaya.

El recurrente formalizó su recurso mediante escrito que puede leerse de folios 3506 a 3543 de este expediente. Respecto a la historia concisa del caso, se puede apreciar una relación general del proceso sin que de la misma pueda deducirse, con precisión, los vicios de injuridicidad en que incurre la sentencia impugnada.

En la formalización del recurso, el licenciado Carrillo Gomila invoca cinco causales, siendo la primera de casación en la forma y las cuatro siguientes, de casación en el fondo. Veamos cada una de ellas.

La primera causal invocada, que como se dijo antes, es de casación en la forma, se sustenta en el numeral primero del artículo 2437 del Código Judicial. Al revisar los motivos, al igual que las disposiciones legales infringidas y el concepto de la infracción, referida a cada causal, en principio no se advierten errores en el orden formal.

Respecto a la segunda causal, el recurrente la enuncia de la siguiente manera: "Por ser la sentencia infractora de la ley sustancial penal en concepto de violación directa, por omisión". Esta denominación no se ajusta a la que trae la norma mencionada, razón por la cual, desde el punto de vista técnico no es posible su admisión.

La tercera causal está contenida en el numeral 5 del artículo 2434 de la excerta citada, y en cuanto a los motivos y disposiciones infringidas en que se apoya, la Sala no descubre defecto alguno que la invalide.

La cuarta causal que se invoca es de carácter probatorio y se refiere al error de derecho en la apreciación de la prueba, la cual esta contemplada en el numeral primero del artículo 2434 del Código Judicial. Sobre esta causal es necesario señalar que el recurrente no debe caer en la contradicción de invocar una causal de fondo violatoria de la ley sustantiva penal, que no cuestiona los supuestos de hecho probados en el expediente y a renglón seguido alegar una causal probatoria que censura la valoración que se ha hecho por el Tribunal de los medios probatorios destinados a acreditar la situación fáctica que es dilucidada en un proceso, a través de dos instancias.

Como quiera que se admitió la tercera causal, la cuarta resulta excluyente de la anterior.

La quinta causal que se invoca, de casación en el fondo, es la contenida en el numeral 6 del artículo 2434 del Código de Procedimiento Penal. Al revisar su denominación, los motivos, la disposición legal infringida y el concepto de la violación, no se advierten defectos que den lugar a su corrección o inadmisión.

Por tanto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de casación presentado por la doctora Asunción de Montalvo, defensora de oficio de MANUEL ANTONIO NORIEGA MORENO; y, ADMITE el recurso de casación mixto presentado por la defensa de FELIPE CAMARGO AMAYA, en lo que se refiere a las causales 1ª, 3ª y 5ª, no así en cuanto a la 2ª y 4ª y DISPONE correr traslado al Procurador General de la Nación por el término de cinco días a fin de que emita concepto.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

IMPEDIMENTO

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DE LA MAGISTRADA AURA E. GUERRA DE VILLALAZ DENTRO DE LA QUEJA PRESENTADA POR JAVIER ALEXIS QUIROZ CONTRA LA MAGISTRADA ELVIA BATISTA POR LA SUPUESTA VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO DENTRO DEL JUICIO QUE SE VENTILA POR LA MUERTE DEL LICENCIADO LUIS HUERTAS DÁVALOS. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

La Honorable Magistrada Aura E. Guerra de Villalaz ha solicitado se le separe del conocimiento de la "queja o querella" que presentara el licenciado Javier Alexis Quiroz contra la Magistrada Elvia Batista, por la supuesta violación del debido proceso dentro del juicio penal seguido a Roberto López y Melquisedec De León por el delito de homicidio cometido en perjuicio de Luis Huertas Dávalos.

La solicitud viene fundamentada en la consideración de que "en ese proceso penal funge como abogado de la defensa la firma forense VILLALAZ Y ASOCIADOS de la cual forma parte ROLANDO VILLALAZ GUERRA, persona natural a la que me unen vínculos de consanguinidad de primer grado".

En vista de que la manifestación de impedimento tiene sustento jurídico expreso en el numeral 1 del artículo 749 del Código Judicial, es del caso acceder a su reconocimiento.

Por las razones expuestas, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL el impedimento manifestado por la magistrada Aura Emérita Guerra de Villalaz, Y DISPONE separarla del conocimiento de este caso. Procédase, como lo ordena la ley, a la continuación del proceso con el magistrado de la Sala siguiente a quien corresponda.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS

(fdo.) JOSE M. FAÚNDES

(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INCIDENTE

INCIDENTE DE RECUSACIÓN, DENUNCIA DE FALTA A LA ÉTICA JUDICIAL Y VIOLACIÓN DE LOS DEBERES, RESPONSABILIDADES Y FACULTADES DE LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL DENTRO DEL PROCESO MENDIZÁBAL-FALCONETT. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado **SILVIO GUERRA MORALES**, en su condición de acusador particular dentro del proceso penal seguido a **ROBERTO PINZÓN** y **JACINTO MAC DONALD** por la muerte de **MARLENE MENDIZÁBAL** y la desaparición de **JORGE FALCONETT**, ha presentado a la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, incidente de recusación contra los Magistrados que integran el Tribunal Superior de Justicia del Segundo Distrito Judicial, conjuntamente con una queja formal por faltas a la ética judicial y una denuncia por violación de los deberes y responsabilidades correspondientes a los Magistrados de ese Tribunal.

Como quiera que se trata de dos incidentes y una denuncia que, por su naturaleza, tienen un trámite distinto y compete a instancias diferentes, nos vamos a ocupar del incidente de recusación, que es el único que es de conocimiento de la Sala Penal.

Sostiene el incidentista que la recusación se fundamenta en el numeral 15 del artículo 749 del Código Judicial, referido exclusivamente a la Magistrada Sustanciadora del proceso penal, licenciada Delia Carrizo de Martínez, a quien se le acusa de "reiteradas negaciones a atender a los señores Jorge Falconett y Carlos Mendizábal, padres de las víctimas, advirtiendo por conducto del despacho secretarial tal renuencia y que pone de manifiesto que las relaciones entre dicho Tribunal y una de las partes, los acusadores, no marchan nada bien" (cfr. fs. 7-8).

Por su parte, el artículo 749, numeral 15, citado, establece la causal de impedimento y recusación que trata sobre la enemistad manifiesta entre el Juez o Magistrado y una de las partes. La enemistad manifiesta, para que alcance los caracteres de gravedad que se subsuman en la causal mencionada, debe reunir una posición seria y definitiva de distanciamiento y aversión recíproca que no permita obrar con serenidad, imparcialidad y equilibrio en una causa.

Como se anotó antes, el incidentista alega que la Magistrada Sustanciadora se ha negado reiteradamente a recibir a los acusadores, lo que a juicio de la Sala no es suficiente para engendrar la causal de enemistad manifiesta, menos aún, cuando el numeral 14 del artículo 440 del código Judicial prohíbe a los jueces y magistrados conceder entrevistas privadas, oír argumentos o admitir comunicaciones destinadas a influir en su actuación judicial. Por tanto, la recusación presentada carece de fundamento, al tenor de lo que dispone el

artículo 755 del Código Judicial.

En lo que respecta a la queja por falta a la ética y la denuncia por violación a los deberes, responsabilidades y facultades de los Magistrados del Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, conforme lo disponen los artículos 288, 442, 443 y concordantes del Código Judicial, es de conocimiento del Pleno de la Corte, que es el Superior jerárquico de los Magistrados de los Tribunales Superiores.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RECHAZA de plano EL INCIDENTE DE RECUSACIÓN y DECLINA ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia la queja y denuncia presentadas, para lo cual dispone que se compulsen las copias correspondientes.

Base legal artículos 288, 440, numeral 14, 749 numeral 15, 755 y 756 del Código Judicial.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INCIDENTE DE NULIDAD

INCIDENTE DE NULIDAD INTERPUESTO POR LA FIRMA FORENSE QUIROZ MURILLO & ASOCIADOS DENTRO DE LA SOLICITUD DE FIANZA DE EXCARCELACIÓN DE FERNANDO HERNÁNDEZ ARIAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Los apoderados judiciales de Fernando Hernández Arias han presentado incidente para que se declare la nulidad de actuación dentro del trámite de solicitud de fianza de excarcelación que formularan a su favor.

Al contestar el traslado que le fuera corrido de la incidencia, el Procurador General de la Nación ha solicitado el rechazo de la pretensión por contraria al artículo 2516 del Código Judicial. Esta norma condiciona el reconocimiento del beneficio reclamado, a) la petición debe ser presentada "mientras se resuelve" la solicitud de extradición, y en este caso lo fue con posterioridad a la resolución que decreta la extradición; y b) la fianza deberá ser solicitada "en los casos en que la ley panameña conceda ese derecho", lo que ciertamente no ocurre en este caso.

Como refuerzo de los impedimentos que se dejan indicados, en cuanto a la procedencia de la pretensión que se examina, concurre ahora la circunstancia, de conocimiento general por constituir un hecho público y notorio reciente, de que Hernández Arias ya no se encuentra sometido a la jurisdicción panameña, por haber sido entregado a las autoridades judiciales norteamericanas, en cumplimiento de la extradición que ya había sido concedida.

Por las consideraciones anteriores, la SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RECHAZA DE PLANO el incidente de nulidad de la negativa en conceder fianza de excarcelación a Fernando Hernández Arias.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS

(fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(Con Salvamento de Voto)

(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO JOSÉ MANUEL FAÚNDES

No estoy de acuerdo con el Fallo y lo expreso con todo respeto, visto que entre los muchos documentos aportados al expediente, varios, si decimos mejor todos, no están debidamente acreditados, y lo que resalta en el proceso levantado en la Corte de donde se ordena su detención, la materia es netamente fiscal.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

Fecha Ut Supra

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

RECURSO DE REVISIÓN

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A LA SEÑORA KONNY JOAN FRANCIS BROCE, SINDICADA POR DELITO DE POSESIÓN ILÍCITA DE DROGAS CON ÁNIMO DE VENTA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Ante la Secretaría de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema, el licenciado Gerardo Puerto Gordón, actuando en nombre y representación de **KONNY JOAN FRANCIS BROCE**, interpuso el 25 de marzo de este año, recurso de revisión contra la sentencia N° 59 del 6 de agosto de 1993, dictada por el Juzgado Décimo Segundo del Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, en la que se condenó a su representada a la pena de cinco años de prisión por el delito de Posesión Ilícita de Drogas con ánimo de venta e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, de elección popular y de cualquier otro derecho político por el término de un año, luego de cumplida la pena principal.

FUNDAMENTO DEL RECURRENTE

El licenciado Puerto Gordón, fundamenta el recurso invocando las causales tercera y quinta del artículo 2458 del Código Judicial, que son del tenor siguiente:

> "**3**. Cuando alguno esté cumpliendo condena y se demuestre que es falso algún testimonio, peritaje, documento o prueba de cualquier otra clase y estos elementos probatorios fuesen de tal naturaleza que sin ellos no hubiere base suficiente para establecer el carácter del delito y
>
> **5**. Cuando después de la condenación se descubran nuevos hechos que, por sí mismo o combinados con las pruebas anteriores, puedan dar lugar a la absolución del acusado o a una condena menos rigurosa, por la aplicación de una disposición menos severa".

En cuanto al fundamento de la primera causal mencionada, lo centra atacando el alegato de la representación fiscal en el acto de la audiencia oral, al considerar que se contradice; y que por ello la juzgadora aplicó la ley en forma indebida y condenó a la procesada por el segundo párrafo del artículo 260 del Código Penal, cuando debió aplicar el artículo 260 inciso primero, porque sólo se trataba de 12.0 gramos de cocaína. Indica que si el dinero que llevaba su defendida era producto de la venta de droga, el Ministerio Público nunca le

hubiera devuelto el dinero a la procesada. Además que la juzgadora desconoció jurisprudencia a ese respecto dictada por esta Sala en el juicio seguido a Dilcia Babb sindicada por el delito de Tráfico Ilícito de Droga (julio 21 de 1993).

Otro hecho, es el estado delicado de salud de su defendida, luego de 32 meses de estar detenida.

Señala que en el lugar de los acontecimientos habían otros sujetos que al percatarse de la presencia de los agentes de la P. T. J. se dieron a la fuga, lo que según jurisprudencia del 13 de octubre de 1992 debe tenerse en cuenta.

En cuanto a la causal del numeral 5 del artículo 2458 del Código Judicial, estima que los mismos hechos planteados en la anterior le sirven de fundamento. Además, que para el día de los hechos la procesada se encontraba en estado de gravidez y la juzgadora no tomó en cuenta el artículo 66 ordinal 3 del Código Penal al dictar la sentencia y el artículo 2039 del Código Judicial que establece que cuando el procesado esta enfermo científicamente comprobado, como es el caso de su defendida, tiene derecho a la suspensión del trámite penal.

Aporta como prueba examen médico legal practicado a Konny Joan Francis B. de fecha 16 de febrero de 1996 (fs. 2-10).

SITUACIÓN PROCESAL

El recurso de revisión es un medio de impugnación de carácter extraordinario y la ley establece las formalidades legales para interponerlo.

Es así, que el Código Judicial sólo permite el examen de sentencias ejecutoriadas, cualesquiera que sean los tribunales que la hayan dictado (artículo 2458).

Otro requisito es que se interponga ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. El memorial respectivo debe indicar la sentencia cuya revisión se demanda, el Tribunal que la hubiere expedido, el delito que hubiese dado motivo a ella, la clase de sanción que se hubiera impuesto y los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoyaré la solicitud, además de aportar las pruebas de los hechos fundamentales.

Advierte la Sala, luego de examinar el expediente de la actuación principal, que la sentencia N°59 del 6 de agosto de 1993 (fs. 69-77) no es una sentencia ejecutoriada, toda vez que contra ella se interpuso recurso de apelación (f. 77 vt.) que al ser sustentado y sustanciado permitió ser revisado en una segunda instancia. Siendo la sentencia en firme la dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, de fecha 11 de noviembre de 1993, que confirma la primera (fs. 95-101).

Por otra parte, con los hechos expuestos para sustentar la causal 3ª del artículo 2458 del Código Judicial, no se aporta prueba demostrativa de la falsedad de algún testimonio, peritaje, documento o prueba de cualquier clase.

Con respecto a la causal 5ª del artículo 2458 -ya transcrita- no presenta el postulante los nuevos hechos descubiertos después de la condena. Y sólo se refiere a reexaminar el criterio esbozado por la fiscalía durante la audiencia oral y señalar que existen dudas sobre la culpabilidad de la señora Francis Broce. Esto no es suficiente, pues el recurrente debe aportar nuevos elementos de juicio, no valorados en la sentencia y que por su importancia, varían la situación procesal previamente apreciada por el Tribunal en la sentencia cuya revisión se presenta.

De todo lo anterior se concluye que el recurso presentado no cumple con las condiciones y requisitos restrictivos señalados en nuestra ley procesal, por lo que no se puede acceder a la pretensión del postulante.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de revisión presentado por el licenciado Gerardo Puerto Gordón contra la sentencia N° 6 del 6 de agosto de 1993, dictada por el Juzgado Décimo Segundo del Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR FERNANDO SMITH, SINDICADO POR EL DELITO DE VIOLACIÓN CARNAL. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Ha reingresado a la Sala Penal de la Corte Suprema el recurso extraordinario de revisión que, en su propio nombre, interpusiera Fernando Smith contra la sentencia dictada por Juzgado Primero de Circuito de la provincia de Colón, que lo condena a la pena de 6 años de prisión por el delito de violación carnal.

Es del caso destacar que con anterioridad, mediante providencia calendada 4 de marzo de 1994, se dispuso correr en traslado, por el término de 15 días, el escrito de revisión a la licenciada Maritcenia Palacios, defensora de oficio del Circuito de Colón, "para que represente al recurrente en este caso y lo asista en cuanto a la correcta formalización del recurso ... si se registra causal legal que lo fundamente" (f. 6).

Por cumplida esa orden, la defensora de oficio designada presentó ante la Secretaría de la Sala de lo Penal escrito, en el cual manifiesta que ha examinado el expediente incoado contra Fernando Smith y, sobre la admisibilidad de la solicitud de revisión, concluye que "los hechos que rodean el mismo no se enmarcan dentro de las causales contempladas en el artículo 2458 del Código Judicial, para que proceda el Recurso de Revisión" (f. 9).

Como quiera que, a juicio de la defensa oficiosa asignada al sentenciado, no procede la formalización del recurso extraordinario de revisión, el cual está condicionado al cumplimiento de los requisitos que a tales efectos establece el artículo 2459 del Código Judicial, resulta entonces evidente la imposibilidad de acceder a la solicitud de revisión formulada por Fernando Smith.

En razón de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso de revisión interpuesto por Fernando Smith en su propio nombre, y ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO A PERSEVERANDO GRACIA GÓMEZ, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE ERIC MURILLO. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Perseverando Gracia Gómez hizo llegar a la Sala Penal de la Corte Suprema, manuscrito en el que solicita se revise sentencia proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, que lo condena a la pena de 20 años de prisión, como responsable del delito de homicidio cometido en perjuicio de Eric Murillo.

Para imprimirle trámite a la solicitud se le asignó la representación del detenido a la licenciada Mireya Rodríguez, Defensora de Oficio Distrital, para que la letrada representara al sindicado "en cuanto a la correcta formalización del recurso interpuesto, si se registra causal que lo fundamente" (f. 7).

En cumplimiento de esa decisión, la defensora de oficio, mediante escrito presentado el 15 de abril ante la Secretaría de la Sala, comunica que "he revisado en detalle el expediente y no observo ninguno de los presupuestos que exige la ley para sustentar la revisión de esta causa" (f. 10).

Advertida esa manifestación, la Corte concluye que el recurso extraordinario anunciado por el inculpado, no cumple con los requisitos que a tales efectos exigen los artículos 2458 y 2459 del Código Judicial.

Por las anteriores consideraciones, LA CORTE SUPREMA, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso de revisión anunciado por Perseverando Gracia Gómez.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN, INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO QUE SE LE SIGUE A BALBINO JAVIER ZAPATA ATENCIO, SINDICADO POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El 4 de marzo del año en curso, ingresó el cuaderno que contiene el recurso de revisión presentado por el interno **BALBINO JAVIER ZAPATA ATENCIO**, sentenciado por delito contra la salud pública.

Como este recurso extraordinario fue promovido y formalizado por el reo desde la cárcel de David, donde cumple la pena privativa de libertad impuesta, se expidió la providencia de la misma fecha (fs. 11), mediante la cual se dispuso correr traslado al licenciado Nelson Caballero, Defensor de Oficio Circuital de Chiriquí, para que representara y asistiera al recurrente, en lo que se refiere a la correcta formalización del recurso presentado.

El 17 de abril del año en curso, se recibió en la Secretaría de la Sala Segunda un informe presentado por el licenciado Nelson Caballero, que en lo pertinente expresa:

> "A través de Sentencia Penal de 15 de septiembre de 1994, el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, previa Reforma de la Sentencia recurrida impuso a los procesados SALVADOR VÁSQUEZ GÓMEZ y BALBINO JAVIER ZAPATA "las penas de Setenta y dos (72) meses de prisión e inhabilitación de funciones públicas" (fs. 485-491).

En lo esencial, el Tribunal Superior se pronunció de la siguiente forma:

"... **La revisión de lo actuado lleva a la Colegiatura a concluir que los cargos hechos contra Vasquéz (sic) y Zapata no pueden ser desvirtuados por el caudal probatorio de autos, ni por las alegaciones de la recurrente. En contra de los procesados militan las declaraciones juradas por Neftalí René López e Idalides Frago de Aparicio, al igual que los indicios de oportunidad, actitud sospechosa y participación criminal, lo que en un conjunto constituye un criterio sirve de fundamento real y objetivo para acreditar la responsabilidad penal de los justiciables ..." (fs. 489-490).**

Amerita observar que contra la decisión del Tribunal Superior se anunció casación concediendose (sic) el correspondiente término legal para formalizar el recurso (fs. 513-514); no obstante, este no fue formalizado en el término concedido, razón por la que mediante Auto Penal de 14 de noviembre de 1994 se ordenó devolver el negocio al Tribunal de orígen (sic) (f. 580).

Debemos señalar que la investigación relacionada con este caso se inició en horas de la noche (8:30 P. M.) del 19 de abril de 1993, cuando se realizó diligencia de allanamiento a la residencia de un sujeto apodado **"Cumbo"** (SALVADOR VÁSQUEZ GÓMEZ), ubicada en Río Mar, Puerto Armuelles, Distrito de Barú, precediéndose a la detención de varias personas que se encontraban en el interior de la residencia, entre ellas el propio BALBINO JAVIER ZAPATA; además se encontró en esa residencia, entre otros artículos, "... **una pipa de hierro, dos pipas plásticas de fabricación casera ... un frasquito de vidrio tapón plásticos con una sustancia o mezcla blanca que se presume es droga**" (fs. 4-7); estableciendo la prueba de campo que el polvo encontrado era Cocaína (f. 10); mientras que el examen realizado por el Departamento de Criminalística del Laboratorio Técnico Especializado en Drogas (f. 173) determinó que el material examinado resultó positivo para CRACK (Cocaína) con un total de 1:08 gramos."

Concluye el Defensor de Oficio señalando que no encuentra causal legal para fundamentar el recurso de revisión a favor de Balbino Javier Zapata Atencio y por ello, se abstiene de enmendar la formalización del escrito presentado por el reo.

Aunque es evidente la ausencia de proporcionalidad en la pena impuesta, de conformidad a la calidad y cantidad de la droga incautada a dos personas, la ley procesal exige para la admisibilidad de este medio de impugnación, de carácter extraordinario, la concurrencia de varios requisitos, entre ellos, la fundamentación en una de las causales taxativamente señaladas y esto no ha ocurrido en el presente caso, defecto formal que no permite su admisión.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso extraordinario de revisión.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN DE SENTENCIA CONDENATORIA DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A RAYMUNDO SIERRA PÉREZ POR DELITO CONTRA EL PATRIMONIO EN PERJUICIO DE SHANG JI HUA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, TREINTA (30) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El 1° de febrero de 1996 se recibió en la secretaría de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, escrito signado por el reo **RAYMUNDO SIERRA PÉREZ** quien solicita le sea revisado el proceso por el cual el Juzgado Segundo del Circuito de lo Penal lo condenó a cinco (5) años de prisión por el delito de robo, sentencia que fue confirmada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial.

Mediante proveído de 13 de febrero se le corrió traslado a la licenciada Rosario Granda de Brandao, miembro del Instituto de Defensoría de Oficio, a objeto que el recurrente fuera asistido legalmente en cuanto a la correcta formalización del recurso interpuesto y si se registra causal legal que lo fundamente (f. 10).

Señala la licenciada Granda de Brandao, que el recurso interpuesto por el reo Sierra Pérez es contra la resolución sc-40 emitida por el Juzgado Segundo del Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, calendada el 9 de marzo de 1994, en la cual se le condena a la pena de cinco años (5) de prisión como responsable del delito de robo agravado en perjuicio de Zhang Ji Hua.

Luego de analizar los hechos referente a la encuesta penal, estima que la vía por la cual se pretende modificar el curso de la sentencia no es viable, dado que las siete modalidades que hacen procedente el recurso de Revisión no se presentan en el proceso examinado (FS. 11-12).

Esta Sala ha manifestado que el recurso de revisión **"como un medio de impugnación de carácter extraordinario, da lugar a que se examinen las sentencias ya ejecutoriadas, cualesquiera que sean los Tribunales que las hubiesen dictado, cuando se logre demostrar que existen nuevos elementos, con idoneidad probatoria suficiente, que permitan modificar la situación jurídica del sentenciado y se demuestra, con toda claridad, que los elementos probatorios son falsos o la sentencia se haya dictado con base a documentos o pruebas secretas inexistentes en el proceso"** (Resolución de marzo 23 de 1992).

En el caso bajo examen no se producen ninguna de las circunstancias contempladas en el artículo 2458 del Código Judicial que hacen viable el recurso de revisión. De consiguiente no se puede acceder a la solicitud formulada.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de revisión presentado por el reo RAYMUNDO SIERRA PÉREZ, contra la sentencia dictada por el Juzgado Segundo del Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá de 9 de marzo de 1994.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SENTENCIA APELADA

PROCESO SEGUIDO A JUAN JESÚS GARCÍA RODRÍGUEZ Y EVARISTO PÉREZ RODRÍGUEZ, SINDICADOS POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE RICARDO JAVIER CRUZ. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, QUINCE (15) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Mediante sentencia de 12 de enero de 1995 el Segundo Tribunal Superior de Justicia condenó a **JUAN JESÚS GARCÍA RODRÍGUEZ (a) "JUAN DEL DIABLO"** a la pena principal de veinte (20) años de prisión y a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual período de duración, una vez cumplida la pena principal, como consecuencia de haber sido declarado culpable del delito de homicidio agravado en perjuicio de **RICARDO JAVIER CRUZ** (fs. 228-237).

Al momento de notificarse de esa decisión jurisdiccional, el licenciado Luis C. Arosemena Ramos, miembro del Instituto de defensoría de Oficio, anunció recurso de apelación (f. 237 vt.) y dentro del tiempo procesal oportuno presentó el escrito respectivo.

FUNDAMENTO DEL RECURSO

El licenciado Arosemena Ramos, manifiesta que la confesión espontánea y oportuna de su defendido se da desde el inicio de la investigación, lo que consta en sus declaraciones indagatorias; de las cuales se desprende que la muerte de Cruz Miranda se produjo en forma accidental. Agrega que su representado cooperó con el funcionario instructor, al punto que identificó a la persona que le había dado el arma y la entregó a las autoridades.

Señala que el tribunal a-quo no ponderó que García Rodríguez salía de un baile y lo más seguro en estado de embriaguez, siendo su reacción intempestiva de defender a sus amigos cuando escuchó el llamado de auxilio, por lo que desconocía que Varito lo que estaba cometiendo era un robo.

Por estas razones discrepa en cuanto a la individualización de la pena y solicita se reforme tomando en consideración las circunstancias atenuantes contempladas en el artículo 66 del Código Penal y el artículo 2112 del Código Judicial (fs. 251-253).

OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

La licenciada Geomara Guerra de Jones, Fiscal Segunda Superior del Primer Distrito Judicial, al dar respuesta al traslado, solicita se confirme la sentencia impugnada, por ajustarse a derecho. Señala que la dosificación de la pena impuesta, parte de la inclusión de una circunstancia agravante, que en suma lo constituye la aplicación de un aumento de la tercera parte de la pena impuesta y contempló la atenuante de la confesión espontánea y oportuna del agente, reduciendo la pena hasta una cuarta parte (fs. 255-258).

FUNDAMENTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

El tribunal a-quo, al momento de aplicar la sanción penal manifiesta como basamento lo siguiente:

> "... se trataba de consumar otro hecho punible, el robo, por ello el homicidio es, a todas luces, agravado, porque con su actuar el imputado tan sólo intentaba facilitar la ejecución del robo y ello conlleva sanción de 12 a 20 años de prisión, que el tribunal estima es justa como base la de 18 años. A dicha pena debe aumentársele un tercio en virtud de que al ejecutar el homicidio García aprovechó de la superioridad o sea del hecho que su contendor no portaba arma alguna y estaba levantándose del suelo porque había resbalado y caído; ello eleva la pena a 24 años que a su vez debe ser rebajada en una cuarta parte por razón de la confesión espontánea y oportuna del agente. La pena líquida queda entonces en 20 años".

FUNDAMENTO DE LA SALA

Antes de adentrarnos al análisis de los puntos objetados por el apelante, la Sala observa que la nota de presentación (fs. 258) que acusa el recibo del escrito de contestación de traslado por la Fiscalía Segunda Superior del Primer

Distrito Judicial, presenta tachones, anomalía en la que no debe incurrirse porque pone en entredicho el trámite de la actuación, en todo caso el Secretario debe poner un informe para explicar la razón de ese tachón y cambio de fecha.

Ahora bien, el apelante no expresa como motivo de disconformidad la subsunción de la conducta ilícita de García Rodríguez, en el tipo penal que describe el homicidio agravado para preparar, facilitar o consumar otro hecho punible aún cuando éste último no se realice **-artículo 132 numeral 5 del Código Penal-**, que tiene señalada pena de 12 a 20 años de prisión.

Al examinar el texto de la resolución impugnada, llama la atención dos situaciones que se registran en cuanto a la discrecionalidad del tribunal a-quo para efectos de la pena a imponer; esto es:

1. La operación aritmética de individualización judicial de la pena se ubica en 18 años de prisión, aumentadas en un tercio, al considerar que en este caso concurre una de las agravantes que establece el artículo 67 numeral 1 del Código Penal, que trata sobre el abuso de superioridad en la agresión, elevando así la pena a 24 años de prisión.

2. Del monto anterior, el Tribunal le rebaja una cuarta parte al reconocerle la atenuante de la confesión, por lo que la pena a imponer la deja en 20 años.

La Sala considera que la aplicación de la dosimetría judicial debió sujetarse a la normativa que dispone que el aumento o la disminución se hace sobre la pena que debería aplicar el tribunal al reo, prescindiendo de las circunstancias que ordena la ley tener en cuenta para el aumento o la rebaja (art. 57 del Código Penal).

La manera en que se aplicó la disminución por razón del reconocimiento de la atenuante **queda en una apariencia y no en un verdadero reconocimiento, como es la voluntad de la ley penal**.

Por otra parte , el apelante centra su disconformidad en el hecho que no se reconoció la atenuante de la confesión, circunstancia que si fue tomada en consideración, como se ha podido observar.

Sin embargo, de manera somera, hace alusión a la agravante impuesta y dice: "le eleva un tercio por **supuesta superioridad** y luego le descuenta una cuarta parte para quedar en una pena líquida de 20 años". En ese sentido se entiende que no está de acuerdo, pero no aborda directamente el tema.

El artículo 67 del Código Penal en su numeral 1 establece como circunstancia agravante ordinaria común "**abusar de superioridad o emplear medios que debiliten la defensa del ofendido**".

Tal como aparece en la resolución recurrida, se aplicó la agravante prevista en el numeral 1° del artículo 67 del Código Penal por el hecho que el procesado llevaba arma, no así el occiso y porque éste se estaba levantando del suelo donde había caído.

Según las declaraciones recogidas en el expediente, este lamentable suceso se dio por razón de un enfrentamiento a golpes entre un grupo de muchachos que incluso portaban cuchillo y tiraban botellas como actos de agresión y defensa, dando como resultado el homicidio de Ricardo Javier Cruz por parte de García Rodríguez, quien utilizó un arma de fuego.

La acción del procesado dentro del evento, no puede calificarse como un caso típico de abuso de superioridad, pues la violencia desplegada estaba apoyada por pluralidad de personas.

En cuanto al uso de armas, esta Sala ha reiterado que sólo de manera excepcional el delito de homicidio por su naturaleza grave, podría ejecutarse sin el uso de armas o de medios de ejecución idóneos "**por lo que al ser necesario el**

uso de ésta para su perpetración, resultaría impropio y represivo, aumentar la penalidad de los homicidios realizados con arma, y por ello no debe computarse en calidad de circunstancia agravante (Fallo de 27 de noviembre de 1991).

En cuanto a la inferioridad del ofendido, Gómez Prada a dicho: **"Inferioridad del ofendido la constituyen la edad, el sexo, las enfermedades, las sicopatías, la debilidad mental, en fin, todo lo físico de la víctima, estable o transitorio, que tenga o coloque a la misma en condiciones de inferioridad ante el victimario"** (citado por Antonio Vicente Arenas. Comentarios al Código Penal Colombiano. Tomo I. Parte General. Editorial Temis. pág. 288).

Todo lo anterior conduce a desestimar el aumento correspondiente a esta circunstancia modificadora de la responsabilidad penal.

A objeto de imponer la sanción que corresponde, mantiene inalterable la pena base impuesta por el a-quo -18 años- al igual que la disminución que hizo de una cuarta parte en reconocimiento a la confesión espontánea y oportuna, lo que representa 4 años y 6 meses, los que restados a los 18 años arroja un cómputo final o pena líquida a imponer, que es 13 años y 6 meses de prisión.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REFORMA la sentencia apelada, en el sentido de imponer a JUAN JESÚS GARCÍA RODRÍGUEZ (A) "JUAN DEL DIABLO", de generales conocidas en autos, la pena de 13 años y 6 meses de prisión; y la pena de inhabilitación por igual período de tiempo, una vez cumplida la pena principal.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SENTENCIA CONDENATORIA APELADA DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A EDGARDO MONTERREY SUÁREZ, SINDICADO POR DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE MIGUEL ARIEL CONCEPCIÓN GONZÁLEZ. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Mediante sentencia del 16 de noviembre de 1995 el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, condenó a **EDGARDO MONTERREY SUÁREZ**, quien fuera declarado culpable por un jurado de conciencia, a la PENA DE OCHO (8) AÑOS DE PRISIÓN, como responsable del delito de homicidio en perjuicio de Miguel Ariel Concepción González; y por igual término lo inhabilitó para el ejercicio de funciones públicas, una vez cumplida la pena principal (fs. 593-598).

Al momento de notificarse de esa resolución jurisdiccional, la defensa técnica del procesado, licenciado Humberto A. Collado Tapia, anunció recurso de apelación (f. 598 vt.), cuyo escrito presentó dentro del término de ley.

DISCONFORMIDAD DEL APELANTE

El licenciado Collado Tapia plantea su disconformidad en los siguientes puntos:

1. Que a su representado no se le reconoce la atenuante de la confesión, consagrada en el numeral 5° del artículo 66 del Código Penal. Señala que la

confesión hecha por Monterrey Suárez a sólo un día de sucedido el hecho, se hizo espontánea y oportunamente y que ni antes ni después de la indagatoria existe una declaración testimonial que le impute a su defendido el haber herido mortalmente a Concepción González; que además, no existe testigo que señale haber visto que Monterrey Suárez tuviera arma en ese momento, ni antes ni después del hecho; que los testimonios de los presentes afirman que no vieron el momento en que Concepción González resultó herido.

2. Solicita el reconocimiento de las atenuantes consagradas en el numeral 2° del artículo 66 del Código Penal, al afirmar que nunca hubo en su defendido la intención de causar un mal de la gravedad del ocurrido, lo que se puede apreciar en las circunstancias en que se dio el hecho.

3. Solicita el reconocimiento de la atenuante que establece el numeral 3° de artículo 66 del Código Penal. Señala que su defendido cayó al suelo al recibir un golpe de Concepción González, quien portaba un cuchillo sin cáscara en la pretina de su pantalón, lo que coloca a Monterrey Suárez en condiciones físicas y psíquicas de inferioridad frente al primero.

4. Estima que para la fijación de la pena debió tomarse en consideración el artículo 56 del Código Penal, en su numeral 5, referente a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se produjo el hecho, a objeto de graduar la pena de manera inferior a la impuesta en el fallo apelado. Explica que el hecho se produjo en una cantina y que tanto Monterrey Suárez como Concepción González estaban embriagados; que éste vivía maritalmente con la que años atrás había sido mujer de Monterrey Suárez y con la cual tiene tres hijas; que testigos presenciales afirman que Concepción González hacía demostraciones de karate y cerrando el puño miraba a Monterrey Suárez; que se da una discusión y es Concepción González quien le pega a Monterrey Suárez, quien cae al suelo; que éste resultó herido y fue incapacitado por varios días por el médico forense (f. 89); que Monterrey Suárez, al estar dominado por Concepción González, observó que éste tenía un cuchillo en la cintura, encontrado al momento del levantamiento del cadáver.

No obstante, sugiere que de no compartirse ese criterio, las circunstancias planteadas pueden ser tomadas como eximentes incompletas, previstas en el numeral 7° del artículo 66 del código punitivo y hacerle a su defendido la rebaja correspondiente con fundamento a esa atenuante.

5. Finalmente, agrega que en el proceso se ha evidenciado por declaraciones y el informe médico correspondiente (f. 101) que su defendido se encontraba embriagado, lo que permite en su conjunto concluir que actuó con imputabilidad disminuida en el momento del hecho, en razón de la grave perturbación de su conciencia en esos momentos, lo que permitiría configurar su acción dentro del artículo 25 del Código Penal y aplicarle lo previsto en el numeral 1° del artículo 113 del mencionado código.

Reitera le sean reconocidas a su defendido las atenuantes señaladas o que se aplique lo solicitado en el punto 5° (fs. 602-608).

FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA

El presente proceso penal se refiere a la muerte violenta de Miguel Ariel Concepción González producida por heridas punzo cortantes, que le fueran propinadas el día 20 de junio de 1994 dentro de la cantina La Victoria, ubicada en el distrito de Parita, provincia de Herrera. Vinculado a ese hecho ilícito fue encausado penalmente Edgardo Monterrey Suárez, quien fue declarado culpable por un jurado de conciencia en la audiencia oral y pública realizada el día 3 de octubre de 1995.

FUNDAMENTACIÓN INTELECTIVA

Antes de adentrarnos al análisis de los puntos disentidos por el apelante, es menester señalar que la representación fiscal dejó correr el término legal sin dar respuesta al traslado (fs. 609 y 616).

El tribunal de primera instancia calificó el hecho punible cometido por Monterrey Suárez como homicidio simple, el cual tiene pena de prisión de cinco (5) a doce (12) años; y luego, discrecionalmente, fijó la pena base en ocho (8) años de prisión.

El artículo 56 del Código Penal, enumera siete factores que le sirven al juzgador para fijar la pena base dentro de los límites señalados para cada delito, lo que hace necesario un análisis por parte del juzgador, en donde se reflejen esos factores que rodearon el hecho, entre otros la personalidad del sujeto activo y de la víctima.

Por otro lado, si bien el reconocimiento de las atenuantes genéricas (art. 56 del Código Penal) está reservado a la discrecionalidad del juzgador, éste debe exponer razonada y acertadamente cuáles son los hechos que reflejan su decisión para establecer la pena base. Sin embargo, observa la Sala que el único examen previo a la imposición de la pena base es el siguiente:

> **"La información sobre la conducta observada por el imputado antes de la comisión del hecho punible revela que no ha mantenido una convivencia pacífica, pues su participación en riñas y escándalos se resalta en el documento de folios 170".**

Llama la atención, que la ultima riña y escándalo en donde estuvo involucrado el procesado data de 1982, es decir, que consta que durante los doce (12) años anteriores al homicidio cometido, Monterrey Suárez observó buena conducta y la reincidencia prescribe cinco años después de cumplida la condena anterior (Cfr. art. 72, numeral 2° del Código Penal).

Esa situación, aunada al factor que alega el recurrente, referente a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, contemplada en el artículo 56, numeral 3° del código punitivo, que consiste en la provocación de la víctima quien fue la que agredió primero luego de la discusión. Tal provocación no justifica el actuar desproporcionado del procesado; sin embargo, debe ser considerado por mandato legal, ya que desde el punto de vista de la Criminología, cuyos estudios causales explicativos demuestran que la realización de delitos que atentan contra la vida y la integridad personal, son comunes en sitios de diversión donde se consumen bebidas alcohólicas, como las cantinas y otros lugares recreativos.

Sin afectar la discrecionalidad del juzgador, la realidad procesal indebidamente ponderada, resumida en los factores planteados, nos lleva a fijar la pena base en seis (6) años de prisión.

En cuanto al reconocimiento de las atenuantes contempladas en el artículo 66 numerales 5°, 2° y 3° del Código Penal, en el mismo orden presentadas por el apelante, se tiene lo siguiente:

1° Respecto a la atenuante de la confesión, el tribunal de instancia explicó que la misma no podía tenerse como oportuna porque su responsabilidad aparecía demostrada indiciaria y testimonialmente, situación que se advierte al examinar las declaraciones de los testigos mencionados por el apelante, quienes estuvieron presentes al momento de la trágica riña entre Monterrey Suárez y Concepción González. Además, no se puede perder de vista que los hechos acontecieron en un lugar público, por lo que había testigos presenciales de quién era el responsable del ilícito.

2° En cuanto a que el procesado no tuvo la intención de causar un mal de tanta gravedad como el que produjo; esta Sala ha manifestado que tal circunstancia **"es aplicable en los casos en que el agente haya ideado la comisión del delito previendo su resultado, sin embargo, luego de cometerlo produce un mal mayor o más grave del que previó"** (Resolución de junio 18 de 1991).

En el presente caso, el hecho, por su naturaleza de reacción inmediata a la agresión, no se premeditó. Por su parte, la defensa técnica arguye que Monterrey Suárez en su indagatoria, expresó: **"no sabía que había muerto, yo pensé que sólo lo había herido"**, no obstante el protocolo de necropsia al describir las

heridas encontradas en el cuerpo sin vida de Concepción González (f. 108), demuestra que había la intención de causar un mal verdaderamente grave, máxime que tenía la opción de repeler la agresión con las mismas armas **-puños-** utilizadas por el occiso.

3° En cuanto al reconocimiento de la atenuante que se refiere a las condiciones físicas o psíquicas que colocaron al agente en situación de inferioridad, no observa la Sala que esa situación se hubiese dado en la persona del procesado Monterrey Suárez. En ese sentido, cabe reiterar lo dicho en el párrafo anterior, pues en todo momento el sujeto activo y la víctima estuvieron en igualdad de circunstancias: se daban golpes. En la indagatoria rendida el 21 de junio de 1994, a las nueve de la mañana, Monterrey Suárez no menciona que Concepción González le hubiera sacado cuchillo alguno, ni en ese sentido se expresan los testigos, por lo que la alusión al cuchillo encontrado en la pretina del pantalón -parte trasera- de Concepción González, no se puede considerar.

4° Con respecto a la imputabilidad disminuida alegada, porque Monterrey Suárez se encontraba bajo los efectos del licor, esta Sala ha reiterado que el sujeto que actúa en estado de embriaguez voluntaria es responsable de sus actos, tal como lo prevé nuestra legislación vigente al establecer que sólo la embriaguez involuntaria o fortuita, si es total, genera una causa de inculpabilidad (Cfr. art. 29, numeral 1° del Código Penal).

Ahora bien, el apelante también ha solicitado que el estado de embriaguez de su defendido se tome en consideración como una atenuante de eximente incompleta, prevista en el numeral 7° del artículo 66 de nuestro código punitivo. Sobre esta solicitud cabe recordar que la eximente incompleta de embriaguez sólo operaría si la misma, siendo involuntaria o fortuita, fuere semi plena, lo que no ocurre en este caso; por tanto se desestima la solicitud del apelante.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REFORMA la sentencia apelada en el sentido de CONDENAR a EDGARDO MONTERREY SUÁREZ, de generales conocidas en autos, a la pena de seis (6) años de prisión e inhabilitación por igual término, por el homicidio de MIGUEL ARIEL CONCEPCIÓN GONZÁLEZ. Tiene derecho MONTERREY a que se le descuente como parte de la pena cumplida el tiempo que ha estado detenido de manera preventiva por esta causa.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA QUE CONDENA A JOSÉ ÁNGEL CRUZ CHÁVEZ A LA PENA DE 16 AÑOS DE PRISIÓN, COMO RESPONSABLE DEL HOMICIDIO COMETIDO EN PERJUICIO DE ROGELIO CASTRILLO ORTEGA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado Miguel Quiroz, actuando en su condición de defensor de oficio de José Angel Cruz Chávez, interpuso recurso de apelación contra la sentencia calendada 6 de octubre de 1995, dictada por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, que condena a Cruz Chávez a la pena de 13 años de prisión, como responsable del delito de homicidio cometido en perjuicio de Rogelio Castillo Ortega.

De acuerdo con el recurrente, su defendido debe ser sancionado conforme al

tipo penal previsto en el artículo 131 del Código Penal, por considerar que no cometió el delito de homicidio "con maldad, con medios atroces o con premeditación" (f. 724).

Finalmente, se sostiene que Cruz Chávez debe ser sancionado con pena que oscile entre "8 a 5 años" de prisión, habida cuenta de su condición de "delincuente primario" (f. 725).

Conocidos los argumentos medulares del recurrente, se pasa a resolver la alzada, sólo sobre los puntos a que se refiere el impugnante, de conformidad con lo que establece el artículo 2428 del Código Judicial.

La lectura del cuaderno penal indica que en la noche del 6 de abril de 1991 tuvo lugar un baile típico en la comunidad de Pedernal, ubicada en el Distrito de Santiago, provincia de Veraguas y que en horas de la madrugada (7 de abril), José Angel Cruz Chávez y Rogelio Castillo Ortega, quienes permanecieron en el baile, sostuvieron una riña en la cual Rogelio Castillo recibió varias heridas que le fueron inferidas por Cruz Chávez, quien se sirvió de un cuchillo para cometer el hecho. El protocolo de necropsia revela que la víctima presentaba "9 heridas por arma blanca", y que falleció a consecuencia de "Shock hipovolémico. Sección de la arteria mesentérica superior, Heridas por arma blanca" (f. 91).

Basado en la "cantidad de heridas que tiene el cadáver", el tribunal a-quo encuadró la conducta del reo en artículo 132 del Código Penal, por considerar que el homicidio fue ejecutado por "medios de ejecución atroces y/o con premeditación" (f. 708). La sentencia impugnada individualiza en 16 años la pena base y toma en cuenta la confesión espontánea y oportuna del agente, por lo que disminuye en una sexta parte la pena base y fija en 13 años y 4 meses de prisión la pena aplicable al reo (f. 708 vlta). Cabe señalar que el sindicado renunció a ser juzgado ante jurado de conciencia (f. 684), manifestación que fuera aceptada por el Tribunal de la causa (f. 687).

Para decidir el reclamo que formula la alzada, debe aclararse que la premeditación se presenta cuando se tiene "el propósito firme, reflexivo y bien meditado tendiente a la ejecución de la prohibición penal. Tal propósito se caracteriza por mantenerse persistente durante el lapso que sea necesario hasta realizar todos los actos encaminados a procurar el resultado criminal" (Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 21 de noviembre de 1994).

Con base en la anterior apreciación, corresponde determinar si en autos está acreditado plenamente que el imputado ejecutó el delito de homicidio en forma premeditada. Para ello la Sala, con los elementos probatorios allegados al cuaderno penal, debe ubicarse en el tiempo y lugar de la comisión del hecho punible.

Sostiene el imputado que en la noche del hecho asistió a un baile típico y que "... andaba sólo, bastante en trago, ...". Agrega que "al salir del baile, con destino hacia mi casa ... salió Rogelio, jumao me dijo `Hey espérame ahí , yo lo espere y de pronto se agacho y del suelo recogió dos piedras y me las tiro, ninguna me pego, se acerco más y me tiro una trompada, la cual me agache, nos agarramos a la lucha, rodamos por el suelo, y allí saqué de la cintura un cuchillo, y le di varias cortadas, no se exactamente donde, yo me levanté y Rogelio quedo tirado en el suelo" (f. 10).

Ahora bien, sostiene el testigo Pastor Ureña Sáenz que observó cuando la víctima llegó "temprano" al baile típico y que, aproximadamente a las "las doce de la noche ..." el sindicado "se veía ... bastante jumao" (f. 64).

Por su parte, Cándida Castillo Figueroa, observó a la víctima a "las tres de la mañana andando por ahí ... lo vi medio jumao ...". Esta testigo agregó que durante la fiesta bailable "No hubo problema de ninguna clase ..." (f. 139).

Finalmente Jorge Luis Muñoz Ortega advierte que observó al sindicado y al finado, "uno por aquí y otro por allá caminando" (f. 144).

Los anteriores elementos probatorios parecen indicar que el hecho punible

ocurrió cuando el sindicado y la víctima coincidieron en la carretera, luego que salieron del lugar donde se desarrollaba el baile. De ser esa una premisa válida, aunada a la declaración de Diomedes Suazo Ortega, quien afirma que el sindicado "cargaba siempre un cuchillo en la pretina, le gustaba peliar mucho ..." (f. 115), se puede concluir que en este caso nada indica que el sentenciado hubiere concebido la ejecución del delito con anterioridad a los hechos, es decir, que la actuación no autoriza a tener como concurrente en el hecho la circunstancia de la premeditación.

En cuanto al cargo que realiza el a-quo, en el sentido de que el imputado realizó el delito por medios de ejecución atroces, si bien es cierto que Rogelio Castillo Ortega recibió múltiples heridas con arma blanca, la Corte considera que en el presente proceso no está comprobado que el agente tenía la intención de hacer sufrir innecesariamente a la víctima y causar su muerte a través del sufrimiento. Al respecto la Corte ha manifestado que estamos en presencia de un delito de homicidio mediante la utilización de medios de ejecución atroces cuando el agente "inflige mayor dolor del necesario para obtener el resultado de la muerte" (Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 14 de abril de 1993).

Por desestimada la aplicación en el presente caso de las circunstancias agravantes previstas en los numerales 2 y 3 del artículo 132 del Código Penal, la Sala objeta el reconocimiento realizado por el a-quo de la atenuante común del numeral 5 del artículo 66 del Código Penal, ya que el propio José Ángel Cruz Chávez manifestó que, luego de herir a la víctima, "me fui para mi casa, al llegar mi (sic) quite la ropa ... y me acosté. A eso de las siete de la mañana me fueron a buscar a mi casa dos agentes ... de la Policía, y me dijeron que había matado a una persona, regresando al rato al cuartel de Policía de Santiago" (f. 11). El anterior relato es corroborado por Henry Delgado González (f. 167) y Demetrio Montenegro Vásquez (f. 172), miembros de la Policía Nacional, quienes aprehendieron al imputado en su casa. Estos elementos probatorios evidencian que el sindicado no se entregó voluntariamente a las autoridades y que, aunque admitió su acción delictiva, en varias oportunidades modificó su relato, entorpeciendo el desenvolvimiento de las investigaciones. No obstante lo anterior, no puede esta Superioridad desconocer el reconocimiento de esa atenuante común, en virtud del principio de "reformatio in pejus".

Por establecido que la conducta del sentenciado se adecua al tipo del homicidio simple, cuya sanción, de acuerdo al artículo 131 del Código Penal, es de 5 a 12 años de prisión, de acuerdo con lo normado por el artículo 56 del Código Penal se fija la pena base en 12 años de prisión. La pena así fijada se disminuye en una sexta parte, por concurrir en favor del encartado la atenuante prevista en el numeral 5 del artículo 66 del Código Penal la cual, como viene dicho, fue reconocida por el tribunal a-quo. Así las cosas, la pena líquida aplicable al sentenciado queda fijada en 10 años de prisión.

Por las anteriores consideraciones, LA CORTE SUPREMA, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REFORMA la sentencia calendada 6 de octubre de 1995, dictada por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, para CONDENAR a José Ángel Cruz Chávez a la pena principal de diez (10) años de prisión, y confirma en todo lo demás.

Devuélvase y Notifíquese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JUICIO SEGUIDO A JOAQUÍN MARTÍNEZ SMITH POR DELITO CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL, EN PERJUICIO DE ARACELYS RAQUEL ALVEY ACOSTA (APELACIÓN DE SENTENCIA). MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Mediante Oficio N° 921-S, calendado el 25 de marzo de 1996, el Secretario del Segundo Tribunal Superior de Justicia, remitió a la Secretaría de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, el expediente que contiene el proceso seguido a **JOAQUÍN MARTÍNEZ SMITH** por delito contra la vida e integridad personal, en perjuicio de **ARACELYS RAQUEL ALVEY ACOSTA**, a fin de que se resuelva el recurso de apelación anunciado y formalizado por su abogado defensor.

LOS HECHOS

En la fase instructoria de este proceso, se incorporaron a los autos los medios probatorios que dan cuenta que el día 9 de mayo de 1993, en el Corregimiento de Puerto Pilón, del Distrito de Colón y provincia del mismo nombre, se reportó la muerte violenta de la señora Aracelys Raquel de Acosta, como consecuencia de un disparo con arma de fuego que recibió en el pecho, que laceró su corazón y le produjo hemopericardio y hemotórax (cfr. protocolo de necropsia fs. 19-30).

Como autor del hecho se encausó a Joaquín Martínez Smith, persona con quien se encontraba la occisa en la recámara en el momento en que se escuchó un disparo del arma de fuego que aquel accionaba. Este hecho tuvo lugar mientras la amiga de Aracelys, la joven Dilsa Damarys Garcés y Victoriano Rojas se encontraban en la sala de la misma residencia viendo televisión.

Los testimonios de Garcés y Rojas, al igual que la declaración indagatoria de Martínez Smith, indican que el incidente se produjo dentro de la recámara de la vivienda de éste, sin que antecediera otra manifestación violenta. Consta igualmente que la madre de Martínez una vez que ocurrió este fatal incidente, le recomendó que se fuera del lugar.

El caso fue sometido a juicio con la intervención de jurados de conciencia, quienes profirieron un veredicto de culpabilidad.

LA SENTENCIA APELADA

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 2389, párrafo segundo del Código Judicial, el Segundo Tribunal Superior de Justicia se limitó a fijar la pena que correspondía. Con ese propósito tomó en cuenta las previsiones normativas referentes a la individualización de la pena y que se encuentran en el artículo 56 del Código Penal, llegando a la conclusión de que se trataba de un homicidio simple o básico, cuyo intervalo penal es de 5 a 12 años de prisión. Como elemento importante para fijar discrecionalmente el monto de la pena, se ponderó la falta de acciones de ayuda, auxilio o socorro a la víctima de parte del victimario y su actitud reiterada de evadir la acción de la justicia, al darse a al fuga en la fase instructoria y durante el plenario.

ARGUMENTOS DE LA DEFENSA

El abogado defensor al sustentar el recurso, se señala que su patrocinado sólo tenía ocho días de conocer a la infortunada Aracely Alvey y sus relaciones amorosas no habían dado lugar a motivo o intención de cegar la vida de su novia. Sostiene además, que la única testigo del incidente informó que la pareja estaba jugando con el arma en la recámara y cuando entraron al cuarto para auxiliarla, aún la encontraron riendo. Con relación a su condición de prófugo durante dos etapas del proceso seguido en su contra, la defensa explica que Martínez Smith temía por su vida ante la reacción de la amiga de Aracelys y luego cuando fue capturado, en el Centro Penitenciario fue víctima de un atentado que lo obligó a evadirse.

Finalmente, sostiene la defensa que su poderdante en todo momento se ha mostrado arrepentido de lo ocurrido y que la agravación de la pena impuesta no debe fundarse en su condición de prófugo porque "la libertad es un derecho innato de todo ser y es una reacción instintiva y natural procurar este bien cuando se

ha perdido" (cfr. fs. 357).

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Es necesario anotar que el representante del Ministerio Público al correrle traslado del escrito de sustentación de la alzada, en su escrito de 23 de febrero de 1996, que obra a fojas 360 a 362, señala que las alegaciones vertidas por la defensa no encuentran sustento en las pruebas aportadas al expediente, pues Martínez Smith no prestó ayuda a la víctima y por el contrario, se dio a la fuga, abandonándola a su propia suerte y luego al ser capturado, se evadió del penal. A esto agrega que no cabe hablar de arrepentimiento cuando el penado en ningún momento asumió su responsabilidad ante la justicia, ni ante la familia de la occisa. Concluye pidiendo la confirmación de la sentencia impuesta.

En primer lugar, no cabe duda que estamos ante un caso de homicidio básico y que el intervalo penal que establece el artículo 131 del Código Penal es de cinco a doce años de prisión. Ese tramo fijado por el legislador es el que permite al juzgador hacer uso de su potestad de individualización judicial, eso sí, debidamente fundamentado en los principios y requisitos que la ley señala. En el caso de autos, el Tribunal fijó la pena en el máximo de la establecida por ese tipo penal y para ello, señaló dos factores: la omisión de auxilio o socorro a la víctima y la declaración de rebeldía del procesado, desde el mismo instante en que tuvo lugar el hecho delictivo y posteriormente, al fugarse de la cárcel cuando fue notificado del auto encausatorio.

La Corte siempre ha respetado el uso correcto y equilibrado del principio de discrecionalidad que se le confiere al juzgador para fijar la pena en los casos que son de su competencia. Respeta también la independencia judicial interna, en el sentido de no interferir en los criterios objetivos y de sana crítica que utiliza el Juez al momento de dictar la sentencia correspondiente. Al resolver los medios de impugnación de que se valen las partes para pedir la revisión de las decisiones de los Tribunales, al tenor del artículo 2428 del Código Judicial, solamente se consideran o revisan los puntos que trae a colación el recurrente.

En el presente caso los puntos que ha traído el apelante se refieren a la fijación de la pena, la cual considera excesiva porque su defendido no tuvo la intención de matar a su novia, porque su evasión y fuga es una reacción por miedo y por rescatar la libertad; y, además, ha manifestado estar arrepentido de la gravedad de los resultados de su conducta. Tal como la afirma el Fiscal Superior, los argumentos de la defensa no guardan la debida correlación con la realidad procesal, pues los elementos probatorios acumulados dan cuenta de lo contrario y por ello, no es posible acceder a lo solicitado.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia apelada.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SOLICITUD DE FIANZA DE EXCARCELACIÓN

SOLICITUD DE FIANZA DE EXCARCELACIÓN A FAVOR DE JUSTO LUIS AGUILAR Y ERIC OMAR AGUILAR, SINDICADOS POR DELITO CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL EN DETRIMENTO DE MANUEL SMITH. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado José Concepción presentó recurso de apelación contra auto calendado 6 de marzo de 1996, mediante el cual el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial negó el beneficio de fianza excarcelaria solicitado a favor de Eric Omar Aguilar y Justo Luis Aguilar, sindicados por el delito de homicidio cometido en perjuicio de Manuel Smith.

La disconformidad del recurrente radica en que el fallo impugnado "únicamente toma como punto referencial el elemento de la muerte violenta de ... MANUEL SMITH ... no obstante pasó inadvertido el cúmulo de prueba testimoniales de las cuales se desprende con sinceridad meridiana que hubó (sic) un cruce de disparos antes de que resultara herido el hoy finado" (f. 12). Plantea igualmente que el único que portaba arma de fuego el día en que acaecieron los hechos fue "JUSTO LUIS AGUILAR MOSQUERA, él cual inclusive lo confiesa y excluye de absoluta responsabilidad a su hermano ERIC OMAR AGUILAR MOSQUERA" (fs. 12-13).

Una vez conocidos los argumentos del recurrente, pasa la Sala a resolver la alzada de conformidad con el caudal probatorio obrante en autos y en atención a lo dispuesto en el artículo 2428 del Código Judicial.

La investigación recae sobre la muerte de Manuel Smith, ocurrida en horas de la tarde del día 21 de enero de 1996, en el sector de Playa Blanca, comprensión del Distrito de Portobelo, provincia de Colón. De acuerdo con las consideraciones médico legales consignadas en el protocolo de necropsia, la muerte sobrevino como consecuencia de "A. SHOCK HEMORRÁGICO. B. LACERACIÓN DE HÍGADO, ESTÓMAGO E INTESTINO. C. HERIDO POR ARMA DE FUEGO" (f. 66).

El examen de las sumarias permite establecer que Justo Luis Aguilar se encuentra confeso de haber utilizado su arma de fuego el día en que acaeció el hecho de sangre. Esta admisión se produjo cuando fue sometido a los rigores de la declaración indagatoria, en la que explica que "mi hermano Eric Omar y Justiniano, estaba paseando por la playa cuando un muchacho que se encontraba en un grupo le arranco la cadena de mi hermano Justiniano y al otro hermano Eric le intentaron quitarle la esclava ... se formo una riña ... salieron a relucir arma de fuego ... se oyeron disparos ... Eric estaba sangrando ... al ver en peligro la vida de ellos ... saque mi arma hice un disparo con la intención de dispersar la multitud ... mi intención no era herir a nadie" (f. 37). El indagado también manifestó que "fui el único de mis hermanos que realizó un disparo" (f. 94).

De igual manera rindió indagatoria Eric Omar Aguilar, quien sostuvo que "le arrancaron la cadena a mi hermano, posteriormente nos arrojaron contra el piso y me dieron un botellazo en la cabeza cerca de la frente, y intentaron despojarme de mi pertenencia" (f. 43), ... "mi hermano JUSTO LUIS AGUILAR, sacó su arma de fuego, y realizó disparos para dispersar a la gente que nos estaban agrediendo" (f. 85). Al ser cuestionado sobre el porte de arma de fuego contestó que "yo tengo arma de fuego pero ese día yo la cargaba en mi carro porque estaba lloviendo" (f. 43).

También fueron incorporadas al expediente las declaraciones de Isaac Abdul Aguilar Mosquera (fs. 89-91), Mireya Cantoral Pérez (fs. 106-107) y Debora Lizbeth Armostrong (fs. 108-110), quienes coinciden en señalar que Justo Luis Aguilar empleó su arma de fuego con la única finalidad de alejar a un sinnúmero de individuos (entre ellos el ahora occiso) que agredían físicamente a sus hermanos Eric Omar y Justiniano Aguilar, para apropiarse de sus prendas.

Tras el análisis de los elementos probatorios que hasta ahora recoge la encuesta penal, se pone de manifiesto una clara vinculación del imputado Justo Luis Aguilar con el homicidio que se investiga, la que resulta fundamentalmente de su confesión de haber disparado su arma de fuego contra las personas que supuestamente atacaban a sus hermanos. A pesar de que, según él, su intención no era la de herir o matar a nadie, lo allegado a las sumarias no permite a la Sala realizar con firmeza jurídica un juicio de valor justo sobre este aspecto, por lo que el beneficio de excarcelación impetrado a su favor hasta el momento resulta improcedente, a la luz de lo dispuesto en el artículo 2181 del Código Judicial, reformado mediante la ley 3, de 22 de enero de 1991.

En cuanto a la situación jurídica de Eric Omar Aguilar, las constancias de autos autorizan a dar por descartada su participación en el hecho delictivo, pues de ellas se desprende claramente que el único miembro de la familia Aguilar que sacó a relucir su arma de fuego la tarde del 21 de enero de 1996 fue Justo Luis Aguilar.

En vista de que no existen suficientes elementos probatorios que vinculen a Eric Omar Aguilar con el hecho punible que se investiga, la Sala estima conveniente revocar de oficio la medida restrictiva de libertad decretada en su contra y ordenar su inmediata libertad, con fundamento jurídico en lo que establece el párrafo segundo del artículo 2178 del Código Judicial, ello sin perjuicio de que nuevas evidencias allegadas al cuaderno penal varíen su status procesal.

Por lo antes expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REFORMA el auto de 6 de marzo de 1996 proferido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, en el sentido de REVOCAR la orden de detención preventiva que pesa sobre Eric Omar Aguilar, y lo CONFIRMA en lo demás.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES (fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE APREHENSIÓN PROVISIONAL

SOLICITUD DE DESAPREHENSIÓN DE LA CUENTA N°469-0196 DEL BANCO NACIONAL A NOMBRE DEL FONDO ESPECIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, POR INDEMNIZACIÓN HECHA POR LA CÍA. DE SEGUROS CHAGRES, S. A. POR LOS DAÑOS SUFRIDOS POR LA AERONAVE CESSNA N°421-HT, PROPIEDAD DE LUIS E. CARTER. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, OCHO (8) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado Iván Tejeira Q., en su condición de apoderado judicial especial del ciudadano **LUIS E. CARTER** manifiesta que comparece como Tercero Incidental para formular petición de medidas liberatorias.

FUNDAMENTO DEL POSTULANTE

El licenciado Tejeira en escrito visible de fojas 2 a 6 del cuadernillo incidental, solicita las siguientes medidas liberatoria:

1. Que se declare sin efectos legales, la orden judicial impartida por el Juzgado Octavo del Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial, mediante la cual se dispuso mantener la Aeronave Cessna, con matrícula N° 421, modelo 421 C., propiedad del Tercero Incidentista, bajo la custodia legal de la Procuraduría General de la Nación.

2. Que se decida jurisdiccionalmente que la suma de B/.40,000.00 mediante la cual la compañía de Seguros Chagres, S. A. pagó en concepto de indemnización total, por el accidente sufrido por la aeronave Cessna, 421 C; Serie N° 421-C-0116, con registro de los Estados Unidos de Norteamérica N° 421 Ht, que es propiedad del Tercero Incidentista, le sea entregada. Suma que está depositada en el Banco Nacional, Cuenta N° 469-0196, Fondo Especial de la Procuraduría General de la Nación.

3. Que se dicte cualesquiera medidas liberatorias y de otra índole que

fuere menester, en favor de su representado relacionada con la aeronave meritada.

Lo anterior lo fundamenta con los siguientes de hechos:

1. Su mandante adquirió la propiedad de la aeronave marca 421 C, con serie N° 421 C 0116, con registro de los Estados Unidos de Norteamérica N° 421 HT, lo que consta en la escritura Pública N° 10.350 de 17 de julio de 1986 de la notaría Primera del Circuito de Panamá.

2. La nave fue piloteada hacia territorio nacional sin autorización de sus propietarios y aprehendida por autoridades de la República , por estar supuestamente el piloto, señalado de haber incurrido en actos ilícitos.

3. Mediante vista N° 198 de 15 de junio de 1988 la Fiscalía Primera del Circuito de Panamá solicitó un sobreseimiento provisional, criterio acogido por el Juzgado Octavo del Circuito de lo Penal, del Primer Circuito Judicial de Panamá, en auto N° 51 de 24 de junio de 1988; que además ordenó que la aeronave fuera mantenida a órdenes de la Procuraduría General de la Nación.

4. Por medio de notas de la D. E. A. a cuyos suscriptores no se les tomó declaración alguna ni se les pidió reconocimiento de sus firmas, se trató de sugerir que la nave transportaba drogas, pero no consta en el sumario pruebas objetivas de esas aseveraciones, sino que sólo se afirmó la incautación de armas en esa aeronave. Por tanto, no aparece tipificación de delito doloso ni culposo de ninguna naturaleza.

5. La Dirección de Seguridad Aérea de la Dirección General de Aeronáutica Civil, le asignó a la nave las siglas HP-1093, lo que consta en nota oficial N° 456/89 de 25 de noviembre de 1986.

6. En Informe de Decomiso y Venta de la aeronave Cessna, matrícula HP N° 1093 rendido por el Departamento de Auditoría de la Contraloría General de la República en la Dirección de Aeronáutica Civil, establece: a) Que la nave con anterior registro N° 421 HT de los Estados Unidos, fue adquirida mediante compra legalmente establecida por Luis E. Carter; b) Que la aeronave no forma ni formó parte del patrimonio de la Dirección de Aeronáutica Civil ni del Ministerio Público ni del patrimonio del Estado Panameño; c) Que la aeronave fue entregada y puesta a órdenes de la Procuraduría General de la Nación; d) Que estando la nave aérea bajo la tenencia de la Procuraduría General de la Nación, fue objeto de operaciones de tipo comercial efectuadas al margen de la Ley: fue vendida, sin autorización legal alguna a la empresa Parfomarce Aircroft Company Inc., por la suma de B/.65,000.00; dinero que no ingresó en los fondos de la Dirección de Aeronáutica Civil ni del Ministerio Público; e) Que la nave aérea fue protegida con una póliza de Casco Aéreo N° 56-C autorizada por el licenciado Carlos Villalaz, Procurador General de la Nación, siendo la aseguradora la Compañía de Seguros Chagres; f) Que la Compañía de Seguros Chagres, S. A. el 20 de octubre de 1989 entregó el cheque N° 41837 por la suma de B/.40,000.00 a favor de la Procuraduría General de la Nación, entregado al licenciado Carlos Villalaz, en concepto de indemnización total y definitiva por la pérdidas sufridas del siniestro verificado el 7 de abril de 1989, por la nave Cessna propiedad de su representado. Suma que fue depositada en el Banco Nacional en la cuenta N° 469-0196 Fondo Especial de la Procuraduría General de la Nación.

Aporta como pruebas: poder otorgado por Luis E. Carter M. (f. 1); copias autenticadas del expediente contentivo del proceso penal sobre el hallazgo de armas de la aeronave Cessna radicado a el Juzgado Octavo del Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial (7-49); copia autenticada de la escritura pública N° 10,350 de 17 de julio de 1986, de la Notaría Primera del Circuito de Panamá (59-61); Copia autenticada del Informe de Decomiso y Venta de la Aeronave Cessna Matrícula N° 1093 rendido por el Departamento de Auditoría de la Dirección de Aeronáutica Civil al Contralor General de la República (FS. 63-130).

Como fundamento de Derecho señala la Constitución Nacional en sus artículos 44 y concordantes; el Código Judicial artículos: 2209, 2210, 2213, 2057 A) a 2057 C), adicionados por el artículo 14 de la Ley 3 de 1991. El Código Penal artículo 93 ordinal 4, Ley 13 de 27 de julio de 1994 y artículo 100. Jurisprudencia:

"Aprehensión de Bienes". Recogida en la "Jurisprudencia Penal" de Jaime Jované y José Martín Rodríguez, publicación Jurídica de Panamá, primera edición, pág.90.

ANTECEDENTES

Las pruebas autenticadas, anexadas con la solicitud formulada por el licenciado Iván Tejeira Q., son demostrativas que efectivamente, para el 18 de enero de 1987, se inició una investigación por parte del Ministerio Público sobre la aeronave N° 421-Ht, tipo Cessna 421 que fue decomisada el 6 de junio de 1986, después de la aprehensión del prófugo de la justicia norteamericana, Philip Bueter, sospechoso de estar vinculado al tráfico internacional de drogas. La nave aérea tenía un fuerte olor a cocaína que alteró a los perros adiestrados, teniéndose informe que era utilizada para transportar droga desde varios países hacía los Estados Unidos de Norteamérica.

La aeronave puesta a órdenes de Aeronáutica Civil para su custodia fue sometida a servicio de mantenimiento consistente en desarmarla casi completamente, para revisarle cables, controles etc, según las especificaciones de su fabricante. En esa oportunidad, se sacó el tanque auxiliar de combustible colocado en la nariz de la aeronave, dado que no se requiere porque los viajes en Panamá son cortos. El tanque sin ser desarmado fue llevado al depósito de la institución, que está a cargo de una sola persona.

Nueve meses después al necesitarse una bomba de gasolina se trató de darle uso al tanque, oportunidad en la cual se encontró dentro del mismo, cuatro armas de fuego automáticas.

Sobre la investigación de esta sumaria, la Fiscalía Primera del Circuito de Panamá, solicitó sobreseimiento provisional. Opinión acogida por el Juzgado Octavo de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial, mediante resolución del 24 de junio de 1988, quien de conformidad con lo normado en la Ley 23 de 1986 artículo 22, ordenó que la aeronave estuviera a órdenes de la Procuraduría General de la Nación (fs. 7-58).

Se aprecia copia de la escritura pública N° 10,350 que protocoliza los documentos debidamente autenticados relativos al contrato de compra y venta de la aeronave marca Cessna 421-C celebrado por la sociedad Executive Mobility Inc., vendedora y el señor Luis E. Carter M., comprador (fs. 59-62).

Del Informe de Decomiso y Venta de la aeronave Cessna, matrícula HP-1093, rendido por la Contraloría General de la República, se determinó que la aeronave Cessna fue vendida **-sin ajustarse a las disposiciones establecidas-** a la empresa Performance Air Craft Company de Fort Lauderdale Florida por la suma de B/.40,000.00, dinero que por autorización del ex-procurador de la República, licenciado Carlos Villalaz, fue recibido por Manuel De J. Valderrama, quien luego le entregó el dinero recibido en su despacho (f. 93). Dinero que no fue recibido en los Fondos del Ministerio Público (f. 96).

La aeronave Cessna modelo 421 C matrícula HP-1093 fue asegurada estando a órdenes de la Procuraduría General de la Nación con la póliza de seguro N° 56-C de la Compañía de Seguros Chagres, S. A. desde 9 junio de 1988 a 9 de junio de 1989 (f. 120).

El 7 de abril de 1989 la aeronave se accidentó en la provincia de Panamá y la compañía de Seguros Chagres pagó en concepto de indemnización total, por las pérdidas sufridas B/.40,000.00 mediante cheque N° 41837 del 20 de octubre de 1989, depositado en el Banco Nacional, cuenta N° 469-0196 Fondo Especial de la Procuraduría General (f. 70).

SITUACIÓN PROCESAL

De la situación planteada, la Sala observa que la aprehensión de la aeronave tuvo como fundamento indicios de que era utilizada para transportar sustancias ilícitas de un país a otro.

El artículo 22 de la Ley N° 13 de 27 de julio de 1994 que reforma, modifica

y adiciona algunos artículos de la Ley N° 23 de 30 de diciembre de 1986, determina que las peticiones de levantamiento de la aprehensión provisional de los instrumentos y demás bienes que estuvieran aprehendidos provisionalmente a órdenes de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, serán resueltas por el Tribunal competente, quien previa opinión del funcionario instructor, podrá otorgar la tenencia o administración provisional de los bienes.

Esta ley es aplicable al caso bajo examen, toda vez que el artículo 32 del Código Civil establece:

> "Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación".

Siendo así, esta Sala esta impedida para conocer la incidencia presentada, correspondiendo al tribunal competente **-Juzgado Octavo de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial-** pronunciarse al respecto.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, SE INHIBE de conocer la solicitud de desaprehensión sobre la cuenta N° 469-0196 depositada en el Banco Nacional de Panamá a nombre del fondo Especial de la Procuraduría General de la Nación, en concepto de indemnización hecha por la Compañía de Seguros Chagres S. A. por los daños sufridos por la aeronave Cessna, con matrícula N° 421, modelo 421 C., y Declina el negocio al tribunal competente.

Notifíquese y Envíese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TRIBUNAL DE INSTANCIA

SOLICITUD DE ACUMULACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL TRÁMITE QUE DECIDE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A FELIPE CAMARGO AMAYA, SINDICADO POR EL DELITO CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL EN PERJUICIO DE ERNESTO GIL VEGA KENNEDY. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Antes de la fijación de la fecha de audiencia de casación en esta causa, el licenciado Eugenio Carrillo Gomila ha presentado libelo en el que solicita la acumulación de las causas penales que se siguen contra Felipe Camargo Amaya.

Según expresa el letrado, "Es de conocimiento del Tribunal Superior (sic) que a nuestro mandante se le siguen varios procesos en diferentes juzgados por el mismo designio y cuyos procesos se encuentran en la etapa de fallar, por tanto pedimos se dicte una última sentencia para los casos antes expuestos" (f. 355). En el mismo sentido, solicita se "ORDENE LA ACUMULACIÓN de todas las causas penales que se siguen en contra de nuestro mandante, en los diferentes juzgados" (f. 356).

Salta a la vista, en primer lugar, que la solicitud presentada no cumple con las exigencias que a estos efectos establece el artículo 714 del Código

Judicial, de donde resultaría la imposibilidad práctica de atenderla. Por otra parte, se platea una consideración de oportunidad procesal, como lo es que el recurso de casación no es una instancia más, y que, por su carácter extraordinario, atribuye a la Sala Penal de la Corte Suprema un conocimiento restringido de la causa, la que no se encuentra entonces abierta a la proposición de iniciativas procesales indiscriminadas.

Valga advertir que acceder a esta solicitud tendría por efecto desvirtuar la eficacia de la resolución de 24 de enero de 1996, mediante la cual se delimitó el marco de la intervención de la Sala Penal en esta causa, al admitir el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de 28 de agosto de 1995, proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, "solo en cuanto a la cuarta causal invocada" (cfr. 332). En esa oportunidad la Sala desestimó la formalización de tres causales invocadas, dos de las cuales, la primera y la segunda causal, pretendían que se casara la sentencia objeto de censura con base en que el Tribunal competente no había realizado la acumulación de las causas que siguen contra Camargo Amaya.

Por lo antes expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NIEGA la solicitud de acumulación interpuesta por el licenciado Eugenio Carrillo Gomila dentro del recurso extraordinario de casación que censura la sentencia de 28 de agosto de 1995, proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante la cual se confirma la pena de prisión impuesta a Felipe Camargo Amaya por la comisión del delito contra la libertad individual, en perjuicio de Ernesto Gil Vega Kennedy.

Notifíquese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DENUNCIA PRESENTADA POR PATRICIO JANSON, CONTRA EUSTACIO FÁBREGA, DIRECTOR DE AERONÁUTICA CIVIL, IRASEMA DE AHUMADA, SUBDIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA, MIGUEL VON SEIDLITZ, SUBDIRECTOR GENERAL TÉCNICO Y EDUARDO BERNARD, ASESOR LEGAL DE LA DIRECCIÓN DE AERONÁUTICA CIVIL, POR LOS SUPUESTOS DELITOS DE AMENAZA DE MUERTE CONTRA EL DENUNCIANTE, ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR Y OTROS DELITOS. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Para su valoración legal, ingresa a esta máxima corporación de justicia, el expediente contentivo de la denuncia penal presentada por el señor Patricio Janson contra **EUSTACIO FÁBREGA**, Director de Aeronáutica Civil, Irasema de Ahumada, Subdirectora General Administrativa, Miguel Von Seidlitz, Subdirector General Técnico y Eduardo Bernard, Asesor Legal de la Dirección de Aeronáutica Civil, por los supuestos delitos de amenaza de muerte contra el denunciante, asociación ilícita para delinquir, conspiración para defraudar al Estado, corrupción de funcionarios públicos, delitos contra los medios de transporte y de los delitos que resultaran de la denuncia".

OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Mediante Vista N° 28 del 8 de abril de 1996, el Procurador General de la Nación, luego de resumir el señalamiento del denunciante y las diligencias efectuadas por la Fiscalía Segunda Delegada, concluye que los delitos atribuidos por el señor Patricio Janson a los funcionarios denunciados, no han podido demostrarse. Señala que el procedimiento utilizado en la Licitación Pública N° 006/94/DAC estuvo apegada a los requerimientos establecidos en esa materia por

el Código Fiscal. Por tanto, la adjudicación definitiva a la empresa Sikorsky Aircraft Panamá, INC, hecha por la Dirección General de Aeronáutica Civil, mediante resolución N° 073-AJ-DG-DAC se fundamentó en las conclusiones a que arribó la Comisión Evaluadora, quien se encargó de estudiar las propuestas desde el punto de vista técnico y económico.

Por esas razones, solicita se dicte sobreseimiento definitivo de carácter impersonal en favor de Eustacio Fábrega, Irasema Rosas de Ahumada y Miguel Von Seidlitz; y en cuanto a Eduardo Bernard se decline la competencia a la esfera circuital (fs. 669-676).

INFORME DEL FUNCIONARIO DENUNCIADO

De conformidad con lo normado en el artículo 2129 del Código Judicial, el licenciado Eustacio Fábrega López, Director General de Aeronáutica Civil, rinde a solicitud de la Fiscalía Segunda Delegada de la Procuraduría General de la Nación, declaración mediante certificación jurada, sobre los hechos en que se fundamenta la denuncia en su contra, de manera resumida señala lo siguiente:

1. Que está a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil desde el 1° de septiembre de 1995. Enumera las funciones de su cargo contempladas en la Ley Orgánica de la Dirección de Aeronáutica Civil. Sobre los hechos en que se fundamenta la denuncia en su contra informa lo siguiente:

2. Que la Licitación Pública N° 006/94-DAC se realizó el 30 de enero de 1995, pero en 1994 se había llamado a licitación los días 17, 25 de noviembre y 20 de diciembre pero fue suspendida, al igual que en enero de 1995.

3. Que el Pliego de Especificaciones que sirvió de base para la Licitación del Helicóptero fue elaborado por la Dirección de Asesoría Legal de la institución de manera conjunta con el Ministerio de Planificación y Política Económica y el Ministerio de Hacienda y Tesoro; que se contó con el asesoramiento de la Subdirección General Técnica de Aeronáutica Civil. Además se utilizó como criterio base para su confección las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

4. Que el concepto técnico **"Helicóptero Nuevo"** en la Licitación Pública fue utilizado por analogía al no existir en nuestra legislación esa definición, de acorde con lo que establece el artículo 11 del Código Civil sobre el uso de términos de toda ciencia o arte. Concepto utilizado en las reglas que señalan las normas de la Administración Federal de Aviación (FAA) organismo que regula la aviación en los Estados Unidos, país donde se fabrica la aeronave a la cual se le adjudicó la Licitación Pública. Este país es signatario del Convenio de OACI y se vincula a través de la FAA e igualmente Panamá es miembro de dicho organismo y se relaciona con él a través de la Dirección de Aeronáutica Civil. Agrega que el convenio de la OACI que regula la Aviación Civil Internacional fue ratificado por Panamá, a través de la Ley 52 de 1954.

5. Que se realizaron cinco avisos de Convocatoria en las fechas señaladas en el punto 2°.

6. Que para la selección de los integrantes de la Comisión Evaluadora de las propuestas presentadas en la Licitación Pública se dio cumplimiento al artículo 47 del Código Fiscal y por ello se designaron personas idóneas tanto del sector público como del sector privado en forma paritaria.

7. Que el señor Patricio Janson no presentó propuesta en la Licitación Pública N° 006/94-DAC, sólo presentó una nota de protesta, que fue rechazada por parte de los funcionarios presentes dentro del acto público realizado,con base legal en el artículo N°

47, numeral 6 del Decreto de Gabinete N° 45 de 20 de febrero de 1990, expresado en la acta respectiva.

8. Que para la adjudicación definitiva a la sociedad SIKORSKY AIRCRAFT PANAMÁ, S. A., se cumplió primero con los requisitos legales propios de una Licitación Pública y se fundo en el Informe Técnico presentado el 7 de febrero de 1995 por la Comisión Evaluadora, la cual fue designada en cumplimiento del artículo 47 numeral 9 del Código Fiscal.

9. Que durante la tramitación de la Licitación Pública Internacional N° 006/94-DAC no hubo incidente anormal.

10. Que no tiene nada que agregar a la declaración (fs. 646-649).

FUNDAMENTO DE LA SALA

Se aprecia que el fundamento de la denuncia presentada por Patricio Janson consiste en que la Licitación Pública Internacional N° 006/94-DAC para el Suministro, Transporte y Entrega de un Helicóptero para las Misiones de Búsqueda, Rescate y Salvamento, viola normas del Código Fiscal, que a través de esta licitación amañada se compró el helicóptero Sikorsky S-76-C, lo que es una burla a la soberanía, a la jurisdicción aérea y a las leyes de aviación de la República de Panamá.

Como consecuencia de esta licitación, recibió amenaza de muerte por parte de funcionarios de la Dirección de Aeronáutica Civil, que estos funcionarios se han asociado para cometer un ilícito en contra suya, del señor Presidente de la República, su familia, los Ministros de Estado y la tripulación del helicóptero; que al inducir a la Dirección de Aeronáutica Civil a comprar un helicóptero viejo como si fuera nuevo, se ha cometido fraude, estafa, peculado, abuso de autoridad; y que también por ello, se ha cometido delitos contra los Medios de Transporte y de Comunicación; que se da el delito de encubrimiento por parte de todos los funcionarios públicos que participaron en la licitación.

Al expediente judicial se allegaron copias autenticadas de la documentación relacionada con la Licitación del helicóptero de marras, suministrada por la Dirección de Aeronáutica Civil.

Es así que se aprecia el contenido del **Informe de la Comisión Evaluadora** sobre la Licitación Pública Internacional N° 006/94-DAC con fecha 7 de febrero de 1995, el cual trata sobre los aspectos técnicos y económicos de las tres propuestas válidas presentadas en ese acto. Técnicamente se concluyó que de los tres helicópteros propuestos, el de la empresa Sikorsky es el único que reunía todas y cada una de las características solicitadas. En cuanto al aspecto financiero, las propuestas fueron ponderadas con el máximo puntaje en cuanto a interés, plazo y plan de amortización. Añadiéndose que los intereses a pagar por la D. A. C. son menores en el financiamiento ofrecido por Sikorsky, a pesar que el monto total ofrecido por la Bell es menor (fs. 55-71).

Mediante resolución N° 073-AJ-DG-DAC de 8 de febrero de 1995, la Dirección General de Aeronáutica Civil adjudicó definitivamente la licitación Pública N° 006-94-DAC a la empresa Sikorsky Aircrafft Panamá Inc. (fs. 28-30), resolución que fue impugnada por los representantes legales de la empresa Bell Latinoamericanas - Panamá, S. A. mediante recurso de reconsideración con apelación en subsidio (fs. 368-376).

En resolución N° 113-AJ-DG-DAC de 24 de febrero de 1995, la Dirección General de Aeronáutica Civil, negó el recurso presentado y mantuvo en todas sus partes la resolución impugnada (fs. 377-378).

Consta además, documentos signados por Gustavo Pérez, Sub-Contralor General de la República (f. 444), Carlos E. González M., Director de Presupuesto de la Nación (f. 445) y de Ricaurte Della Cella S., Jefe de Control Fiscal de la Contraloría en la Dirección de Aeronáutica Civil (f. 446) en los cuales se afirma que en el Presupuesto de Inversión para la vigencia fiscal de 1995, se consignó

una partida para la adquisición de una aeronave y un helicóptero.

En declaración jurada, John Allen Bennet Novey, aviador y con experiencia en cargos directivos por 13 años en la Dirección de Aeronáutica Civil, manifiesta que fue miembro de la Comisión Evaluadora, la cual se dividió en dos sub-comisiones, una de aspectos técnicos y otra de aspectos financieros. Que al participar en la comisión técnica sus consideraciones se basaron en las especificaciones técnicas contenidas en el pliego de cargos y especificaciones. Además estimó, según su experiencia, que el helicóptero marca Sikorsky S-76 C) era el más apto y que en cuanto a las horas de vuelo, ese aspecto no fue evaluado por la comisión (fs. 543-546).

Por su parte, los Contadores Públicos Autorizados, Jorge Abel Vega Córdoba y Manuel Ochoa Sánchez, miembros de la Sub-Comisión Financiera, explican que el objetivo era revisar los cálculos de intereses que ofrecían los proponentes, los cálculos de amortización y la verificación de los plazos ofrecidos (fs. 582-585 y fs. 636-639).

Miembro de la Sub-Comisión Financiera también lo fue la señora Cecilia Fernández de Pérez, con 30 años de servicios consecutivos en el Ministerio de Hacienda y Tesoro, ella indica que les correspondió hacer el análisis del valor de los aparatos propuestos y que las tres propuestas cumplieron con el pliego de cargos, en relación al financiamiento de valor de la aeronave. Agrega, que la escogencia del proponente más apto le corresponde a la entidad licitante, lo que está regulado en el artículo 47 de la Ley 31 del 30 de diciembre de 1994, que modifica el Código Fiscal.

Otro miembro de la Sub-Comisión Técnica, fue el señor **José Álvaro Restrepo Galindo**, Asesor Delegado del Contralor Asignado en Aeronáutica Civil y el Servicio Aéreo Nacional, con 38 años de experiencia como Técnico de Aviación y Gerencia de Mantenimiento en la Empresa Panamerican Airway. Explica que su trabajo fue analizar el pliego de cargos y de acuerdo con éste, ponderar las tres propuestas, de lo cual se consideró que la empresa Sikorsky era la que llenaba los requisitos. Afirma que la Comisión Técnica constató el helicóptero Sikorsky en el hangar de Aeronáutica Civil y la última lectura obtenida del medidor ubicado dentro de la cabina, fue de 295 horas de vuelo. Sobre las dos naves aéreas restantes nunca ello fue constatado (fs. 594-599).

Otros integrantes de la Sub-Comisión Técnica fueron los señores **Isaac Abdel Lasso Cuervo**, Ingeniero, piloto comercial de helicóptero y aviones con licencia de Técnico de mantenimiento de Aeronaves tipo 1 y **Enanías Castillo Quintero**, piloto del helicóptero Sikorsky, los cuales coinciden en que el helicóptero Sikorsky era el único que cumplía con todas las especificaciones que se encontraban en el pliego (fs. 600-603 y 604-608).

La Sub-Directora de Aeronáutica Civil, señora **Irasema Rosas de Ahumada**, afirma que no tuvo ninguna participación en la Licitación Pública N° 006/94/DAC (fs. 651-654).

Consta copias autenticadas del Decreto de Nombramiento y Acta de toma de posesión de Eustacio Fábrega López, como Director General de Aeronáutica Civil (fs. 556-557); al igual que los demás funcionarios denunciados (fs. 558-575).

La Sala luego de un detallado examen de las pruebas allegadas al expediente judicial con respecto a la licitación Pública N° 006/94/DAC, no percibe la existencia de conductas punibles por parte de los funcionarios involucrados en la misma, por el contrario, se advierte un apego y acatamiento a las normas reglamentarias en materia de licitaciones públicas, sustentadas por personas con larga experiencia en la materia cuestionada por el denunciante.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, SOBRESEE DEFINITIVAMENTE en estas sumarias de manera objetiva e impersonal, con base en el numeral 2° del artículo 2210 del Código Judicial.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA TERCERA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

ABRIL 1996

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ELIGIO SALAS, EN REPRESENTACIÓN DE MARHOWIL UNIVERSAL, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 9229-94-JD, DEL 12 DE MAYO DE 1994, EXPEDIDA POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, NUEVE (9) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

Mediante Vista N° 120, del 21 de marzo de 1995, la Procuradora de la Administración interpuso recurso de apelación contra la providencia del 15 de diciembre de 1994, que admitió la demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción presentada por el licenciado Eligio Salas, en nombre y representación de MARHOWIL UNIVERSAL, S. A. para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 9229-JD, del 12 de mayo de 1994, expedida por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social.

I. LOS FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La representante del Ministerio Público estima que la demanda no debió admitirse, porque la actora no acreditó el silencio administrativo y, por tanto, tampoco probó que agotó la vía gubernativa para recurrir ante la Sala Tercera. Agrega, que "en el expediente no aparece la solicitud debidamente autenticada que acredite que el accionante solicitara la certificación a la Caja de Seguro Social, en la que se hiciera constar que no ha habido pronunciamiento sobre el recurso de reconsideración interpuesto contra el acto administrativo atacado. En consecuencia, resulta insuficiente la referencia anotada en el libelo de demanda de que la impugnación (reconsideración) no ha sido resuelta. Ante la situación planteada, surge para esta instancia la incertidumbre sobre si recayó o no fallo administrativo ante el recurso promovido por el actor en la esfera gubernativa" (f. 41).

II. LOS ARGUMENTOS DEL OPOSITOR

La demandante presentó su escrito de oposición al recurso a través de su apoderada judicial, la firma forense Infante, Garrido y Garrido e indicó que la Ley N° 33 de 1946 no impone como requisito para la admisión de la demanda en los procesos contencioso-administrativos de plena jurisdicción, que el actor pruebe el silencio administrativo. El agotamiento de la vía gubernativa se prueba plenamente con la aportación del recurso, debidamente autenticado o con el sello de presentación, que no fue resuelto en el término señalado en el artículo 22 de la excerta legal citada. Es al momento en que el funcionario o la institución respectiva rinde su informe de conducta cuando puede alegar que no se ha agotado la vía gubernativa, ya sea porque no ha transcurrido el plazo de dos meses para resolver los recursos o a petición (sic), porque los mismos no se presentaron o se presentaron extemporáneamente, o simplemente porque los mismos ya han sido resueltos en favor del peticionario; correspondiéndole entonces a la Procuraduría de la Administración apelar sobre la admisión. Concluye el apositor al recurso, que el pedirle al actor que acredite el silencio administrativo a través de la mencionada certificación equivale a negarle el acceso a la administración de justicia (fs. 50-51).

III. DECISIÓN DEL RESTO DE LOS MAGISTRADOS DE LA SALA

De acuerdo con las constancias procesales, la actora interpuso su demanda contra la Resolución N° 9229-94-J. D., del 12 de mayo de 1994, emitida por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, mediante la cual se aprobó la adquisición de 4,132,600 grageas de 40 mg. de verapamillo de clorhidrato (Isoptin), a favor de la empresa Reprico, S. A.

En los hechos tercero y cuarto de su libelo, la demandante expresó que contra la Resolución N° 9229-94-J. D. de la Junta Directiva de la Caja de Seguro

Social interpuso recurso de reconsideración el día 26 de julio de 1994 y que el mismo nunca fue resuelto por dicha entidad, **"razón por la cual ha incurrido en silencio administrativo, quedando agotada por ese hecho la vía gubernativa".** Sin embargo, al examinar el expediente, el resto de los Magistrados de la Sala observa que, en efecto, la demandante no acreditó el silencio administrativo mediante una certificación expedida por el Secretario General de la Caja de Seguro Social o de algún otro funcionario competente, con la indicación de que ese recurso no fue resuelto dentro de los dos meses siguientes a su interposición.

Como explicó la Sala en su fallo del 3 de febrero de 1995, la comprobación del silencio administrativo es esencial, pues, "podría ocurrir que el silencio administrativo no se ha producido porque existe un fallo revocatorio o confirmatorio del acto impugnado y que este hecho no sea de conocimiento del actor, quien no se ha cerciorado de si el recurso ha sido o no resuelto, pidiendo una certificación de lo ocurrido mediante memorial. En el supuesto de que el acto hubiera sido revocado el objeto procesal ya no existiría y si hubiera sido confirmado, no existiría el silencio administrativo". Agregó la Sala, que "Evitando el fallo inhibitorio que habría que dictar en el primer supuesto se aplica el principio de economía procesal. La simplificación de trámites y la ausencia de formalismos no tiene como fin que se inicien procesos sin que se haya probado la existencia de los presupuestos procesales que hacen viables las demandas, y esto es así porque para que se cumpla el fin de la ley procesal que es el reconocimiento de los derechos sustantivos de las partes, el juzgador debe cumplir con los trámites sucesivos previos que le permiten dictar fallos de fondo para resolver la controversia que se plantea".

En el presente caso, la demandante no probó el agotamiento de la vía gubernativa por silencio administrativo, requisito esencial para ocurrir ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley N° 33 de 1943, en concordancia con el numeral 1° del artículo 22 de la misma Ley. Como dicho requisito no se acreditó, tampoco puede darse curso a la mencionada demanda, ya que así lo ordena el artículo 31 de la misma excerta legal.

De consiguiente, el resto de los Magistrados de la Sala Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, previa revocatoria de la providencia del 15 de diciembre de 1994, NO ADMITEN la demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado Eligio Salas, en nombre y representación de MARHOWIL UNIVERSAL, S. A. a que se refiere el presente negocio.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO OSVALDO JIMÉNEZ CORREA, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES FAN, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° DG-076-95, DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 1995, EXPEDIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, NUEVE (9) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

Mediante Vista N° 76 del 9 de febrero de 1996, la Procuradora de la Administración interpuso recurso de apelación contra la providencia del 12 de enero de 1996, que admitió la demanda contencioso-administrativa de plena

jurisdicción interpuesta por el licenciado Osvaldo Jiménez, en nombre y representación de SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES FAN, S. A., para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° DG-076-95, del 5 de septiembre de 1995, expedida por el Director General del Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables y para que se hagan otras declaraciones.

I. LOS FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La representante del Ministerio Público estima que la resolución que admitió la demanda debe revocarse, ya que la parte actora no acreditó debidamente el silencio administrativo al no pedir al Magistrado Sustanciador que solicitara al funcionario demandado la certificación para comprobar si se resolvieron o no los recursos interpuestos contra el acto demandado (fs. 49-52).

II. LOS ARGUMENTOS DEL OPOSITOR

De acuerdo con la demandante, la Ley sólo faculta a la parte actora para que pida al Magistrado Sustanciador que solicite al funcionario demandado el acto acusado, cuando el mismo no ha sido publicado, o se deniega la expedición de la copia, o la certificación sobre su publicación, pero no la referida certificación. Agrega, que la empresa demandante presentó dos memoriales al Director General del INRENARE solicitándole que resolviera los recursos interpuestos, sin que para el 10 de enero de 1996, el citado funcionario se haya pronunciado sobre los mismos.

III. DECISIÓN DEL RESTO DE LOS MAGISTRADOS

En la demanda se impugna la Resolución N° DG-076-95, del 5 de septiembre de 1995, expedida por el Director General del INRENARE.

La demandante afirma en los hechos décimo primero y décimo tercero de su demanda, que el aludido funcionario no se ha pronunciado sobre los recursos de reconsideración y de apelación en subsidio interpuestos contra el acto impugnado y que, además, se negó a certificar si para el 8 de enero del presente año había recaído algún pronunciamiento sobre los recursos en mención.

Para acreditar el silencio administrativo la actora aportó un escrito en el que pide al funcionario demandado que resuelva los recursos gubernativos interpuestos contra la resolución acusada, así como otro en el que le solicita que certifique si dichos recursos habían sido o no resueltos para el 8 de enero de 1996 (Cfr. fs. 4 y 33). Sin embargo, como afirma la señora Procuradora de la Administración, la demandante no pidió al Magistrado Sustanciador que solicitara al funcionario demandado la certificación que le fue negada para comprobar si se habían resuelto o no los recursos de reconsideración y de apelación interpuestos contra el acto acusado.

De acuerdo con el artículo 46 de la Ley N° 135 de 1943, es indispensable que el actor no sólo pida a la administración que certifique el silencio o negativa tácita de su pretensión, sino que además, en caso de que dicha certificación también le sea negada, debe solicitar al Magistrado Sustanciador que a su vez la pida al funcionario demandado. La omisión de la referida petición no puede ser subsanada por la Sala, pues, la misma se realiza a petición de parte y no de oficio. Así lo expresó la Sala en su fallo del 28 de diciembre de 1995, en cuya parte pertinente se expuso:

> "... es requisito sine qua non tal como lo estatuye el artículo 46 de la Ley 135 de 1943, que el actor no solamente solicite ante la administración que certifique el silencio o negativa tácita de su pretensión para que ésta se acredite debidamente, sino que además es indispensable, si dicho ente no se pronuncia, que a su vez el demandante requiera a esta Corporación de Justicia para que solicite al ente demandado la información antes descrita ...
>
> De obviarse y por tanto no efectuarse esta última solicitud por parte del actor, la Corte no puede proceder a requerir esta información de la institución demandada, ya que la misma se realiza

> únicamente a petición de parte; y por consiguiente, el demandante no comprueba fehacientemente el agotamiento de la vía gubernativa como se ha expresado con anterioridad."

En el presente caso, la demandante no presentó la prueba del agotamiento de la vía gubernativa por silencio administrativo, requisito esencial para ocurrir ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley N° 33 de 1946, en concordancia con el artículo 22 de la misma Ley, y no solicitó al Magistrado Sustanciador que la requiriera. Por tanto, no puede darse curso a la mencionada demanda, ya que así lo ordena el artículo 31 de la misma excerta legal.

De consiguiente, el resto de los Magistrados que integran la Sala, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, previa revocatoria de la providencia del 12 de enero de 1996, NO ADMITEN la demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado Osvaldo Jiménez, en nombre y representación de SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES FAN, S. A., para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° DG-076-95 del 5 de septiembre de 1995, emitida por el Director General del Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. EUFROSINIO TROYA TORRES, EN REPRESENTACIÓN DE JUAN MANUEL MARÍN DÍAZ, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 053 DE 12 DE MAYO DE 1994, EMITIDA POR EL ALCALDE MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, DIEZ (10) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado **Eufrosinio Troya Torres** presentó demanda Contenciosa Administrativa de Plena Jurisdicción en nombre de **JUAN MANUEL MARÍN DÍAZ** a fin de que se declaren nulas por ilegales las Resoluciones N° 053 de 12 de mayo de 1994, proferida por la Alcaldía del Distrito de Santiago de Veraguas, y la Resolución confirmatoria N° 36 de 3 de agosto de 1994 dictada por el Gobernador de la Provincia de Veraguas, mediante las cuales se negó la adjudicación por compra al señor **JUAN MANUEL MARÍN DÍAZ** un lote de terreno municipal con un área de 3,950 M2, y se aceptó la oposición a dicha adjudicación del señor Benigno del Rosario Rojas y se declaró a este último con mejores derechos posesorios.

Concluidas todas las fases procesales establecidas por la ley, pasa la Sala a resolver la controversia legal planteada.

Considera la parte actora que la resolución alcaldicia impugnada y confirmada por la gobernación, viola el artículo 31 de la Ley 135 de 1943, los artículos 1116 y 1120 del Código Civil y el artículo 65 del Código Agrario.

El concepto de la infracción del artículo 31 de la Ley 135 de 1943, lo explica así, previa la transcripción literal de la mencionada norma:

> "Artículo 31: Si no pudiere hacerse notificación personal se fijará un edicto en papel común en lugar público del respectivo despacho por el término de cinco días, con inserción de la parte dispositiva de la resolución y con las prevenciones mencionadas en el artículo

23.

CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN.

El referido artículo fue violado por INFRACCIÓN LITERAL por omisión porque el Alcalde del Distrito de Santiago de Veraguas lo desconoció al hacer la notificación en forma distinta a como lo prevé dicho artículo, ya que el edicto lo fijó por un (1) día en vez de 5 días y a pesar de que el expediente se encontraba suspendido durante mas de un (1) mes, con lo cual se sorprendió a la Parte Actora dando como consecuencia un fallo injusto y afectándose de paso a un analfabeta."

La parte actora considera que la resolución impugnada viola el artículo 1116 del Código Civil cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 1116. SERÁ NULO EL CONSENTIMIENTO PRESTADO POR ERROR, VIOLENCIA, INTIMIDACIÓN o DOLO.

CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN.

El referido artículo fue infringido literalmente por omisión, porque tanto el Alcalde de Santiago de Veraguas como el Gobernador de Veraguas, omitieron aplicarlo, con lo cual dieron valor a un contrato en el cual nuestro representado firmó un documento sin saber leer ni escribir, lo cual aprovechó el señor Benigno Del Rosario Rojas y su esposa para colocar allí un contrato de compra venta cuando lo que se había celebrado era un contrato de arrendamiento cuyo cumplimiento durante mucho tiempo exigió mi representado y mediante maquinaciones posteriores logrando mantenerse en el terreno, burlándose del analfabeta.

Es obvio que hubo un vicio del consentimiento porque mientras uno afirma haber celebrado un contrato de arrendamiento, el otro afirma haber celebrado un contrato de compra venta. El analfabetismo de mi representado; LA IRRISORIA SUMA DE PRECIO DE COMPRA VENTA QUE AFIRMA HABER PAGADO EL COMPRADOR Y LAS MAQUINACIONES POSTERIORES DEL SUPUESTO COMPRADOR CONFIRMADAS POR GRAN CANTIDAD DE TESTIGOS, incluso parientes de él, confirman que hubo un vicio del consentimiento, lo cual quedó corroborado con que dicho falsario NO LLEVO EL SUPUESTO CONTRATO A LA REFORMA AGRARIA SINO MUCHISIMOS AÑOS DESPUÉS cuando mi representado analfabeta acudió a registrar y pagar los derechos municipales al solicitar la adjudicación por ocupación antigua."

También considera el demandante que se ha violado el artículo 1120 del Código Civil, que tiene el siguiente texto:

"Hay dolo cuando con palabras o maquinaciones insidiosas de parte de uno de los contratantes es inducido a el otro a celebrar un contrato que sin ellas no hubiera hecho.

EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN LO EXPLICA ASÍ:

Es obvio que los señores Benigno Del Rosario y Julia Rodríguez del Rosario realizaron maquinaciones insidiosas en contra del analfabeta, porque siendo propietarios de cientos de hectáreas rurales SABÍAN QUE LOS TENÍAN que registrar ese supuesto contrato de compra venta, pero no lo hicieron porque también sabían que si presentaban ese fraudulento contrato, la Reforma Agraria habría citado al analfabeta o a su esposa que eran quienes aparecían como ocupantes registrados en Reforma Agraria.

El referido artículo fue infringido por infracción literal directa por omisión, por los funcionarios impugnados, porque de haberlo tenido en cuenta habrían tenido que declarar nulo dicho contrato al

no haber sido aprobado por la Reforma Agraria.

Por otro lado, dichos funcionarios no podían desconocer las declaraciones que obraban en el expediente civil que fue anulado, porque dichas declaraciones conservaban todo su valor.

Es el caso que no puede dársele valor a contratos en los que ha habido vicios del consentimiento, sobretodo en este caso en que el afectado era un analfabeta campesino."

Por último considera la parte demandante que la resolución impugnada viola el artículo 65 del Código Agrario que dice así:

"Artículo 65. Los terrenos adquiridos por personas naturales o jurídicas mediante compra a particulares estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 64 de este Código, a partir de la fecha de compra de los mismos, siempre que la Comisión de Reforma Agraria autorice a dichas compras por el voto unánime de todos los miembros de la Comisión de Reforma Agraria. En estos casos el comprador se obligará expresamente a hacer cumplir la función social de la propiedad por lo menos en el 20% de su extensión cada año, de manera que al finalizar el quinto año la tierra así adquirida cumpla su función social al tenor de lo dispuesto en el artículo 30 de este Código. Si dos (2) años después de la fecha de compra, el comprador no hubiese cumplido las condiciones establecidas en este artículo la propiedad quedará sujeta a expropiación para los fines de la Reforma Agraria.

La tierra a que se refiere este artículo no gozarán de estos privilegios en caso de una segunda venta.

CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN.

El referido artículo fue infringido en INFRACCIÓN LITERAL POR OMISIÓN en vista de que fue desconocido flagrantemente por las resoluciones impugnadas, ya que le dieron valor a un supuesto contrato sobre una tierra rural que en la época de esa venta era propiedad estatal aunque después en 1990 pasó a ser propiedad municipal.

Es el caso que el Código Agrario fue dictado precisamente para evitar este tipo de maquinaciones realizadas por los esposos del Rosario para ejercer una forma de terratenentismo en contra de humildes campesinos. La exigencia del registro de las ventas y arriendos no es ociosa. Por ello la Resolución CRA de 12 de julio de 1973 referidas por el Ingeniero Municipal y por los funcionarios de la Reforma Agraria para desconocerle valor a dicho fraudulento acto."

Al responder a la solicitud de informe del acto impugnado que le hiciera la Sala Tercera, el Alcalde del Distrito de Santiago en ese momento, Mario Luis Delgado Olarte, quien no era el Alcalde que expidió la resolución impugnada, manifestó lo siguiente:

"Estamos totalmente de acuerdo con que se declare nula por ilegal la Resolución N° 053 de 12 de mayo de 1994 proferida por la ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO, ya que en dicha resolución que consta desde las fojas N° 172 a la 175, se basa en pruebas que fueron declaradas nulas por ser recibidas por un Tribunal que carecía de competencia para conocer el asunto, además nunca llegaron a presentar pruebas idóneas, por lo que no justificamos la emisión de dicha sentencia injusta, ilegal y temeraria."

La señora Procuradora de la Administración le solicita a la Sala, no acceder a las declaraciones impetradas por la parte actora, y considera, antes de contestar los cargos de ilegalidad, hacer una breve discreción respecto a la

validez o no de las pruebas practicadas en un proceso nulo y su eficacia en un proceso posterior.

> "Esta observación la hacemos en base al hecho de que el Alcalde Municipal del Distrito de Santiago, Autoridad Administrativa que emitió la Resolución impugnada, al rendir informe explicativo de conducta (fs. 37-38), señala que está `totalmente de acuerdo con que se declare nula por ilegal la Resolución N° 53 de 12 de mayo de 1994 proferida por la Alcaldía Municipal del Distrito de Santiago, ya que en dicha resolución que consta desde la (sic) fojas 172 a la 175, se basa en pruebas que fueron declaradas nulas por ser recibidas por un Tribunal que carecía de competencia para conocer el asunto, además nunca llegaron a presentarse pruebas idóneas, por lo que no justificamos la emisión de dicha sentencia injusta, ilegal y temeraria ...
>
> Para determinar si las pruebas que reposan en dicho proceso y que fueron valoradas por el Alcalde Municipal del Distrito de Santiago, al emitir la Resolución impugnada, tienen eficacia o no en este negocio, es preciso distinguir si la nulidad afectaba directamente el proceso mismo o si sólo tiene que ver con la sustanciación y validez de la prueba en sí; ello en base a lo establecido en el párrafo tercero del artículo 781 del Código Judicial que preceptúa:
>
> `Artículo 781: ...
> Se podrá considerar en la decisión las pruebas practicadas con la intervención de las partes en los casos en que se declare la nulidad de lo actuado sin que el vicio que causó la nulidad haya ocurrido en la práctica de las pruebas. Del mismo modo, podrán utilizarse en el proceso pruebas practicadas con intervención de las partes en un proceso anulado y cuya practica no haya incidido en la declaratoria de nulidad .
>
> A mayor abundamiento, el distinguido autor HERNANDO DEVIS ECHANDÍA, en su obra `Teoría General de la Prueba Judicial , Tomo I, Página 371, sobre este tema sostiene lo siguiente:
>
> La subsistencia del valor de la prueba a pesar de la nulidad del proceso, sea allí mismo, cuando sólo afecta una parte que debe reponerse, o en otro posterior, depende únicamente de la naturaleza del vicio que la produjo, como sabiamente enseña Lessona y se deduce de lo dicho por Ricci, por lo cual creemos que puede enunciarse la siguiente regla: si a pesar de la nulidad resulta que la prueba estuvo decretada y practicada con sus formalidades propias, es decir, que el vicio se refiere a otros actos del proceso, y se cumplió además el requisito de contradicción que exige la adecuada personería adjetiva de la parte contra quien se aduce la prueba ...
>
> En otros términos, cuando la nulidad ha sido por incompetencia o falta de jurisdicción especial, por ilegitimidad de personería adjetiva o falta de citación legal de terceros o de la parte que aduce la prueba, por pretermisión grave del procedimiento diferente al trámite de la prueba misma, debe reconocérsele validez para el mismo proceso o para otro posterior, entre las mismas partes (o entre terceros con el requisito de la ratificación, si es testimonio); en cambio, si la nulidad se decretó por falta de citación o emplazamiento legal, o de capacidad o representación adecuada de la parte contra quien se opone la prueba (en estos casos falta la debida contradicción), o por pretermisión en el trámite procesal de las mismas pruebas y otros vicios que las afecten en forma directa (como la incapacidad por demencia del Juez que las ordenó y practicó o la violencia sobre el testigo o el confesante), las pruebas quedan inexorablemente afectadas por la nulidad y son inválidas para cualquier proceso.
>
> Resulta claro que en este proceso se cumplieron con los supuestos

establecidos tanto en la Ley procedimental, como en la doctrina, debido a que la nulidad se produjo por falta de competencia y no por vicios producidos en la práctica de las pruebas; por lo que la decisión del Alcalde Municipal del Distrito de Santiago de valorarlas al momento de emitir la Resolución N° 053 de 12 de mayo de 1994, tiene plena validez."

En cuanto a la violación del artículo 31 de la Ley 135 de 1943 argüida por el demandante, la Procuradora de la Administración lo contesta así:

"Discrepamos de lo expuesto por el demandante al indicar que se ha violado el artículo 31 de la Ley 135 de 1943, en lo que respecta a la notificación por edicto de la apertura del proceso a pruebas, debido a que el mismo se fijó sólo por un día, y no por cinco (5) días tal y como establece el artículo antes señalado.

La pretendida violación a este artículo no se da, debido a que el mismo no es aplicable al caso bajo examen, ya que al no contar el Municipio del Distrito de Santiago, con un Acuerdo Municipal que regule el procedimiento de adjudicación de tierras municipales, el Alcalde, actuando como autoridad de Policía, debe aplicar el artículo 928 del Código Administrativo, en lo que respecta a las notificaciones en materia de controversias civiles de policía; y que remite al artículo 988 del Código Judicial que indica claramente que el edicto `será fijado al día siguiente de dictada la Resolución por el Juez y su fijación durará un día.

Por otro lado, el artículo 40 de la Ley 135 de 1943, establece que en asuntos municipales se aplicará el procedimiento que establece dicho Capítulo, salvo cuando los recursos establezcan reglas especiales para determinados negocios. En este caso, el procedimiento a seguir es el que contempla el Capítulo II del Título V del Libro III del Código Administrativo que se refiere a las Controversias Civiles de Policía, y que a su vez, en materia de notificaciones, aplica supletoriamente las disposiciones del Código Judicial.

De allí, que la fijación del edicto por cinco (5) días a que se refiere el artículo 31 de la Ley 135 de 1943, no sea aplicable a este caso de naturaleza municipal.

Por lo expresado, conceptuamos que de ninguna manera la Resolución N° 053 de 12 de mayo de 1994, emitida por el Alcalde Municipal del Distrito de Santiago, viola el artículo 31 de la Ley 135 de 1943."

La Procuradora de la Administración analiza en conjunto la violación que alega el demandante de los artículos 1116 y 1120 del Código Civil por considerar que están íntimamente relacionados entre sí, y lo expone de la siguiente manera:

"No compartimos el criterio expuesto por el demandante, en cuanto a la violación de estas normas del Código Civil y que se refieren al dolo como vicio del consentimiento, por las razones que a continuación exponemos:

El dolo a que se refiere el artículo 1120 del Código Civil, es aquél que es obra de uno de los contratantes y sin el cual no se hubiese contratado. De lo anterior resulta que, para que haya dolo es necesario que concurran los siguientes requisitos: 1. Debe ser obra de uno de los contratantes; 2. Debe ser determinante, o sea, que de no mediar, el contrato no se hubiera celebrado; y, 3. Debe ser grave.

En cuanto a la capacidad de ejercicio de obrar, ésta es la aptitud legal que tiene una personal para ejercer por sí derechos que le competan, y para contraer obligaciones sin autorización de otra personal. La falta de capacidad existe cuando una persona no tiene

aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones por sí mismo.

La incapacidad absoluta es aquella en la cual la persona no puede ejercer por sí misma ningún acto jurídico ya que, o bien carece de discernimiento, o por razones físicas o naturales no está en condiciones de declarar su voluntad, por lo que se hace necesario que otras personas lo hagan por ella.

Nuestro Código Civil, conforme a los artículos 45, 1114, 1141, Ordinal Tercero, considera absolutamente incapaces: a) Los dementes; b) Los sordomudos que no sepan escribir; y los menores impúberes. El analfabeta no carece de discernimiento como el demente y entiende como no lo puede hacer el sordomudo que no sabe escribir, por tanto, si pueden prestar su consentimiento, adquirir derechos y contraer obligaciones.

De las consideraciones que se dejan expuestas y del cúmulo de pruebas existentes en este proceso, nos llevan a concluir que la compraventa de los derechos posesorios sobre un lote segregado de la finca N 11108, ubicada en la Comunicad de Los Boquerones, Distrito de Santiago, por parte del señor BENIGNO DEL ROSARIO al señor JUAN MANUEL MARÍN, no existió dolo y por tanto de vicios del consentimiento.

Lo anterior se desprende de las pruebas documentales (fs. 21, 22 y 27 del expediente administrativo) y testimoniales que hacen ver que el señor BENIGNO DEL ROSARIO desde 1974, viene ocupando el inmueble señalado, de manera pública, pacífica e ininterrumpida, que se verifica con hechos positivos como lo son el cercamiento y la siembra de árboles.

Se observa además, que es el demandante quien viene ejerciendo actos de perturbación contra el señor DEL ROSARIO, por lo que el Juzgado Primero Municipal del Distrito de Santiago lo condenó a ocho (8) meses de prisión; sentencia que fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones y Consultas del Circuito de Veraguas, mediante Auto N° 374 de 1 de septiembre de 1993.

Por lo expresado, conceptuamos que la Resolución emitida por el Alcalde del Municipio del Distrito de Santiago, no viola los artículos 1116 y 1120 del Código Civil, ya que no existe evidencia que el demandante haya sido llevado a celebrar una compra-venta mediante engaño u otro medio idóneo, de tal forma, que éste, de haberlo sabido, no hubiera contratado."

Por último la Procuradora se refiere a la infracción del artículo 65 del Código Agrario, y se expresa en desacuerdo con el demandante por las siguientes razones:

"El recurrente es bastante impreciso al detallar los motivos en los cuales se basa la transgresión alegada, pero básicamente se infiere que la misma se produce a juicio del actor, al darle el Alcalde Municipal del Distrito de Santiago, valor a un supuesto contrato sobre un terreno que era de propiedad estatal y que luego de 1990, pasó a ser de propiedad municipal.

Esta Procuraduría no ve de que manera ha podido ser violada esta norma, ya que ha quedado claramente establecido según las constancias procesales, que el señor JUAN MANUEL MARÍN acepta haber firmado un contrato de compra-venta con el señor DEL ROSARIO, por los derechos posesorios de un lote segregado de la Finca N 11108, ubicada en la Población de los Boquerones, Distrito de Santiago.

Debemos aclarar que la finca en conflicto fue adquirida por el Municipio del Distrito de Santiago, previa desafectación del dominio público. De esta manera, el bien inmueble en mención entró a formar

parte del patrimonio municipal del Distrito de Santiago, de acuerdo con el Numeral 2 del artículo 69 de la Ley 106 de 8 de octubre de 1973, sobre el Régimen Municipal del Distrito de Santiago.

Ante tal hecho, el señor JUAN MANUEL MARÍN se presentó a ese Municipio, con la finalidad de que se le adjudicara el terreno del que se había desprendido cuando era de propiedad estatal, vendiéndole los derechos posesorios al señor BENIGNO DEL ROSARIO en el año 1974 y sobre el cual evidentemente ya no tiene ningún derecho.

En consecuencia, el argumento presentado por la parte actora, no tiene soporte jurídico, toda vez que el señor JUAN MANUEL MARÍN no tiene ningún derecho a que se le adjudique el lote de terreno municipal de la Finca N° 11108, por haberle vendido los derechos posesorios al señor DEL ROSARIO en el año de 1974, cuando aún dicha finca era propiedad estatal."

MOTIVACIONES DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA

La primera infracción alegada por el demandante, es que la resolución impugnada viola el artículo 31 de la ley 135 de 1943.

La Corte debe rechazar este cargo por ser totalmente infundado. Consta a fojas 4 del expediente principal que la resolución N° 053 de 12 de mayo de 1994 le fue notificada **personalmente** al apoderado del señor Marín licenciado Arcelio A. Mojica, a las 9:40 de la mañana, del día 25 de mayo de 1994 y allí manifestó que apelaba; apelación que sustentó posteriormente ante la Gobernación de Veraguas, lo que demuestra que en ningún momento sufrió ningún perjuicio procesal en el trámite administrativo de este negocio. Por lo expuesto, se rechaza este cargo.

El demandante sostiene que la resolución impugnada viola los artículos 1116 y 1120 del Código Civil, los que por estar íntimamente relacionados, la Sala los considerará en forma conjunta.

El principal argumento de la parte actora consiste en que debido a que su representado es analfabeta, fue engañado y firmó un contrato de compra venta de un terreno, cuando creía que estaba firmando un contrato de alquiler. Por lo tanto alega error y dolo como vicios del consentimiento, en el título de derechos posesorios que alega su opositor, y que dicho contrato sirvió de base a la resolución impugnada para considerar que Benigno del Rosario tenía mejor derecho para la adjudicación del terreno por compra al Municipio de Santiago de Veraguas.

Lo cierto es que a través de todo el expediente y sus anexos se mencionan en varias ocasiones la citada transacción de venta por parte del señor Juan Marín a Benigno del Rosario. En efecto, a fojas 94 del expediente Administrativo, se dice en la sentencia N° 38 del Juzgado Primero del Circuito Judicial de Veraguas, lo siguiente:

"En este cúmulo de Pruebas surge un aspecto o elemento importante para el esclarecimiento de los hechos, en la medida en que, de estas pruebas se ve reflejado claramente que la posesión que ejerce la parte actora tuvo su origen en un contrato de compra-venta sobre el globo de terreno al señor MARÍN DÍAZ. Es más, copia simple de esa transacción consta a fojas 53 del expediente administrativo tramitado en la Corregiduría de Policía de Santiago en donde consta que dicha transacción se realizó el 24 de septiembre de 1970.

Si bien es cierto que en la declaración indagatoria antes mencionada el señor Juan Manuel Marín Díaz manifestó entre otras cosas que nunca le ha vendido el terreno en cuestión a dicho señor sino que en realidad lo que hizo fue arrendárselo hace como 18 años; poca credibilidad podemos darle a esta afirmación dado que difícilmente una persona permitiría que otra permanezca por mucho tiempo ocupando un terreno en condición de arrendatario sin pago alguno y el afectado no haya reclamado hasta ahora."

Lo anteriormente transcrito demuestra que si hubo una venta, ya que no se estableció ninguna forma de pago por períodos para el supuesto arrendamiento y se fijó solamente una cantidad por la transacción y tampoco se señaló fecha para la terminación del contrato. El señor Marín, aún siendo analfabeta, era capataz en el Ingenio La Victoria, del cual se jubiló, y por tanto era una persona que si bien no tenía instrucción no por ello carecía de inteligencia.

La Corte considera que no se ha demostrado la existencia de error o dolo en la celebración del contrato de compra venta y por tanto, rechaza los cargos de violación de los artículos 1116 y 1120 del Código Civil.

En cuanto a la supuesta violación del artículo 65 del Código Agrario, la resolución impugnada nada tiene que ver con el traspaso por venta entre Marín y Del Rosario. Siendo el Municipio de Santiago el propietario del terreno, adjudicará la finca a quien considere tiene mejor derecho y estimó que en este caso, ese mejor derecho lo tenía el señor Benigno del Rosario. El artículo 65 del Código Agrario no tenía ninguna aplicación en el proceso de adjudicación por parte del Municipio de Santiago y por tanto no podía ser violado. Por lo expuesto, se rechaza el cargo.

Por las razones que anteceden, la Sala Tercera, Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE NO SON ILEGALES las Resoluciones N° 053 de 12 de mayo de 1994, proferida por la Alcaldía del Distrito de Santiago de Veraguas, y la Resolución confirmatoria N° 36 de 3 de agosto de 1994 dictada por el Gobernador de la Provincia de Veraguas.

Notifíquese.

(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS AYALA, EN REPRESENTACIÓN DE TAMARA RODRÍGUEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL DECRETO DE PERSONAL N° 187 DE 25 DE JULIO DE 1995, PROFERIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOCE (12) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Carlos Ayala, actuando en nombre y representación de TAMARA RODRÍGUEZ, ha promovido y sustentado recurso de apelación contra la resolución de 18 de enero de 1996, dictada por el Magistrado Sustanciador, mediante la cual **no se admite** la demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción promovida para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto de Personal N° 187 de 25 de julio de 1995, proferido por el Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Educación, y para que se hagan otras declaraciones.

Como la demandante pidió al funcionario demandado copia del acto impugnado y certificación acerca de que el recurso de reconsideración promovido contra ese acto no fue resuelto y además solicitó en la demanda que antes de ser admitida, se le requiera dicha documentación, a juicio del resto de los Magistrados que integran la Sala, antes de resolver el recurso de apelación, debe solicitarse a la autoridad demandada copia del acto impugnado con la constancia de su notificación y una certificación en la cual conste si el recurso de reconsideración promovido contra dicho acto no ha sido resuelto.

De consiguiente, el resto de los Magistrados de la Sala Tercera de lo

Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENAN que por Secretaría se solicite al señor Ministro de Educación:

1. Copia autenticada del Decreto de Personal N° 187 de 25 de julio de 1995, emitido por el Órgano Ejecutivo por conducto del Ministerio de Educación, por medio del cual se deja sin efecto el nombramiento de TAMARA W. RODRÍGUEZ, con la constancia de su notificación, y, 2. Que certifique que la solicitud de reconsideración propuesta por TAMARA RODRÍGUEZ contra el Decreto de Personal N° 187 de 25 de julio de 1995 aún no ha sido resuelta.

Notifíquese y Comuníquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. ROBERTO RUIZ EN REPRESENTACIÓN DE ELBA R. DÍAZ VDA. DE RUIZ Y OTROS, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN N° 97 DE 2 DE SEPTIEMBRE DE 1983 DICTADA POR EL MINISTRO DE HACIENDA, LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado **Roberto Ruiz** en representación de **ELBA DÍAZ Vda. DE RUIZ** ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula por ilegal la Resolución N° 97 de 2 de septiembre de 1983 dictada por el Ministro de Hacienda, la negativa tácita por silencio administrativo y para que se hagan otras declaraciones.

Al examinar la presente demanda se percata el Sustanciador que a foja 28 del expediente consta solicitud especial de autenticación de documentos que debe ser atendida previa a la admisión de la demanda.

El Magistrado Sustanciador ha podido constatar que efectivamente, el recurrente trató de acompañar el libelo contentivo de la demanda con la documentación necesaria, gestionando ante el respectivo ente administrativo la autenticación de los mismos. Tal diligencia, legible a foja 17 fue recibida en la oficina de administración de documentos y correspondencia del Ministerio de Hacienda y Tesoro, el día 5 de marzo de 1996.

Considera quien sustancia que el recurrente cumplió con la exigencia contemplada en el artículo 44 de la Ley 135 de 1943, de llevar a cabo todas las gestiones pertinentes a fin de obtener la documentación idónea a la que alude el mencionado artículo, pero al resultar infructuosas solicitó a esta Sala que procediera a oficiar a la entidad demandada que remita a esta Superioridad la documentación solicitada. Ello en atención a la facultad que le confiere el artículo 46 de la Ley 135 de 1943 cuyo texto es el siguiente:

> "ARTÍCULO 46. Cuando el acto no ha sido publicado, o se deniega la expedición de la copia o la certificación sobre publicación, se expresará así en la demanda, con indicación de la oficina donde se encuentre el original, o del periódico en que se hubiere publicado, a fin de que se solicite por el sustanciador antes de admitir la demanda."

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador, en representación de la Sala

Tercera, Contencioso Administrativa, de la Corte Suprema administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DISPONE solicitar al Ministerio de Hacienda y Tesoro, proporcionar copia auténtica de la Resolución N° 97 de 2 de septiembre de 1983 proferida por el Despacho Superior de esa Entidad Gubernamental

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO OMAR RODRÍGUEZ, EN REPRESENTACIÓN DE AUGUSTO HUGHES, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 82-95, DEL 14 DE JULIO DE 1995, EXPEDIDA POR EL SEÑOR MINISTRO DE VIVIENDA Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Omar Rodríguez, actuando en nombre y representación del señor AUGUSTO HUGHES, interpuso ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 82-95, expedida el 14 de julio de 1995 por el señor Ministro de Vivienda.

Al resolver sobre la admisión de la demanda, la Magistrada Sustanciadora considera que la misma no debe admitirse, ya que ésta se dirigió contra el acto confirmatorio y no contra el acto original, según exige el artículo 29 de la Ley N° 33 de 1943. En el punto III de su libelo (f. 13), relativo al petitum de la demanda, el actor únicamente pidió la nulidad de la Resolución N° 82-95, del 14 de julio de 1995, mediante la cual el señor Ministro de Vivienda resolvió lo siguiente:

> "PRIMERO: Denegar el Recurso de Reconsideración presentado por el Licenciado **RAFAEL SOLANO** de la asignación provisional que en área revertida de Nueva Primavera, Corregimiento de Cristóbal, Provincia de Colón, en el supuesto Lote N° 57-A, se hiciese al señor **CLEVELAND JAMES**.
>
> SEGUNDO: Mantener en todas sus partes la Asignación Provisional del Lote N° 42 que el 27 de enero de 1995 hiciese a favor del señor **CLEVELAND JAMES** este Ministerio." (Fs. 1-2).

Por otra parte, en la copia autenticada del acto acusado no existe constancia de su notificación, con lo cual se incumple el requisito exigido por el artículo 30 de la citada Ley. La Sala ha expresado reiteradamente, que la constancia de la notificación del acto acusado es esencial para comprobar si la acción impetrada es o no extemporánea.

Como el demandante omitió los requisitos mencionados, su demanda no debe admitirse, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del mismo cuerpo legal.

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado Omar Rodríguez, en nombre y representación del señor AUGUSTO HUGHES para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 82-95, del 14 de julio de 1995, dictada por el señor Ministro de Vivienda y para que se hagan

otras declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RICARDO VALDÉZ, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE TOTAL COMUNICATION, INC., PARA QUE SE DECLAREN NULOS, POR ILEGALES, EL RESUELTO N° 16 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1995 Y EL ACTO CONFIRMATORIO, DICTADOS POR EL SEÑOR MINISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Ricardo Valdés, actuando en nombre y representación de la sociedad **TOTAL COMUNICATION, INC.**, interpuso ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nulos, por ilegales, el Resuelto N° 16, del 26 de septiembre de 1995 y el acto confirmatorio, dictados por el señor Ministro de Gobierno y Justicia y para que se hagan otras declaraciones.

En la parte final de su libelo, el licenciado Valdés pidió la suspensión provisional del efecto de los actos acusados, sin embargo, por razones de economía procesal, la Sala debe examinar si la demanda cumple con los requisitos legales para ser admitida.

En el punto relativo a las partes, el licenciado Valdés mencionó como parte demandada a la Dirección Nacional de Medios de Comunicación Social del Ministerio de Gobierno y Justicia (f. 31), cuando los actos acusados los dictó el señor Ministro de Gobierno y Justicia. La correcta indicación de la parte demandada no sólo es necesaria porque así lo exige el numeral 1° del artículo 28 de la Ley N° 33 de 1946, sino también porque el informe de conducta a que se refiere el artículo 33 de la misma Ley, sólo puede requerirlo esta Sala al funcionario que dictó el acto que se impugna.

La actora también incumplió el citado numeral 1° del artículo 28 ibídem, porque no expresó que el funcionario demandado estaría representado por la Procuradora de la Administración. Las omisiones expresadas ocasionan la inadmisión de la demanda, tal como dispone el artículo 31 de la Ley en cita.

De consiguiente, la suscrita Magistrada Sustanciadora, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado Ricardo Valdés, en nombre y representación de TOTAL COMUNICATION, INC., para que se declare nulos, por ilegales, el Resuelto N° 16 del 26 de septiembre de 1995 y el acto confirmatorio, dictados por el señor Ministro de Gobierno y Justicia y para que se hagan otras declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE TRONCOSO, LACAYO Y PORRAS, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE MARVIL, S. A.,

PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL RESUELTO N° 59 DEL DE SEPTIEMBRE DE 1995, EXPEDIDO POR EL DIRECTOR GENERAL DE PROVEDURÍA Y GASTOS, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGA OTRA DECLARACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense Troncoso, Lacayo y Porras, actuando en nombre y representación de la sociedad **MARVIL, S. A.**, interpuso ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción para que se declare nulo, por ilegal, el Resuelto N° 59, del 26 de septiembre de 1995, expedido por el Director General de Proveeduría y Gastos del Ministerio de Hacienda y Tesoro, el acto confirmatorio y para que se haga otra declaración.

En la parte final de su libelo la apoderada judicial de MARVIL, S. A. pidió la suspensión provisional del efecto de los actos acusados, sin embargo, por razones de economía procesal, se estima necesario, antes de resolver esa solicitud, examinar si la demanda cumple con los requisitos legales para ser admitida.

De acuerdo con el párrafo final del artículo 29 de la Ley N° 33 de 1946, la demanda contencioso-administrativa debe dirigirse contra el acto original, sin que sea indispensable promoverla contra los actos "simplemente confirmatorios que hayan agotado la vía gubernativa", lo que evidentemente significa que, como parte demandada, debe designarse al funcionario que dictó el acto original.

En el presente caso, la actora dirigió su demanda contra el señor Ministro de Hacienda y Tesoro, quien expidió el **acto confirmatorio** impugnado y no contra el Director General de Proveeduría y Gastos, quien dictó la Resolución N° 59, del 26 de septiembre de 1996, mediante la cual se declaró impedida por el término de tres meses a la sociedad MARVIL, S. A. para celebrar contratos con el Estado.

La Sala ha expresado reiteradamente que la correcta designación del demandado no sólo es necesaria para cumplir con el requisito exigido por el numeral 1° del artículo 28 de la Ley N° 33 de 1946, sino también, porque el informe de conducta a que se refiere el artículo 33 de la misma Ley, sólo puede requerirlo el Magistrado Sustanciador al funcionario que dictó el acto original que se impugna, por ser éste el creador de la situación jurídica que supuestamente afecta o lesiona derechos del demandante y contra quien debe impetrarse la demanda.

La parte actora también incumplió con lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 28 ibídem, ya que no expresó que la firma forense Troncoso, Lacayo y Porras actúa en su representación. Como la demandante no observó los requisitos anotados, su demanda no puede admitirse, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la precitada Ley.

De consiguiente, la suscrita Magistrada Sustanciadora, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por la firma forense Troncoso, Lacayo y Porras, en nombre y representación de MARVIL, S. A., para que se declare nulo, por ilegal, el Resuelto N° 59 del 26 de septiembre de 1995, dictado por el Director General de Proveduría y Gastos, el acto confirmatorio y para que se haga otra declaración.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO MIGUEL CÁRDENAS, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE EUMELIA ESTHER VERGARA DE BALLESTEROS, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL DECRETO DE PERSONAL N° 204, DEL 14 DE AGOSTO DE 1995, EMITIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

Mediante providencia del 10 de enero de 1996, el Honorable Magistrado Sustanciador no admitió la demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado Miguel Cárdenas, en nombre y representación de la señora **EUMELIA ESTHER VERGARA DE BALLESTEROS**, para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto de Personal N° 204, del 14 de agosto de 1995, expedido por el Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministro de Educación.

I. FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA

El Magistrado Ponente no admitió la mencionada demanda por las siguientes razones:

> "... el escrito en comento no ha sido dirigido al Presidente de esta Sala de la Corte como exige el texto del artículo 102 del Código Judicial; no se especifica que el Procurador de la Administración interviene en la presente controversia en defensa del acto impugnado como lo señala el artículo 345 (sic) numeral 2 de la misma excerta legal.
>
> Igualmente es preciso puntualizar que la recurrente no comprueba estar amparada por estabilidad, carrera administrativa, ley especial o concurso de mérito que garantice relativamente su cargo en la entidad demandad, ya que no reposa prueba idónea al respecto, en el negocio que nos ocupa. Este requisito es indispensable como lo ha señalado esta Sala en ocasiones similares, en aras de que el proceso instaurado no resulte ineficaz o nugatorio, dado el estatus de discrecionalidad del nombramiento y la remoción del demandante por parte del funcionario nominador ...
>
> Finalmente se evidencia que la peticionista estima conculcado el artículo 127 de la Ley 47 de 1946 en el concepto de infracción literal del precepto legal, sin especificar expresamente, cuál de las modalidades de esta causal, transgrede el acto impugnado. Debe recordarse que la infracción literal de la norma se subdivide en: violación directa por omisión, violación directa por comisión, indebida aplicación e interpretación errónea; incumpliéndose en consecuencia, con el numeral 3 (sic) del artículo 43 de la Ley 135 de 1943." (Fs. 20-21).

II. LOS ARGUMENTOS DEL RECURRENTE

La resolución parcialmente transcrita fue apelada por el apoderado judicial de la demandante, quien pidió que se revocara porque aun cuando en la demanda no se especificó la modalidad de la infracción literal del artículo 127 de la Ley N° 47 de 1946, la misma se desprende de la explicación que se hizo acerca de la forma cómo se produjo dicha infracción.

Con relación a la ausencia de pruebas que acrediten que la demandante goza de estabilidad en el cargo del cual fue destituida, el licenciado Cárdenas expresó que dichas pruebas se originan precisamente en el artículo 127 de la Ley N° 46 de 1947, que le otorga estabilidad a los funcionarios administrativos del Ministerio de Educación.

III. OPINIÓN DE LA PROCURADORA DE LA ADMINISTRACIÓN

Mediante Vista N° 113 del 12 de marzo de 1996, la Procuradora de la Administración pidió al resto de los Magistrados que integran la Sala que confirmen la resolución impugnada, por las mismas razones que cita el Honorable Magistrado Sustanciador (fs. 32-35).

IV. DECISIÓN DEL RESTO DE LOS MAGISTRADOS DE LA SALA

De acuerdo con la providencia impugnada, la demanda presentada por la señora EUMELIA ESTHER VERGARA DE BALLESTEROS no fue admitida porque no se dirigió al Magistrado Presidente de la Sala; no se indicó que la Procuradora de la Administración intervendría en defensa del acto acusado; no se probó previamente que la demandante estuviese amparada por un régimen de estabilidad en el cargo y tampoco se especificó en qué modalidad el acto acusado infringió literalmente el artículo 127 de la Ley N° 46 de 1947.

Con respecto al primer punto, esta Superioridad ha expresado en otras oportunidades (v. gr. Auto del 13 de enero de 1995), que el requisito establecido en el artículo 102 del Código Judicial no tiene el carácter de esencial dentro de este tipo de demandas, por lo que su sola inobservancia no amerita el rechazo de la misma.

En cuanto al segundo defecto, se observa que en el punto I.3 de la demanda, el apoderado judicial de la recurrente expresó que, **"Interviene en el presente proceso, por mandato legal, la señora Procuradora de la Administración"**. A juicio del resto de los Magistrados de la Sala, con la aludida indicación la demandante cumplió con el requisito establecido en el numeral 1° del artículo 43 de la Ley N° 135 de 1943, ya que esta norma exige **"La designación de las partes y de sus representantes"**. Como el presente negocio se refiere a una acción contencioso-administrativa de plena jurisdicción es evidente que, de acuerdo con el numeral 2° del artículo 348 del Código Judicial, dicha funcionaria actuará en defensa del acto acusado.

Con respecto al hecho de que la recurrente no probó que goza de estabilidad en el cargo, el resto de los Magistrados de la Sala considera que esta circunstancia tampoco amerita la inadmisión de la demanda, pues, aún en ausencia de dicha estabilidad, el acto de destitución podría resultar ilegal en cualquiera de los conceptos señalados en el artículo 26 de la Ley N° 135 de 1943, es decir, por falta de competencia del funcionario que lo dictó, por quebrantamiento de las formalidades que deben cumplirse o por desviación de poder. El aspecto relativo a si la demandante goza o no de estabilidad en el cargo debe examinarse cuando se resuelve el fondo de la controversia.

El último defecto señalado a la demanda consiste en que el apoderado de la demandante no especificó en qué modalidad el acto acusado infringió literalmente el artículo 127 de la Ley N° 47 de 1946. Sobre este punto, el resto de los Magistrados de la Sala considera que la demandante cumplió con lo establecido en el numeral 4° del artículo 43 de la Ley en cita al expresar que el acto acusado violó el artículo 127 ibídem en el concepto de infracción literal del precepto y explicar la forma como se produjo dicha infracción. Es pertinente el fallo del 21 de abril de 1994 citado por la recurrente, en el cual la Sala expuso sobre el mismo particular, lo siguiente:

> "... el concepto de la infracción debe relacionarse con los motivos de ilegalidad que establece el artículo 16 de la Ley 33 de 1946 ... Por tanto, a juicio de la Sala, al señalar el demandante que el motivo de ilegalidad que imputa al acto impugnado es la violación "en forma directa" de varias normas jurídicas y explicar cómo se ha producido esa violación, aunque no lo hace indicando expresamente si la violación directa se produjo por comisión u omisión, se ha cumplido con lo ordenado en el ordinal 4 del artículo 28 de la Ley 33 de 1946 y la Sala puede evaluar el fondo de las violaciones alegadas." (Registro Judicial de abril de 1994, pág. 203).

No obstante lo expresado, el resto de los Magistrados de la Sala considera, al igual que el Magistrado Sustanciador, que la demanda no debe admitirse, porque a pesar de que en el hecho sexto se afirma que se agotó la vía gubernativa por silencio administrativo, no se probó mediante una certificación que, en efecto, no fueron resueltos por el funcionario demandado los recursos promovidos dentro de los dos meses siguientes a su interposición. La debida comprobación del silencio administrativo es de vital importancia porque, como expresó la Sala en su fallo del 3 de febrero de 1995, "podría ocurrir que el silencio administrativo no se ha producido porque existe un fallo revocatorio o confirmatorio del acto impugnado y que este hecho no sea de conocimiento del actor, quien no se ha cerciorado de si el recurso ha sido o no resuelto, pidiendo una certificación de lo ocurrido mediante memorial. En el supuesto de que el acto hubiera sido revocado el objeto procesal ya no existiría y si hubiera sido confirmado, no existiría el silencio administrativo".

El agotamiento de la vía gubernativa es requisito esencial para ocurrir a la jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley N° 33 de 1943, en concordancia con el numeral 1° del artículo 22 de la misma Ley. Como el cumplimiento de dicho requisito no se probó, no es posible darle curso a la mencionada demanda, ya que así lo ordena el artículo 31 de la misma excerta legal.

De consiguiente, el resto de los Magistrados de la Sala, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMAN la providencia del 10 de enero de 1996, mediante la cual no se admitió la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado Miguel Cárdenas, en nombre y representación de la señora EUMELIA ESTHER VERGARA DE BALLESTEROS, contra el Decreto de Personal N° 204, del 14 de agosto de 1995, expedido por el Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministro de Educación.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ANÍBAL HERRERA PEÑA, EN REPRESENTACIÓN DE DENIS O. FUENTES M., PARA QUE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA NOTA DE 30 DE ENERO DE 1995, SUSCRITA POR EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, Y PARA QUE SE LE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Procurador de la Administración ha interpuesto recurso de apelación contra la resolución proferida por la Corte Suprema de Justicia - Sala Tercera (Contencioso Administrativa), expedida el 9 de junio de 1995 y mediante la cual se admite la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el Lcdo. Aníbal Herrera Peña, en representación de Denis O. Fuentes, con el objeto de que se declare nulo, por ilegal, la Nota de 30 de enero de 1995, suscrita por el Director de Administración de Personal del Ministerio de Obras Públicas.

La Magistrada Sustanciadora admitió la demanda mediante la resolución recurrida en vista de que la misma cumple, en su opinión, con los requisitos establecidos para su admisión.

El resto de los Magistrados proceden a examinar los argumentos planteados por la Procuradora de la Administración la cual interpuso recurso de apelación en el que solicita a la Sala revocar la resolución que admite la demanda por

incumplir con un requisito formal indispensable para que la misma sea admitida. El Procurador de la Administración fundamenta su solicitud en los siguientes términos:

> "... Nuestra inconformidad se basa en que el demandante no ha procedido a demandar el acto principal que causa estado, sino un acto meramente instrumental que pone en su conocimiento su separación del cargo.
>
> En efecto, el acto principal en la presente controversia, lo constituye el Decreto de Personal N° 12 de 18 de febrero de 1995, por el cual se ordena la destitución del señor DENIS O. FUENTES M., del cargo de Subdirector del Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia, indicándose en el mismo la causa que motivó dicha decisión, consistente en la reorganización administrativa efectuada en el Ministerio de Obras Públicas, como parte de la política de profesionalización del Cuerpo de Servidores Públicos de esa Institución. (Ver. fs. 23)
> ...
> Por tanto, la presente demanda debió proceder en contra del Decreto de Personal N° 012 de 18 de febrero de 1995 y no contra la Nota datada 30 de enero de 1995, por ser aquél y no éste el acto principal.
>
> El demandante o su representante legal debieron solicitar a la institución que les entregara copia autenticada del Decreto de Personal, por el cual se le destituye y, de negárselo, indicárselo al Honorable Magistrado Sustanciador, para que antes de admitir la demanda, fuera solicitado a las autoridades correspondientes, tal como lo dispone el artículo 46 de la Ley 135 de 1943, cuyo texto indica:
> ...
> La falta de esta formalidad trae como consecuencia que no pueda admitirse la presente demanda contencioso administrativa, de conformidad con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 135 de 1943, que dice:
> ...
> Por todo lo expuesto, esta Procuraduría es del criterio que no procede el curso de la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción que nos ocupa, por incumplir con un requisito formal indispensable para que la misma sea tramitada en debida forma."

El resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema procede a examinar la demanda con el objeto de verificar si la misma reúne los requisitos formales exigidos para su admisión.

En primer lugar, se observa que la presente demanda persigue no sólo la restitución del señor Fuentes al cargo que desempeñaba dentro del Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia, sino también que se le paguen los gastos de representación que dejó de recibir aún antes de que fuese separado y destituído de su cargo.

En segundo lugar, si bien es cierto que la demanda ha sido dirigida en contra de una Nota fechada el 30 de enero de 1995 en la cual se le notifica su separación del cargo que desempeñaba en el Instituto antes mencionado, y no contra el Decreto de Personal N° 12 de 21 de junio de 1995, mencionado por el Ministro de Obras Públicas en el informe de conducta, no hay constancia en el expediente que dicho decreto haya sido puesto en conocimiento del demandante, ni hay constancia del mismo dentro del expediente. Ello, aunado al hecho de que tal como señalamos en el párrafo anterior, la separación y destitución del señor Fuentes no son los únicos hechos demandados, sino que también hay que pronunciarse en relación a los gastos de representación que se le dejaron de pagar incluso antes de que se le separara del cargo, nos lleva a considerar procedente la admisión de la demanda.

En consecuencia, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera

(Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la resolución de nueve (9) de junio de mil novecientos noventa y cinco (1995) mediante la cual se ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, interpuesta por el Lcdo. Aníbal Herrera Peña, en representación de DENIS O. FUENTES, para que se declare nula por ilegal, la Nota de 30 de enero de 1995, emitida por el Director de Administración de Personal del Ministerio de Obras Públicas.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICDO. FELIPE RANGEL, EN REPRESENTACIÓN PROPIA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 13.004-86 DE 1° DE OCTUBRE DE 1986, DICTADA POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado **FELIPE RANGEL**, actuando en su propio nombre, ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula por ilegal, la Resolución N° 13.004-86 de 1° de octubre de 1986, dictada por la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social.

El Magistrado Sustanciador procede a revisar el libelo incoado, en vías de determinar si el mismo cumple con los presupuestos legales que condicionan su admisión.

En este punto se percata quien suscribe, que la demanda presentada por el licenciado **FELIPE RANGEL** no puede ser admitida, por las razones que se expresan de seguido:

En primer término es conveniente aclarar que el acto administrativo recurrido, esto es, la Resolución N° 13004-86 de 1° de octubre de 1986 ha sido objeto con anterioridad de dos demandas contencioso administrativas.

Así, el actor presentó demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción contra dicha resolución, en escrito fechado 12 de mayo de 1995. En esa oportunidad, la demanda incoada fue inadmitida por el Magistrado Sustanciador **ARTURO HOYOS**, mediante auto de 29 de septiembre de 1995, por cuanto la misma adolecía de múltiples defectos formales que impedían su admisión.

Posteriormente, en escrito presentado el 22 de diciembre de 1995, el actor interpone **por segunda vez**, una demanda contencioso administrativa, esta vez de Nulidad, contra la misma resolución N° 13004-86 de 1° de octubre de 1986. El Magistrado Sustanciador decide nuevamente inadmitir la demanda mediante auto de 6 de marzo de 1996, indicando que por tratarse de una acción que perseguía el resarcimiento de derechos subjetivos supuestamente conculcados, la vía idónea para la reclamación del licenciado **RANGEL**, era a través de una demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción.

De esta resolución judicial anunció apelación el licenciado **RANGEL**, y pese a que se le concedió término para la sustentación del recurso, el mismo no fue sustentado en tiempo oportuno, siendo declarado desierto por el resto de la Sala Tercera en resolución de 19 de abril de 1996.

Curiosamente, mientras se encontraba corriendo el término concedido para la sustentación de dicha la apelación, el licenciado **RANGEL** comparece ante la Sala Contencioso Administrativa, **por tercera vez**, con el fin de presentar una demanda de plena jurisdicción, contra la misma resolución N° 13004-86 de 1° de octubre de 1986. Así se advierte, que el recurrente aduce con la demanda, una serie de pruebas que según éste "reposan en el expediente N° 491-95 que se encuentra archivado en la Sala Tercera", pese a que al momento en que se presentara la demanda que nos ocupa, y tal como se desprende de los informes secretariales y las constancias que reposan en autos, el expediente citado por el actor "no se encontraba archivado en la Sala Tercera" sino pendiente de sustentación el recurso de apelación que éste mismo había presentado.

Sin perjuicio de lo anterior, quien sustancia debe manifestar, una vez examinados los documentos que se aportan en esta tercera demanda, que el actor tampoco ha evidenciado el agotamiento de la vía gubernativa, antes de presentar esta demanda. Por el contrario, el documento legible a folio 5 del expediente, contentivo de una resolución expedida por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social revela que el actor, si bien recurrió contra la resolución N° 13004-86 que le había suspendido una pensión de invalidez de que gozaba el asegurado, luego desistió de tales recursos, el 24 de marzo de 1993. La Comisión de Prestaciones de la Caja del Seguro Social admitió tal desistimiento, quedando en firme, de manera definitiva tal resolución.

Dado que uno de los condicionamientos establecidos en las leyes rectoras de los procesos contencioso administrativos es el agotamiento de los recursos legales con que cuenta el afectado para enervar un acto administrativo dentro de la esfera gubernativa, y el actor desistió expresamente de la oportunidad de que la administración evaluara su pretensión, para todos los efectos legales no se cumplió con el procedimiento establecido y el actor se allanó a lo decidido por la entidad estatal. Por ende, no hay lugar a entablar posteriormente un proceso contencioso administrativo siendo que el supuesto afectado, con el desistimiento presentado, había brindado su conformidad con la decisión administrativa.

De la lectura del libelo se deduce además, que el actor pretende que se examinen dentro de este mismo proceso, otros dos actos administrativos distintos, expedidos esta vez por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, que no constituyen de manera alguna **actos confirmatorios** de la resolución principalmente impugnada, puesto que éstos guardan relación con otras solicitudes presentadas por el licenciado **RANGEL** relativas a una pensión de vejez anticipada, solicitud de asignaciones familiares, y petición de reintegro al cargo que desempeñaba en la institución en el año de 1977.

Tal proceder resulta incongruente con la posición reiterada por este Tribunal, en el sentido de que las acciones contenciosas deben estar encaminadas a impugnar de manera específica e individualizada un solo acto administrativo, con la excepción de aquellos casos en que por la estrechísima vinculación que guardan entre sí, ameritan o hacen imprescindible el ser examinados en conjunto, lo que no acontece en el negocio que nos ocupa.

Esta Superioridad observa de igual forma, que el demandante ha señalado que los actos demandados "**resultan violatorios de preceptos legales por indebida aplicación de los mismos, y viola las Leyes, Decretos Leyes, Decretos de Gabinete además de la Constitución Nacional.**" (Cfr. foja 11 del expediente).

De manera inveterada la Sala Tercera ha venido insistiendo en que la parte demandante debe expresar claramente en su libelo, cuáles son específicamente las disposiciones legales que resultan supuestamente vulneradas por el acto proferido por la Administración, detallando igualmente el concepto en que se produce tal conculcación.

Evidentemente tal exigencia no se satisface con la exposición de la parte actora, que de manera ambigua e imprecisa ha manifestado que los actos acusados resultan violatorios de: **preceptos legales, Leyes, Decretos Leyes, Decretos de Gabinete**, omitiendo citar de manera específica algún texto legal en concreto.

También aduce supuestas violaciones de orden constitucional, cuyo examen somete a esta Corporación Judicial, pese a que la Sala Tercera ha insistido en el punto de que sólo ejerce el control de la **legalidad** de los actos administrativos, pues el control constitucional de los mismos compete al Pleno de la Corte Suprema de Justicia.

Las razones expuestas evidencian, en concepto de quien suscribe, la imposibilidad de darle curso legal a la demanda presentada a tenor de lo previsto en el artículo 50 de la Ley 135 de 1943, en atención a los defectos señalados por este Tribunal.

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador en representación de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción presentada por el licenciado FELIPE RANGEL, actuando en su propio nombre, para que se declare nula por ilegal, la Resolución N° 13.004-86 de 1° de octubre de 1986, dictada por la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LCDA. UDSLERYD DE LUQUE, EN REPRESENTACIÓN DE XENIS CANDANEDO WOOD, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN N° DRH.007/96 DE 19 DE ENERO DE 1996 DICTADA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La licenciada **Udsleryd Candanedo de Luque** en representación de **XENIS CANDANEDO WOOD,** ha presentado Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N DRH-007/96 de 19 de enero de 1996 expedida por el Director del Instituto Nacional de Formación Profesional (INAFORP), y para que se hagan otras declaraciones.

El Magistrado Sustanciador se percata que previo al trámite de admisión de la demanda, consta en el expediente una solicitud previa de certificación de documentos. Sin embargo por motivos de economía procesal, quien suscribe estima pertinente constatar si la presente demanda cumple con los requisitos legales exigidos en las leyes rectoras de los procesos contencioso administrativos que hagan procedente su admisión.

Observa el suscrito Sustanciador que el libelo carece de una formalidad que impide su admisión. La parte actora no acompaña el acto administrativo acusado de ilegal que consiste en la Resolución N DRH-007/96 de 19 de enero de 1996, y que debe estar debidamente autenticado, de conformidad con el artículo 44 de la Ley 135 de 1943 que establece:

> "ARTÍCULO 44. A la demanda deberá acompañar el actor una copia del acto acusado, con las constancias de su publicación, notificación o ejecución, según los casos."

Esta Superioridad en reiterados pronunciamientos ha establecido que en caso de no ser posible obtener la certificación del acto acusado, el recurrente debe solicitarlo al Magistrado Sustanciador para que éste en ejercicio de la facultad legal conferida en el artículo 46 de la Ley 135 de 1946, lo requiera a la

respectiva entidad demandada. Veamos lo que señala esta disposición legal:

> "ARTÍCULO 46. Cuando el acto no ha sido publicado, o se deniega la expedición de la copia o la certificación sobre publicación, se expresará así en la demanda, con indicación de la oficina donde se encuentre el original, o del periódico en que se hubiere publicado, a fin de que se solicite por el sustanciador antes de admitir la demanda."

En el caso que nos ocupa se observa que pese a que el demandante ha solicitado al Sustanciador requiera al ente demandado tal certificación, (ver f. 5), ha omitido acompañar la solicitud previa de certificación con el sello de recibido ante la entidad demandada, que constituye plena comprobación de que se llevaron a cabo todas las diligencias necesarias para su consecución.

El cumplimiento de este requisito permite a la Sala constatar la existencia de dicho acto, su notificación y por ende el agotamiento de la vía gubernativa. Ver Autos de 8 de septiembre de 1994, 15 de septiembre de 1995.

Sin perjuicio de lo expresado, quien suscribe considera pertinente indicarle al recurrente y como lo ha reiterado esta Superioridad en ocasiones similares, que en aras de que el proceso encausado no resulte ineficaz, tratándose en este caso de su destitución como servidor público en el cargo de Mecánico de Maquinaria Industrial en el INAFORP, es preciso que acompañe la prueba idónea de que como tal estaba amparado por carrera administrativa, ley especial, o concurso de mérito, que es lo que le garantizaría la estabilidad en el cargo dentro de la institución demandada, que demuestre que ingresó a la posición por cualquiera de esas formas. De lo contrario, su pretensión sería ilusoria por razón de la potestad discrecional de la entidad nominadora de libre nombramiento y remoción de sus miembros. Al respecto Cfr. Autos de 5 de septiembre de 1994, 3 de agosto de 1995, 29 de diciembre de 1995).

Por lo expuesto, no es procedente darle curso legal a la presente demanda, en atención al artículo 50 de la Ley 135 de 1943.

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador, en representación de la Sala Tercera, de la Corte Suprema, NO ADMITE la Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por la licenciada Udsrelyd Candanedo de Luque en representación de XENIS CANDANEDO WOOD.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LCDO. EMILIO DE LEÓN, EN REPRESENTACIÓN DE RAFAEL LÓPEZ VARGAS, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL RESUELTO N° 017-94 DE 19 DE OCTUBRE DE 1994 Y EL RESUELTO DE PERSONAL N° 048-94 DE 14 DE NOVIEMBRE DE 1994, EXPEDIDOS POR EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SEGURO AGROPECUARIO, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Licenciado **Emilio De León**, en representación de **RAFAEL LÓPEZ VARGAS**, ha interpuesto Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción para que se declare nulo, por ilegal, el Resuelto de Personal N° 017-94 de 19 de octubre de 1994 y el Resuelto de Personal N° 048-94 de 14 de noviembre de 1994, expedidos por el Director General del Instituto de Seguro Agropecuario, y para que se hagan otras declaraciones.

El recurrente solicita a esta Sala que declare la nulidad, por ilegal, del Resuelto de Personal N° 017-94 de 19 de octubre de 1994, expedido por el Director General del Instituto de Seguro Agropecuario, mediante el cual se le declaró insubsistente del cargo que ocupaba en dicha institución desde marzo de 1990 hasta octubre de 1994. Que como consecuencia de esta declaración, se le reintegre al cargo de Ingeniero Agrónomo I que ocupaba en la referida entidad, y se ordene a dicho ente trámite a su favor, el pago de todos los sueldos que ha dejado de percibir como Ingeniero Agrónomo, desde la fecha en que se declaró insubsistente su nombramiento hasta el día en que efectivamente se le restituya en el referido ente administrativo.

Aunado a lo anterior, también solicita que esta Sala ordene al Director General del Instituto de Seguro Agropecuario (ISA) que cumpla con todo lo dispuesto en el Resuelto de Retiro Voluntario N° 004-94 del 16 de marzo de 1994, expedido por dicha institución, mediante el cual se aceptó su renuncia por Retiro Voluntario del cargo de Ingeniero Agrónomo I que ocupaba en la referida institución.

De la acción encausada se le dio traslado al Director General del Instituto de Seguro Agropecuario (ISA), a los efectos de que rindiera el respectivo informe de conducta en relación a la demanda propuesta por el ingeniero agrónomo **RAFAEL LÓPEZ VARGAS**. Ver fs. 51-52.

De igual manera se le corrió traslado al señor Procurador de la Administración, quien mediante Vista N° 305 de 20 de julio de 1995, que corre a folios 53-71 del expediente, solicitó a esta Superioridad denegar las pretensiones del recurrente, en atención a los siguientes razonamientos.

Sostiene la Procuradora de la Administración que no se ha dado infracción alguna por parte del Instituto de Seguro Agropecuario en cuanto a la causal invocada para la destitución del señor Rafael López Vargas. Ello, en atención a que de la interpretación de las disposiciones que se aducen como infringidas se desprende que las causales de destitución para los profesionales en Ciencias Agrícolas pueden hacerse extensivas, lo que equivale a que legalmente, puedan darse otras causas de destitución fuera de las determinadas en dichas normas.

Además, señala la Procuradora de la Administración que al recurrente como servidor público también le rigen otras disposiciones legales que ofrecen a la Administración, en el caso que nos ocupa, al Director del Instituto de Seguro Agropecuario, facultad discrecional para la separación del cargo del personal subalterno, ante la inexistencia de la Carrera Administrativa para ese momento, y vigente en la actualidad. Por consiguiente, sostiene la señora Procuradora que el Director del Instituto de Seguro Agropecuario actuó dentro de su competencia determinada en la Ley, de allí que si está revestido de facultad para la remoción del cargo de los servidores públicos bajo su dependencia.

Cumplidos los trámites legales, esta Superioridad procede a resolver el fondo del presente negocio.

Primeramente, se consideran infringidas las siguientes normas: artículo 10 de la Ley 22 de 1961; artículo 10 de la Ley 68 de 1975; artículos 14 y 78, preámbulo y literal e del Reglamento Interno de Personal del Instituto de Seguro Agropecuario, que por estar estrechamente relacionados entre si, procedemos a analizarlos en su conjunto.

El artículo 10 de la Ley 22 de 1961 establece:

> "ARTÍCULO 10: Los profesionales idóneos al servicio del Estado podrán ser destituidos por razones de incompetencia física, moral o técnica. En cada caso particular, el Consejo Técnico Nacional de Agricultura hará las investigaciones necesarias para establecer la veracidad de los cargos. El Consejo Técnico Nacional de Agricultura decidirá y solicitará lo conducente al Órgano Ejecutivo si hubiere cometido infracción al presente artículo de esta Ley".

El artículo 10 de la Ley 68 de 1975, señala:

"ARTÍCULO 10: El Director General tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

a) Ejecutar los acuerdos del Comité Ejecutivo;

b) Someter al conocimiento y aprobación del Comité Ejecutivo los planes de seguro, las tarifas, los modelos de contratos de seguro y reaseguro, endosos, instructivos, cuestionarios y demás documentos de contratación, así como los reglamentos de la Institución;

c) Someter al Comité Ejecutivo para su estudio y aprobación, el balance mensual que muestra la posición financiera del Instituto y el resultado de sus operaciones;

d) Someter a la aprobación del Comité Ejecutivo el Balance Anual, el Estado de Pérdidas y Ganancias del año y la Memoria de cada ejercicio;

e) Someter oportunamente a la aprobación del Comité Ejecutivo el plan de trabajo y los presupuestos correspondientes a cada ejercicio;

f) Nombrar el personal del Instituto previa consulta y aprobación del Comité Ejecutivo;

g) Ejercer la jurisdicción coactiva la cual podrá delegar en otro servidor público de la Institución;

h) **Las demás facultades y obligaciones que le confiere esta Ley y sus reglamentos**". (el resaltado es de la Sala).

El artículo 14 del Reglamento Interno del Instituto de Seguro Agropecuario consagra:

"Artículo 14: Todo funcionario del ISA, que haya prestado servicios continuos durante dos años, con probada honestidad, competencia, lealtad y moralidad en el servicio, gozará de estabilidad. Sólo podrá ser destituido por causa justificada, de acuerdo a lo establecido en Decreto 116 del 10 octubre de 1984."

"ARTÍCULO 78: Separación del cargo es el acto mediante el cual se separa el empleado de las funciones, deberes y responsabilidades asignadas al cargo que desempeña.
...
e. Eliminación del cargo o cesantía es el acto mediante el cual la autoridad competente suprime o elimina puestos por ser innecesarios, por escasez de fondos o por cambios importantes en la institución o en las funciones correspondientes al puesto.

Cuando sea necesario decretar cesantía la autoridad administrativa correspondiente procederá a separar los empleados en el siguiente orden:

1. Empleados nombrados con carácter eventual.
2. Empleados nombrados con carácter interino.
3. Empleados nombrados y en período de prueba.
4. Empleados nombrados en propiedad o regulares.

En cuanto al orden de prelación para la separación se considerará dentro de cada grupo mencionado la antigüedad del servicio y las clasificaciones por apreciación de servicios del empleado, a fin de separar primero a los menos eficientes y luego a los de menor antigüedad".

Sobre el concepto de la violación, sostiene el recurrente que dichas disposiciones han sido infringidas tanto por el Resuelto de Personal N° 017-94 de 19 de octubre de 1994, como por el Resuelto de Personal N° 048-94 de 14 de noviembre de 1994, acusados de ilegales, por razón de que las mismas no le otorgan al Director General del Instituto de Seguro Agropecuario (ISA), la competencia para declarar insubsistente un cargo por supuestos motivos presupuestarios.

También alega la parte actora que los resueltos demandados desconocen el derecho a la estabilidad y al debido proceso que el artículo 14 del Reglamento Interno del Instituto de Seguro Agropecuario reconoce a los empleados del ISA. Además, que la causal de declaratoria por insubsistencia del nombramiento por motivos presupuestarios que le fuera aplicada, no está contemplada en el referido Reglamento Interno como una de las modalidades de separación del cargo, y que la aplicación de la misma, no es de competencia del Director General del ISA.

Esta Superioridad estima que no le asiste razón al recurrente, dado que como bien lo señaló la Sala en Sentencia de 12 de enero de 1994, si bien es cierto, el artículo 10 de la Ley 22 de 1961, contempla cierta estabilidad para los profesionales del ramo de agricultura que laboran para el Estado, ya que debe entenderse que si son competentes física, moral o técnicamente, deben permanecer en sus puestos; de no ser competentes, pueden ser destituidos siempre y cuando se lleven a cabo las investigaciones pertinentes por parte del Consejo Técnico Nacional de Agricultura. Esta última situación no debe entenderse como limitante para que se proceda con el despido de un funcionario que labore en el Instituto de Seguro Agropecuario (ISA), ya que el Ingeniero **RAFAEL LÓPEZ VARGAS** no ha acreditado que ingresó a dicha institución por concurso de mérito, que es lo que le otorgaría estabilidad en su cargo por ser funcionario de carrera.

Por lo tanto, al ser nombrado libremente el demandante en el cargo que desempeñaba en dicha institución, y al no estar su estabilidad sujeta a una Ley de Carrera Administrativa, o de una Ley especial en relación con funciones públicas, es potestad discrecional de la entidad demandada el libre nombramiento y remoción de sus miembros, como en efecto procedió a hacer el Director de dicho Instituto. Potestad que como puede apreciarse está consagrada en el artículo 10, literal h) de la Ley 68 de 1975, que también ha sido señalado como violentado por la parte demandante, y cuyo texto legal transcribiéramos en líneas anteriores.

En lo que concierne al artículo 14 del Reglamento Interno de Personal que establece la estabilidad en el ejercicio del cargo dentro del Instituto de Seguro Agropecuario, esta Sala estima que esta disposición resulta inaplicable para favorecer las pretensiones del recurrente. Es relevante aclarar que la estabilidad consagrada en una carrera determinada no puede ser regulada por un Reglamento Interno como alega el actor, dado que del artículo 300 de la Constitución Nacional se deduce claramente, que las carreras en los servicios públicos sólo pueden establecerse mediante ley conforme a los principios de sistema de méritos.

Por las razones expuestas, no prosperan los cargos de violación endilgados al artículo 10 de la Ley 22 de 1961, artículo 10 de la Ley 68 de 1975, y al artículo 14 del Reglamento Interno del Instituto de Seguro Agropecuario.

En lo que respecta a la violación del artículo 78 del Reglamento Interno del Instituto de Seguro Agropecuario, es procedente señalar que tal disposición no puede ser aplicada, dado que la misma estaba supeditada a lo dispuesto en el Decreto N° 116 de 10 de octubre de 1984, "Por el cual se Desarrolla y Reglamenta la Estabilidad de los Servidores Públicos", el cual fue derogado por el Decreto de Gabinete N° 1 de 26 de diciembre de 1989, que a su vez fue derogado en todas su partes por el artículo 197 de la Ley N° 9 de 10 de junio de 1994, "Ley de Carrera Administrativa", cuyo texto legal consideramos oportuno reproducir a continuación:

> "Artículo 197: Esta Ley deroga en todas sus partes el Decreto N° 1 de 26 de diciembre de 1989, el Decreto de Gabinete N° 20 de 1 de febrero de 1990 y todas aquellas normas que le sean contrarias".

Al ser derogadas tales disposiciones, los artículos 14 y 78 del Reglamento

Interno del Instituto de Seguro Agropecuario, perdieron su eficacia jurídica, es decir, cesó su vigencia, por lo que los cargos endilgados a tales disposiciones son improcedentes.

Finalmente, se alega infringido el artículo 221 de la Ley N° 32 de 31 de diciembre de 1993, por el cual se aprobó el Presupuesto General del Estado de 1994, que en su parte medular establece:

> "Artículo 221: El Gobierno Nacional ejecutará el Programa de Retiro Voluntario para lo cual se mantendrá una indemnización equivalente a doce (12) meses de salario a aquellos funcionarios que se acojan al mismo." ...

Señala el demandante que los actos administrativos impugnados violan la precitada disposición legal, porque dejaron de ejecutar el previamente aprobado retiro voluntario del Ingeniero **LÓPEZ**; máxime que los Decretos Ejecutivos que reglamentan dicho programa, no afectaron la vigencia del resuelto mediante el cual se aprobó su renuncia por retiro voluntario que se mantenía vigente al momento en que se procedió a su destitución, y que se encontraba pendiente del pago de la indemnización.

Esta Sala estima que el presente cargo de violación no es procedente, por cuanto se trata de una pretensión que en nada guarda relación con el acto administrativo acusado de ilegal, que consiste en la declaratoria de insubsistencia del señor **RAFAEL LÓPEZ VARGAS** del cargo que ocupaba como Ingeniero Agrónomo I del Instituto de Seguro Agropecuario. La destitución del recurrente se dio por razones presupuestarias, y en atención a la facultad discrecional de la entidad administrativa nominadora del libre nombramiento y remoción de sus miembros; y no por haberse acogido al Programa de Retiro Voluntario.

Además, cabe acotar que si bien a la fecha en que se le declaró insubsistente al actor del cargo que ocupaba en el ISA, es decir, el 19 de octubre de 1994, dos meses después de que mediante Resuelto de Retiro Voluntario N° 004-94 de 16 de marzo de 1994, se le aprobó su solicitud de acogerse al Plan de Retiro Voluntario. Mediante el Decreto Ejecutivo N° 28 de 18 de mayo de 1994, se suspendió temporalmente la ejecución de dicho Programa de Retiro Voluntario en cualesquiera de las etapas que éstas se encuentren, suspensión que fuera prorrogada hasta la fecha, por el Decreto Ejecutivo N° 76 de 1 de noviembre de 1994.

Tal situación, como se constata a f. 88 del exp. también incluía al Ingeniero **LÓPEZ**, cuya aprobación de acogerse al Plan de Retiro Voluntario se encontraba pendiente del pago de la correspondiente indemnización.

En consecuencia, los Magistrados que integran la Sala Tercera, Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARAN QUE NO ES ILEGAL el Resuelto N° 017-94 de 19 de octubre de 1994, expedido por el Director General del Instituto de Seguro Agropecuario.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICDO. JAVIER BRAVO D. EN REPRESENTACIÓN DE JORGE AGUILERA, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL SILENCIO INCURRIDO POR EL TESORERO MUNICIPAL DE PANAMÁ, AL NO DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN N° 097 C.Ci DE 12 DE MARZO DE 1993 DICTADA POR LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado **JAVIER BRAVO**, actuando en nombre y representación de **JORGE M. AGUILERA**, ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nulo por ilegal, el silencio administrativo incurrido por el Tesorero Municipal de Panamá, al no dar cumplimiento de la Resolución N° 097 C.Ci de 12 de marzo de 1993 dictada por la Gobernación de la Provincia de Panamá.

El Magistrado Sustanciador procede a revisar el libelo incoado, en vías de determinar si el mismo cumple con los presupuestos legales que condicionan su admisión.

En este punto se percata quien suscribe, que la demanda presentada por el licenciado **BRAVO** adolece de varios defectos que impiden su admisión, tal como queda expuesto de seguido:

Según parece desprenderse del libelo, el acto administrativo cuya ilegalidad se acusa, es la supuesta negativa tácita en que incurriera el señor Tesorero Municipal del Distrito de Panamá, al no acceder al pago de salarios caídos en beneficio del licenciado **JORGE AGUILERA**.

Las constancias que reposan en autos revelan que el señor **AGUILERA** había sido destituido del cargo que ocupaba en la Tesorería Municipal del Distrito de Panamá en el año de 1992, mediante Decreto de la Alcaldesa Municipal para la fecha. Tal actuación fue revocada por la Gobernación de la Provincia de Panamá mediante Resolución N° 097 C.Ci de 12 de marzo de 1993, en la cual se ordenó a la Alcaldía de Panamá, no sólo el reintegro del funcionario **AGUILERA**, si no también el **pago de salarios caídos**.

Con base en este pronunciamiento, el Concejo Municipal de Panamá expidió el Acuerdo N° 95 de 28 de septiembre de 1993 estableciendo un crédito suplemental que tendría por finalidad cubrir el pago de los salarios dejados de percibir por el licenciado **AGUILERA** durante el período comprendido entre su destitución y posterior reintegro. Sin embargo, la Alcaldesa de Panamá se negó a sancionar dicho Acuerdo, siendo aprobado por insistencia de los Concejales, conforme a la normativa prevista en la Ley 106 de 1973 sobre Régimen Municipal.

En estas circunstancias, el Tesorero Municipal, funcionario a quien estaba adscrito el cargo del licenciado **JORGE AGUILERA**, expide el Decreto TM-83/93 calendado 22 de octubre de 1993, mediante el cual ordena el **reintegro** de **JORGE AGUILERA** al cargo de Secretario Judicial en el Juzgado Ejecutor de la Tesorería Municipal, pero en dicha resolución omite por completo la mención relativa al pago de salarios caídos.

No consta en el expediente que el actor haya realizado ningún otro trámite luego de proferido en el año de 1993 el Decreto de reintegro antes mencionado, y no es sino hasta el día 4 de enero de 1996 en que presenta un memorial dirigido al Tesorero Municipal de Panamá para que éste ejecute la Resolución de la Gobernación que disponía el pago de salarios caídos a su favor.

Con inmediata posterioridad a esta actuación, presenta demanda contencioso administrativa ante la Sala Tercera, arguyendo en lo medular, que el Tesorero Municipal ha negado, tácitamente, la solicitud de ejecución del pago de salarios caídos.

Sin perjuicio de la evidente dilatación en el tiempo transcurrido desde el momento en que se ordena el reintegro del licenciado **AGUILERA** (omitiéndose pronunciamiento en cuanto al pago de los salarios) y el momento en que se solicita al Tesorero Municipal -como entidad nominadora- dicho pago, lapso que abarca casi tres años sin que el supuesto afectado haya realizado gestión alguna, el libelo de demanda no cumple con otros presupuestos que condicionan su admisión.

Así, en el renglón relativo a las partes del proceso, la parte recurrente **omite por completo** la identificación del funcionario demandado dentro de este proceso, limitándose a señalar que "presenta recurso de plena jurisdicción para que se dé cumplimiento en todas sus partes con la resolución N° 097 C.Ci. de 12 de marzo de 1993 dictada por la Gobernación de la Provincia de Panamá." Por ende, también omite incluir la mención de la señora Procuradora de la Administración dentro de este proceso, y la calidad en que esta funcionaria actúa dentro del mismo.

La Sala Tercera ha tenido oportunidad de pronunciarse en múltiples ocasiones en relación a estos dos puntos, indicando que la correcta designación de las partes del proceso es uno de los requisitos formales que condicionan la admisión de estas demandas, toda vez que una vez identificado con precisión el funcionario acusado, es a éste a quien le corresponde remitir al Tribunal, **por requerimiento de éste**, un informe completo y detallado que explique se actuación.

En el negocio sub-júdice este requerimiento se imposibilita ante la omisión mencionada, máxime cuando por la complejidad de los hechos que antecedieron al supuesto acto demandado, han intervenido diversas autoridades, funcionarios e instancias a nivel municipal (Alcaldía, Concejo Municipal, Tesorero Municipal) así como también la Gobernación de la Provincia de Panamá.

Por otra parte, se observa que en el renglón atinente a la **pretensión del actor**, éste no expresa de manera clara y concreta cuál es el acto demandado, pues se limita a señalar que: "Se invoca el Silencio Administrativo, ya que se solicitó al Tesorero Municipal de Panamá dar cumplimiento en todas sus partes con la Resolución N° 097 C.Ci. de 12 de marzo de 1993 dictada por la Gobernación de la Provincia de Panamá."

En este orden de ideas, quien suscribe advierte que el recurrente acusa la afectación de sus derechos subjetivos a consecuencia de una supuesta negativa tácita por silencio administrativo, sin acreditar debidamente en el expediente que tal situación se haya producido.

En efecto, luego de presentado ante el despacho del Tesorero Municipal el escrito de petición de salarios caídos (visible a folio 7 del expediente), no reposa en autos ningún elemento que permita a esta Superioridad constatar la falta de pronunciamiento del Tesorero Municipal en lo concerniente a la solicitud del licenciado **AGUILERA**.

En vías de comprobar el agotamiento de la vía gubernativa a través del silencio administrativo, el actor debió acompañar al libelo, copia de la gestión o gestiones realizadas ante el despacho del Tesorero Municipal, con el fin de que éste certificara si transcurridos dos meses a la fecha de presentación del memorial de 4 de enero de 1996, había recaído o no, pronunciamiento alguno en relación a la petición del licenciado **AGUILERA**.

Con esta diligencia hubiese dado cumplimiento a lo previsto en el artículo 36 de la Ley 135 de 1943, acreditando ante la Sala Tercera, los esfuerzos de la parte actora por confirmar si en efecto, existía un pronunciamiento, expreso o tácito, en relación con la solicitud del señor **JORGE AGUILERA**.

Las razones expuestas evidencian, en concepto de quien suscribe, la imposibilidad de darle curso legal a la demanda presentada a tenor de lo previsto en el artículo 50 de la Ley 135 de 1943, en atención a los defectos señalados por este Tribunal.

Sin embargo sería conveniente acotar, aunque éste es un aspecto que pudiese tener mas bien cierta incidencia en la pretensión de fondo del recurrente, que la Sala Tercera de la Corte, en sentencia de 30 de junio de 1994, al atender una solicitud de interpretación presentada por la **Alcaldesa del Distrito de Panamá** acerca del alcance y sentido de una Resolución proferida por el Gobernador de la Provincia de Panamá mediante el cual se ordenaba igualmente el pago de salarios caídos a una funcionaria Municipal, declaró que dicha Alcaldía no estaba obligada al pago de salarios caídos a servidores públicos municipales cuando se ordena el

reintegro de los mismos, **al no existir norma legal aplicable que así lo autorice.**

En mérito a lo expuesto, el Magistrado Sustanciador en representación de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción presentada por el licenciado JAVIER E. BRAVO D., actuando en nombre y representación de JORGE M. AGUILERA, para que se declare nulo por ilegal, el silencio administrativo incurrido por el Tesorero Municipal de Panamá, al no dar cumplimiento de la Resolución N° 097 C.Ci de 12 de marzo de 1993 dictada por la Gobernación de la Provincia de Panamá.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO AURELIO ALÍ BONILLA, EN REPRESENTACIÓN DE ALEJANDRO E. ARAÚZ G., PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO, INCURRIDO POR EL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Aurelio Alí Bonilla, actuando en nombre y representación de Alejandro E. Araúz G., interpuso ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la negativa tácita por silencio administrativo, incurrido por el Ministerio de Gobierno y Justicia, y para que se hagan otras declaraciones.

En la parte final de su libelo, el licenciado Bonilla hace una solicitud previa que consiste en que esta Sala pida al señor Ministro de Gobierno y Justicia que certifique la solicitud, que contiene la orden de reintegro proveniente del Juzgado Segundo Penal de Veraguas, entregada ante su despacho, el 11 de diciembre de 1995 por la parte actora, ha sido resuelta. Sin embargo, por razones de economía procesal, la Sala debe examinar si la demanda cumple con los requisitos legales para ser admitida, antes de resolver la mencionada solicitud.

La jurisdicción contencioso-administrativa se instituyó con el propósito de demandar la nulidad de actos, resoluciones o disposiciones administrativas violatorias del ordenamiento legal.

En el presente caso el actor no pide a la Sala que declare la nulidad de un acto administrativo, sino que haga las siguientes declaraciones:

> "PRIMERO: Que el oficio #2048 fechado 6 de diciembre de 1995 dirigido al Sr. Ministro de Gobierno y Justicia, firmado por el Juez Segundo de Circuito Penal de Veraguas encargado, es consecuencia de un Proceso Judicial en el cual se surtieron todas las etapas procesales, otorgándose todas las garantías a las partes y por tanto una vez dictada la Sentencia que lo fundamenta, debe ser cumplido, por la autoridad administrativa que corresponda ejecutarlo.
>
> SEGUNDO: Que mi representado **ALEJANDRO E. ARAÚZ G.**, tiene derecho, a ser reintegrado a la posición que ocupaba al momento de su separación del cargo, por orden de autoridad competente y a recibir todos los derechos dejados de percibir, mientras estuvo vigente la medida aplicada a el. Estos derechos son: Reintegro, Salarios

Caídos, Sobresueldos, Décimo tercer mes, vacaciones, Ascensos correspondiente, según su tiempo de Servicio y Escalafón.

TERCERO: Que mi representado tiene derecho a recibir una indemnización, por los daños y perjuicios ocasionados, ya que no se cumplió con el artículo 71, párrafo tercero de la ley N° 20 de 1983. Esta indemnización debe consistir en un 75% adicional de la cantidad líquida que resulta del pago de los derechos dejados de percibir por mi representado." (Fs. 14 y 15).

El oficio N° 2048 citado por el demandante en el punto primero de las declaraciones pedidas contiene una solicitud de que se cumpla una resolución judicial que deja sin efectos la orden de separación del cargo del Teniente Alejandro Araúz y el Sargento Luis Bernal. Esta comunicación no es un acto administrativo impugnable por esta vía. El cumplimiento de las resoluciones judiciales es exigible por la vía judicial y su incumplimiento debe sancionarse también por esa vía.

Como el demandante no ha impugnado un acto administrativo la demanda no debe admitirse, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del mismo cuerpo legal.

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia representada por la Magistrada Sustanciadora, administrando justicia en nombre de la República y por la autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado Aurelio Alí Bonilla, actuando en nombre y representación de Alejandro Araúz, contra el Ministerio de Gobierno y Justicia, para que se hagan algunas declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JOSÉ MARÍA LEZCANO EN REPRESENTACIÓN DE JOSÉ JAIME LEZCANO, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL RESUELTO DE PERSONAL N° 212-95 DE 1° DE JULIO DE 1995, DICTADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado José María Lezcano en representación de José Jaime Lezcano, interpuso ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nulo, por ilegal, el Resuelto de Personal N° 212-95 de 1° de julio de 1995, dictado por el Director Nacional del Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables y para que se hagan otras declaraciones.

El actor promovió recurso de reconsideración con apelación en subsidio contra el Resuelto de Personal N° 212-95 de 1° de julio de 1995. Mediante Resolución N° D6-084-95 del 13 de octubre de 1995, se resolvió el recurso de apelación que se había planteado. Sin embargo, como consta a foja 5, la Junta Directiva del Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables, declaró desierto este recurso de apelación, por no haberse sustentado dentro del término de 5 días hábiles siguientes a su notificación, según exige el artículo 21 de la Ley N° 33 de 1946.

Como no fue sustentado el recurso de apelación, el demandante no agotó la

vía gubernativa, debido a que el recurso de apelación interpuesto contra la resolución original que se impugna, no pudo resolverse porque no fue sustentado, omisión que equivale a la no presentación del recurso. El agotamiento de la vía gubernativa es requisito esencial para ocurrir a la jurisdicción contencioso-administrativa y se produce cuando se dan los supuestos contemplados en el artículo 25 de la Ley en cita, que a la letra dice:

> "ARTÍCULO 25. Para ocurrir en demanda ante el Tribunal de lo Contencioso-administrativo es necesario que se haya agotado la vía gubernativa, lo que se entenderá **cuando los actos o resoluciones respectivos no son susceptibles de ninguno de los recursos** establecidos en los artículos 33, 38, 39 y 41 **o se han decidido**, ya se trate de actos o resoluciones definitivas, o de providencias de trámite, si estas últimas deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, de modo que le pongan término o hagan imposible su continuación." (Acento añadido).

El criterio anotado ha sido sostenido por la Sala en los autos del 12 de agosto de 1994 (Registro Judicial, agosto 1994, págs. 340 y 341) y del 30 de junio de 1994 (Registro Judicial, junio 1994, págs. 193, 194 y 195).

Como el demandante no agotó la vía gubernativa su demanda no debe admitirse, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la citada Ley.

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia representada por la Magistrada Sustanciadora, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado José María Lezcano, en nombre y representación del señor José Jaime Lezcano para que se declare nulo, por ilegal, el Resuelto de Personal N° 212-95 de 1° de julio de 1995, dictado por el Director Nacional del Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables y para que se hagan otras declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. EUFROSINIO TROYA TORRES, EN REPRESENTACIÓN DE AGUSTÍN CHAVARRÍA, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO DE PERSONAL N° 79 DE 2 DE MAYO DE 1995, EMITIDO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Eufrosinio Troya Torres actuando en representación de **AGUSTÍN CHAVARRÍA**, ha interpuesto Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto de Personal N° 79 de 2 de mayo de 1995, emitido por el Presidente de la República por conducto del Ministerio de Hacienda y Tesoro, y para que se hagan otras declaraciones.

Argumentos del Demandante

El petente esgrime en el libelo contentivo de su pretensión, básicamente que no incurrió en ninguna causal de desobediencia, falta a sus deberes o actos inmorales, no se le elaboró un expediente administrativo, ni recibió amonestaciones que justifiquen su destitución; y que por lo tanto, el decreto de personal

impugnado conculca los procedimientos legales que debieron realizarse previa a su destitución ya que estaba amparado bajo el beneficio de la estabilidad relativa en su cargo, según lo preceptúa la Constitución Nacional y la Ley 9 de junio de 1994, que incorporó a nuestro sistema legal la carrera administrativa. A estos efectos el actor señala que se han infringido los preceptos contemplados en los artículos 151, 153, 155 y 156 de la Ley 9 de 20 de junio de 1994 por la cual se establece la carrera administrativa, y finalmente, el artículo 83 literal ch del Decreto Ejecutivo 130 de 24 de septiembre de 1992, por el cual se aprueba el reglamento interno de los Casinos Nacionales.

En consecuencia, el recurrente solicita que se declare la nulidad de los actos administrativos impetrados, y que se le restituya a su cargo, y que se le reconozcan todos sus derechos, puesto que no estaba sujeto a la libre remoción del ente nominador.

Informe del Ministerio de Hacienda y Tesoro

La entidad demandada indicó en el precitado documento los puntos que esencialmente se reproducen a continuación para mayor ilustración:

> "...
> El señor **AGUSTÍN CHAVARRÍA**, con cédula de identidad personal número 4-101-2684, fue nombrado en el Ministerio de Hacienda y Tesoro, mediante Decreto de Personal Número 228 de 23 de mayo de 1994.
>
> Mediante Decreto de Personal N° 79 de 2 de mayo de 1995, se declaró la insubsistencia del señor **AGUSTÍN CHAVARRIA**, del cargo que ocupaba en el Ministerio de Hacienda y Tesoro.
>
> El señor **AGUSTÍN CHAVARRIA** presentó recurso de reconsideración contra el meritado decreto, el cual fue decidido mediante Resolución N° 80 de 29 de junio de 1995, confirmándose en todas sus partes el mencionado acto administrativo. ..."

Contestación de la Procuraduría de La Administración

Por su parte la Procuradora de la Administración puntualizó en el referido escrito, que se opone a las peticiones del actor, en atención a que a su juicio "el recurrente se ha equivocado en sus aseveraciones, ya que si bien es cierto la Ley 9 de 20 de junio de 1994 estableció la Carrera Administrativa, no es menos cierto que a la fecha no ha podido ser implementada, debido a que no se han creado los organismos y reglamentos que harán posible su funcionamiento. Está claro que el demandante no estaba amparado por los derechos que confiere la Ley de Carrera Administrativa, por lo tanto, la posición que ocupaba el señor CHAVARRÍA, era de nombramiento y remoción discrecional de parte de la autoridad nominadora."

En lo concerniente a la violación del artículo 83 del Reglamento Interno de los Casinos Nacionales, conceptúa la Procuraduría de la Administración que esta disposición deviene inaplicable al negocio in examine, puesto que el demandante estaba nombrado en la Dirección de Aduanas del Ministerio de Hacienda y Tesoro y no en los Casinos Naciones a cuyos funcionarios únicamente se les aplica la norma citada.

Decisión de esta Superioridad

Encontrándose el proceso en este estado, los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte entran a resolver el fondo de la controversia planteada.

Sobre el particular es necesario tener presente que la Carrera Administrativa si bien es cierto ha sido instituida en el ordenamiento positivo mediante Ley 9 de 20 de junio de 1994, no se debe soslayar el hecho de que el mismo conjunto de normas administrativas en su Título XI (contentiva de las disposiciones transitorias) establece claramente una sucesión paulatina y cronológicas de situaciones, aspectos y requisitos que deben previamente

cumplirse para efectos de que rija plenamente el texto aprobado relativo a dichas disposiciones. En otras palabras, la Carrera Administrativa se encuentra en su fase de organización, para posteriormente ser implementada eficazmente, dentro de su ámbito de aplicación estatal.

Se pone de relieve seguidamente el hecho de que en la esfera de las destituciones de los funcionarios públicos, el acto que decida la remoción de quienes ocupen un cargo no protegido o amparado por ley especial, carrera administrativa, concurso de oposición o estabilidad relativa, es simplemente de libre nombramiento y remoción, producto del ejercicio de un poder o facultad discrecional del ente nominador, salvo norma positiva con jerarquía de ley, que estatuya lo contrario.

En el caso que nos ocupa, el demandante no se encuentra protegido por ley especial, estabilidad, carrera o concurso que garantice relativamente su posición dentro del engranaje gubernamental, y por lo tanto, estaba sujeto a la voluntad discrecional de la autoridad nominadora; es decir, su cargo era efectivamente de libre nombramiento y remoción. Por lo tanto no proceden los cargos de ilegalidad impetrados sobre los artículos 151, 153, 155 y 156 de la Ley 9 de 20 de junio de 1994 por la cual se establece la carrera administrativa, por no ser aplicables.

Es preciso destacar que efectivamente el Reglamento Interno de los Casinos Nacionales tampoco es aplicable en el negocio bajo estudio, puesto que éste rige solamente para los funcionarios que presten sus servicios a dicha entidad del Estado, y no para el resto de los servidores públicos, tal como lo preceptúa el considerando del Reglamento de los Casino Nacionales; desestimándose en consecuencia el cargo de ilegalidad propuesto sobre dicha excerta en lo que respecta al artículo 83 literal ch. Se hace la salvedad que en todo caso el beneficio de estabilidad sólo puede estar establecido en una norma con jerarquía de Ley y no en un reglamento.

En consecuencia, la actuación del Ministro de Hacienda y Tesoro se apegó a los preceptos legales que regulan la situación planteada, no procediendo los cargos de ilegalidad endilgados.

En mérito de lo expuesto, los Magistrados que integran la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, Administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARAN QUE NO ES ILEGAL el Decreto de Personal N° 79 de 2 de mayo de 1995, emitido por el Presidente de la República por conducto del Ministerio de Hacienda y Tesoro.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA ENDARA & MARRÉ EN REPRESENTACIÓN DE MARÍA LUISA DE PÉREZ, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 0849-95 DE 31 DE ENERO DE 1995 DICTADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, Y LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO AL NO CONTESTARSE EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA DICHA RESOLUCIÓN Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA.

VISTOS:

La firma forense Endara y Marré actuando en representación de María Luisa de Pérez, ha interpuesto demanda contencioso administrativo de plena jurisdicción para que declare nulo por ilegal la Resolución N° 0849-95 de 31 de enero de 1995,

dictada por el Director General de la Caja de Seguro Social, así como la negativa tácita por silencio administrativo al no contestarse el recurso de apelación interpuesto contra dicha Resolución, y para que se hagan otras declaraciones.

ARGUMENTOS DE LA PARTE ACTORA

La parte actora adujo en el escrito de su pretensión, básicamente que la acción de personal N° 0849-95 de 31 de enero de 1995 le fue notificada indebidamente (vía fax), y que no se le especificó los recursos a los que tenía derecho aun cuando alega haber interpuesto reconsideración y apelación de los actos impugnados. Igualmente indica que jamás se le había impuesto ningún tipo de sanción, ni había incurrido en falta grave conforme al reglamento interno de la institución. Ante estas circunstancias, el petente sostiene que se han conculcado los artículos 17 y 295 de la Constitución Nacional, los artículos 21 literal A, 47, 64 y 65 del Reglamento Interno de personal, el artículo 847 del Código Administrativo, el artículo 29 de la Ley 135 de 1943 y los artículos 22 literal E y 28 literal A del Decreto Ley 14 de 1954.

INFORME DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL

La entidad demandada al exponer ante esta Corporación los motivos que en su opinión respaldan los actos impugnados, que la demandante carece del amparo de la estabilidad ya que no cuenta con los cinco años mínimos de laborar continua e ininterrumpidamente a tiempo completo en la institución de seguridad social, tal como lo requiere como requisito de existencia del mencionado beneficio el artículo 28-A del Decreto Ley 14 de 1954; y por tanto, la ex funcionaria recurrente podía en su concepto ser removida unilateralmente por la autoridad nominadora en base a criterios de reorganización y de administración propias de la Caja de Seguro Social. Por otro lado alega que "la notificación del acto de remoción de la funcionaria recurrente se efectuó el día 31 de enero de 1995 en las oficinas de la dependencia de la Caja de Seguro Social para la cual laboraba dicha funcionaria, pero aclarando que ésta se negó a suscribir la notificación, por lo que se dejó constancia de tal negativa mediante los testimonios de Aracely Torres y Milca Carrera, respectivamente." Añade la Caja de Seguro Social en su informe de conducta que "ante la negativa de la funcionaria **HUMER DE PÉREZ** a firmar en la diligencia de notificación, hubo la necesidad de verificar tal actuación mediante testigos, tal como lo contempla el Código Judicial en su artículo 991 ..."

CONTESTACIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN

Sobre el particular se pone de relieve que el Ministerio Público se opone a las peticiones del actor, puesto que estima que no se han infringido las disposiciones que se invocan como conculcadas, y que en consecuencia, deben desestimarse las pretensiones formuladas.

Ello se desprende de que las normas constitucionales supuestamente transgredidas solamente pueden estar sujetas a revisión por parte del Pleno de la Corte Suprema de Justicia como organismo competente para efectuar dicha función jurisdiccional, y no por parte de la Sala Tercera de esta Corporación.

Así mismo esgrime la Procuradora de la Administración que ninguna "norma de inferior jerarquía a la Ley, como lo es un `Reglamento puede otorgar estabilidad a un funcionario público, ni desarrollar directamente normas constitucionales, ya que esto corresponde a la Ley formal, y por vía de excepción a los Decretos Reglamentarios Autónomos, en caso de que no exista regulación de carácter legal." Seguidamente se anota que recientemente el Pleno de la Corte Suprema mediante fallo de 30 de noviembre de 1995 declaró inconstitucional en su totalidad el reglamento interno de personal de la Caja de Seguro Social por contradecir lo dispuesto en el artículo 297 de la Constitución Nacional.

Por otro lado se argumenta que la recurrente no está amparada por el fenómeno de la estabilidad por lo que podía ser destituida de manera discrecional por el Director de la Caja de Seguro Social; máxime cuando en el expediente no consta que la demandante haya ingresado a la institución demandada por medio de concurso de mérito. Aunado a lo anterior se indica que la presentación del

recurso de reconsideración surte los efectos de notificación personal al utilizar en tiempo los recursos legales pertinentes, a tenor de lo establecido en el artículo 32 de la Ley 135 de 1943 y 1007 del Código Judicial.

CONCLUSIONES DE ESTA SUPERIORIDAD

Encontrándose el proceso en este estado, los Magistrados que integran la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, entran a resolver la controversia incoada.

Al respecto coincide esta Corporación con la Procuraduría de la Administración en el sentido de que no es procedente analizar las violaciones impetradas sobre los artículos 17 y 295 de la Constitución Nacional, puesto que ello es una potestad estrictamente privativa del Pleno de Corte como ente guardían del control e integridad de la constitucionalidad de nuestro sistema jurídico, tal como lo estatuye el artículo 203 numeral 1 de la Carta Magna.

En otro orden de ideas, tenemos que la violación del artículo 21 literal a del Reglamento interno de personal la consideraremos en concordancia con la infracción del artículo 47 de la misma excerta reglamentaria, puesto que por si solo el mencionado artículo 21 literal a, no consagra regulación alguna que contemple derechos subjetivos reclamables.

Siendo ello así debemos destacar que el artículo 47 del Reglamento interno de personal, que es la disposición que establece las causales específicas por las cuales puede ser destituido un funcionario, previo procedimiento de investigación y justa causa comprobable, únicamente le es aplicable a los servidores de la Caja de Seguro Social con estabilidad; es decir, que hayan laborado en esta institución por un período mínimo de cinco años a tiempo completo, como lo estatuye el artículo 28-A del Decreto Ley 14 de 1954, o de lo contrario, su estatus como funcionario público es de libre nombramiento y remoción. A estos efectos, cabe resaltar que el requisito de que es indispensable que medie causa justificada y el procedimiento de investigación previo para proceder a la destitución de un servidor público, es ajeno completamente e inaplicable a los funcionarios de libre nombramiento y remoción no amparados por el beneficio o derecho de inamovilidad relativa en el cargo que se ocupa (estabilidad), ya que ellos dependen directamente de la voluntad de la autoridad nominadora; y por otro lado, debido a que como puntualiza la Procuraduría de la Administración, no es dable el reconocimiento de estabilidad más allá de los casos que expresamente contemple la Ley. En otras palabras, no puede entrar en contradicción lo dispuesto en un reglamento con respecto a lo contemplado en una ley cuya jerarquía es superior, ya que en estos casos se aplicará la ley y no el contenido del reglamento que se invoque como conculcado, tal como lo señala el artículo 757 del Código Administrativo.

En el caso que nos ocupa se observa que la demandante laboró en la Caja de Seguro Social desde el 1 de febrero de 1990 hasta el 31 de enero de 1991 (cfr. foja A-1 hasta A-3 del antecedente administrativo); período éste que no alcanzó por un día los cinco años mínimo de labores a tiempo completo para hacerse acreedora al amparo del derecho de estabilidad.

Ciertamente y con posterioridad, se le concedieron a la señora de Pérez 30 días de vacaciones resueltas pero no hechas efectivas. Sin embargo, aun cuando el período de estas vacaciones fuera del 31 de enero de 1995 al 1 de marzo del mismo año (cfr. foja 50 del expediente administrativo), no debe soslayarse que dichas vacaciones fueron solicitadas el 12 de febrero de 1995 y la acción de personal que las concede data del 22 de febrero del mismo año; todo lo cual indica que la demandante efectuó su petición de vacaciones como derecho adquirido, desde su estatus de cese laboral el cual se dio el mismo 31 de enero de 1995. En consecuencia, el período asignado a las vacaciones no tiene otro asidero que el artículo 31 del Reglamento interno de personal, que estatuye claramente que en caso de acumulación de vacaciones no disfrutadas oportunamente, (2 meses como máximo), procederá su pago al término de la relación laboral con la institución.

En ese sentido se advierte que la demandante no pertenecía a la Caja de

Seguro Social al momento de concederseles sus vacaciones, dado que la misma estaba separada de la institución al efectuarse todo el trámite para la obtención del pago efectivo de dicho derecho. Así las cosas no puede entenderse la petición de la impugnante en el sentido de interpretar que el término de vacaciones concedido debe contabilizarse para efectos de su período laborado, y por ende para ampararse por el derecho de estabilidad, puesto que ello sólo tiene efectos meramente administrativos de control de personal, debido a que, todo pago debe reflejar un derecho ganado, ya sea de trabajo realizado, licencia, vacaciones, etc. ...

Al carecer la parte actora de estabilidad, podía la autoridad nominadora proceder a dar por terminada la relación laboral-administrativa entre la institución y la funcionaria en cuestión, sin causa justificada ni procedimiento previo; y por lo tanto, la entidad demandada actuó conforme a las normas jurídicas vigentes. Por consiguiente no procede los cargos de ilegalidad impetrados sobre los artículos 21 literal a y 47 del Reglamento interno de personal; siendo el criterio expuesto aplicable a los artículos 847 del Código Administrativo, 64 y 65 del citado Reglamento interno de personal de la Caja de Seguro Social, 28-A y 22-E del Decreto Ley 14 de 1954.

En lo concerniente a la violación del artículo 29 de la Ley 135 de 1943 se acota que aun cuando la resolución impugnada N° 0849-95 de 31 de enero de 1995, no le indique al interesado los medios de impugnación con los cuales cuenta para enervar dicha resolución, debe entenderse que la falta de este requisito de eficacia pero no de nulidad, fue subsanada por el actor a tenor de lo preceptuado en el artículo 32 de la Ley 135 de 1943, ya que interpuso oportunamente los recursos de reconsideración y apelación que agotaron debidamente la vía gubernativa, tal como lo estableció esta Sala en procedimiento de alzada instaurado por la Procuraduría de la administración, mediante resolución de 30 de noviembre de 1995 (que a su vez confirmó la admisión del presente libelo), dándose por oportunamente enterado y conocedor de los mismos. En consecuencia, no procede el cargo de ilegalidad endilgado así como tampoco las pretensiones formuladas por la demandante a través de la demanda bajo estudio.

En mérito de lo expuesto, los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NIEGAN las pretensiones del actor y en consecuencia, DECLARAN QUE NO ES ILEGAL el Resuelto N° 0849-95 de 31 de enero de 1995 emitido por el Director de la Caja de Seguro Social, e impugnado mediante Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por la firma forense Endara y Marré actuando en representación de María Luisa de Pérez.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA ARIAS, FÁBREGA Y FÁBREGA, EN REPRESENTACIÓN DE AZUCARERA NACIONAL, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 213-4113 DE 10 DE ABRIL DE 1992, EMITIDA POR LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE INGRESOS DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense Arias, Fábrega y Fábrega, actuando en nombre y representación de **AZUCARERA NACIONAL, S. A.**, ha interpuesto ante esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, demanda contencioso administrativa de plena

jurisdicción para que se declare parcialmente nulas, por ilegales, las Resoluciones N° 213-4113 de 10 de abril de 1992 y N° 213-1464 de 23 de junio de 1993, ambas emitidas por la Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá, y la Resolución N° 205-019 de 27 de mayo de 1994, expedida por la Comisión de Apelaciones de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro.

La demandante pretende además, que la Sala declare que las sumas pagadas por **AZUCARERA NACIONAL, S. A.** a las señoras Ivonne de Delvalle y María E. de Penso, en cumplimiento de lo establecido en los contratos de trabajo celebrados con Max Delvalle y Marcel Penso respectivamente, son deducibles de la renta bruta de **AZUCARERA NACIONAL, S. A.** También pide a la Sala que declare que el Ministerio de Hacienda y Tesoro está obligado a restituir al contribuyente, **AZUCARERA NACIONAL, S. A.**, aquellas sumas correspondientes al impuesto sobre la renta, impuesto complementario y recargo e intereses que fueron consignadas ante la Dirección General de Ingresos, en cumplimiento del artículo 49 de la Ley 135 de 1943, en la parte proporcional que de tales impuestos, intereses y recargos corresponden al aumento en la renta gravable por las sumas de B/.153,705.67 y B/.118,446.56, pagadas en concepto de pensión de viudez, por **AZUCARERA NACIONAL, S. A.**, a las señoras Ivonne Delvalle y María E. de Penso, durante los períodos 1988-89 y 1989-90.

I. CONTENIDO DEL ACTO IMPUGNADO

Mediante la primera de las mencionadas resoluciones la Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá, expidió una liquidación adicional a nombre de la contribuyente **AZUCARERA NACIONAL, S. A.**, por deficiencias en sus declaraciones del impuesto sobre la renta correspondiente a los años 1988-89 y 1989-90, en los siguientes cinco renglones: 1) Salarios y gastos de representación de Directores y Gerentes, 2) pensión por viudez, 3) participación de las utilidades, 4) ajuste al incentivo a las exportaciones, y 5) ajuste por reinversión. Tales ajustes aumentan la renta neta gravable declarada de B/.2,793,255.44 (1988-89) y B/.2,683,788.97 (1989-90) a B/.3,086,354.37 y B/.3,190,508.95 respectivamente (fs. 2 del expediente administrativo).

Mediante la segunda de las citadas resoluciones se mantiene en todas sus partes la Resolución N° 213-4113 de 10 de abril de 1992, por medio de la cual se expidió la liquidación adicional a nombre de la contribuyente AZUCARERA NACIONAL, S. A., por deficiencias en sus declaraciones del Impuesto sobre la Renta para los períodos 1988-89 y 1989-90.

En la tercera resolución impugnada expedida por la Comisión de Apelaciones de la Dirección General de Ingresos, se resolvió modificar la Resolución N° 213-4113 de 10 de junio de 1992, mantenida por la resolución 213-1464 de 23 de junio de 1993, ambas expedidas por la Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá, y se redujo el monto del impuesto a pagar para el período 1989-90 de B/.280,956.55 a B/.108,731.14, y se mantuvo igual el monto a pagar para el año 1988-1989 en B/.167,652.59 (cfr. fs. 2 y 126 del expediente administrativo).

II. NORMAS INVOCADAS COMO VIOLADAS Y SU CONCEPTO

El apoderado judicial de la empresa demandante afirma que los actos acusados han violado los artículos 29, 37 y 72 literal e) del Decreto N° 60 de 28 de junio de 1965; el primer párrafo y el literal a) parágrafo dos del artículo 697 del Código Fiscal; y el artículo 70 del Código de Trabajo.

El texto de los artículos 29, 37 y 72 literal e) del Decreto N° 60 de 28 de junio de 1965, "por medio del cual se reglamentan las disposiciones del Impuesto sobre la Renta contenidas en el Código Fiscal", es el siguiente:

> **"Artículo 29.** (Principios generales).
>
> Además de los mencionados en el Parágrafo uno del artículo 697 del Código Fiscal, los gastos o erogaciones cuya deducción de la renta

bruta se autoriza son aquellos gastos de conservación o de producción de renta de fuente panameña, efectivamente pagados o incurridos en el año fiscal.

Se entiende por gasto de conservación de una fuente de renta, aquel en que se tenga que incurrir necesariamente para mantenerla en condiciones de trabajo, servicio o producción, sin que adquiera aumento de valor por razón del gasto.

Se entiende por gastos de producción de la renta, las demás erogaciones indispensables para obtener los productos o para percibir la ganancia.

Cuando el gasto o erogación sea pagado e incurrido para obtener indistintamente renta sujeta al impuesto e ingresos de fuente extranjera y/o ingresos exentos, sólo será admisible su deducción en la proporción respectiva, conforme a los comprobantes y contabilidad del contribuyente. A falta de éstos o en el caso de que la contabilidad no reflejara un resultado acorde con la realidad o por cualquier otro motivo las proporciones no pudieran determinarse con claridad según tales comprobantes, la porción deducible se establecerá proporcionalmente a los ingresos totales de ambos tipos de rentas.

Conforme a las disposiciones de este Artículo, no serán deducibles aquellos gastos, costos o pérdidas generados o provocados en negocios, industrias, profesiones, actividades o inversiones de capital cuya renta sea de fuente extranjera o esté exenta. Tampoco serán deducibles los gastos en que incurra con posterioridad a la obtención de las rentas, motivados por el empleo o destino que se le da a la renta después de obtenida, ni los gastos incurridos o pagados para mantener o desarrollar actividades de entretenimiento, recreo o expansión del contribuyente."

"**Artículo 37.** (Formación de un fondo para jubilaciones, pensiones y otros beneficios).

Las asignaciones para la formación de un fondo para pagar jubilaciones, pensiones y otros beneficios similares a los empleados del contribuyente podrán ser deducibles cuando los planes respectivos a su administración se ajusten a las condiciones siguientes:

a) Que hayan sido aprobados por la Caja de Seguro Social, la que para otorgar la autorización deberá verificar la solvencia y factibilidad del plan propuesto y de que se encuadre dentro de los propósitos que integran el sistema del Seguro Social;

b) Que el fondo se constituya mediante un fideicomiso exclusivamente con tal propósito y sea administrado de manera ajena a las actividades regulares de la empresa.

El fideicomiso constituido de acuerdo con este Artículo deberá presentar una declaración anual de rentas y estará sujeto en todo momento a investigación por parte de la Dirección General de Ingresos.

Las prestaciones que reciban los beneficios conforme a este tipo de plan privado no se encuentran comprendidas entre los ingresos exentos del impuesto a que se refiere el inciso h) del artículo 708 del Código Fiscal."

"**Artículo 72.** (Reglas aplicables).
Sin perjuicio de lo establecido en el Parágrafo Dos del Artículo 697 y en el 698 del Código Fiscal o en cualquier otra disposición de

este Decreto, no se considerarán deducibles:
...
e) Lo pagado a personas que no presten servicios personales en el negocio; ..."

La primera norma citada señala como gastos y erogaciones deducibles de la renta bruta, los literales del parágrafo uno del Artículo 697 del Código Fiscal, más los gastos de conservación o de producción de la renta de fuente panameña efectivamente pagados o incurridos en el correspondiente año fiscal; define además, los conceptos de gastos de conservación y gastos de producción de la renta; y establece que no son deducibles los gastos, costos o pérdidas generados en empresas cuya renta sea de fuente extranjera o que esté exenta, los gastos en que se incurra con posterioridad a la obtención de la renta, ni los gastos pagados para actividades de recreo.

La violación directa que alega el demandante se ha producido por comisión, ya que, según afirma, tanto la Administración Regional de Ingresos como la Comisión de Apelaciones insisten en señalar que las sumas pagadas en concepto de pensión de viudez no constituyen gastos deducibles del impuesto sobre la renta, porque no son necesarios para la producción ni para la conservación de la renta de fuente panameña; que las personas con quienes se pactaron estos beneficios no eran trabajadores sino grandes ejecutivos de la empresa; y que los pagos hechos a las viudas de estos ejecutivos constituyen actos de mera liberalidad, no indispensables para la operatividad de la empresa.

El apoderado de la demandante señala que el artículo 29 no exige como requisitos para la deducibilidad de un gasto el que éste se incurra para la conservación y la producción de la renta, y que estos pagos sí tienen incidencia tanto en la conservación como en la producción de la fuente, porque fueron hechos en cumplimiento de lo estipulado en la cláusula sexta de los contratos de trabajo suscritos entre el contribuyente y Max Delvalle y Marcel Penso, por lo que no son actos de mera liberalidad. Agrega el demandante que, el beneficio pactado en la cláusula sexta aludida constituye una condición del contrato de trabajo suscrito con los señores Delvalle y Penso que fue "acordada por las partes en atención a los valiosos servicios que la empresa recibiría de parte de los ejecutivos antes mencionados"; que es una prestación contractual cuyo cumplimiento resulta imperativo para la contribuyente, toda vez que "las partes entendieron que para la continuación de los servicios de los mencionados señores Penso y Delvalle, era necesario brindarles ciertos beneficios, que tendrían efectos después de su muerte, y cuya modalidad se tradujo en la pensión por viudez contenida en la cláusula arriba reproducida"; y que de no haber obtenido un compromiso como el contenido en la cláusula sexta comentada, habrían exigido algún otro tipo de contraprestación a la empresa, que pudiera brindarle seguridad a sus esposas después de su muerte, como por ejemplo: un salario más alto o una póliza de seguro de vida, erogaciones que hubieran sido plenamente deducibles del Impuesto sobre la Renta. (Fs. 74-75).

En cuanto al cargo de violación de los artículos 37 y 72 del Decreto N° 60 de 28 de junio de 1965, señala la parte actora que los mismos se han violado por aplicación indebida, toda vez que, en primer lugar, no se trata de pagos hechos por **AZUCARERA NACIONAL, S. A.** para la formación de un fondo, sino de sumas pagadas en razón de la obligación contraída por la empresa en los contratos de trabajo que en su oportunidad celebró con los señores Max Delvalle y Marcel Penso; y en segundo lugar, porque aunque es evidente que las señoras Ivonne de Delvalle y María de Penso no prestan servicios personales a la empresa contribuyente, estas partidas tienen su origen en contratos de trabajo validamente celebrados con las personas que en su momento sí prestaron valiosos servicios personales a la empresa, necesarias para la conservación y la producción de la renta. (Fs. 69 y 82).

Respecto del primer párrafo y el literal a) parágrafo dos del artículo 697 del Código Fiscal, que el apoderado judicial de la demandante afirma se ha violado por comisión, textualmente preceptúa lo siguiente:

"**Artículo 697**. Se entiende por gastos o erogaciones deducibles, los

> gastos o erogaciones ocasionados en la producción de la renta y en la conservación de su fuente. El Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Hacienda y Tesoro establecerá las normas reglamentarias para la aplicación de este artículo dentro de los (6) meses siguientes a la promulgación de esta Ley.
> ...
> **Parágrafo Dos**: No son gastos o erogaciones ocasionados en la producción de la renta o en la conservación de la fuente y, por lo tanto, no son deducibles los siguientes:
>
> a) Los gastos personales o de subsistencia del contribuyente y de su familia; ..."

Según el apoderado judicial de la demandante la transgresión del primer párrafo y del literal a) parágrafo dos del artículo 697 del Código Fiscal por parte de los actos administrativos impugnados se da respectivamente, de manera directa por comisión y por indebida aplicación. Por comisión, porque el artículo 29 del Decreto N° 60 de 1965 que desarrolla esta norma, incluye como gastos deducibles aquellos que tienen directa incidencia en la producción de la renta y en la conservación de su fuente, tales como las partidas pagadas por la **AZUCARERA NACIONAL, S. A.** a las señoras Ivonne de Delvalle y María de Penso; y por indebida aplicación, porque los gastos a los que nos venimos refiriendo no son gastos personales o de subsistencia de **AZUCARERA NACIONAL, S. A.**, ni existe una relación de parentesco entre las beneficiarias y esta empresa. Agrega el demandante que, los pagos hechos en concepto de pensión de viudez son el producto de una fórmula matemática ligada a la productividad de la empresa en los cinco años anteriores a la muerte de los ejecutivos que pactaron dichas cláusulas en sus respectivos contratos; la remuneración hecha a estos ejecutivos debe ser entendida como la totalidad de los beneficios presentes y futuros que reciben como compensación por sus servicios y que está condicionada a la productividad de la empresa (fs. 81).

Por último, en atención a la infracción argumentada contra el artículo 70 del Código de Trabajo, la parte actora afirma que ésta se ha producido en forma directa por omisión. Dicha disposición preceptúa que además de lo estipulado en la Ley, el contrato de trabajo obliga a lo expresamente pactado y a las consecuencias que sean conforme a la buena fe, la equidad, la costumbre o el uso favorable al trabajador, y por tanto las cláusulas de los contratos de trabajo celebrados con los ejecutivos Marcel Penso y Max Delvalle tienen carácter imperativo y vinculante y no son actos de mera liberalidad (fs. 77).

III. OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN

La demanda bajo estudio se corrió en traslado al señor Procurador de la Administración y se requirió un informe al funcionario que expidió el acto acusado, en cumplimiento del artículo 33 de la Ley 33, de 11 de septiembre de 1946.

El señor Procurador de la Administración solicitó denegar las pretensiones del demandante, en virtud de que los pagos hechos a las señoras Ivonne de Delvalle y María de Penso no cumplen con los requisitos exigidos en el artículo 37 del Decreto 60 de 1965, el cual exige para la justificación de este renglón, que la empresa **AZUCARERA NACIONAL, S. A.** presente, "por lo menos copia de la autorización por parte de la Caja de Seguro Social y/o la constitución de un fideicomiso para cumplir con las exigencias de este artículo". Señala además que, tal como lo expresaron las autoridades de la Dirección de Ingresos, los gastos deducidos en concepto de pensión de viudez no tienen incidencia alguna en la producción de la renta o en la conservación de la fuente y que el artículo 70 del Código de Trabajo, cuya violación se endilga, señala que debe tomarse en cuenta otras normas legales, por lo que era indispensable cumplir con lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 60 de 1965.

IV. ANÁLISIS Y CONSIDERACIONES DE LA SALA

Por la relación que tienen entre sí los cargos de violación hechos a los

actos impugnados por los artículos 697 del Código Fiscal y 29 y 72 literal e) del Decreto N° 60 de 28 de junio de 1965, la Sala procede a analizarlos conjuntamente.

La parte actora alega que los actos impugnados violan las citadas normas por las siguientes razones:

1. La doctrina nacional y extranjera ha sido uniforme en sostener que la compensación pactada con un trabajador constituye una condición de la relación laboral que no puede ser modificada unilateralmente;

2. Que la obligación de pagar la pensión de viudez nació en virtud del contrato de trabajo suscrito entre las partes, por lo que esta obligación es asumida por el contribuyente para la producción y la conservación de la fuente de renta;

3. Que esta condición contractual es razonable y justa para quienes prestaron servicios como ejecutivos a la empresa **AZUCARERA NACIONAL, S. A.** y no percibieron otros beneficios además de su salario, gastos de representación y utilidades.

4. Que si en lugar de la condición contractual pactada se hubiera convenido el pago de un salario mayor o una póliza de seguro de vida a favor de las viudas de los trabajadores Penso y Del Valle, los gastos causados por esas prestaciones hubieran sido deducibles de la renta gravable.

5. Que los pagos hechos en concepto de pensión de viudez, como incentivo y beneficio de los ejecutivos Max Del Valle y Marcel Penso, son el producto de una fórmula matemática en relación con las utilidades de la empresa en los cinco años anteriores a la muerte de los ejecutivos que pactaron dichas cláusulas en sus respectivos contratos de trabajo.

Los ajustes hechos por la autoridad demandada a las declaraciones de renta de la empresa **AZUCARERA NACIONAL, S. A.** en virtud de los actos impugnados comprenden cinco renglones (fs. 2); no obstante, la demanda que nos ocupa se limita a objetar uno de éstos, el relativo a la exclusión como gastos y erogaciones deducibles de la renta bruta de la empresa **AZUCARERA NACIONAL, S. A.**, de las sumas pagadas en concepto de pensión de viudez a Ivonne de Delvalle y María de Penso, durante el período 1988-89 y 1989-90.

Por tanto, en este caso debe la Sala determinar si las sumas pagadas en concepto de pensión de viudez, a las señoras Ivonne de Delvalle y María de Penso, constituyen gastos o erogaciones deducibles de la renta bruta de la empresa **AZUCARERA NACIONAL, S. A.**, de acuerdo con nuestra ley fiscal.

En primer lugar, debemos remitirnos al texto de los artículos 697 del Código Fiscal, y 29 y 72 del Decreto N° 60 de 1965, transcritos en esta resolución, los cuales señalan los gastos y erogaciones deducibles de la renta gravable y los que no son deducibles. Estos gastos y erogaciones deducibles son aquéllos ocasionados en la producción de la renta o en la conservación de su fuente. Los gastos ocasionados en la conservación de una fuente de renta, son definidos como aquellos en los que se tiene que incurrir necesariamente para mantener la renta en condiciones de trabajo, servicio o producción, sin que adquiera aumento de valor por razón del gasto; y los gastos de producción de la renta son las demás erogaciones indispensables para obtener los productos y para percibir la ganancia.

Cuando la empresa **AZUCARERA NACIONAL, S. A.** se comprometió a pagar las pensiones de viudez a las señoras Del Valle y Penso, lo hizo con la finalidad de producir la renta que contribuían a generar los señores Max Del Valle y Marcel Penso, con la prestación de sus servicios personales. No cabe duda que estos gastos tienen su origen en los contratos de trabajo celebrados por los señores Max Del Valle y Marcel Penso en octubre de 1978 (fs. 54 y 57) con la empresa **AZUCARERA NACIONAL, S. A.**, convenios mediante los cuales se establece las obligaciones que ambas partes se obligaban a cumplir. Estos contratos fueron efectivamente cumplidos por las partes.

En autos se leen dos dictámenes rendidos por los peritos designados por las partes. En ambos dictámenes los peritos coinciden en afirmar que las referidas pensiones de viudez se calcularon matemáticamente y corresponden a las 2/3 partes del promedio de la remuneración total (salario, gastos de representación y utilidades) pagada a Max Del Valle y Marcel Penso durante los último cinco años en que trabajó cada uno (sin tomar en cuenta para el cálculo de la pensión el año 1975); que las fluctuaciones en las utilidades de la empresa **AZUCARERA NACIONAL, S. A.**durante estos últimos cinco años tuvo incidencia en el cálculo de las pensiones, porque en la remuneración total se incluye la participación en las utilidades de cada año, calculada en el 2% de las utilidades obtenidas en cada período; que las utilidades del año 1975, año que no se podía incluir para el cómputo de la pensión, según convenio entre las partes, las ganancias fueron mucho mayores que las utilidades de los períodos acumulados de los años 1973-74 y 1976-77 respectivamente; que la celebración de los contratos referidos fue aprobada en reunión extraordinaria de accionistas de 16 de septiembre de 1977, al igual que el pago de una pensión de vejez a las viudas de los trabajadores calculada en 2/3 partes de sus respectivos sueldos, gastos de representación y bonificaciones de los últimos cinco años trabajados, exceptuando el cómputo del año que terminó el 31 de mayo de 1975; que con base en su experiencia, en nuestro medio es usual incluir en los contratos de trabajo con altos ejecutivos de empresas, beneficios adicionales al salario, tales como pólizas de seguro de vida o de hospitalización, uso de automóvil, alquiler de vivienda, pago de educación de los hijos menores; y que en el caso que nos ocupa no hay evidencia de que los señores Del Valle y Penso gozaran de beneficios adicionales al salario, los gastos de representación y la participación en las utilidades. (Fs. 138-145).

A juicio de la Sala, las señoras de Del Valle y de Penso, sólo reciben uno de la totalidad de los beneficios presentes y futuros convenidos por la empresa **AZUCARERA NACIONAL, S. A.** con los señores Marcel Penso y Max del Valle en los contratos de trabajo, como compensación por sus servicios la empresa. La celebración de estos contratos y el cumplimiento de los mismos, incluyendo los beneficios futuros acordados como parte de las prestaciones laborales están relacionada con las obligaciones contraídas por **AZUCARERA NACIONAL** para la conservación de la fuente de la renta, entendiendo como tales aquellos que la empresa hace para continuar en el proceso de producir la renta, el cual podría verse obstaculizado por demandas judiciales en caso de incumplimiento de estas obligaciones contractuales. Como el pago de este beneficio constituye un gasto, para la conservación de la renta el mismo puede deducirse de la renta bruta.

Este gasto no está comprendido, en ninguno de los literales del artículo 72 del Decreto N° 60 de 1965, porque esta norma se refiere al caso en que se paguen sumas de dinero a personas que no prestan servicios en el negocio, que no es el caso porque las sumas son pagadas a las señoras Del Valle y Penso como receptoras de un beneficio futuro convenido a sus esposos, como parte de las prestaciones laborales acordadas con ellos en el año de 1978 en su calidad de ejecutivos forjadores de la empresa.

En virtud de lo expuesto, la Sala considera que no se ha violado por aplicación indebida los artículos 697 del Código Fiscal y 29 y 72 del Decreto N° 60 de 1965.

En cuanto al artículo 70 del Código de Trabajo, la Sala considera que tampoco se ha violado, toda vez que el pago de la pensión de viudez a las señoras Del Valle y Penso fue convenido por la empresa en sendos contratos de trabajo como una obligación futura que la empresa está obligada a cumplir.

En cuanto al artículo 37 del Decreto N° 60 de 1965, considera la Sala que esta norma no es aplicable al caso porque reglamenta los fondos de jubilaciones, pensiones u otros similares, y en el negocio en estudio la empresa **AZUCARERA NACIONAL, S. A.** paga unas pensiones de viudez que no forman parte de ningún fondo de pensiones o jubilaciones. Las sumas declaradas como gastos en concepto de pensión de viudez han sido pagadas en cumplimiento de una obligación contraída por **AZUCARERA NACIONAL, S. A.** mediante un contrato de trabajo celebrado con los señores Max Del Valle y Marcel Penso, quienes como accionistas y ejecutivos de la empresa prestaron sus servicios efectivos, obligándose la empresa **AZUCARERA**

NACIONAL, S. A. a retribuirles sus servicios con distintas prestaciones, entre ellas una prestación futura que consiste en el pago de una pensión de viudez a sus esposas.

Por todo lo expuesto, la Sala considera que no podemos calificar estos gastos como no deducibles, porque efectivamente la empresa está obligada a cumplir con una obligación contraída en un contrato laboral y porque fueron efectivamente pagados en cada período fiscal que se discute.

De consiguiente, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA PARCIALMENTE NULAS, POR ILEGALES, las Resoluciones N° 213-4113 de 10 de abril de 1992 y N° 213-1464 de 23 de junio de 1993, ambas emitidas por la Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá, y la Resolución N° 205-019 de 27 de mayo de 1994, expedida por la Comisión de Apelaciones de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro; y que como consecuencia de esa declaración SON deducibles de la renta bruta de AZUCARERA NACIONAL, S. A. las sumas pagadas en concepto de pensión de viudez a las señoras Ivonne de Del Valle y María de Penso; y ORDENA que el Ministerio de Hacienda y Tesoro reembolse al contribuyente, AZUCARERA NACIONAL, S. A., las sumas correspondientes al impuesto sobre la renta, impuesto complementario y recargo e intereses que fueron consignadas ante la Dirección General de Ingresos, en cumplimiento del artículo 49 de la Ley 135 de 1943, en la parte en que tales impuestos, intereses y recargos corresponden al aumento en la renta gravable por las sumas de B/.153,705.67 y B/.118,446.56, pagadas en concepto de pensión de viudez, por AZUCARERA NACIONAL, S. A., a las señoras Ivonne de Delvalle y María E. de Penso, durante los períodos 1988-89 y 1989-90.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JESÚS L. ROSAS, EN REPRESENTACIÓN DE CONSTRUCTORA DEL ISTMO, S. A., PARA QUE SE DECLAREN NULAS, POR ILEGALES, EL ACTA DE RECIBO DE PROPUESTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° 7-95 DE 7 DE NOVIEMBRE DE 1995, LA RESOLUCIÓN N° 151 DE 21 DE DICIEMBRE DE 1995, Y LA RESOLUCIÓN N° 34 DE 27 DE FEBRERO DE 1996, TODAS EXPEDIDAS POR EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Jesús L. Rosas, en representación de Constructora del Istmo, S. A., interpuso ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nulas, por ilegales, el Acta de Recibo de Propuestas de la Licitación Pública Internacional N° 7-95 de 7 de noviembre de 1995, la Resolución N° 151 de 21 de diciembre de 1995, la Resolución N° 34 de 27 de febrero de 1996, todas expedidas por el Ministerio de Obras Públicas, y para que se hagan otras declaraciones.

En la demanda presentada, la parte actora solicita que se decrete la medida cautelar de suspender provisionalmente los efectos a que "se contrae la LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL N° 7-95, específica y directamente el ACTA DE RECIBO DE PROPUESTAS de la referida Licitación, acto administrativo principal", a fin de que se le eviten perjuicios económicos irreparables si se continua con el trámite de contratación con la empresa a la que se le adjudicó la licitación, teniendo en cuenta los gastos y compromisos hechos por la demandante para participar en la licitación pública internacional, la cual no le fue adjudicada.

Mediante la Licitación Pública Internacional N° 7-95 del 7 de noviembre de 1995, se adjudicó provisionalmente, a la empresa José Cartellone Construcciones Civiles, S. A., Renglón N° 1, por la suma de B/.9,132,782.79, la Licitación Pública para el Ensanche y Rehabilitación de la CarreteraDavid-Concepción, en la Provincia de Chiriquí, como consta en la foja 3.

Por medio de la Resolución N° 151 de 21 de diciembre de 1995 expedida por el Ministerio de Obras Públicas, se adjudicó definitivamente la Licitación Pública Internacional N° 7-95, a la empresa José Cartellone Construcciones Civiles, S. A., Renglón N°1, por la suma de B/.9,132,782.79, para el Ensanche y Rehabilitación de la Carretera David-Concepción, en la Provincia de Chiriquí. Dicha Resolución fue confirmada por la Resolución N° 34 de 27 de febrero de 1996.

Conforme lo preceptuado en el artículo 73 de la Ley 135 de 1943, compete al Pleno de la Sala suspender los efectos de un acto, resolución o disposición, si, a su juicio, ello es necesario para evitar un perjuicio notoriamente grave.

En el presente caso, el actor solamente le pide a la Sala que decrete la medida cautelar de suspender provisionalmente "los efectos a que se contrae la LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL N° 7-95, específicamente y directamente el ACTA DE RECIBO DE PROPUESTAS de la referida Licitación, acto administrativo principal".

A este respecto, la Sala debe señalar que de acuerdo con el numeral 7 del artículo 47 del Código Fiscal, referente a las reglas que se observarán para la celebración de licitaciones públicas, la adjudicación provisional no constituye un acto administrativo definitivo o firme, por lo que contra la misma no cabe recurso alguno.

El criterio anotado ha sido sostenido antes por la Sala en el auto de 20 de enero de 1994.

Por lo anteriormente expresado, el Pleno de la Sala considera que, la medida cautelar debe ser denegada.

De consiguiente, el Pleno de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NIEGA la solicitud de suspensión provisional de los efectos a los que "se contrae la LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° 7-95, específica y directamente el ACTA DE RECIBO DE PROPUESTAS de la referida Licitación, acto administrativo principal".

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA ROSAS Y ROSAS, EN REPRESENTACIÓN DE ZENEIDA DE RONER Y JUAN ERNESTO THORNE, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ACTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL DE 7 DE SEPTIEMBRE DE 1994, EMITIDO POR EL DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma Rosas y Rosas, actuando en representación de ZENAIDA DE RONER y JUAN ERNESTO THORNE, ha interpuesto recurso de apelación contra la resolución proferida por la Corte Suprema de Justicia - Sala Tercera (Contencioso Administrativa) expedida el 20 de diciembre de 1995, mediante la cual no se

admite la demanda contencioso administrativa de nulidad contra el acto de aprobación provisional del Proyecto de Urbanización Altos del Bosque, expedido el 7 de septiembre de 1994 por el Director General de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda; el acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

La Magistrada Sustanciadora no admitió la demanda por considerar que la apoderada de los demandantes designó erróneamente a la parte demandada, pues, señaló como tal al Ministerio de Vivienda representado por el doctor Francisco Sánchez Cárdenas, y no al Director General de Desarrollo Urbano de ese ministerio, quien el 7 de septiembre de 1994 dictó el acto original de aprobación provisional de la Urbanización Altos del Bosque, cuya nulidad se pide.

La firma Rosas y Rosas sostiene en su escrito de apelación, que el artículo 43, numeral 1 de la Ley 135 de 1943 lo único que señala es que la parte actora designe las partes y sus representantes, requisito que a su juicio, fue cumplido dado que la parte demandada lo es Ministerio de Vivienda cuyo representante legal es el Ministro de Vivienda y el Director General de Desarrollo Urbano es parte del mismo. A ello añade que de acuerdo al artículo 22, literal a y l, de la Ley 9 de 1973, la aprobación de las Urbanizaciones es una atribución del Ministerio de Vivienda que no ha sido designada por el artículo 7 de esa ley al Director General de Desarrollo Urbano, sólo le han sido delegadas esas funciones. Finalmente sostiene la firma Rosas y Rosas, que los artículos 99 y 2627 del Código Judicial modificado por la Ley 19 de 1991, disponen que las leyes 135 de 1943, 33 de 1946 y 39 de 1954 se aplicarán por la Sala "en cuanto no contradigan lo dispuesto es este Código" y que quedan derogadas "todas la leyes preexistentes sobre las materias que en este Código se traten". En ese sentido, a criterio de la firma Rosas y Rosas debe aplicarse lo dispuesto en el artículo 675 del Código Judicial que faculta al juez de la cuasa a prevenir verbalmente al demandante si la demanda adoleciere de algún defecto u omitiere alguno de los requisitos previstos en la ley.

Por su parte, la Procuradora de la Administración, mediante la Vista N° 140 de 27 de marzo de 1996, se opone a los criterios expuestos por la parte actora y solicita al resto de los Magistrados que conforman la Sala Tercera que confirmen la resolución que se apela.

No coincide la Sala con lo argumentado por la parte actora, pues, la parte demandante no observó lo preceptuado en el numeral 1° del Artículo 43 de la Ley 135 de 1943 que prevé los requisitos necesarios que debe contener toda demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa. Efectivamente, se observa que la parte actora omitió designar al Director General de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda como parte demandada y erró al nombrar al Ministro de Vivienda quien resolvió el acto confirmatorio contenido la Resolución N° 89-95 de 1 de agosto de 1995, que mantiene en todas sus partes la aprobación provisional de 7 de septiembre de 1994, que es el acto original.

En razón de lo antes señalado, lo procedente es, pues, confirmar el auto apelado.

En consecuencia, el resto de lo Magistrados que conforman la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la resolución de 20 de diciembre de 1995 que NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por la firma Rosas y Rosas en representación de ZENAIDA DE RONER Y JUAN ERNESTO THORNE.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR EL DR. ROLANDO VILLALAZ GUERRA, EN REPRESENTACIÓN PROPIA PARA QUE SE DECLAREN NULOS, POR ILEGALES, TODOS LOS ACTOS PÚBLICOS CELEBRADOS POR LA AUTORIDAD DE LA REGIÓN INTEROCEÁNICA SOBRE SOLICITUD DE PRECIOS PARA ADQUIRIR VIVIENDAS EN RESIDENCIAL ESPINAR, PROVINCIA DE COLÓN Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El doctor Rolando Villalaz Guerra, actuando en su propio nombre, interpuso ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declaren nulos, por ilegales, todos los actos públicos celebrados por la Autoridad de la Región Interoceánica sobre solicitud de precios para adquirir viviendas en Residencial Espinar, Provincia de Colón y para que se hagan otras declaraciones.

En la parte final de su libelo, el doctor Villalaz pidió la suspensión provisional del efecto de los actos acusados, sin embargo, por razones de economía procesal, se debe examinar si la demanda cumple con los requisitos legales para ser admitida.

Al resolver sobre la admisión de la demanda, la Magistrada Sustanciadora considera que la misma no debe admitirse, porque en el punto relativo al petitum de la demanda, el actor pidió la nulidad de "todos los actos públicos celebrados por la Autoridad de la Región Interoceánica sobre solicitud de precios para adquirir viviendas en Residencial Espinar, Provincia de Colón" y no se individualizó los actos acusados con toda precisión, según exige el artículo 43 a) de la Ley N° 33 de 1946, que es del tenor siguiente:

> "Si la acción intentada es la de nulidad de un acto administrativo, se individualizará éste con toda precisión; y si se demanda el restablecimiento de un derecho, deberá indicarse las prestaciones que se pretenden, ya se trate de indemnizaciones o de modificación o reforma del acto demandado o del hecho u operación administrativa que causa la demanda."

Como el demandante no cumplió con lo indicado en el citado artículo 43 a) ibídem, su demanda no debe admitirse de conformidad con lo establecido en el artículo 50 del mismo cuerpo legal.

De consiguiente, la suscrita Magistrada Sustanciadora, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado Rolando Villalaz Guerra, en su propio nombre y representación, para que se declaren nulos, por ilegales, todos los actos públicos celebrados por la Autoridad de la Región Interoceánica sobre solicitud de precios para adquirir viviendas en Residencial Espinar, Provincia de Colón y para que se hagan otras declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LCDO. MARIO VAN KWARTEL, EN REPRESENTACIÓN PROPIA, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ACÁPITE C DEL ARTÍCULO 1 DEL DECRETO EJECUTIVO N° 7 DE 10 DE ENERO DE 1995, EXPEDIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA.

MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Licenciado **MARIO VAN KWARTEL**, en representación propia, ha interpuesto Demanda Contencioso Administrativa de Nulidad para que se declare nulo, por ilegal, el acápite C del Artículo l del Decreto Ejecutivo N° 7 de 10 de enero de 1995, expedido por el Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Vivienda.

La pretensión del demandante consiste en una petición dirigida a la Sala Tercera de la Corte, para que sea declarado nulo, por ilegal, el acápite C del artículo l del precitado Decreto Ejecutivo, en virtud de que dicha disposición reglamentaria infringe al artículo 1° de la Ley 28 de 12 de marzo de 1974, reformatorio del artículo 1° de la Ley 93 de 4 de octubre de 1973, "Por lo cual se dictan medidas sobre los arrendamientos y se crea en el Ministerio de Vivienda, la Dirección General de Arrendamiento."

De la acción encausada se le corrió traslado al señor Ministro de Vivienda, quien, en su informe explicativo de conducta que corre a fs. 33-34, señaló medularmente, lo siguiente:

> "1. El Estado, mediante la Ley 93 de 4 de octubre de 1973, dictó medidas sobre los arrendamientos de bienes inmuebles particulares destinados para habitación y establecimientos comerciales, uso profesional, actividades industriales y docentes señalando que el contenido de la misma es de orden público.
>
> 2. Dada la amplitud de la cobertura de la precitada Ley 93 el Legislador mediante Ley 28 de 12 de marzo de 1974 la modifica dando al Órgano Ejecutivo la capacidad de excluir del ámbito de aplicación de esta Ley, por medio de decretos y en base a tramos de arrendamientos y otras características los Contratos de Arrendamientos de bienes inmuebles que se regirán por la libre contratación, garantizándose una serie de principios y derechos consagrados en esta Ley no pudiendo ser trastocados por el Ejecutivo los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 16, 19, 65, 66, 68.
> ...
> 4. Siendo el Decreto 37, ya mencionado en líneas anteriores, un precedente del uso del derecho otorgado al Ejecutivo por la Ley 28 de 12 de marzo de 1974 de excluir los contratos de arrendamiento ya sea por tramos de arrendamiento u otras características, y dados los cambios en la política económica nacional e internacional en donde se busca la promoción de la inversión privada, nuevamente se hizo uso de esta facultad legal a través del Decreto Ejecutivo N 7 de 10 de enero de 1995 que en su acápite C se refiere a los casos específicos de los Contratos de bienes inmuebles particulares destinados para establecimientos comerciales, uso profesional, actividades industriales y docentes. Lo que significa que dicha exclusión se basó en características propias de los contratos de arrendamientos."

La señora Procuradora de la Administración por su parte, mediante Vista Fiscal N° 337 de 9 de agosto de 1995, considera que se debe declarar nulo, por ilegal, el acápite c del artículo l del Decreto Ejecutivo N° 7 de 1995, en razón de que:

> "... este instrumento jurídico omitió señalar los tramos de arrendamiento, es decir, el parámetro económico de los contratos de arrendamiento, dando ello lugar a que el Poder Ejecutivo ejerciera la potestad reglamentaria conferida en la Ley 28 de 1974, en forma indebida."

Cumplidos los trámites legales establecidos para estos procesos, esta

Superioridad procede a emitir las siguientes consideraciones finales.

En primer lugar es indispensable transcribir la norma acusada de ilegal del Decreto Ejecutivo N° 7 de 10 de enero de 1995:

> "ARTÍCULO 1: Excluir del ámbito de aplicación de la Ley 93 de 4 de octubre de 1973, tal como quedó modificado por la Ley 28 de 12 de marzo de 1974; salvo lo dispuesto en los Artículos 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 16, 19, 65, 66, y 68, el Artículo 1°, numeral del Decreto N° 37 del 15 de mayo de 1974.
> ...
> c. Los contratos de arrendamientos de bienes inmuebles particulares destinados para establecimientos comerciales uso profesional, actividades industriales o docentes."

Considera el recurrente que la disposición impugnada, infringe el artículo l° de la Ley 28 de 1974, reformatorio del artículo l° de la Ley 93 de 1973, cuyo texto es el siguiente:

> "ARTÍCULO 1. El Artículo 1° de la Ley 93 de 4 de octubre de 1973 quedará así:
>
> Es de orden público el arrendamiento de bienes inmuebles particulares destinados para habitación, establecimientos comerciales, uso profesional, actividades industriales y docentes.
>
> Salvo lo dispuesto en los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 16, 19, 20, 65, 66 y 68, el Órgano Ejecutivo podrá excluir del ámbito de aplicación de esta Ley, por medio de Decreto y en base a tramos de arrendamientos u otras características, los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles que se regirán por la libre contratación".

Argumenta el demandante que dicha infracción se dio en el concepto de interpretación errónea, porque se aplicó desconociendo un derecho que se desprende de la misma. Al dictar la disposición reglamentaria impugnada, el Órgano Ejecutivo no tuvo en cuenta "los tramos de arrendamiento u otras características" a que se refiere la Ley, pues los contratos de arrendamiento a que alude el Decreto Ejecutivo N° 7 de 1995, no han dejado de ser de orden público, y, sin embargo, el Órgano Ejecutivo los excluye en su totalidad de casi todo el ámbito de la Ley 93 de 1973, según reza la Ley 28 de 1974, no siendo éste el querer ni la intención del legislador.

Dice también el demandante que el Ejecutivo ha dejado a todos esos locales al libre albedrío de los propietarios en cuestiones tan importantes como el canon de arrendamiento, sin limitación alguna por razones de orden público y social, como lo requiere la misma ley.

La Sala estima que la ley 28 de 1974, en su Artículo l, le confirió al Ejecutivo la potestad de excluir del ámbito de aplicación de la Ley 93 de 1973, los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles "en base a tramos de arrendamientos u otras características", siempre que esto se hiciera por medio de Decreto.

Los tramos de arrendamientos como lo dice la Procuradora de la Administración tienen relación con una categoría de orden económico es decir, en función al quántum del canon de arrendamiento. Al respecto señala la Procuradora:

> "Los propios operarios de la administración, ... también coincidían en afirmar que a raíz del mandato constitucional, los **tramos de arrendamiento,** son una derivación de la idea de que los arrendamientos se deben diferenciar de acuerdo al grupo económico, al cual se ofrecen.
>
> Desde nuestra perspectiva, tiene perfecta acogida en el ordenamiento

> legal, la concepción de que para que se liberalicen los arrendamientos, que son de orden público, se tenga que hacer referencia al valor del canon de arrendamiento. Y es que, se debe saber a ciencia y conciencia, sin en verdad se está o no en presencia de una relación en favor de los sectores de menor ingreso económico. Dicho de otro modo, en el caso en estudio, el hecho de que los arrendamientos urbanos, sean de orden público, nos obliga a ser meditados y restrictivos, al momento de someterlos a la libre contratación; máxime si no se dan justificantes de orden económico, para ello."

En tal sentido, vemos que el Órgano Ejecutivo al expedir el Decreto Ejecutivo N° 7, en su articulo l, acápite C, disposición acusada de ilegal, no hizo alusión a **"los tramos de canones de arrendamientos"**. Para proceder a fijar los contratos de arrendamiento tomó en consideración otras características de los contratos de arrendamiento como lo son los diferentes usos que se da a los locales arrendados, y excluyó del ámbito de la aplicación de la referida ley 93 los locales comerciales, para uso profesional, actividades industriales o docentes. En esta forma, no se ha contravenido el principio de orden público de los arrendamientos de bienes inmuebles particulares destinados para establecimientos comerciales, uso profesional, actividades industriales y docentes, consagrado en el artículo l de la Ley 93 de 1973, porque el artículo 38 de la Ley 93 de 1973 claramente se refiere a **tramos de canones de arrendamientos u otras características**, que en relación con el artículo 1 de la citada Ley, se refiere tanto **al monto del arrendamiento** como otras características del mismo, tales como el uso que se de al local arrendado.

Lo señalado, no rebasa los límites de la potestad reglamentaria conferida en la Ley 93 de 1973 al Órgano Ejecutivo, ente estatal encargado de la reglamentación de esta Ley, ya que excluye del ámbito de aplicación de esta ley, salvo los artículos señalados en el artículo primero de la misma, sin referirse a los tramos de arrendamiento, pero tomando en cuenta otra característica de los contratos como lo es el uso del local arrendado, como claramente lo exige la Ley. En el caso del Decreto Ejecutivo N° 37 de 1974 la exclusión del ámbito de la aplicación de la Ley 93 del 73 de algunos contratos de arrendamiento se hizo con base en los tramos de canones de arrendamientos.

Por las anteriores consideraciones, la Sala Estima que, el Artículo 1 Acápite C, del Decreto Ejecutivo N° 7 de 1995, no infringe el artículo l de la Ley 28 de 1974, reformatorio del artículo l de la Ley 93 de 1973.

En consecuencia, los Magistrados que integran la Sala Tercera, Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARAN QUE ES LEGAL, el acápite C del Artículo l del Decreto Ejecutivo N° 7 de 10 de enero de 1995, expedido por el Órgano Ejecutivo por conducto del Ministerio de Vivienda.

Notifíquese, Cúmplase y Publíquese en la Gaceta Oficial.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICDO. FELIPE RANGEL, EN REPRESENTACIÓN PROPIA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 13.004-86 DE 1° DE OCTUBRE DE 1986, DICTADA POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

En grado de apelación conoce el resto de la Sala Tercera de la Corte Suprema, de la demanda Contencioso Administrativa de Nulidad interpuesta por el licenciado **FELIPE RANGEL**, en representación propia, para que se declare nula por ilegal, la Resolución N° 13.004-86 de 1° de octubre de 1986, dictada por la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social.

El Magistrado Sustanciador del negocio, mediante auto calendado 6 de marzo de 1996, decidió **NO ADMITIR** la demanda presentada, al considerar que el actor había equivado la vía para encausar su pretensión, toda vez que pese tener el acto administrativo demandado efectos **exclusivamente particulares o subjetivos**, se había instaurado un proceso contencioso administrativo de nulidad, y no de plena jurisdicción.

La parte demandante, al notificarse del auto que negó la admisión de la demanda, anunció recurso de apelación contra dicha resolución judicial el día 13 de marzo de 1996, tal como consta a foja 100 del expediente.

Sin embargo, una vez concedida la alzada, este Tribunal de Apelación advierte que ha vencido el término para la sustentación del recurso, sin que se presentara escrito alguno.

En estas circunstancias, como nos encontramos ante un recurso de apelación presentado contra un auto, se procede a declarar desierto el recurso, tal cual lo dispone el artículo 1122 del Código Judicial.

En consecuencia, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARAN DESIERTO el recurso de apelación anunciado por el licenciado FELIPE RANGEL en su propio nombre.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JOSÉ D. FAJARDO EN REPRESENTACIÓN DE BERASVAS, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL RESUELTO N° 135 DE 22 DE FEBRERO DE 1995, DICTADO POR EL MINISTRO DE HACIENDA Y TESORO. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado José Fajardo actuando en representación de la sociedad **BERASVAS, S. A.** ha interpuesto demanda Contencioso Administrativa de Nulidad, para que se declare nulo por ilegal el Resuelto N° 135 de 22 de febrero de 1995, dictado por el Ministro de Hacienda y Tesoro.

Seguidamente se destaca que el recurrente ha incluido una solicitud de suspensión dentro del libelo de la demanda antes descrita. Sin embargo, aprecia el Magistrado Sustanciador que el presente recurso carece de ciertos requisitos formales de carácter esencial, que imposibilitan su admisión ante esta Superioridad.

A estos efectos es pertinente resaltar que la sociedad demandante intervino en el proceso gubernativo efectuado en el Ministerio de Hacienda y Tesoro, al impugnar la resolución N° 135 de 22 de febrero de 1995, que resolvió declarar bien oculto 24 hectáreas con 2807.74 metros cuadrados de la Finca N° 6702, inscrita al Tomo 1168, folio 192 de la Sección de la Propiedad de la Provincia

de Colón, del Registro Público, e investió de personería jurídica al señor Plutarco Castillo para la recuperación de dicho bien inmueble.

Es así como el recurrente presentó recurso de reconsideración contra el acto administrativo antes descrito; mismo que le fuera negado mediante Resolución N° 363 de 24 de mayo de 1995, al confirmarse en todas sus partes la resolución original. Siendo ello así, el peticionista debía instaurar una acción de plena jurisdicción y no de nulidad para enervar la resolución que considera que le afecta y que conculca el ordenamiento jurídico. Máxime cuando el actor solicita la reparación de los derechos que estima lesionados con la actuación del Ministerio de Hacienda y Tesoro; perjuicios éstos sólo resarcibles mediante la acción de plena jurisdicción.

Por otro lado se observa que el actor no presentó ante esta Corporación las constancias de notificación del recurso de reconsideración antes mencionado, tal como lo requiere el artículo 44 de la Ley 135 de 1943; siendo éste un requisito indispensable para que se pueda apreciar con claridad el cumplimiento del término de prescripción con el cual cuenta el petente para ocurrir en demanda de plena jurisdicción ante esta Sala de la Corte. Dicho período es únicamente de 2 meses de acuerdo a lo establecido en el artículo 42b de la Ley 135 de 1943. En este punto es importante poner de relieve, que la resolución que resolvió el precitado recurso de reconsideración data del 24 de mayo de 1995, con lo cual pareciera que efectivamente ha transcurrido en exceso el término permitido para interponer la acción de plena jurisdicción, ya que el escrito presentado ante esta Superioridad fue recibido el 29 de marzo de 1996; es decir, casi un año después de haberse emitido la resolución de 24 de mayo de 1995.

En mérito de lo expuesto, el Magistrado Sustanciador de la Sala Tercera de lo Contencioso de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, con fundamento en el artículo 50 de la Ley 135 de 1943, NO ADMITE la demanda Contencioso Administrativa de Nulidad interpuesta por el licenciado José Fajardo actuando en representación de la sociedad BERASVAS, S. A.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA FIRMA TRUJILLO, VIDAL Y MIRANDA EN REPRESENTACIÓN DE TRANSPORTE HATO REY, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL EL ACUERDO N° 18 DE 24 DE MARZO DE 1995, DICTADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CHANGUINOLA. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense **Trujillo, Vidal y Miranda** en representación de **TRANSPORTE HATO REY, S. A.**, ha presentado Demanda Contencioso Administrativa de Nulidad para que se declaren nulos, por ilegales, los tributos o gravámenes establecidos en el Acuerdo N° 18 de 24 de marzo de 1995, dictado por el Consejo Municipal del Distrito de Changuinola.

La parte actora solicita, previo al trámite de admisión de la demanda, la suspensión provisional de los efectos del acto impugnado, a fin de evitar que se sigan causando los perjuicios notoriamente graves que ocasiona dicho acto administrativo a los residentes de Changuinola y a los transportistas terrestres que periódicamente realizan actividades en esa región.

Sostiene el recurrente que la ilegalidad de dicho Acuerdo es notoria, ya

que a través del mismo, el Municipio de Changuinola ha establecido la imposición de una tasa ajena al uso de bienes y servicios del Municipio, distinta al derecho que tienen los Municipios para el cobro de la tasa por placa o distintivo análogo, y no por la realización de la actividad de transporte a través del Municipio. Aunado a que se está creando una tasa impositiva no contemplada en las disposiciones legales correspondientes, como lo son el artículo 72; numeral 5 y el artículo 76; numeral 2 de la Ley 106 de 1973.

Por lo tanto, sostiene el representante legal de la sociedad demandante, que la imposición de una tasa de esta naturaleza, hace más gravosa la adquisición de bienes para el consumo de la población, en razón de que el Distrito de Changuinola está ubicado en una zona aislada del país, donde los bienes para el consumo de la población son traídos en su mayoría por vía terrestre.

Encontrándose el proceso en este estado, el Pleno de esta Sala procede a resolver la presente solicitud.

El artículo I del referido Acuerdo establece:

> **"ART. PRIMERO:** Créase la Tasa impositiva para todas aquellas personas naturales o jurídicas que proceden de otras circunscripciones, a desarrollar actividades lucrativas en el Distrito de Changuinola, conjuntamente con aquellas que se dedican al transporte terrestre de bienes."

Por su parte el Artículo II de dicho Acuerdo señala:

> **ART. SEGUNDO:** La Tasa impositiva a tributar por el desarrollo de esa actividad lucrativa se regulan de acuerdo con los siguientes parámetros; por cada viaje realizado.
>
> | | |
> |---|---|
> | 1. Vehículos tipo Pick Up de B/.10.00 | 15.00 |
> | 2. Vehículos tipo camión | B/.25.00 |
> | 3. Vehículos tipo mula | B/.35.00". |

Finalmente, el Artículo III estipula:

> **ART. TERCERO:** Se exceptúan de éstos gravámenes a aquellos propietarios de vehículos con inscripción y establecidos en el Distrito."

De conformidad con la jurisprudencia reiterada de la Sala Tercera es procedente la suspensión del acto administrativo como medida cautelar en los procesos contencioso administrativos de nulidad, no sólo para evitar perjuicios de carácter económicos o patrimoniales sino también cuando el acto acusado de ilegal puede producir una lesión a la integridad del ordenamiento jurídico, que puede ocurrir cuando el acto impugnado es manifiestamente incompatible con una norma de superior jerarquía. Cfr. Autos de 15 de enero de 1992, 25 de febrero de 1994, y de 12 octubre de 1995.

Asimismo, la Sala ha señalado en ocasiones similares que la excepción a la regla general prevista en el numeral 2 del artículo 74 de la Ley 135 de 1943, en que se establece que no habrá suspensión en las acciones relacionadas con tributos, ya se trate de impuestos, tasas o contribuciones especiales, sólo le es aplicable a aquellas acciones que recaen sobre tributos nacionales ya que se encuentran regulados íntegramente en la ley, y este Tribunal como regla general no puede suspender los efectos de una ley, sino solamente de actos administrativos. No así sucede con los tributos de carácter municipal, que por el contrario, sólo se encuentran regulados parcialmente en la ley, y los aspectos importantes de su estructura, tales como el hecho generador de la obligación tributaria o la tarifa del impuesto que deben pagar los contribuyentes municipales, se encuentran regulados mediante actos administrativos los cuales la Sala si puede suspender.

En el presente caso, el Consejo Municipal de Changuinola ha creado una "tasa impositiva" para todas aquellas personas naturales o jurídicas que proceden

de otras circunscripciones, a desarrollar actividades lucrativas en el Distrito de Changuinola, conjuntamente con aquellas personas que se dedican al transporte terrestre de bienes. Exceptuándose a su vez, de la imposición de estos gravámenes a aquellos propietarios de vehículos con inscripción y establecidos en el Distrito. A juicio de la Sala, la referida carga pese a la imprecisión terminológica, tiene la naturaleza de un **impuesto** que como bien anotan los autores José Luis Pérez De Ayala y Eusebio González "Son aquellos tributos cuyo hecho imponible no está constituido por la prestación de un servicio, actividad u obra de la Administración, sino por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o económica ... que ponen de manifiesto la capacidad contributiva de un sujeto como consecuencia de la posesión de un patrimonio, la circulación de los bienes o la adquisición o gasto de la renta." (Curso de Derecho Tributario, Tomo I, Editorial de Derecho Financiero, Madrid, 1989, págs. 188-189).

El ordinal 8 del artículo 17 de la Ley 106 de 1973, modificada por la Ley N° 52 de 1984, señala que los Consejos Municipales tienen competencia exclusiva para establecer impuestos, contribuciones, derechos y tasas de conformidad con las leyes, para atender los gastos de la administración, servicios e inversiones municipales. En el artículo 75 de la precitada Ley, se establece una serie de negocios, actividades o explotaciones gravables por los Municipios.

En el presente Acuerdo, no se ha establecido el tipo de actividad lucrativa que puede ser objeto del referido gravamen. El Acuerdo dice que "Crease la Tasa Impositiva para todas aquellas personas naturales o jurídicas que proceden de otras circunscripciones, a desarrollar actividades lucrativas en el Distrito de Changuinola ...". Esta situación, a juicio de este Tribunal, pareciera entrar en contradicción con las normas relativas a las facultades que tienen los Consejos Municipales para gravar una serie de actividades industriales, comerciales o lucrativas de cualquier clase, previamente establecidas en la ley, que se realicen en el distrito. No existe la especificidad del gravamen.

Además, al gravarse a las personas procedentes de otros distritos que se dedican al transporte terrestre de bienes dentro del Municipio de Changuinola, y establecerse la excepción para aquellos propietarios de vehículos con inscripción y establecidos en el Distrito, pareciese rebasar la facultad legal conferida a los Municipios para la imposición de gravámenes. Como lo señaláramos en líneas anteriores, la ley es clara al atribuirle a los Municipios la facultad de gravar con impuestos, tasa y demás contribuciones una serie de actividades industriales, comerciales o lucrativas que se desarrollen dentro del Municipio, sin establecer distinción, como sí lo está haciendo el presente Acuerdo, entre las personas establecidas dentro de los límites del Municipio y las procedentes de otras circunscripciones municipales.

En base a las anteriores consideraciones, y en atención a la facultad discrecional que le confiere el artículo 73 y ss. de la Ley 135 de 1943, para suspender los efectos de un acto administrativo cuando ello sea necesario para evitar un perjuicio notoriamente grave, el Pleno de la Sala considera que en lo que respecta a los artículos **primero**, **segundo y tercero** del Acuerdo Municipal N° 18 de 24 de marzo de 1995, se ha dado lo que en la doctrina se conoce como el **FUMUS BONIS IURIS**, por razón de que los efectos del acto impugnado a prima facie, aparentan vicios de ilegalidad. Lo procedente es pues, suspender los efectos de tales normas.

En consecuencia, la Sala Tercera, Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, SUSPENDE PROVISIONALMENTE los efectos de los artículos Primero, Segundo y Tercero del Acuerdo Municipal N° 18 de 24 de marzo de 1995, dictado por el Consejo Municipal del Distrito de Changuinola.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LCDO. CARLOS E. GONZÁLEZ, EN REPRESENTACIÓN DE NESTLÉ PANAMÁ, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA NOTA N° 201-712 DE 14 DE NOVIEMBRE DE 1994, EMITIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Licenciado **Carlos E. González**, en representación de **NESTLÉ PANAMÁ, S. A.**, ha presentado Demanda Contencioso Administrativa de Nulidad, para que se declare nula, por ilegal la Nota N° 201-712 de 14 de noviembre de 1994, emitida por el Director General de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro y para que se hagan otras declaraciones.

El Procurador de la Administración Suplente, mediante Vista N° 51 de 24 de enero de 1996, que corre a fs. 32-35, presentó y sustentó formal recurso de apelación contra la Providencia de 4 de enero de 1996, que **ADMITE** la presente demanda argumentando que el recurrente incurre en serias deficiencias formales que impiden su admisión. En este sentido, considera el Procurador Suplente que al designar a las partes en el libelo de la demanda, el recurrente omite decir que la Procuradora de la Administración actúa en estos procesos en interés de la ley, tal como lo preceptúan los artículos 43 de la Ley Contencioso Administrativa y el artículo 348, numeral 1 del Código Judicial.

Aunado a que el actor tampoco aporta copia autenticada del acto impugnado, por lo cual se deja de cumplir con el artículo 44 de la Ley 135 de 1943, y, finalmente que el demandante estima como infringido el numeral 14, del artículo 179 de la Constitución Nacional, cargo que resulta inadmisible, ya que a través de la demanda contencioso administrativa únicamente se examinan disposiciones legales y no normas de nuestro ordenamiento constitucional.
0
La parte actora presentó sus objeciones al presente recurso de apelación, mediante escrito que reposa a fs. 39-42 del expediente.

Encontrándose el proceso en este estado, el resto de los Magistrados de la Sala Tercera proceden a externar las siguientes consideraciones finales.

Este Tribunal de segunda instancia coincide con los planteamientos vertidos por el Procurador de la Administración Suplente, en virtud de que la acción encausada efectivamente adolece de ciertos requisitos formales exigidos en las leyes rectoras de este tipo de proceso contencioso administrativo.

Primeramente, se observa que la parte actora **no acompaña el acto administrativo acusado de ilegal que consiste en la Nota N° 201-712 de 14 de noviembre de 1994**, expedida por el Director General de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro, y que debe estar debidamente autenticado, en atención al artículo 44 de la Ley 135 de 1943, cuyo texto es del tenor siguiente:

> "ARTÍCULO 44. A la demanda deberá acompañar el actor una copia del acto acusado, con las constancias de su publicación, notificación o ejecución, según los casos."

En innumerables ocasiones, esta Superioridad ha señalado que en caso de que las acciones por parte del recurrente tendientes a obtener la copia debidamente autenticada del acto acusado resulten infructuosas, éste debe solicitarlo al Magistrado Sustanciador para que en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 46 de la Ley 135 de 1943, lo requiera a la entidad demandada. El texto de dicha disposición es el siguiente:

> "ARTÍCULO 46. Cuando el acto no sido publicado o se deniega la

expedición de la copia o la certificación sobre publicación, se expresará así en la demanda, con indicación de la oficina donde se encuentre el original, o del periódico en que se hubiere publicado, a fin de que se solicite por el sustanciador antes de admitir la demanda."

En el caso subjúdice se observa que el actor ha omitido el cumplimiento de este requisito, ya que no consta en autos la copia debidamente autenticada del acto acusado, ni la constancia de que lo haya solicitado previamente a la entidad demandada, así como tampoco lo ha requerido al Magistrado Sustanciador.

La presentación de la copia debidamente autenticada del acto impugnado con las constancias de su publicación, notificación o ejecución, según los casos, permite a este Tribunal constatar que en efecto, se trata de un documento auténtico respaldada esta certeza con una certificación de la autoridad correspondiente de que efectivamente ese documento es en su firma y contenido del funcionario o la institución que lo expide. Sólo de esta forma se da fiel cumplimiento a la exigencia del artículo 44 de la Ley 135 de 1943. Al respecto cfr. Autos de 12 de agosto de 1994 y 15 de septiembre de 1995.

También se observa que el renglón concerniente a la designación de las partes y de sus representantes en el presente proceso no se presentó debidamente, puesto que se omitió la designación del Procurador de la Administración y el concepto en qué interviene, quien forzosamente debe designarse en la demanda, y que en los procesos contencioso administrativos de Nulidad actúa en defensa e interés del ordenamiento legal, en atención a lo dispuesto en el artículo 348, ordinal 1° del Código Judicial.

La ausencia de tal designación aunado a la omisión de otros requisitos legales, impide que la demanda sea admitida, puesto que el criterio sostenido por esta Sala ha sido el de que la designación del Procurador de la Administración y el concepto en qué interviene, es un requisito indispensable que debe cumplir toda demanda ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. (Ver Autos de 13 de julio de 1992, 11 de agosto de 1994 y de 3 de agosto de 1995).

Finalmente se observa que el demandante incluye entre las disposiciones que se consideran infringidas por el acto administrativo acusado de ilegal, la transgresión de disposiciones constitucionales que según jurisprudencia reiterada de esta Superioridad, no es de competencia de esta Sala entrar a conocer de la infracción de las mismas, sino que es una atribución del Pleno de la Corte Suprema. (Cfr. Autos de 31 de diciembre de 1993, de 24 de enero y de 19 de junio de 1995).

Dado el incumplimiento de las anteriores formalidades legales, este Tribunal estima procedente no darle curso legal a la presente demanda, en atención a lo dispuesto en el artículo 51 de Ley 135 de 1943.

En consecuencia, el resto de los Magistrados de la Sala Tercera, Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, PREVIA REVOCATORIA de la Providencia calendada 4 de enero de 1996, NO ADMITE la Demanda Contencioso Administrativa de Nulidad interpuesta por el licenciado Carlos E. González, en representación de NESTLÉ PANAMÁ, S. A. para que se declare nula, por ilegal, la Nota N° 201-712 de 14 de noviembre de 1994, emitida por el Director General de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

IMPEDIMENTO

IMPEDIMENTO DENTRO DEL INCIDENTE DE RESCISIÓN DE SECUESTRO, INTERPUESTO POR LA FIRMA FÁBREGA, BARSALLO, MOLINO Y MULINO, EN REPRESENTACIÓN DE PRIMER BANCO DE AHORROS, S. A. (PRIBANCO), DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO CONTRA IVÁN ANTONIO VIDEGAÍN TEJADA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

Por medio de escrito de 28 de marzo de 1996, el Honorable Magistrado Edgardo Molino Mola solicitó que se le declare impedido para conocer del Incidente de Rescisión de Secuestro, presentado por la firma forense **Fábrega, Barsallo, Molino y Mulino**, en representación de **PRIMER BANCO DE AHORROS, S. A. (PRIBANCO)**, dentro del Proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el Banco de Desarrollo Agropecuario a Iván Antonio Videgaín Tejada.

En el escrito de manifestación de impedimento el Magistrado Molino Mola expresó:

> "...
> Esta solicitud la fundamento en lo dispuesto en los numerales 1 y 5 del artículo 749 de Código Judicial, en virtud de que el incidente en comento fue presentado ante la Sala Tercera de la Corte por la firma forense de la cual forma parte el licenciado Eduardo Molino Mola Paz quien es mi sobrino, hijo de mi hermano fallecido Eduardo Molino Mola (q. e. p. d.), y por tanto se encuentra con relación a mi persona dentro del tercer grado de consanguinidad".

La norma legal en la que fundamenta la manifestación de impedimento textualmente preceptúa:

> Artículo 749. Ningún Magistrado o Juez podrá conocer de un asunto en el cual esté impedido . Son causales de impedimento:
>
> 1. El parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad entre el Juez o su cónyuge, y alguna de las partes;
> ...
> 5. haber intervenido el Juez o Magistrado, su cónyuge o alguno de sus parientes dentro de los grados indicados, en el proceso, como Juez, agente del Ministerio Público, testigo o apoderado, o asesor, o haber dictaminado por escrito respecto de los hechos que dieron origen al mismo;

El impedimento manifestado por el Honorable Magistrado Edgardo Molino Mola configura las causales que señala el numeral 1 y 5 del artículo 749 del Código Judicial, por lo que el mismo debe declararse legal.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL el impedimento manifestado por el Honorable Magistrado Edgardo Molino Mola, lo separa del conocimiento del negocio y para reemplazarlo designa al Magistrado Rogelio A. Fábrega Z. de la Sala Civil quien le sigue en turno.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JURISDICCIÓN COACTIVA

INCIDENTE DE LEVANTAMIENTO DE SECUESTRO Y DE CONSTITUCIÓN DE UNA CAUCIÓN, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO JULIO CÉSAR MORALES, EN REPRESENTACIÓN DE IBERIA, LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S. A., DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL MUNICIPIO DE PANAMÁ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Julio César Morales, en representación de IBERIA, LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S. A., ha promovido incidente de levantamiento de secuestro y de constitución de caución dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el Municipio de Panamá.

El apoderado judicial de la parte actora señaló que mediante auto de 29 de agosto de 1994 el Juzgado Ejecutor del Municipio de Panamá reconoció a cargo de su representada y a favor del Tesoro Municipal la suma de B/.87,471.00 por impuestos Municipales, igualmente abrió proceso por cobro coactivo en contra de IBERIA, LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S. A. hasta la concurrencia de B/.87,471.00 y con el auto de 29 de agosto de 1994, la Juez Ejecutora del Municipio de Panamá decretó medida de secuestro sobre cualesquiera títulos, valores, sumas depositadas en cuentas corrientes, de ahorros y semejantes, así como otros valores contenidos en cajas de seguridad que se encuentren en Instituciones Bancarias o de Crédito, Públicas o Privadas, hasta la concurrencia de B/.87,471.00.

El incidentista pretende que con fundamento en los artículos 536, 559, 1804 y concordantes del Código Judicial se levante el secuestro que la Juez Ejecutora Municipal del Distrito de Panamá mantiene sobre las cuentas bancarias que su representada tiene en el Banco de Iberoamérica por la suma de B/.5,351.84 y en el Banco Exterior de Panamá por la suma de B/.631.15, y señala que a cambio de dicho levantamiento ha depositado en el Municipio de Panamá carta de garantía bancaria del Banco Exterior, S. A., del 26 de septiembre de 1994, por la suma de B/.91,008.00 válida por todo el tiempo que dure el Proceso por Cobro Coactivo. Indica además que sustraidas las sumas retenidas en los Bancos, corresponde constituir la caución por la suma de B/.81,488.01, pero que la garantía bancaria entregada a la Tesorería Municipal del Distrito de Panamá excede de esta suma a requerimiento de la Juez Ejecutora del Municipio de Panamá, quien dio su consentimiento al Tesorero Municipal para que aceptara la entrega de la caución, bajo el entendimiento entre las partes, de que la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia debe decidir sobre la constitución de la caución y el levantamiento del secuestro.

Con posterioridad al presente incidente, el 16 de junio de 1995, la parte actora presentó una excepción de inconstitucionalidad con la finalidad de que esta Sala declare sustracción de materia o cualquier otra disposición para que ordene el archivo del negocio y ordene al Municipio de Panamá que acate el fallo de 12 de mayo de 1995, mediante la cual el Pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Resolución N° 1268 de 26 de mayo de 1986, por la cual se pretendía cobrar a Iberia, Líneas Aéreas de España, S. A., impuestos municipales. Agregó que en virtud de que el referido fallo declaró inconstitucional los impuestos que se pretendían cobrar a su representada, no tiene objeto que la Sala se pronuncie sobre la ilegalidad del cobro y por tanto debe declararse sustracción de materia en el presente caso y ordenarse la devolución del dinero consignado en el Municipio de Panamá, por las sumas cobradas en concepto del referido impuesto.

Mediante escrito presentado ante la Secretaría de esta Sala el 19 de diciembre de 1995, el apoderado especial de Iberia, Líneas Aéreas de España, S. A., desistió formalmente del Incidente de Levantamiento de Secuestro y de Constitución de una Caución, en virtud de que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia de 12 de mayo de 1995, declaró Inconstitucional la Resolución N° 1268 de 26 de mayo de 1986.

Del desistimiento presentado por los apoderados de Iberia, Líneas Aéreas de España, S. A., se corrió traslado al Juez Ejecutor del Municipio de Panamá y a la señora Procuradora de la Administración, por el término de tres días.

El representante del Juzgado Ejecutor del Municipio de Panamá contestó el desistimiento presentado mostrándose inconforme con el mismo y solicitó a esta Sala que se pronuncie respecto de la excepción de inconstitucionalidad presentada por la empresa, en donde solicita la sustracción de materia en base al fallo de 12 de mayo de 1995 (fs. 67 y 68).

Esta Sala no puede admitir el desistimiento presentado por el apoderado del incidentista, puesto que el representante del Municipio se mostró inconforme con el mismo y solicitó a esta Sala se pronuncie con respecto a la petición de declaratoria de sustracción de materia. El artículo 1080 del Código Judicial establece que carece de eficacia el desistimiento objetado presentado después de notificada la demanda, que en el presente caso es el Auto Ejecutivo de 29 de agosto de 1994, en cuyo caso deberá proseguirse con el trámite del proceso.

Esta Sala procede a considerar si ha desaparecido o no el objeto procesal, y sobre este punto ya se pronunció en la Sentencia de 31 de enero de 1996, en los siguientes términos:

> "Al respecto se destaca que el impuesto en disputa es establecido por la Nota 1268 de 26 de mayo de 1986, proferida por el Tesorero Municipal del Distrito de Panamá, desde el 1° de noviembre de 1980, dentro del renglón de Otras Actividades lucrativas, por un monto mensual de B/.400.00.
>
> Seguidamente, el Acuerdo N° 11 de 20 de abril de 1990 expedido por el Consejo Municipal de la misma área geográfica, resolvió que dicho impuesto sería efectivo a partir del 1° de enero de 1987 y que por lo tanto, se ordenaba al Tesorero Municipal antes mencionado, eliminar todos los recibos, cargos, intereses y recargos atribuidos a las aerolíneas en estos conceptos con anterioridad precisamente al 1° de enero de 1987.
>
> Ahora bien el Acuerdo N° 11 de 20 de abril de 1990 fue declarado ilegal por la Sentencia de 27 de diciembre de 1993 emitida por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en atención a la carga impositiva impuesta contributiva del individuo, quebrantándose la proporcionalidad de las cargas impositivas. Por otro lado señala la Corte en la Sentencia en comento, que el Acuerdo Municipal N° 11 de 1990 no fue publicado en la Gaceta Oficial como lo exige el artículo 39 de la Ley 106 de 1973 para que el mismo tenga efectos legales y sea de forzoso cumplimiento, o de lo contrario sus disposiciones no pueden ponerse en vigor.
>
> Sobre el particular, es indispensable resaltar que la simple declaratoria de nulidad, es decir, las que se decretan dentro de las demandas Contencioso Administrativo de Nulidad sobre actos generales producen solamente efectos ex-nunc (hacia el futuro), más no ex-tunc (hacia el pasado), por lo que sus consecuencias no se retrotraen al período o tiempo anterior a la publicación de la declaratoria de nulidad.
>
> Como precisamente los efectos de la declaratoria de nulidad emitida sobre actos generales son para el futuro, es procedente revisar únicamente la real existencia y validez del Acuerdo N° 11 en mención, como medio a través del cual se eliminaron a favor de Iberia, Líneas Aéreas de España, las cargas tributarias correspondientes al período anterior al 1° de enero de 1987.
>
> En este orden de ideas se reitera tal como lo expresa la Sentencia de Inconstitucionalidad de 12 de mayo de 1995, el Auto de 14 de junio de 1995 y la reciente Sentencia de 18 de mayo de 1995, que un fenómeno es la existencia jurídica de un acto administrativo y otro

es su validez jurídica. En el caso particular del Acuerdo N° 11 de 1990 se puntualiza que el mismo tuvo existencia jurídica más no validez, obligatoriedad o exigibilidad jurídica puesto que nunca fue publicado en la Gaceta Oficial. La existencia jurídica depende de la sanción de un acuerdo municipal determinado, pero su validez jurídica depende de su promulgación, es decir, de que se cumpla con el requisito indispensable de la publicidad que exige concretamente el artículo 39 de la Ley 106 de 1973.
...
Este criterio nos conduce a la conclusión idubitable que al existir pero no tener obligatoriedad jurídica el Acuerdo N° 11 de 20 de abril de 1990, que los impuestos municipales sujetos a exención, nunca fueron eliminados por el Consejo Municipal del Distrito de Panamá validamente. Por lo que continuaba la vigencia íntegra de la Nota 1268 de 26 de mayo de 1986. Cabe destacar que la certificación de deuda exigible, legible a foja 104 y 105 del expediente adelantado por el Juzgado ejecutor del Municipio de Panamá, fue extendida tomando como parámetro el Acuerdo N° 11 de 20 de abril de 1990, y por ello excluye las cantidades adeudadas correspondiente a los períodos anteriores al 1° de enero de 1987.

Ahora bien, la Nota N° 1268 de 26 de mayo de 1986 en la cual se estableció el impuesto municipal a pagar dentro del renglón denominado, 'Otras Actividades Lucrativas', emitidas por el Tesorero Municipal del Distrito de Panamá, **tal como lo acepta expresamente esta entidad ejecutante a foja 36 de su escrito de oposición a las excepciones promovidas, fue declarada inconstitucional por la Sentencia de 12 de mayo de 1995** debido a que llevaba ínsita una orden o requerimiento de pago de impuesto que no se expidió con arreglo a un acuerdo o resolución expedida por el Consejo Municipal, contraviniendo en consecuencia el artículo 48 de la Constitución Nacional, puesto que, el cobro de los impuestos no se realizaría con arreglo a la Ley.

De lo señalado se infiere que el fundamento de la ejecución por cobro coactivo adelantada por el Juzgado Ejecutor del Municipio de Panamá, cual es la referida Nota 1268 de 26 de mayo de 1986 ha desaparecido del mundo jurídico por lo que la misma no puede ser invocada para continuar la ejecución contra la sociedad Iberia, Líneas Aéreas de España.

Debe recordarse que en nuestro país la inconstitucionalidad y la derogación tienen en común en que cesan la vigencia de la ley o de una norma hacia el futuro. Más sin embargo, ambas figuras hacen cesar la validez de la ley o la norma, mediante mecanismos distintos.

Al declararse inconstitucional la Nota N° 1286 de 26 de mayo de 1986 mediante la sentencia de 12 de mayo de 1995 proferida por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la hace inaplicable en la presente ejecución a pasar de que la misma estaba vigente al momento en que se inició el proceso por cobro coactivo por parte del Juzgado Ejecutor del Municipio de Panamá. La inconstitucionalidad produce como efecto inmediato la nulidad de la ley, norma legal o reglamentaria u objeto del proceso constitucional que se declare contrario a los preceptos consagrados en la Carta Magna.

La Doctrina ha señalado al respecto que: "La sentencias que declaran la inconstitucionalidad y pronuncian la anulación consecuente de la norma o actos impugnados, producen cosa juzgada y eliminan la norma o el acto del ordenamiento. Es decir, la sentencia estimatoria de la acción tiene efectos abrogativos y erga omnes hacia el futuro, pues la norma o acto declarados inconstitucionales desaparecen del ordenamiento jurídico, tal y como si hubieran sido derogados". (HERNÁNDEZ VALLE, Rubén; la Tutela de los Derechos Fundamentales;

Editorial Juricentro; San José, Costa Rica, 1990 págs. 218 y 219).

En sentencia de 8 de junio de 1992 esta Sala sostuvo:

> "... La norma inconstitucional es nula y no puede ser aplicada por el juez, aunque estuviese vigente al momento en que se produjo el hecho cuyos efectos ahora se determinan; en este caso el despido y la legalidad o ilegalidad del mismo. La norma inconstitucional carece de ultraactividad por ser nula con efectos generales. Por esta razón, Hans Kelsen sostenía que una norma derogada puede ser objeto del control de constitucionalidad".
>
> De lo anterior se desprende claramente que no puede continuar la aplicabilidad de la Nota N° 1286 de 26 de mayo de 1986. Este criterio fue sostenido igualmente en la Sentencia de 3 de septiembre de 1992. Por lo tanto, ha desaparecido el objeto procesal sujeto a contienda en la presente ejecución, cual es el cobro de los impuestos municipales establecidos en la Nota 1268 de 26 de mayo de 1986 declarada inconstitucional por la Sentencia de 12 de mayo de 1995.
>
> Ante estas circunstancias, es evidente que se ha producido el fenómeno de la Sustracción de materia tal como lo indica el petente."

Por todo lo expuesto, en virtud de que no existe la obligación de Iberia, Líneas Aéreas de España de pagar al Municipio los referidos impuestos municipales, ha desaparecido el objeto litigioso y así debe declararlo esta Sala.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA el cese de procedimiento por SUSTRACCIÓN DE MATERIA en el incidente de levantamiento de secuestro y de constitución de caución, interpuesto por Iberia, Líneas Aéreas de España, S. A., dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el Municipio de Panamá.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ABEL ESPINO PORRAS, EN REPRESENTACIÓN DE RASOLMY, S. A., DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL MUNICIPIO DE PANAMÁ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Abel Espino Porras, actuando en representación de RASOLMY, S. A., ha promovido excepción de prescripción en el Proceso Ejecutivo por Cobro Coactivo que le sigue el Municipio de Panamá.

El recurrente fundamenta su pretensión afirmando que su representada, RASOLMY, S. A., según el estado de cuenta visible que sirvió de recaudo ejecutivo, adeuda al Municipio de Panamá impuestos en virtud de las rentas N° 112501, 112505, 112530 desde el 31 de diciembre de 1986 al 30 de septiembre de 1990 por un total de B/.6,719.90. Señala que los impuestos municipales, intereses y recargos causados desde el 31 de diciembre de 1986 hasta el 30 de septiembre de 1990 están dentro de lo dispuesto por el artículo 96 de la Ley 106 de 1973, el cual establece que las obligaciones resultantes de los impuestos municipales

prescriben a los cinco años de haberse causado (fs. 6 a 9).

La parte actora solicita que se declare prescrita la acción para hacer efectiva la obligación de pagar los tributos municipales causados en el período comprendido entre el 31 de diciembre de 1986 hasta el 30 de septiembre de 1990, derivada de las rentas N° 112502, 112505, 112530 y 112530, por la suma de B/.6,719.90.

Admitida la presente excepción de prescripción se corrió en traslado al Juez Ejecutor del Municipio de Panamá y a la señora Procuradora de la Administración, por el término de ley.

La licenciada Marybella Maestre de Rodríguez, representante del Municipio de Panamá, aceptó todos los hechos de la excepción de prescripción interpuesta por RASOLMY, S. A.

Mediante la Vista Fiscal N° 463 de 1° de noviembre de 1995, la señora Procuradora de la Administración solicitó a esta Sala que declare la prescripción de la obligación tributaria del período comprendido entre el mes de diciembre de 1986, hasta septiembre de 1990, porque el mismo superó los cinco años que dispone el artículo 96 de la Ley 106 de 1973; pero señala que subsiste la acreencia a favor del Municipio desde el mes de octubre de 1990, hasta el mes de enero de 1991, ya que el Auto que libra mandamiento de pago es del 12 de septiembre de 1995.

De acuerdo con las constancias procesales, el Juez Ejecutor del Municipio de Panamá, mediante Resolución de 12 de septiembre de 1995, libró mandamiento de pago por la vía ejecutiva contra Rasolmy, S. A. (contribuyente N° 286-734), por la suma de B/.6,706.55 en concepto de impuestos morosos y recargos (fs. 4 del proceso ejecutivo).

De fojas 1 a 5 del expediente consta un estado de cuenta emitido por el Municipio de Panamá, fechado el 4 de septiembre de 1995, en el cual se establece que Rasolmy, S. A., mantiene con el Municipio de Panamá una obligación tributaria, en concepto de impuestos y recargos, desde diciembre de 1986 hasta el 31 de enero de 1991 identificada con las ordenes 0001 (renta 1125-0500), 0002 (renta 1125-0100), 0003 (renta 1125-3002) y 0004 (renta 1125-3002).

El artículo 96 de la Ley 106 de 1973 sobre Régimen Municipal, preceptúa:

"ARTÍCULO 96. La obligaciones resultantes de los impuestos municipales prescriben a los cinco (5) años de haberse causado."

En relación con la prescripción de las acciones, el artículo 738 del Código Fiscal establece lo siguiente:

"ARTÍCULO 738. El término de la prescripción se interrumpe:

a) Por auto ejecutivo dictado contra el contribuyente;
b) Por promesa de pago escrita del contribuyente debidamente garantizada; y,
c) Por cualquier actuación escrita del funcionario competente encaminada a cobrar el impuesto."

Esta norma es aplicable supletoriamente en materia de impuestos municipales por preceptuarlo así el artículo 7° del Código Fiscal.

Según el precitado artículo 96, ha prescrito la obligación resultante de los impuestos municipales originados antes del 12 de septiembre de 1990, puesto que el auto ejecutivo dictado por el Juzgado Ejecutor del Municipio de Panamá el 12 de septiembre de 1995, interrumpió la prescripción de la obligación de pagar los impuestos originados cinco años antes de dictado dicho auto, por establecerlo así el precitado artículo 738 del Código Fiscal.

Por lo antes expuesto, debe declararse probada la alegada excepción de prescripción de la obligación resultante de los impuestos municipales adeudados

por Rasolmy, S. A., desde el 31 de diciembre de 1986 hasta el 12 de septiembre de 1990, y no probada esta excepción en relación con los impuestos municipales adeudados por dicha sociedad anónima al Municipio de Panamá del 12 de septiembre de 1990 al 31 de enero de 1991.

De consiguiente, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA PARCIALMENTE PROBADA LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN interpuesta por el licenciado Abel Espino Porras en nombre de RASOLMY, S. A. y PRESCRITA la obligación de pagar los impuestos municipales correspondientes al período comprendido entre el 31 de diciembre de 1986 y el 12 de septiembre de 1990, identificados mediante las órdenes 1 (renta 11250500), 2 (renta 11250100), 3 (renta 11253002) y 4 (renta 11253002), dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el Municipio de Panamá.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INCIDENTE DE RESCISIÓN DE SECUESTRO, INTERPUESTO POR LA LCDA. EDA RODRÍGUEZ, EN REPRESENTACIÓN DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, CASA MATRIZ, CONTRA CARLOS RUGLIANCHI T. Y OTRO. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La licenciada Eda Rodríguez actuando en representación de la **Caja de Seguro Social**, ha interpuesto incidente de levantamiento de secuestro dentro del proceso ejecutivo que por cobro coactivo le sigue el Banco Nacional de Panamá, Casa Matriz a Carlos Rugliancich T. y otros.

La pretensión a la cual se alude se sustenta medularmente en el argumento de que la Finca 113635, inscrita al rollo 8170, asiento 01, documento 6 de la Sección de la Propiedad del Registro Público, dada en primera hipoteca y anticresis a favor de la Caja de Seguro Social, ha sido secuestrada por el Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá dentro del proceso ejecutivo que se le sigue a Carlos Lorenzo Rugliancich y Adolfo Rugliancich; destacándose que los gravámenes antes mencionados, fueron inscritos en el Registro Público con anterioridad a la fecha de la medida cautelar de secuestro decretado por la precitada entidad bancaria.

Así las cosas, el interesado invoca el artículo 549 del Código Judicial como fundamento básico en el cual cimenta su petición, y el crédito preferencial que ostenta en el reclamo de su derecho.

En este sentido se observa que el Banco Nacional de Panamá se opone a los señalamientos y a la solicitud incoada por el actor, esgrimiendo esencialmente que la finca en cuestión fue secuestrada mediante Auto de 25 de junio de 1991, e indicando además, que dicha resolución fue comunicada al Registro Público ese mismo día en el cual también se libró mandamiento de pago por la vía ejecutiva en contra de Carlos y Adolfo Rugliancich hasta la concurrencia de B/.7,133.55 en concepto de capital, intereses vencidos, gastos de cobranza e intereses que se surtan hasta la cancelación de la obligación.

Por otro lado añade la apoderada del Banco Nacional de Panamá que Carlos Rugliancich y Adolfo Rugliancich se dieron por notificados del auto ejecutivo de 25 de junio de 1991 el 4 y 5 de julio de 1991 respectivamente.

A su vez la Procuraduría de la Administración considera que es dable aceptar como válida la causa incidental propuesta por la Caja de Seguro Social en base a lo dispuesto en el artículo 549 del Código Judicial, tal como se aprecia a continuación para mayor ilustración:

> "1. Hay constancia de la presentación de la copia autenticada del Auto de embargo de la finca N° 113635.
>
> 2. Al reverso de dicha copia se puede ver, que tanto el Juez Ejecutor de la Caja de Seguro Social, como el Secretario de dicho Tribunal Ejecutivo, han autorizado una certificación en donde:
>
> a. Aparece la fecha de la inscripción de una hipoteca y anticresis, en que se basa su ejecución coactiva. Es más, a foja 17 del expediente principal también se puede constatar dicha fecha, la cual es el **17 de octubre de 1988**.
>
> b. La fecha del auto de embargo de la mencionada finca, por parte de la CAJA DE SEGURO SOCIAL. Esta fecha es el 5 de abril de 1993. Así mismo, a foja 18 del expediente se puede ver que el Banco Nacional de Panamá, inscribió el secuestro de la finca 113635 el día **19 de septiembre de 1991**.
>
> c. Se afirma que el embargo esta (sic) vigente desde el 5 de abril de 1993.
>
> En abono a esta ideas, debemos agregar que de la certificación que aparece de la foja 16 a 18, del expediente principal no se colige que el Banco Nacional de Panamá tenga a su favor un crédito garantizado con hipoteca y/o anticresis, como si lo tiene la hoy día incidentista. Luego, es claro que estamos ante el enfrentamiento de dos títulos crediticios de diversa preminencia y categoría; de lo que se puede establecer, que la Caja de Seguro Social tiene el crédito preferente.

Decisión de este Tribunal

Encontrándose el proceso en este estado, los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte Suprema entran a resolver la controversia instaurada.

Sobre el particular manifiesta esta Corporación que coincide con el criterio vertido por la Procuraduría de la Administración, en virtud de que efectivamente se comprueba que el incidentista cumple con los requisitos preceptuados en el artículo 549 numeral 2 del Código Judicial, ya que la Caja de Seguro Social suministra el auto de embargo decretado sobre la finca 113635 emitido el 5 de abril de 1993, con las certificaciones a que se refiere dicho artículo debidamente firmadas por el secretario y el Juez del Juzgado Ejecutor de la Caja de Seguro Social (ver foja 14-15); así como se observa en la certificación del Registro Público legibles a fojas 16, 17 y 18 que el incidentista disfruta de los derechos reales de hipoteca y anticresis sobre la finca 113635 en contienda, los cuales fueron inscritos en el Registro Público el 17 de octubre de 1988, es decir con anterioridad al Auto de Secuestro emitido por el Banco Nacional de Panamá que data del 25 de junio de 1991. Por consiguiente es viable acceder a la pretensión del incidentista.

En mérito de lo expuesto, los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESCINDEN el secuestro decretado por el Banco Nacional de Panamá sobre la finca 113635 inscrita al rollo 8170, documento 6 de la Sección de la Propiedad de la Provincia de Panamá del Registro Público y ORDENAN que esta finca sea puesta a disposición del Juzgado Ejecutor de la Caja de Seguro Social.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INCIDENTE DE NULIDAD, INTERPUESTO POR EL LCDO. MARTÍN CAICEDO MARTÍNEZ, EN REPRESENTACIÓN DE LUZ GRACIELA NÚÑEZ DE CASTILLO, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL, CONTRA RAMÓN CASTILLO. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Martín Caicedo Martínez actuando en representación de **LUZ GRACIELA NÚÑEZ DE CASTILLO**, ha interpuesto ante esta Superioridad incidente de nulidad dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el Banco Nacional de Panamá a Ramón Castillo.

LA PETICIÓN DE NULIDAD

La parte actora sustenta el libelo de su pretensión, alegando básicamente el cuadro familiar de la señora Núñez de Castillo y sus menores hijos, en el sentido de que si bien es cierto el contrato de préstamo hipotecario fue suscrito originalmente por el señor Ramón Castillo con el Banco Hipotecario Nacional, no debe soslayarse el hecho de que la "notificación de la cartera de préstamos, no toma en cuenta a la señora **DE CASTILLO**; ni toma en cuenta las solicitudes de traspaso en la cual la mencionada señora se comprometía a asumir los pagos y que se pusiera la casa a su nombre; y mucho menos se toma en cuenta el hecho de la existencia de un cuadro familiar, que a pesar de la irresponsabilidad del señor **CASTILLO**, seguía residiendo en el inmueble objeto del préstamo."

Por otro lado argumenta el apoderado judicial de la incidentista, que se procedió a efectuar el proceso ejecutivo, "cuando nunca se giró ninguna boleta; ni se efectuo (sic) una citación; ni se llevó el (sic) documento alguno a la residencia, en la cual estaba viviendo la esposa y los hijos del señor **CASTILLO**, para así legalmente proceder a trámitar (sic) el juicio y efectuar el respectivo remate." Por lo que en consecuencia, es palmaria la falta de notificación personal del demandado al no hacer el más mínimo esfuerzo para localizarlo.

POSICIÓN DEL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL

La entidad ejecutante al vertir su punto de vista con respecto a la relación procesal que se surte, advierte que la incidentista carece de personería jurídica para proponer la presente acción, puesto que el contrato de compraventa de la finca en controversia se celebró con el señor Ramón Castillo, en contra de quien precisamente se ha enderezado la presente ejecución; por lo que el incidente de nulidad bajo estudio debe rechazarse de plano.

Igualmente se alude al artículo 1768 del Código Judicial, el cual establece que en las ejecuciones hipotecarias en las cuales se haya renunciado a los trámites de dicho proceso, solamente procede la presentación de las excepciones de pago y prescripción.

Aunado a lo expresado, el actor explica seguidamente que el Juzgado Ejecutor intentó infructuosamente notificar al demandado a través del citador, pero, que al desconocerse su paradero, se procedió a emplazarlo por edicto y nombrarle un defensor de ausentes, quien se notificó personalmente del auto ejecutivo emitido tal como lo establece el artículo 989 numeral 6 del Código Judicial.

En consecuencia, el ente bancario ejecutante solicita que por los vicios formales y sustanciales anotados se deniegue el incidente promovido y se rechace

de plano por improcedente.

CONTESTACIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN

El Ministerio Público coincide con el criterio vertido por la institución bancaria, debido a que el incidente propuesto es improcedente por virtud de que la incidentista no tiene la suficiente legitimidad procesal para intervenir en la ejecución in examine, al no ser específicamente titular del derecho que reclama; impidiendo así un pronunciamiento o fallo eficaz.

Señala seguidamente la Procuraduría de la Administración, que dicho incidente ha sido propuesto extemporáneamente en atención a lo estatuido en los artículos 688 y 690 del Código Judicial.

DECISIÓN DE ESTA SUPERIORIDAD

Encontrándose el proceso en este estado, los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte Suprema, entran a resolver la contienda instaurada.

Sobre el particular es importante destacar que efectivamente la parte actora no está legitimada con respecto a la causa de pedir, para intervenir en la ejecución que se surte ya que conforme se observa en la escritura pública N° 1011 de 23 de octubre de 1978, la señora **LUZ GRACIELA NÚÑEZ DE CASTILLO** no contrató ni como deudora o codeudora de la presente obligación, ni como garante de la misma; por lo que en consecuencia, no le es dable ejercitar acciones, recursos y demás móviles procesales. La legitimación con respecto a la causa de pedir solamente la ostenta quien directamente tenga en lo concerniente al objeto litigioso, una relación jurídica que garantice la eficacia de la Sentencia judicial que dilucide la pretensión planteada. (Cfr. FÁBREGA, Jorge. Estudios Procesales, Editora Jurídica Panameña, T.I., 1989, pág. 132.).

Ahora bien, debe resaltarse que aun presentándose el incidente en comento por un sujeto procesal debidamente legitimado con respecto a la causa de pedir, no sería viable admitir el mismo puesto que, tal como acota la entidad crediticia, al renunciar el prestatario a los trámites del Juicio Ejecutivo Hipotecario tal como consta en la cláusula duodécima de la escritura pública N° 1011 de 23 de octubre de 1978, únicamente le es dable al mismo interponer dentro de tales procesos, las excepciones de prescripciones o pago, como lo estatuye el texto del artículo 1768 del Código Judicial.

Lo anterior implica, como lo contempla el referido artículo, que no le es posible al afectado interponer incidentes u otros vehículos procesales disímiles a los señalados, dentro de estos litigios en particular.

Sin embargo, el sujeto procesal debidamente legitimado con respecto al petitum puede acogerse al beneficio del proceso sumario si considera lesionados sus derechos producto de la venta sin trámites de los juicios ejecutivos hipotecarios, a tenor de los artículos 1713 y 1772 del Código Judicial. En consecuencia, no procede el incidente de nulidad presentado

En mérito de los expuesto, Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RECHAZAN de plano el incidente nulidad propuesto por el licenciado Martín Caicedo Martínez actuando en representación de LUZ GRACIELA NÚÑEZ DE CASTILLO.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TERCERÍA EXCLUYENTE, INTERPUESTA POR EL DR. MANUEL BELOI GARCÍA ALMENGOR, EN REPRESENTACIÓN DE ABN-AMRO BANK, N.V., DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO

COACTIVO QUE LE SIGUE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL A QUEEN CHEMICAL INDUSTRY INC., S. A. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado **Manuel Beloi García Almengor** en representación de **ABN-AMRO BANK, N.V.**, ha interpuesto Tercería Excluyente dentro del proceso ejecutivo que le sigue la Caja de Seguro Social a Queen Chemical Industry Inc., S. A.

El tercerista en el memorial contentivo de su pretensión, esgrime básicamente que mediante Escritura Pública N° 5437 de 14 de diciembre de 1990, extendida por la Notaría Segunda del Circuito de Panamá, el banco **ALGEMENE BANK NEDERLAND, N.V.** le extendió una línea de crédito bancaria por la suma de **treinta y cuatro mil dólares (B/.34,000.00)** a la sociedad Queen Chemical Industry Inc, S. A., garantizada con hipoteca de bien mueble con vencimiento al 31 de diciembre de 1993, debidamente inscrita en la Sección de Micropelículas de Hipotecas de Bienes Muebles, a la ficha N° 41177, rollo 3373, imagen 0031, de fecha de 9 de abril de 1991 sobre el bien **batidora planetaria, tipo BVP 230/60 galones de capacidad y sus accesorios** con un valor original de **catorce mil ochocientos balboas B/.-14,800.00).**

Sigue manifestando el tercerista que la primera hipoteca de bien mueble constituida por la sociedad Queen Chemical Industry Inc, S. A. a favor de la institución bancaria antes indicada, se encuentra vigente desde el día 9 de abril de 1991, es decir con anterioridad a la Resolución de 5 de septiembre de 1991, proferida por la Caja de Seguro Social, Juzgado Ejecutor. Que la institución bancaria **ALGEMENE BANK NEDERLAND, N.V.** cambió su razón social a **ABN-AMRO, N.V.**

Adicionalmente señala el interesado, que el 5 de septiembre de 1991, la Dirección de Ingresos de la Caja de Seguro Social libró mandamiento de pago de **QUEEN CHEMICAL INDUSTRY INC, S. A.** por la suma de **setenta y cinco mil quinientos balboas con noventa y tres centésimos (B/.75,500.93)**, con posterioridad a la hipoteca antes descrita (cfr. hecho cuarto). Manifiesta la parte afectada que entre los bienes retenidos, mediante diligencia de inventario y avalúo, se encuentra algunos muebles hipotecados a favor **ALGEMENE BANK NEDERLAND, N.V.** hoy **ABN-AMRO, N.V.**, entre esos la batidora planetaria tipo BVP 230/60 galones de capacidad y sus accesorios. Que por lo anterior se solicita que se excluya del embargo decretado por la Caja de Seguro Social el día 22 de mayo de 1995, el bien mueble antes descrito.

Por su parte, la Caja de Seguro Social en el escrito a través del cual contestó el incidente de Tercería, se opuso a las pretensiones del actor, debido a que estima que la deuda contraída por parte de Queen Chemical Industry Inc., S. A. con la esa entidad gubernamental es anterior a la primera hipoteca constituida a favor de **ALGEMENE BANK NEDERLAND, N.V.** hoy **ABN-AMRO, N.V.**.

En este sentido, el señor Procurador de la Administración se pronunció a favor de la pretensión incoada, debido a que considera que la Tercería Excluyente bajo estudio, cumple con lo preceptuado en los ordinales 2 y 4 del artículo 1788 del Código Judicial.

Encontrándose el proceso en este estado, los Magistrados que integran la Sala Tercera, entran a resolver la controversia instaurada.

Al respecto, coincidimos con el tercerista al igual que con el representante del Ministerio Público, dado que el banco **ALGEMENE BANK NEDERLAND, N.V.**, hoy **ABN-AMRO, N.V.**, posee a su favor el derecho real de hipoteca sobre la batidora planetaria tipo BVP 230/60 galones de capacidad y sus accesorios, según se advierte en el hecho quinto de la Escritura Pública N° 5437 de 14 de diciembre de 1990, inscrita en el Registro Público el 9 de abril de 1991. Igualmente se constata que dicho derecho real concedido a favor de **ALGEMENE BANK NEDERLAND, N.V.** hoy **ABN-AMRO, N.V.**, se constituyó con anterioridad a la expedición tanto del

auto que libra mandamiento de pago como del auto de embargo, expedidos ambos por el Juzgado Ejecutor de la Caja de Seguro Social, y los cuales datan del 5 de septiembre de 1991 y 22 de mayo de 1995 respectivamente.

En otras palabras, le asiste razón al incidentista ya que evidentemente se apega con rigurosidad a las disposiciones de procedimiento pertinentes, consagradas en el artículo 1788 del Código Judicial, concretamente en sus ordinales 2, 3 y 4.

En mérito de lo expuesto, los Magistrados que integran la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARAN PROBADA la Tercería Excluyente propuesta por el licenciado Manuel Beloi García Almengor en representación de ABN-AMRO BANK, N.V.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TERCERÍA COADYUVANTE, INTERPUESTA POR EL LCDO. JOSÉ HERRERO VICTORIA, EN REPRESENTACIÓN DE CÍA. INTERNACIONAL DE SEGUROS, S. A., DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE LA CAJA DE AHORROS A PEDRO FLORES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado José Herrero Victoria actuando en representación de la **Compañía Internacional de Seguros** ha interpuesto Tercería Coadyuvante dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue la Caja de Ahorros a Pedro Flores.

Argumentos de la parte Actora:

La **Compañía Internacional de Seguros** a través de su apoderado legal esgrime en el libelo de su pretensión, básicamente que el señor Pedro Flores les adeuda la suma de B/.32,262.82 como consecuencia de un préstamo con garantía hipotecaria. Dicho gravamen se refiere a la segunda hipoteca sobre la finca N° 69712 inscrita al Folio 322, Tomo 1692 de la Sección de la Propiedad del Registro Público constituida mediante la Escritura Pública N° 3301 de 14 de marzo de 1985, que a su vez consta inscrita en la Ficha 066240, Rollo 6073, Imagen 0097 de la Sección de Micropelículas de la Precitada entidad registral. Añade el actor que la obligación en comento se encuentra de plazo vencido y por lo tanto es perfectamente exigible sobre el saldo adeudado que certifique un representante de la Compañía Internacional de Seguros, en atención a la cláusula décima tercera del antes mencionado instrumento público.

Por virtud de lo señalado, y dado que el Juzgado Ejecutor de la Caja de Ahorros está ejecutando la finca en controversia de la cual disfruta del derecho real de hipoteca, como primer gravamen, el incidentista solicita que producto de la venta del bien inmueble perseguido se le pague a la Compañía Internacional de Seguros, S. A. con la prelación establecida en la ley, la suma que le adeuda el señor Pedro Flores.

Posición de la Caja de Ahorros:

La entidad crediticia al vertir su criterio con respecto a la presente contienda, se circunscribe de manera sucinta a negar el primer hecho y a aceptar

los otros hechos del incidente de tercería coadyuvante propuesto por la Compañía Internacional de Seguros.

Contestación de la Procuraduría de la Administración:

Sobre el particular el Ministerio Público actuando en interés de la ley considera que es procedente acceder a la petición de la tercerista ya que la misma ha sido promovida antes efectuarse el pago al acreedor, y además, debido que la tercería en cuestión tiene su asidero en la Escritura Pública N° 3301 de 14 de marzo de 1985, inscrita en la ficha 066240, rollo 6073, imagen 0097 del Registro Público mediante la cual, Pedro Flores y la Compañía Internacional de Seguros S. A. celebraron un contrato de préstamo garantizado con segunda hipoteca sobre la finca 69712.

Decisión de esta Corporación de Justicia:

Encontrándose el proceso en este estado los Magistrados que integran la Sala Tercera de lo Contencioso entran a resolver la solicitud planteada.

Al respecto coincide esta Superioridad con el criterio vertido por la Procuraduría de la Administración en el sentido de que es dable acceder a la petición del incidentista en atención a que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 1794 del Código Judicial.

Ello es así debido a que efectivamente la presente tercería coadyuvante ha sido interpuesta antes del pago al acreedor apoyándose en un recaudo ejecutivo cuyo origen es anterior al auto ejecutivo fechado 26 de abril de 1991. El título que presta mérito ejecutivo en este caso en particular es la Escritura Pública N° 3301 de 14 de marzo de 1985, tal como lo expresa la Procuraduría de la Administración con fundamento en el artículo 1639 numeral 4 de la prenombrada excerta legal, que le reconoce dicho valor de ejecución al referido documento.

En mérito de lo expuesto, los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARAN PROBADA la Tercería Coadyuvante presentada por la Compañía Internacional de Seguros S. A. dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue la CAJA DE AHORROS a PEDRO FLORES y en consecuencia, se ORDENA que producto de la venta de la Finca N° 69712, debidamente inscrita al Folio 322, Tomo 1692 de la Sección de la Propiedad de la Provincia de Panamá, del Registro Público, se pague al tercerista con la prelación establecida en la ley.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INCIDENTE DE RESCISIÓN DE SECUESTRO, INTERPUESTO POR LA FIRMA FÁBREGA, BARSALLO MOLINO Y MULINO, EN REPRESENTACIÓN DE PRIMER BANCO DE AHORROS, S. A. (PRIBANCO), DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO CONTRA IVÁN ANTONIO VIDEGAÍN TEJADA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma de abogados Fábrega, Barsallo, Molino y Mulino, actuando en nombre y representación del PRIMER BANCO DE AHORROS, S. A., ha presentado incidente de rescisión de secuestro, dentro del proceso por cobro coactivo que sigue el BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO contra IVÁN ANTONIO VIDEGAÍN TEJADA.

La pretensión del incidentista consiste en que se deje sin efecto el auto de secuestro de 23 de julio de 1993, proferido por el Juzgado Ejecutor del BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, que reposa a fojas 23 del proceso ejecutivo. El apoderado judicial del Banco incidentista fundamenta su petición alegando que la finca N° 17,296, Folio 110 del Tomo 434 de la Sección de la Propiedad del Registro Público **secuestrada** por el BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, propiedad de IVÁN ANTONIO VIDEGAÍN TEJADA, fue gravada con primera hipoteca y anticresis a favor del PRIMER BANCO DE AHORROS, S. A. mediante la Escritura Pública N° 1390, de 18 de febrero de 1987, de la Notaría Segunda del Circuito de Panamá, inscrita en el Registro Público en la Ficha 078210, rollo 6800, imagen 0090 desde el 26 de marzo de 1987.

Señala asimismo que mediante auto N° 2172, de 6 de septiembre de 1995, el Juzgado Segundo de Circuito Civil, del Primer Circuito Judicial, decretó embargo sobre la finca antes descrita dentro del proceso ejecutivo hipotecario instaurado por su representado, el Primer Banco de Ahorros, S. A., contra el señor IVÁN ANTONIO VIDEGAÍN TEJADA.

Con el incidente se aportó como prueba una certificación sobre la existencia y representación legal de la empresa PRIMER BANCO DE AHORROS, S. A. expedida por el Registro Público y copia debidamente autenticada de la resolución dictada por el Tribunal de Circuito Civil antes mencionado mediante la cual decreta embargo sobre el inmueble descrito, documento en el cual se certifica que ese embargo, decretado el 6 de septiembre de 1995, está vigente y que la hipoteca que dio origen al proceso está también vigente e inscrita en el Registro Público en la Ficha 078210, Rollo 6800, Imagen 0090, desde el 26 de marzo de 1987.

Admitido el presente incidente se corrió en traslado al Juez Ejecutor del Banco de Desarrollo Agropecuario, al ejecutado y a la señora Procuradora de la Administración por el término de tres días.

El apoderado judicial de la entidad pública bancaria que ejerce la jurisdicción coactiva negó la mayoría de los hechos fundamentales del incidente, así como el derecho invocado y las pruebas aportadas.

La señora Procuradora de la Administración, mediante la Vista Fiscal N° 512 de 27 de noviembre de 1995, señaló que le asiste la razón al incidentista y que el secuestro practicado por el Banco de Desarrollo Agropecuario de 23 de julio de 1993, que recae sobre la Finca N° 17,296 antes descrita, debe levantarse (fs. 17).

Consta en el expediente contentivo del proceso por cobro coactivo el auto de secuestro de 23 de julio de 1993, cuya rescisión se pide, emitido por el Juez Ejecutor del BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO (foja 23). Dicha resolución literalmente decretó "formal secuestro hasta la concurrencia de SESENTA MIL QUINIENTOS CATORCE BALBOAS CON 92/100 (B/.70,514.92) por capital más los intereses los cuales hasta la fecha se calculan en TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA BALBOAS CON 75/100 (B/.34,340.38) y en concepto de gasto de cobranza la suma de TRES MIL QUINIENTOS VEINTICINCO BALBOAS CON 75/100 (B/.3,525.75) sobre los siguientes bienes: finca 17296, tomo 434, Folio 5 de la Sección de propiedad provincia de Panamá."

Consta a foja 1 del expediente copia debidamente autenticada del auto ejecutivo N° 2172, de 6 de septiembre de 1995, dictado por el Juzgado Segundo de Circuito Civil, del Primer Circuito Judicial, que libró mandamiento de pago y secuestro sobre la finca anteriormente descrita a favor del PRIMER BANCO DE AHORROS, S. A. y contra IVÁN ANTONIO VIDEGAÍN TEJADA.

Según el párrafo segundo del artículo 1705 del Código Judicial el embargo, y consiguiente depósito, cuando lo hubiere de una cosa se **rescindirá** si al Juez que lo decretó se le presenta copia auténtica de un auto de embargo de dichos bienes dictado en un proceso hipotecario seguido en virtud de una **hipoteca inscrita con anterioridad a la fecha de embargo**. Al pie de dicha copia debe aparecer una certificación autorizada por el respectivo Juez y Secretario, con expresión de la fecha de inscripción de la hipoteca en que se basa el juicio, la

fecha del auto de embargo, y que dicho embargo está vigente. Esta certificación deberá ser de fecha no anterior a seis meses. El Juez que rescinda el depósito pondrá los bienes a disposición del tribunal donde se tramita el proceso hipotecario, de manera que éste pueda verificar si el depósito, en virtud del auto de embargo, está vigente.

En el presente caso ha quedado acreditado que el gravamen hipotecario que alega el incidentista es de fecha anterior al auto de secuestro emitido por el Juzgado Ejecutor del BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO; y la certificación del Juzgado Segundo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial cumple con lo dispuesto en el artículo 1705 antes citado.

A juicio de este Tribunal el incidentista ha probadolos hechos expuestos en el incidente, por lo que procede acceder a lo solicitado.

En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RESCINDE EL SECUESTRO decretado por el Juzgado Ejecutor del BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO sobre la finca N° 17,296, inscrita en el Registro Público al tomo 434, folio 5, Sección de la Propiedad, Provincia de Panamá, propiedad de IVÁN ANTONIO VIDEGAÍN TEJADA, mediante auto de 23 de julio de 1993, proferido dentro del proceso que por vía de la jurisdicción coactiva prosigue dicha entidad bancaria estatal contra IVÁN ANTONIO VIDEGAÍN TEJADA, y ORDENA al Juez Ejecutor comunicar esta decisión al Registro Público y poner la finca N° 17,296, inscrita en el Registro Público al tomo 434, folio 5, Sección de la Propiedad, Provincia de Panamá a disposición del Tribunal Segundo de Circuito Civil, del Primer Circuito Judicial, quien tramita el juicio ejecutivo hipotecario promovido por el Primer Banco de Ahorros, S. A. contra IVÁN ANTONIO VIDEGAÍN TEJADA.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO HONORIO QUESADA MARTÍNEZ, EN REPRESENTACIÓN DE KEE FON CHONG CHAN, DENTRO DEL JUICIO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL MUNICIPIO DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Honorio Quesada Martínez actuando en representación de **KEE FON CHONG CHAN** ha interpuesto ante esta Superioridad, excepción de prescripción dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el Municipio de Panamá.

Argumentos de la parte actora

El peticionista esgrime en el escrito contentivo de su pretensión, básicamente que a la fecha de inicio del proceso ejecutivo por parte del Municipio de Panamá han transcurrido más de cinco años con respecto a la morosidad imputable en concepto de impuestos, tasas y demás contribuciones, y que en consecuencia, a tenor del artículo 96 de la Ley 106 de 8 de octubre de 1973, se ha extinguido el derecho de accionar y cobrar por parte del Municipio de Panamá en atención a que el mismo ha prescrito. Estas aseveraciones las efectúa el actor en atención a que el Auto que libra mandamiento de pago data del 20 de octubre de 1995 y la morosidad que se intenta cobrar corresponde a los períodos de 1988, 1989 y 1990, por la suma de B/.3,143.74.

Como corolario de lo expresado el excepcionante requiere a este Tribunal para que se declare prescrito el derecho del Municipio de Panamá para el cobro de impuestos, tasas y contribuciones, así como sus recargos e intereses causados, todos en el período enmarcado entre noviembre de 1988, 1989 y junio de 1990; fecha esta última en la cual se realizó el cierre del establecimiento comercial del excepcionante denominado "Comisariato la Mañanitas", tal como señala el incidentista que consta en la Resolución N° D.L. de 16 de Agosto de 1990, proferida por la Dirección Legal y de justicia y refrendada por el Tesorero Municipal.

Contestación del Municipio de Panamá

La entidad ejecutante a través de la licenciada Marybella Maestre al vertir su opinión con respecto a la contienda planteada, indica que los hechos cuarto, quinto y sexto del escrito del excepcionante son ciertos, pero sin solicitar específicamente la denegación o admisión de la pretensión del actor; aunque ciertamente al aceptar el hecho sexto del libelo de la excepción presentada, el Municipio de Panamá expresamente admite que le asiste al actor el derecho sustantivo invocado en la presente controversia.

Concepto de la Procuraduría de la Administración

Sobre el particular acota la señora Procuradora de la Administración que es procedente admitir la excepción in examine a tenor del artículo 773 del Código Judicial, en virtud que la entidad demandada aceptó el hecho constitutivo de la obligación impetrada; y en consecuencia es procedente reconocerle firmeza y veracidad a los argumentos esgrimidos por el petente.

Decisión de esta Superioridad

Encontrándose el proceso en este estado, los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte, entran a resolver el fondo de contienda instaurada.

Al respecto coincide esta Corporación con el razonamiento vertido por la Procuraduría de la administración puesto que, el artículo 773 del Código Judicial efectivamente establece que "No requiere prueba los hechos afirmados por una parte y admitidos por la contraria, respecto a los cuales la Ley no exige prueba específica."

No obstante es importante poner de relieve, que si bien es cierto la entidad ejecutante aceptó el derecho reclamado por el actor, no se puede soslayar que la oportunidad del Municipio de Panamá para surtir un proceso de cobro coactivo en contra de peticionista efectivamente prescribió, dado que la notificación del Auto que libra mandamiento de pago en contra del excepcionante fechado 20 de octubre de 1995, se dictó el 30 de noviembre del mismo año, y la última morosidad del actor es contabilizada por el Municipio de Panamá hasta septiembre de 1990; todo lo cual indica que han transcurrido los cinco años a los cuales se refiere el artículo 96 de la Ley 103 de 1976, en el sentido de que "Las obligaciones resultantes de los impuestos municipales prescriben a los cinco (5) años de haberse cursado." Por consiguiente, al ponderar las circunstancia expuestas, es dable a esta Superioridad admitir las peticiones del incidentista.

En mérito de lo expresado, los Magistrados que integran la Sala Tercera de Corte Suprema, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARAN PROBADA la excepción de prescripción interpuesta por el licenciado Honorio Quesada Martínez actuando en representación de KEE FON CHONG CHAN, y por lo tanto, se DECLARA que se ha extinguido por prescripción el derecho o acción del Municipio de Panamá en lo referente al cobro de la suma de B/.3,143.74 contenida en el Auto que libra mandamiento de pago fechado 20 de octubre de 1995, proferido por el Juez Ejecutor del Municipio de Panamá, en concepto de impuestos municipales, tasas y derechos más recargos e intereses causados desde noviembre de 1988 hasta septiembre de 1990.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXCEPCIÓN DE INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, PRESCRIPCIÓN Y FALSEDAD DE LA OBLIGACIÓN QUE SE DEMANDA, INTERPUESTA POR EL LCDO. EDGAR OMAR VARGAS TRISTÁN, EN REPRESENTACIÓN DE ERIC ELMER PÉREZ RODRÍGUEZ, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Lcdo. Edgar Vargas, apoderado judicial de Eric Elmer Pérez Rodríguez, ha presentado mediante escrito de 26 de marzo de 1996, solicitud de aclaración de la sentencia de 31 de enero de 1991 dictada por la Sala Tercera, mediante la cual se declara probada la excepción de inexistencia de la obligación, prescripción y falsedad de la obligación, interpuesta dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le seguía el Banco de Desarrollo Agropecuario a Eric Pérez.

El apoderado judicial de la parte actora sustenta su solicitud, en los siguientes términos:

> "... concurro respetuosamente ante es Tribunal con el objeto de solicitarle que se aclare la Sentencia de 31 de enero de 1996, enviada al Director del Registro Público, mediante Oficio 203 del 29 de febrero de 1996, ya que en la misma Resolución se refiere a la Finca N° 13,101, omitiéndose que la misma se encuentra inscrita en el rollo 1487 complementario, documento 3, asiento 1, de la Sección de Propiedad de Coclé y a la vez hecha esta aclaración, se le comunique mediante un nuevo Oficio al señor Director del Registro Público, a fin de que el mismo pueda cumplir con lo ordenado en dicha sentencia ..."

El artículo 986 del Código Judicial establece que "... Toda decisión judicial, sea de la clase que fuere, en que se haya incurrido, en su parte resolutiva, en un error puro y manifiestamente aritmético o de escritura o de cita, es corregible y reformable en cualquier tiempo por el juez respectivo, de oficio o a solicitud de parte, pero sólo en cuanto al error ...". Los Magistrados que integran la Sala Tercera estiman que tiene razón la parte actora al solicitar la aclaración de la sentencia de 31 de enero de 1996, puesto que, efectivamente, en la parte resolutiva de dicha resolución, se omitió mencionar donde se encuentra inscrita de la finca N° 13,101.

En consecuencia, la Sala Tercera (contencioso administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CORRIGE la parte resolutiva de la sentencia de 31 de enero de 1996 y establece que la misma quedará de la forma siguiente: En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA PROBADA, la excepción de inexistencia de la obligación e inexistencia del título, interpuesta por el Lcdo. Edgar Omar Vargas Tristán, en representación de Eric Elmer Pérez Rodríguez dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que el sigue el Banco de Desarrollo Agropecuario a Eric Elmer Pérez Rodríguez y por lo tanto deja sin efecto la acción de secuestro sobre la finca N° 13,101 inscrita en el Rollo 1487 complementario, documento 3, asiento 1 de la Sección de Propiedad de la Provincia de Coclé y ORDENA al Registro Público cancelar la anotación correspondiente.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.)MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR LA LICENCIADA ROSAURA REYES DE GONZÁLEZ, EN REPRESENTACIÓN DE JOSÉ MARÍA PÉREZ AÑINO, CONTRA LA SENTENCIA DE 28 DE FEBRERO DE 1996, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DENTRO DEL PROCESO LABORAL: JOSÉ MARÍA PÉREZ AÑINO -VS- SERVICIO DE COBRO Y FINANZAS, S. A. (SECOFISA) MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, DOCE (12) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA. LABORAL.

VISTOS:

La licenciada **Rosaura Reyes de González**, en nombre y representación de **JOSÉ MARÍA PÉREZ AÑINO**, presentó recurso de casación contra la Sentencia de 28 de febrero de 1996, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo, dentro del proceso laboral **JOSÉ MARÍA PÉREZ AÑINO -vs- SERVICIO DE COBRO Y FINANZAS, S. A. (SECOFISA).**

Vencido el término legal establecido en el artículo 927 del Código de Trabajo sin que la parte contraria presentara escrito de oposición, la Sala pasa a resolver la situación legal planteada.

El recurrente sostiene que el auto impugnado viola los artículos 730 y 732 del Código de Trabajo, todos de carácter adjetivo.

La Corte ha manifestado en innumerables ocasiones, que las normas adjetivas que tratan sobre pruebas y valoración de pruebas, pueden servir de medio para demostrar la violación de disposiciones sustantivas. Estas últimas establecen los derechos, que de no haber sido reconocidos, pueden ser reclamados. En este sentido, las normas adjetivas deben incidir en las sustantivas, para que puedan ser revisables ante esta Superioridad, en caso de que se considere que aquellas han sido violentadas.

Cuando la acusación se refiere exclusivamente a normas de carácter adjetivo, como en el presente caso, el cargo o los cargos quedan incompletos y no alcanzan a producir los resultados que persigue el recurso de casación, ya que así lo dispone el párrafo final del artículo 928 del Código de Trabajo. Esta disposición dispone lo siguiente:

> "Artículo 928. Recibido el expediente, el Tribunal de Casación Laboral rechazará de plano el recurso si se ha interpuesto contra lo que dispone el artículo 925. Lo mismo hará cuando el recurso se pida únicamente la corrección, reposición o práctica de trámites procesales". (subrayado es nuestro).

Por lo expuesto, la Sala Tercera, Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso de casación propuesto por la licenciada Rosaura Reyes de González, en nombre y representación de JOSÉ MARÍA PÉREZ AÑINO.

Notifíquese.

(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO LUIS CEDEÑO MEREL, EN REPRESENTACIÓN DE GRACIELA ÁBREGO DE ESTRIBÍ, CONTRA LA SENTENCIA DE MARZO DE 1996, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: GRACIELA ÁBREGO DE ESTRIBÍ -VS- INSTITUTO PANAMERICANO. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA. (LABORAL).

VISTOS:

El licenciado **Luis Cedeño Merel**, en nombre y representación de **GRACIELA ÁBREGO DE ESTRIBÍ**, presentó recurso de casación contra la Resolución de segunda instancia de marzo de 1996, dentro del proceso laboral **GRACIELA MARÍA ÁBREGO DE ESTRIBÍ -vs- INSTITUTO PANAMERICANO.**

Dentro del término legal establecido en el artículo 927 del Código de Trabajo, la parte contraria presentó escrito de oposición, en donde señaló que dicho recurso no debía ser admitido dado que carecía de las formalidades establecidas en el artículo 926 del Código de Trabajo.

Encontrándose el proceso en este estado, la Sala pasa a resolver la situación legal planteada.

Observa este Tribunal Colegiado que efectivamente, tal como lo manifestó el procurador judicial del Instituto Panamericano, el recurso propuesto no cumple con lo preceptuado en el numeral primero del artículo 926 del Código de Trabajo, que dice:

> "Artículo 926. El recurso de casación no está sujeto a formalidades técnicas especiales, pero deberá contener:
>
> 1. Indicación de la clase de proceso, de los nombre y apellidos de las partes, fecha de la resolución recurrida y la naturaleza de ésta;"... (subrayado es nuestro).

Evidentemente se observa, que la parte actora no indica la fecha de resolución recurrida, ni su naturaleza, sólo se limita a señalar que se trata de una resolución de segunda instancia, tal como puede comprobarse a foja 1 del escrito del recurso. Si la parte afectada no identifica debidamente la resolución que es motivo del recurso de casación, mal puede este Tribunal Colegiado asumir la identificación del mismo.

Si bien es cierto, el recurso de casación no reúne mayor formalidad que las que establece la ley, no es menos cierto que la omisión de una o de algunas de ellas (formalidades), impide que el referido recurso pueda ser admitido.

Esta Superioridad en reiteradas ocasiones, ha manifestado lo importante que el casacionista cumpla con cada uno de los elementos formales mínimos que exige el artículo 926 del Código de Trabajo. En este sentido podemos hacer referencia a las Resoluciones de 18 de junio de 1991, y 9 de julio de 1992.

Por las anteriores consideraciones, la Sala Tercera, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el Recurso de Casación Laboral presentado por el Licenciado Luis Cedeño Merel, en nombre y representación de GRACIELA ÁBREGO DE ESTRIBÍ.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO MARCO ANTONIO HERRERA, EN REPRESENTACIÓN DE CÍA. DE PRODUCTOS DE ARCILLA, S. A., CONTRA LA SENTENCIA DE 7 DE MARZO DE 1996, EXPEDIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: CÍA. DE PRODUCTOS DE ARCILLA, S. A. -VS- OMAR DE GRACIA. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ,DIECIOCHO (18) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA. (LABORAL).

VISTOS:

El licenciado **Marco Antonio Herrera** en nombre y representación de **CÍA. DE PRODUCTOS DE ARCILLA, S. A.** ha interpuesto recurso de casación laboral contra la Sentencia de 7 de marzo de 1996, expedida por el Tribunal Superior de Trabajo, dentro del Proceso laboral: **CÍA. DE PRODUCTOS DE ARCILLA, S. A. -vs- OMAR DE GRACIA.**

Vencido el término legal establecido en el artículo 927 del Código de Trabajo, la parte contraria presentó escrito de oposición, por lo que la Sala pasa a resolver la situación legal planteada.

El recurrente sostiene que el auto impugnado viola los artículos 730 y 865 del Código de Trabajo, todos de carácter adjetivo.

La Corte ha manifestado en innumerables ocasiones, que las normas adjetivas que tratan sobre pruebas y valoración de pruebas, pueden servir de medio para demostrar la violación de disposiciones sustantivas. Estas últimas establecen los derechos, que de no haber sido reconocidos, pueden ser reclamados. En este sentido, las normas adjetivas deben incidir en las sustantivas, para que puedan ser revisables ante esta Superioridad, en caso de que se considere que aquellas han sido violentadas. El Tribunal de Casación conoce **de errores in judicando** y no de errores in procedendo (Ver Sentencias de 12 de junio de 1995, 19 de mayo de 1995 y 6 de julio de 1994).

Cuando la acusación se refiere exclusivamente a normas de carácter adjetivo, como en el presente caso, el cargo o los cargos quedan incompletos y no alcanzan a producir los resultados que persigue el recurso de casación, ya que así lo dispone el párrafo final del artículo 928 del Código de Trabajo. Esta disposición dispone lo siguiente:

> "Artículo 928. Recibido el expediente, el Tribunal de Casación Laboral rechazará de plano el recurso si se ha interpuesto contra lo que dispone el artículo 925. Lo mismo hará cuando el recurso se pida únicamente la corrección, reposición o práctica de trámites procesales". (subrayado es nuestro).

Por lo expuesto, la Sala Tercera, Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso de casación propuesto por el licenciado Marco Antonio Herrera en nombre y representación de CÍA. DE PRODUCTOS DE ARCILLA, S. A..

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR LA FIRMA ENDARA Y MARRÉ, EN REPRESENTACIÓN DE CARLOS EDUARDO FONSECA CONTRA LA SENTENCIA DE 8 DE MARZO DE 1996, EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: CARLOS EDUARDO FONSECA -VS- DISTRIBUIDORA DIFA S. A. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS

(1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA. LABORAL.

VISTOS:

La firma forense **ENDARA & MARRE**, actuando en su calidad de apoderada judicial del señor **CARLOS EDUARDO FONSECA**, ha presentado Recurso de Casación Laboral contra la sentencia de 8 de marzo de 1996 proferida por el Tribunal Superior de Trabajo, dentro del proceso laboral **CARLOS EDUARDO FONSECA -VS- DISTRIBUIDORA DIFA, S. A.**.

Conforme al procedimiento establecido en el texto del Artículo 927 del Código de Trabajo, se corrió traslado del recurso presentado a la contraparte en el negocio, sin que ésta compareciese al proceso.

Sin embargo, en escrito presentado el día 12 de abril del año que decurre, la firma forense **ENDARA & MARRE** que ostenta la representación judicial del trabajador **CARLOS FONSECA**, y el licenciado **MIGUEL ÁNGEL ORDOÑEZ** en su condición de apoderado judicial de la Empresa **DISTRIBUIDORA DIFA S. A.**, conjuntamente han desistido del recurso propuesto, en los términos previstos en el artículo 942 del Código de Trabajo.

En efecto, se advierte que el desistimiento es un medio excepcional de terminación de los procesos, cuya viabilidad se sujeta al cumplimiento del texto legal precitado, que se reproduce a continuación para mayor ilustración:

> "Artículo 942. Después de notificada la resolución que corre traslado de la demanda, se requiere la conformidad del demandado para que el actor pueda desistir del proceso o instancia condicional, total o parcialmente, en cualquier estado del proceso, con anterioridad a la sentencia.
>
> Cuando el desistimiento de la instancia afectare intereses de terceros, es necesaria su admisión y la conformidad de éstos, además de **la del demandado. Bilateralidad del desistimiento**".

Esta Superioridad constata que la contraparte en el negocio, el licenciado **MIGUEL ORDOÑEZ** apoderado judicial de la empresa **DIFA S.** A., ha convenido expresamente el desistimiento de la demanda, indicando que ésta no ha sufrido perjuicios con motivo del recurso propuesto contra la sentencia de 8 de marzo de 1996, y siendo que las partes interesadas se encuentran expresamente facultadas para desistir del proceso, tal como se advierte en los respectivos poderes legibles a fojas 1 y 20 del expediente N° 366-94 que contienen los antecedentes del negocio, es perfectamente viable la solicitud de desistimiento presentada.

En consecuencia, la Sala Tercera, LABORAL, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad la ley, ADMITE el Desistimiento presentado conjuntamente por la firma forense ENDARA & MARRE que ostenta la representación judicial del trabajador CARLOS FONSECA, y el licenciado MIGUEL ÁNGEL ORDOÑEZ en su condición de apoderado judicial de la Empresa DISTRIBUIDORA DIFA S. A.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LCDO. ALEJANDRO QUINTERO DIXON, EN REPRESENTACIÓN DE NELLISBETH ALVARADO DELGADO, CONTRA LA SENTENCIA DE 26 DE ENERO DE 1996 EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DENTRO DEL PROCESO

LABORAL: NELLISBETH ALVARADO DELGADO VS AUDIO FOTO INTERNACIONAL, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (LABORAL).

VISTOS:

El licdo. Alejandro Quintero Dixon, actuando en representación de Mellisbeth Alvarado Delgado, ha interpuesto ante esta Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia recurso de casación contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Trabajo el 26 de enero de 1995 dentro del proceso laboral promovido por su representada contra la empresa Audio Foto Internacional, S. A.

En el recurso se pretende que la Sala case la sentencia de segunda instancia y, como consecuencia de ello ordene el reintegro de la trabajadora a sus labores habituales.

Según la parte demandante, después de regresar de la licencia de embarazo consistente en el descanso obligatorio de 6 semanas antes y 8 semanas después del parto, y de reincorporarse a su trabajo el día 12 de agosto de 1995, ella "es suspendida abrupta e ilegalmente de sus funciones y se le comunica despido verbal, cancelándosele a través de un cheque sus supuestas prestaciones" el día 16 de agosto de 1996.

El juzgador de primera instancia no accedió al reintegro y el Tribunal Superior de Trabajo confirmó la decisión de primera instancia por considerar que no se había probado la relación de trabajo así como tampoco el alegado fuero.

Alega la recurrente que la sentencia expedida por el Tribunal Superior de Trabajo ha infringido los artículos 106, 978 y 991 del Código de Trabajo y el artículo 68 de la Constitución Nacional.

La Sala pasa a examinar los cargos que se formulan a la sentencia expedida por el Tribunal Superior de Trabajo.

Con respecto a la violación del artículo 68 de la Constitución Política cabe señalar que este no es el recurso adecuado para estudiar infracciones a nuestra Carta Magna, por lo tanto, no entraremos a analizar los cargos endilgados a la norma citada.

Sobre los demás cargos, consideramos esencial analizar primero el cargo referente a la existencia de la relación de trabajo pues de ésta dependerá el estudio de las demás.

La recurrente señala que "la ficha de Seguro Social reúne los requisitos para considerarla como una prueba, al menos **INDICIARIA**, de la relación laboral, tal cual la describe el artículo 978 del Código de Trabajo".

Se refiere la recurrente a que el artículo 978 del Código de Trabajo, como quedó modificado según la ley 44 de 1995, exige únicamente que al presentar una prueba indiciaria de la relación de trabajo se debe reintegrar a la persona protegida con fuero, y, por lo tanto, fue suficiente la presentación de la ficha del Seguro Social para que se ordenara el reintegro de la recurrente.

El Tribunal Superior de Trabajo señaló en la sentencia recurrida lo siguiente:

> "Si bien es cierto que el artículo 978 del Código de Trabajo al ser modificado por la Ley 44 del '95, establece que el trabajador para solicitar el reintegro únicamente debe concurrir con pruebas por lo menos indiciaria de trabajo"
> ...
> "En el caso que nos ocupa la trabajadora para establecer la existencia de la relación de trabajo sólo ha presentado la ficha de Seguro Social donde no se señala quien es la persona que funge como

patrono, sólo se establece un número patronal."
...
"En el presente caso no se ha probado la existencia de la relación de trabajo."

Contrariamente a lo que señala el actor, encontramos que el Tribunal Superior tomó en cuenta y observó el contenido del artículo 978 del Código de Trabajo como fue modificado por la Ley 44 de 1995. Sin embargo, de lo arriba transcrito, podemos concluir que para el Tribunal Superior de Trabajo no es prueba suficiente la ficha de Seguro Social para demostrar la relación de trabajo entre las partes en vista que en la misma no aparece el nombre del empleador. Por otro lado, el Tribunal Superior observó que ha sido jurisprudencia reiterada de nuestros tribunales laborales que la ficha del Seguro social no es prueba suficiente para demostrar la relación de trabajo.

Ahora bien, si lo que pretende la recurrente es que la Sala entre a juzgar el valor que el Tribunal Superior de Trabajo le diera a la prueba o sea a la ficha del Seguro Social, y por lo tanto confrontar el criterio de ambos para lograr una resolución favorable, cabe señalar que en diferentes ocasiones esta Sala ha manifestado que el presente recurso no es una tercera instancia en la que se entra a analizar el valor que el juzgador le dé a las pruebas. El recurso de casación laboral se limita a confrontar la sentencia de segunda instancia con las normas sustantivas de la legislación laboral que se puedan haber violado.

Sin embargo, cuando se trata de errores en la interpretación o valoración de las pruebas, errores que salten a la vista sin mayor esfuerzo, como por ejemplo, un error en haber visto lo que no contiene la prueba, o no haber visto lo que sí contiene; puede entonces la Sala Tercera entrar a conocer del caso y casar la sentencia. Cabe agregar, que es obligante que el recurrente indique en que consiste este error para que esta Sala entre a conocer del mismo y en caso tal, casar la decisión del juzgador.

En el presente caso, el alegato presentado se fundamenta en una diferencia de criterios sobre el valor de la prueba y no se basa en un error manifiesto por parte del Tribunal Superior, pues se desprende que el recurso presentado por el casacionista ha sido interpuesto al no compartir el valor que el Tribunal Superior de Trabajo le diera a la ficha del Seguro Social, y no por un error manifiesto en la interpretación o valoración de la prueba por el citado tribunal. Siendo esto así el cargo endilgado a la norma citada no prospera.

En otro orden de ideas, con respecto a las pruebas presentadas, el Tribunal Superior de Trabajo resaltó que eran copias y/o fotocopias y, por lo tanto, se ciñó a lo establecido en la Sección Tercera del Capítulo segundo del Libro Cuarto del Código de Trabajo sobre documentos privados y cuando tienen valor ante los tribunales.

Con respecto a la supuesta infracción al artículo 106 del Código de Trabajo, no concordamos con que el Tribunal Superior de Trabajo haya confundido la aplicación de éste artículo. El Tribunal Superior fue claro en señalar que este artículo exige la presentación del certificado médico para establecer el estado grávido de la trabajadora, así se lee cuando señala "en el caso de las trabajadoras amparadas por fuero de maternidad el artículo 106 del Código de Trabajo, es claro en establecer que la trabajadora debe concurrir con un certificado médico que establezca su estado grávido".

La Sala no desea emitir su opinión sin antes señalar que, si bien, como advierte el recurrente, esta Sala se pronunció en fallo de 5 de junio de 1991 que se debe proteger la maternidad de la mujer trabajadora con un criterio no formalista. La similitud con el presente caso radica en que, en ambos casos, no se presentaron junto con la demanda pruebas suficientes para probar la pretensión. Sin embargo, hay una diferencia fundamental entre ambos casos y es que en aquél, las deficiencias en que incurrió el demandante fueron subsanadas en el transcurso del proceso, lo que hizo posible que quedara claramente establecido a través de pruebas presentadas posteriormente, no sólo que la relación de trabajo existía, sino también que la trabajadora estuvo en estado de gravidez y que el hijo vivía al momento de interponer la demanda. En el presente

caso, las pruebas en las cuales se pretende acreditar el estado de gravidez son copias al carbón que no se ajustan al artículo 766 del Código de Trabajo.

No se debe casar la sentencia de segunda instancia porque no se han producido las infracciones que se le endilgan.

En consecuencia la Sala Tercera (LABORAL), de la Corte Suprema administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 26 de enero de 1995 dictada por el Tribunal Superior de Trabajo dentro del proceso entablado por la señora NELLISBETH ALVARADO DELGADO contra AUDIO FOTO INTERNACIONAL, S. A.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES

ABRIL 1996

CARTA ROGATORIA

COMISIÓN ROGATORIA LIBRADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DIVISIÓN DE EQUITY ENTRE ABDULLAH ABBAS AL-WAZIR CONTRA ISLAMIC PRESS AGENCY INC. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL GONZÁLEZ. PANAMÁ, DIEZ (10) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

El departamento de Consular y Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha remitido a este despacho el cuaderno contentivo de la Comisión Rogatoria librada por el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra, División Chancery, dentro de la acción civil promovida por Abdullah Abbas Al-Wazir contra la compañía Islamic Press Agency Inc.

De acuerdo con los documentos presentados por el Tribunal inglés, el demandante solicita cumplimiento de un contrato relacionado con un inmueble denominado "Crown House", celebrado por el demandante y la sociedad Islamic Press Agency Inc. Entre las pretensiones se incluyen, la venta del citado inmueble y el pago de la hipoteca pendiente, así como la realización de los estudios y consultas necesarias para dicha transacción. El inmueble objeto de esta demanda se encuentra ubicado en Crown Lane, East Burnham, Nr. Slough, Buckinghamshire e identificado con el número BM70488.

El objetivo de la rogatoria consiste en entregar a la demandada Islamic Press Agency Inc. a cargo de la firma forense Moreno Arjona & Brid, con oficinas en Avenida Samuel Lewis y Calle Gerardo Ortega, Edificio Banco Central, 5° piso, ciudad de Panamá, los documentos indicados como la citación y el impreso de acuse de recibo, así como todos los antecedentes del caso, los cuales se aprecian de fojas 47 a 73 del expediente.

Se observa que la carta rogatoria que se expide en el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra, cumple con el requisito de la traducción de los documentos que sustentan lo pedido, así como la legalización del documento a través de la Apostilla.

Se estima que a pesar que entre el Reino Unido de Inglaterra y Gales no existe un convenio sobre exhortos y cartas rogatorias, esta Superioridad considera que es viable acceder a la petición de las autoridades inglesas en virtud de un principio de reciprocidad y tomando en consideración que lo pedido sólo constituye una notificación dentro de un proceso en materia civil.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA VIABLE la Comisión Rogatoria librada por el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra, División Chancery, dentro de la acción civil promovida por Abdullah Abbas Al-Wazir contra la compañía Islamic Press Agency Inc. a fin que se notifique a la citada compañía de la acción civil interpuesta en su contra y ORDENA que por Secretaría de la Sala Cuarta se hagan las notificaciones de rigor atendiendo para este respecto las normas procesales vigentes en nuestro ordenamiento jurídico interno y aplicable a esta materia.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EJECUCION DE SENTENCIA EXTRANJERA

MARGARITA MORÁN ALONSO WARD, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA EXTRANJERA PROFERIDA POR EL TRIBUNAL DE LA CORTE DISTRITORIAL 224-DISTRITO JUDICIAL DE SAN ANTONIO CONDADO DE BEXAR, TEJAS, DE FECHA 21 DE MARZO DE 1992, MEDIANTE LA CUAL SE DECRETA LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL ENTRE LA PODERDANTE Y CHARLES WARDS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DOCE (12) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

MARGARITA MORAN ALONSO WARD, mediante apoderado especial ha presentado ante esta Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia, solicitud para que sea reconocida en la República de Panamá, la sentencia de divorcio de fecha 21 de mayo de 1992, proferida por la Corte Distrital del 224° Distrito Judicial, Condado de Bexar, Texas, Estados Unidos de Norteamérica, por la cual se decretó la disolución del vínculo matrimonial contraído con el señor CHARLES WARD.

El apoderado especial, licenciado Harmodio E. Mariscal Ruiz, fundamenta su solicitud en base a los siguientes hechos:

> "PRIMERO: Mi mandante y el señor CHARLES WARD, contrajeron matrimonio civil el 22 de octubre de 1990, en el Juzgado Sexto Municipal de Panamá, y el mismo se encuentra inscrito en el tomo 240 partida 547 del libro de matrimonios de la Provincia de Panamá.
>
> SEGUNDO: La solicitud cumple con los requisitos exigidos en los artículos 114 y 1409 numeral 2 y siguientes del Código Judicial, puesto que es de efectos lícitos y es la demandada quien solicita el exequátur".

Se acompaña a la solicitud de ejecución de sentencia de divorcio copia autenticada de la misma debidamente traducida al español por intérprete público autorizado, así como certificado de matrimonio de la Dirección del Registro Civil, pruebas visibles de foja 3 a 18 del cuadernillo.

Admitida la solicitud presentada ante esta Corporación, se corrió traslado al señor Procurador, quien en su Vista N° 15 de 26 de marzo de 1996 accede a declarar su ejecutabilidad y manifiesta lo siguiente:

> "Luego de examinada la documentación aportada con la presente solicitud de exequátur y realizada su confrontación con los requisitos que señala el artículo 1409 del Código Judicial, observamos que el solicitante le ha dado cumplimiento a todas las exigencias de la norma procesal en comento ya que, la sentencia, objeto de este exequátur, fue dictada como consecuencia del ejercicio de una pretensión personal, pues resolvió un proceso de divorcio. Asimismo, no se configura la rebeldía en el presente negocio pues, a foja 14 se lee lo siguiente:
>
> 'La demandada MARGARITA MORÁN ALONZO WARD desistió de la emisión y la notificación al llenar la Renuncia de Citación que se adjunta. La Demandada consiente a este divorcio según consta por su firma, la que aparece a continuación'.
>
> Por otra parte, en cuanto a la eficacia probatoria y autenticidad de las resoluciones judiciales extranjeras que establece el artículo 864 del Código Judicial, la copia de la sentencia se encuentra autenticada (Cfr. foja 13 y vuelta) y en la misma foja aparece la certificación del funcionario consular de Panamá en Houston, Texas, Estados Unidos, en la cual se certifica que la firma del funcionario que certifica la sentencia, es auténtica."

Observa la Sala, en cuanto a la licitud de la sentencia que nos ocupa que efectivamente, la misma es conforme a lo establecido en el artículo 1409 del Código Judicial, ya que, dicha sentencia fue dictada a consecuencia del ejercicio

de una acción personal, no fue proferida en rebeldía, puesto que la demandada quien solicita el reconocimiento y ejecución en la República de Panamá, está debidamente autenticada por las autoridades consulares correspondientes, como también se encuentra traducida a nuestro idioma oficial, requisitos éstos necesarios para que se declare su ejecutabilidad en la República.

Por lo antes expuesto, y en cumplimiento con lo establecido en los artículos 1409 y 1410 del Código Judicial, procede la Sala a declarar ejecutable la sentencia.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA EJECUTABLE en la República de Panamá la sentencia de divorcio de fecha 21 de mayo de 1992, proferida por la Corte Distrital del 224° Distrito Judicial, Condado de Bexar, Texas, Estados Unidos de Norteamérica, por la cual se decretó la disolución del vínculo matrimonial contraído entre el señor CHARLES WARD y la señora MARGARITA ANGELA MORÁN ALONZO.

SE AUTORIZA a la Dirección del Registro Civil para que realice las anotaciones respectivas en su libro de divorcio en los términos de la presente resolución.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EDUARDO TOMÁS ARTURO STERRALT WATSON, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE DIVORCIO PROFERIDA POR EL JUEZ DE MUNICH, EL 31 DE ENERO DE 1994, MEDIANTE LA CUAL SE DECRETÓ LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL QUE LO UNÍA A LA SEÑORA SABINE HAAKE. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

El licenciado Pedro Moreno Céspedes, actuando como apoderado especial del señor **EDUARDO TOMÁS STERRETT WATSON**, ha presentado ante esta Sala Cuarta de la Corte Suprema, solicitud para que sea reconocida en la República de Panamá, la sentencia de divorcio proferida por el Juzgado Local de Munich, Estado Federal de Baviera, Alemania, de 19 de enero de 1994, mediante la cual queda disuelto el vínculo matrimonial entre el peticionario y la señora **SABINE HAAKE.**

Observa la Sala, que la solicitud, reúne las formalidades de ley, pues en ellos se aprecia la autenticación proveniente del Consulado General Honorario de Panamá en Frankfurt, Alemania, que legaliza los documentos surtidos en Munich, lugar donde se emitió la sentencia de divorcio, además de la correspondiente traducción al Español.

La petición fue admitida por lo que de acuerdo al trámite para estos negocios, se le corrió traslado al señor Procurador General de la República, tal como lo dispone el artículo 1410 del Código Judicial. El señor Procurador mediante Vista N° 13 de 26 de marzo de 1996, emitió un concepto favorable visible de fojas 22 a 23 del cuadernillo, e indicó que procede acceder a la solicitud del peticionario.

Un análisis de los documentos aportados, permite señalar que la sentencia que nos ocupa, es conforme a lo establecido en el artículo 1409 del Código Judicial, ya que dicha sentencia fue dictada a consecuencia del ejercicio de una acción personal, no fue proferida en rebeldía, puesto que el caso particular, es

el demandado señor Eduardo Arturo Sterrett Watson, quien solicita la ejecución de la sentencia de divorcio y la misma debidamente autenticada por nuestra autoridad consular correspondiente. En cuanto a la licitud de la obligación, la misma no viola nuestro ordenamiento jurídico, por lo que esta Sala coincide con la opinión vertida por el señor Procurador General de la Nación, en cuanto a que la sentencia objeto de estudio, cumple con lo establecido en los artículos 1409 y 1410 del Código Judicial.

En consecuencia, la Corte Suprema, Sala de Negocios Generales, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA EJECUTABLE en la República de Panamá la sentencia de divorcio proferida por el Juzgado Local de Munich, Estado Federal de Baviera, Alemania, de 19 de enero de 1994, mediante la cual se disolvió el vínculo matrimonial entre el señor EDUARDO TOMÁS STERRETT WATSON y la señora SABINE HAAKE.

SE AUTORIZA a la Dirección del Registro Civil para que realice las anotaciones respectivas en su libro de divorcio en los términos de la presente resolución.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXHORTO

EXHORTO PROCEDENTE DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N° 24 DE MADRID, ESPAÑA, DENTRO DEL PROCESO DE DIVORCIO PROMOVIDO POR RAFAEL ÁNGEL CORTÉS ARGENTA CONTRA AIDA MARÍA JESÚS GONZÁLEZ. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL GONZÁLEZ. PANAMÁ, OCHO (8) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Por conducto del Director Encargado del Departamento Consular y Legalizaciones ha ingresado en la Sala de la Corte Suprema de Justicia, mediante nota N° DGPE/DCL/N° 0229/96, exhorto procedente del Juzgado de Primera Instancia N° 24 de Madrid, España, dentro del proceso de divorcio promovido por ÁNGEL RAFAEL CORTÉS ARMENTA contra AIDA MARÍA JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA.

El objetivo del presente exhorto es "que se reciba confesión judicial a **Ángel Rafael Cortés Armenta**, Embajada de México en Panamá, Edificio Plaza Bancomer 5° piso c/50 y c/San José. Apartado Postal 837, zona 7. A tenor del pliego de posiciones que han sido declaradas pertinentes y que se contienen en plica cerrada".

La solicitud del Juzgado de Primera Instancia se realiza en virtud de que en la actualidad hay un litigio de divorcio N° 01144/1944, promovido por el propio señor Ángel Rafael Cortés Armenta contra la señora Aida Mª de Jesús González García.

Del estudio del expediente se aprecia, que el proceso de divorcio es propuesto por el propio señor Rafael Cortes Armenta, por lo cual tiene conocimiento del proceso.

La Sala atendiendo lo pedido por las autoridades españolas, considera lo siguiente:

Que lo solicitado por las autoridades españolas es la confesión judicial del señor Ángel Rafael Cortés Armenta, "**a tenor del pliego de posiciones que han**

sido declaradas pertinentes y que se contienen en plica cerrada."

Al respecto de la figura "posiciones", es necesario anotar que ésta fue eliminada de la legislación panameña del Código de Procedimiento Civil actual. Sin embargo, esta contemplada la figura de "declaración de parte" en los artículos 803 y 890 y ss. La figura de absolución de posiciones se asimila a la declaración de parte, ya que ambas consisten en preguntas que debe absolver la parte.

De conformidad con lo establecido en el artículo 101 numeral 3, del Código Judicial se determina que la diligencia sea realizada por un Juzgado Seccional de Familia, instancia competente para conocer de estos negocios.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA VIABLE el diligenciamiento en el territorio nacional el Exhorto procedente del Juzgado de Primera Instancia N° 24 de Madrid, España, dentro del proceso de divorcio promovido por Rafael Ángel Cortés Armenta contra Aida María Jesús González García y ORDENA que el Juzgado Primero Seccional de Familia, realice el interrogatorio solicitado por las autoridades españolas.

Una vez realizada la diligencia, SE ORDENA remitir el expediente nuevamente a la Secretaría de la Sala Cuarta de Negocios Generales para su posterior devolución a través de la Cancillería, a las autoridades del españolas.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TRIBUNAL DE INSTANCIA

RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR JAIME ARISTIDES CARZOLA GARCÉS CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 183-95 DE FECHA 3 DE AGOSTO DE 1995, EMITIDA POR LA COMISIÓN DE PERSONAL DEL PRIMERO DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ, RAMO DE LO CIVIL. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL GONZÁLEZ. PANAMÁ, DIEZ (10) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Ha ingresado a la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia, recurso de apelación presentado por el señor Jaime Aristides Carzola Garcés contra la Resolución N° 183-95 de fecha 3 de agosto de 1995, emitida por la Comisión de Personal del Primer Distrito Judicial de Panamá, Ramo Civil, que decidió la lista de los seleccionables y no seleccionables para el concurso N° 176-95 (interno) de la posición (Pos#1870) de Archivista II del Departamento de Archivos del Órgano Judicial.

El señor Jaime Carzola aparece en la lista de los no seleccionables de la Resolución impugnada, "por no reunir el requisito de experiencia laboral".

El recurso de apelación se fundamenta principalmente, en el hecho de que no fue computado por la Comisión de Personal, la experiencia laboral, del recurrente, en el Tribunal Superior de Justicia del Tercer Distrito Judicial, durante el período comprendido entre desde el 16 de junio de 1993 hasta el 30 de junio de 1994 y en la AID (Agencia Internacional para el Desarrollo) en la posición de Archivista II desde el 1° de julio de 1994 al 14 de octubre de 1994. De igual forma, afirma el recurrente, que no fue valorado el período comprendido entre el 17 de octubre de 1994 a la fecha en que se dicta la resolución N° 183-95.

Por las consideraciones anteriores, manifiesta el apoderado de la parte recurrente, se ha cumplido el requisito de experiencia laboral exigida en el concurso.

Al finalizar el escrito de sustentación del recurso de apelación, solicita se decrete la nulidad de lo actuado, en virtud que se omitió indicar en el **Aviso de Convocatoria** número 176, que la posición de Archivista II del Órgano Judicial, sería ejercida en la ciudad de David, Provincia de Chiriquí.

En relación a este punto, la Sala observa que el paso 4 del Reglamento de Carrera Judicial, procedimiento de convocatoria y selección, contiene la información que debe ser publicada en los avisos de convocatoria, entre estos se cuentan el numero del concurso, el cargo objeto del concurso, requisitos mínimos exigidos, **dependencia donde se produce la vacante**, lugar en donde se debe retirar el formulario de inscripción, fecha de apertura del concurso, período de entrega y de recepción de formularios de inscripción.

A foja 1 del expediente, Aviso 176, se observa que la dependencia en donde se produce la vacante es el Departamento de Archivos del Órgano Judicial, por lo tanto se cumple con los requisitos de los cuales habla el paso 4 del Reglamento de Carrera Judicial.

En cuanto al hecho del requisito de la experiencia laboral, la Sala observa que entre los requisitos mínimos para participar en el concurso de Archivista II del Departamento de Archivos del Órgano Judicial se cuentan los estudios secundarios completos, más curso básico de archivos o dos (2) años de experiencia en trabajos de oficina que incluyan manejo de oficina.

De las pruebas presentadas por el recurrente, se observa que consta certificado de culminación de estudios secundarios (foja 8). Sin embargo, en cuanto al requisito de experiencia laboral, en la certificación expedida por la Directora de Recursos Humanos del Órgano Judicial (foja 11), en primer término aparece que el señor Jaime Carzola Garcés, trabajó como aseador interino del Tribunal Superior del 3er Distrito Judicial por un período de un (1) año y un (1) mes, el cual fue valorado correctamente por la Comisión de Personal. En segundo término, consta que el señor Carzola laboró en el Departamento de Secretaría Administrativa, en la posición de Archivista II, por un período de siete (7) meses, el cual de igual forma fue correctamente valorado por la Comisión de Personal.

En cuanto a la carta de trabajo expedida por el Proyecto para el Mejoramiento de la Administración de Justicia de la Agencia Internacional para el Desarrollo (foja 10), se establece el período laborado en dos (2) meses. Tal y como establece la tabla de valoración de Carrera Judicial, no serán valorados los períodos laborados menores de seis (6) meses, la Sala ha mantenido este concepto en resoluciones anteriores.

Por lo tanto, se observa que el recurrente no reúne el requisito mínimo de dos (2) años de experiencia laboral como Archivista II, necesario para participar el en concurso, objeto del presente recurso.

Por consiguiente, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley; CONFIRMA EN TODAS SUS PARTES la Resolución N° 183-95 de 3 (tres) de agosto de 1995, emitida por la Comisión de Personal del Primer Distrito Judicial de Panamá, Ramo de lo Civil, la cual decidió la lista de los seleccionables y no seleccionables para el concurso #176 (interno) para la posición de Archivista II (1870) del Departamento de Archivos del Órgano Judicial y ORDENA que una vez notificadas las partes involucradas en el presente negocio, se devuelva el mismo a la Secretaría de la Comisión de Personal para que se le otorguen los ulteriores trámites procesales aplicables a la materia.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR JAIME ARISTIDES CARZOLA GARCÉS CONTRA LA RESOLUCIÓN N°182-95 DE FECHA 3 DE AGOSTO DE 1995, EMITIDA POR LA COMISIÓN DE PERSONAL DEL PRIMERO DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ, RAMO DE LO CIVIL. Magistrado Ponente: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Ha ingresado a la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia, recurso de apelación presentado por el señor Jaime Aristides Cazorla Garcés contra la Resolución N° 182-95 de fecha 3 de agosto de 1995, emitida por la Comisión de Personal del Primer Distrito Judicial de Panamá, Ramo Civil, que decidió la lista de los seleccionables y no seleccionables para el concurso N° 177-95 (MIXTO) de la posición (Pos# 1871) de Archivista II del Departamento de Archivos del Órgano Judicial.

El señor Jaime Cazorla aparece en la lista de los no seleccionables de la Resolución impugnada, "por no reunir el requisito de experiencia laboral".

El recurso de apelación se fundamenta principalmente, en el hecho de que no fue computado por la Comisión de Personal, la experiencia laboral, del recurrente, en el Tribunal Superior de Justicia del Tercer Distrito Judicial, durante el período comprendido entre desde el 16 de junio de 1993 hasta el 30 de junio de 1994 y en la AID (Agencia Internacional para el Desarrollo) en la posición de Archivista II desde el 1° de julio de 1994 al 14 de octubre de 1994. De igual forma, afirma el recurrente, que no fue valorado el período comprendido entre el 17 de octubre de 1994 a la fecha en que se dicta la resolución N° 183-95.

Por las consideraciones anteriores, manifiesta el apoderado de la parte recurrente, se han cumplido el requisito de experiencia laboral exigida en el concurso.

Al finalizar el escrito de sustentación del recurso de apelación, solicita se decrete la nulidad de lo actuado, en virtud que se omitió indicar en el **Aviso de Convocatoria**, número 177, que la posición de Archivista II del Órgano Judicial, sería ejercida el la Ciudad de David, Provincia de Chiriquí.

En relación con este hecho recurrido, la Sala observa que el paso 4 del reglamento de Carrera Judicial, procedimiento de Convocatoria y Selección, contiene la información que debe ser publicada en los avisos de convocatoria a los concursos, entre estos se cuentan el número del concurso, el cargo objeto del concurso, requisitos mínimos exigidos, **dependencia sonde se produce la vacante**, lugar en donde se debe retirar el formulario de inscripción, fecha de apertura del concurso, período de entrega y de recepción de formularios de inscripción.

A foja 1 del expediente, Aviso de 177, se observa que la dependencia en donde se produce la vacante es el departamento de Archivos del Órgano Judicial, por lo tanto se cumple con los requisitos de los cuales habla el paso 4 del reglamento de Carrera Judicial.

En cuanto al hecho recurrido del requisito de la experiencia laboral, la Sala observa que entre los requisitos mínimos para participar en el concurso de Archivista II del Departamento de Archivos del Órgano Judicial se cuentan los estudios secundarios completos, más curso básico de archivos o dos (2) años de experiencia en trabajos de oficina que incluyan manejo de oficina.

De las pruebas presentadas por el recurrente, se observa que consta certificado de culminación de estudios secundarios (foja 8). Sin embargo, en cuanto al requisito de experiencia laboral, en la certificación expedida por la Directora de Recursos Humanos del Órgano Judicial (foja 11), en primer término aparece que el señor Jaime Cazorla Garcés, trabajó como aseador interino del Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial por un período de un (1) año y un (1) mes, el cual fue valorado correctamente por la Comisión de Personal. En segundo término, consta que el señor Cazorla laboró en el Departamento de Secretaría Administrativa, en la posición de Archivista II, por un período de siete (7) meses, el cual de igual forma fue correctamente valorado por la Comisión de Personal.

En cuanto a la carta de trabajo expedida por el Proyecto para el Mejoramiento de la Administración de Justicia de la Agencia Internacional para el Desarrollo (foja 10), se establece el período laborado en dos (2) meses. Tal y como establece la tabla de valoración de Carrera Judicial, no serán valorados los períodos laborados menores de seis (6) meses, la Sala ha mantenido este concepto en resoluciones anteriores.

De lo anterior se infiere que el recurrente sólo posee 9 meses de experiencia laboral como Archivista II. Por lo tanto, se observa que el recurrente no reúne el requisito mínimo de dos (2) años de experiencia laboral como Archivista II, necesario para participar el en concurso.

Por consiguiente, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA EN TODAS SUS PARTES la Resolución N° 182-95 de 3 (tres) de agosto de 1995, emitida por la Comisión de Personal del Primer Distrito Judicial de Panamá, Ramo de lo Civil, la cual decidió la lista de los seleccionables y no seleccionables para el concurso #177 (MIXTO) para la posición de Archivista II (1871) del Departamento de Archivos del Órgano Judicial y ORDENA que una vez notificadas las partes involucradas en el presente negocio, se devuelva el mismo a la Secretaría de la Comisión de Personal para que se le otorguen los ulteriores trámites procesales aplicables a la materia.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA LICENCIADA KARLA BELL MIRANDA CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 201-95 DE FECHA DE 5 DE OCTUBRE DE 1995, DICTADA POR LA COMISIÓN DE PERSONAL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, RAMO DE LO CIVIL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, TREINTA (30) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Ingresó a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, el recurso de apelación en subsidio, propuesto por el lcdo. JOSÉ LUIS RUBINO en representación de la licenciada KARLA BELL MIRANDA, en contra de la decisión contenida en la Resolución N° 201-95 de 5 de octubre de 1995, la cual resuelve el concurso N° 294-95 (interno) posición (688) para el cargo de Secretario Judicial III del Tribunal Marítimo, Panamá.

Los puntos más relevantes en los que se apoya la apoderada judicial del recurrente, se pueden resumir de la siguiente manera:

"SEGUNDO: El resultado de dicho concurso se expidió mediante resolución N° 201-95 de fecha de 5 de octubre de 1995, de la

Comisión de Personal del Primer Distrito Judicial, Ramo Civil; en que se estableció que el puntaje mínimo para integrar la lista de seleccionables es 37.46."

"CUARTO: A la licda. KARLA BELL MIRANDA no le fue evaluado correctamente dentro del renglón Nivel Académico, su Post-Grado en Docencia Superior y dentro del renglón de Otros Conocimientos, su conocimiento del idioma inglés tampoco fue valorado".

"QUINTO: El Post-Grado en Docencia Superior fue evaluado como materia relacionado al cargo con un puntaje de un (1) punto. Consideramos, que estos estudios realizados por mi representada debe evaluarse como materia aplicada en virtud de que este es un título genérico y no especial, ya que la faculta para impartir clases en materias jurídicas en cualquier rama del derecho de la carrera de Licenciatura e inclusive a nivel de Maestría siempre y cuando tenga estudios más avanzados sobre un programa específico."

"El no reconocer este título académico, contraviene el espíritu de la Carrera Judicial, cuyo propósito es dotar a la institución del personal idóneo para cada cargo. Debemos recordar que el Secretario dirige el funcionamiento y la marcha del Despacho, es la mano derecha del Juez, supervisa toda la labor del personal subalterno del Tribunal y vela por la atención adecuada de los abogados litigantes y ciudadanos que buscar información. La metodología aprendida por mi mandante, para dirigirse a estudiantes adultos (Andragogía) no debe (sic) tenerse muy en cuenta, ya que son muy pocos los cursos o seminarios sobre Relaciones Públicas, Psicología Laboral y Coordinación de Recursos Humanos brindados en nuestro país".

"SEXTO: Mi representada estudió en el colegio bilingüe INSTITUTO PANAMERICANO, obteniendo el título de Bachiller Bilingüe en Ciencias. No entendemos la razón por la cual no se evaluó el conocimiento del idioma inglés, muy importante para el cargo en concurso, ya que dicho ente jurisdiccional maneja a diario documentación en esa lengua ..."

Por las razones antes expuestas, solicitamos a los distinguidos comisionados otorgar cuatro (4) puntos a mi representada así ingrese a la lista de seleccionables del cargo en concurso.

Una vez transcrita la parte esencial del recurso de reconsideración, esta Sala pasa a conocer el recurso de apelación, a fin de determinar si existen o no elementos que justifiquen una modificación en la resolución recurrida.

Con relación al segundo reparo manifestado por la recurrente y que guarda relación con el sistema de valoración utilizado por la Comisión de Personal, esta Corporación desea señalar que la misma es autónoma en cuanto al sistema de valoración a utilizar dentro de un concurso determinado. Así las cosas, al revisar el sistema utilizado en esta oportunidad se aprecia diáfanamente que, el escogido en esta ocasión y que es el de promedio, ciertamente fue acertado y correcto en vista que estaban participando un número significativo de concursantes que ameritaba la puesta en práctica de un sistema equitativo y justo como el que efectivamente se usó, por lo tanto la Sala, desestima este cargo.

En relación al hecho cuarto y quinto transcrito en la presente Resolución referente al Post-Grado de docencia superior el mismo no fue expedido con alguna especialidad forense por ende aunque faculte a la participante para impartir clases en cualquiera institución educativa de ninguna manera este título académico obtenido implica un perfeccionamiento jurídico profesional.

Por otra parte, esta Superioridad conceptúa que el Reglamento de Carrera Judicial como elemento de apreciación para la selección de personal es claro al señalar que los estudios de Post-Grado deben acreditarse con los títulos obtenidos. Cabe entonces anotar que, mal puede la Comisión brindarle una

puntuación adicional al Post-Grado en Docencia Superior ya que dicho grado académico no lleva **per se** alguna especialidad forense en virtud que las clases impartidas en la Facultad de Educación de la Universidad de Panamá son asignaturas propias del magisterio que cursó y no estudios superiores o complementarios de la licenciatura de Derecho propiamente tal; criterio éste que en fallos anteriores esta Sala ha establecido como sano y correcto y que está destinado a lograr la integridad procesal y formal de los concursos de Carrera Judicial, de allí que por razones de instrucción didáctica pasemos a transcribir el extracto de algunos de los resueltos jurisprudenciales emitidos por la Sala, sobre el particular:

> En resolución de 17 de febrero de 1995, en caso del Licenciado Daniel Batista contra la Resolución 07-94 de 27 de octubre de 1994, emitida por la Comisión de Personal del Segundo Distrito Judicial, la Sala expresó:
>
> **"Por otra parte, esta Sala conceptúa que el Reglamento de Carera Judicial como elemento de apreciación para la selección de personal es claro al señalar que los estudios de post-grado deben acreditarse con los títulos obtenidos.**
>
> **De esa manera, resulta palmario el hecho que el licenciado Batista Vergara no acreditó dichos estudios con el título obtenido ...**
>
> **Cabe entonces anotar que, mal puede la Comisión brindarle una puntuación adicional e incluir dichos créditos universitarios como seminarios según sugiere el propio licenciado Batista, a efectos de darle puntos adicionales porque incurriría en atribuciones no asignadas a la Comisión".**
>
> **"En resolución de 12 de julio de 1995, en caso de la Licenciada Nidia Herrera Batista contra la Resolución 17-95 de 9 de marzo de 1995, emitida por la Comisión de Personal del Primero Distrito Judicial, Ramo Penal, la Sala expresó:**
>
> **De esta manera, resulta palmario el hecho de que la Licenciada Herrera Guardia no acreditó dichos estudios con el título obtenido por encontrarse aún pendiente del requisito de juramentación, requisito exigido por la Universidad de Costa Rica para otorgar a ésta el título de Especialista en Ciencias Penales (fs. 11). Cabe entonces anotar que, mal puede la Comisión brindarle puntuación alguna, en virtud que no aportó el título requerido".**

Aunado a lo anteriormente manifestado, esta Magistratura desea anotar que la valoración de los concursantes se efectúa en base a hechos objetivos efectivamente documentados.

La valoración subjetiva de la calidad de la personalidad de la aspirante como ya le hemos señalado, sólo es posible una vez que el mismo queda dentro de la lista de los elegibles, porque sólo estos por razones lógicas, son sometidos a la entrevista de rigor con la autoridad nominadora.

Esta Magistratura ha manifestado en reiteradas ocasiones el criterio que, la valoración subjetiva de los hechos recurridos contraviene los principios de la Carrera Judicial y atenta contra el principio de equidad que debe prevalecer al momento de evaluar a todos los concursantes. A criterio de la Sala, en este caso particular, desea señalar que el título de Bachiller Bilingüe INSTITUTO PANAMERICANO aportado no fue valorado en su justa dimensión por lo que corresponde considerar al dominio de la lectura, oralidad y escritura del idioma inglés una puntuación correspondiente a la aspirante, cónsona a la documentación aportada.

Del estudio del expediente en cuestión, la Sala observa que la Comisión de Personal, reavaluó la Hoja de Evaluación de la concursante y consideró que le asistía la razón al apoderado judicial, en torno al aspecto de otros

conocimientos, por lo cual le reconoció 3.0 puntos por el idioma inglés, dando un total de 3.0 puntos que fueron agregados al puntaje inicial que había obtenido, sin que con esto alcance el puntaje mínimo establecido por esta Comisión para ser seleccionable en el presente concurso.

Esta Sala observa que no existen otros elementos pruebas, reparos o argumentos dentro de lo presente recurso que determine que el puntaje no fue valorado correctamente de acuerdo a los reglamentos vigentes sobre la materia y avala la modificación esgrimida por la Comisión de Personal.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA EN TODAS SUS PARTES la Resolución N° 03-96 de 25 de enero de 1996 emitida por la Comisión de Personal del Primer Distrito Judicial, Ramo Civil, la cual decidió la lista de los elegibles y no elegibles para el concurso N° 294-95 (interno) posición (688) de SECRETARIO JUDICIAL DEL TRIBUNAL MARÍTIMO, mediante la cual se modifica la Resolución N° 201-95 de 5 de octubre de 1995 y se le otorga un total de 37.04 puntos, por lo cual se mantiene a la licenciada KARLA ELENA BELL MIRANDA en la lista de los no seleccionables y ORDENA una vez notificadas las partes involucradas en el presente negocio, se devuelva el expediente a la Secretaría de la Comisión de Personal para que se le otorguen los ulteriores trámites procesales aplicables a esta materia.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR EL LCDO. ALBERTO HASSIM GONZÁLEZ HERRERA CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 201-95 DE FECHA 5 DE OCTUBRE DE 1995, DICTADA POR LA COMISIÓN DE PERSONAL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL RAMO CIVIL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, TREINTA (30) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

El Licenciado Alberto Hassim González, mediante apoderado judicial, presentó ante la Comisión de Personal del Primer Distrito Judicial de Panamá, Ramo Civil, el recurso de reconsideración con apelación en subsidio, contra de lo decidido en la Resoluciones 201-95 de 5 de octubre de 1995 emitida por la misma Comisión de Personal, dentro del concurso 294 (Interno) relativo a la posición de Secretario Judicial III del Tribunal Marítimo, Panamá.

En la resolución impugnada, dentro de la lista de seleccionables para el citado concurso, no aparece el Licenciado Alberto Hassím González Herrera, en virtud de que no alcanzó el puntaje mínimo establecido como marco de referencia para la selección de los concursantes por parte de la Comisión de Personal respectiva.

Por su parte, la Comisión de Personal del Primer Distrito Judicial, Ramo Penal, en la Resolución N° 02-96 de 25 de enero de 1996, resuelve lo siguiente:

> "**PRIMERO**: Modificar las resoluciones N° 201-95, en cuanto al puntaje obtenido después de sumarle los puntos adicionales de los seminarios dejados de valorar y restar aquellos otorgados de más, quedando un puntaje total de 36.74 puntos.
> **SEGUNDO**: Mantener en la lista de No Seleccionables al Licenciado Alberto Hassim González Herrera.
> **TERCERO**: Conceder el Recurso de apelación en subsidio".

Del estudio del expediente en cuestión, observa la Sala que el licenciado José Ramiro Fonseca Palacios, apoderado especial del recurrente, funda su recurso sobre la base que no le fueron evaluados correctamente dentro del renglón de ejecutorias, siete (7) seminarios y cinco (5) artículos sobre otras ramas del Derecho.

Con relación a la disconformidad manifestada por el recurrente, sobre el hecho que no se consideraron las ejecutorias presentadas, esta Sala señala que, la Comisión de Personal valora las ejecutorias presentadas por los concursantes de acuerdo con lo que establece el Reglamento de Carrera Judicial y que además sólo serán tomadas en cuenta aquellas que guarden relación directa o indirecta con el cargo sometido a concurso.

No obstante, ante tales consideraciones, la Sala observa que la Comisión efectúa una nueva valoración sobre los seminarios presentados por el licenciado Alberto Hassim González Herrera. De esta nueva valoración se tiene como resultado que le fueran reconocidos 2.00 puntos adicionales dentro de los seminarios por él presentados y de los cuales les fueron restados 0.25 puntos que a juicio de la Dirección de Recursos Humanos fueron otorgados de más, para un total de 1.75 puntos.

Sobre la ejecutorias la Sala coincide con la opinión de la Comisión de Personal y considera que no existen nuevos elementos que permitan aumentar el puntaje otorgado a tales ejecutorias, razón por la cual se desestima este cargo.

Por lo anteriormente expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la Resolución N° 02-96 de 25 de enero de 1996 mediante la cual se modifica el puntaje al licenciado Alberto Hassim González Herrera, dentro del concurso N° 294 (Interno) para la posición de Secretario Judicial del Tribunal Marítimo, de forma tal que su puntaje queda ajustado a 36.74 puntos y permanece en la lista de los no elegibles.

Una vez sean notificadas las partes involucradas en el presente negocio, se ORDENA la devolución del mismo a la Secretaría de la Comisión de Personal para que se le otorguen los ulteriores trámites procesales aplicables a esta materia.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR SONIA LINETH FERNÁNDEZ DE CASTROVERDE CONTRA LA NOTA N° 1252/95 DCF, CALENDADA 27 DE DICIEMBRE DE 1995, EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL ÓRGANO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL GONZÁLEZ. PANAMÁ, TREINTA (30) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Ha ingresado a la Secretaría de la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, recurso de apelación propuesto por el licenciado Jerónimo Mejía en representación de Sonia Lineth Fernández de Castroverde, en contra de la nota N° 1252/95 DCF, mediante la cual la Dirección de Contabilidad y Finanzas no accede al pago de honorarios causados como consecuencia del ejercicio de las suplencias realizadas al cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Familia por impedimentos y recusaciones.

ANTECEDENTES DEL CASO

El referido recurso de apelación se fundamenta en el hecho que la licenciada Sonia Lineth Fernández de Castroverde solicita el pago de honorarios causados en virtud del ejercicio de la Suplencia por impedimento del Magistrado del Tribunal Superior de Familia. Mediante Nota N° 1252/95/DCF, la Dirección de Contabilidad y Finanzas de la Secretaría Administrativa del Órgano Judicial, no accede a pagarle a la licenciada de Castroverde, fundamentándose en consulta elevada a la Secretaría Administrativa y absuelta a través de la Dirección de Recursos Humanos y el Departamento de Asesoría Legal, al respecto de la aplicación del artículo 40 del Código, que establece las remuneraciones a los suplentes de los titulares de los Tribunales Judiciales, en los casos de impedimentos y recusaciones.

Del recurso de reconsideración conoció la Secretaría Administrativa, que en Resuelto N° 1 de fecha 17 de enero de 1996 decide mantener en todas sus partes el contenido de la nota N° 1252/95 DCF, expedida por la Dirección de Contabilidad y Finanzas de la Secretaría Administrativa del Órgano Judicial, en virtud de la aplicación del artículo 164 de la Ley N° 51 de 11 de diciembre de 1995, a través de la cual se dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal del año 1996 y del artículo 171 de la Ley N° 32 de 30 de diciembre de 1994 a través de la cual se dictaba el presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal del año 1995.

DECISIÓN DE LA SALA

La Sala observa que la Secretaría Administrativa ha negado el derecho consagrado en el artículo anteriormente transcrito, con el argumento de la imposibilidad presupuestaria que establecen los artículos 164 de la Ley 51 de 11 de diciembre de 1995 y el artículo 171 de la Ley 32 de 30 de diciembre de 1994.

En lo que concierne a la Sala de Negocios Generales, este cuerpo colegiado sólo debe limitarse, en éste caso en particular, al examen del objeto del presente recurso el cual es el reconocimiento o no del derecho a percibir el pago de los honorarios, ocasionados por el ejercicio de suplencias por impedimento de Magistrado del Tribunal Superior de Familia, realizadas por la licenciada de Castroverde.

La Sala se limita a reconocer o no el derecho a honorarios, la posibilidad de materializar el cobro de los mismos no es competencia de este Tribunal.

Por lo tanto y en lo que respecta al derecho consagrado en el artículo 40 del Código Judicial, el mismo es claro al establecer lo siguiente:

> ARTÍCULO 40: "Los suplentes que reemplacen a los titulares de los Tribunales Judiciales, en los casos de impedimentos y recusaciones, no devengarán sueldo alguno, pero gozarán de honorarios pagados por el Tesoro Nacional, aunque estén ejerciendo otro cargo remunerado, así ..."

La Sala observa que el artículo 40 del Código Judicial, no establece cuales son los cargos remunerados a los que se refiere el referido artículo y no debe excluir a funcionarios del Órgano Judicial.

De la transcripción del artículo anterior se deduce que la suplencias no devengarán salario alguno, sino honorarios, cuya tasa está preestablecida en el propio artículo 40. Cabe destacar que, los honorarios percibidos por suplencias en casos de impedimentos y recusaciones no son considerados como salarios paralelos a los devengados por el ejercicio continuado del cargo en función, sino remuneraciones ocasionales, circunstanciadas al ejercicio de suplencias por impedimentos y recusaciones.

No podría la Sala dejar de reconocer, en este caso en particular, un derecho consagrado en nuestro ordenamiento jurídico, en virtud de la imposibilidad de materializar el derecho. Tal es el fundamento que es utilizado en el recurso de reconsideración, por la Secretaría Administrativa, para negar el derecho a la remuneración por las suplencias realizadas por la licenciada Sonia Lineth de Castroverde.

Por consiguiente la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR en todas sus partes la Nota N° 1252/95/DCF, expedida por la Dirección de Contabilidad y finanzas de la Secretaría Administrativa del Órgano Judicial.

SEGUNDO: En su lugar CONCEDE a la licenciada Sonia Lineth de Castroverde el derecho a recibir los honorarios devengados por el ejercicio de las suplencias, por impedimentos y recusaciones, al cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Familia.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=